

INFORME FINAL DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

MUNICIPIO CALIMA EL DARIEN VALLE DEL CAUCA

**TRD. 130-19.11
Diciembre de 2023**

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
MUNICIPIO CALIMA EL DARIEN VALLE DEL CAUCA
VIGENCIA 2022**

Contralora Departamental

Ligia Stella Chaves Ortiz

Secretario General

Efraín Rojas Doncel

Director Operativo de Control Fiscal

Juan Pablo Garzón Pérez

Subdirector Técnico Cercofis Cali

Luis Enrique Cancimanse Calderón

Líder de la Auditoria

Carlos Arturo García Trujillo

Equipo de Auditoria:

Martha Isabel Martínez Pizarro

Carlos Arturo García Trujillo

Luis Enrique Cancimanse Calderón

Luz Nallybe Lozano Domínguez

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	4
2	HECHOS RELEVANTES	5
3	CARTA DE CONCLUSIONES	6
3.1.	RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	7
3.2.	RESPONSABILIDADES DEL SUJETO DE CONTROL EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL PRESUPUESTO	8
3.3.	OBJETIVOS	8
3.4.	ALCANCE DE LA AUDITORIA	10
3.5.	MARCO REGULATORIO APLICABLE	10
3.6.	OPINIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	11
3.7.	CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN DE INVERSIÓN Y DEL GASTO	12
3.8.	OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS	13
3.9.	FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL	14
3.10.	HALAZGOS	16
4	MUESTRA DE AUDITORIA	17
4.1.	GESTIÓN CONTRACTUAL	17
4.2.	GESTIÓN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	17
4.3.	GESTIÓN PRESUPUESTAL	19
4.4.	GESTIÓN AMBIENTAL	19
5	RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	20
5.1.	MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL	20
5.2.	MACROPROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	30
6	CALIFICACIÓN Y EVALUACION DEL CONTROL FISCAL INTERNO	36
7	EFFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	39
8	EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA	40
9	EVALUACIÓN A PUNTOS DE CONTROL	40
10	ATENCIÓN DENUNCIAS CIUDADANAS	44
11	RELACIÓN DE HALLAZGOS	54
6.	ANEXOS	121

1 INTRODUCCIÓN

El presente Informe contiene los resultados obtenidos en desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión realizada por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca al Municipio Calima - El Darién Valle del Cauca, utilizando como herramientas las normas legales, el análisis y el conocimiento, con el fin de dar un concepto integral sobre la gestión de la entidad a la vigencia 2022, desde diferentes ejes temáticos.

Esta auditoría se desarrolló con un énfasis especial en el cumplimiento de la función que le corresponde a la Contraloría Departamental del Valle, y a los resultados que de ella se derivan en procura de un mejor bienestar de la población de su área de influencia.

En busca de este objetivo, se realizó un trabajo que contó con un equipo de interdisciplinario de profesionales, la colaboración de los funcionarios de la entidad y la información por ellos suministrada.

El presente informe se inicia con los hechos relevantes y la carta de conclusiones que califica la gestión de la entidad, determina el fenecimiento de la (s) cuenta (s) revisadas, se establecen las opiniones y conceptos sobre los macroprocesos de gestión financiera y presupuestal, seguidamente se presenta la muestra de auditoría y los resultados de la misma concretando los temas antes citados; se continua con la relación de hallazgos y otras actuaciones como la evaluación del control fiscal interno, evaluación del plan de mejoramiento, revisión de la cuenta y atención de denuncias, para finalizar con el cuadro de tipificación de hallazgos, los beneficios del control fiscal y el cuadro que resumen el análisis del derecho de contracción de la entidad auditada.

2 HECHOS RELEVANTES

- Basado en los niveles de riesgos en calidad de agua para los usuarios de la zona alta de la ciudad, a los cuales según los reportes de la Unidad Ejecutora de Saneamiento Básico del Valle del Cauca UES Valle, se les está suministrando agua no apta para el consumo humano y teniendo en cuenta las acciones realizadas por la administración Municipal las cuales están en proceso de ajuste, se debe revisar dentro del siguiente proceso auditor el impacto de tales obras en la calidad de vida de los ciudadanos de la zona rural.
- El sistema de control interno es ineficiente pues no existieron procesos y procedimientos que regularan las actuaciones de la entidad, por lo cual no se encuentran documentados controles de estos, lo que no permite mitigar los riesgos ni respaldar la confiabilidad de los registros que se producen al interior de la entidad.
- El contrato de transacción firmado el 23 de agosto de 2019, entre el municipio de Calima Darién y una persona jurídica donde se estipuló la forma de pago de sentencias judiciales en contra de la entidad, por valor de \$8.383.383.418,00 que a la fecha no se le ha dado cumplimiento por parte de la administración municipal, generando un impacto negativo en sus finanzas a corto plazo, de no ser punto de atención por parte de las administraciones subsiguientes, el municipio a futuro podría verse inmerso en una reestructuración como ente territorial según Ley 550 de 1999.

3 CARTA DE CONCLUSIONES

130.19-11

Santiago de Cali,

Doctor

MARTIN ALFONSO MEJÍA LONDOÑO

Alcalde municipal

Señores

CONCEJO MUNICIPAL

secretariageneralconcejocalima@gmail.com

Cll 10 # 6-25 - CAM 2º piso.

PERSONERIA MUNICIPAL

personeria@calimaeldarien-valle.gov.co

Calle 10 No. 6-25 Palacio Municipal primer piso

Asunto: Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022

Respetado Doctor Mejía, Sres. Concejo y Personería Municipal

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 04 de septiembre 18 de 2019, Decreto Ley Reglamentario 403 de marzo 16 de 2020, y en desarrollo del Plan de Vigilancia y Control Fiscal – PVCF vigencia 2022, realizó la Auditoría Financiera y de Gestión Municipio Calima El Darién Valle del Cauca, Al período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de auditoría y las directrices impartidas para la auditoría Financiera y de Gestión, conforme a lo establecido en el procedimiento, en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI¹), desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI²) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores, adoptadas en la Guía de Auditoría Territorial – GAT Versión 3.0.

Estos principios requieren de parte de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, la observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la normatividad que les es aplicable.

¹ ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions.

² INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions.

La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron remitidos por la entidad auditada.

Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en el archivo de gestión del Cercofis Cali.

Este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto.

Las observaciones se están dando a conocer oportunamente a la entidad mediante el presente informe preliminar de auditoría, las respuestas serán analizadas y en el informe final se incluirán los hallazgos que la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, considere pertinentes.

3.1. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, realiza esta auditoría conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT Versión 3.0 Auditoría Financiera y de Gestión, adoptada mediante la Resolución Reglamentaria Orgánica 014 del 29 de diciembre de 2022, y que adaptó las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI). Estas normas exigen que se cumplan requisitos éticos.

Como parte de una auditoría conforme con las ISSAI, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, ejerce juicio profesional y mantiene escepticismo profesional a lo largo de todo el proceso auditor; también:

- Identifica y evalúa los riesgos de errores materiales, por causa de fraude o error; diseña y lleva a cabo procedimientos de auditoría en respuesta a esos riesgos y obtiene evidencia de auditoría que sea, suficiente y apropiada, para proporcionar una base para la opinión o concepto. El riesgo de no detectar una incorrección material como resultado de un fraude es mayor que el de un error, debido a que el fraude implica colusión o confabulación, falsificación, omisiones intencionales, declaraciones erróneas, o anulación del control interno.
- Obtiene un conocimiento y comprensión claros de los controles internos pertinentes para auditar, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados a las circunstancias.
- Evalúa la aplicación de las políticas contables o de otras naturalezas usadas, así como la razonabilidad de las estimaciones contables y de las revelaciones de información hechas por la dirección de la entidad.
- A causa de las limitaciones inherentes a una auditoría y al control interno, existe el riesgo inevitable de que algunas incorrecciones materiales puedan no ser

detectadas, a pesar de que la auditoría esté correctamente planificada y sea realizada de conformidad con las normas ISSAI.

3.2. RESPONSABILIDADES DEL SUJETO DE CONTROL EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL PRESUPUESTO

El Municipio Calima El Darién Valle del Cauca, es responsable de preparar y presentar tanto los estados financieros como las cifras presupuestales de conformidad con la normatividad aplicable, además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda la información reportada a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error.

3.3. OBJETIVOS

3.3.1. Objetivo General

Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal, a partir de la evaluación a los macroprocesos financiero y presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas y proyectos enfocada al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la vigencia 2022, para establecer la adecuada utilización de los recursos públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende determinar el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia.

3.3.2. Objetivos Específicos

MACRO PROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL

Proceso Gestión Presupuestal

Revisar que el presupuesto se encuentre formulado en concordancia con los contenidos en el plan de desarrollo, del plan plurianual de inversiones, del plan financiero y del plan operativo anual de inversiones.

Verificar que los pagos realizados por concepto de la contratación realizada en las vigencias, se hayan efectuado en los términos establecidos en los mismos y se apliquen al objeto para el que se contrató, desde el punto de vista presupuestal y contable.

Verificar el cierre fiscal - presupuestal de la vigencia a auditar.

Evaluar y conceptuar sobre la gestión presupuestal.

MACRO PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Proceso Estados Financieros

Evaluar y conceptuar sobre la razonabilidad de los Estados Contables y del presupuesto, para emitir el dictamen integral y concepto sobre el fenecimiento.

Evaluar y conceptuar sobre el Control Interno Contable.

Revisar que en contabilidad se registra bienes, derechos, obligaciones exigibles y contingentes, de acuerdo a la normatividad vigente.

Verificar la inversión de la deuda pública si existiere.

Proceso Indicadores Financieros

Evaluar y conceptuar los Indicadores Financieros más representativos que midan la gestión financiera de la entidad.

Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto

Evaluar sobre los ejes, programas y objetivos que tengan relación con los riesgos identificados: plan de acción, proyectos, metas, programas e indicadores de gestión, enfocado al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Evaluar y conceptuar sobre el cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación y cumplimiento y ejecución contractual aplicable para el sujeto de control, que tengan relación con los riesgos identificados.

Evaluar y conceptuar sobre la oportunidad en la rendición de la cuenta, suficiencia y calidad de la información rendida.

Conceptuar sobre el cumplimiento de la normatividad legal.

Evaluar y conceptuar sobre el nivel de cumplimiento y efectividad de los Planes de Mejoramiento, avance de los compromisos adquiridos y la efectividad de las acciones implementadas.

Determinar los beneficios de control fiscal cualitativo y/o cuantitativo en la ejecución del proceso y en la evaluación del plan de mejoramiento del sujeto de control.

Evaluar y conceptuar sobre la eficiencia y efectividad del sistema de control interno.

Verificar y evaluar la existencia o no de la deuda Pública conforme a la Resolución vigente de la CGR.

3.4. ALCANCE DE LA AUDITORIA

La auditoría financiera y de gestión al Municipio Calima El Darién - Valle del Cauca, incluye la evaluación de los estados financieros, para obtener seguridad razonable; la evaluación de indicadores financieros, del presupuesto, del plan de inversiones (proyectos y/o procesos, gastos de funcionamiento y la contratación asociada a cada uno de estos), la determinación de la efectividad del plan de mejoramiento y el control fiscal interno.

En el caso del macro proceso presupuestal, igualmente se evaluarán los procesos más significativos a 31 diciembre de 2022, iniciando con la prueba de recorrido, hasta la opinión al presupuesto y el concepto de la gestión de la inversión y del gasto hacen parte de la evaluación, los conceptos sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno y el pronunciamiento sobre la oportunidad, suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta anual consolidada, al 31 de diciembre de 2022.

3.4.1. Limitación al alcance de auditoria

Es menester, manifestar que durante el proceso de ejecución de la auditoria al Municipio Calima El Darién - Valle del Cauca, se presentó limitación al alcance, por la falta de entrega de la información dentro de los términos concedidos en los diferentes requerimientos, lo que hace, que no se haya evidenciado circunstancias que a futuro puedan tornarse negativamente para la administración municipal, por la inoportunidad de la entrega de la información, presentándose inconvenientes en el desarrollo de la ejecución del proceso auditor, terminando dicha situación en un proceso sancionatorio.

3.5. MARCO REGULATORIO APLICABLE

En lo referente al marco regulatorio, se fundamenta en lo basado en la constitución nacional, régimen presupuestal de las entidades territoriales, en el caso de los municipios el Artículo 313 de la Constitución Política nos indica que corresponde a los Concejos Municipales dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, además la Ley orgánica del presupuesto regula lo concerniente a la programación, aprobación, ejecución de los presupuestos de las entidades territoriales, y su coordinación con el plan de desarrollo, así como la capacidad del organismo ente territorial como entidad estatal para contratar.

El marco normativo del presupuesto público en el cual están incluidas las entidades territoriales como los municipios, está conformado por el estatuto orgánico del presupuesto Decreto Ley 111 de 1996, la Ley 617 de 2000 relacionada con la racionalización del gasto y el ajuste fiscal, la Ley 715 de 2001, norma de distribución de recursos y asignación de competencias, la Ley 819 de 2003, norma de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal. Ley 1314 de 2009, que corresponde a las normas internacionales de contabilidad del sector público

(NICSP), reglamentada en Colombia por la Contaduría General de la Nación, mediante Resolución No. 533 de 2015, modificada mediante la Resolución No. 484 de 2017.

En razón a lo anterior, las disposiciones de la Ley orgánica del presupuesto deben ser seguidas por las entidades territoriales, al expedir sus propias normas orgánicas presupuestales, adaptándolas a su propia organización, normas constitucionales y condiciones de cada entidad territorial, si las normas orgánicas presupuestales no han sido expedidas por las entidades territoriales, estas deberán aplicar, en lo pertinente, la legislación orgánica del orden nacional.

El marco normativo regulatorio aplicable en los procesos y procedimientos contractuales de la entidad territorial está fundamentado en la ley 80 de 1993 estatuto de la contratación estatal, y en el decreto 1082 de 2015. Aunado a lo anterior, las normas de legalidad transversales a los distintos aspectos cuyos riesgos se observaron puntualmente desde la etapa de planeación y que se relacionan con aspectos contemplados en la Ley 388 de 1997; Ley 489 de 1998; Decreto 1504 de 1998; Ley 599 de 2000; Ley 594 de 2000; Ley 1066 de 2006; Ley 1474 de 2011; Ley 1508 de 2012; Decreto Ley 019 de 2012; Decreto 1807 de 2014, Decreto 1069 de 2015; Decreto 1083 de 2015; Ley 1801 de 2016; Ley 1819 de 2016 y Decreto 1232 de 2020; Manual de contratación y Estatuto Tributario Municipal.

3.6. OPINIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Como resultado de la verificación del cumplimiento por parte del municipio de Calima El Darién - Valle del Cauca, de las normas en materia presupuestal que le competen, relacionados con la adecuada utilización del presupuesto, el seguimiento a las transacciones y operaciones realizadas con recursos públicos, para determinar que los bienes y servicios con ellos adquiridos no se recibieron, registraron y pagaron según lo pactado, se conceptúa que la ejecución presupuestal es **negativa** con una calificación del 7,2% en gestión presupuestal y 16,9% en gestión de la Inversión y del gasto, para un total del 24,1% del total del macro proceso de gestión presupuestal que corresponde al 60% en la matriz de fenecimiento.

3.6.1. Fundamento de la Opinión Presupuestal

Durante el proceso auditor se evidenció que el ente territorial dio cumplimiento a los diferentes momentos del presupuesto relacionado con la programación, ejecución y liquidación del mismo determinándose el cumplimiento de los actos administrativos, como fue; Acuerdo municipal 023 del 13 de diciembre del 2021 por el cual se fija el presupuesto de 2022, según decreto 188 de diciembre 28 del 2021, que dieron origen a las modificaciones que surgieron en el proceso de ejecución del presupuesto.

En lo relacionado con la ejecución de los recursos se evidenció que en los gastos en referencia con la adición por 800 millones de pesos por concepto de crédito de

tesorería para gastos de funcionamiento de transgredió el principio de especialización, al ejecutar estos recursos en una partida diferente a la presupuestada, respecto a las demás adiciones se observó que fueron coherentes con los recursos disponibles en la tesorería.

- **Evaluación del indicador de Ley 617 de 2000**

Referente al cumplimiento del indicador de Ley 617, el ente territorial reportó un cumplimiento del 58% sobre el límite del 80%, para lo cual registró ingresos corrientes de libre de destinación por \$8.755.977.000, menos gastos de funcionamiento por \$5.049.949.000, resultados que se evidencian en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 1

MUNICIPIO CALIMA EL DARIEN VALLE DEL CAUCA		
INDICADOR LEY 617 DE 2000 CIFRAS EN PESOS		
Concepto	2021	2022
Ingresos Corrientes de Libre destinación	8.155.084.000,00	8.755.977.000,00
Gastos de Funcionamiento	5.065.481.000,00	5.049.949.000,00
indicador de cumplimiento	62%	58%
Categoría	6	6

Fuente: Presupuesto 2022-2021 Municipio de Calima El Darién Valle

3.7. CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN DE INVERSIÓN Y DEL GASTO

El plan de desarrollo 2020-2023 fue aprobado el 7 de junio del 2020, mediante el acuerdo municipal 004, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) 2020-2023, para el Municipio de Calima -El Darién, Valle del Cauca “Somos Alianza por un Calima El Darién Sostenible y Emprendedor, presenta una modificación según acuerdo municipal 042 del 2020 “Por medio del cual se modifica el Plan de Desarrollo Municipal Somos Alianza por un Calima El Darién Sostenible y Emprendedor.

Con la modificación el plan de desarrollo 20-2023, se establecieron 4 pactos sociales, 17 sectores, 44 programas y 207 indicadores de producto.

El avance del plan de desarrollo en el 2022, alcanzó el 71% de la evaluación del cumplimiento de las 207 metas programadas, efecto del cumplimiento de programas y subprogramas a través de proyectos ejecutados para el desarrollo de las 4 Pactos o Ejes del plan del municipio de Calima el Darién.

De las 207 metas del producto, 59 se encuentran en estado crítico significa que no obtuvieron avance alguno y que en términos porcentuales equivale al 29% del total de las mismas.

Para la ejecución del plan de Desarrollo durante la vigencia 2022, de acuerdo con las 4 dimensiones verificadas se invirtieron recursos por valor de los cuales se destinaron a inversión efectivamente pagados \$19.439.800.042,54.

No existió coherencia entre los recursos ejecutados, las metas logradas y planeadas en el plan de desarrollo.

El eje que presentó el más bajo cumplimiento del plan de desarrollo fue el eje o pacto 4, que se estaba direccionado a la defensa medio ambiental, hecho relevante por estar el municipio en zona de reserva del pacífico.

En este sentido, el concepto sobre la gestión de inversión y del gasto es **Desfavorable**.

3.7.1. Fundamento del Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto

La inversión realizada a través de proyectos para la vigencia 2022 fue del 65% con \$18.817.558.671,98, de un presupuesto definitivo de \$ 28.755.072.937,43. Teniendo en cuenta que el plan de desarrollo:

Para la vigencia 2022 el 29% de los indicadores de producto del Plan de Desarrollo no presentaron avance, encontrándose en **estado crítico**.

En lo relacionado con la ejecución de los recursos se evidenció que, en los gastos en referencia con la adición por 800 millones de pesos por concepto de crédito de tesorería para gastos de funcionamiento, se transgredió el principio de especialización, al ejecutar estos recursos en una partida diferente a la presupuestada respecto a las demás adiciones se observaron que fueron coherentes con los recursos disponibles en la tesorería.

3.8. OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En nuestra opinión los Estados Financieros o cifras financieras de las cuentas seleccionadas del Municipio de Calima - El Darién, al 31 de diciembre de 2022, no están libres de representaciones erróneas en sus aspectos más significativos y no expresan fielmente la situación financiera en dicha vigencia y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad con las normas de contabilidad pública establecidas en la Ley 1314 de 2009, que corresponde a las normas internacionales de contabilidad del sector público (NICSP), reglamentada en Colombia por la Contaduría General de la Nación, mediante Resolución No. 533 de 2015, modificada mediante la Resolución No. 484 de 2017, por tal razón la opinión es **negativa**.

3.8.1. Fundamento de la Opinión Financiera


Se fundamenta las incorrecciones e imposibilidades en el activo, establecidas en el desarrollo del proceso auditor del Municipio de Calima - El Darién, ascienden a \$79.652 millones en el 2022, con lo que sobrepasó la materialidad de la planeación, suma que asciende a \$678 millones, que se resume así:

- El municipio Calima El Darién -Valle, al 31 de diciembre de 2022, registró en el estado de la situación financiera, en los activos no corrientes, exactamente en las cuenta propiedad planta y equipo por \$35.793 millones, cifra que corresponde a bienes en donde la administración municipal, no tiene la certeza que estas propiedades sean del municipio, aunado a esta situación la entidad tiene otras propiedades que han sido dadas en dación de pago y que a la fecha no se encuentra igualmente identificados y por ende contabilizados.
- El municipio Calima El Darién- Valle, al 31 de diciembre de 2022, registró en el estado de la situación financiera, en los activos no corrientes, exactamente en las Bienes de beneficio y uso público \$43.858 millones, cuando no se tiene la certeza de la legalización de estos bienes.
- Durante el proceso auditor se evidenció que la administración municipal, no cuenta con el proceso conciliatorio entre las áreas que tienen que ver con las operaciones contables y que hacen parte de los resultados de los estados financieros.
- No se evidencian las cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar registradas en el estado financiero.
- Las incapacidades igualmente no se encuentran contabilizadas en la contabilidad del municipio, con el agravante que la entidad desconoce o en su defecto no tiene una relación del ausentismo de los funcionarios debido a las incapacidades, desconociéndose el total de las incapacidades transcrita ante las EPS.

3.9. FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL

Con fundamento en la calificación de la Gestión Fiscal Integral, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, **No Fenece** la cuenta rendida por el Municipio de Calima - El Darién, para la vigencia fiscal 2022 conforme los siguientes resultados:

Cuadro No. 2

 <div>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN</div>										
SUJETO DE CONTROL		MUNICIPIO CALIMA EL DARIEN VALLE DEL CAUCA								
PVCF		2023								
VIGENCIA AUDITADA		2022								
CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 3.0										
MACROPROCESO		PROCESO		PONDERACIÓN	PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL			CALIFICACIÓN POR PROCESO/MACROPROCESO		CONCEPTO/ OPINION
					EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMIA			
GESTIÓN PRESUPUESTAL	60%	GESTIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN DE INGRESOS	15%				15,0%	0,1%	OPINION PRESUPUESTAL
			EJECUCIÓN DE GASTOS	15%	100,0%					0,0%
		GESTIÓN DE LA INVERSIÓN Y DEL GASTO	GESTIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	30%	49,4%	50,4%	15,0%	0,3%	CONCEPTO GESTIÓN INVERSIÓN Y GASTO	
			GESTIÓN CONTRACTUAL	40%	-75,4%		-70,6%		-29,2%	Desfavorable
			TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL			100%	-0,3%		50,4%	-70,6%
		GESTIÓN FINANCIERA	40%	ESTADOS FINANCIEROS		100%	0,0%			0,0%
Negativa										
TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA				100%	0,0%			0,0%	0,0%	
TOTAL PONDERADO	100%	TOTALES			-0,2%	50,4%	-70,6%		0,5%	
		CONCEPTO DE GESTIÓN			INEFICAZ	INEFICIENTE	ANTIECONOMICA			
		FENECIMIENTO			NO SE FENECE					
	INDICADORES FINANCIEROS			52,8%	134,0%	EFICAZ	93,4%			

Fuente: Matriz de calificación de la gestión fiscal integral vigencia 2022

Elaboro: Equipo Auditor

De conformidad a la calificación de la gestión fiscal integral del Municipio Calima - El Darién, el macroproceso presupuestal obtuvo una calificación del 0.5% del peso porcentual de 60% de la gestión presupuestal, de donde la ejecución presupuestal de ingreso y gastos, obtuvo una calificación de 0.1% de 30% de la ponderación generando una **opinión negativa**, la gestión de la inversión y del gasto conformada por planes, programas, proyectos y gestión contractual, obtuvo una calificación de 0.3% del 70%, según su ponderación. Generando una opinión **desfavorable**.

Finalmente, el macroproceso de gestión financiera cuyo peso porcentual corresponde al 40% generó una calificación de 0,0% generando una **opinión negativa**.

Por lo anterior la opinión del macroproceso de gestión presupuestal y gestión financiera, la cual obtuvo una calificación final de 0,5%, sobre el total ponderado del 100%, sobre la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y economía de la gestión fiscal, **no fenece** la cuenta por la vigencia fiscal 2022.

3.10. HALAZGOS

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron treinta y seis (36) Hallazgos administrativos, de las cuales veintiséis (26) tienen presunta incidencia disciplinaria, cuatro (04) con presunta incidencia penal, diez (10) con presunta incidencia fiscal por valor Mil trecientos ochenta y seis millones setecientos cincuenta y dos mil ochocientos sesenta pesos Mda.Cte. (\$1.386.752.860.00) y dos (02) con incidencia sancionatoria, dos (02) beneficios de control fiscal cuantitativo con un valor de \$5.006.299.692 y un (01) beneficio cualitativo.



LIGIA STELLA CHAVES ORTIZ
Contralora Departamental del Valle del Cauca

Preparó:	Equipo Auditor
Revisó:	Luis Enrique Cancimanse Calderón
Aprobado:	Comité de Calidad

4 MUESTRA DE AUDITORIA

4.1. GESTIÓN CONTRACTUAL

Para la auditoría practicada al Municipio de Calima- El Darién, se seleccionó la muestra de contratación partiendo del valor total de la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2022 y conforme a los proyectos relacionados con el Plan de Desarrollo.

La entidad en la vigencia 2022, tuvo un universo contractual de 179 contratos financiados con recursos propios, por un valor de \$ 2.528.952.792, seleccionado una muestra de 36 contratos por valor de \$1.158.010.704 equivalente al 46 % del total del universo, como también, se verificaron los pagos y sus respectivas deducciones de ley, estampillas y la confirmación de registros contables, como se evidencia en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 3

Municipio de calima darien - VIGENCIA 2022 CIFRAS EN PESOS							
UNIVERSO TOTAL				MUESTRA			
TIPOLOGIA	CANT.	VALOR	% PART.	TIPOLOGÍA	CANT.	VALOR	% MUESTRA
Prestación de Servicios	66	\$ 1.013.772.742	40,1%	Prestación de Servicios	9	\$ 243.635.172	24,03%
Suministros	12	\$ 169.875.335	6,7%	Suministros	4	\$ 99.910.552	58,81%
Obra	1	\$ 16.478.406	0,7%	Obra	1	\$ 16.478.406	100,00%
Compraventa	3	\$ 51.107.635	2,0%	compraventa	1	\$ 21.234.777	41,55%
Interventoria	1	\$ 27.489.000	1,1%	Interventoria	1	\$ 27.489.000	100,00%
Convenios	6	\$ 444.706.557	17,6%	Convenios	4	\$ 422.286.557	94,96%
consultoria	1	\$ 102.250.000	4,0%	Consultoria	1	\$ 102.250.000	100,00%
Apoyo a la gestion	89	\$ 703.273.117	27,8%	Apoyo a la gestion	15	\$ 224.726.240	31,95%
TOTAL	179	\$ 2.528.952.792		TOTAL	36	\$ 1.158.010.704	46%

FUENTE: Rendición de Cuenta en Línea (SIA OBSERVA) Contraloría Departamental del Valle del Cauca

4.2. GESTIÓN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Para la ejecución del plan de Desarrollo durante la vigencia 2022, de acuerdo con las 4 dimensiones verificadas se invirtieron recursos por valor de los cuales se destinaron a inversión efectivamente pagados \$19.439.800.042,54. Funcionamiento \$ 6.598.230.312 y deuda pública \$ 1.378.864.986, los proyectos examinados fueron en su mayoría direccionados a la satisfacción de la comunidad de acuerdo con los fines esenciales del estado y los principios de la gestión fiscal, se tomó como muestra los siguientes proyectos:

Cuadro No. 4

Eje	Sector	Objetivos de Desarrollo Sostenible	CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PPTO DEFINITIVO	EJECUTADO DEL PROYECTO
PACTO SOCIAL 1 - SOMOS ALIANZA POR UN CALIMA EL DARIENCON INCLUSION SOCIAL, PAZ Y EQUIDAD.	CULTURA	Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos	2022761260004	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA PARA LOS DARIENITAS CALIMA	922.863.335	860.217.964
PACTO SOCIAL 1. Solos Alianza por un Calima el Darién con Inclusión Social, Paz y Equidad	SALUD	Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades	2022761260001	Desarrollar acciones de Inspección, vigilancia y control en el sector salud en el municipio de Calima Darién Vigencia 2042	86.190.831	86.190.831
PACTO SOCIAL 1. Somos Alianza por un Calima el Darién con Inclusión Social, Paz y Equidad	Inclusión Social y Reconciliación	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo	2022761260023	IMPLEMENTACION DEL RECURSO DE LA ESTAMPLILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (CONFORME AL ARTICULO 217 DE LA LEY 1955 DEL 25 DE MAYO DE 2019)-CENTRO DE BIENESTAR VIGENCIA 2022CALIMA	141.718.231	141.718.231
		Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo			141.718.231	141.718.231
PACTO 2, Somos alianza por el Emprendimiento y Desarrollo económico de nuestra región.	COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	2022761260024	FORTALECIMIENTO DEL TURISMO PARA LA POBLACION DARIENITA CALIMA	178.000.000	172.000.000
PACTO SOCIAL 1. Somos Alianza por un Calima el Darién con Inclusión Social, Paz y Equidad	EDUCACION	Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todo	2022761260056	IMPLEMENTACION PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN CALIMA	459.429.917	453.732.000

Fuente: Planeación Municipal

4.3. GESTIÓN PRESUPUESTAL

La gestión presupuestal relacionada con el total de los ingresos, se evidenció que el recaudo superó lo inicialmente proyectado alcanzando el 101.05% en la vigencia 2022 y lo relacionado con el total de los gastos, el porcentaje de cumplimiento alcanzó el 88.93%, la participación de los gastos de funcionamiento e inversión frente al total de los gastos fue de 19,71% y 76,1% respectivamente y el servicio de la deuda alcanzó el 4%.

Durante el proceso auditor se evidenció, que el ente territorial dio cumplimiento a los diferentes momentos del presupuesto relacionado con la programación, ejecución y liquidación del mismo determinándose el cumplimiento de los actos administrativos, como fue; Acuerdo municipal 023 del 13 de diciembre del 2021 por el cual se fija el presupuesto de 2022, según decreto 188 de diciembre 28 del 2021, que dieron origen a las modificaciones que surgieron en el proceso de ejecución del presupuesto.

4.4. GESTIÓN AMBIENTAL

➤ *Planteamiento estratégico a la gestión ambiental en el municipio de Calima El Darién*

A través del Acuerdo 004 de 7 de junio del 2020, se adopta el Plan de Desarrollo para el municipio de Calima El Darién Valle del Cauca, para el periodo 2020- 2023 “Somos Alianza por un Calima El Darién Sostenible y Emprendedor”.

PDT 2020-2023 contiene 4 pactos sociales, 17 sectores, 44 programas y 205 indicadores de productos.

La dimensión ambiental es el pacto 4 *Somos Alianza por la Descentralización, Desarrollo Local y la defensa Medio Ambiental*

Sector: Ambiente y Desarrollo sostenible y cuenta con 3 programas

- ✓ Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos
- ✓ Gestión de la información y el conocimiento ambiental
- ✓ Ordenamiento ambiental territorial

El % de ejecución del sector ambiente y desarrollo sostenible fue solo del 27%. De los 11 indicadores solo presentan avances en 3 indicadores.

5 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

5.1. MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL

Evaluada la ejecución presupuestal de ingresos y gastos se estableció:

5.1.1. Análisis Gestión presupuestal

Evaluada la ejecución presupuestal de ingresos y gastos se estableció:

5.1.1.1. *Ejecución presupuestal de ingresos*

El estudio del presupuesto se realizó comparativo con la vigencia inmediatamente anterior.

El presupuesto del municipio para la vigencia 2022, se fijó por Acuerdo No. 017 del 29 de noviembre del 2021, y se liquidó por Decreto No.187 de diciembre 31 de 2022.

El comportamiento de los ingresos como del gasto se evidencia en los siguientes cuadros:

Análisis de la composición de ingresos del presupuesto:

Cuadro No. 5

MUNICIPIO CALIMA EL DARIEN VALLE DEL CAUCA				
PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIAS 2021- 2022 CIFRAS EN PESOS				
CONCEPTO	DEFINITIVO	RECAUDADO	DEFINITIVO	RECAUDADO
	2021		2022	
Total Ingresos de la Entidad.	34.899.103.713,00	32.870.169.552,00	37.645.062.691,00	38.041.784.005,00
Ingresos Corrientes	26.950.105.177,00	24.904.247.763,00	33.165.454.365,00	33.536.119.873,00
Ingresos Tributarios	9.439.323.360,00	7.457.966.974,00	8.991.345.400,00	9.257.490.071,00
Predial Unificado	5.390.469.810,00	4.442.802.931,00	5.358.734.540,00	5.688.885.002,00
Industria y Comercio	1.200.000.000,00	726.679.971,00	1.000.009.248,00	871.488.865,00
Avisos y tableros	43.275.000,00	45.816.000,00	44.818.950,00	38.209.100,00
Sobretasa Bomberil	198.532.653,00	236.374.697,00	203.950.402,00	206.038.378,00
Sobretasa Ambiental	985.015.897,00	750.518.317,00	754.817.916,00	754.817.916,00
Sobretasa a la Gasolina	648.000.000,00	731.148.000,00	667.258.772,00	793.114.000,00
Estampilla Procultura	70.000.000,00	68.479.423,00	69.975.204,00	105.974.226,00
Estampilla Pro-Tercera Edad	139.000.000,00	294.552.540,00	107.997.848,00	495.752.578,00
Publicidad Exterior Visual	1.000.000,00	0,00	11.522.629,00	11.522.629,00
Tasa Pro deporte y Recreación	70.000.000,00	115.922.549,00	105.610.492,00	202.123.595,00

MUNICIPIO CALIMA EL DARIEN VALLE DEL CAUCA				
PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIAS 2021- 2022 CIFRAS EN PESOS				
CONCEPTO	DEFINITIVO	RECAUDADO	DEFINITIVO	RECAUDADO
	2021	2021	2022	2022
Espectáculos Públicos	1.030.000,00	9.400,00	500.000,00	
Contribución Contratos obras Publicas	53.000.000,00	33.641.290,00	26.149.399,00	48.330.282,00
Alumbrado Público SSF	640.000.000,00	12.021.856,00	640.000.000,00	41.233.500,00
Ingresos No Tributarios	1.415.443.545,00	1.559.624.858,00	1.151.086.355,00	1.466.241.023,00
Tasas y Derechos	187.389.062,00	211.197.140,00	22.525.113,00	3.750.000,00
Multas	11.063.375,00	8.457.386,00	16.617.702,00	20.902.277,00
Contribuciones	398.374.000,00	519.143.224,00	461.055.212,00	1.131.897.068,00
Venta de Bienes y Servicios	13.948.000,00	16.158.000,00	17.431.756,00	17.559.756,00
Derechos de Utilización de Bienes de servicio Público	804.669.108,00	804.669.108,00	633.456.572,00	292.131.922,00
Transferencias	16.095.338.272,00	15.886.655.931,00	23.023.022.610,00	22.812.388.779,00
SGP Educación	387.568.143,00	387.568.143,00	345.264.913,00	345.264.913,00
SGP Salud	4.576.991.532,00	4.576.991.532,00	4.745.752.935,00	4.745.752.935,00
SGP Agua Potable	750.466.009,00	750.466.002,00	958.356.222,00	958.356.220,00
SGP Propósito General	1.593.909.190,00	1.593.909.190,00	1.537.679.735,00	1.537.679.735,00
SGP Alimentación Escolar	51.859.295,00	51.859.295,00	52.950.779,00	52.950.779,00
SGP Resguardos Indígenas	18.160.080,00	33.838.213,00		
Participación y Derechos de Monopolio	442.672.561,00	211.196.355,00	455.952.737,00	250.780.323,00
Fosyga	4.822.950.891,00	4.822.950.891,00	5.428.542.036,00	5.428.542.036,00
SGP Libre Destinación	1.198.002.859,00	1.198.002.859,00	1.146.146.011,00	1.146.146.011,00
PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP			42.809.633,00	38.842.742,00
Otras Transferencias Nacionales	684.386.711,00	684.385.706,00	45.093.327,00	45.093.327,00
Otras Transferencias Departamentales	1.568.371.001,00	1.575.487.745,00	8.264.474.282,00	8.262.979.758,00
Ingresos de Capital	7.948.998.536,00	7.965.921.789,00	4.479.608.326,00	4.505.664.132,00
Ind. de Cumplimiento		94		101
Var. Ptos Definitivos			8	
Var. Ptos. Ejecutados				16
Fuente: Presupuesto Calima El Darién Valle vigencias 2021-2022				

Del cuadro anterior, se evidencia que el presupuesto de ingresos de la vigencia 2022 con referencia al año 2021 presento un incremento del 16%, en la vigencia 2022 en referencia con los ingresos se presentó una ejecución superior al presupuesto definitivo lo cual significa que se dejaron de adicionar recursos por valor de \$396.721.314. Que deberán estar en el estado del tesoro.

De otra parte, se evidencia que el presupuesto de ingresos de la vigencia 2022 en estudio, fue congruente con lo inicialmente proyectado, tanto así que el índice de cumplimiento fue del 101,05 % del presupuesto definitivo.

Respecto a las Tres principales rentas municipales (predial unificado, industria y comercio, Sobretasa Consumo Gasolina reportaron un índice de cumplimiento del 106%, 87% y 119% respectivamente con relación a lo programado al inicio de la vigencia 2022, y su crecimiento respecto al 2021 fue del 28%, para el predial unificado, industria y comercio, registró un crecimiento de 19%, 16% sobretasa a la gasolina 8%, con relación al 2021.

5.1.1.2. Ejecución presupuestal de gastos

Los gastos registraron el siguiente comportamiento.

Cuadro No. 6

MUNICIPIO CALIMA EL DARIEN VALLE DEL CAUCA				
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIAS 2021 - 2022 CIFRAS EN PESOS				
CONCEPTO	DEFINITIVO	EJECUTADO	DEFINITIVO	EJECUTADO
	2021	2021	2022	2022
Total Gastos de la Entidad.	34.899.102.715,00	29.630.690.644,00	37.645.062.692,00	33.478.742.966,00
Gastos de Personal	2.302.237.249,00	2.261.937.628,00	2.056.874.379,00	2.002.847.112,00
Gasto general	2.371.817.123,00	2.344.548.990,00	2.920.756.742,00	2.789.576.672,00
Transferencias Sentencias	20.281.638,00	20.281.638,00	62.000.000,00	0,00
Transferencias Terceros	989.842.814,00	834.342.751,00	759.814.809,00	759.814.809,00
Transferencias Concejo	325.714.745,00	310.634.755,00	333.773.128,00	248.663.039,00
Transferencias Personería	136.278.901,00	134.732.912,00	150.001.685,00	149.711.869,00
Transferencias Servicios Públicos	804.669.108,00	804.669.108,00	396.550.000,00	0,00
Transferencias Pensiones	293.618.459,00	257.768.447,00	405.781.515,00	253.886.299,00
Transferencias de Capital	200.061.653,00	199.856.516,00	205.831.504,00	205.831.504,00
Disminución de Pasivos	0,00	0,00	187.899.078,00	187.899.078,00
Total, Gastos de Funcionamiento	7.444.521.690,00	7.168.772.745,00	7.479.282.840,00	6.598.230.382,00
Servicio de la Deuda	630.380.659,00	578.262.106,00	1.410.706.915,00	1.378.864.986,00
Gastos de Inversión	26.824.200.366,00	21.883.655.793,00	28.755.072.937,00	25.501.647.598,00
Ind. de Cumplimiento		85		89
Var. Ptos Definitivos			8	
Var. Ptos. Ejecutados				13
Fuente: Presupuesto Calima El Darién Valle vigencias 2021-2022				

En el anterior cuadro, se evidencia los presupuestos de los gastos correspondientes a las vigencias 2021 y 2022; para el 2021 alcanzó un nivel de cumplimiento en lo relacionado al (presupuesto definitivo Vs., ejecutado) del 85 %, en el 2022 alcanzó el 89%, en cuanto a los presupuestos definitivos registraron un crecimiento del 4 % en el 2022 con relación al 2021, y en lo relacionado con el ejecutado registró igualmente un crecimiento del 13 % en el 2022 frente a lo recaudado en el 2021.

Los gastos de inversión en referencia con la vigencia 2021 crecieron para la vigencia 2022 en un 16,53%, los de mayor crecimiento fueron educación y salud y presentó en agua potable un decrecimiento del 77% y vías en un 55%.

Una vez realizada la evaluación se observó que el municipio de Calima el Darién - Valle del Cauca, ejecutó actividades en el ejercicio de garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso presupuestal como son; programación, aprobación, liquidación, modificación, ejecución y control del Presupuesto

Esfuerzo fiscal, Grado de dependencia de las transferencias del gobierno Central

El esfuerzo fiscal que hace la Administración Municipal el cual viene siendo el resultante de la relación entre el recaudo efectivo y la capacidad fiscal del municipio, la cual a su vez depende de su base económica. Según la teoría fiscal, el desempeño económico (crecimiento o recesión).

El efecto que tienen las transferencias en el fortalecimiento de los ingresos tributarios de los entes territoriales se denomina esfuerzo fiscal, es decir, si las transferencias que realiza el gobierno nacional a los municipios o entidades territoriales estimulan o no la generación de recursos propios, como contrapartida a tales recursos. Ahora bien, si el efecto es positivo, se habla de la existencia de esfuerzo fiscal, y si es negativo, se entiende que hay pereza fiscal, la cual se da porque, en general, se ha creado la cultura o tendencia que los gobiernos locales vivan de las transferencias del sector central, contribuyendo a la disminución de la creación de estrategias como política de recaudo de los tributos territoriales.

En el cuadro siguiente se evidencia el cálculo de la dependencia de las transferencias del gobierno central:

Cuadro No. 7

GRADO DE DEPENDENCIA cifras en \$		
CONCEPTO	2021	2022
Transferencias Dptales, Nacionales	44.713.752.180	52.515.785.025
Ingresos	103.157.825.731	121.468.277.017
Indicador	43,3	43,2
fuente: Presupuesto 2022-2021 Municipio de Calima El Darién Valle		

5.1.1.3. *Indicadores financieros*

Cuadro No. 8

MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN VALLE DEL CAUCA				
RAZONES FINANCIERAS 2022-2021 CIFRAS EN PESOS				
INDICADORES DE LIQUIDEZ O SOLVENCIA				
Año	Capital Neto de trabajo	Activo Cte. - Pasivo Cte.		Interpretación
2022	30.011.429.931	39.063.685.350	9.052.255.419	En el 2022 la administración Municipal disponía de \$30.011.429.931 el capital neto de trabajo. Luego la entidad dispone de Recursos para el pago de sus pasivos a corto plazo, evidenciándose un decrecimiento del 24% respecto al año inmediatamente anterior, a pesar que los activos se incrementaron el 24% en el 2022 con relación al 2021, los pasivos corrientes decrecieron en -12% frente al período inmediatamente anterior.
2021	24.163.368.009	34.504.100.651	10.340.732.642	En el 2021 el Municipio disponía de \$24.163.368.009 de capital de trabajo. Recursos que dispone el Municipio para atender la operación después de pagar el pasivo a corto plazo.
Año	Razón Liquidez o Corriente	Activo Cte. / Pasivo Cte.		Interpretación
2022	4,32	39.063.685.350	9.052.255.419	En el 2022 la entidad por cada peso de deuda a corto plazo dispone solamente del \$4,32 de respaldo para cubrir parte de sus deudas.
2021	3,34	34.504.100.651	10.340.732.642	En el 2021 la entidad por cada peso de deuda a corto plazo dispone de \$3,34 de respaldo o solvencia y liquidez para cubrir oportunamente sus deudas.
Año	Solidez	Activo total/ pasivo Total		Interpretación
2022	1,85	135.510.557.761	73.276.521.493	En el 2022 la solidez es mayor que 1 la administración se encontraba en una buena situación financiera por tener una solidez de 1,85, indicando que la entidad dispone de \$1,85 en activos por cada peso que adeuda, así que en determinado momento al vender todos sus bienes dispone de recursos para cubrir sus obligaciones, por lo tanto, por este período el Municipio ofrecía una buena garantía para sus acreedores.
2021	1,76	130.955.533.961	74.587.261.229	En el 2021 la solidez es mayor que 1 la entidad se encontraba en una buena situación financiera por tener una solidez de 1,76, indicando que la entidad dispone de 1,76 en activos por cada peso que adeuda, así que en determinado momento al vender todos sus bienes dispone de recursos para cubrir sus obligaciones, por lo tanto, por este período la Administración Municipal ofrecía una buena garantía para sus acreedores.

fuentes: estados financieros 2022-2021 Municipio de Calima El Darién Valle

Cuadro No. 9

MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN VALLE DEL CAUCA				
RAZONES FINANCIERAS 2022-2021 CIFRAS EN PESOS				
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO O COBERTURA				
Año	Endeudamiento	Pasivo Total/ activo Total		Interpretación
				Indican la capacidad que tiene el Municipio para generar recursos propios, destinados a cumplir con sus obligaciones corrientes.
2022	0,54	73.276.521.493	135.510.557.761	Indica que por cada peso que el municipio tiene invertido en cada uno de los activos el \$0,54% ha sido financiado por los bancos, proveedores o tercero.
2021	0,57	74.587.261.229	130.955.533.961	Indica que los acreedores financiaron el 0,57% de los activos.
AÑO	Endeudamiento A Corto plazo	pasivo corriente/pasivo total		Interpretación
2022	0,12	9.052.255.419	73.276.521.493	Significa que por cada peso que el Municipio como entidad agregadora adeuda \$0,12 debe ser cubierto a corto plazo en el 2022.
2021	0,14	10.340.732.642	74.587.261.229	Significa que por cada peso que el Municipio en el 2022 como entidad agregadora adeuda \$0,14 debe ser cubierto a corto plazo.
Año	Protección al pasivo total	capital contable/pasivo Total		Interpretación
2022	0,85	62.234.036.268	73.276.521.493	Indica que por cada peso que se les adeuda a los acreedores, se cuenta con \$0,85 por parte del Municipio como entidad agregadora en el 2022
2021	0,76	56.368.272.732	74.587.261.229	Indica que por cada peso que se les adeuda a los acreedores en el 2021, se cuenta con \$0,76 por parte del Municipio como entidad agregadora.
AÑO	concentración endeudamiento a largo plazo	pasivo no corriente/pasivo total		Interpretación
2022	0,88	64.224.266.074	73.276.521.493	Significa que por cada peso que el Municipio adeuda en el 2022, \$0,88 debe ser cubierto a Largo Plazo.
2021	0,86	64.246.528.587	74.587.261.229	Significa que por cada peso que el Municipio adeuda en el 2021, \$0,86 debe ser cubierto a Largo Plazo.
Año	Apalancamiento	pasivo Total/ patrimonio		Interpretación
2022	1,00	73.276.521.493	73.203.557.334	Significa el grado de compromiso del patrimonio, es decir por cada peso que se tiene en el patrimonio el Municipio adeuda \$1,00 significa que tiene como respaldar la totalidad del pasivo con el patrimonio
2021	1,11	74.587.261.229	67.337.793.798	Significa el grado de compromiso del patrimonio, es decir por cada peso que se tiene en el patrimonio el Municipio adeuda \$1,11.

fuentes: estados financieros 2022-2021 Municipio de Calima El Darién Valle

Cuadro No. 10

MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN VALLE DEL CAUCA				
RAZONES FINANCIERAS 2022-2021 CIFRAS EN PESOS				
INDICADORES DE ROTACIÓN O DE EFICIENCIA				
Año	Rotación de Cartera	Ingreso Fiscales/ cuentas x cobrar		Interpretación
2022	0,36	9.613.042.983	26.489.838.424	Las cuentas por cobrar para el 2022 giraron 0,36 veces en su rotación en el # de veces que la entidad se tarde en recuperar la cartera.
2021	0,66	16.469.172.554	25.079.899.081	En el 2021 las cuentas por cobrar giraron 0,66 veces en su rotación en el # de veces que la entidad se tarde en recuperar la cartera.
Año	Días promedio de cobro	365/ # Veces que rotan las cuentas x cobrar		Interpretación
2022	1014	365	0,36	Indica que el Municipio tardó 1.014 días en el 2022, y en el 2021 tardó 553 días, indicando con este promedio que se incrementó en el tiempo para la recuperación de la cartera en el período en estudio comparado con el 2021 el tiempo aumentó la situación se evidencia en el balance general por su crecimiento que es originado por la falta de gestión en el cobro.
2021	553	365	0,66	

fuelle: estados financieros 2022-2021 Municipio de Calima El Darién Valle

Cierre Fiscal

Gestión presupuestal. (Ejecución – en el cierre fiscal) Resultado fiscal.

El municipio ejecutó ingresos por TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CINCO PESOS M/DA CTE. (\$38.041.784.005.00) y comprometió gastos por TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MDA. CTE. (\$33.478.742.966.00), generando un resultado fiscal positivo por CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS MDA. CTE. (\$4.563.041.039.00), los cuales fueron reconocidos como superávit fiscal mediante Acuerdo No.005 del 28 de febrero de 2023, ver el siguiente cuadro:

Cuadro No. 11

MUNICIPIO CALIMA EL DARIEN Análisis Resultado Fiscal Vigencia 2022										
Ítem	Ejecución Ingresos				Ejecución Gastos					Resultado 10=4-9
	Recaudo en efectivo 1	Recursos del Balance 2	Ejecución en Papeles y Otros 3	Total Ingresos 4= 1+2+3	Pagos 5	Cuentas por pagar 6	Reservas Presupuestales 7	Pagos sin Flujo de Efectivo 8	Total Gastos 9=5+6+7+8	
TOTALES	15.737.531.128	3.541.618.151	18.762.634.726	38.041.784.005	13.319.742.522	374.109.536	6.684.088.929	13.100.801.979	33.478.742.966	4.563.041.039

Fuente: Área Financiera

Comparación de ejecución presupuestal y estado del tesoro.

A los ingresos ejecutados por la administración municipal en el 2022, por concepto de recaudos en efectivo más recursos del balance, se le restaron los pagos efectuados en la vigencia generando un saldo de **DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS MDA. CTE. (\$12.571.833.158.00)** que al compararse con los recursos que se presentan en el estado del tesoro por **DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOCIENTOS VEINTISEIS PESOS MDA. CTE. (\$12.573.846.926.00)**, se determinó en tesorería una diferencia positiva de **SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE., (\$6.612.426.401)**, como se evidencia en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 12

MUNICIPIO CALIMA EL DARIEN									
Análisis confrontación de saldos presupuesto y tesorería									
Vigencia 2022									
(Recaudo En Efectivo + Recursos del Balance y/o Disponibilidad)ppto 1	Depositos Judiciales a Favor 2	pagos efectivos por ppto 3	Depositos judiciales en contra y anticipos sin legalizar 4	TOTAL 5=(1+2-3-4)	Estado de Tesorería 6	Descuentos de nómina y otros en Tesorería 7	Recursos Resguardos Indígenas 8	SALDO TESORERIA 9 = (6-7-8)	DIFERENCIA 10=(9-5)
19.279.149.279		13.319.742.522		5.959.406.757	12.573.846.926	2.013.767		12.571.833.158	6.612.426.401
Fuente: Área Financiera									

En el seguimiento realizado por el equipo auditor se confirmó que dicha diferencia corresponde a \$5.661.832.747.00 perteneciente al convenio DPS (Plaza de Mercado recursos Sin Situación de Fondos (S.S.F.)), más \$950.593.654.13 constituidas como reservas de presupuestales vigencias 2021 y, que a la fecha no se han cancelado, que se constituyeron” (...) *con los compromisos que al 31 de diciembre de 2021, no se hayan cumplido y estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación (artículo 89 estatuto orgánico de presupuesto)*, durante el proceso del cierre fiscal se evidenció que la administración municipal a la fecha (2023) las reservas constituida en el vigencia 2021 no han sido canceladas, lo cual a la fecha han fenecido al cierre de la vigencia fiscal 2022, tornándose en vigencias expiradas.

Evaluación documental de las reservas de apropiación excepcionales y cuentas por pagar.

Reservas de apropiación

Se evidenció presupuestalmente que la entidad constituyó reservas de apropiación presupuestal al cierre de la vigencia 2022, por valor de \$6.684.088.929, mediante Resolución No.015 de 12 de enero de 2023, situación que se evidencia en el siguiente cuadro No.13.

Cuentas por pagar

Se evidenció presupuestalmente que la entidad constituyó cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2022, mediante resolución No.014 del 12 de enero de 2023, por \$374.709.536.00, ver el siguiente cuadro:

Cuadro No. 13

MUNICIPIO CALIMA EL DARIEN Conciliación Reservas con Tesorería Análisis Recursos a Incorporar Vigencia 2022						
Fuente	Saldo Estado del Tesorería 1	Valor Reservas de Apropiación 2	Valor Cuentas Por Pagar 3	Descuentos de nómina y otros en Tesorería 4	Superavit a Incorporar al Presupuesto Siguiende Vigencia 5=1-(2+3+4)	Deficit a Incorporar al Presupuesto Siguiende Vigencia 5=1-(2+3+4)
RECURSOS PROPIOS	2.480.921.051	746.305.458	153.932.151	778.981.973	801.701.469	
2511 Beneficio Empleados corto plazo (Cesantías anualizadas, ints. Vacaciones, primas, bonificaciones)	88.323.161		88.323.161		0	
2436 Retefuente Recaudos a Favor de Terceros	356.000		356.000		0	
TOTAL S.G.P	1.593.244.970	275.950.724	88.971.217		1.228.323.029	
Otras Destinaciones Especificas	8.411.001.743	5.661.832.747	42.527.007	173.625.449	2.533.016.540	
Totales	12.573.846.926	6.684.088.929	374.109.536	952.607.422	4.563.041.039	0
TOTAL PRESUPUESTO	12.573.846.926	6.684.088.929	374.109.536	952.607.422	4.563.041.039	0
Fuente: Area Financiera						

5.1.2. Análisis gestión de la inversión y del gasto

Inversión, operación y funcionamiento

El plan de desarrollo 2020-2023 fue aprobado el 7 de junio del 2020 mediante el acuerdo municipal 004 Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) 2020-2023 para el Municipio de Calima El Darién, Valle del Cauca “Somos Alianza por un Calima - El Darién Sostenible y Emprendedor, presenta una modificación según acuerdo municipal 042 del 2020 “Por medio del cual se modifica el Plan de Desarrollo Municipal Somos Alianza por un Calima El Darién Sostenible y Emprendedor.

Con la modificación el plan de desarrollo 20-2023 se estableció en los 4 pactos sociales, 17 sectores, 44 programas y 207 indicadores de producto.

En referencia con la inversión ejecutada por sectores del mismo se relaciona a continuación:

Cuadro No. 14

SECTOR	DEFINITIVO	EJECUTADO	% EJECUCION
Somos Alianza por un Calima El Darién con "Inclusión Social, Paz y Equidad"	19.439.800.042,54	16.783.981.059,98	86%
Cultura	934.713.785,60	860.217.964,00	92%
Deporte y Recreación	336.242.364,66	222.660.722,00	66%
Educación	1.286.297.389,48	985.103.181,53	77%
Inclusión social	621.833.019,46	484.299.139,99	78%
Minas y energía	640.000.000,00	41.233.500,00	6%
Salud y Protección Social	13.122.712.888,58	12.893.239.648,46	98%
Transporte	873.051.668,66	704.365.290,00	81%
Vivienda	1.624.948.926,10	592.861.614,00	36%
Somos Alianza por el "Emprendimiento y Desarrollo Económico de nuestra Región".	7.753.473.733,00	1.346.794.213,00	17%
Agricultura y Desarrollo Rural	7.457.523.733,00	1.056.844.214,00	14%
Comercio, Industria y Turismo	178.000.000,00	171.999.999,00	97%
Trabajo	117.950.000,00	117.950.000,00	100%
Somos Alianza por la "Gestión de lo Público".	965.875.358,56	574.533.399,00	59%
Ciencia, Tecnología e Innovación	50.000.000,00	29.476.000,00	59%
Gobierno Territorial	875.225.358,56	509.667.541,00	58%
Información Estadística	-	-	0%
Justicia y del Derecho	35.700.000,00	33.439.858,00	94%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	4.950.000,00	1.950.000,00	39%
Somos Alianza por la Descentralización,	595.923.803,33	112.250.000,00	19%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	595.923.803,33	112.250.000,00	19%
TOTAL	28.755.072.937,43	18.817.558.671,98	65%

Fuente: Planeación Municipal

Del cuadro anterior se establece que La inversión realizada a través de proyectos para la vigencia 2022 fue del 65% con \$18.817.558.671,98 de un presupuesto definitivo de \$28.755.072.937,43. Teniendo en cuenta que el plan de desarrollo se rinde con pagos efectivos.

Fue verificada la articulación de los instrumentos de planeación, evidenciándose coherencia con el plan operativo anual de inversiones y el presupuesto de la entidad, en el cual se observó la planificación de la inversión a través de los diferentes programas a desarrollar en la vigencia en estudio, a continuación, se muestra el valor de la inversión de proyectos.

En cuanto a los gastos de funcionamiento el municipio reportó a través de la matriz de articulación de los proyectos contratación referente al rubro destinado de los cuales se tomó el valor de \$1.158.010.704, como muestra representativa de contratos ejecutados con recursos propios, cuyo resultado se revelará en el punto de contratación.

5.2. MACROPROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

5.2.1. Análisis de los Estados Financieros

5.2.1.1. Activos

Cuadro No. 15

MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Cifras en Pesos					
COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021					
Cta. No.	Concepto	2022	2.021	VARIACION	
				\$	%
1	ACTIVO	135.510.557.761	130.955.533.961	4.555.023.800	3,5%
	Corrientes	39.063.685.350	34.504.100.651	4.559.584.699	13,2%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12.473.846.926	9.424.201.570	3.049.645.356	32,4%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	100.000.000	0	100.000.000	
13	CUENTAS POR COBRAR	26.489.838.424	25.079.899.081	1.409.939.343	5,6%
	No Corrientes	96.446.872.411	96.451.433.310	-4.560.899	0,0%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	37.828.307.766	37.558.709.268	269.598.498	0,7%
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	45.148.049.672	46.436.829.703	-1.288.780.031	-2,8%
19	OTROS ACTIVOS	13.470.514.973	12.455.894.339	1.014.620.634	8,1%

Fuente: Estados financieros 2022-2021 Municipio Calima El Darien

En el anterior cuadro se evidencia, la participación de los activos corrientes en la vigencia auditada fue del 29% del total de los Activos, siendo las cuentas por cobrar, la más representativa de este grupo con el 20% y en cuanto a los activos no corrientes participaron en un 71%, de la totalidad de los activos, observándose que la cuenta atípica de este grupo es bienes de beneficio y uso público con el 33%, seguidamente la propiedad planta y equipo con el 28% del total de los activos, y por último los otros activos con el 10% evidenciándose que la entidad concentra más recursos en la cuentas bienes de beneficio y uso público.

Los activos corrientes reportaron un incremento del 13.2% en el 2022, con relación al 2021, y los no corrientes reportaron decrecimiento del -0.0047%, situación que obedeció a los decrecimientos que presentaron los bienes de beneficio y uso público que registró -2.8%, finalmente el total de los activos registró un crecimiento del 3.5%, al pasar de \$130.955.533.961 en el 2021, a \$135.510.557.761 en el 2022.

Las cuentas más relevantes entre el grupo de los activos son:

Grupo Efectivo y Equivalente al Efectivo

Este grupo está integrado por el conjunto de bienes y derechos, pertenecientes a la administración municipal, obtenidos como consecuencia de sucesos pasados, de los

cuales se espera que fluyan beneficios económicos futuros en desarrollo del cometido estatal.

Está determinado por las cuentas de caja y depósitos en Instituciones Financieras, al 31 de diciembre 2022, presentaban los saldos que se observan en la cuenta contable 11 que se evidencia en el anterior cuadro

Las conciliaciones bancarias, se realizaron en el mes siguiente durante el período 2022, por otra parte, el efectivo registró un incremento del 32.4% en el 2022, con relación al 2021, no se evidenció, si el efectivo se concentró más en las cuentas de ahorro o corrientes, pues en la estructura no se encuentra clasificada en la forma que establece el catálogo general de cuentas mucho más efectivo, por cuanto el software financiero no arroja los estados a nivel de tercero.

Grupo de cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar reportaron crecimientos del 5.6% en el 2022, con relación al 2021, este grupo registra los impuestos de predial unificado, industria comercio, entre otros impuestos, su variación corresponde a una débil y falta de gestión en el recaudo lo que ha hecho que la cartera se incremente, evidenciándose que la administración debe fortalecer las estrategias de una manera contundente a fin de realizar la recuperación inmediata de la misma, y evitar que se genere sobre ellas acciones de prescripción del impuesto predial unificado a futuro, lo anterior, en razón al saldo tan representativo de dicho tributo frente a la totalidad de las cuentas por cobrar, y así mostrar una gestión fiscal en desarrollo de las finanzas del municipio para ejecutar inversión con recursos propios.

De otro lado, no se evidenció el comportamiento de cada cuenta por cobrar, haciendo imposible el estudio y análisis de la capacidad rentística de la municipalidad, por cuanto el software financiero SINAP V 5.0 no lista los estados financieros a nivel de terceros.

Grupo Propiedad planta y equipo

Para este grupo se encuentra los bienes que utiliza la entidad en desarrollo de su ejercicio de la función administrativa, la administración municipal realizó la respectiva depreciación bajo el método de reconocido valor técnico de línea recta.

La propiedad planta y equipo registró un crecimiento del 0.7% en el 2022, frente al 2021, en los registros no se evidenciaron que se hayan reconocidos teniendo en cuenta criterios como la materialidad, es decir, terrenos rurales y urbanos, reconociéndose por cuerdas separadas. Por otro lado, los Bienes de beneficios de Uso Público e Históricos y Culturales reportó decrecimiento del 2.8% al pasar de \$46.436.829.703 en el 2021 a \$45.148.049.672.

5.2.1.2. Pasivos

Cuadro No. 16

MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Cifras en Pesos					
COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021					
Cta. No.	Concepto	2022	2.021	VARIACION	
				\$	%
2	PASIVO	73.276.521.493	74.587.261.229	-1.310.739.736	-1,8%
	Corrientes	70.955.377.027	72.266.116.763	-1.310.739.736	-1,8%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	5.158.769.764	5.516.118.451	-357.348.687	-6,5%
24	CUENTAS POR PAGAR	3.893.485.655	4.824.614.191	-931.128.536	-19,3%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	61.903.121.608	61.925.384.121	-22.262.513	0,0%
	No Corriente	2.321.144.466	2.321.144.466	0	0,005%
27	PROVISIONES	2.320.946.466	2.320.946.466	0	0,0%
29	OTROS PASIVOS	198.000	198.000	0	0,0%

Fuente: Estados financieros 2022-2021 Municipio Calima El Darien

En anterior cuadro se evidencia la participación que tuvieron los pasivos corrientes en la vigencia auditada la cual registró 97% del total de los pasivos, y en cuanto a los pasivos no corrientes, participaron en un 3%, siendo la más representativa de este grupo beneficios a los empleados con el 84% del total de los pasivos, seguidamente prestamos por pagar con el 7%, evidenciándose que la entidad concentró más recursos en los beneficios a los empleados.

Por otra parte, los pasivos corrientes reportaron un decrecimiento del -1.8% en el 2022, con relación al 2021, y los no corrientes reportaron decrecimiento del 0.005%, comportamiento que se evidencia en el cuadro anterior.

Las cuentas seleccionadas en el grupo de los pasivos son:

Grupo Cuentas por pagar

Los pasivos corrientes registraron un comportamiento de la siguiente forma:

Durante el proceso de ejecución de la auditoria en el estado de la situación financiera en la cuenta 24 clasificada en este grupo como cuentas por pagar, el catálogo general de cuentas para entidades de gobierno establece sobre el tema lo siguiente, *“se incluyen las cuentas que representan las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero.”* Durante la vigencia en estudio la entidad constituyó cuentas por pagar bajo la cuenta con el código 24, registrando un decrecimiento del 19.3% en el 2022 con relación al 2021.

En el 2022, el grupo de los pasivos corrientes los préstamos por pagar registraron un decrecimiento del 6.5%, con relación a la vigencia 2021, por la gestión que se hiciera por parte de la administración municipal se logró reducir la tasa de interés en 7 puntos en el crédito con Findeter ET Agua, igualmente el crédito Catastro multipropósito se redujo la tasa de interés, prestamos que trasladaron de Findeter e Infivalle al banco Agrario.

En el 2022, bajo la figura de crédito de tesorería en razón al Decreto 678 de 2020, por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020, se realizó un crédito de Tesorería por \$800 millones, desembolsado en junio 30 de 2022, para gastos de funcionamiento, apoyo a la Gestión y Nómina, comportamiento que se evidencia a continuación:

Grupo Deuda Pública

Cuadro No. 17

VIGENCIA 2022								
Entidad Financiera	Monto Inicial	Periodicidad	Saldo a Dic 2021	Pago Capital	Intereses Corrientes	Intereses moratorios	Total Pago	Saldo a dic.31 2022
FEDECOMISO FINDETER CREDITOS ET-AGUA	1.963.286.592,81	TRIMESTRAL	1.568.665.987,65	1.568.665.987,65	145.881.822,11	-	1.714.547.809,76	-
INFIVALLE	500.000.000,00	MENSUAL	352.941.176,45	352.941.176,45	16.419.037,00	-	369.360.213,45	-
INFIVALLE	3.594.511.287,00	MENSUAL	3.594.511.287,00	3.594.511.287,00	81.637.342,00	-	3.676.148.629,00	-
BANCO AGRARIO	3.594.511.287,00	MENSUAL	-	-	262.690.542,00	-	262.690.542,00	3.594.511.287,00
BANCO AGRARIO	1.073.880.330,00	TRIMESTRAL		42.955.213,00	32.361.630,00	187.550,00	75.504.393,00	1.030.925.117,00
BANCO AGRARIO	800.000.000,00	MENSUAL		266.666.640,00	40.481.404,00	-	307.148.044,00	533.333.360,00
							-	-
TOTALES			5.516.118.451,10	5.825.740.304,10	579.471.777,11	187.550	6.405.399.631,21	5.158.769.764,00

Fuente: Contabilidad y tesorería municipio Calima El Darién

En el cuadro anterior, se evidencia el comportamiento de los pagos del capital y los intereses corrientes por la vigencia 2022, se evidenció pago por intereses moratorios, por el crédito del banco agrario por \$187.550.00. la deuda pública registró un decrecimiento del 6.5% en el 2022 con relación al 2021.

Por otra parte, en la vigencia 2023 igualmente se evidenció el pago de intereses por mora por el crédito del banco agrario por \$386.244.00.

5.2.1.3. Patrimonio

Grupo Patrimonio

Cuadro No. 18

MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Cifras en Pesos COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021					
Cta. No.	Concepto	2022	2.021	VARIACION	
				\$	%
2	PASIVO	73.276.521.493	74.587.261.229	-1.310.739.736	-1,8%
3	PATRIMONIO	73.203.557.334	67.337.793.798	5.865.763.536	8,7%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	73.203.557.334	67.337.793.798	5.865.763.536	8,7%
3105	CAPITAL FISCAL	26.613.327.860	26.613.327.860	0	0,0%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35.393.168.101	27.902.213.622	7.490.954.479	26,8%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.712.300.840	7.337.491.783	-1.625.190.943	-22,1%
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	5.484.760.533	5.484.760.533	0	0,0%
	PASIVO MAS PATRIMONIO	146.480.078.827	141.925.055.027	4.555.023.800	3,2%

Fuente: Estados financieros 2022-2021 Municipio Calima El Darien

El patrimonio comprende el valor de los recursos públicos representados en bienes y derechos, deducidas las obligaciones, para cumplir las funciones de cometido estatal. El resultado a diciembre 31 de 2022, arroja un crecimiento del 8.7% con relación al 2021, representado el patrimonio en entidades de gobierno en el capital fiscal, el resultado del ejercicio y de ejercicios anteriores, y ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados.

Cuentas de orden acreedora:

Cuadro No. 19

MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Cifras en Pesos COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021					
Cta. No.	Concepto	2022	2.021	VARIACION	
				\$	%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	0	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
91	PASIVOS CONTINGENTES	3.934.681.888	3.931.681.888	3.000.000	0,1%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.934.681.888	-3.931.681.888	-3.000.000	0,1%

Fuente: Estados financieros 2022-2021 Municipio Calima El Darien

Los pasivos contingentes no son objeto de reconocimiento en los estados financieros, por ser un pasivo contingente que corresponde a una obligación posible surtida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia durará confirmada solo si ocurrieran o no en sucesos futuros inciertos y que no estén bajo el control de la administración municipal.

El estado de situación financiera de la vigencia en estudio, registra en los pasivos contingentes \$3.934.681.888, equivalente al 0.1% como incremento producto de compararlos con el registro del 2021, que correspondió a \$3 millones, se evidenció que la administración municipal no ha sido diligente en la creación de un fondo de contingencia. Por otra parte, no se reportaron registros de cuentas de orden deudoras.

5.2.1.4. Control interno contable

La evaluación del control interno contable de la vigencia 2022, reportada por la entidad al CHIP de la Contaduría General de la Nación registró una calificación total de 4.71, no obstante, una vez efectuada las verificaciones del proceso contable de la auditoría financiera y de gestión se obtuvo una calificación de 2.81, con una interpretación de Deficiente.

Es importante manifestar que la calificación obedeció a la ausencia de los siguientes puntos:

El software financiero SINAP V 5.0, no se encuentra en interface con las áreas que tienen que alimentar la contabilidad, con el agravante que no lista los estados financieros comparativos a nivel de terceros, haciendo imposible el seguimiento individual de la cuenta propiedad planta y equipo.

No se evidenciaron procesos conciliatorios con las áreas que tienen que ver con la parte financiera.

Se evidenciaron contingencias que, a futuro, dichos pasivos se convertirán en obligaciones para el ente territorial y a la fecha de la auditoría no se ha constituido el fondo de contingencia, con la premisa que esta situación se configuró una Hallazgo Administrativo en auditoría vigencia 2020, la cual se dejó abierta para el seguimiento al plan de mejoramiento.

El municipio Calima - El Darién al 31 de diciembre de 2022, registró en el estado de la situación financiera, en los activos no corrientes, exactamente en la cuenta propiedad planta y equipo por \$35.793 millones, la administración municipal no tiene la certeza que estas propiedades sean del municipio.

El municipio Calima El Darién Valle al 31 de diciembre de 2022, registró en el estado de la situación financiera, en los activos no corrientes, exactamente en las Bienes

de beneficio y uso público \$43.858 millones, los cuales no se tienen la certeza de la legalización de estos bienes.

No se evidencian las cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar registradas en el estado financiero.

Las incapacidades igualmente no se encuentran contabilizadas en la contabilidad del municipio, con el agravante que la entidad desconoce o en su defecto no tiene una relación del ausentismo de funcionarios debido a las incapacidades, desconociéndose el total de las incapacidades transcrita ante las EPS.

6 CALIFICACIÓN Y EVALUACION DEL CONTROL FISCAL INTERNO

En cumplimiento del Numeral 6° del Artículo 268 de la Constitución Política de Colombia, sobre la atribución del contralor general de la república y de las contralorías territoriales, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal, y como parte de éste, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca evaluó los riesgos y controles establecidos por el Sujeto de Control conforme a los parámetros mencionados en la guía de auditoría territorial en el marco de las normas internacionales de auditoría ISSAI.

La evaluación del diseño y efectividad de los controles, arroja una calificación de 2.1, razón por la cual se emite un concepto sobre la efectividad del control interno, **Inefectivo** como se evidencia en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 20

MACROPROCESO	VALORACIÓN DISEÑO DE CONTROL - EFICIENCIA (25%)	RIESGO COMBINADO (Riesgo inherente*Diseño del control)	VALORACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (75%)	CALIFICACION SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO INTERNO
GESTIÓN FINANCIERA	INEFICIENTE	ALTO	INEFICAZ	2,1
GESTIÓN PRESUPUESTAL	INEFICIENTE	ALTO	CON DEFICIENCIAS	
Total General	INEFICIENTE	ALTO	CON DEFICIENCIAS	INEFECTIVO

TABLA DE RESULTADOS		Rangos de ponderación CFI	
Diseño de controles	INEFICIENTE	De 1.0 a 1.5	Efectivo
Riesgo combinado	ALTO	De > 1.5 a 2.0	Con deficiencias
Efectividad de controles	CON DEFICIENCIAS	De > 2.0 a 3.0	Inefectivo
Resultado del CFI	INEFECTIVO		

Fuente: Matriz de Riesgos y controles PT-06 vigencia 2022
Elaboro: Equipo Auditor

Detalle del análisis del Control Fiscal Interno

En el anterior cuadro se observan, los resultados de la siguiente manera: En la valoración del diseño de control eficiencia, cuya interpretación según el resultado es ineficiente, en cuanto al riesgo combinado la matriz dio como resultado alto y en la valoración de la efectividad de los controles la interpretación es con deficiencias, finalmente la calificación sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno dio como resultado 2.1 con una interpretación de inefectivo.

Lo anterior, obedeció a incorrecciones materiales, es decir inconsistencias que se identificaron en la información presentada por la administración municipal, o que en su defecto, la entidad no tiene conocimiento de las cifras para los respectivos registros contables, presentando variaciones en los datos presentados y que a continuación se describen:

El resultado final de la calificación sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno arroja un resultado 2.1 con interpretación de inefectivo, pero la valoración diseño de control como la valoración de la efectividad de los controles arrojaron resultados ineficiente y con deficiencia respectivamente, dichos resultados obedeció a la capacidad de mitigar el riesgo relacionados la ausencia de un software financiero evidenciándose que este no es funcional, no cuenta con los aplicativos e interface o en su defecto en línea con las diferentes áreas que generan la información, es decir, que no se encuentra integrado, observándose que en la actualidad muchas de las actividades que se realizan en el proceso contable se lleva a cabo de forma manual en formatos de Excel, tornándose dispendiosa la labor que realiza el área contable, en razón, al mismo sistema de información que no permite producir reportes necesarios que ayuden a realizar el origen de los hechos económicos importantes tanto cuantitativos como cualitativos (revelaciones).

La incertidumbre que registran las cuentas propiedad planta y equipo, así como los bienes de beneficios y uso público, las cuales la administración municipal no tiene la certeza si pertenecen al municipio por cuanto no tienen los títulos que acrediten como propietario a la municipalidad, así mismo, otros bienes que han sido dados en dación de pago, que la entidad no ha realizado ninguna acción para legalizarlos como propiedad del municipio.

La entidad no tiene contabilizados como tampoco tienen conocimientos a cuánto asciende las incapacidades por cobrar, pues a la fecha no se ha radicado incapacidad alguna por funcionarios que, por enfermedad general, como licencia de maternidad entre otras hayan tenidos las EPS que incapacitar, desconociéndose si han sido radicadas ante cada entidad prestadora de salud.

La administración municipal, no tiene conocimiento de las cuotas partes pensionales tanto por cobrar como pagar igualmente no se encuentran contabilizadas.

Por otra parte, los litigios y demandas los cuales se sostiene los mismos saldos de la vigencia 2021, mientras que el saldo de la cuenta control registra un incremento

del 0.1 % en el 2022 con relación al 2021, no se evidenció la creación del fondo de contingencia que operaría para eventualidades donde dichos pasivos se conviertan en obligaciones a futuro para la entidad.

Situaciones que originaron las causas de las incorrecciones reflejadas en el presente informe, por las debilidades de los procesos responsables de estas actividades aunado a la ausencia del autocontrol, situación que conllevó a materializarse presuntas observaciones, administrativas con presuntas incidencias disciplinarias y fiscales, las que se evidencian en el ítem de las observaciones del presente informe.

Por otra parte, el sistema de control interno en el municipio de calima el Darién no cumple con los objetivos fundamentales como son:

- Proteger los recursos de la entidad buscando una adecuada administración ante los riesgos existentes.
- Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión del municipio.
- Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros
- Aplicar medidas para prevenir los riesgos, así como detectar y corregir errores que se presentan en la entidad y que afectan el logro de los objetivos

Todo lo anterior, género en la entidad pérdida de recursos, información financiera desactualizada y falta de controles en la administración municipal.

El ecosistema del municipio está siendo afectado por el crecimiento desordenado de la población

Durante la vigencia 2022, el municipio no adquirió predios de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua al acueducto municipal ni a los acueductos rurales.

Los resultados fisicoquímicos y microbiológicos de las muestras de agua, tomadas por la Unidad Ejecutora de Saneamiento Básico del Valle del Cauca UES Valle, evidenció que a la zona rural del municipio de Calima El Darién, se le está suministrando agua no apta para el consumo humano.

La entidad no está dedicando un porcentaje no inferior al 1% del total de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica con el objeto de conservar los recursos hídricos o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas

La entidad no evidencia las acciones de control, cuando se presentan debilidades o riesgos en el proceso de supervisión de los contratos ambientales

Hay falencias en la formulación del plan de desarrollo en la línea estratégica evaluada “Somos Alianza por la Descentralización, Desarrollo Local y la defensa Medio Ambiental, se evidenció que no hay interrelación entre el indicador de bienestar, la meta del cuatrienio, con el producto el indicador del producto y la meta del cuatrienio. Las metas no se cumplen y no se toman acciones preventivas o correctivas.

7 EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

El plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2022, y reportado a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, comprende Noventa (90) Hallazgos, de vigencias auditadas (2018,2019,2020 y 2021 en el (PVCF), a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad NO fueron efectivas de acuerdo a la calificación de 21.8 puntos, con un concepto que No cumple, según se evidencia en el siguiente cuadro y tal como se registra en el Papel de Trabajo PT 03-PF Evaluación Plan de Mejoramiento.

Cuadro No. 21

PLAN DE MEJORAMIENTO													
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido										
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	24,4	0,20	4,9										
Efectividad de las acciones	21,1	0,80	16,9										
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		1,00	21,8										
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Calificación</th><th rowspan="4">No Cumple</th><th rowspan="4"></th></tr> <tr> <td>Cumple</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Cumple Parcialmente</td><td>1</td></tr> <tr> <td>No Cumple</td><td>0</td></tr> </table>				Calificación		No Cumple		Cumple	2	Cumple Parcialmente	1	No Cumple	0
Calificación		No Cumple											
Cumple	2												
Cumple Parcialmente	1												
No Cumple	0												

Las acciones cumplidas correspondieron a (16) de los 90 hallazgos identificados con los números 1, 2, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 36, 47, 48, 64, 74, 77 y 83 de las vigencias anteriores, cuyas acciones fueron cerradas y, por lo tanto, el resultado producto del seguimiento al plan de mejoramiento dio como resultado 21.8 puntos con una interpretación de No cumple, según los rangos de calificación que se evidencia en el cuadro anterior.

Por otra parte, de las acciones no cumplidas y acciones parcialmente cumplidas que no fueron efectivas correspondieron a los Hallazgos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 de los 90 hallazgos 74 quedaron abiertos, continuarán en el nuevo Plan de Mejoramiento.

Dado el resultado anterior, las acciones correctivas parcialmente cumplidas y las no cumplidas, que harán parte del Plan de Mejoramiento suscrito en este informe de auditoría, seguidamente se evidencia lo mas relevante de las acciones que no se cumplieron parcialmente y las no cumplidas.

8 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA

La administración Municipal rindió la cuenta anual consolidada para la vigencia fiscal 2022, dentro de los plazos previstos en cumplimiento a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales, la cual se verificó en desarrollo de la auditoría, dando como resultado 93.3 puntos cuyo concepto emitido es **Favorable** como se evidencia en el cuadro siguiente:

Cuadro No. 22

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA			
VARIABLES	CALIFICACIÓN PARCIAL	PONDERADO	PUNTAJE ATRIBUIDO
Oportunidad en la rendición de la cuenta	93,3	0,1	9,33
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos)	93,3	0,3	28,00
Calidad (veracidad)	93,3	0,6	56,00
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA			93,3
Concepto rendición de cuenta a emitir			Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN	
Rango	Concepto
80 o más puntos	Favorable
Menos de 80 puntos	Desfavorable

Se verificaron 15 formatos rendidos por SIA observa y SIA contraloría, los cuales fueron rendidos en oportunidad, suficiencia y calidad, en referencia a la contratación rendida a través del aplicativo SIA observa se evidencia 121 contratos por valor de \$1.906.955.615 y la contratación en la fuente fue de 179 contratos por valor de \$2.528.952.792, presentando una diferencia de 58 contratos por valor de \$621.997.177.

Cuadro No. 23

ENTE CONTROL	SUJETO VIGILADO	CONTEO	VALOR
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	121	1.906.955.615

Fuente: SIA observa

9 EVALUACIÓN A PUNTOS DE CONTROL

Se llevó a cabo la evaluación a los puntos de control, Concejo Municipal, Personería y Curaduría en los Macroprocesos Gestión Presupuestal y Financiera, como en la contratación que se suscribió en la vigencia 2022, resultados que se encuentran contenidos en cada uno de los procesos que se enmarcan en esta auditoría.

En la vigencia 2022 se evidenció que el Concejo, Personería y Curaduría Municipal gestionó presupuesto y el cumplimiento de la Ley 617 de 2000, como a continuación se refleja:

- **CONCEJO**

En la vigencia 2022, se evidenció que el Concejo municipal ejecutó el presupuesto en cumplimiento a la Ley 617 de 2000.

En el siguiente cuadro se evidencian los ingresos ejecutados por la corporación:

Cuadro No. 24

CONCEJO MUNICIPAL CALIMA EL DARIEN						
CONCEJO MUNICIPAL PRESUPUESTO DE INGRESO CIFRAS EN PESOS						
2021				2022		
Nombre	inicial	Presupuesto definitivo	Transferencia	inicial	Presupuesto definitivo	Transferencia
TOTAL, INGRESOS	245.236.324,00	328.772.759,00	319.352.034,00	325.273.128,00	333.773.128,00	248.663.039,00
TRANSFERENCIA	245.236.324,00	328.772.759,00	319.352.034,00	325.273.128,00	333.773.128,00	248.663.039,00
Fuente: Concejo Municipal. Presupuesto Municipio CALIMA EL DARIEN 2022						

En el cuadro anterior, se evidencia que el Concejo Municipal recibió transferencia por \$248.663.039 ejecutándose el 100% equivalente a \$248.663.039, la transferencia registró un decrecimiento del 23 % en el 2022 con relación al 2021, es importante manifestar que todo el manejo del registro presupuestal está en cabeza de ente territorial.

En el siguiente cuadro se evidencia los egresos ejecutados por la corporación:

Cuadro No. 25

CONCEJO MUNICIPAL CALIMA EL DARIEN					
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2022 CIFRAS EN PESOS					
nombre	inicial	Presupuesto definitivo	compromisos (registro presupuestal)	obligación(orden)	Pagos
TOTAL, GASTOS	325.273.128	333.773.128	248.663.039	248.663.039	248.663.039
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	279.298.101	287.284.759	204.780.039	204.780.039	204.780.039
GASTOS GENERALES	45.975.027	46.488.369	43.883.000	43.883.000	43.883.000
Fuente: Concejo Municipal. Presupuesto Municipio CALIMA EL DARIEN 2022					

Como conclusión el Concejo del municipio de Calima El Darién, ejecutó sus recursos en concordancia con el presupuesto asignado y aprobado.

De otra parte, el municipio de Calima El Darién, por ser de Sexta categoría dispuso de 11 curules de concejales, para lo cual le fue permitido hasta 90 sesiones entre ordinaria y extraordinarias.

Durante la vigencia 2022, el Concejo llevó a cabo 70 sesiones ordinarias, y extraordinarias 90, como se evidencia en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 26

CONCEJO MUNICIPAL CALIMA EL DARIEN VIGENCIA 2022	VIGENCIA 2022
Número de concejales	11
N° de sesiones permitidas según la Ley	90
Cantidad de Sesiones realizadas (ordinarias)	70
Cantidad de Sesiones realizadas (extraordinarias)	20
Monto máximo permitido	333.773.128
Honorarios concejales	147.873.087
Gastos de Funcionamiento Concejo	100.789.952
Total, Transferencia realizada	248.663.039
Diferencia	85.110.089
Nivel de cumplimiento (cumple /no cumple)	74%

Fuente: Concejo Municipal. Presupuesto Municipio CALIMA EL DARIEN 2022

Del cuadro anterior, se observa que monto máximo permitido por \$333.773.128, para la vigencia auditada se efectuaron transferencias por \$248.663.039 ejecutándose el 74%, distribuidos en Honorarios del monto máximo legal permitido por \$147.873.087 equivalente a 44% del permitido y gastos del funcionamiento por \$100.789.952 correspondiente al 30 %, cumpliendo con lo establecido en la Ley.

• PERSONERÍA

El presupuesto de la personería fue aforado en \$150.000.000 de los cuales recibió transferencia por la misma cuantía, cómo se evidencia en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 27

MUNICIPIO CALIMA EL DARIEN VALLE						
PERSONERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE INGRESO CIFRAS EN PESOS						
2021				2022		
nombre	inicial	Presupuesto definitivo	Transferencia	inicial	Presupuesto definitivo	Transferencia
TOTAL, INGRESOS	131.670.450,00	136.278.900,00	136.278.900,00	141.048.600,00	150.000.000,00	150.000.000,00
Fuente: PERSONERÍA Municipal. Presupuesto Municipio CALIMA EL DARIEN VALLE 2022						

Como se indica en el cuadro anterior la personería recibió por concepto de transferencia la suma de \$150.000.000 en aplicación de la Ley 617 de 2000, recursos, que fueron aforados como presupuesto definitivo y ejecutados durante la vigencia en estudio, por otra parte, es importante manifestar que todo el manejo del registro presupuestal está en cabeza de ente territorial.

Gastos

Cuadro No. 28

PERSONERÍA MUNICIPIO CALIMA EL DARIEN VALLE					
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2022 CIFRAS EN PESOS					
nombre	inicial	Presupuesto definitivo	compromisos	obligación	Pagos
TOTAL, GASTOS	141.048.599,00	150.000.000	149.711.869	149.711.869	149.712.576
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	136.048.599,00	146.866.685	146.624.248	146.624.248	146.624.955
SERVICIOS PERSONALES	136.048.599,00	146.866.685	146.624.248	146.624.248	146.624.955
GASTOS GENERALES	5.000.000,00	3.135.000	3.087.621	3.087.621	3.087.621
Fuente: PERSONERÍA Municipal. Presupuesto Municipio CALIMA EL DARIEN VALLE 2022					

En el cuadro anterior se evidencia que la Personería Municipal registró un presupuesto definitivo por \$150.000.000 ejecutándose \$149.712.576.

Evaluado el presupuesto se concluye que los gastos registrados y que afectaron el presupuesto son coherentes con las partidas afectadas.

Cuadro No. 29

PERSONERÍA MUNICIPAL CALIMA EL DARIEN VALLE A VIGENCIA 2022	
DETALLE	VALOR
Valor salario mínimo año 2022	\$ 1.000.000
Aportes máximos en SMMLV o en % ICLD	15%
Monto Máximo permitido 150/SMMLV	\$ 150.000.000
Transferencia realizada	\$ 149.712.576
Diferencia	\$ 287.424
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (CUMPLE / NO CUMPLE)	0,19
categoría	6
Fuente: Presupuesto Personería Municipio CALIMA EL DARIEN VALLE 2022	

En la vigencia auditada el presupuesto máximo permitido a la Personería, de los ingresos corrientes de libre destinación, cuyo monto permitido ascendió a \$150.000.000 y la transferencia realizada por la administración municipal a la Personería fue de \$149.712.576, dando cumplimiento a los topes establecidos por la Ley 617 de 2000.

- **CURADURIA**

En el municipio de Calima El Darién no opera Curaduría urbana.

Resguardo Indígena Embera Drua

Fueron entregados recursos por valor de \$2.700.000 como servicio de transporte a la ciudad de Bogotá a través de la resolución 415 de 2022 del 10 de agosto 2022. Enmarcado dentro del plan del Desarrollo del municipio.

10 ATENCIÓN DENUNCIAS CIUDADANAS

Durante el proceso de planeación de la auditoria se allegaron las siguientes Denuncias DC -60-2023, DC 66- 2023, DC-67-2023, DC-68-2023, las primeras se resolvieron dentro del proceso auditor, se devolvió la DC-68-2023 a participación ciudadana por no ser de competencia de la Contraloria Departamental del Valle.

En materia de la DC- 66-2023, se evidencian hechos con presunta incidencia disciplinaria, es menester indicar que no es posible establecer la destinación de recursos públicos ejecutados dentro de una campaña electoral, por lo tanto, se copiará la denuncia al Ente de control encargado, para los fines que la ley disponga, al no ser resuelta en la ejecución de la auditoria, por lo tanto, se hará traslado a Participación Ciudadana.

El resultado de las denuncias revisadas en el proceso auditor, es el siguiente:

Denuncia Ciudadana No. 60 de 2023

Imagen No. 1

<p>DC-60-2023</p>	<p>28/08/2023</p>	<p>El 20 de agosto de 2023, se recibió la denuncia de la ciudadanía, en la que se alega que el Alcalde Municipal velar por el adecuado uso de los espacios públicos, el municipio de Calima El Darién, cuenta con los predios de interés turístico denominados entradas No. 4, No. 5 y No. 6 sombreados con color amarillo en la imagen adjunta con números prediales 76126000000018007000, 76126000000018006000 y 76126000000018005000 cuyas áreas aproximadamente suman 354.800 M2 los cuales vienen siendo mal manejados por la presente administración, ya que se han presentado entrega sin comodatos y expedición de permisos temporales sin fecha de caducidad, generando deterioro al medio ambiente y obviando el respectivo trámite ante el concejo municipal, estas situaciones han causado un grave daño estético, daño ambiental y ocupaciones irregulares del principal activo turístico del Municipio que por su tamaño y ubicación estratégica tiene un valor comercial cercano a los Cincuenta Mil Millones de Pesos (\$50.000.000.000), situación que puede conllevar a un gravísimo detrimento patrimonial.</p> <p>situación anteriormente expuesta se articula con otra situación más grave constituida por el manejo irregular y sesgado de algunos de los permisos que se expiden para ocupar este bien público</p> <p>presuntamente gestionados de forma amañada por los candidatos al concejo por el partido verde a las elecciones del próximo 29 de octubre, señores YULIAN ADOLFO CASTAÑO VILADA identificado con cédula de ciudadanía No. 1.112.880.445, JOSE MAURICIO ACEVEDO identificado con cédula de ciudadanía No. 6.198.905, EVER ADOLFO MOLINA CAMACHO identificado con cédula de ciudadanía No. 80.101.616 Y ERICA YANETH ORDOÑEZ SOTO identificada con cédula de ciudadanía No. 52.966.151 quienes están manejando asociaciones con las que hacen proselitismo, realizan cobros irregulares y manipulan posibles electores con la posibilidad de contar con permisos de trabajo dentro de dichos bienes públicos.</p>
-------------------	-------------------	---

Pudo establecerse mediante la solicitud y expedición gratuita de los certificados de tradición, que mediante donación la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., se entregaron los predios con matrícula inmobiliaria Nos. 373- 122978; 373- 122979; 373- 122980; 373- 122981; 373- 122982 y 373- 67286, cesiones que se realizaron en el año 2016 y 2017, mediante escritura pública No. 2715 del 29 de diciembre de 2015 de la Notaría única del círculo de Yumbo, se entregaron al municipio los lotes correspondientes a las entradas 4, 5 y 6 al lago artificial del embalse, que es propiedad de Celsia. Todo ello con el fin de crear el Parque Lineal del Municipio, con fines de desarrollo y atracción turísticos. Este proyecto, aunque inicio quedó sin

terminar, pero quedaron construcciones que se abandonaron y no tuvieron una vigilancia desde la administración municipal.

Hechas las indagaciones con distintos actores, que incluyen a concejales del municipio, el Inspector de Policía y algunos particulares, se pudo establecer que, durante más de 6 años, se ha venido presentando el uso del espacio público (entradas 4, 5 y 6) por parte de privados, quienes no le generan ningún tipo de ingresos al municipio por cuenta de tales manejos en relación con la zona aledaña al Embalse.

Mediante solicitudes realizadas al municipio en diferentes oportunidades, se requirieron los registros actualizados de los predios objeto de ocupación, de la misma manera, se solicitaron los contratos, actos administrativos, convenios o cualquier otro tipo de documento que sustentara la legalidad con la cual la administración municipal, de los últimos 6 años, ha venido manejando las ocupaciones al espacio público, sin que a la terminación de la ejecución de la auditoría, fueran entregados tales evidencias idóneas de gestión.

Por otra parte, se solicitó al Concejo municipal, la documentación pertinente en torno a los acuerdos o gestiones que desde este cuerpo colegiado se han realizado frente al tema de la invasión del espacio público, el continuo y notorio uso del mismo, así como las nuevas construcciones y edificaciones que se están levantando. Como resultado se recaudaron evidencias de negocios suscritos entre particulares para la explotación económica del acceso a las entradas 4 y 5, en donde personas jurídicas, toman la vocería para hacer distribución de acciones entre ellas y hacer los cobros pertinentes al acceso al sitio Público, como lo son las zonas de acceso al embalse de la hidroeléctrica, bajo el parámetro de ser parqueaderos.

En los documentos que más adelante se recaudaron, se hace evidente que se cobraron unas tarifas ciertas de las cuales dispusieron tres personas jurídicas, quienes validan sus actuaciones y la explotación económica del espacio público ante la inoperancia de la gestión administrativa.

Como consta en el siguiente documento se realizaron solicitudes para tener audiencia en el Concejo, ya no solo para hablar de la explotación de las entradas 4 y 5, sino también la entrada 6:

Imagen No. 2



A continuación, se evidencia la publicidad de los cobros que realizaron durante la vigencia 2022, las tres personas jurídicas en comento:

Imagen No. 3



Se hicieron entrevistas con el presidente del Concejo, quien manifestó la negativa de esta colegiatura en aprobar el acuerdo propuesto por la administración municipal, en tanto todas estas gestiones políticas se realizan, se siguen usufructuando las casetas dentro de la obra denominada PARQUE LINEAL, construcciones que son utilizadas por particulares con la anuencia de la administración.

De otro lado, en visita hecha a las entradas 4, 5 y 6, se observan una serie de empresas de personas naturales, restaurantes, una escuela, entre otros, que no pagan ningún tipo de emolumento al municipio, algunos de los cuales están alegando ser poseedores de los bienes inmuebles.

Aunado a ello, se aprecia nueva construcción que se evidencia avanzada, en donde también otro particular se encuentra realizando adecuaciones en el predio del municipio, sin que a la fecha se hayan expedido los actos administrativos sancionatorios de la invasión del espacio público. Fuera del término de la auditoría se presentaron soportes de correos enviados desde Planeación a la Inspección Municipal, consecuentemente el Inspector adelantó el trámite correspondiente y concluyó que se adelantaba obra sin la correspondiente licencia.

En las fotos del expediente policivo, se observa el inicio de una construcción y nadie realizando labores. El presunto responsable en comunicación escrita del mes de febrero de 2023, señaló no ser el propietario de la obra sino un tercero, quien fue requerido en el mes de abril y a quien se le inició un proceso verbal abreviado.

Seguidamente, se observa que se realizó audiencia pública a la que se presenta el investigado quien señala que las adecuaciones que estaba haciendo eran permitidas

por el alcalde municipal, que se habían solicitado y radicado otras licencias para desarrollar otras construcciones que pensaba realizar.

Es necesario puntualizar en este punto, que se adjuntó a mano alzada solicitud sin ningún tipo de soporte radicada por esta persona investigada de invasión calendada en el mes de octubre de 2023, cuando la obra ya está terminada.

Siendo la actuación referida por el Inspector de Policía, la única adelantada por la administración, en aras de impedir el usufructo de los bienes del municipio por parte de la administración municipal, en tanto se siguen presentando proyectos de acuerdo sin que se reglen desde la alta gerencia, los lineamientos y cobros estandarizados para tal fin.

Imagen No. 4



Imagen No. 5



Lo expuesto por el denunciante, con relación a las actuaciones de los candidatos y demás personas, no es del resorte de la competencia de esta territorial por ende sobre la materia, no se realiza pronunciamiento alguno.

Conforme los hechos que ya se pusieron de presente, se concluye que hay lugar a una observación que será parte del cuerpo del informe.

2.- DC No. 67 de 2023

Imagen No. 6

DC	Fecha Recibido de la DC	ALCANCE	SUJETO
DC-67-2023	05/09/2023	<p>"Yo Luis Horacio Ceballos, quien actúo como concejal en ejercicio del Municipio de Calima el Darien, presento denuncia en contra de la administración municipal de Calima el Darien, mas concretamente contra el señor alcalde municipal Martin Alfonso Mejia Londoño por los siguientes hechos:</p> <p>que para la secciones ordinarias de concejo del mes de febrero del 2023, el señor alcalde presento ante la corporación dos proyectos de acuerdo, identificados con los numeros 01 y 02, el acuerdo 01 por medio del cual se establece el subsidio municipal de vivienda, su política y se autoriza al alcalde municipal para otorgarlo, el acuerdo 02 mediante el cual se faculta al señor alcalde de Calima Darien para trasferir a favor de un patrimonio autonomo fideicomiso, los bienes inmuebles denominados "la selva" identificado con el numero de matricula inmobiliaria # 373-17099 y el bin inmueble denominado "ciudadela german meja 2" identificado con el numero de matricula inmobiliaria # 373-6142, acuerdos estos que se fueron declarados con nulidad por parte del Contencioso administrativo del valle, esto en razon a que se fueron presentados a diferentes comisiones, menos a la comision de</p>	CALIMA

Imagen No. 7

<p>vivienda que es la cual le corresponde el estudio y aprobación en primer debate.</p> <p>es así que nuevamente el señor alcalde revivie los proyectos antes referidos mediante dos nuevos proyectos así:</p> <p>Proyecto 017 con radicación 10 de agosto de 2023, por medio del cual solicita facultades protempore en virtud de promover el desarrollo urbano y rural facilitando el acceso a las personas menos favorecidas y vulnerables a proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario entre otros, dentro de esta jurisdicción, con la estructuración legal necesaria por parte de la secretaria de planeación municipal, sobre los predios denominados "la selva" y ciudadela german meja 2".</p> <p>proyecto 018, radicado el 10 de agosto, por medio del cual se establece el subsidio municipal de vivienda, su política y se autoriza al alcalde municipal para otorgarlo.</p> <p>Estos proyectos fueron presentados a una comisión accidental de vivienda conformada por los concejales Martha Benavides, Miguel Angen Benavides y Horacio Ceballos, que se es pertinente manifestar que mi participación en dicha comisión no la acepte por que considere que esta carece de toda legalidad para ser conformada, es así que en mi criterio dicha comisión es ilegal, dado que la comisión permanente de vivienda nunca se ha sido eliminada o suprimida estando esta en vigente y en operatividad, que dicha comisión se conforma por los concejales Celina Díaz, Alexandra Guirado y Horacio Ceballos, es de precisar que la concejal alexandra Guirado se declara impedida según sus manifestación en razón a la ética que le atañe por cuanto es candidata a la alcaldía y que dentro de su programa de vivienda tiene como bandera el tema de programas de vivienda.</p> <p>esta comisión de vivienda accidental se reunió el día 21 de agosto de 2023, para realizar el estudio en primer debate de los dos proyectos referidos 017 y 018, manifestando lo siguiente: en la fecha nos reunimos los abajo firmantes miembros de la comisión accidental de vivienda para estudiar en primer debate el proyecto de acuerdo 017 del 2023, teniendo en cuenta que cumple con la normatividad vigente.</p>	<p>a el Escritorio.</p> <p>que yo horacio ceballos dejo precedente que lo manifestado por la comision accidental de vivienda el pasado 21 de agosto del 2023 incurre en una falicidad del documentos, dadop que en dicho proyecto nunca se le fueron anexos los siguientes documentos requeridos para efectuar un estudio aterrizado y poder determinar la viabilidad del proyecto, dichos documentos son:</p> <p>Sustracción de area Ley 2 de 1959.</p> <p>No cuenta con los permisos de viabilidad por parte de la CVC</p> <p>Este predio se encuentra en la Verda San Jose parte alta identificada como zona amortiguadora del paramo del duenne y la cervatana, lo que obliga a que se tenga que realizar la sustracción de area.</p> <p>No cuenta con un estudio técnico de viabilidad para el suministro de servicios públicos tales como agua y alcantarillado.</p> <p>Este predio según el PBOT vigente, registra este predio como zona rural.</p> <p>Con relación al estudio realizado por la comision accidental del proyecto identificado como 018 radicado el 10 de agosto del 2023, se puede evidenciar que dicha comision nunca solicito los estudios de viabilidad financiera que demostraran el mecanismo o la forma como se apalcarian los subsidios a entregar a la comunidad."</p>
--	---

Sobre los hechos denunciados, se hicieron las siguientes indagaciones:

- 1.- Entrevista con el solicitante
- 2.- Entrevista con el presidente actual del Concejo Municipal de Calima El Darién

- 3.- Entrevista con el alcalde municipal
- 4.- Solicitudes y requerimientos de documentos para analizar el alcance de las actuaciones del municipio
- 5.- Visita al sitio en donde se piensa adelantar el proyecto de vivienda
- 6.- Visita a la Planta de tratamiento de Aguas del municipio

Producto del recaudo de la gestión realizada, se pudo evidenciar lo siguiente:

El proyecto presentado por el municipio, aún a la fecha de la auditoría tiene serias falencias en materia de los soportes requeridos por ley para hacer viable un proyecto de vivienda (Viabilidad de servicio público de agua y de tratamiento de aguas servidas)

Efectivamente, el predio no ha sido presentado ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), para que sea sustraído de la zona de reserva, acorde a lo dispuesto por la Ley 2 de 1959.

El predio se encuentra en zona rural del municipio, pues a la fecha no ha sido modificado el EOT, y el proyecto de EOT sobre el cual se edificaron las actuaciones, se encuentra desactualizado.

Con las características que presenta el proyecto, implicaría un desabastecimiento de los servicios públicos básicos para los presuntos beneficiarios, como quiera que la estructura municipal a la fecha, no hace viable dar mayor capacidad de servicio a las más de 300 soluciones de vivienda propuestas. Este aspecto será analizado en detalle por el componente ambiental.

Se toma en cuenta lo dispuesto en Sentencia de segunda Instancia, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, mediante radicación No. 76111-33-33-002-2022-00022-01, Magistrada Ponente: PATRICIA DEL PILAR FEUILLET PALOMARES; MEDIO DE CONTROL: PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS DEMANDANTE: Procuraduría 21 Judicial II Ambiental y Agraria del Valle del Cauca, que en algunas de sus consideraciones señala:

" 4.7. Solución al séptimo problema jurídico 162.

La sentencia de primera instancia sí debe modificarse para disponer que, tratándose de la zona rural del municipio de Calima, la expedición de nuevas licencias urbanísticas también debe quedar supeditada a que previamente se haya logrado la sustracción de la zona de reserva forestal del Pacífico. 163. Si bien en el expediente no quedó probado el desarrollo habitacional en la zona de reserva forestal del Pacífico sin previa sustracción del área, lo cierto es que en el curso del proceso sí se demostró que el municipio de Calima El Darién otorgó licencia urbanística para que se adelantara el proyecto «Santura Ecoreserva Mística», sin que el área del proyecto hubiese sido sustraída por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (la sustracción se efectuó en el curso del proceso). 164. La zona de reserva forestal del Pacífico fue establecida por la Ley 2 de 1959, en los siguientes términos: ARTICULO 1°. Para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, se establecen con carácter de "Zonas Forestales Protectoras" y "bosques de Interés General", según la clasificación de que trata el Decreto legislativo número 2278 de 1953, las siguientes zonas de reserva forestal, comprendidas dentro de los límites que para cada

bosque nacional se fijan a continuación: a) Zona de Reserva Forestal del Pacífico, comprendida dentro de los siguientes límites generales: Por el Sur la línea de frontera con la república del Ecuador; por el Occidente, el Océano Pacífico y la línea divisoria con la República de Panamá; por el Norte, el Océano Atlántico (Golfo de Urabá); y por el Oriente, una línea que, arrancando 15 kilómetros al Este del divorcio de aguas de la Cordillera Occidental, en los límites con el Ecuador, sigue hasta el Volcán de Chiles, el Nevado de Cumbal y la quebrada de San Pedro, y de allí, a través del río Patía, hasta Chita, continuando 15 kilómetros al Este, por el divorcio de aguas del Cerro Rivas al Cerro de Munchique y siguiendo la cima de la Cordillera Occidental hasta el cerro de Caramanta, de allí al Cerro Paramillo y luego al Cerro Murucucú, y de allí una línea recta, con rumbo 45 grados Noreste, hasta el Océano Atlántico; 165. De acuerdo con el visor gráfico que puede consultarse en la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible⁵⁷, toda el área rural del municipio de Calima El Darién⁵⁸ hace parte de zona reserva forestal del Pacífico. 166. Ante esa situación, y dado el carácter preventivo del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos⁵⁹, es procedente, con miras a evitar la afectación de la zona de reserva forestal del Pacífico, disponer que la expedición de nuevas licencias en la zona rural del municipio de Calima también quede supeditada a que previamente se haya logrado la sustracción por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible...”, es decir nos señala sin lugar a dudas una prohibición en orden a realizar actuaciones frente a la CVC (determinantes ambientales) antes de realizar cualquier tipo de urbanización, construcción o licenciamiento en la zona rural del municipio, por tratarse de una reserva natural. Posteriormente, en la parte resolutive, ordena:

“• Que, al momento de realizar las acciones administrativas, de policía y/o judiciales necesarias para la recuperación de la franja protectora de las distintas fuentes hídricas, el municipio de Calima El Darién y la CVC deben salvaguardar los derechos adquiridos de las personas que construyeron con licencia urbanística y procurar la reubicación de la población vulnerable, siempre y cuando se trata de personas con deficiencia económica que se hayan asentado ilegalmente en el lugar como única alternativa para obtener una solución de vivienda, deberá procurarse su reubicación.

• Que la expedición de nuevas licencias en la zona rural del municipio de Calima también queda supeditada a que previamente se haya logrado la sustracción del área como zona de reserva forestal del Pacífico, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

• Que el municipio de Calima El Darién debe realizar las gestiones necesarias para que en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios ubicados en zona rural del municipio de Calima quede inscrita la afectación como zona de reserva forestal del Pacífico.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR los numerales tercero y cuarto de la sentencia del 6 de febrero de 2023, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga, que quedarán así:

TERCERO. - Ordenar al municipio de Calima El Darién que, dentro del término de un (01) año contado a partir de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso, actualice, o de ser necesario, reconstruya la base de datos de licencias urbanísticas expedidas en dicho ente territorial, y las remita a CVC para lo de su cargo. Así mismo, que, en lo sucesivo, la expedición de las licencias urbanísticas se supedite al cumplimiento de la totalidad de requisitos establecidos en la normativa correspondiente, en especial lo relativo a la disponibilidad de servicios públicos, incluido el de alcantarillado o similar, así como a la presentación de los respectivos permisos expedidos por la autoridad ambiental que corresponda, en los casos en que así se requiera. Adicionalmente, la expedición de nuevas licencias en la zona rural del municipio de Calima quedará supeditada a que previamente se haya logrado la sustracción del área como zona de reserva forestal del Pacífico, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para el efecto, el municipio de Calima El Darién debe realizar las gestiones necesarias para que en los folios de matrícula inmobiliaria de los

predios ubicados en zona rural del municipio de Calima quede inscrita la afectación como zona de reserva forestal del Pacífico.

CUARTO. - Ordenar al municipio de Calima y a la CVC que, dentro del término de dos (02) años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso, determinen qué construcciones se realizaron en el municipio de Calima sin la correspondiente licencia urbanística, así como cuáles se realizaron dentro de la franja forestal protectora de las diferentes fuentes hídricas, y en el marco de sus competencias, realicen las acciones administrativas, de policía y/o judiciales necesarias para la recuperación de la franja protectora de las distintas fuentes hídricas del municipio de Calima El Darién, así como para que cese la vulneración evidenciada en lo que respecta a las construcciones sin licencias. En todo caso, al momento de realizar las acciones administrativas, de policía y/o judiciales necesarias para la recuperación de la franja protectora de las distintas fuentes hídricas, el municipio de Calima El Darién y la CVC deben salvaguardar los derechos adquiridos de las personas que construyeron con licencia urbanística y procurar la reubicación de la población vulnerable, siempre y cuando se trata de personas con deficiencia económica que se hayan asentado ilegalmente en el lugar como única alternativa para obtener una solución de vivienda, deberá procurarse su reubicación...” Esta sentencia fue proferida con fecha 28 de septiembre de 2023.

De otro lado, también se tuvieron en cuenta los determinantes ambientales señalados por la CVC en su Resolución 0100 No.500 0574 de septiembre de 2015, mismos que no han sido modificados y tampoco tenidos en cuenta por la autoridad municipal, respecto de lo que es un Determinante Ambiental, señala la norma referida:

“...Desde otra perspectiva, la Determinante Ambiental “Corresponde a aquellos criterios de jerarquía superior que deben acoger los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal y los instrumentos que lo desarrollan; es decir, que obligan o condicionan y sirven para resolver conflictos que se presentan en el diseño y ejecución de toda clase de proyectos y acciones relacionadas con el ordenamiento del territorio (Massiris, 2000).

Por lo anteriormente expuesto, las Determinantes Ambientales para el Ordenamiento Territorial Municipal son normas de superior jerarquía, y por lo tanto, de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO por parte de los municipios.

Las características principales de los Determinantes Ambientales, se resumen en los siguientes aspectos:

- Son de obligatorio cumplimiento. No constituyen materia de concertación para la formulación, revisión o ajuste de los POT*
- Son taxativas, en los términos del artículo 10 de la Ley 388 de 1997*
- Son definidas por las entidades que conforman el SINA (MADS, CAR, PNN, departamentos y municipios).*
- Constituyen norma superior de jerarquía para el ordenamiento territorial...”*

Estos lineamientos técnicos podrían ser objeto de revisión, ajuste o actualización para el ordenamiento territorial, por parte de la CVC, acorde a los lineamientos determinados en la norma en comento, pero a la fecha no han tenido modificación. Aunque el tema tratado en la sentencia no era el asunto de la denuncia, su parte resolutoria, sí que tiene injerencia con ella, como quiera que exige del municipio previamente a la expedición de licencias, el *cumplimiento pleno de los requisitos de ley*, que, en el caso de la denuncia, *No Se Cumplían*, pues al momento de la presentación de la solución de vivienda, no contaba con el visto bueno de la C.V.C.

Ello por cuanto, a la fecha el EOT no se encuentra modificado, y dentro del acuerdo vigente, la zona correspondiente a donde pensaba realizarse la Ciudadela German Mejía II, es un predio rural, no obstante, la administración insista en señalar que será modificado, no era una realidad al momento de la presentación de la solución de vivienda al Concejo Municipal, por tanto, se vulneran los parámetros legales con la actuación de la alta dirección del municipio.

De otro lado, no se han hecho los ajustes en materia de infraestructura en la Planta de tratamiento necesarios, para dar satisfacción a las necesidades de este nuevo núcleo de ciudadanos, a quienes se les crean unas expectativas sin sustento jurídico suficiente, ante circunstancias futuras que no pueden preverse, como quiera que no se hicieron los trámites pertinentes antes de presentar al público la solución de vivienda.

Se observó por la administración que no se había realizado la constitución de ningún fideicomiso, y se conoce que a la fecha no se han suscrito escrituras públicas en favor de particulares, adjudicando predios.

En materia de los subsidios no se conoce al momento de la auditoría de la entrega material, si las circunstancias no obedecen a las disposiciones que rijan el tema en acuerdo municipal, será materia de revisión en la próxima auditoría.

Apoyo Técnico Medioambiente

➤ Predio La Selva y German Mejía 2

La Resolución 1926 del 30 de diciembre del 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adoptó la zonificación y el ordenamiento de la Reserva Forestal del Pacífico, establecida en la Ley 2ª de 1959, la cual posee una extensión aproximada de 8.069.756,75 hectáreas. En ella se estableció que el departamento del Valle del Cauca, está en la zona tipo A; esta área abarca una extensión aproximada de 399.156,65 hectáreas, correspondientes al 99,98% del área de la Reserva Forestal del Pacífico en el departamento. Dentro de esta área se distribuye en parte del suelo rural del municipio de Calima El Darién.

El que sea Zona tipo A: garantiza el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos necesarios para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos, relacionados principalmente con la regulación hídrica y climática; la asimilación de contaminantes del aire y del agua; la formación y protección del suelo; la protección de paisajes singulares y de patrimonio cultural; y el soporte a la diversidad biológica.

Con respecto al predio la Selva, según el EOT Vigente (Acuerdo 050 de 1999), el uso de suelo es Rural. por lo tanto, para llevar a cabo un desarrollo urbanístico que propendan el interés social en parte de estas zonas que cobijan toda una reserva forestal, la administración municipal tenía que surtir el trámite de sustracción de área ante el Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, dando cumplimiento a la

Resolución 110 de 2022: *“Por la cual se establecen las actividades, requisitos y procedimiento para la sustracción de área de las reservas forestales nacionales y regionales para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública e interés social”*. actual, Dentro del presentación del acuerdo, no se evidenció el trámite que realizó la administración ante el Ministerio (diligenciamiento de Formato Único de sustracción, presentación del estudio técnico y el modelo de almacenamiento geográfico con base en los términos de referencia que establece el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)

Debería existir un plan de manejo sólido que establezca cómo se gestionará y se supervisará la sustracción de área y cómo se garantizará la restauración y la conservación continua de la reserva.

Con respecto a la disponibilidad de los servicios públicos, de acuerdo a los resultados fisicoquímicos y microbiológicos de las muestras de agua tomadas por la Unidad Ejecutora de Saneamiento Básico del Valle del Cauca UES Valle, el Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) en estos dos sectores es de “nivel de riesgo Medio”, es decir, agua no apta para el consumo humano.

A través del contrato 013 de junio de 2022, el municipio realizó el Contrato cuyo objeto es “Construcción y Suministro de Agua Potable Mediante Tanque para el Tratamiento Del Agua Para La Zona Alta; con este proyecto se pretende abastecer a los usuarios de la Ciudadela German Mejía 2 y La Selva.

En la visita fiscal que se realizó por parte del equipo auditor se observó un sistema de tratamiento de agua, el cual cuenta con un tanque de pretratamiento, tres cajas de mezcla, dos sedimentadores, tres tanques de dosificación y dos filtros. De igual manera se evidenció que presenta problemas de diseño y/o construcción, ya que la planta está diseñada para tratar 15 ls, pero está tratada solo 10 ls. Actualmente el operador Emcalima está realizando ajuste para llegar al caudal de diseño y cumplir con los estándares de calidad del agua. El sistema no cuenta con tanque de almacenamiento instalado:

Imagen No. 8



Adicionalmente el sector de la Selva no cuenta con redes de distribución de acueducto y alcantarillado y no se anexaron los respectivos diseños

En conclusión para los planes de vivienda se evidenció que el municipio no hallego y el concejo no exigió para el análisis de del proyecto documentación esencial como

- ✓ Planos detallados que muestren la ubicación de los lotes, calles, servicios públicos, áreas comunes , etc
- ✓ Un estudio que evalúe y documente el impacto del proyecto en el medio ambiente y proponga medidas de mitigación.
- ✓ El Uso de Suelo.
- ✓ Presupuesto del Proyecto, fuentes de financiación

Los cuales son requisitos minimos para aprobar el acuerdo.

Por las circunstancias expuestas, se colige la existencia de una observación que hará parte del cuerpo del informe.

11 RELACIÓN DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron treinta y seis (36) hallazgos administrativos, de las cuales veintiséis (26) tienen presunta incidencia disciplinaria, cuatro (04) con presunta incidencia penal, diez (10) con presunta incidencia fiscal por valor Mil trescientos ochenta y seis millones setecientos cincuenta y dos mil ochocientos sesenta pesos Mda.Cte. (\$1.386.752.860.00) y dos (02) con incidencia sancionatoria, dos (02) beneficios de control fiscal cuantitativo con un valor de \$5.006.299.692 y un (01) beneficio cualitativo.

MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA

- 1. Hallazgo administrativo, por debilidades en el proceso conciliatorio entre los procesos (contabilidad, tesorería Vs., procesos involucrados con el área contable)**

Condición (situación detectada de incumplimiento)

Se evidenció que la administración municipal no cuenta con el proceso conciliatorio entre las áreas que tienen que ver con las operaciones contables que conforman y hacen parte de los resultados de los estados financieros.

Fuente de criterio y criterio

Deficiencias en la aplicación de la Resolución 119 de abril 27 de 2006 numerales 2 y 2.1.6 de la Contaduría General de la Nación procesos conciliatorios.

Causa

Debilidades en los controles y seguimientos, por parte de los procesos responsables.

Efecto

Situación que afecta la autenticidad e integridad y oportunidad de la información contable pública, creando incertidumbre en los saldos de los estados financieros.

2. Hallazgo administrativo, presunta incidencia disciplinaria por la ausencia de la integralidad del software financiero.

Condición (situación detectada de incumplimiento)

El proceso financiero, adolece de un software financiero, lo que actualmente realiza es la consolidación de la información de las áreas de contabilidad tesorería y presupuesto, en el sistema SINAP versión 5, si bien es cierto, la administración municipal, viene haciendo uso de lo que a bien le denomina un software financiero, desde antes de la aplicación al nuevo marco normativo del proceso de convergencia de los estados financieros a Norma Internacionales de Contabilidad, para el Sector Público (NICSP), entidades de gobierno, evidenciándose que este no es funcional, encontrándose totalmente obsoleto, no cuenta con los aplicativos e interface o en su defecto en línea con las diferentes áreas que generan la información, es decir, que no se encuentra integrado, evidenciándose que en la actualidad muchas de las actividades que se realizan en la entidad se lleva a cabo de forma manual en formatos de Excel, tornándose dispendiosa la labor que realiza el área contable, en razón, al mismo sistema de información que no permite producir reportes necesarios que ayuden a realizar el origen de los hechos económicos importantes tanto cuantitativos como cualitativos (revelaciones), no lista el balance general a nivel de tercero, lo que hizo imposible hacer seguimiento a la propiedad planta y equipo creando incertidumbre este registro.

Fuente de criterio y criterio

Resolución No. 119 de 2006, procedimientos para la sostenibilidad del sistema de contabilidad, eficiencia en los sistemas de información contables y financieros 2.2.2., parágrafo 2.

Causa

Debilidades en los controles, seguimiento y monitoreo implementados, que no ha permitido advertir el desarrollo de un software con todas las particularidades que en

su momento la misma reglamentación para ello exigió para los reportes de información al proceso contable y financiero, por parte de los procesos que producen la información.

Efecto

Las cifras del Estados de la Situación Financiera, para los períodos futuros, podrían generar riesgos, conllevando a la entidad verse incurso en el principio de causación o devengo.

Los hechos descritos configuran un Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, en virtud a lo dispuesto en la Ley 734 de 2002, el numeral 1 de los artículos 34 y 35 y la Ley 1952 de 2019, numeral 1 de los artículos 38 y 39.

3. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal - Incumplimiento del pago en las fechas estipuladas en la banca financiera de los créditos adquiridos

Condición (situación detectada de incumplimiento)

Se evidenció en la deuda pública que tiene la administración municipal con la banca financiera, el pago de intereses por mora, por \$573.794.00, por el incumplimiento de los pagos correspondiente a los créditos dentro de los términos fijados entre las partes.

Fuente de criterio y criterio

Constitución Política Colombiana, artículo 209 (Principio eficacia, economía, transparencia y responsabilidad).

Causa

Ausencia de controles, seguimientos y monitoreos que no permitieron advertir esta situación del pago oportuno dentro de los términos.

Efecto

Incertidumbre en la situación financiera y la toma de decisiones, causando gastos que no se tenían previamente establecidos. Generando un presunto detrimento por \$573.794.

Las conductas descritas generan un Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, y fiscal, por vulneración de la Ley 1952 de 2019, numeral 1 de los artículos 38 y 39; Ley 610 en sus artículos 5 y 6.

4. Hallazgo administrativo, por no contabilizar las cuotas partes pensionales por pagar y cobrar en los estados financieros.

Condición (situación detectada de incumplimiento)

En el estado de la situación financiera vigencia 2022, no se observó registro de cuotas partes pensionales por cobrar, así como por pagar, la administración municipal no tiene conocimiento a cuánto asciende la deuda en los dos escenarios.

Fuente de criterio y criterio

Deficiencias en la aplicación en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, numeral 4 cuotas partes pensional por pagar y la Resolución 320 de 2019 numerales 4, 4.1, 4.2, y 4.3 de la Contaduría General de la Nación.

Causa

Debilidades en los controles y seguimientos en las cuotas partes pensionales por cobrar y pagar del municipio, por parte de los procesos responsables.

Efecto

Situación que a futuro puede generar intereses moratorios afectando el flujo de efectivo de la Administración Municipal.

5. Hallazgo administrativo, por la no contabilización y el cobro de las incapacidades a las diferentes EPS.

Condición (situación detectada de incumplimiento)

Los estados contables vigencia 2022 no registra en los estados financieros las incapacidades por cobrar a las diferentes EPS, así mismo, la entidad a la fecha desconoce la partida a contabilizar, no existe una relación del ausentismo de funcionarios debido a las incapacidades, por otro lado, existe desconocimiento total de las incapacidades transcrita ante las EPS,

Fuente de criterio y criterio

Ley 1066 de 2006 artículos 1 y 5, Decreto 19 de 2012 artículo 121, Ley 1438 de 2011 artículo 28.

Causa

Deficiencia en los controles y seguimientos, por parte de los procesos responsables.

Efecto

Situación que afecta la autenticidad e integridad y oportunidad de la información contable y con el riesgo que gran cantidad de estos recursos se pierdan por la figura de la prescripción terminando en presuntos detrimentos.

6. Hallazgo administrativo - Falta de certeza de los bienes de la propiedad planta y equipo (terrenos y edificaciones) sean de propiedad del municipio y otros que han dado en dación de pago y no han sido protocolizado, y los bienes de beneficios y uso público

Condición (situación detectada de incumplimiento)

La cuenta propiedad planta y equipo reportó \$35.793 millones y bienes de beneficios y uso público por \$43.465 millones en el 2022, evidenciándose que en el estado de la situación financiera al 31 de diciembre de la vigencia en estudio en el estado financiero se contabilizaron propiedades sin contar con la escritura que acredite como propietario el municipio, así como otros que han sido dados en dación de pago y que no están contabilizados porque la entidad no tiene claridad sobre el tema.

Fuente de criterio y criterio

En razón a lo anterior se evidencia debilidades en aplicación resolución 533 de 2015 y en referencia al marco conceptual características cualitativas de la información financiera, numerales 4.1.2 representación fiel, 4.2.1 verificabilidad 4.2.3 comprensibilidad, y 4.2.4 comparabilidad y las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, según “marco normativo para entidades de gobierno de la Contaduría General de la Nación.

Causa

Situación que obedeció a las debilidades de control y autocontrol como la falta de seguimientos y monitoreo que no ha permitido advertir oportunamente la irregularidad.

Efecto

Generando incertidumbre en las cifras en el estado contable.

MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL

7. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal - Pago de intereses corrientes sin justificación

Condición (situación detectada de incumplimiento)

La administración municipal pago intereses corrientes por \$40.481.404, sin justificación alguna en razón a un empréstito realizado en la vigencia 2022, con el

Banco agrario amparándose en el Decreto 678 de 2020, por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020, a entidades territoriales que no tuvieran liquidez, o en su defecto para atender insuficiencia de caja de carácter temporal tanto en gastos de inversión como de funcionamiento.

Por otra parte, la administración municipal reconoció e incorporó un superávit por \$1.187.822.953, superávit fiscal que hacen parte de los recursos del balance al cierre de la vigencia 2022, por las diferentes fuentes de financiación, evidenciándose que el municipio de Calima Darién cerró la vigencia en cuestión, con flujo de efectivo en la fuente por recursos propios con MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS MDA. CTE. (\$1.716.411.146) recursos con los cuales podían pagar y financiar los gastos de funcionamiento que se cancelaron con el empréstito mencionado cifras reflejadas en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 30

MUNICIPIO CALIMA EL DARIEN Reservas con Tesorería Análisis Recursos a Incorporar Vigencia 2022						
Fuente	Saldo Estado del Tesorería 1	Valor Reservas de Apropriación 2	Valor Cuentas Por Pagar 3	Descuentos de nómina y otros en Tesorería 4	Superávit a Incorporar al Presupuesto Siguiendo Vigencia 5=1-(2+3+4)	Déficit a Incorporar al Presupuesto Siguiendo Vigencia 5=1-(2+3+4)
Recursos Propios	1.716.411.146	282.332.875	244.241.551	2.013.767	1.187.822.953	
Fondos Especiales	100.000.000			0	100.000.000	
TOTAL S.G. P	1.593.244.970	782.417.529	88.971.217	0	721.856.224	
Destinaciones Específicas	736.104.223	14.276.046	40.896.768	0	680.931.410	
Otras Destinaciones Específicas	8.426.072.819	6.555.656.134		0	1.870.416.685	
Recaudos en Tesorería por Descuentos y otros.	2.013.767			0	2.013.767	
Subtotales	12.573.846.926	7.634.682.584	374.109.536	2.013.767	4.563.041.039	0
TOTAL, PRESUPUESTO	12.573.846.926	7.634.682.584	374.109.536	2.013.767	4.563.041.039	0

Fuente: Área financiera 2022

De otra parte, se evidenció que la entidad presentaba en el momento del crédito con recursos por valor de \$100 millones en un certificado de depósito a término fijo.

Fuente de criterio y criterio

Constitución Política Colombiana, artículo 209 (Principio eficacia, economía, transparencia y responsabilidad). Decreto 678 de 2020 inciso primero artículo 3. Decreto 111 de 1996, artículos 16, 20, 21 y 73

Causa

Ausencia de controles, seguimientos y monitoreos con la herramienta de planeación (PAC) que no permitieron advertir esta situación y que finalmente se ve reflejado en el superávit del municipio al término de la vigencia 2022, que está dando cuenta de la liquidez con la que pasa al siguiente período la administración municipal.

Efecto

Situación que termina en un presunto detrimento al erario público por \$40.481.404.

Las conductas descritas generan un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, y fiscal, por vulneración de la Ley 1952 de 2019, numeral 1 de los artículos 38 y 39, Ley 610 en sus artículos 5 y 6.

8. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Por utilización de recursos de crédito de tesorería, para pagar otro crédito que no estaba presupuestado con la adición presupuestal

Condición (situación detectada de incumplimiento):

En la vigencia 2022 se adquirió un crédito de tesorería con el banco agrario amparado en el decreto 678 de mayo 20 del 2022, recursos que fueron adicionados al presupuesto según el decreto 105 de junio 30 del 2022, En el ingreso a la apropiación 1,2,07,01 denominado en el presupuesto “recursos de créditos de tesorería” y en el gasto como está estipulado en dicho decreto, (funcionamiento) verificada la ejecución de los recursos se pudo identificar que con esos recursos se canceló otro crédito con el instituto financiero para el desarrollo del valle del cauca, afectando la partida recursos del crédito por valor de \$84.650.000 según Comprobante de Egreso 0000979 de 18 de julio de 2022, por valor de \$178.051.468.19, en el cual está incluido el pago del crédito., estos recursos destinados a funcionamiento en la adición presupuestal fueron desviados para cancelar un crédito de tesorería, como se puede evidencia en el decreto anteriormente mencionado.

Fuente de criterio y criterio

Decreto 111 de 1993 Artículo 18 Principio de Especialización.

Decreto 105 de junio 30 de 2022 Por el cual se realizan adiciones al presupuesto emanado del despacho del alcalde.

Causa

El decreto 105 de junio 30 del 2022 en su artículo segundo adiciono 800 millones de pesos para gastos de funcionamiento y determino que partidas se verían afectadas, donde con estos dineros no presupuesto pagar créditos de tesorería como sucedió.

Efecto

Desfinanciación del presupuesto adicionado para cancelar gastos de funcionamiento obtenidos con el crédito de tesorería del Banco Agrario.

Las conductas descritas generan una Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria; por vulneración de la Ley 1952 de 2019, numeral 1 de los artículos 38 y 39.

9. Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria - Por el no pago dentro de los términos que establece las reservas de apropiación y por ausencia de soportes donde se evidencien dichas reservas.

Condición (situación detectada de incumplimiento)

En el análisis de la confrontación de saldos presupuesto y tesorería se evidencia una diferencia de \$6.612.426.401.00, como a continuación de evidencia en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 31

MUNICIPIO CALIMA EL DARIEN									
Análisis confrontación de saldos presupuesto y tesorería									
Vigencia 2022									
(Recaudo En Efectivo + Recursos del Balance y/o Disponibilidad)ppto 1	Depositos Judiciales a Favor 2	pagos efectivos por ppto 3	Depositos judiciales en contra y anticipos sin legalizar 4	TOTAL 5=(1+2-3-4)	Estado de Tesorería 6	Descuentos de nómina y otros en Tesorería 7	Recursos Resguardos Indígenas 8	SALDO TESORERIA 9 = (6-7-8)	DIFERENCIA 10=(9-5)
19.279.149.279		13.319.742.522		5.959.406.757	12.573.846.926	2.013.767		12.571.833.158	6.612.426.401
Fuente: Area Financiera									

En el seguimiento realizado por el equipo auditor se confirmó que dicha diferencia corresponde a \$5.661.832.747.00 perteneciente al convenio DPS (Plaza de Mercado recursos Sin Situación de Fondos (S.S.F.)), más \$950.593.654.13 constituidas como reservas de presupuestales vigencias 2021, al respecto el artículo 89 del estatuto orgánico del presupuesto establece lo siguiente “*Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación, son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año estas a autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse.*” Se evidenció que a la fecha dichas reservas de apropiación del 2021 no se han cancelado

Fuente de criterio y criterio

Artículo 89 estatuto orgánico de presupuesto y artículos 14, 18,73 y 89 Decreto 111 de 1996.

Causa

Ausencia de mecanismos de seguimiento control y verificación de los procesos responsables.

Efecto

Uso inadecuado de los recursos.

Los hechos descritos configuran un Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, en virtud a lo dispuesto en la Ley 734 de 2002, el numeral 1 de los artículos 34 y 35 y la Ley 1952 de 2019, numeral 1 de los artículos 38 y 39.

MACROPROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

10. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal y Penal – Planeación, seguimiento y pago de Contrato de Comisión de Éxito.

Contrato No. 310-13-06-060-2022

Objeto: Prestación de servicios profesionales de asesoría y soporte en la Tesorería municipal para la Gestión tributaria y en la liquidación, cobro y recuperación de cartera en el municipio de Calima El Darién

Valor: \$1.500.000 para efectos fiscales- Prima de éxito o cuota litis

Plazo: Hasta 30 de diciembre de 2022

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Etapas precontractuales: En los estudios previos (folios 5 - 18) se especifica la necesidad de un apoyo para fortalecer la gestión de la Tesorería Municipal, en la ejecución de los procesos desarrollando actividades en relación con el archivo y los procesos de industria y comercio y predial (sic), tendientes al cumplimiento de metas y cometidos estatales.

Se observan errores de fondo en la planeación, pues contra expresa prohibición legal y jurisprudencial se realiza la delegación en terceros para fiscalizar, liquidar, realizar cobro coactivo y demás actuaciones como sanciones de los tributos municipales, aunado al desconocimiento del principio de conmutatividad y las reglas de su aplicación para el caso concreto. Fundando dentro de los estudios previos la actuación en torno a un concepto de la Dirección de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de abril de 2010, también se ampara el contrato en fallos del Consejo de Estado que desconocen el *principio de conmutatividad*.

En el ítem Valor Estimado del Contrato y Justificación del mismo, se dice que el valor es indeterminado pero determinable, estableciendo la modalidad de prima de éxito o cuota litis, el cual para efectos fiscales iniciales fue de \$1.500.000, y se determinó que el valor contractual real sería el del término de la ejecución contractual.

Posteriormente, en la forma de pago se establece que los honorarios correspondientes a la comisión de éxito, se estimarían en forma mensual, según dos criterios:

El 30% sobre recaudo efectivo generado por los procesos de cobro persuasivo, coactivo, de liquidación oficial, los nuevos contribuyentes declarantes y por las correcciones provocadas en el proceso de revisión de declaraciones sobre los impuestos predial unificado, industria y comercio y Avisos y Tableros, Publicidad Exterior Visual, Juegos Permitidos, Rifas y derechos de Rifas, Delineación Urbana, Espectáculos Públicos, Sobretasa a la Gasolina Motor; Alumbrado Público y cualquier otro tributo o renta municipal de las vigencias 2019 y anteriores (a excepción de las sobretasas Ambiental, Bomberil y las Estampillas del orden Departamental). Subrayado fuera del texto original, que se exalta para evidenciar falencias posteriores.

El 15% sobre el recaudo efectivo por los mismos procesos y conceptos de la vigencia 2020, con iguales excepciones. Existió una aclaración en donde se determinaba “En todos los casos los honorarios causados incluyen IVA”; se requirió para cada pago el informe del supervisor, con el cumplimiento de los requisitos legales, anexando el contratista informe y el pago de la Seguridad Social Integral (SSI).

Aunque está enunciado un Análisis del Sector, éste adolece de foliatura y la interrumpe pues a pesar de estar después del folio 23 (final de los estudios previos), no sigue la trazabilidad del expediente (error de Archivo documental).

Aunado a lo cual, la estructura del documento obedece a una evaluación de las circunstancias generales del municipio, pero en modo alguno, al tipo de contratación que habría de realizarse, tampoco a profundizar las condiciones financieras o topes a regularse dentro del precio, que determine con claridad cómo se llegó a establecer que habría equilibrio económico dentro del contrato, al generar los pagos sobre las sumas recaudadas en el 30% (2019 y anteriores vigencias) y el 15% (2020). No se observa tampoco, el análisis de la base de datos a entregarse al contratista, o la cantidad de deudores que se están delegando para seguimiento, siendo parte de la fiscalización a cargo de la entidad, hacer el seguimiento de los omisos y su respectivo cobro, cartera que se considera de fácil recuperación, por tratarse de personas que se encuentran ubicables, y sobre las cuales no se habría hecho cobro previamente.

Por otra parte, en el Análisis del Riesgo y Forma de Mitigarlo, solo se establecieron 3 eventos de riesgo, sin contemplar riesgos con relación a las inconsistencias en la etapa precontractual, que pueden viciar la actuación a adelantarse.

Los estudios previos son suscritos por el Tesorero general y revisados por Asesor jurídico Externo, perteneciente a la oficina de contratación. Se observa la invitación al futuro contratista con idénticos parámetros en materia de porcentajes a reconocer

(folios 19 a 23), y posteriormente la propuesta en los mismos términos de la invitación, es decir se manifiesta por el oferente que *“el valor y forma de pago de la prestación de este servicio corresponde al fijado al interior del Municipio de Calima”*, como soportes de experiencia y estudios se entregó abundante material probatorio (folios 25 al 103).

El incumplimiento de las prohibiciones establecidas por la ley y para la comisión de éxito desde la planeación (jurisprudencia), la vulneración a los principios de conmutatividad y economía, genera que el presente contrato no cumpla el lleno de los requisitos de ley.

Etapas contractuales: A folios 107 al 113, vemos el contrato de prestación de servicios calendarado 26 de enero de 2022. Se observa que, en la cláusula 4ª; se modifican las condiciones que se establecieron en los estudios previos, en materia de los criterios que generarían los porcentajes pactados y se determina que el 30% de honorarios, se cobraría sobre las vigencias 2020 y anteriores; en tanto el 15% se aplicaría sobre la gestión adelantada sobre la vigencia 2021, lo único que permaneció igual fueron las excepciones de sobretasas; la modificación indicada no tiene soporte jurídico dentro del expediente contractual. Se nombra posteriormente supervisor al Tesorero. El contrato se publica el 11 de febrero de 2022 en el Secop I, incumpliendo el término para la publicidad concedido por la ley para la publicación de las actuaciones contractuales. El acta de inicio está calendarada 28-01-2022.

Es necesario precisar, que se solicitaron los enlaces del Drive en los que presuntamente se encontraban las evidencias de la gestión encomendada, mismos en donde se pudieron ver soportes como: formatos para liquidación de impuestos (2021), resoluciones de caducidad de facultad de aforo, respuestas de tutela (2021), que correspondían a un contratista anterior, pues a pie de página en la sección de elaboración, aparecía la razón social de contratista de la vigencia 2021. Muy pocas de tales actuaciones tenían el soporte de haber sido elaboradas por el contratista y mes a mes se repitió básicamente la misma información en el archivo.

En contradicción se prueba la gestión en cuanto a algunos cobros de impuestos de publicidad exterior, respuestas a derechos de petición y tutelas, proyección de actos administrativos, liquidaciones, asesoría jurídica y directrices a la administración para el manejo de los tributos y gestiones a su cargo.

En síntesis, las inconsistencias no solo se presentaron en la planeación (ilegalidad de los estudios previos), sino que viciaron la gestión del contratista ante los soportes presentados e inclusión de anualidades y conceptos no contratados ni permitidos. En la contradicción se trajeron documentos que evidencian una gestión que ratifica la delegación tácita de la función que corresponde al municipio, aunado a lo cual no se aportaron las evidencias de la gestión sobre todos y cada uno de los 6000 predios que aproximadamente, se encontraban en la base de datos inicial, que justificara la inclusión de cada rubro a favor de los honorarios del contratista.

Los pagos que generaron el detrimento se observan las Facturas electrónicas de venta:

- 1.- FEV No. JP-49, calendada 21-03- 2022, por valor de \$12.247.694 (folio 121), acompañándola el informe del contratista a folios 122- 125.
- 2.- FEV No. JP-50, calendada 21-03- 2022, por valor de \$19.796.467 (folio 138) y el informe del contratista a folios 129- 157
- 3.- FEV No. JP-53, calendada 20-04- 2022, por valor de \$32.010.825 (folio 169), con el informe del contratista a folios 170- 199
- 4.- FEV No. JP-63, calendada 09-06- 2022, por valor de \$27.525.000 (folios 207- 208), con el informe del contratista a folios 209 – 214
- 5.- FEV No. JP- 67, calendada 29-06- 2022, por valor de \$24.561.423 (folios 227- 233), con el informe del contratista a folios 234 – 296 (en este período se incluyeron pagos de predial, cuyas sumas corresponden a la vigencia 2022; también se incluyeron conceptos que estaban expresamente excepcionados incluso en el contrato, como la *sobretasa bomberil y ambiental, consecuentemente los intereses derivados de éstas*)
- 6.- FEV No. JP- 76, calendada 13-07- 2022, por valor de \$20.747.219 (folios 309 - 310), con el informe del contratista a folios 311 – 314
- 7.- FEV No. JP- 86, calendada 20 -08- 2022, por valor de \$62.653.441 (folios 328 - 329), acompañándola el informe del contratista a folios 330 – 314
- 8.- FEV No. JP- 92, calendada 13- 09 - 2022, por valor de \$13.290.849 (folio 351) y el informe del contratista a folios 352 – 389 (Se incluye vigencia 2022 y los ítems excepcionados)
- 9.- FEV No. JP- 106, calendada 23 - 10- 2022, por valor de \$64.333.771 (folios 400 - 401), con el informe del contratista a folios 402 – 404
- 10.- FEV No. JP- 128, calendada 13 - 12- 2022, por valor de \$9.466.103 (folio 414), con el informe del contratista de octubre a folios 415 - 426.
- 11.- FEV No. JP- 129, calendada 13 - 12- 2022, por valor de \$98.195.008 (folios 438), con el informe del contratista de noviembre a folios 439 – 465
- 12.- FEV No. JP- 131, calendada 28 - 12- 2022, por valor de \$380.820.923 (folios 479 y 480) y el informe del contratista de diciembre a folios 481 y s.s.

El pago de la SSI a folios 131, 165, 221, 297, 467, 498, no corresponde al porcentaje determinado por ley del 40% del valor del contrato, abril no se evidencia.

Lo anterior, implica la existencia de un presunto detrimento que se detalla en el siguiente cuadro, por los pagos reconocidos, en tales circunstancias:

Cuadro No. 32

Municipio de Calima El Darién		
Contrato No. 310- 13- 06- 060- 2022		
Comprobante de Pago	Fecha	Valor Pagado
304	29/03/2022	\$ 32.044.161

Municipio de Calima El Darién		
Contrato No. 310- 13- 06- 060- 2022		
Comprobante de Pago	Fecha	Valor Pagado
479	28/04/2022	\$ 32.610.825
772	10/06/2022	\$ 27.525.000
932	13/07/2022	\$ 38.767.400
1146	18/08/2022	\$ 20.747.219
1446	10/10/2022	\$ 13.290.849
1591	5/11/2022	\$ 62.653.441
1690	24/11/2022	\$ 64.333.771
2112	29/12/2022	\$ 488.482.035
Total		\$ 780.454.701

Fuente: Municipio de Calima El Darién

Elaboró: Equipo Auditor

Fuente de criterio y criterio

Ley 594 de 2000, artículos 1 a 4, 11 a 17; Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 13, 23 y 24, Ley 1386 de 2010; en su artículo 1º, Ley 1474 de 2011, artículos 82 a 84; Constitución Nacional, artículo 209; Contrato en sus componentes pre y contractual (estudios previos, propuesta y minuta); manual de contratación de la entidad. Sentencia Consejo de Estado, Sección III Subsección C; Radicación número: 76001-23-31-000-2003-01754-01(35268). M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa del 06-05- 2015.

Causa

Planeación antijurídica y antieconómica, con vulneración al principio de conmutatividad, falencias en el seguimiento de las actividades por parte de la supervisión.

Efecto

Pérdida del recurso e inadecuada gestión en favor de la comunidad, generando un presunto detrimento por valor de \$780.454.701.

Los hechos descritos constituyen un Hallazgo administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal y Penal, por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39; Ley 610 de 2000, artículos 5 y 6; Ley 599 de 2000, artículos 397 y 410.

11. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria – Planeación, seguimiento y actividades sin revisión en el pago de Contrato

Convenio de Asociación No. 310-13- 08- 012- 2022

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la instalación de las iluminaciones especiales para la temporada navideña vigencia 2022 en el municipio de Calima – El Darién (Valle del Cauca)

Valor: \$123 millones

Plazo: Hasta 30 de diciembre de 2022

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Etapas Precontractual: En los estudios previos se especifica la necesidad de promover participación comunitaria, bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de su población y para contribuir con este propósito se requería ejecutar proyectos de acuerdo a las necesidades que se presentaban, el prestador de servicios debía estar facultado para la ejecución de programas para la adecuación y embellecimiento de las instalaciones culturales del municipio; a través de la secretaría de fomento al turismo; requiere adelantar las etapas previas y de planeación con la finalidad de garantizar Calima Pueblo Mágico y Ancestral, lo anterior con motivo de las festividades navideñas. Concretamente se requería brindar iluminación especial (folios 8- 29).

En la planeación no se tomó en cuenta, que con el otro sí que prorrogó el contrato de concesión, se determinó expresamente que el Concesionario sería en lo sucesivo el encargado de realizar la iluminación navideña del municipio, siendo del resorte del municipio, proveer el soporte económico para tal fin. Lo que le resta soporte jurídico en el gasto.

No se determinó la necesidad de garantías, a pesar de que se determinó el pago del 50% de los aportes del municipio, al momento de la suscripción del acta de inicio, aunque no se le denomina como anticipo el sentido de tal pago tiene idéntica destinación. El otro 50% del valor de aportes se pagaría en actas parciales.

A folios 37 – 79, se encuentran la propuesta y anexos de la oferente, no hay soportes que demuestren la experiencia del contratista, más allá de la mera enunciación de los mismos en la hoja de vida del contratista ESAL, por tanto, no se cumple el criterio de ser una entidad de reconocida idoneidad, tampoco se evidencia el soporte del registro en el Secop.

Etapas contractual: Se observa el contrato suscrito a folios 80 - 85 del 30-11-2022, en la cláusula sexta se determina el pago del 50% de los aportes del municipio con el acta de inicio, sin que se exijan garantías que respalden el anticipo que se desembolsa. Se designa como supervisora a la asesora de fomento al Turismo, el acta de inicio se suscribió el 30 – 11- 2022. Se observa publicación en el Secop I, extemporánea del 11 -12- 2022 (folios 97 - 98).

A partir del folio 101 se encuentra la solicitud de pago del 50% del valor del aporte del municipio al contrato, a folio 102 FELE 48 del 06 de diciembre de 2022, por \$61.500.000. A folios 108 a los 146 informes del contratista con fotos sin fecha ni hora, posteriormente informe del supervisor manifestando cumplimiento.

En contradicción se trajeron facturas de los pagos realizados, que no son parte de la trazabilidad del expediente y sustentan debilidades de archivo documental.

No se encuentra representada la inversión hecha por el contratista, que justificó la modalidad de contratación directa como convenio.

Criterio y fuente de criterio

Ley 594 de 2000, artículos 1 a 4, 11 a 17; Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 13, 23 y 24, Ley 1474 de 2011, artículos 82 a 84 y 91; Constitución Nacional, artículo 209; Contrato en sus componentes pre y contractual (estudios previos, propuesta y minuta); manual de contratación de la entidad; Decreto 092 de 2017, artículos 1 -3, 7, 8 y 9.

Causa

Planeación antieconómica, que vulnera los principios de la contratación pública y falencias en el seguimiento de las actividades por parte de la supervisión.

Efecto

Inadecuado seguimiento del recurso y gestión en favor de la comunidad. Debilidades en el proceso de supervisión.

Los hechos descritos constituyen un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39.

12. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y fiscal– Planeación, seguimiento y actividades para evidenciar inversión de anticipo

Convenio de Asociación No. 310-13- 08- 013- 2022

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la realización de los diferentes eventos culturales y artísticos dentro del marco de la celebración de la Navidad Mágica

Valor: \$210.300.394 Aporte del Municipio \$147.568.326

Plazo: Hasta 26 de diciembre de 2022

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Etapas Precontractual: En los estudios previos se hacen especificaciones del objeto en 16 ítems entre los que se encuentran varias actividades, entre las que se encuentran 3000 almuerzos, 3800 juguetes Niños/niñas de 0 -9 años; 10 incentivos población rural; 3000 refrigerios niños/niñas participantes novenas (1 galleta navideña y jugo caja) En ningún aparte se hacen requerimientos mínimos en relación con las Buenas Prácticas de Manufacturas, tampoco se establece el mecanismo de control para establecer que en cada uno de los almuerzos van a estar los 200 gr de picada que se requirieron, o las condiciones de transporte de los alimentos. Estudios previos (folios 10 - 24), aunque en los estudios no se establece anticipo propiamente, se determinó que el primer desembolso por valor del 50% del aporte del municipio se haría y el saldo al término de la ejecución del contrato, sin embargo, por tratarse de “convenio de asociación” no se determinaron garantías para amparar el anticipo entregado.

Los riesgos asociados a este contrato son los mismos de cualquier otro contrato. Sin tener en cuenta el riesgo inherente a la entrega de alimentos que se manipulan por el contratista.

La invitación está a folios 35- 39 sin firma del alcalde; aunque se determina que aportará la ESAL \$73.784.163 al costo del convenio no se especifica en qué elementos se encuentra representada la participación, así como tampoco se establecieron los mecanismos para comprobar el aporte mismo.

No se encuentra en el expediente el soporte de ser una entidad de reconocida idoneidad, ni su registro en el Secop.

Etapas contractual: Se observa el contrato suscrito a folios 81 - 88 del 13-12-2022, en la cláusula sexta se determina el pago del 50% de los aportes del municipio con el acta de inicio, sin que se exijan garantías que respalden el anticipo que se desembolsa, así no se le dé tal denominación. Se designa como supervisora a la Asesora de fomento al Turismo. El Acta de inicio se suscribe el 13 – 12- 2022. Se observa publicación en el Secop I, extemporánea del 19 -12- 2022 (folios 101 - 102).

Jurisprudencialmente se ha establecido (Consejo de Estado, Sala contencioso Administrativa, sentencia 22 de junio de 2001, consejero Ponente Ricardo Hoyos Duque) que los dineros de anticipo (independientemente del nombre que se le asigne por las partes contratantes), son de propiedad de la entidad estatal, el mismo debió tener los soportes del gasto e inversión correspondientes, previo al desembolso final del valor del contrato. La falta de amortización de tales rubros con documentos y soportes al interior del expediente (Contratos, facturas, bienes adquiridos), deriva en el detrimento por el valor del anticipo entregado.

Tampoco se evidencian en la trazabilidad del expediente, los pagos de las 16 personas requeridas para logística, en contradicción se aporta 1 persona que según los soportes realizó 16 turnos, no siendo ello lo pactado.

No hay soporte de los contratos para entrega de agua, refrigerios y almuerzos en las cantidades y formas determinadas, pues las fotografías por sí solas no dan soporte de la cantidad de entregas determinadas y como los listados no determinan si los beneficiarios que suscribían se les entregaban regalos, almuerzos, refrigerios o qué actividad, no pueden servir *per se* de soporte a todos los ítems contratados.

A partir del folio 105 se encuentra la solicitud de pago del 50% del valor del aporte del municipio al contrato, misma que señala unos soportes anexos, que no se evidencian. En contradicción, entregan dos cuentas de cobro por \$90 millones aproximadamente, sin soportes del Rut de los contratistas, contratos, pagos de SSI, ni Matrícula mercantil o certificado de existencia y representación que den cuenta de la actividad contratada.

Fuente de criterio y criterio

Ley 594 de 2000, artículos 1 a 4, 11 a 17; Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 13, 23 y 24, Ley 1474 de 2011, artículos 82 a 84 y 91; Constitución Nacional, artículo 209; Contrato en sus componentes pre y contractual (estudios previos, propuesta y minuta); manual de contratación de la entidad; Decreto 092 de 2017, artículos 1 -3, 7, 8 y 9.

Causa

Planeación antieconómica, falencias en el seguimiento de las actividades por parte de la supervisión.

Efecto

Pérdida del recurso e inversión del erario público sin las debidas garantías, generando un presunto detrimento por valor de \$73.784.163.

Los hechos descritos constituyen un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y Fiscal, por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39; Ley 610 de 2000, artículos 5 y 6.

13. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia disciplinaria, fiscal y penal – Etapa Precontractual - Regulación de honorarios

Contrato Nro. 209 de 2019.

Objeto: Prestación servicios profesionales a cuota Litis para conciliación y acuerdo de sentencias a favor de entidad privada y en contra del Municipio de Calima Darién

Valor: \$1.000.000 o 4% de cuota Litis.

Plazo: un mes.

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Etapas Precontractual: Se observan errores de fondo en la planeación, pues contra expresa prohibición jurisprudencial, se proyectó una contratación desconociendo el principio de conmutatividad y las reglas de su aplicación para el caso concreto. Fundando dentro de los estudios previos la actuación en torno a un “análisis financiero” que no es tal, según el cual, se debían conciliar dos sentencias en contra del municipio (realmente había 4); sin determinar con qué análisis económico se estableció que el porcentaje del 4% como honorarios en caso de éxito, era equitativo para los intereses del municipio. No se hizo alusión a las circunstancias de cada uno de los fallos, y se estableció como exitosa la gestión que implicara el 40% de las sumas adeudadas

También se estimó que en caso de que no hubiera éxito, el valor del contrato sería de \$1 millón de pesos.

La vulneración al principio de conmutatividad, al no determinarse con claridad por qué se estableció el porcentaje de cuota Litis, aunado a la falta de controles sobre el estado real de las obligaciones a transarse, generan un contrato sin el lleno de los requisitos legales.

Etapas Contractual: El contrato se encuentra suscrito y visible a folios 45- 55, mismo que no se rindió en la plataforma de SECOP I.

En la cláusula tercera del contrato, se estipula:

Conciliar la sentencia del 26 de marzo de 2010

Conciliar la sentencia Nro. 138 de septiembre de 2018

El acta de inicio se suscribió el 01-08-2019, mismo día en que se firmó el contrato. El valor estipulado por el abogado, en su informe Estudio sentencias judiciales para propuesta de pago manifiesta “el valor del total liquidado en las sentencias es de 8.382.383.418, de esta deuda según el informe se pagará, la suma de \$3.400.715.364 a Comfandi, generando un valor de éxito de 4.981.668.054 donde se le aplicaría el 4% de cuota de éxito, dando como resultado a pagar la suma \$199.266.722.

Se observan a folios 58 – 103, los soportes de la actuación realizada por el contratista, en especial se observa la transacción de fecha agosto 23 de 2019, visible a folios 93 a 100, en su cláusula segunda, se destaca que los rubros cancelados

corresponden a la suma de \$8.382.383.418. Las sumas correspondientes a las dos sentencias referidas en los estudios previos ascienden a \$3.778.673.581, entre las cuales se encuentra una que corresponde a una entidad distinta del municipio, y que se incluyó al momento de la transacción. Por tanto, no se cumplieron los parámetros de los estudios previos, consistentes en:

1. Pago inferior al 40% de las sumas referidas en los estudios de los \$4.280 millones a cancelar
2. Lograr que no se impactara el marco fiscal del mediano plazo del municipio, sin embargo, se vio afectado.

Como el contrato estipuló una suma máxima de \$150.000.000, esta se canceló según comprobante de 0001160 del 30 de agosto del 2019. Con fundamento en la literalidad de la transacción, se evidencia que no se generó cuota de éxito ya que el valor pactado en el contrato, es el valor de las sentencias que presuntamente ascendían a \$8.382.383.418.

Fuente de Criterio y criterio

Ley 594 de 2000, artículos 1 a 4, 11 a 17; Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 13, 23 y 24, Ley 1386 de 2010; en su artículo 1º, Ley 1474 de 2011, artículos 82 a 84; Constitución Nacional, artículo 209; Contrato en sus componentes pre y contractual (estudios previos, propuesta y minuta Clausula novena valor y forma de pago); manual de contratación de la entidad. Sentencia Consejo de Estado, Sección III Subsección C; Radicación número: 76001-23-31-000-2003-01754-01(35268). M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa del 06- 05- 2015.

Causa

Pago de lo no debido, y falencias de la supervisión

Efecto

Pérdida de recursos y un presunto detrimento patrimonial por \$150.000.000.

Las conductas descritas generan un Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal; al tenor de lo dispuesto en la Ley 734 de 2002, numeral 1 de los artículos 34 y 35; Ley 1952 de 2019, numeral 1 de los artículos 38 y 39; Ley 610 de 2000; artículo 5 y 6 y Ley 599 de 2000, artículos 397 y 249.

14. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. Seguimiento de las actuaciones del contratista

Contrato No. 310-13- 06.166- 2022 MC

Objeto: Interventoría Técnica, administrativa y financiera al contrato de Concesión No. 001 de octubre de 2003, del servicio de alumbrado público del municipio de Calima – El Darién (Valle del Cauca)

Valor: \$27.489.000

Plazo: Hasta 30 de octubre de 2022

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Etapas precontractuales: En el proyecto se establecen rubros por valor de \$125 millones, para ejecutar las acciones por dos años, durante el cual debe ejecutarse seguimiento técnico, administrativo, operativo y financiero de la Concesión de Alumbrado público que tuvo su inicio en el año 2003.

En los estudios previos (folios 6 - 49) se especifica que, en cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes aplicables a la Concesión, se requiere de la prestación de una interventoría de alcance técnico, contable, legal, ambiental, financiero, administrativo y de calidad al servicio de alumbrado público. Se requiere como perfil, persona natural o jurídica cuya actividad económica incluya el desarrollo del objeto a contratar, como experiencia mínima en realización de interventoría mediante presentación de certificaciones o contratos, también se requirió para tales efectos un equipo de profesionales como 1 Director de Interventoría, 1 Profesional Jurídico, 1 técnico electricista, 1 profesional financiero, con una experiencia determinada, que se estima indispensable para poder adelantar la labor a desempeñar.

Se exigen como obligaciones al futuro contratista: informes mensuales consolidados relacionados en norma integral con todos los aspectos relevantes en torno a; Condiciones mínimas requeridas, exigencias y especificaciones, sistema de alumbrado público, verificación de la calidad del suministro, procedimientos y realización de los trabajos de operación conforme a las normas RETILAP; deficiencias encontradas, seguimiento de los reclamos de los usuarios, *revisar y aprobar planes de trabajo, exponer al municipio las razones que ameriten imposición de sanciones por incumplimiento*; inspeccionar suficiencia y calidad de las instalaciones, *velar porque el flujo de caja mensual responda a los parámetros trazados con anterioridad*, verificar que los cobros que se realicen correspondan al acuerdo municipal, reportar mensualmente el análisis y evaluación económica de las tarifas; *revisar las cuentas de cobro presentadas por la fiducia; realizar registro cronológico de pagos y deducciones*; informe mensual del desarrollo financiero del encargo fiduciario, *revisar los ingresos por recaudo del impuesto de alumbrado público, supervisar el costo de operación del sistema; velar y validar el plan de inversiones y proyectos a ejecutar*, validar y efectuar el seguimiento del mismo, entre otras.

Se realizó invitación y se presenta la oferta con sus anexos; se observa que la hoja de vida se encuentra incompleta en el expediente, entre los soportes que sustentan el requerimiento de experiencia requerido (folios 50 - 271). Sin embargo, se validan, existiendo en la trazabilidad concepto jurídico de la asesora jurídica externa aprobando los documentos del contratista.

Etapas contractuales: Por tratarse de mínima cuantía, se observa la aceptación de la propuesta a folios 272 – 277, suscrito el 03 – 08- 2022. Por errores de archivo documental, se observa póliza de cumplimiento de fecha 10 de agosto de 2022, posteriormente el nombramiento de la secretaria de Obras, como supervisora, la aprobación de la póliza y el acta de inicio, están calendadas 10 de agosto de 2022. El registro del contrato en el Secop I se hizo de manera extemporánea el 11- 08- 2022 (folios 284 - 286).

Sin que se registre ningún tipo de actuación contractual, ni requerimiento de prórroga por parte de la supervisión, se observa Otro sí de adición y prórroga por \$13.744.500; y en tiempo hasta el 15- 12-2022, que se adjunta y suscribe el 28 – 10- 2022 (por errores de archivo documental, no hay foliatura en estos documentos), cerrando los mismos la primera carpeta del expediente.

Vemos a partir del folio 296 (segundo tomo) y hasta el folio 530, en su orden: Informes de supervisión, del contratista y pagos. En el Informe del supervisor del 30 de noviembre, manifestando el cumplimiento de las labores por parte del contratista durante el mes de agosto, es importante señalar que quien firma el informe es un secretario de obra distinto de la supervisora nombrada, y a éste, no se le hizo acto de delegación de la supervisión. El informe de interventoría folios 309- 421, corresponde al 10 de agosto hasta el 30 de septiembre (no mensual como se estipuló), es de anotar que dentro del mismo se compila la información del contrato desde enero a septiembre de 2022; con recuento de la realización de las actividades, que contienen fotos sin fecha y hora de su realización, relación de proyecciones realizadas, es de anotar que se informa el decrecimiento de las luminarias de 1891 a 1869 (22 menos), manifestando que durante el año solo se repuso 1 y sin que se dé cuenta del Plan de expansión (folio 371), no se observa en los informes el componente jurídico.

Dentro del informe se estiman valores a devolver a distintos usuarios debido a la pérdida de asequibilidad del Acuerdo No. 015 de 2021, según Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo con radicado 76001-23-33-000-2022-00044- 00, mediante los cuales se hicieron cobros de más a los usuarios (folio 376 vuelto), de cuya gestión no se ha hecho manifestación alguna valores que ascienden a \$54.266.757, que podrían generar intereses en caso de ser solicitadas, especialmente por los clientes especiales (no regulados) que son 18, a cada uno de los cuales habría de devolverse tales sumas.

El interventor señaló que al municipio se le viene facturando el Alumbrado Público, cuando es el sujeto activo del mismo y pidió que se revisara y notificara al comercializador para el retiro del cobro. Lo cual no se hizo. Es necesario acotar, que a la fecha no existe contrato con el comercializador, para lograr el cobro por KW en condiciones más económicas para el municipio y no como cliente No Regulado.

Un segundo informe del mes de octubre, nuevamente se hace el correspondiente análisis.

En el informe del contratista correspondiente al período 01 de noviembre al 15 de diciembre a folios 476 – 530, se repite todo lo observado en el informe de octubre, en cuanto a la falta de transferencias por mayor valor por parte de la Comercializadora en contra de los intereses del municipio, sin que ni el Interventor ni el Supervisor, hayan realizado ninguna radicación al respecto para recuperar esos mayores valores en su favor, lo que incrementó el monto del valor adeudado al concesionario en la suma de \$328.772.268,60.

Cabe acotar, que el contratista debió hacer seguimiento a las obligaciones técnicas que se desprendían del Anexo del Otro Sí No. 2 de la concesión, que incluyó la inversión por \$1.600 millones que debió adelantar el concesionario a partir de agosto de 2021 por 18 meses, que, para diciembre de 2022, cumpliría 16 meses de adelanto, pero esa información no se estandarizó en ninguno de los informes del contratista. Tampoco se hizo alusión alguna al manejo de los clientes No Regulados, a la cartera y el estado de la misma, así como a señalar posibles soluciones para que se conozca la razón de la fluctuación del recaudo.

En virtud de lo anterior, el último pago corresponde a repetición de la información en materia de recaudo, ignorando lo pertinente a la inversión del Otro sí, su porcentaje de avance, motivo fundamental para la prórroga de la concesión durante 10 años más. Así las cosas, se estima la existencia de un detrimento, por el último pago realizado, dada la información repetida, y la falta de alcance de la información reportada. Se considera un detrimento por valor de \$13.744.500, por concepto del último pago realizado.

Fuente de criterio y criterio

Ley 594 de 2000, artículos 1 a 4, 11 a 17; Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 13, 23 y 24, Ley 1474 de 2011, artículos 82 a 84; Constitución Nacional, artículo 209; Contrato en sus componentes pre y contractual (estudios previos, propuesta y minuta); manual de contratación y supervisión de la entidad; Ley 1508 de 2012, artículos 29 y 33; Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.6.3.

Causa

Planeación antieconómica y sin un análisis de costos acertado, falencias en el seguimiento de las actividades por parte de la supervisión.

Efecto

Pérdida del recurso por inadecuada gestión del interventor en favor de los intereses del municipio y la comunidad, generando un presunto detrimento por valor de \$13.744.500.

Los hechos descritos constituyen un Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal, por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39; Ley 610 de 2000, artículos 5 y 6.

15. Hallazgo Administrativo con presunta connotación Disciplinaria - Gestión de la Dimensión de Control interno en la entidad

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Se evidenciaron deficiencias en el seguimiento y realización de las auditorías internas, pues durante la vigencia 2022, solo se realizó una sola auditoría a la contratación, cuando los riesgos del ente territorial se extendían en distintas áreas, como consecuencia de la falta de procesos y procedimientos. Por tanto, no se realizó un proceso de planeación y seguimiento de los distintos riesgos de la entidad.

De otra parte, también se evidenciaron falencias que corresponden a la primera y segunda línea de defensa del municipio, pues no se realizó una gestión de los riesgos por cada una de las secretarías e igualmente el seguimiento para minimizar los mismos. No se observaron seguimientos y actualizaciones sobre los riesgos desde la secretaría de planeación, lo que implica que, para la vigencia, se desconocieron riesgos que se materializaron ante la inexistencia de gestión, no solo por la alta dirección sino también por falta de apropiación sobre el tema por parte de los funcionarios de la entidad.

Como consecuencia de lo anterior, no existe conexidad al interior del ente territorial, que permita que funcione la dimensión de Control Interno.

Fuente de criterio y criterio

NIA 500 (Norma Internacional de Auditoría), a partir del 2009, y de la Ley 87 de 1993 artículos 1 y 2, reglamentada por el Decreto 648 de 2017; modificado por el Decreto 1083 de 2015, Artículos 2.2.21.3.1, 2.2.21.3.11; 2.2.21.4.7; 2.2.21.4.8 y 2.2.21.4.9.

Causa

Deficiencias en el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditorías internas de la entidad y auditorías internas y planes de mejoramiento inefectivos.

Efecto

Riesgos institucionales que se materializan y afectan el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

Las circunstancias descritas generan un Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39.

16. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria- Planeación y seguimiento de los contratos de la muestra

Condición (situación detectada de incumplimiento):

En los contratos de la muestra, se detectaron las siguientes inconsistencias de las actuaciones contractuales:

Etapas Precontractual

En los estudios previos no se evidencia en el Análisis del sector, sustento que permita conocer cómo se establecieron los precios de las actividades a contratar y que permiten llegar al precio estimado del contrato, pues no se registra estudio de mercado. De otra parte, corresponde a un documento “tipo” en el caso de los contratos de prestación de servicios, otro tanto ocurre en materia de los riesgos de la contratación, ya que se toman los mismos riesgos en todos los contratos, con pleno desconocimiento o evaluación de las variables de uno u otro objeto contractual.

Los expedientes incumplen archivo documental, no tienen orden cronológico de las actuaciones del expediente, así las cosas, aparece primero la solicitud de pago al contratista y posteriormente el informe de éste con sus correspondientes soportes de actuaciones realizadas.

Etapas Contractual: En los contratos de la muestra la publicación en el Secop de la suscripción del contrato, se hizo por fuera del término señalado por la ley para tal fin.

Las Pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual en los contratos Nos. 310-13-06-121- 2022 y 310-13-06-182- 2022, no contienen los amparos expresos de daño emergente y lucro cesante; contratistas y subcontratistas; vehículos propios y no propios, en general los amparos dispuestos en la norma, sin embargo, se aprueba en acto administrativo que suscribe el alcalde.

No se observan registradas las labores de seguimiento y control desplegados por el supervisor del contrato, más allá del formato preestablecido para tal fin.

Inconsistencias de cumplimiento del manual de contratación, en relación con el informe del supervisor solicitado para la prórroga del contrato principal, en materia del plazo mínimo determinado para su solicitud.

Como podemos observar, hay una serie de falencias, que son del resorte de la planeación y también del supervisor, cuyas labores de seguimiento no son plenamente evidenciadas, pues no quedan registradas en la trazabilidad de los expedientes, y que podrían lesionar la adquisición del bien o servicio que pretendía contratarse.

Fuente de criterio y criterio

Con estas actuaciones se lesionan la Ley 594 de 2000, artículos 1 a 4, 11 a 17; Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 13, 23 y 24, Ley 1474 de 2011, artículos 82 a 84; Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.2.1.4 Contratos en sus componentes pre y contractual (estudios previos, propuesta y minuta); manual de contratación; Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.1.1.7.1.

Causa

Esto sucede por una defectuosa planeación, y debilidades de seguimiento que implican la prórroga de los contratos, y aceptación de garantías sin cumplir los requisitos establecidos por el ente territorial y la ley.

Efecto

Ello genera, errores de la planeación, falta de trazabilidad del objeto contratado e inconsistencias en la supervisión, lesionando la satisfacción de la necesidad que generó los contratos.

Los hechos descritos constituyen un Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39.

17. Hallazgo Administrativo con presuntas incidencias Disciplinaria, Fiscal y Penal – Estudio Técnico de Referencia y cumplimiento de obligación condicional

CONCESION No. 001 de 2003

Objeto: Atención integral del Servicio de alumbrado público del municipio de Calima El Darién

Cuantía: Indeterminada

Plazo: 30 años

Otro Sí No. 2 del 14 de septiembre de 2021 Valor: \$1.680.893.278

La prórroga que se hizo al contrato de Concesión, adolece de la solicitud que debería haber hecho la Supervisión y/o la Interventoría, para efectos de la prórroga del contrato.

Aunado a lo cual se requería de un estudio técnico de referencia, acorde a la ley que regula las asociaciones público privadas, aunque se realizó un estudio técnico en 2019, éste no buscó la mejor opción para el manejo del Alumbrado público municipal, sino para sustentar las razones de la prórroga, como a continuación se observa: *“Que con el objetivo de garantizar una adecuada planeación a la modificación del contrato de concesión y en especial a los proyectos de iluminación que se van a ejecutar en el municipio se contrató la elaboración de un estudio jurídico, técnico y financiero, para la viabilidad de la ampliación del Contrato de Concesión No. 001 de 2003...”* Tampoco fue publicado en la página web de la entidad ni por ningún otro medio.

Es importante señalar, que la realización de este estudio, estuvo a cargo, de quien con posterioridad y hasta la presente vigencia se desempeña como Interventor, lo que resulta en un conflicto de intereses. El estudio, no señaló el impacto económico del escenario adverso frente a la inversión y el incremento de la deuda, por intereses y otras sanciones que pudieran derivarse del incumplimiento por parte del municipio. Revisado el documento, vemos que solamente se estudia como escenario financiero, uno en el que la modificación del acuerdo para el cobro del impuesto es un hecho. No obstante, aunque el Concejo municipal, aprobó el incremento, posteriormente fue declarado inexecutable el acuerdo por parte de la jurisdicción contencioso administrativa, dejando desamparado al municipio ante un escenario financiero poco sostenible, sin posibilidad de saneamiento, pues tal circunstancia, no fue tenida en cuenta, por quien realizó el estudio para justificar el Otro sí que se suscribió en agosto de 2021.

No se realizó por parte de la entidad, un análisis financiero que permita establecer parámetros para la continuidad del negocio jurídico, descartando la Licitación pública de facto, misma que debía realizarse, o que evitara un eventual desequilibrio económico, que es el escenario que se presenta en la actualidad. De otro lado, observamos que no se realizó un inventario de los bienes que integraban la red de alumbrado público, en aras a determinar el cumplimiento del alcance de la concesión inicial, y cuáles eran los bienes que deberían tenerse en cuenta para la reversión. Es más, se introdujeron cláusulas modificatorias en tal sentido, en donde sin que el municipio reconozca mediante un documento cuales son los activos iniciales, cuales los que deben ser retornados, y cuales los que se desprenderán de la nueva inversión (Anexo técnico que no se entregó)

Como sustento de las necesidades que se necesitaban satisfacer, encontramos que se estableció el plazo máximo para la realización de las inversiones que hacen parte del anexo No. 2:

Imagen No. 9

Clausula cuarta: Adiciónese los siguientes parágrafos a la cláusula cuarta del Contrato de Concesión No. 001 de 2003:

Centro Administrativo Municipal - CAM /
Calle 14 No. 5 - El Centro Postal No. 0014 - Tel: 03555555-555555
E-Mail: alcalde@camvallecauca.gov.co

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE CALIMA SARIÉN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: DESPACHO DEL ALCALDE
NOMBRE DEL DOCUMENTO: OTROS SI MODIFICATORIO

NT: 898.308-611-6
MEC: RYCSP 1000.2008- SUTEDA

Código del:
898-31-08
Fecha:
01/01/2008
Versión: 1
Página: 18



"Parágrafo primero. EL CONCESIONARIO ejecutará la reinversión a la que hace referencia en Otro sí No. 02 del presente contrato en un plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. El plazo antes mencionado podrá ser prorrogado hasta en seis (6) meses o más, únicamente en caso de se derive de una situación de caso fortuito o fuerza mayor, previa autorización expresa expedida por la administración Municipal. Parágrafo segundo. Durante los primeros dieciocho (18) meses de inversión el CONCESIONARIO ejecutará, además, la expansión/modernización de las zonas rurales convenidas con el Municipio a través del Acta de Expansión/Modernización No. 02 de 2001.

Cabe señalar que a la fecha de la auditoría el término para la ejecución de las obras se encuentra más que vencido, encontrándonos que las obras no solo, No están terminadas, sino que, además el desequilibrio económico que se alega a septiembre de 2023, supera los \$506 millones de pesos, sin que el Interventor haya manifestado en ninguno de sus informes el incumplimiento de las obras del anexo del Otro sí No. 2, ni la supervisión haya realizado los llamamientos pertinentes.

Vemos un documento denominado "Acta de Inicio" según Otro sí No. 2, la cual no se encuentra suscrita por el Supervisor (Secretaría de Obras), hecho que incumple lo dispuesto en el Manual de contratación del municipio, por tanto, adolecen las actuaciones surtidas de soporte jurídico:

Como corolario de la situación, se evidencia que los seguimientos realizados a los distintos aspectos del contrato son defectuosos, como resultado de varios factores, a saber:

- 1.- No se realiza cobro a los Clientes No regulados, ni siquiera existe una base de datos que permita estandarizar el cobro del impuesto de Alumbrado Público para sanear los cobros coactivos y manejar adecuadamente la cartera. La Tesorería no comunica ninguna información al respecto a la Secretaría de Obras públicas que funge como Supervisora del contrato.
- 2.- Se desconocen por la supervisión los cobros realizados directamente por la tesorería del municipio, en materia de clientes especiales del impuesto (Hidroeléctrica) y de los recaudos por predial (lotes), sobre los cuales no hay control. Por tanto, los valores cobrados a los clientes especiales, no ingresan a sanear las obligaciones generadas por la concesión, hecho que se desprende de la información emanada de la Fiducia, en donde solo ingresan los valores trasladados por la comercializadora. Constituyéndose en una desviación del recurso, cuya destinación es específica.

3.- No hay un contrato con las comercializadoras de energía, lo que redundo en que el Kilovatio se cobre a la tasa más alta por tratarse al municipio como un cliente No Regulado.

4.- No se hace seguimiento adecuado a las diferencias marcadas entre lo facturado y lo percibido por la comercializadora, el Interventor no realizó control alguno sobre los valores relacionados, que pueden fluctuar de un mes a otro sin justificación alguna, con el agravante de que en algunos meses hay recuperaciones de más del 100% del recaudo, lo que implica una falta de constante en los registros, que no puede deberse a los clientes, pues éstos no cambian dentro de lapsos tan breves de manera significativa.

5.- La interventoría contratada, no ha realizado seguimiento a la inversión que originó el Otro Sí, ni ha manifestado en los informes el avance o retardo para conocimiento del municipio. Se reitera que, no se han finiquitado las obras, a pesar de que el término se encuentra más que vencido.

6.- El supervisor del contrato, desconoce las obligaciones al interior de la Concesión, no conoce las obligaciones del interventor, por tanto, no ejerce ningún tipo de control sobre ellos.

7.- No existe inventario de los bienes objeto de reversión en la primera parte de la Concesión pues el Otro sí solamente aplicaría sobre la nueva etapa de la misma, en caso de continuidad.

Según la información documentada del Concesionario, y calendada en febrero de 2023, las actividades y obras a su cargo finiquitarán el 20 de marzo de 2024, a pesar del incumplimiento de la obligación condicional, bajo la cual se constituyó el negocio jurídico de prórroga.

Es necesario puntualizar que el contrato adolece de toda trazabilidad, los estudios previos iniciales, la propuesta y los aspectos técnicos no existen en las carpetas, no hay soporte de los seguimientos previos la vigencia auditada, y aún del Otro sí No.2, no aparece tampoco el anexo técnico que detalla el alcance de la inversión.

Todo lo anterior, permite concluir que, presuntamente se está beneficiando a terceros particulares en detrimento de los intereses del municipio y de sus conciudadanos.

Componente Técnico Medioambiental

Los municipios deben realizar un Estudio Técnico de Referencia y publicarlo en su página web, el cual incluirá como mínimo: el estado actual de la prestación del servicio en materia de infraestructura, cobertura, calidad y eficiencia energética, el inventario de la infraestructura, inventario de los espacios públicos de libre circulación peatonal o vehicular, la descripción de la población, la cobertura del servicio de energía eléctrica, el diagnóstico del ETR, los indicadores, las expansiones del servicio armonizadas con el Plan de Ordenamiento Territorial, POT y con los planes de expansión de otros servicios públicos, los costos desagregados de prestación para las diferentes actividades del servicio de

alumbrado público, los costos del suministro de la energía, las tarifas empleadas para el cálculo, las cantidades medidas en los medidores disponibles, el aforo, la liquidación y los descuentos por indisponibilidad, los costos de la inversión, los costos de administración, operación y mantenimiento de los activos del servicio de alumbrado público, entre otros.

El municipio no incluyó en los rubros presupuestales y cuentas contables, independientes, los costos de la prestación del servicio de alumbrado público y los ingresos obtenidos por el impuesto de alumbrado público, por la sobretasa al impuesto predial en caso de que se establezca como mecanismo de financiación de la prestación del servicio de alumbrado público, y/o por otras fuentes de financiación.

El municipio no está liquidando directamente el impuesto de alumbrado público: a pesar de que está prohibido la entrega a terceros la administración de tributos. No se podrá celebrar contrato o convenio alguno, en donde las entidades territoriales, o sus entidades descentralizadas, deleguen en terceros la administración, fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones, e imposición de sanciones de los tributos por ellos administrados.

En la revisión realizada a la facturación del sector residencial, se identificó que el municipio no ha liquidado adecuadamente el impuesto de alumbrado público a los contribuyentes, a pesar de que el Estatuto tributario establece que será el mayor valor que resulte de comparar el 7% del valor del consumo mensual de energía eléctrica sin tener en cuenta los descuentos por subsidios e incrementos por contribución con las tarifas mínimas para cada estrato socioeconómico. En los siguientes cuadros se ilustra lo anterior.

Cuadro No. 33

Facturado por el comercializador al sector residencial										
Tarifa	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Diciembre	Total
Estrato 1	3.200.967	2.106.384	3.233.082	2.106.227	3.240.383	2.110.034	3.240.268	3.592.445	2.113.219	24.943.008
Estrato 2	22.929.507	16.285.818	23.021.827	17.826.613	23.135.620	17.900.744	23.279.572	27.047.487	17.775.667	189.202.857
Estrato 3	9.390.449	6.030.675	9.383.979	5.997.295	9.369.453	6.030.690	9.485.545	8.577.873	5.966.538	70.232.497
Estrato 4	5.305.002	1.652.280	5.332.011	1.605.539	5.380.460	1.604.483	5.408.073	1.603.281	1.575.650	29.466.780
Estrato 5	9.716.699	662.227	9.713.173	558.857	9.656.199	564.505	9.675.020	590.200	618.000	41.754.880
Estrato 6	7.929.284	1.130.200	7.920.246	1.105.211	7.933.967	1.113.453	7.982.002	1.086.209	1.245.357	37.445.929
Total	58.471.907	27.867.585	58.604.318	29.199.742	58.716.083	29.323.909	59.070.480	42.497.496	29.294.432	393.045.953

Solo se tomaron esos meses por que fue la entregada por la entidad

Fuente: Municipio de Calima El Darién

Elaboro: Equipo auditor

Cuadro No. 34

Facturación aplicando el Estatuto tributario										
Tarifa	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Diciembre	Total
Estrato 1	8.753.509	4.151.618	9.083.904	3.577.529	9.327.825	3.690.849	9.545.316	3.769.256	3.859.290	55.759.096
Estrato 2	43.446.008	33.027.219	43.325.066	29.465.092	43.719.642	26.390.417	40.036.851	28.110.042	30.897.931	318.418.268
Estrato 3	11.186.740	6.613.961	10.253.167	7.247.677	10.732.867	5.960.444	10.709.059	7.948.031	9.269.735	79.921.681
Estrato 4	6.371.469	2.311.929	6.472.428	1.993.492	6.695.805	2.130.270	6.512.447	1.862.499	2.395.765	36.746.104
Estrato 5	9.627.176	793.426	10.217.544	587.669	11.231.897	547.637	10.274.547	589.412	800.183	44.669.490
Estrato 6	10.272.566	2.853.485	10.017.406	1.372.551	9.520.873	1.392.954	9.484.956	1.256.175	2.034.919	48.205.886
Total	89.657.467	49.751.639	89.369.516	44.244.010	91.228.909	40.112.570	86.563.176	43.535.415	49.257.824	583.720.526

Cuadro No. 37

Cobro de alumbrado	
Mes	Valor
Enero	5.529.300
Febrero	5.960.270
Marzo	5.423.910
Abril	20.000
Mayo	20.000
Junio	20.000
Julio	20.000
Agosto	6.085.550
Diciembre	5.089.830
Total	28.168.860

Fuente: Municipio de Calima El Darién
Elaboro: Equipo auditor

Configurándose un presunto detrimento patrimonial de **\$218.843.433**, el cual corresponde a la diferencia entre las tarifas cobradas y las tarifas establecidas en el estatuto tributario (\$190.674.573), más lo cobrado de más en las facturas de energía (**\$28.168.860**).

Criterio y fuente de criterio

Ley 594 de 2000, artículos 1 a 4, 11 a 17; Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 13, 23 y 24, Ley 1474 de 2011, artículos 82 a 84; Constitución Nacional, artículo 209; Contrato en sus componentes pre y contractual (estudio técnico realizado, Otro sí, y anexo técnico); manual de contratación de la entidad. Ley 1508 de 2012, artículos 7, 29, 31, 33 y 34; Ley 1819 de 2016, artículos 350 - 352.

Causa

Planeación antijurídica y antieconómica, con vulneración al principio de economía, eficiencia, eficacia y debido proceso, así como falencias en el seguimiento de las actividades por parte de la supervisión.

Falta de mecanismos de seguimiento y control para garantizar que los ingresos generados por este impuesto se utilicen adecuadamente para el mantenimiento y mejora del alumbrado público.

Efecto

Pérdida del recurso e inadecuada inversión del rubro de los impuestos, en favor de la comunidad y su zona rural, generando un presunto detrimento por valor de \$218.843.433.

Deficiencias en el mantenimiento del alumbrado público: La falta de ingresos derivados de este impuesto dificulta la realización de trabajos de mantenimiento y

mejoras en el sistema de alumbrado público, lo que puede resultar en un servicio deficiente y en áreas mal iluminadas.

Los hechos descritos constituyen un Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal y Penal, por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39; Ley 610 de 2000, artículos 5 y 6; Ley 599 de 2000, artículos 397 y 399.

18. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencias Disciplinaria y Fiscal – Seguimiento del producto y cumplimiento de las obligaciones contractuales

Contrato No. 310-13- 06.208- 2022 MC

Objeto: Consultoría para el acompañamiento técnico para el ajuste de los documentos que forman parte del proceso existente del esquema de ordenamiento territorial del municipio de Calima – El Darién (Valle del Cauca)

Valor: \$102.250.000

Plazo: Hasta 20 de diciembre de 2022

Etapas precontractual: En los estudios previos (folios 39 - 93) se especifica la necesidad de proponer una ruta metodológica que permitiera aunar los criterios técnicos, financieros y jurídicos para el proceso de ajuste del EOT; ajustar las modificaciones de los documentos relacionados al EOT, complementar el EOT en los aspectos normativos o de programación de actuaciones no consideradas en los documentos existentes acorde a lo dispuesto en el Decreto 1232 de 2020 y las recomendaciones de la CVC. Se requirió entre otros aspectos realizar el balance de la información disponible: El inventario de la información secundaria disponible (infraestructura, proyectos, estudios y/o cartografía) que sea pertinente como insumo para el proceso, considerando la información de carácter sectorial (agropecuaria, industrial, transporte, minero- energético e hidrocarburos y turismo); ii) Inventario de licencias ambientales, licencias urbanísticas, títulos y/o permisos mineros vigentes, así como las áreas adjudicadas para la exploración y explotación de hidrocarburos en jurisdicción del municipio; iii) El inventario de los instrumentos que se hayan expedido en la vigencia del Plan, que le desarrollen y complementen; iv) identificación de las áreas o inmuebles declarados patrimonio cultural; planes de especial manejo y protección PEMP; v) información de detalle de la cual disponen los prestadores de servicios públicos domiciliarios sobre las capacidades de infraestructura y fuentes de abastecimiento, la proyección de la expansión, reposición y/o ampliación de la capacidad de redes para cubrir el déficit de cobertura actual y proyectado, el catastro de redes matrices de las infraestructuras de servicios públicos domiciliarios, así como los planes de expansión para ampliar el perímetro de servicios; vi) inventario de información primaria que se debe elaborar; vii) determinación de recursos necesarios para adelantar el proceso; viii) determinantes ambientales y estudios aportados por la autoridad ambiental competente; ix) información correspondiente a las demás determinantes establecidas en la ley.

Así como en la dimensión ambiental, caracterización geográfica, caracterización de los elementos que constituyen el sistema biofísico, identificación de las áreas de conservación y protección ambiental, planes de manejo y demás instrumentos emanados de la autoridad ambiental, caracterización de la cobertura y uso actual del suelo, aptitud potencial de uso, identificación y análisis de los factores y áreas de degradación ambiental y la determinación de los conflictos de uso del suelo y estudios para la incorporación de la gestión del riesgo (estudios básicos de amenazas). En la Dimensión funcional, determinar entre otros: iii) Servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas...v) Espacio público...vii) Patrimonio material (si existen).

En la dimensión institucional, ii) capacidad financiera del municipio precisando la disponibilidad de los ingresos corrientes para financiar las intervenciones y proyectos propuestos, luego de atender los compromisos de gasto recurrentes (funcionamiento, inversiones sectoriales sociales, así como procesos judiciales, sentencias o conciliaciones en contra del municipio, compromisos de deuda pública.

Se exigen condiciones de experiencia 2 contratos con entidades públicas o privadas, cuyo valor ejecutado supere el 100% del presupuesto del contrato. También se solicita un equipo de consultoría: 1 director del proyecto, 1 Arquitecto especialista en derecho urbano; Geólogo con magister profesional ambiental; 1 administrador público con especialización en servicios públicos domiciliarios; 1 Abogado.

Se observan los pre pliegos y después los pliegos, a folios 99- 208. Seguidamente, se presenta oferta, por errores de archivo documental, la propuesta y sus anexos no se encuentran dentro de la trazabilidad del contrato principal, por ende, se pierde la transparencia del contrato para determinar la oportunidad de la llegada de la misma. Se observa a folio 215 y s.s. el trámite de escogencia. Posteriormente, se realiza el informe preliminar de evaluación, adjudicándose el contrato en audiencia, luego se registra en el contrato la resolución de adjudicación (folios 226 - 227).

Etapla contractual: Se observa el contrato suscrito a folios 228 – 237, del 22 – 09- 2022. Por errores de archivo documental, se observa la aprobación de la póliza y luego la póliza de cumplimiento ambos de fecha 29 – 09- 2022, el acta de inicio, está calendada 01 -10- 2022, no se evidencia el nombramiento de supervisor, pero está suscrita por el secretario de Planeación de la época. El registro del contrato en el Secop I se hizo de manera extemporánea el 06- 10- 2022 (folios 224 - 225).

Sin que se evidencie ningún tipo de actuación contractual se observan las facturas electrónicas de venta FEDV12 del 30-11-2022 y FEDV15 del 27- 12 -2022, informes de quien funge como supervisor de facto, luego el pago. En la trazabilidad del expediente se observan 2 CD con información sobre el producto entregado.

Fuera de la trazabilidad se encuentra un segundo tomo de fortalecimiento de participación democrática en el ordenamiento territorial, en donde se observan 11 actas; también 5 A-Z que contienen la propuesta, con una serie de hojas de vida y

documentos complementarios del equipo de trabajo requerido, sin embargo, dentro de la información de la carpeta principal, la única SSI que se cancela es la del contratista suscribiente, así que no hay certeza sobre la intervención de otros profesionales, pues tampoco se anexaron al expediente los contratos y pagos de los intervinientes subcontratistas, que daban idoneidad a la propuesta.

No se observa en el entregable visible en las AZ, el documento técnico de la metodología, ni la cartografía base utilizada. Es más, señala el contratista como no hay coincidencia con la división zonal realizada por el gestor catastral frente a las veredas y la división existente según el acuerdo que aprobó el PBOT en 1999.

De otro lado, también se encuentran en A-Z, información correspondiente a Estudios básicos de amenaza por movimientos en masa, que no aparecen suscritos por el correspondiente profesional a cargo de tal punto. Sin embargo, llama la atención que para el desarrollo de los mismos se requiere la cartografía base, que no se tenía según documento aportado por el contratista, por cuanto el gestor catastral no había adelantado lo pertinente, en tanto, el cumplimiento en tales términos no era posible, a la luz de la norma vigente que rige la materia.

Apoyo Técnico Medioambiente

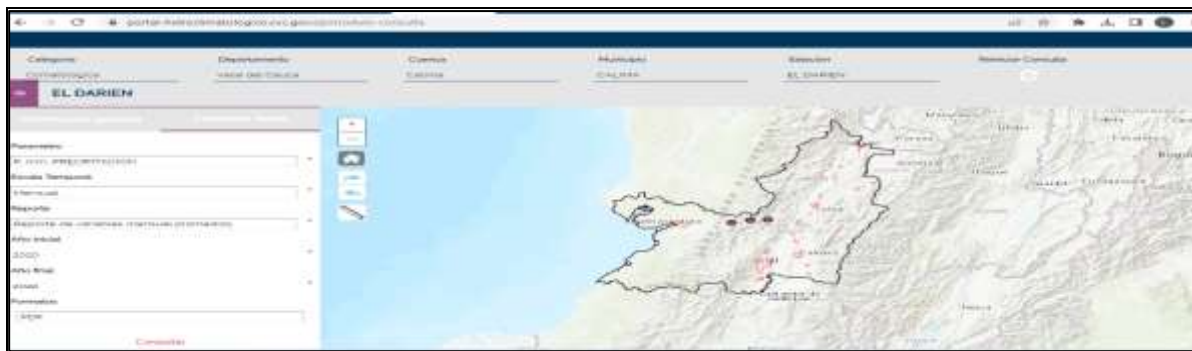
Se encontraron deficiencias significativas en la calidad y el cumplimiento de los resultados estipulados en el contrato. El objetivo del contrato era realizar un diagnóstico que permita conocer el estado actual del municipio, para confrontarlo con la imagen deseada de tal manera que permita formular adecuadamente la planeación del territorio del municipio.

Sin embargo, el análisis realizado reveló que:

- Información desactualizada: se encontró que los datos históricos con los que hizo los análisis del sistema biofísico son hasta 2017, cuando en el portal de la CVC, GeoCVC hay información reciente.

Imagen No. 11

Imagen de GEOCVC con los datos de la precipitación en el municipio de Calima el Darién



<https://portal-hidroclimatologico.cvc.gov.co/> <https://informacionambiental.cvc.gov.co/fichero>

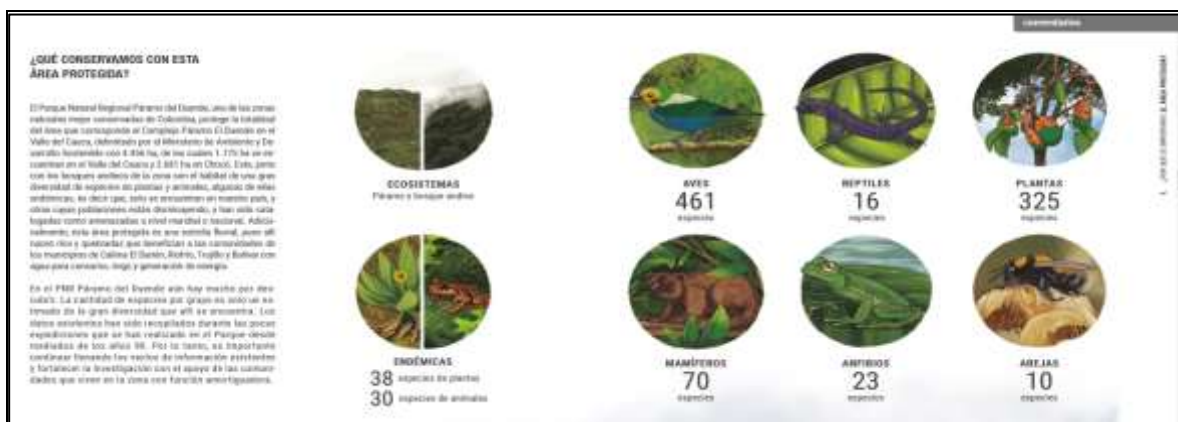
En la hidrología solo hace referencia al río Calima y al río Agua Clara y según la información de la CVC la cuenta del río Calima tiene 2 subcuentas, la del Río Calima y el Bajo San Juan.

Con respecto a los humedales no identifica su ubicación.

El área total del páramo está desactualizada, figura 14.513 hectáreas, según la última actualización de la CVC son 18.127 hectáreas.

No hay un análisis de las especies que se protegen con la conservación del páramo del Duende, a pesar de que existe información recopilada por la CVC.

Imagen No. 12



Fuente: imagen tomada de la Síntesis del Plan de Manejo Parque Natural Regional Paramo del Duende Valle del Cauca ambiental del Páramo CVC

El plan de manejo ambiental del parque natural del duende no establece como se va a realizar la protección del área, que actividades se van a desarrollar, cómo se van a mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados.

La identificación y análisis de los factores y áreas de degradación ambiental se hacen de manera general

La priorización de las amenazas que se deben evaluar y zonificar con el fin de incorporar esta información en el Plan de Ordenamiento Territorial, está basado en el estudio que realizó la EPSA en el 2017, no se evidencia el trabajo de los expertos que componen la consultoría.

- **Incoherencia en los datos:** se identificaron inconsistencias, la fuente de información que utilizan para todo el estudio es Equipo Consultor EOT 2019, el cual corresponde al mismo estudio que realizó el consultor a través del contrato 449 de diciembre de 2018

Imagen No. 13

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN NIT. 890.309.611-8 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO NOMBRE DEL DOCUMENTO: HOJA DE RUTA		Código: 300.13.06.7 Fecha: 03/01/2016 Versión: 1 Página: 2 DE 3	
CONTRATO N°	449 DE DICIEMBRE 11 DE 2018		
MODALIDAD DE CONTRATACION	CONSULTORIA		
MUNICIPIO	CALIMA EL DARIEN		
N.I.T. No.	890.309.611-8		
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR FABIO ZAPATA ARIAS ALCALDE MUNICIPAL		
C.C. No.	14.894.225 DE GUADALAJARA DE BUGA (V.)		
CONTRATISTA:	FREDY MARQUEZ OROZCO		
NIT:	16.453.673 YUMBO		
DIRECCION:	CARRERA 4 NO. 11-55 YUMBO VALLE		
OBJETO:	CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CALIMA- DARIEN- VALLE DEL CAUCA DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LA LEY 388 DE 1.997 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.		
VIGENCIA	DOCE (12) MESES		
VALOR:	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES, TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESO MCTE (\$330.364.651.00)		

Imagen No. 14



Imagen No. 15

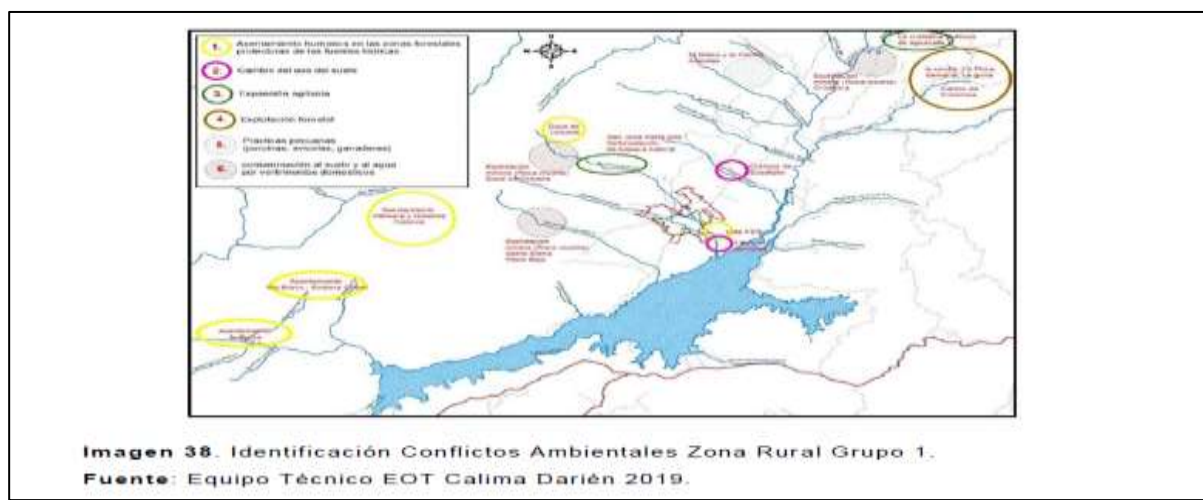


Imagen No. 16



Imagen No. 17



Como se puede observar la información base y los registros fotográficos corresponden al estudio realizado en el 2019, no se evidencia el análisis de los especialistas que componen la consultoría. No se encontró ni un documento firmado por los expertos que respalden los resultados del estudio.

- Falta de transparencia: Se detectaron irregularidades en la documentación, el diagnóstico de la cartografía es una fiel copia del diagnóstico realizado por el mismo contratista en el 2018, como se evidencia en los siguientes apartes:

Imagen No. 18

Actual

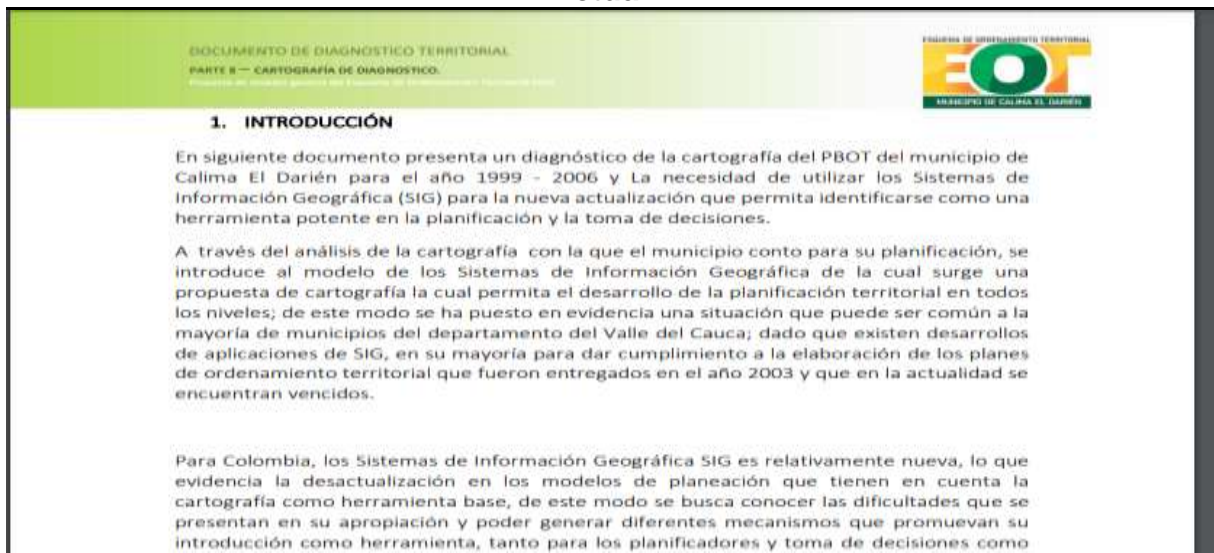


Imagen No. 19

***Anterior**

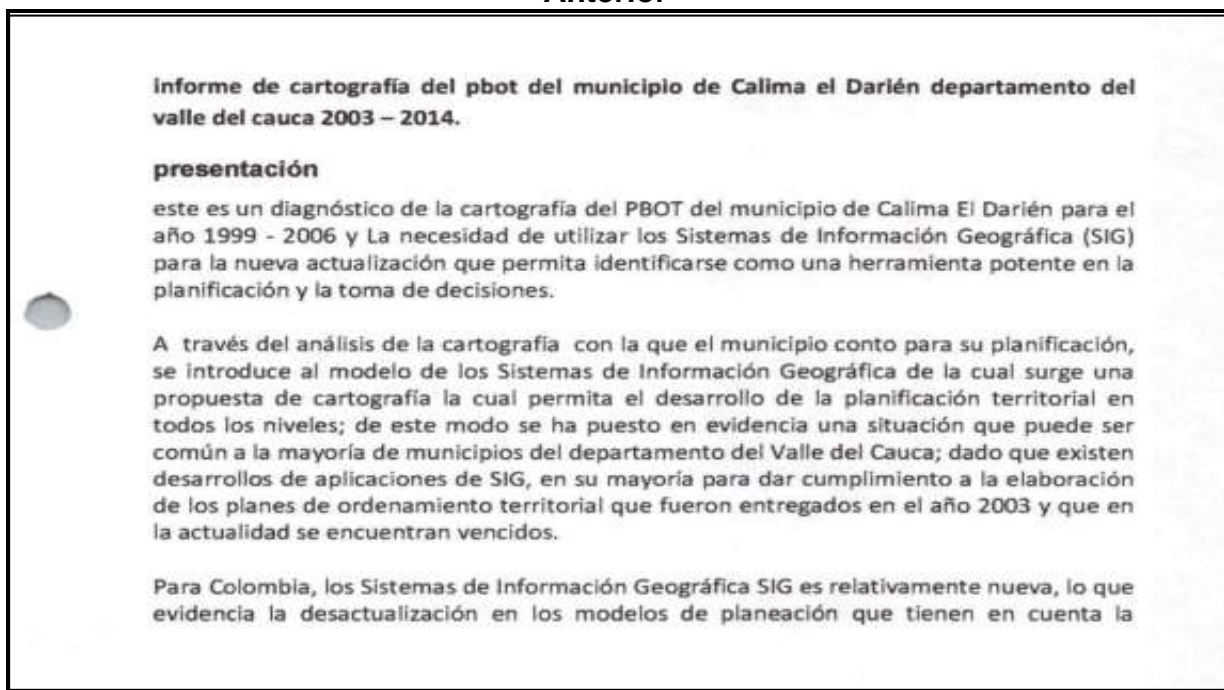


Imagen No. 20

Actual

3. METODOLOGÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA

Para la propuesta de cartografía del EOT del municipio de Calima El Darién, se plantean las siguientes fases tanto de levantamiento de información, como de sustento y soporte técnico para la elaboración del diagnóstico, en cada una de sus componentes.

1. Levantamiento de la información primaria

Se levantará la información de campo suficiente para la elaboración del EOT, esta información será recopilada en bases de datos y/o los diferentes formatos SHP o DWG que esté disponible con el fin de procesarla para la adecuada evaluación objetiva en los distintos componentes, las fuentes de información cartográfica primaria y secundaria serán:

- Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.
- Gobernación del Departamento del Valle del Cauca.
- Alcaldía Municipal de Calima Darién.

2. Levantamiento de información secundaria

Página 5



GAIPO
Gestión y Asistencia Integral
en Planes de Ordenamiento Territorial
Fredy Marquez Orozco - Consultor

Imagen No. 21

Anterior

CONSULTORIA EOT CALIMA EL DARIEN 2018



técnico para la elaboración del diagnóstico, en cada una de sus componentes.

Levantamiento de la información primaria

Se levantará la información de campo suficiente para la elaboración del EOT, esta información será recopilada en bases de datos y/o los diferentes formatos SHP o DWG que esté disponible con el fin de procesarla para la adecuada evaluación objetiva en los distintos componentes, las fuentes de información cartográfica primaria y secundaria serán:

- Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.
- Gobernación del Departamento del Valle del Cauca.
- Alcaldía Municipal de Calima Darién.

Levantamiento de información secundaria

Se realizará la consulta necesaria en las diferentes entidades de orden local, regional y nacional, con el ánimo de tener en cuenta instrumentos de planeación y ordenamiento territorial, la información secundaria de carácter ambiental, social y económica será investigada, procesada y actualizada por esta consultoría a través de fuentes secundarias.

Serán consultadas además las siguientes páginas web:

- SIAC. Sistema de Información Ambiental de Colombia. (<http://www.siac.gov.co>)
- SIGOT. Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial. IGAC (<http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/>).
- SIGOTANH. Sistema de consulta para Áreas de Reglamento Especial.
- IGAC-ANH. (<http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/>).
- ICANH. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. (www.icanh.gov.co).
- SINCv2. Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras (<http://200.93.135.173/>).

Imagen No. 22

Actual

LA SITUACIÓN DE LA CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN

En su momento, la cartografía con la que contaba el PBOT del municipio de Calima El Darién comprendía y abarcaba las necesidades primarias o básicas para un análisis de la situación del municipio, estos instrumentos siguen teniendo vigencia, dado que los cambios físicos han tenido transformaciones pero definitivamente los impactos sociales al medio ambiente suponen una representación mucho más precisa, para comprender el estado del municipio de tal manera que permita proyectar los lineamientos para una ocupación equitativa de su entorno social, económico y ambiental del municipio; de los retos que en materia de planificación eficiente para el municipio, tendremos al alcance del proyecto de actualización del EOT municipal, poderosas herramientas de análisis espacial a escala 1:5000 para el área urbana, 1:10.000 y 1:30.000 para el área rural cumpliendo con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y el decreto 1077 DE 2015 (Antes Decreto 1807 DE 2014) en cuanto a la incorporación de los estudios de gestión del riesgo en los POTs.

Imagen No. 23

Anterior

la situación de la cartografía del municipio de Calima el Darién

En su momento, la cartografía con la que contaba el PBOT del municipio de Calima El Darién comprendía y abarcaba las necesidades primarias o básicas para un análisis de la situación del municipio, estos instrumentos siguen teniendo vigencia, dado que los cambios físicos han tenido transformaciones pero definitivamente los impactos sociales al medio ambiente suponen una representación mucho más precisa, para comprender el estado del municipio de tal manera que permita proyectar los lineamientos para una ocupación equitativa de su entorno social, económico y ambiental del municipio.

De los retos que, en materia de planificación eficiente para el municipio, tendremos al alcance del proyecto de actualización del EOT municipal, poderosas herramientas de análisis espacial a escala 1:5000 para el área urbana, 1:10.000 y 1:30.000 para el área rural cumpliendo con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y el decreto 1077 DE 2015 (Antes

Criterio y fuente de criterio.

Ley 594 de 2000, artículos 1 a 4, 11 a 17; Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 13, 23 y 24, Ley 1474 de 2011, artículos 82 a 84; Constitución Nacional, artículo 209; Contrato en sus componentes pre y contractual (estudios previos, propuesta y minuta); manual de contratación de la entidad; Ley 388 de 1997, artículo 10; Ley 489 de 1998, Artículo 3º; Decreto Ley 019 de 2012, Numeral 11 del artículo 189; Decreto 1807 de 2014, Artículos 1 parágrafo 2 y 8º; Decreto 1232 de 2020 Artículo 2.2.2.1.2.1.2 Etapa de Diagnóstico.

Causa

Planeación antieconómica y falta de coherencia en los datos recopilados, así como falencias en el seguimiento de las actividades por parte de la supervisión, que no revisa el producto y acepta las falencias del mismo.

Efecto

Menoscabo al patrimonio público e inadecuada gestión en favor de la comunidad dada la deficiencia en la calidad y precisión de la información proporcionada, generando un presunto detrimento por valor de \$102.250.000.

Los hechos descritos constituyen un Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal, por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39; Ley 610 de 2000, artículos 5 y 6.

19. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y fiscal– Planeación y seguimiento

Convenio de Asociación No. 310-13- 08- 006- 2022

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para llevar a cabo las jornadas de educación ambiental y la feria ambiental en el Municipio de Calima El Darién

Valor: \$10.000.000

Plazo: Hasta 07 de noviembre de 2022

Etapa Precontractual: En los estudios previos se hacen especificaciones del objeto en cuanto a que se requiere una persona natural o jurídica que apoye la logística para la realización de la Feria Ambiental, con programación para 3 días del 03 al 05 de noviembre de 2022, la programación incluye premiación con balones de futbol y baloncesto que participaran en la Gincana. Videoclips con temas ambientales por parte de los alumnos de las I.E. y serían premiados, también se determina que se entregarán refrigerios el día viernes 4. El sábado de 9 am – 3 pm, se daría almuerzo a las personas que participaran con sus exposiciones en su stand en la tarde, y se manifiesta que en el cierre habría entrega de recordatorios. Se requirieron 10 ítems

entre los que se encuentran: 2 Servicios de transporte de estudiantes de veredas ITAF y Pablo Sexto por dos días ida y vuelta- 20 estudiantes por día; 60 almuerzos ejecutivos con su respectivo empaque; 20 camibuzos estampados CIDEA; 22 balones de basketball clásico No. 3 y otros 22 Zoom de futbol No. 5, cosido a máquina PVC y 15 balones de Volleyball en goma tipo costura vulcanizado; 2 Tablet 8.7 pulgadas, de 32 GB de almacenamiento. 3GB de RAM pantalla con calidad Full HD, Resolución 1340PX x 800 PX. Papelería y materiales para Gincana. En ningún aparte de los estudios previos se hacen requerimientos mínimos en relación con las Buenas Prácticas de Manufacturas, tampoco se establece el mecanismo de control para establecer qué tipo de proteína tendrían los almuerzos en procura de estandarizar el valor de los mismos; No se determina el objeto de la Tablet si iban a ser rifadas entre los asistentes, o cual sería su destinación, no se estableció la razón de la cantidad de balones requeridos (folios 4 - 27).

No se observa invitación; a folios 28 – 62, se encuentran la propuesta en donde *no* se indica, en qué ítems se encuentra representado el aporte de la Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL), no hay reporte de la idoneidad de la misma, o registro de la inscripción que determina la ley en tal caso, así como tampoco se establecieron los mecanismos para comprobar el aporte mismo, razón sobre la cual se fundamenta la modalidad de la contratación realizada.

Etapas Contractuales: Se observa el contrato suscrito a folios 66 - 73 del 27-10-2022. Se designa supervisor, acta de inicio del 27 – 10- 2022. La publicación en el Secop I, se realiza extemporánea el 01 -11- 2022 (folios 78 - 79).

A partir del folio 83 al 130, se encuentra la solicitud de pago, informes del contratista con fotografías, no se observan listados de la entrega de los balones.

Apoyo Técnico Medioambiente

- ✓ No se evidenció soportes del aporte de la fundación.
- ✓ No se evidenció soporte del servicio de transporte de estudiantes de veredas ITAF y Pablo Sexto al evento. Adicionalmente, el valor que se pagó por recorrido, es mayor al valor que el municipio paga por el mismo servicio, como se evidencia en el contrato 310-13-06. 123 de 2022, donde el valor pagado por ida y regreso es de \$220.000, para un total de total \$880.000 y en este evento se pagó \$3.000.000 por este servicio.

Imagen No. 24

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
NOMBRE DEL DOCUMENTO: OFICIO - CERTIFICADO

NIT: 890.309.611-8
MIPG

Código: 310
Fecha: 01/01/2020
Versión: 1
Página: 4

CONTRATO No. 310-13-08.123 DE 2022
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN - VALLE DEL CAUCA Y COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DARIEN - COOTRANS DARIEN
Enmbe - El Darién (Valle del Cauca), Inmbe (12) de Abril de 2022

Señor:
CARLOS ALFONSO CABAL ARZAYUS
C.C. No. 14.881.475 de Buga - Valle
Representante Legal
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE DARIEN - COOTRANS DARIEN
Nº No. 900.277.387-1
CALLE 7 # 10-01

REFERENCIA: ACEPTACIÓN DE OFERTA - INVITACIÓN PÚBLICA No. 310-13-07.020 DE 2022

Consejo Asesor:

Por medio de la presente me permito comunicarle la aceptación de su oferta en la invitación pública de la referencia de conformidad con el numeral 6 del Artículo 22.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes, afines y modificatorias, en los siguientes términos:

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CONTRIBUIR CON LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA Y LA PERMANENCIA ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO SEXTO DEL MUNICIPIO DE CALIMA - EL DARIEN (VALLE).

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Para el logro del objeto el Contratista deberá realizar, entre otras, las rutas que se relacionan a continuación, conforme a las especificaciones técnicas, las cantidades solicitadas y en otras condiciones.

No.	RUTA	VALOR DIA	DIAS	VALOR TOTAL
1	DARIEN - MIRADOR	\$110.000.00	27	\$2.970.000.00
2	VICEVERSA - MIRADOR	\$110.000.00	27	\$2.970.000.00
3	DARIEN - BAJO MIRADOR	\$110.000.00	27	\$2.970.000.00
4	VICEVERSA - GAVIOTA	\$192.000.00	27	\$5.184.000.00
5	MIRADOR - VICEVERSA	\$222.000.00	27	\$5.994.000.00

- ✓ No se evidenciaron soportes de la entrega de los balones. El soporte que mostraron para la entrega de los balones, es el listado de los niños que participaron en la Yincana (18 participantes), teniendo en cuenta que en el registro fotográfico se observan algunos balones se dividirá el soporte, es decir se tendrá en cuenta el registro fotográfico y el listado entregado, por lo tanto, se tomará como soporte 6 balones de basketball, 6 de futbol y 6 de voleibol,, quedando pendiente por justificar 16 balones de basketball, 16 balones de futbol y 9 valones de voyeyboll

Imagen No. 25



- ✓ Según las facturas presentadas por la fundación COMP 2991 y COMP 2992, el valor de cada table es \$450.000, por lo tanto, el valor total seria \$900.000 y se pagaron a \$700.000 para un valor total de \$1.400.000

En el siguiente cuadro se ilustra el consolidado:

Cuadro No. 38

Actividad	Unidad	Cant	Valor Unitario	Valor Total	Observación	Valor sin soporte
Soporte logístico planta eléctrica UPS, extensiones de largo alcance encauchetadas y RAC de conexiones para el sonido y amplificación	Und	1	1.800.000	1.800.000		
Servicio de transporte de estudiantes de veredas ITAF y Pablo Sexto por dos días ida y vuelta 20 estudiantes por día	Und	2	1.500.000	3.000.000	No se evidencia soporte del transporte. El municipio realizó el contrato 310-13-06. 123 de 2022, donde establece los precios que paga el municipio para el transporte de los alumnos al colegio y el mayor valor de recorrido es de 220.000, por lo tanto el valor a pagar sería 440.000 diarios, para un total \$880.000	2.120.000
Almuerzo ejecutivo con su respectivo empaque	Und	60	24.700	1.482.000		
Camibuzos estampados CIDEA	Und	20	65.000	1.300.000		
Balón basketball clásico N°3 cubierta en caucho tamaño N° 3 rebota aproximadamente de 120 a 140 cm	Und	22	52.000	1.144.000	No se evidenciaron soportes de la entrega de los balones. El soporte que entregaron como la entrega de los balones son los niños que participaron en la Gincana (18 participantes), teniendo en cuenta que en el registro fotográfico se observan algunos balones se dividirá el soporte, es decir se tendrá como soporte 6 balones de basketball, 6 de fútbol y 6 de voleibol para completar el soporte entregado	832.000
Balón Zoom de fútbol #5, 32 panes cosido a máquina PVC 1.6 MM peso oficial 240-260 gramos	Und	22	52.000	1.144.000		832.000
Balón de voleibol material de la pelota goma tipo costura vulcanizado	Und	15	52.000	780.000		468.000
Table 8.7(pulgadas) 32 GB de almacenamiento, 3 GB de RAM, pantalla con calidad full HD, resolución 1340 px x 800 px lector de micro SD, Android 11, cámara trasera 8px. Delantera 2PX // 8"(PULGADAS) 32 GB de almacenamiento, 2 GB de RAM, pantalla con calidad FULL HD, resolución 1280 px x 800px lector micro-SD, Android 10, cámara trasera 8px - delantera 2px	Und	2	700.000	1.400.000	Según las facturas presentadas por la fundación COMP 2991 y COMP 2992, el valor de cada tabla es \$450.000, por lo tanto el valor total sería \$900.000	500.000
Pendón 2 metros x 5 de largo y de ancho 1 metro	Und	1	600.000	600.000		
Papelería y materiales para la gincana	Und	1	350.000	350.000		
Total				13.000.000		4.752.000

Fuente: Municipio de Calima El Darién

Elaboro: Equipo auditor

Criterio y fuente de criterio.

Ley 594 de 2000, artículos 1 a 4, 11 a 17; Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 13, 23 y 24, Ley 1474 de 2011, artículos 82 a 84 y 91; Constitución Nacional, artículo 209; Contrato en sus componentes pre y contractual (estudios previos, propuesta y minuta); manual de contratación de la entidad; Decreto 092 de 2017, artículos 1 -3, 7, 8 y 9.

Causa

Planeación antieconómica y sin un análisis de costos acertado, falencias de control y seguimiento de las actividades por parte de la supervisión.

Efecto

Menoscabo al patrimonio público, representado en el mayor valor pagado por el servicio de transporte y por los desembolsos realizados sin el respectivo soporte. Daño que se cuantifica en la suma de \$4.752.000

Los hechos descritos constituyen un hallazgo administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal, por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39; Ley 610 de 2000, artículos 5 y 6.

20. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria – Fiscalización de los impuestos municipales y gestión de cobro persuasivo y coactivo

Condición (situación detectada de incumplimiento)

En la vigencia 2022, no se realizó Fiscalización por parte del municipio, de los impuestos de Industria y Comercio, Avisos y tableros, entre otros, tal labor se delegó en contratista. También, se requirió información del manejo de las liquidaciones y de los mandamientos de pago para el cobro coactivo del impuesto Predial, con la información aportada y acorde a muestra selectiva pudo evidenciarse lo siguiente:

- 1.- Existe un alto riesgo sobre la cartera, debido a que no se posee Software propio de la entidad y se delega el manejo de la base de datos a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), que estandariza los valores, y los acumula, tal circunstancia viola el debido proceso y gesta nulidades en las acciones de cobro, que al ser consultadas ante la jurisdicción ordinaria o contenciosa, generaran reconocimiento de prescripciones o pérdidas de la facultad sancionatoria, en detrimento del interés municipal
- 2.- Acorde a la circunstancia anterior, existe un inadecuado manejo de los capitales a incorporar en las liquidaciones y mandamientos de pago, pues la acumulación vá en contravía de la norma procesal que implica obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles, como quiera que no es posible determinar a qué vigencia corresponde el capital exigido, ni desde qué fechas se cobran los intereses.
- 3.- Se negó la existencia de prescripciones mediante certificación, no obstante, según los informes del contratista encargado de manejo de la cartera, se expidieron resoluciones de pérdida de la facultad sancionatoria; misma que, independientemente de su nombre, implica la prescripción de las sumas a que hay lugar. Sobre tal aspecto no se entregó la información requerida, por tanto, deberá revisarse en próxima auditoría, para determinar si existen sumas que constituyan detrimento por dicho concepto.
- 4.- La cartera presenta inconsistencias que se determinan a partir de una muestra seleccionada de 112 predios, en donde se avizora lo siguiente:

En el siguiente cuadro, vemos que no se realiza la depuración de la cartera, en donde se observan varios predios, con cuyos recursos se está contando, sin embargo, no se observó gestión:

Cuadro No. 39

Nación- Municipio. Personas jurídicas estatales							
Pedio	Identificación	Propietario	Dirección	Periodo	Predial Unificado	Int. Predial Unificado	Total, sin depurar
000000050030000	32196	LA-NACION	BALDIAS	2018	5.546.256	6.972.243	
000000050030000	32196	LA-NACION	BALDIAS	2019	5.712.640	5.510.541	
000000050030000	32196	LA-NACION	BALDIAS	2020	5.884.016	4.019.327	
000000050030000	32196	LA-NACION	BALDIAS	2021	6.969.626	2.924.420	

Nación- Municipio. Personas jurídicas estatales							
Predio	Identificación	Propietario	Dirección	Periodo	Predial Unificado	Int. Predial Unificado	Total, sin depurar
010002090072801	30441	MUNICIPIO-DE-CALIMA	LO	2021	5.429.870	2.278.346	
010000460001000	35287	INCIVA-INSTITUTO-VALLECAUCANO-DE-	C 10 11A 41 MUSEO ARQUEOLOGICO	2016	9.476.702	17.847.294	
No deben estar cuantificados como cuenta por cobrar					\$39.019.110	\$39.552.171	\$78.571.281

Fuente: Municipio de Calima E Darién

Elaboración: Equipo Auditor

Vemos que, en la muestra de 120 predios, hay una serie de predios (19) a nombre de la misma persona jurídica que no se encuentra debidamente identificada (Nit), por tanto, la obligación descrita en las facturas y los mandamientos de pago (si existen), no resultaría exigible, al omitir, una parte sustancial del debido proceso:

Cuadro No. 40

Persona jurídica sin identificar con múltiples predios sin clasificar las obligaciones							
Predio	Identificación	Propietario	Dirección	Periodo	Predial Unificado	Int. Predial Unificado	Total Sin Identificar
000000010894000B14 : E34B12B14:E33	31130	FONDO-PARA-EL-PLAN-DE-VIVIENDA-DE	LOTE	2013	11.606.944	32.259.620	43.866.564
000000010894000	31130	FONDO-PARA-EL-PLAN-DE-VIVIENDA-DE	LOTE	2014	12.683.220	31.491.268	44.174.488
000000010894000	31130	FONDO-PARA-EL-PLAN-DE-VIVIENDA-DE	LOTE	2015	13.063.716	28.656.120	41.719.836
000000010894000	31130	FONDO-PARA-EL-PLAN-DE-VIVIENDA-DE	LOTE	2016	16.329.645	30.902.384	47.232.029
000000010894000	31130	FONDO-PARA-EL-PLAN-DE-VIVIENDA-DE	LOTE	2017	18.479.000	28.974.125	47.453.125
000000010894000	31130	FONDO-PARA-EL-PLAN-DE-VIVIENDA-DE	LOTE	2018	19.033.424	23.927.070	42.960.494
000000010894000	31130	FONDO-PARA-EL-PLAN-DE-VIVIENDA-DE	LOTE	2019	18.379.155	17.728.946	36.108.101
000000010894000	31130	FONDO-PARA-EL-PLAN-DE-VIVIENDA-DE	LOTE	2020	18.930.525	12.931.300	31.861.825
000000010894000	31130	FONDO-PARA-EL-PLAN-DE-VIVIENDA-DE	LOTE	2021	22.423.206	9.408.665	31.831.871
000000010642802	31042	FONDO-PARA-LA-REHABILITACION-SOCI	EL REFUGIO DEL SOL LO 109	2012	5.022.228	15.400.790	20.423.018
000000010894000	31130	FONDO-PARA-EL-PLAN-DE-VIVIENDA-DE	LOTE	2012	5.803.472	17.796.495	23.599.967
000000010642802	31042	FONDO-PARA-LA-REHABILITACION-SOCI	EL REFUGIO DEL SOL LO 109	2013	5.172.900	14.377.238	19.550.138

Persona jurídica sin identificar con múltiples predios sin clasificar las obligaciones							
Pedio	Identificación	Propietario	Dirección	Período	Predial Unificado	Int. Predial Unificado	Total Sin Identificar
000000010642802	31042	FONDO-PARA-LA-REHABILITACION-SOCI	EL REFUGIO DEL SOL LO 109	2014	5.328.084	13.229.142	18.557.226
000000010642802	31042	FONDO-PARA-LA-REHABILITACION-SOCI	EL REFUGIO DEL SOL LO 109	2015	5.487.924	12.038.122	17.526.046
000000010642802	31042	FONDO-PARA-LA-REHABILITACION-SOCI	EL REFUGIO DEL SOL LO 109	2016	6.859.905	12.981.753	19.841.658
000000010642802	31042	FONDO-PARA-LA-REHABILITACION-SOCI	EL REFUGIO DEL SOL LO 109	2017	7.763.000	12.171.986	19.934.986
000000010642802	31042	FONDO-PARA-LA-REHABILITACION-SOCI	EL REFUGIO DEL SOL LO 109	2018	7.995.728	10.051.494	18.047.222
000000010642802	31042	FONDO-PARA-LA-REHABILITACION-SOCI	EL REFUGIO DEL SOL LO 109	2019	7.720.875	7.447.730	15.168.605
000000010642802	31042	FONDO-PARA-LA-REHABILITACION-SOCI	EL REFUGIO DEL SOL LO 109	2020	7.952.505	5.432.297	13.384.802
No hay identificación del deudor obligado					216.035.456	337.206.545	553.242.001

Fuente: Municipio de Calima E Darién

Elaboración: Equipo Auditor

Vemos que, en 4 personas jurídicas de la muestra, se encuentran concentrados más de \$700 millones de pesos, cuyas obligaciones no fueron discriminadas en la base de datos, encontramos sin identificar los periodos presuntamente en mora, lo que lesiona el alcance y legalidad de las liquidaciones, facturación y mandamientos de pago realizados:

Cuadro No. 41

Personas Jurídicas (4)						
Pedio	Identificación	Dirección	Periodo	Predial Unificado	Int. Predial Unificado	Total sin identificar
000000010156000	891300750-6	BERLIN 1	2016	34.088.730	64.509.853	98.598.583
000000010156000	891300750-6	BERLIN 1	2017	38.576.000	60.485.191	99.061.191
000000010156000	891300750-6	BERLIN 1	2018	38.699.152	48.649.014	87.348.166
000000010156000	891300750-6	BERLIN 1	2019	37.368.870	36.046.853	73.415.723
000000010156000	891300750-6	BERLIN 1	2020	38.489.940	26.292.189	64.782.129
000000040815804	805014327	LOS PINOS I	2016	6.709.845	12.697.778	19.407.623
000000040815804	805014327	LOS PINOS I	2017	7.593.000	11.905.435	19.498.435
000000040815804	805014327	LOS PINOS I	2018	7.820.832	9.831.630	17.652.462
000000040815804	805014327	LOS PINOS I	2019	7.551.990	7.284.819	14.836.809
000000040815804	805014327	LOS PINOS I	2020	7.778.550	5.313.469	13.092.019
000000011822000	31084	LO 3B-1 3B-2 3B-3	2017	21.458.004	0	21.458.004

Personas Jurídicas (4)						
Pedio	Identificación	Dirección	Periodo	Predial Unificado	Int. Predial Unificado	Total sin identificar
000000011822000	31084	LO 3B-1 3B-2 3B-3	2019	34.326.193	25.147.285	59.473.478
000000011822000	31084	LO 3B-1 3B-2 3B-3	2020	35.355.980	18.925.969	54.281.949
000000011822000	31084	LO 3B-1 3B-2 3B-3	2021	41.879.153	14.177.627	56.056.780
000000040001000	32359	LAS ANTILLAS 1	2020	8.399.670	5.737.751	14.137.421
000000040315000	805012921-0	LAS ANTILLAS 2	2020	6.850.875	4.679.781	11.530.656
Monto sin definición e identificación				372.946.784	351.684.644	724.631.428

Fuente: Municipio de Calima E Darién

Elaboración: Equipo Auditor

En 4 personas naturales, se encuentra representados más de \$540 millones de pesos, con riesgo de prescripción o pérdida de facultades de cobro, como quiera que los valores no se encuentran debidamente desagregados, como vemos en el siguiente cuadro, no existe discriminación alguna de los capitales a partir de la vigencia inicialmente señalada, por tanto, habría violación al debido proceso en los términos antes referidos:

Cuadro No. 42

Personas Naturales (4)						
Pedio	Identificación	Dirección	Periodo	Predial Unificado	Int. Predial Unificado	Total, sin identificar
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2018	10.211.984	12.837.567	23.049.551
000000011241816	1130596172	PARCELACION FLORENCIA I LO 62	2020	10.744.000	7.339.146	18.083.146
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2020	10.156.770	6.938.013	17.094.783
000000011241816	1130596172	PARCELACION FLORENCIA I LO 62	2021	18.165.440	7.622.128	25.787.568
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2021	12.030.702	5.048.022	17.078.724
000000040003000	38863025	ARIZONA	1998	5.180.780	21.554.739	26.735.519
000000040003000	38863025	ARIZONA	1999	5.672.960	22.402.292	28.075.252
000000040003000	38863025	ARIZONA	2000	6.240.256	23.322.333	29.562.589
000000040003000	38863025	ARIZONA	2001	6.240.256	22.002.144	28.242.400
000000040003000	38863025	ARIZONA	2002	6.365.062	21.095.598	27.460.660
000000040003000	38863025	ARIZONA	2003	6.587.834	20.440.204	27.028.038
000000040003000	38863025	ARIZONA	2004	7.207.572	20.838.244	28.045.816
000000040003000	38863025	ARIZONA	2005	7.387.764	19.796.252	27.184.016
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2011	6.227.448	20.734.462	26.961.910
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2012	6.414.276	19.669.541	26.083.817
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2013	6.606.708	18.362.275	24.968.983

Personas Naturales (4)						
Predio	Identificación	Dirección	Periodo	Predial Unificado	Int. Predial Unificado	Total, sin identificar
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2014	6.804.912	16.895.970	23.700.882
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2015	7.009.056	15.374.825	22.383.881
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2016	8.761.320	16.580.010	25.341.330
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2017	9.915.000	15.546.212	25.461.212
000000040868000	14887979	LOTE 2	2019	5.241.797	5.056.355	10.298.152
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2019	9.860.940	9.512.085	19.373.025
000000040868000	14887979	LOTE 2	2020	5.399.053	3.688.053	9.087.106
000000040868000	14887979	LOTE 2	2021	6.395.182	2.683.386	9.078.568
	Totales en riesgo de prescripción			190.827.072	355.339.856	546.166.928

Fuente: Municipio de Calima E Darién

Elaboración: Equipo Auditor

Así las cosas, se evidencian inconsistencias, que lesionan de fondo las 554 actuaciones administrativas que de manera puntual se realizaron durante la vigencia y que se afectan por los errores que debieron ser detectados oportunamente.

Fuente de criterio y criterio

Lo anterior, vulnera lo dispuesto en la Estatuto Tributario, artículos 823 a 833-1; Ley 1066 de 2006, artículos 1 a 3, 5 y 6 y Reglamento Interno de Cartera

Causa

La causa de tales circunstancias es la falta de revisión sobre las actuaciones a cargo de la tesorería, así como inadecuada labor de seguimiento y cobro de los montos correspondientes.

Efecto

Pérdida de facultad sancionatoria y capacidad del recaudo de recursos a favor del municipio.

Los hechos descritos originan un Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, que genera la aplicación de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39.

21. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Procedimientos y gestión del riesgo

Condición (situación detectada de incumplimiento)

En el Municipio se hizo evidente, que no se trabajó en la creación y seguimiento de procesos y procedimientos, que permitieran escindir las obligaciones existentes en las distintas dependencias, especialmente en lo atinente a: La contratación, defensa

jurídica, cobro de ingresos tributarios y planeación de la entidad. Ante la inexistencia de tales derroteros se constituyen elevados riesgos que, sin estar contemplados para la vigencia, se materializaron, ante la falta de coordinación entre las diferentes secretarías y la alta dirección.

La gestión del riesgo fue omitida por parte de la secretaría de planeación y cada dependencia omitió el deber de realizar seguimiento a los riesgos propios, con el fin de crear mecanismos para su control. Pues más allá del cumplimiento en la publicación del mapa de riesgos, se trata de controlar materialmente los procedimientos que se realizan al interior de cada secretaría en pro del interés general.

Criterio y fuente de criterio

Constitución Nacional, artículos 6; 209 y 315 numeral 3; Ley 498 de 1998, artículos 3 y 4; caracterización del proceso y procedimientos contratación pública del municipio; Decreto 1083 de 2015, artículos 2.2.1.4.1; 2.2.2.2.1; 2.2.2.6.1.

Causa

Errores de planeación estratégica y del proceso de contratación, que implica que no se desarrollan procedimientos y controles a pesar de las disposiciones legales.

Efecto

Realización de funciones sin parámetros de control, que incrementan los riesgos de la gestión de administración.

Los hechos descritos originan un Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, que genera la aplicación de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39.

22. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria –Defensa Judicial y Administrativa del Municipio - Comité de Conciliación

Condición (situación detectada de incumplimiento)

Se pudo observar en la auditoría que no se tiene una línea de base jurídica real, que permita que el municipio realice una adecuada cuantificación de los saldos en contra, producto de sentencias adversas, pues no existe aún a la fecha, información confiable en tal sentido. Por tanto, lo provisto tampoco tiene incidencia real frente a lo adeudado. Se constató que una cuenta muy importante producto de transacción se encontraba desfasada en miles de millones de pesos, con el agravante de no ser la única cuenta pendiente de pago por parte del Municipio.

En sitio se pudo constatar que existen al menos dos cuentas embargadas, cuyo demandante se desconoce, y que no fue objeto de seguimiento a pesar de tratarse de embargos de la vigencia 2022.

De otra parte, se evidenció que en el ítem de inventarios de bienes inmuebles existe un desfase considerable entre los bienes que verdaderamente hacen parte del municipio y aquellos que se tienen registrados para como tales. Es más, en la actualidad se encuentran embargados 30 inmuebles, medidas que datan de varios años, sin que ninguna de las administraciones a cargo, haya indagado por tales circunstancias, a saber:

Cuadro No. 43

Bienes Inmuebles del Municipio de Calima EL Darién Embargados por más de 10 años			
000000010007000	51766	LA PRIMAVERA	373-2805
000000010227000	51939	SAN JOSE	373-96480
000000012088813	51778	LLANITOS	373-82941
000000012089813	51779	LLANITOS	373-82942
000000012095813	51780	LLANITOS	373-82948
000000012097813	51781	LLANITOS	373-82950
000000012098813	51782	LLANITOS	373-82951
000000012099813	51783	LLANITOS	373-82952
000000012100813	51784	LLANITOS	373-82953
000000012101813	51785	LLANITOS	373-82954
000000012102813	51786	LLANITOS	373-82955
000000020139000	51772	LA CRISTALINA	373-21237
000000030100000	51833	LA GAVIOTA	373-90991
000000012354000	55080	EL VERGEL	373-101881
010055000000000	55087	VEREDA SAN JOSE	373-13647
000000010007000	51766	LA PRIMAVERA	373-2805
000000030105000	51937	JIGUALES	373-71954
000000030158000	51831	LA GUAIRA	373-71962
000000030314000	51832	LA RIVERA	373-71926
000000040203000	51941	LA PRIMAVERA	373-71972
010002370011000		PARCELACION CALAMAR	373-57604
010002480002000	51786	VEREDA SAN JOSE	373-57546
010002480003000	51795	VEREDA SAN JOSE	373-57554
010002480004000	51794	VEREDA SAN JOSE	373-57553
010002480005000	51793	VEREDA SAN JOSE	373-57552
010002480006000	51792	VEREDA SAN JOSE	373-57551
010002480007000	51791	VEREDA SAN JOSE	373-57550
010002480008000	51790	VEREDA SAN JOSE	373-57549
010002480009000	51789	VEREDA SAN JOSE	373-57548
010002480010000	51787	VEREDA SAN JOSE	373-57547

Fuente: Municipio de Calima E Darién

Elaboración: Equipo Auditor

Algunos de los embargos son del departamento del Valle del Cauca, otros de la Nación – Ministerio de Hacienda, a pesar de llevar más de 10 años tales embargos, hasta la fecha se ha hecho caso omiso del deber de cuidado y no se ha indagado el

estado del cobro que conllevó al embargo de los inmuebles, es decir no se realizó defensa jurídica idónea.

Se evidenció que no se realizaron las reuniones del comité de conciliación en la forma y términos de ley, pues no se dieron en la periodicidad, determinada por la ley, tampoco se están emitiendo lineamientos en materia de defensa jurídica de la entidad que permitan un derrotero claro de las actuaciones a seguir en cuanto a los procesos en contra.

Criterio y fuente de criterio

Constitución Nacional, artículo 6; Ley 498 de 1998, artículos 3 y 4; Decreto 1069 de 2015, artículos 2.2.4.3.1.2.4, 2.2.4.3.1.2.5 y 2.2.4.3.1.2.6.

Causa

Desconocimiento normativo, sobre implicaciones y alcances de la defensa jurídica del municipio, así como omisión de los deberes a cargo.

Efecto

Riesgos por pago de intereses y sanciones al municipio, que pueden lesionar el marzo de mediano plazo del municipio y los intereses de la comunidad.

Las conductas descritas generan una observación de índole administrativa con presunta incidencia disciplinaria, a la luz de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019 numeral 1, Artículos 38 y 39.

23. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria – Cesiones Urbanísticas y medio ambiente

Condición (situación detectada de incumplimiento)

Se evidencia una falta de estructura dentro de los expedientes correspondientes a las licencias urbanísticas emanadas del municipio anteriores a la vigencia 2020, de las cuales se desconoce si cumplieron con la obligación de realizar las cesiones gratuitas que ordena la ley, o si se expidieron conforme a los lineamientos legales para todos los efectos. No hay evidencias de seguimiento y control a este respecto. De otro lado, aunque para la vigencia 2023 se señaló un procedimiento en materia de licencias urbanísticas, se observa la inexistencia de lineamientos frente al tema de las cesiones gratuitas en los términos que señala el legislador, lo que impide conocer si efectivamente se han realizado las entregas correspondientes por parte de los distintos urbanizadores del municipio, sean ellos o no personas naturales o jurídicas. El estado actual de las cesiones a recibir es el siguiente:

Cuadro No. 44

Municipio de Calima El Darién	
Cesiones a recibir	
CEDULA CATASTRAL	URBANIZACION

Municipio de Calima El Darién	
Cesiones a recibir	
00-00-0001-2166-000	Urbanización Galilea
00-00-0001-2166-000	Condominio La Riviera
00-00-0229-0004-000	PORTAL DE SAN ISIDRO
00-00-0001-0123-000	VIS FRANCISCO HURTADO

Fuente: Municipio de Calima E Darién

Elaboración: Equipo Auditor

Esta falta de lineamiento, es un riesgo en cuanto a que no se generan controles por parte del municipio en orden a preservar el medio ambiente, como quiera que la zona rural del municipio es parte de la zona de reserva del pacífico, y por tanto, zona de especial protección para el sostenimiento ambiental y de distintos ecosistemas.

Criterio y fuente de criterio

Constitución Nacional, artículo 6, Ley 498 de 1998, artículos 3 y 4; Ley 388 de 1997, artículos 1- 15; 37 y 38

Causa

Falta de procedimientos, que determinen controles para la urbanización en el municipio. Omisión de consultar y estar acorde a los lineamientos de la autoridad ambiental.

Efecto

Riesgos de sostenibilidad ambiental para el municipio, en contra de los intereses a un ambiente sano, para la comunidad.

Los hechos descritos constituyen un Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 734 de 2002, numeral 1º de los artículos 34 y 35 y Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39.

GESTIÓN AMBIENTAL

24. Hallazgo Administrativo Incumplimiento de las metas del plan de desarrollo pacto 4

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Durante el proceso auditor se identificó un incumplimiento significativo de los indicadores ambientales específicos establecidos en el plan de desarrollo.

Se fijó un indicador para aumentar la extensión de áreas protegidas dentro del municipio durante el período del plan. Sin embargo, no se ha registrado ningún aumento en las áreas protegidas, y algunas zonas de alto valor ecológico han sido degradadas. En el siguiente cuadro se ilustra el resultado de cada uno de los indicadores ambientales

Cuadro No. 45

Indicadores Ambientales					
Programa	Nombre del indicador	Unidad Medida	Meta Cuatrenio	Valor Físico Programado 2022	Valor Físico Ejecutado 2022
Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	Áreas en proceso de restauración	Hectáreas	40	0,5	No ejecutado
	Sectores que incorporan alternativas para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	Porcentaje	1	0,5	0
	Miles de hectáreas en áreas protegidas	Número	1	0,5	0
	Áreas bajo sistemas sostenibles de conservación (restauración*, sistemas agroforestales, manejo forestal sostenible)	Número	3	0,5	No ejecutado
	Áreas bajo sistemas sostenibles de conservación (restauración*, sistemas agroforestales, manejo forestal sostenible)		1	0,5	No reportado
	Áreas en proceso de restauración		1	0,5	0
	Áreas en proceso de restauración		1	0,5	0
Gestión de la información y el conocimiento ambiental	Sistemas de información ambiental interoperables	Número	1	0,25	0,25
	Sistemas de información ambiental interoperables	Hectáreas	6	3	0
Ordenamiento ambiental territorial	Municipios y departamentos con planes de ordenamiento territorial (pod y pot) que incorporan el componente de gestión del riesgo	Hectáreas	12	0,5	1
	Índice municipal de riesgo de desastres ajustado por capacidades	Hectáreas	12	1	0,32
	Índice municipal de riesgo de desastres ajustado por capacidades	Hectáreas	40	0,5	No reportado

Fuente: municipio de Calima El Darién

Fuente de criterio y criterio

Plan de desarrollo Municipal dimensión ambiental pacto 4 Somos Alianza por la Descentralización, Desarrollo Local y la defensa Medio Ambiental.

Causa

Falta de un monitoreo continuo, establecer un sistema de seguimiento constante para evaluar el progreso hacia los indicadores ambientales y realizar ajustes según sea necesario.

Debilidades en la aplicación de regulaciones ambientales.

Efecto

Este incumplimiento afecta negativamente la capacidad del municipio para alcanzar sus objetivos, el bienestar de sus ciudadanos y del medio ambiente. Adicionalmente afecta la confianza de la comunidad en la capacidad del municipio para cumplir sus compromisos.

- *Dedicar un porcentaje no inferior al 1% del total de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica con el objeto de conservar los recursos hídricos o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas.*

Durante la vigencia fiscal 2022 los ingresos corrientes de libre destinación efectivamente recaudados ascendieron a \$.8.755.977.000. Por lo tanto, el 1% de los ICLD, que debía ser dedicado para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica, sería mínimo de \$87.559.770

Se evidenció que el municipio solo había transferido \$48.172.877, quedando pendiente por transferir como mínimo \$ 39.386.893.

25. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Predio de interés hídrico

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Durante el proceso auditor se identificó un predio de interés hídrico, de propiedad del municipio que no está debidamente registrado y carece de un certificado de tradición.

El predio denominado:	La Palmera
Ubicación:	Vereda La Cristalina
Matrícula Inmobiliaria Nro.	373-12693
Código Predial Nro.	76126000000010252000000000
Destino Económico:	Agropecuario.

Dentro del expediente se evidenció la celebración de tres (3) contratos de compraventa:

- i) Contrato De Compromiso De Compraventa, con fecha del 23 de diciembre de 2008, celebrado entre el Municipio de Calima El Calima (V),

Objeto: Transferir a título de venta real y material, el derecho real de dominio de un Lote de terreno rural, ubicado en la vereda La Cristalina, denominado La Palmera, jurisdicción del municipio de Calima El Darién, predio en venta que consta de una cabida superficiaria de 107 hectáreas con 1.228 metros cuadrados, predio que se desprende de uno de mayor extensión de 267 hectáreas con 8125 metros cuadrados.

Valor: Ciento Siete Millones Ciento Veintidós Mil Setecientos Sesenta y Ocho pesos Moneda Corriente (\$ 107.122.768)

- ii) Contrato Promesa De Compraventa, con fecha de 01 de abril de 2013, celebrado entre El Municipio de Calima El Darién (V)

Objeto: Transferir a título de venta real y material, el derecho real de dominio de un Lote de terreno rural, ubicado en la vereda La Cristalina, denominado La Palmera, jurisdicción del municipio de Calima El Darién, predio en venta que consta de una cabida superficiaria de 83 Hectáreas con 189 metros cuadrados.

Valor: Ochenta y Tres Millones Ciento Ochenta y Nueve Mil Setecientos Sesenta y Seis pesos (\$83.189.766)

iii) Contrato Promesa De Compraventa, con fecha de 01 de abril de 2013, celebrado entre El Municipio de Calima El Darién (V),

Objeto: Transferir a título de venta real y material, el derecho real de dominio de un Lote de terreno rural, ubicado en la vereda La Cristalina, denominado La Palmera, jurisdicción del municipio de Calima El Darién, predio en venta que consta de una cabida superficiaria de 1,5 Hectáreas, que se desprende de una de mayor extensión que tiene 77 Hectáreas con 6.708 metros cuadrados.

Valor: Un Millón Quinientos Mil Trece Pesos. (\$1.500.013).

Aunque se realizaron los pagos correspondientes al vendedor, y todas las transacciones financieras se llevaron a cabo según los registros municipales, los citados contratos de compraventa, no se protocolizaron y por consiguiente no se realizó la correspondiente inscripción en el certificado de tradición de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Es importante detonar que la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y por la otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales” Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos.

En este orden de ideas la tradición opera por mandato de la ley bajo dos presupuestos que son el título (escritura pública) y el modo (inscripción en el registro de instrumentos públicos), concluyéndose que es el certificado de libertad y tradición, el que indica el titular del derecho de dominio (propiedad).

Fuente de criterio y criterio

Código Civil artículos 740 y 756

Causa

Falta de procedimientos claros para la actualización y registro de propiedades municipales.

Deficiencias en la gestión documental y de propiedad.

Desconocimiento de la importancia del registro y certificado de tradición en propiedades municipales.

Efecto

Control inadecuado de los recursos y gastos indebidos (intereses moratorios por el no registro en la Oficina de instrumentos públicos).

Lo expuesto vulnera los principios de la función administrativa: responsabilidad y economía, señalados en el Artículo 209 de la Constitución Colombiana, en concordancia con el Artículo 3 de la Ley 489 de 1998. Así mismo, tienen presuntas incidencias disciplinarias al tenor de lo estipulado en el Artículo 39 de la Ley 1952 de 2019.

26. Hallazgo Administrativo - Agua no apta para el consumo humano en la zona rural de Calima El Darién

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Aunque la administración municipal ha intervenido algunos acueductos rurales, teniendo en cuenta los resultados fisicoquímicos y microbiológicos de las muestras de agua, tomadas por la Unidad Ejecutora de Saneamiento Básico del Valle del Cauca UES Valle, se observa que el Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) en la zona rural es de 63.48%, lo que indica, que los habitantes de las áreas rurales de Calima El Darién, durante el periodo analizado consumieron agua “nivel de riesgo Alto”, es decir, agua no apta para el consumo humano.

Fuente de criterio y criterio

Resolución 2115 del 2007 Artículos 15

Causa

Deficiente gestión administrativa para dar solución a los problemas de calidad de agua reportados por las respectivas autoridades sanitarias.

Efecto

Posibilidad de incrementar los riesgos de contraer enfermedades de origen hídrico en la comunidad de la zona rural del municipio de Calima El Darién

- *Elaborar, implementar y mantener actualizado el plan de manejo de residuos sólidos (PGIRS) según la metodología y componentes establecidos, observando el criterio de gradualidad, considerando la disponibilidad de los recursos y*

articulándolos con los planes de desarrollo municipales y los planes de ordenamiento territorial

27. Hallazgo Administrativo - Seguimiento al PGRIS

Condición (situación detectada de incumplimiento):

A la fecha el Municipio de Calima El Darién no ha presentado al Concejo Municipal el informe sobre el estado de avance en el cumplimiento de las metas previstas en el PGIRS, ni ha realizado seguimiento a las actividades que deben ejecutar en el PGRIS las empresas prestadoras del servicio de aseo.

Criterio y fuente de criterio

Decreto 1077 de 2015 Artículo 2.3.2.2.3.87. *Plan para La Gestión Integral De Residuos Sólidos, PGIRS.* Artículo 2.3.2.2.3.90. *Programa de aprovechamiento*
Resolución 754 de 2014 Artículo 11 Seguimiento.

Causa

Falta de capacitación en la gestión de residuos y en la implementación del PGIRS, lo que dificulta la supervisión y el seguimiento.

Efecto

La falta de seguimiento y cumplimiento del PGIRS puede resultar en el incumplimiento de las regulaciones ambientales y de gestión de residuos, lo que puede llevar a sanciones legales y multas para la administración municipal.

28. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Prestación del servicio de aseo directamente

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Durante la revisión de los procedimientos de adquisición y contratación del Municipio, se identificó una falta de cumplimiento con respecto a la realización de la licitación para la prestación del servicio público de Aseo.

El Municipio de Calima El Darién ha contratado los servicios de recolección de residuos sólidos con la empresa Interaseo S.A. E.S.P., sin licitación pública durante los últimos dos años. Se encontró que no se llevó a cabo un proceso de licitación abierto y competitivo para seleccionar al proveedor de estos servicios, lo que contraviene las regulaciones vigentes en materia de contratación pública. Adicionalmente, se están transfiriendo subsidios a esta empresa sin un contrato formal.

Criterio y fuente de criterio

Resolución 943 de 2021 Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico Artículo 1.4.1.2.

Decreto 1077 de 2015 Artículo 2.3.4.1.2.11. Transferencias de dinero de las entidades territoriales.

Causa

Incumplimiento de las regulaciones y procedimientos legales, falta de transparencia.

Efecto:

Sin la competencia de licitación, no se garantiza que los servicios se estén prestando de la manera más eficiente y rentable posible, lo que podría tener un impacto negativo en el presupuesto municipal. De igual manera, La falta de licitación pública socava la transparencia en el proceso de contratación y puede generar preocupaciones sobre la imparcialidad y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos.

Lo expuesto vulnera los principios de la función administrativa: responsabilidad y economía, señalados en el Artículo 209 de la Constitución Colombiana, en concordancia con el Artículo 3 de la Ley 489 de 1998. Así mismo, tienen presuntas incidencias disciplinarias al tenor de lo estipulado en el Artículo 39 de la Ley 1952 de 2019.

- *Impuesto del alumbrado publico*
- *Gestión Contractual de la Gestión Ambiental*

29. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal - Adquisición de insumos agrícolas por un valor superior al del mercado

Condición (situación detectada de incumplimiento):

En el Contrato de Suministro N°310-13-07.065 de 2022, cuyo objeto se detalla a continuación:

Objeto: *Suministro de insumos agrícolas acondicionador de suelo, bioensayos para el fortalecimiento de unidades productivas agrícolas de pequeños agricultores del municipio de Calima El Darién Valle Del Cauca*

Valor: \$9.661.948

Fecha de suscripción: 2022/12/15

Fecha de terminación 2022/12/28

Se observa diferencia entre el valor de adquisición de suministros agrícolas (cal, fungicida, insecticidas) y el precio de referencia consultado con las mismas especificaciones en el sector local (cotización realizada en los estudios previos, los cuales fueron la base del estudio de la oferta), como se evidencia en la imagen, y se analiza en el cuadro siguiente:

Imagen No. 26

3- ESTUDIO DE LA OFERTA

Para determinar el valor estimado del contrato la Secretaría de Desarrollo Rural - UMATA procedió a determinar el valor de los bienes mediante cotizaciones en valor unitario.

INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	VALOR PROMEDIO
			VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	
CAL AGRÍCOLA	BULTO DE 50 KG	80	17.000	12.540	14.770
FUNGICIDA BIOLÓGICO EN POLVO A BASE DE TRICHODERMA SPP CON REGISTRO ICA	BOLSA 500 GRAMOS	65	49.000	40.470	44.735
INSECTICIDA BIOLÓGICO LÍQUIDO A BASE DE EXTRACTO DE AJO-AJÍ CON REGISTRO ICA	LITRO	64	58.000	57.750	

Centro Administrativo Municipal - CAM /
Calle 10 No. 8 - 25 Código Postal No. 76126 - Tel: (2)2834305-2833470-2833383
Email: alcaldia@cammunicipaldarien.gov.co

Santos ALIANZA
Municipio Municipal 2015-2017

Fuente: tomando de la carpeta contractual, documento análisis del sector, punto 3 estudios de la oferta, folio 43

Cuadro No. 46

Comparación entre los precios promedio y la propuesta del contratista

Productos a contratar			Cotización		Valor promedio	Propuesta de ISR	Diferencia entre el promedio- ISR
Producto	Unidad	Cantidad	Cafioccidente	Ferreagro			
Cal agricola con registro ICA	Bulto de 50 kg	80	12.540	17.000	14.770	30.845	-16.075
Fulgicidad biologico en polvo a base de Trichoderma SPP con registro ICA	Bolsa de 500 gramos	65	40.470	49.000	44.735	55.820	-11.085
Inseticidad Biologico líquido a base de Extracto de ajo - ají con registro ICA	Litro	64	57.750	58.000	57.875	55.720	2.155

El costo que están pagando por la cal agrícola y el fungicida biológico es mayor valor promedio, estableciéndose diferencia en exceso por \$1.868.865, como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 47

Productos contratados			Valor unitario	Valor total contratado (A)	Valor promedio	Valor total promedio (B)	Diferencia entre (A-B)
Producto	Unidad	Cantidad					
Cal agrícola con registro ICA	Bulto de 50 kg	80	30.845	2.467.600	14.770	1.181.600	1.286.000
Fulgicidad biológico en polvo a base de Trichoderma SPP con registro ICA	Bolsa de 500 gramos	65	55.820	3.628.300	44.735	2.907.775	720.525
Inseticidad Biológico líquido a base de Extracto de ajo - aji con registro ICA	Litro	64	55.720	3.566.080	57.875	3.704.000	-137.920
Valor total				9.661.980		7.793.375	1.868.605

Fuente: municipio de Calima El Darién
Elaboro: equipo auditor

Fuente de criterio y criterio

Artículo 209 de la Constitución Política en concordancia con los Artículos 3º de la Ley 489 de 1998, artículo 83 y 84 de Ley 1474 de 2011
Estudios previos del Contrato de Suministro N°310-13-07.065 de 2022

Causa

Falta de mecanismos de seguimiento y control para garantizar que los ingresos generados por este impuesto se utilicen adecuadamente para el mantenimiento y mejora del alumbrado público.

Efecto

Menoscabo al patrimonio público, representado en el mayor valor pagado por los insumos agrícolas, daño que se cuantifica en la suma de \$1.868.865.

Lo expuesto vulnera los principios de la función administrativa: responsabilidad y economía, señalados en el Artículo 209 de la Constitución Colombiana, en concordancia con el Artículo 3 de la Ley 489 de 1998. Así mismo, tienen presuntas incidencias disciplinarias al tenor de lo estipulado en el numeral 1º del Artículo 39 de la Ley 1952 de 2019, adicionalmente pueden existir conductas fiscales por transgredir presuntamente lo establecido en los Artículos 5 y 6 de la Ley 610 del 2000.

30. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria Incumplimiento de la experiencia

Contrato de Prestación de Servicio de Apoyo a la Gestión N°310-13-06.017 de 2022

Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión como técnico ambiental en la secretaria de Desarrollo Rural UMATA del municipio de Calima El Darién Valle Del Cauca

Valor \$9.210.000

Fecha de suscripción 2022/01/20

Fecha de terminación 2022/06/30

Condición (situación detectada de incumplimiento)

En el proceso de contratación de la técnica ambiental para la secretaria de Desarrollo Rural UMATA, se identificó que la candidata seleccionada no cumplía con los requisitos mínimos de experiencia, ya que exigía un año de experiencia relacionada con el objeto contractual. El título de la candidata seleccionado es técnico en manejo ambiental del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del 5 de mayo del 2021.

Criterio y fuente de criterio

Artículo 209 de la Constitución Política en concordancia con los Artículos 3º de la Ley 489 de 1998, Minuta contractual

Causa

Falta de planificación en la elaboración del proyecto que sustenta esta contratación y deficientes controles en las respectivas instancias que deben revisar y evaluar las diferentes etapas de la contratación.

Efecto

Existe un riesgo significativo de que el proyecto no se gestione de manera efectiva y se enfrente a problemas debido a la falta de experiencia del técnico.

Lo expuesto vulnera los principios de la función administrativa: responsabilidad y economía, señalados en el Artículo 209 de la Constitución Colombiana, en concordancia con el Artículo 3 de la Ley 489 de 1998. Así mismo, tienen presuntas incidencias disciplinarias al tenor de lo estipulado en el Artículo 39 de la Ley 1952 de 2019.

31. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Pago de Transacción y sentencias

Condición (situación detectada de incumplimiento)

Se observó que en la vigencia 2019, se realizó Transacción por un valor superior a \$8000 millones de pesos con persona jurídica, en la misma se acordó que en caso de incumplimiento habría lugar a una cláusula penal pecuniaria por \$500 millones de pesos. La mencionada transacción se empezaría a pagar en la vigencia 2020. La actual administración estimó inconsistencias en la transacción, pero no generó ningún tipo de actuación contingente.

Al momento de la auditoría se constata que se inició el procedimiento judicial de cobro, lo que conlleva a un perjuicio grave en contra de los intereses del municipio, pues no solamente se habrán de cobrar el capital acordado y los intereses, sino también la multa por el no pago.

Como quiera que se evidencia que no se han realizado otros pagos de sentencias condenatorias a la fecha, tales eventos y su reliquidación hacen más onerosa la carga del municipio, contra expresa prohibición en tal sentido.

Fuente de Criterio y criterio

Constitución Nacional, artículo 209; Ley 489 de 1998, artículos 3 y 4; Decreto 111 artículo 21, artículos 45 y 112 Parágrafo.

Causa

Omisión del deber de cuidado. Inobservancia en la ejecución de los pagos decretados en Sentencias y transacciones.

Efecto

Pérdida de recursos, posibles detrimentos patrimoniales que pueden lesionar financieramente al municipio, y generar una reestructuración del municipio

Las conductas descritas generan un Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria; al tenor de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39.

32. Hallazgo Administrativo - Debilidades en la implementación de los ODS

Condición (situación detectada de incumplimiento)

Se evidenció que en el plan de desarrollo territorial del municipio de Calima El Darién “*Somos Alianza por un Calima El Darién Sostenible y Emprendedor*”, solo incorporó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la etapa del diagnóstico, no lo incorporó en su Componente Estratégico (objetivos, programas, subprogramas, metas e indicadores del plan), ni en el Plan de inversiones

Fuente de criterio y criterio

Constitución Política de Colombia en sus artículos 13, 43, 311, 339, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo artículo 2 y 32, Ley 1753 de 2015, CONPES 3918 del 15 de marzo de 2018

Causa

La situación planteada revela limitaciones en la formulación de los PDT

Efecto

La falta de alineación a nivel territorial representa un obstáculo para avanzar en la consecución de las metas de los ODS a nivel nacional.

33. Hallazgo Administrativo y sancionatorio - Incumplimiento de la efectividad en la evaluación del plan de mejoramiento de las vigencias 2021 y anteriores

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Una vez evaluado el Plan de Mejoramiento de la vigencia 2021 y de vigencias anteriores, se obtuvo como resultado una calificación definitiva del 21.8%, dado que las evaluaciones de las acciones correctivas se realizarán teniendo en cuenta dos variables, la primera corresponde a “Cumplimiento” y la segunda a “Efectividad”, a la cual se le asigna una ponderación así: 20% “Cumplimiento” y 80% “Efectividad”, respectivamente como se evidencia en el siguiente cuadro:

PLAN DE MEJORAMIENTO				
VARIABLES A EVALUAR		Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento		24,4	0,20	4,9
Efectividad de las acciones		21,1	0,80	16,9
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO			1,00	21,8
Calificación		No Cumple		
Cumple	2			
Cumple Parcialmente	1			
No Cumple	0			

Fuente: Evaluación Plan de Mejoramiento
Elaborado: Equipo auditor

Criterio y fuente de criterio

Artículo 15 Resolución No.009 de 2021

Causa

Lo anterior por causa de la ausencia de control, seguimiento y monitoreo al seguimiento de las acciones correctivas suscritas en el plan de mejoramiento por los procesos responsables.

Efecto

Reincidencia de los errores al interior del municipio, que impiden el avance de la gestión de la administración de manera organizada y reglada en procedimientos.

34. Hallazgo Administrativo y sancionatorio - No entrega de información dentro de los terminos establecidos en los requerimientos, durante el proceso de la auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2022.

Condición (situación detectada de incumplimiento)

Durante el proceso de ejecución de la auditoria al Municipio Calima El Darién - Valle del Cauca, la administración municipal hizo entrega parcial y extemporánea de la información requerida dentro del proceso auditor. Lo que entorpeció la labor a desarrollar.

Criterio y fuente de criterio

Artículo 101 y 102 Ley 42 de 1993

Causa

Falta de control y seguimiento en los procesos. Actuaciones que disipan las actuaciones del ente de control.

Efecto

Reproceso para el ente de control, terminando dicha situación en una limitación al alcance por información incompleta.

Hallazgos por Denuncias Ciudadanas

✓ **Denuncia Ciudadana No. 60 de 2023**

35. Hallazgo Administrativo con presuntas incidencias Disciplinaria y Penal- Uso de bienes del municipio – Regulación y seguimiento

Condición (situación detectada de incumplimiento)

Se observó que se ha venido permitiendo el uso del espacio público, la realización de construcciones sin los licenciamientos respectivos y especialmente el cobro por parte de personas jurídicas y naturales, para el acceso a la zona del lago artificial; con la omisión del deber de cuidado por parte de la administración municipal, en tanto no se han emitido actos administrativos tendientes a la supresión y restricción de tales prácticas.

Requeridos los lineamientos adelantados por el municipio, se encontró que solamente se realizó el inicio de un procedimiento policivo sin que, hasta la fecha por parte de la secretaria de planeación, secretaria de gobierno o la alta dirección se hayan realizado las sanciones o actuaciones administrativas pertinentes para

evitar futuros detrimentos al municipio; o cobros de lo no debido por parte de estos terceros.

Fuente de Criterio y criterio

Constitución Nacional, artículos 6, 102 y 362; Ley 489 de 1998, artículos 3 y 4; Ley 1801 de 2016, artículos 223 y s.s. Estatuto Tributario Municipal, artículos 354 y 355. Decreto 1504 de 1998, artículos 1 – 5.

Causa

Falta de procedimiento para el uso y manejo de los bienes del municipio o públicos.
Permisibilidad de las actuaciones de los particulares.
Omisión del deber de cuidado.

Efecto

Pérdida de recursos, posibles detrimentos patrimoniales por el uso de los bienes del municipio, y posibles prescripciones sobre inmuebles del municipio.

Las conductas descritas generan un Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal; al tenor de lo dispuesto en la Ley 734 de 2004, numeral 1 de los artículos 34 y 35; Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39; Ley 599 de 2000, artículos 397 y 398.

✓ **Denuncia Ciudadana No. 67 de 2023**

36. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Presentación de proyecto de vivienda - Documentos de ley

Condición (situación detectada de incumplimiento)

En la vigencia 2023, la administración municipal presenta ante el Concejo Municipal de Calima El Darién, proyecto de Acuerdo, con el fin de promover solución de vivienda de interés social, aludiendo que el mismo cumplía con la normatividad que rige la materia. Este proyecto no estuvo acompañado de los documentos correspondientes para tal afirmación, como quiera que no contaba con la viabilidad de los servicios públicos, ni se ha realizado cambio de los determinantes ambientales por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en tal sentido, que permita la implementación de soluciones de vivienda en lo que hoy por hoy sigue siendo zona rural del municipio.

Hecha visita a la planta de tratamiento se constata que la misma no tiene la capacidad necesaria para atender a mayor cantidad de usuarios, debido a fallas estructurales por falta de Tanque de almacenamiento.

Así mismo, el Concejo municipal omitió su deber de cuidado, al estudiar y aprobar Acuerdos municipales, sin la revisión técnica de los aspectos legales pertinentes, pues su función es de la de ser no un cuerpo consultivo sino un filtro que haga control de legalidad y político de las actuaciones del alcalde del municipio.

Fuente de Criterio y criterio

Constitución Nacional, artículos 6, 102 y 362; Ley 2 de 1959; Ley 388 de 1997, artículos 2 – 5 y 10; Ley 489 de 1998, artículos 3 y 4; Ley 1801 de 2016, artículos 224 – 225; Decreto 1504 de 1998, artículos 1 – 5; Resolución 0100 No.500 0574 de septiembre de 2015.

Causa.

Incumplimiento de los requisitos de ley para el desarrollo de vivienda y urbanismo; omisión del deber de cuidado frente a la promoción de intereses en la comunidad sin que se satisfagan los lineamientos mínimos en materia de agua potable, alcantarillado y permisos de autoridades ambientales.

Efecto

Pérdida de la credibilidad del ciudadano. Promoción de invasión de espacios no compatibles con el sostenimiento ambiental.

Las conductas descritas generan un Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria; por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39.

6. ANEXOS

Anexo 01 Cuadro Resumen de Hallazgos

Hallazgos	Cantidad	Valor	Identificación en el Informe
1. Administrativas	36	N/A	Páginas, 54 al 120
2. Fiscales	10	1.386.752.860.00	Páginas 56,58,62,68,70,73,78,85,94 y 112
3. Presunta connotación disciplinaria	26	N/A	Páginas 55,56,58,60,61,62,66,68,70,73,76,78,85, 94,98,102,103,105,108,111, 112,114,115,118,119 y 122
4. Presunta connotación penal	5	N/A	Páginas,62,70,78 y 118
5. Sancionatorio	2	N/A	Páginas,117 y 118
6. Beneficios del Control Fiscal	1	\$5.006.299.692	Páginas 122 y 123
7. Beneficios del Control Fiscal	1	N/A	Cualitativo

Fuente: Consolidado Informe

Elaborado: Equipo auditor

Detalle de Hallazgos relacionados con la evaluación contractual

Hallazgos	Cantidad	Valor	Identificación en el Informe
1. Administrativas	15	N/A	Páginas, 54 al 120
2. Fiscales	8	1.386.752.860.00	Páginas 56,58,62,68,70,73,78,85,94 y 112
3. Presunta connotación disciplinaria	16	N/A	Páginas 55,56,58,60,61,62,66,68,70,73,76,78,85,94,98,102,103, 105,108,111, 112,114,115,118,119 y 122
4. Presunta connotación penal	5	N/A	Páginas,62,70,78 y 118
5. Sancionatorio	2	N/A	Páginas,117 y 118
6. Beneficios del Control Fiscal	0	N/A	0

Fuente: Consolidado Informe

Elaborado: Equipo auditor

Anexo 02 Beneficios del Control Fiscal

FORMATO REPORTE DE BENEFICIOS																	
Director o subdirector:	Luis Enrique Cancimanse Calderón																
Sujeto de Control:	Municipio Calima El Darién Valle del Cauca																
Fecha de Evaluación:	20/10/2023																
BENEFICIOS:																	
NOMBRE DEL CAMBIO LOGRADO: Registros contable																	
ACCION DE LA CUAL SE DERIVA EL CAMBIO: Auditoria registros contables																	
MOMENTOS DEL BENEFICIO:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antes</th> <th></th> <th>Durante</th> <th>x</th> <th>Después</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"> MAGNITUD DEL CAMBIO: se contabilizaron registro por \$5.006.299.692 transacción firmada por El Municipio de Calima el Darién y Comfandi el día 23 de agosto de 2.019 por concepto de Créditos Judiciales los cuales representa el valor de las obligaciones por concepto de fallos en contra de la entidad, debidamente ejecutoriados, así como los mandamientos ejecutivos, conciliaciones administrativas y otras órdenes judiciales falladas a favor de terceros y originadas en litigios de carácter civil, laboral o administrativo. </td> </tr> </tbody> </table>					Antes		Durante	x	Después		MAGNITUD DEL CAMBIO: se contabilizaron registro por \$5.006.299.692 transacción firmada por El Municipio de Calima el Darién y Comfandi el día 23 de agosto de 2.019 por concepto de Créditos Judiciales los cuales representa el valor de las obligaciones por concepto de fallos en contra de la entidad, debidamente ejecutoriados, así como los mandamientos ejecutivos, conciliaciones administrativas y otras órdenes judiciales falladas a favor de terceros y originadas en litigios de carácter civil, laboral o administrativo.					
Antes		Durante	x	Después													
MAGNITUD DEL CAMBIO: se contabilizaron registro por \$5.006.299.692 transacción firmada por El Municipio de Calima el Darién y Comfandi el día 23 de agosto de 2.019 por concepto de Créditos Judiciales los cuales representa el valor de las obligaciones por concepto de fallos en contra de la entidad, debidamente ejecutoriados, así como los mandamientos ejecutivos, conciliaciones administrativas y otras órdenes judiciales falladas a favor de terceros y originadas en litigios de carácter civil, laboral o administrativo.																	
Conceptos	Valor estimado			TOTAL													
Contabilizados:																	
Créditos Judiciales	\$5.006.299.692			\$5.006.299.692													
Subtotal Legalización (1)	\$5.006.299.692			\$5.006.299.692													
Ahorros:																	
	0			0													
Subtotal Mejoramiento (2)	\$5.006.299.692			\$5.006.299.692													
Totales (1) + (2)	\$5.006.299.692			\$5.006.299.692													
ATRIBUTOS DEL CAMBIO El municipio de calima el Darién tenía registrado en su contabilidad en la cuenta Créditos Judiciales presentaba un saldo de 3.280.059.044 de acuerdo con la revisión de soportes se determinó por parte del grupo auditor que la partida no tenía un valor real y que producto de un contrato de transacción de fecha 24 de febrero del 2020, la entidad a través del mismo, asumió una deuda a pagar a Comfandi por valor de 8.274.240.020 de los cuales se pagaron en la vigencia recursos por valor de 79.412.000 debiendo quedar un saldo de \$8.194.828.020, Por la acción del equipo auditor el ajuste de esta partida fue de 5.006.299.692 cinco mil seis millones doscientos noventa y nueve mil seis cientos noventa y dos pesos, transacción firmada por El Municipio de Calima el Darién y Comfandi el día 23 de agosto de 2.019 por concepto de Créditos Judiciales, registro que no se encontraba en los estado financieros. Por lo tanto, este valor se convierte en un beneficio de control fiscal.																	
SOPORTE(S) Ajuste contable de sentencia y conciliaciones, Auxilia por cuentas																	
OBSERVACIONES: el proceso se realizó durante la ejecución de la auditoria																	
RESPONSABLE: Auditor Carlos Arturo García Trujillo																	
Subdirector:	Luis Enrique Cancimanse Calderón																
Cargo	Subdirector Técnico Cercofis Cali																
Fecha del reporte	20-10-2023																

Anexo 02 Beneficios del Control Fiscal

FORMATO REPORTE DE BENEFICIOS					
Director o subdirector:	Luis Enrique Cancimanse Calderón				
Sujeto de Control:	Municipio Calima El Darién Valle del Cauca				
Fecha de Evaluación:	20/10/2023				
BENEFICIOS:					
NOMBRE DEL CAMBIO LOGRADO: RESOLUCION Nro. 695 del 18 de octubre de 2023 y circular externa No. 56 del 25 de octubre de 2023					
<p>POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO, REPORTE Y RECOBRO DE SUBSIDIOS ECONÓMICOS POR INCAPACIDAD MÉDICA TEMPORAL Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y/O PATERNIDAD Y CONCILIACION DE PAGOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CALIMA EL DARIEN y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES</p>					
ACCION DE LA CUAL SE DERIVA EL CAMBIO: Procedimiento reportes de Incapacidades por los diferentes conceptos.					
MOMENTOS DEL BENEFICIO:	Antes		Durante	x	Después
MAGNITUD DEL CAMBIO: Se realizó el procedimiento del cual se origina el control de las incapacidades que por cualquier motivo requiera el funcionario de la administración municipal.					
Conceptos	Valor estimado			TOTAL	
Subtotal Legalización (1)	0			0	
Ahorros:	0			0	
Subtotal Mejoramiento (2)					
Totales (1) + (2)					
ATRIBUTOS DEL CAMBIO CUALITATIVO: Actividades o en su defecto se estableció la ruta, como se determina a continuación, del procedimiento de entrega de los certificados por incapacidad médica de origen común o laboral y licencias de maternidad y/o paternidad del personal administrativo de la Alcaldía Municipal de Calima el Darién.					
SOPORTE(S) RESOLUCION Nro. 695 del 18 de octubre de 2023 y circular externa No. 56 del 25 de octubre de 2023					
OBSERVACIONES: En la prueba de recorrido se evidenció que las incapacidades no están registradas en la contabilidad del municipio, careciendo de un procedimiento para ello.					
RESPONSABLE: Auditor Carlos Arturo García Trujillo y Luis Enrique Cancimanse Calderón					
Subdirector:	Luis Enrique Cancimanse Calderón				
Cargo	Subdirector Técnico Cercofis Cali				
Fecha del reporte	20-10-2023				

Anexo 03 Estados de Situación Financiera

Municipio Calima El Darién Valle del Cauca Estados Financieros AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CALIMA EL DARIEN, VALLE DEL CAUCA				
NIT. 890.309.611-8				
BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA				
31 DE DICIEMBRE DE 2022				
	NOTA		2022	
ACTIVOS		\$	135.510.557.760,13	
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	01	\$	12.473.846.925,53	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	02	\$	100.000.000,00	
CUENTAS POR COBRAR	03	\$	26.489.838.424,14	
		\$	39.063.685.349,67	
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	04	\$	37.828.307.765,66	
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	05	\$	45.148.049.672,10	
OTROS ACTIVOS	06	\$	13.470.514.972,70	
		\$	96.446.872.410,46	
TOTAL ACTIVOS		\$	135.510.557.760,13	
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
PRESTAMOS POR PAGAR	07	\$	5.158.769.764,00	
CUENTAS POR PAGAR	08	\$	3.893.485.655,19	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	09	\$	61.903.121.607,55	
PROVISIONES	10	\$	2.320.946.466,00	
OTROS PASIVOS	11	\$	198.000,00	
		\$	73.276.521.492,74	
TOTAL PASIVO		\$	73.276.521.492,74	
TOTAL ACTIVO NETO (1-2)		\$	62.234.036.267,39	
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	12	\$	62.234.036.267,39	
TOTAL PATRIMONIO		\$	62.234.036.267,39	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$	-	
PASIVOS CONTINGENTES	20	\$	3.934.681.888,00	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	20	\$	(3.934.681.888,00)	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$	-	
<div> MARTIN ALFONSO MEJIA LONDOÑO ALCALDE MUNICIPAL</div> <div> JUAN CARLOS RAMIREZ PINTO CONTADOR PUBLICO TP. 35381-T</div> <div> GUSTAVO CASTRO REBOLLEDO TESORERO</div>				

Estado de Resultados

CALIMA EL DARIEN, VALLE DEL CAUCA			
NIT. 890.309.611-8			
ESTADO DE DESEMPEÑO FINANCIERO POR NATURALEZA DEL GASTO			
31 DE DICIEMBRE DE 2022			
	NOTA		2022
INGRESOS		\$	35.759.219.124,16
INGRESOS FISCALES	13	\$	9.613.042.982,75
IMPUESTOS		\$	8.984.997.279,75
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$	628.045.703,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14	\$	26.098.109.137,66
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		\$	9.689.478.720,00
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		\$	676.609.164,00
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		\$	5.779.977.175,44
OTRAS TRANSFERENCIAS		\$	9.952.044.078,22
OTROS INGRESOS	15	\$	48.067.003,75
FINANCIEROS		\$	29.777.247,75
INGRESOS DIVERSOS		\$	18.289.756,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONES			\$35.759.219.124,16
GASTOS			\$29.563.525.078,58
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	16	\$	5.545.408.609,06
SUELDOS Y SALARIOS		\$	1.498.207.027,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$	-
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$	330.472.160,00
APORTES SOBRE LA NOMINA		\$	106.336.530,00
PRESTACIONES SOCIALES		\$	566.898.788,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$	37.158.333,00
GENERALES		\$	2.994.217.137,06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$	12.118.634,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17	\$	2.003.574.051,00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		\$	32.680.059,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$	682.113.961,00
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO		\$	1.288.780.031,00
GASTO PUBLICO SOCIAL	18	\$	22.014.542.418,52
EDUCACION		\$	13.554.483.454,31
SALUD		\$	980.179.465,22
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		\$	304.255.305,00
VIVIENDA		\$	-
RECREACION Y DEPORTE		\$	242.660.722,00
CULTURA		\$	885.187.964,00
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		\$	5.581.755.747,99
MEDIO AMBIENTE		\$	60.000.000,00
SUBSIDIOS ASIGNADOS		\$	406.019.760,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONES			\$29.563.525.078,58
SUPERAVIT / DEFICIT DE ACTIVIDADES OPERATIVAS		\$	6.222.202.982,58
OTROS GASTOS	19	\$	483.393.206,22
FINANCIEROS		\$	483.393.128,22
GASTOS DIVERSOS		\$	78,00
SUPERAVIT / DEFICIT NETO DEL PERIODO		\$	5.712.300.839,36
 MARTIN ALFONSO MEJIA LONDOÑO ALCALDE MUNICIPAL			
 JUAN CARLOS RAMIREZ PINTO CONTADOR PUBLICO			
 GUSTAVO CASTRO REBOLLEDO TESORERO			

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

CALIMA EL DARIEN, VALLE DEL CAUCA				
NIT. 890.309.611-8				
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO				
31 DE DICIEMBRE DE 2022				
CIFRA EN PESOS				
CODIGO	DESCRIPCION	VALORES		
3105	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 26.613.327.860		
3105	VARIACION PATRIMONIO 2022	\$ -		
3105	SALDO REGULARIZADO	\$ 26.613.327.860		
DETALLE VARIACIONES		2021		2022
INCREMENTOS				
3105	Capital fiscal	\$ 26.613.327.860	\$	26.613.327.860
3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 27.984.694.480	\$	35.393.168.101
3110	Resultado del ejercicio	\$ 8.003.388.301	\$	7.314.274.294
3151	Ganancias o Perdidas por Beneficios Pos Empleo	\$ (5.484.760.533)	\$	(5.484.760.533)
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES		\$ 57.116.650.109	\$	63.896.009.722


 MARTIN ALFONSO MEJIA LONDOÑO
ALCALDE MUNICIPAL


 JUAN CARLOS RAMIREZ PINTO
CONTADOR PUBLICO
TP. 35381-T


 GUSTAVO CASTRO REBOLLEDO
TESORERO

PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIAS 2022 Vs. 2021

MUNICIPIO CALIMA EL DARIEN VALLE DEL CAUCA				
PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIAS 2021- 2022 CIFRAS EN PESOS				
CONCEPTO	DEFINITIVO	RECAUDADO	DEFINITIVO	RECAUDADO
	2021		2022	
Total, Ingresos de la Entidad.	34.899.103.713,00	32.870.169.552,00	37.645.062.691,00	38.041.784.005,00
Ingresos Corrientes	26.950.105.177,00	24.904.247.763,00	33.165.454.365,00	33.536.119.873,00
Ingresos Tributarios	9.439.323.360,00	7.457.966.974,00	8.991.345.400,00	9.257.490.071,00
Predial Unificado	5.390.469.810,00	4.442.802.931,00	5.358.734.540,00	5.688.885.002,00
Industria y Comercio	1.200.000.000,00	726.679.971,00	1.000.009.248,00	871.488.865,00
Vehículos Automotores				
Avisos y tableros	43.275.000,00	45.816.000,00	44.818.950,00	38.209.100,00
Sobretasa Bomberil	198.532.653,00	236.374.697,00	203.950.402,00	206.038.378,00
Sobretasa Ambiental	985.015.897,00	750.518.317,00	754.817.916,00	754.817.916,00
Sobretasa a la Gasolina	648.000.000,00	731.148.000,00	667.258.772,00	793.114.000,00
Estampilla Procultura	70.000.000,00	68.479.423,00	69.975.204,00	105.974.226,00
Estampilla Pro-Tercera Edad	139.000.000,00	294.552.540,00	107.997.848,00	495.752.578,00
Publicidad Exterior Visual	1.000.000,00	0,00	11.522.629,00	11.522.629,00
Tasa Prodeporte y Recreación	70.000.000,00	115.922.549,00	105.610.492,00	202.123.595,00
Espectáculos Públicos	1.030.000,00	9.400,00	500.000,00	

MUNICIPIO CALIMA EL DARIEN VALLE DEL CAUCA				
PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIAS 2021- 2022 CIFRAS EN PESOS				
CONCEPTO	DEFINITIVO	RECAUDADO	DEFINITIVO	RECAUDADO
	2021		2022	
Contribución Contratos obras Publicas	53.000.000,00	33.641.290,00	26.149.399,00	48.330.282,00
Alumbrado Público SSF	640.000.000,00	12.021.856,00	640.000.000,00	41.233.500,00
Otros Tributarios				
Ingresos No Tributarios	1.415.443.545,00	1.559.624.858,00	1.151.086.355,00	1.466.241.023,00
Tasas y Derechos	187.389.062,00	211.197.140,00	22.525.113,00	3.750.000,00
Multas	11.063.375,00	8.457.386,00	16.617.702,00	20.902.277,00
Contribuciones	398.374.000,00	519.143.224,00	461.055.212,00	1.131.897.068,00
Venta de Bienes y Servicios	13.948.000,00	16.158.000,00	17.431.756,00	17.559.756,00
Derechos de Utilización de Bienes de servicio Público	804.669.108,00	804.669.108,00	633.456.572,00	292.131.922,00
Transferencias	16.095.338.272,00	15.886.655.931,00	23.023.022.610,00	22.812.388.779,00
SGP Educación	387.568.143,00	387.568.143,00	345.264.913,00	345.264.913,00
SGP Salud	4.576.991.532,00	4.576.991.532,00	4.745.752.935,00	4.745.752.935,00
SGP Agua Potable	750.466.009,00	750.466.002,00	958.356.222,00	958.356.220,00
SGP Propósito General	1.593.909.190,00	1.593.909.190,00	1.537.679.735,00	1.537.679.735,00
SGP Alimentación Escolar	51.859.295,00	51.859.295,00	52.950.779,00	52.950.779,00
SGP Resguardos Indígenas	18.160.080,00	33.838.213,00		
Participación y Derechos de Monopolio	442.672.561,00	211.196.355,00	455.952.737,00	250.780.323,00
Fosyga	4.822.950.891,00	4.822.950.891,00	5.428.542.036,00	5.428.542.036,00
Etesa				
SGP Libre Destinación	1.198.002.859,00	1.198.002.859,00	1.146.146.011,00	1.146.146.011,00
PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP			42.809.633,00	38.842.742,00
Otras Transferencias Nacionales	684.386.711,00	684.385.706,00	45.093.327,00	45.093.327,00
Otras Transferencias Departamentales	1.568.371.001,00	1.575.487.745,00	8.264.474.282,00	8.262.979.758,00
Ingresos de Capital	7.948.998.536,00	7.965.921.789,00	4.479.608.326,00	4.505.664.132,00

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIAS 2022 Vs. 2021

MUNICIPIO CALIMA EL DARIEN VALLE DEL CAUCA				
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIAS 2021 - 2022 CIFRAS EN PESOS				
CONCEPTO	DEFINITIVO	EJECUTADO	DEFINITIVO	EJECUTADO
	2021		2022	
Total, Gastos de la Entidad.	34.899.102.715,00	29.630.690.644,00	37.645.062.692,00	33.478.742.966,00

MUNICIPIO CALIMA EL DARIEN VALLE DEL CAUCA				
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIAS 2021 - 2022 CIFRAS EN PESOS				
CONCEPTO	DEFINITIVO	EJECUTADO	DEFINITIVO	EJECUTADO
	2021		2022	
Gastos de Personal	2.302.237.249,00	2.261.937.628,00	2.056.874.379,00	2.002.847.112,00
Gasto general	2.371.817.123,00	2.344.548.990,00	2.920.756.742,00	2.789.576.672,00
Transferencias Sentencias	20.281.638,00	20.281.638,00	62.000.000,00	0,00
Transferencias Terceros	989.842.814,00	834.342.751,00	759.814.809,00	759.814.809,00
Transferencias Concejo	325.714.745,00	310.634.755,00	333.773.128,00	248.663.039,00
Transferencias Personería	136.278.901,00	134.732.912,00	150.001.685,00	149.711.869,00
Transferencias Servicios Públicos	804.669.108,00	804.669.108,00	396.550.000,00	0,00
Transferencias Pensiones	293.618.459,00	257.768.447,00	405.781.515,00	253.886.299,00
Transferencias de Capital	200.061.653,00	199.856.516,00	205.831.504,00	205.831.504,00
Disminución de Pasivos	0,00	0,00	187.899.078,00	187.899.078,00
Total, Gastos de Funcionamiento	7.444.521.690,00	7.168.772.745,00	7.479.282.840,00	6.598.230.382,00
Servicio de la Deuda	630.380.659,00	578.262.106,00	1.410.706.915,00	1.378.864.986,00
Gastos de Inversión	26.824.200.366,00	21.883.655.793,00	28.755.072.937,00	25.501.647.598,00

Anexo 04 Cuadro de Análisis Derecho de Contradicción

1. Observación administrativa- Por debilidades en el proceso conciliatorio entre los procesos (contabilidad, tesorería Vs., procesos involucrados con el área contable)

Condición (situación detectada de incumplimiento)

Se evidenció que la administración municipal no cuenta con el proceso conciliatorio entre las áreas que tienen que ver con las operaciones contables que conforman y hacen parte de los resultados de los estados financieros.

Fuente de criterio y criterio

Deficiencias en la aplicación de la Resolución 119 de abril 27 de 2006 numerales 2 y 2.1.6 de la Contaduría General de la Nación procesos conciliatorios.

Causa

Debilidades en los controles y seguimientos, por parte de los procesos responsables.

Efecto

Situación que afecta la autenticidad e integridad y oportunidad de la información contable pública, creando incertidumbre en los saldos de los estados financieros.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

En lo corrido desde el inicio de la presente administración desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha se ha tenido muy en cuenta que las cifras del balance reflejen la situación real y financiera del Municipio de Calima el Darién (V), no obstante, se presentan situaciones de fuerza mayor como el no registro individual de cada uno de los bienes muebles e inmuebles y los bienes de uso público (Incluyendo los bienes por identificar y legalizar), debido a que se encuentran registrados con valores históricos desde administraciones anteriores con cifras globales; para ello se le solicitó al proveedor del software que enviará la plantilla para subir de forma masiva todos los bienes, detallando número predial, catastral, ubicación, extensión, área, y lo más importante su avalúo que debe ser por una persona natural o jurídica idónea para este proceso.

Podemos concluir que el sistema contable actual, se encuentra obsoleto es por ello que la realización de interfaces de la información se realiza de una forma sistemática pero manual, lo que, atendiendo el requerimiento de la Contraloría Departamental, se evidencia la necesidad de la adquisición de un software que permita mantener la interacción de la información y sea acorde a las necesidades para evitar debilidad en la información a entregar.

También se han ajustado los valores reales de la cartera por impuestos que arroja el módulo de industria y comercio y el software de la CVC que maneja el impuesto predial, con los saldos en el módulo contable mediante certificación de la tesorería de los saldos reales se hicieron los ajustes pertinentes para que estas cuentas estén debidamente conciliadas, Las Conciliación se realizan en el módulo de contabilidad, y luego se comparan en el software

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Es importante manifestarle a la administración municipal que tanto el pantallazo como el formato en Excel no se ajusta a un papel de trabajo donde se evidencie un proceso conciliatorio de las diferentes cuentas contables que ameritan dicha actividad, no adjuntan el proceso conciliatorio documentado entre las partes o en su defecto el área de donde surja dicho proceso, el caso bien pronunciado durante la ejecución de la auditoría fue el de la cuenta propiedad planta y equipo, donde la funcionaria encargada de manejar los bienes inmuebles del Municipio de Calima El Darién Valle del Cauca tenía en su archivo bienes que se habían dado en dación de pago, así como títulos (escrituras) que acredite como propietario a la administración, que para lo cual el equipo auditor solicitó los certificados de tradición a la Oficina de Instrumentos Públicos del Municipio de Guadalajara de Buga, los cuales se escanearon por el proceso de Tesorería del Municipio, quedando por hacer lo pertinente por parte de la administración municipal, para efectos conciliar con el proceso responsable (quien maneja los bienes Vs. Contabilidad), así mismo, realizar el respectivo registro de los bienes que no se encuentra en el estado financiero de la entidad, luego los archivos que se adjunta no hace referencia aún proceso conciliatorio, no se evidenció papel de trabajo.

El otro proceso que igualmente no se encuentra conciliado es Jurídica o en área que maneja las demandas en contra y a favor de la administración municipal Vs. Contabilidad.

Expuesto lo anterior, y en razón a que la entidad en los argumentos no desvirtúa lo evidenciado en el proceso auditor, así mismo, los archivos remitidos no contemplan un proceso conciliatorio entre las partes, en este sentido, se confirma la Hallazgo Administrativo para plan de mejoramiento.

2. Observación administrativa, presunta incidencia disciplinaria por la ausencia de la integralidad del software financiero.

Condición (situación detectada de incumplimiento)

El proceso financiero, adolece de un software financiero, lo que actualmente realiza es la consolidación de la información de las áreas de contabilidad tesorería y presupuesto, en el sistema SINAP versión 5, si bien es cierto, la administración municipal, viene haciendo uso de lo que a bien le denomina un software financiero, desde antes de la aplicación al nuevo marco normativo del proceso de convergencia de los estados financieros a Norma Internacionales de Contabilidad, para el Sector Público (NICSP), entidades de gobierno, evidenciándose que este no es funcional, encontrándose totalmente obsoleto, no cuenta con los aplicativos e interface o en su defecto en línea con las diferentes áreas que generan la información, es decir, que no se encuentra integrado, evidenciándose que en la actualidad muchas de las actividades que se realizan en la entidad se lleva a cabo de forma manual en formatos de Excel, tornándose dispendiosa la labor que realiza el área contable, en razón, al mismo sistema de información que no permite producir reportes necesarios que ayuden a realizar el origen de los hechos económicos importantes tanto cuantitativos como cualitativos (revelaciones), no lista el balance general a nivel de tercero, lo que hizo imposible hacer seguimiento a la propiedad planta y equipo creando incertidumbre este registro.

2. Observación administrativa, presunta incidencia disciplinaria por la ausencia de la integralidad del software financiero.

Fuente de criterio y criterio

Resolución No. 119 de 2006, procedimientos para la sostenibilidad del sistema de contabilidad, eficiencia en los sistemas de información contables y financieros 2.2.2., parágrafo 2.

Causa

Debilidades en los controles, seguimiento y monitoreo implementados, que no ha permitido advertir el desarrollo de un software con todas las particularidades que en su momento la misma reglamentación para ello exigió para los reportes de información al proceso contable y financiero, por parte de los procesos que producen la información.

Efecto

Las cifras del Estados de la Situación Financiera, para los períodos futuros, podrían generar riesgos, conllevando a la entidad verse incurso en el principio de causación o devengo.

Los hechos descritos configuran una Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, en virtud a lo dispuesto en la Ley 734 de 2002, el numeral 1 de los artículos 34 y 35 y la Ley 1952 de 2019, numeral 1 de los artículos 38 y 39.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

El Municipio de Calima El Darién (V), trabaja la versión 5 del Sinap, software bastante obsoleto, pues los informes son limitados, dicha plataforma corre bajo un lenguaje de programación ya inoperante, por lo que hace que los procesos sean muy lentos y que además de ello, otros procesos se deban realizar en Excel y corregir errores que surgen inesperadamente, pero la actualización o implementación de un nuevo software tiene un costo de aproximadamente \$200.000.000 (Doscientos Millones de Pesos), lo que para el municipio es inviable, toda vez que hemos pasado por periodos de mucha dificultad durante dos años de gobierno cuando todo el mundo fue afectado por la pandemia covid-19, el paro nacional que afectó todo el territorio colombiano, lo que conllevó a que muchos proyectos de mejoramiento para la entidad quedaran inconclusos o finalmente no fuera posible cumplir lo proyectado para este caso. Luego para subsanar los obstáculos se han venido realizando constantes comparaciones o conciliaciones para que la información sea lo más real posible.

Ahora bien, para este último año, la situación financiera mejoró un poco para el Municipio, lo que para la próxima vigencia 2024, se prevé que se alcancen mejores resultados, por lo que se dejará la necesidad que tiene el Municipio de Calima El Darién para la siguiente Administración en el área de Tesorería, en lo correspondiente a la actualización del software financiero que incluya todos los módulos necesarios para realizar la mejor gestión financiera y presupuestal para nuestro Municipio.

No se acepta el hallazgo con incidencia disciplinaria, por cuanto no existe ilicitud sustancial ilicitud sustancial, en los deberes funcionales que rigen la función pública, se dieron los resultados buscados para el cumplimiento de los fines del Estado, luego entonces debe

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

considerarse tener una razón de ser para que su incumplimiento sea valorado como contrario a derecho o al orden jurídico, pues lo que se reprocha no es en sí el quebrantamiento de la norma sino el resultado de su actuar, y como puede observar el equipo auditor el resultado de la gestión que se cuestiona fue positivo tanto para el Municipio, como para la comunidad. El deber funcional no fue un obstáculo para que el Estado alcance a través de la función pública los fines que la Constitución Política ha previsto para Colombia al definirla como un Estado Social de Derecho.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Analizada la respuesta de la entidad, remitida virtualmente en un archivo en PDF “RESPUESTA A CONTRALORIA 04.11.2023 2.” en donde se está reconociendo por parte de la administración lo siguiente acerca del software, lo siguiente, *“El Municipio de Calima El Darién (V), trabaja la versión 5 del Sinap, software bastante obsoleto, pues los informes son limitados, dicha plataforma corre bajo un lenguaje de programación ya inoperante, por lo que hace que los procesos sean muy lentos y que además de ello, otros procesos se deban realizar en Excel y corregir errores que surgen inesperadamente,(...)”*

Como se observa la entidad reconoce la situación por lo que está pasando acerca del software financiero el cual está “bastante obsoleto” y reconoce que tiene que acudir a la herramienta Excel en razón a la información por la gran cantidad de datos, y como se manifestó en la fuente de criterio y criterio la entidad incumplió la Resolución No. 119 de 2006, procedimientos para la sostenibilidad del sistema de contabilidad, eficiencia en los sistemas de información contables y financieros 2.2.2., parágrafo 2.

Por otra parte, la administración manifiesta que *“(...) lo que para la próxima vigencia 2024, se prevé que se alcancen mejores resultados, por lo que se dejará la necesidad que tiene el Municipio de Calima El Darién para la siguiente Administración en el área de Tesorería, en lo correspondiente a la actualización del software financiero que incluya todos los módulos necesarios para realizar la mejor gestión* Negrilla fuera del texto *financiera y presupuestal para nuestro Municipio.” En este sentido* la Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria se confirma para que la entidad presente la acción correctiva tendiente a subsanar el software financiero, que será objeto de seguimiento en el plan de mejoramiento.

3. Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. Incumplimiento del pago en las fechas estipuladas en la banca financiera de los créditos adquiridos

Condición (situación detectada de incumplimiento)

Se evidenció en la deuda pública que tiene la administración municipal con la banca financiera, el pago de intereses por mora, por \$573.794.00, por el incumplimiento de los pagos correspondiente a los créditos dentro de los términos fijados entre las partes.

Fuente de criterio y criterio

Constitución Política Colombiana, artículo 209 (Principio eficacia, economía, transparencia y responsabilidad).

3. Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. Incumplimiento del pago en las fechas estipuladas en la banca financiera de los créditos adquiridos

Causa

Ausencia de controles, seguimientos y monitoreos que no permitieron advertir esta situación del pago oportuno dentro de los términos.

Efecto

Incertidumbre en la situación financiera y la toma de decisiones, causando gastos que no se tenían previamente establecidos. Generando un presunto detrimento por \$573.794.

Las conductas descritas generan una observación de índole administrativa con presunta incidencia disciplinaria, y fiscal, por vulneración de la Ley 1952 de 2019, numeral 1 de los artículos 38 y 39; Ley 610 en sus artículos 5 y 6.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Mejoramiento de Tasa del Préstamo Bonos de Agua

En octubre de 2022, y después de los intentos por mejorar la tasa de interés del Crédito, el crédito se traslada de Fideicomiso Findeter ET-Agua, al Banco Agrario, mejorando, de IPC+7 Puntos a IBR + 2,75 puntos, lo cual se proyecta una disminución de los intereses en \$632 millones de pesos al plazo final del mismo.

Debido a que los intentos por lograr que los recursos que tenía Findeter, fueran trasladados al Banco Agrario, y poder cancelar el crédito con esta entidad, desafortunadamente se hizo en forma extemporánea, por lo cual, la aplicación de la cuota número 33 se hizo posterior al límite del pago, generando intereses moratorios por \$574.000, pero el beneficio de poder lograr una mejor tasa, tiene un ahorro de \$632 millones para el Municipio, al finalizar su crédito, que este gasto de intereses es tan solo el 0,09% del valor del beneficio en el ahorro.

Presento a usted la tabla de la proyección de los pagos de este préstamo, en la cual se aprecia claramente el valor del ahorro mencionado:

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

MUNICIPIO CALIMA EL DARIEN				
COMPARATIVO PRESTAMO BONOS DE AGUA				
CUOTA	FECHA	CUOTA ALIANZA	CUOTA AGRARIO	AHORRO
34	27/01/2023	\$ 84.373.689,94	\$ 74.022.377,00	\$ 10.351.312,94
35	27/04/2023	\$ 82.681.470,81	\$ 72.727.912,00	\$ 9.953.558,81
36	27/07/2022	\$ 81.674.458,73	\$ 71.433.447,00	\$ 10.241.011,73
37	27/10/2023	\$ 79.756.119,29	\$ 70.138.982,00	\$ 9.617.137,29
38	27/01/2024	\$ 84.581.069,09	\$ 68.844.517,00	\$ 15.736.552,09
39	27/04/2024	\$ 83.276.103,78	\$ 67.550.052,00	\$ 15.726.051,78
40	27/07/2024	\$ 81.748.508,50	\$ 66.255.586,00	\$ 15.492.922,50
41	27/10/2024	\$ 79.759.455,30	\$ 64.961.121,00	\$ 14.798.334,30
42	27/01/2025	\$ 92.282.803,71	\$ 63.666.656,00	\$ 28.616.147,71
43	27/04/2025	\$ 90.292.213,77	\$ 62.372.191,00	\$ 27.920.022,77
44	27/07/2025	\$ 88.769.169,32	\$ 61.077.726,00	\$ 27.691.443,32
45	27/10/2025	\$ 86.356.897,03	\$ 59.783.261,00	\$ 26.573.636,03
46	27/01/2026	\$ 88.870.051,47	\$ 58.488.795,00	\$ 30.381.256,47
47	27/04/2026	\$ 86.834.830,73	\$ 57.194.330,00	\$ 29.640.500,73
48	27/07/2026	\$ 85.165.704,39	\$ 55.899.865,00	\$ 29.265.839,39
49	27/10/2026	\$ 82.985.180,55	\$ 54.605.400,00	\$ 28.379.780,55
50	27/01/2027	\$ 93.018.672,11	\$ 53.310.935,00	\$ 39.707.737,11
51	27/04/2027	\$ 90.754.090,39	\$ 52.016.469,00	\$ 38.737.621,39
52	27/07/2027	\$ 88.691.272,29	\$ 50.722.004,00	\$ 37.969.268,29
53	27/10/2027	\$ 86.350.427,25	\$ 49.427.539,00	\$ 36.922.888,25
54	27/01/2028	\$ 97.999.255,89	\$ 48.133.074,00	\$ 49.866.181,89
55	27/04/2028	\$ 95.480.034,76	\$ 46.838.609,00	\$ 48.641.425,76
56	27/07/2028	\$ 94.878.664,38	\$ 45.544.144,00	\$ 49.334.520,38
TOTAL		\$ 2.006.580.143,48	\$ 1.375.014.992,00	\$ 631.565.151,48

De igual forma, adjunto copia de los correos electrónicos que fueron cruzados entre las entidades Banco Agrario, Banco de Bogotá y Findeter, en los cuales se demuestra que el Municipio Calima El Darién (V) no incidió en que los recursos que tenía dicha entidad, no fueran remitidos oportunamente al Banco Agrario para poder realizar el pago de la cuota 33 a tiempo, lo que generó la referida mora.

Se puede observar entonces, que, dentro de la actuación cuestionada por el órgano de control fiscal, existe un beneficio a favor de la entidad municipal, es decir, que cuando se habla de incidencia disciplinaria en este caso puede determinarse.

No se acepta el hallazgo por cuanto no existió ilicitud sustancial en la conducta del servidor público en relación a la incidencia disciplinaria y en cuanto a la incidencia fiscal no se ve reflejado el daño patrimonial a los recursos del municipio por cuanto como se explicó en

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

párrafos anteriores el comportamiento del crédito al final nos otorga un beneficio para los recursos del Municipio.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Respecto a la presente observación se recibió dos archivos digitales en PDF así, un archivo “3. COMUNICADO INTERNO A JURÍDICO HALLAZGO 3 CONTRALORÍA y 3. Correo Jorge Ernesto Peña Camargo”

En lo que respecta a la observación No. 3., administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. Incumplimiento del pago en las fechas estipuladas en la banca financiera de los créditos adquiridos, la administración municipal, como lo afirma en su escrito Justificación de Tesorería al hallazgo 3 de la contraloría, manifiesta justificando la mora en el pago de interés en la que incurrió por la extemporaneidad de incumplimiento en las fechas fijadas por la entidad financiera, en el mejoramiento de tasa de préstamos bonos de agua, disminuyendo los intereses en \$632 millones de pesos al plazo final del mismo, *justificando en lo siguiente. “Debido a que los intentos por lograr que los recursos que tenía Findeter, fueran trasladados al Banco Agrario, y poder cancelar el crédito con esta entidad, desafortunadamente se hizo en forma extemporánea, por lo cual, la aplicación de la cuota número 33 se hizo posterior al límite del pago, generando intereses moratorios por \$574.000 (...).”* negrilla fuera del texto.

Lo realizado por la administración municipal es el “deber ser” en cabeza de todo funcionario público que maneje las finanzas pública de una entidad estatal, la cual es velar que la hacienda pública mejore a través de la gestión en donde se logre en situaciones como esta tasas de interés menor a la que inicialmente se había pactado entre las partes o en su defecto los movimientos bancarios tal como se dio en la tesorería del Municipio Calima El Darién, en este sentido, y como quiera que en las entidades públicas todo pago que haga y que no esté contemplado presupuestalmente, o que este por fuera de lo pactado con las entidades financiera viene siendo extemporáneo, los respectivos pagos se configura en un presunto detrimento al erario público, independientemente de la cuantía que sea, así las cosas, la observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal se confirma para el informe final.

4. Observación administrativa, por no contabilizar las cuotas partes pensionales por pagar y cobrar en los estados financieros.

Condición (situación detectada de incumplimiento)

En el estado de la situación financiera vigencia 2022, no se observó registro de cuotas partes pensionales por cobrar, así como por pagar, la administración municipal no tiene conocimiento a cuánto asciende la deuda en los dos escenarios.

Fuente de criterio y criterio

Deficiencias en la aplicación en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, numeral 4 cuotas partes pensional por pagar y la Resolución 320 de 2019 numerales 4, 4.1, 4.2, y 4.3 de la Contaduría General de la Nación.

4. Observación administrativa, por no contabilizar las cuotas partes pensionales por pagar y cobrar en los estados financieros.

Causa

Debilidades en los controles y seguimientos en las cuotas partes pensionales por cobrar y pagar del municipio, por parte de los procesos responsables.

Efecto

Situación que a futuro puede generar intereses moratorios afectando el flujo de efectivo de la Administración Municipal.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

NOMINA DE PENSIONADOS

El Municipio de Calima el Darién (V), concurre con el pago de 100% de las mesadas pensionales debido a que todo el tiempo de servicio de los jubilados a cargo fue en la entidad territorial, el recurso del pago de las mesadas pensionales se realiza con los recursos del FONPET, trámite que se realiza cada año ante la Dirección De Regulación Económica De La Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

CUOTAS PARTES PENSIONALES

A la fecha se cuenta con el inventario de las entidades con las que se tiene obligación por concepto de cuotas partes pensionales, para esta vigencia se realizaron mesas de trabajo para generar un acuerdo de compensación, el cual se pagará con los recursos que esta entidad tiene en el FONPET.

Con respecto al pago de cuotas partes pensionales las entidades acreedoras que demuestren la legalidad del cobro con los documentos que certifiquen la validez del título ejecutivo como lo son resolución de pensión, certificación de tiempos laborados del Municipio de Calima El Darién (V) y aceptación de la cuota parte, se realiza el acuerdo de compensación económica de pago de cuotas partes y para radicar el trámite ante la Dirección De Regulación Económica De La Seguridad Social en la sede electrónica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El proceso culmina, una vez Ministerio de Hacienda y Crédito Público realiza el giro a la entidad acreedora, la Secretaría de Gobierno enviará a tesorería copia de la certificación de pago para ser incluido en el presupuesto sin situación de fondos e informar a contabilidad el motivo del retiro de este en el FONPET, con el fin de que por parte del área de Tesorería se realice el respectivo registro de cuotas partes por cobrar y pagar.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Analizada la información y los archivos digitales remitidos por la entidad se evidencia en la documental, diferentes resoluciones donde se están reconociendo e pago de pensiones por diferentes conceptos (vitalicia de jubilación, por invalidez, por vejez) y convenios de pagos en los que se evidenció lo siguiente. *De acuerdo con las normas vigentes, **las entidades territoriales deben proceder a realizar por cuenta propia los registros presupuestales***

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

y contables a que haya lugar, sobre el valor autorizado mediante este oficio de confirmación de pago y dentro de la misma vigencia fiscal.” Negrilla fuera del texto.

Como a bien se observa en la documental remitida por la entidad en el ejercicio que le asiste como la contradicción oficio del consorcio comercial FONPET2017 unidad de gestión, calendado el 5 de junio de 2022, donde se hace la entrega de recursos por devolución del FONPET (Excedente de educación o propósito general, pago de nómina de pensionados entre otros conceptos.).

Igualmente, en los archivos remitidos, se observa oficio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que en el asunto informan *“Rechazo: Solicitud de retiro de los recursos del FONPET, presentado por el Municipio de Calima del Darién – Valle del Cauca para pagar el valor adeudado por concepto de cuotas partes pensionales al Departamento del Valle del Cauca, radicado No. 1-2022-086190.”* Y terminan manifestando lo siguiente *“... le informamos que no procede autorizar el pago solicitado de cuotas partes pensionales, y que procederemos a devolver la solicitud de retiro de recursos del FONPET a la entidad Territorial, no sin antes aclarar que esta se puede volver a presentar, enviando la solicitud de la liquidación de las Cuotas Partes de los pensionados que se encuentren debidamente registrados en el formulario F-5 y/o F-6 con el Status que corresponda en el Programa PASIVOCOL,(...)”*

Así mismo se evidencia oficio de agosto 31 de 2023, y del 15 de septiembre de 2023, para el retiro de recursos del FONPET para el pago y/o compensación de cuota parte pensionales que tienen el municipio con la Gobernación del Valle.

Por otra parte, también se allegó consolidado de cuotas partes vencidas

De la información se evidencia las gestiones que ha realizado la Administración municipal en lo relacionado con el retiro de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales “FONPET” a efecto de realizar la compensación o el pago por el respectivo concepto.

Es importante manifestarle a la administración municipal, que la prueba que se adjuntó al proceso de contradicción, son tramites o gestiones que ha realizado la municipalidad con el fin de gestionar el retiro de los recursos ante el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales “FONPET”, la condición evidenciada en el proceso de ejecución de la auditoria el reproche es lo siguiente ***“En el estado de la situación financiera vigencia 2022, no se observó registro de cuotas partes pensionales por cobrar, así como por pagar, la administración municipal no tiene conocimiento a cuánto asciende la deuda en los dos escenarios.”*** Negrilla es nuestra

Como se manifiesta en la situación detectada en el proceso auditor o en su defecto el reproche, es la falta del registro de las cuotas partes pensionales, tanto, por cobrar, como por pagar que tiene la administración municipal los cuales no se encuentran contabilizados en el Estado de la Situación Financiera del período 2022, situación que el Consorcio comercial FONPET en la nota del oficio UG-2017-06434 del 5 de junio de 2022, manifiesta *“(....) que se proceder por cuenta propia los registros presupuestales y contables, (...)”* así las cosas, y como quiera que la administración municipal continúa con la falta del registro de las cuotas partes pensionales en los dos escenarios (por cobrar y por pagar) aunado a lo anterior, y por la falta de control, **a futuro la entidad puede verse incurso en presunto**

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

detrimento al erario público por el pago de intereses por mora que establece el Que el artículo 4º de la Ley 1066 de 2006 establece que “*Las obligaciones por concepto de cuotas partes pensionales causarán un interés del DTF entre la fecha de pago de la mesada pensional y la fecha de reembolso por parte de la entidad concurrente....*” En este sentido la observación Administrativa se confirma para el informe final, en el sentido que la municipalidad presente la acción correctiva en la suscripción del plan de mejoramiento.

5. Observación administrativa, por la no contabilización y el cobro de las incapacidades a las diferentes EPS.

Condición (situación detectada de incumplimiento)

Los estados contables vigencia 2022 no registra en los estados financieros las incapacidades por cobrar a las diferentes EPS, así mismo, la entidad a la fecha desconoce la partida a contabilizar, no existe una relación del ausentismo de funcionarios debido a las incapacidades, por otro lado, existe desconocimiento total de las incapacidades transcrita ante las EPS.

Fuente de criterio y criterio

Ley 1066 de 2006 artículos 1 y 5, Decreto 19 de 2012 artículo 121, Ley 1438 de 2011 artículo 28.

Causa

Deficiencia en los controles y seguimientos, por parte de los procesos responsables.

Efecto

Situación que afecta la autenticidad e integridad y oportunidad de la información contable y con el riesgo que gran cantidad de estos recursos se pierdan por la figura de la prescripción terminando en presuntos detrimentos.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

La Administración Municipal en el momento que se realizaba la respectiva auditoría, elaboró acto administrativo - Resolución Nro. 695 del 18 de octubre del 2023, por medio del cual se estandariza el procedimiento y trámite de incapacidades y conciliación de pagos de la administración municipal de Calima el Darién (V) y dictan otras disposiciones, el cual se publicó en la página Web de la Alcaldía <https://www.calimaeldarienvalle.gov.co/normatividad/resolucion-nro-695-18-de-octubre-del-2023> , la cual fue socializada a través de la Circular Interna No. 56 con todos los servidores públicos, proceso determinado como **BENEFICIO CUALITATIVO** por realizarse en el tiempo requerido

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Analizada la prueba digital como los argumentos presentados por la entidad, se evidencia que no se dio respuesta al incumplimiento observado durante el proceso auditor.

De otro lado, y como a bien lo a firma la administración municipal en su derecho de contradicción, la elaboración del procedimiento de incapacidades, fue producto del proceso auditor, la elaboración del acto administrativo, por el cual se estandarizó el procedimiento y trámite de incapacidades y conciliaciones de pagos, pues durante la prueba de recorrido se evidenció que la entidad no tenía documentado el procedimiento, como la contabilización de las incapacidades de los funcionarios de la administración municipal, realizando el procedimiento bajo el acto administrativo No.695 del 18 de octubre de 2023 y la socialización del mismo, mediante circular interna No.56 del 25 de octubre de 2023, en razón a ello se realizó un beneficio cualitativo el cual se evidenciará en el informe final.

Por otra parte, la condición es decir la situación detectada de incumplimiento evidenciada en el proceso auditor, es la ausencia de la contabilización de las incapacidades en los estados financieros vigencia 2022, así mismo, el desconocimiento de las partidas a contabilizar, la falta de una relación del ausentismo de funcionarios relacionado con las incapacidades, y el desconocimiento total de las incapacidades transcrita ante las EPS, reproche este que no fue desvirtuado por la entidad, ante esta situación la observación Administrativa se confirma para el informe final, para que la administración municipal presente la acción correctiva que este encaminada a mitigar riesgos que a futuro se puedan presentar como la prescripciones viéndose la entidad en presuntos detrimentos patrimonial.

6. Observación administrativa, falta de certeza de los bienes de la propiedad planta y equipo (terrenos y edificaciones) sean de propiedad del municipio y otros que han dado en dación de pago y no han sido protocolizado, y los bienes de beneficios y uso público

Condición (situación detectada de incumplimiento)

La cuenta propiedad planta y equipo reportó \$35.793 millones y bienes de beneficios y uso público por \$43.465 millones en el 2022, evidenciándose que en el estado de la situación financiera al 31 de diciembre de la vigencia en estudio en el estado financiero se contabilizaron propiedades sin contar con la escritura que acredite como propietario el municipio, así como otros que han sido dados en dación de pago y que no están contabilizados porque la entidad no tiene claridad sobre el tema.

Fuente de criterio y criterio

En razón a lo anterior se evidencia debilidades en aplicación resolución 533 de 2015 y en referencia al marco conceptual características cualitativas de la información financiera, numerales 4.1.2 representación fiel, 4.2.1 verificabilidad 4.2.3 comprensibilidad, y 4.2.4 comparabilidad y las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, según “marco normativo para entidades de gobierno de la Contaduría General de la Nación.

Causa

Situación que obedeció a las debilidades de control y autocontrol como la falta de seguimientos y monitoreo que no ha permitido advertir oportunamente la irregularidad.

6. Observación administrativa, falta de certeza de los bienes de la propiedad planta y equipo (terrenos y edificaciones) sean de propiedad del municipio y otros que han dado en dación de pago y no han sido protocolizado, y los bienes de beneficios y uso público

Efecto

Generando incertidumbre en las cifras en el estado contable.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

La Administración Municipal viene desarrollando la identificación de los bienes de su propiedad desde administraciones anteriores logrando en ello información de 337 en total, contando con certificados de tradición, proceso que en su desarrollo debe interactuar con otras entidades del Estado que toman su tiempo para resolver lo solicitado por la Administración, considerando que se ha pedido a la Notaría Única de Calima El Darién (V) información acerca del proceso de escrituración de los predios.

Con el propósito de dar cumplimiento con lo hallado por la Contraloría Departamental y la cual dejó como observación sobre el no registro individual de los bienes inmuebles de acuerdo a las normas establecidas y que están quedan registradas en el módulo de Almacén y que a su vez se vean reflejadas en la contabilidad.

De acuerdo a lo anterior se dio inicio al registro de 53 bienes identificados en su totalidad con toda la información detallada de cada predio como lote o edificación, rural o urbano, avalúo, matrícula de registro etc., en el módulo respectivo de Almacén y en concordancia con el módulo de Contabilidad (Anexo Inventario, registro en el módulo de Almacén y Registro en Contabilidad)

El compromiso de esta administración será de dejar consolidada toda la información de los bienes del municipio en los Registros de Información Financiera del Municipio.

Aunque los procesos para determinar plenamente la propiedad, están sometidos al rigor legal, se procedió a registrarlos conforme a los criterios Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF-, que indica, que los bienes en los cuales se utilicen de modo exclusivo por el tenedor o poseedor, y en los cuales ha existido sana posesión y convivencia pacífica, se deben incluir en los Estados Financieros porque prevalece el Principio de Revelación, principalmente. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ha desarrollado esta norma de convergencia internacional, y es por ello, que se impulsan los procesos y trámites legales, como en efecto lo ha hecho nuestro Municipio. Adjuntamos los conceptos aquí mencionados.

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos se sirva levantar el hallazgo, porque la Administración Municipal, en un ejercicio de ponderación de normas, de mayor jerarquía y prevalencia, procedió a su registro, en aras del interés general y público y en cumplimiento de los Fines del Estado.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

El equipo auditor no desconoce las gestiones que realizó las pasadas administraciones como la actual, analizada la prueba que se allega al proceso de contradicción cinco archivos digitales que consta:

1_ Carpeta donde se encuentra solicitudes de notaria, 2_ archivo comprimido con el nombre "RELACION DE PREDIOS DE CALIMA EL DARIEN" que contiene una carpeta titulada "predios calima" en la que se ve archivos tres carpetas así; VUR PARTE 1,2 Y3, en esta carpeta se evidencia UN VUR BASICO Y OTRO JURIDICO, en el básico se observa datos BASICOS del certificado de Tradición y Libertad y en el jurídico el Estado del bien con la diferente anotación del propietario.

3_Archivo un balance de propiedad planta y equipo con corte al 31 de octubre de 2023. 4_ archivo Estado financieros, los archivos 3 y 4 están no comparativos y 5_Archivo inventario de bienes e inmueble.

Analizados los documentos digitales se evidencia que la entidad

Los bienes inmueble se debe reconocer con escritura pública, la interpretación de estándares internacionales se debe reconocer contable y tributaria un bien inmueble con escritura pública pues a futuro sería corre un riesgo mientras no exista escritura pública, por otro lado la Nicsp 17 *"El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB) publica la Norma Internacional de Contabilidad para el Sector Público (NIC-SP) 17: Propiedades, Planta y Equipo, que establece el tratamiento para el reconocimiento, medición y contabilización de los activos fijos, (...)"* negrilla fuera del texto

No se pudo constatar el registro, pues no se remite el estado financiero con corte a 31 de octubre de 2023 comparativo para efecto de comparar, además, así como se afirma por parte de la entidad debió de realizarse como a bien lo contempla el catálogo general de cuentas aplicable para entidades de gobierno, los cuales hasta tanto no tenga el título que acredite la propiedad del bien inmueble el Municipio deberá ser clasificado en la cuenta para tal fin por principio de REVELACIÓN.

Es importante manifestar igualmente que por parte del equipo auditor se solicitaron los certificados de tradición a la Registradora de Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Municipio de Guadalajara de Buga, información que fue remitida y a su vez se le entregó a la tesorería del Municipio para lo de su competencia.

Así las cosas, y como quiera que los argumentos como los soportes no se encuentra claro, por lo antes expuesto, la observación Administrativa queda en firme para el informe final, para fines de verificar en plan de mejoramiento todo el proceso realizado conforme a normas internacionales aplicable para entidades de gobierno.

7. Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, pago de intereses corrientes sin justificación

Condición (situación detectada de incumplimiento)

La administración municipal pago intereses corrientes por \$40.481.404, sin justificación alguna en razón a un empréstito realizado en la vigencia 2022, con el Banco agrario amparándose en el Decreto 678 de 2020, por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020, a entidades territoriales que no tuvieran liquidez, o en su defecto para atender insuficiencia de caja de carácter temporal tanto en gastos de inversión como de funcionamiento.

Por otra parte, la administración municipal reconoció e incorporó un superávit por \$1.187.822.953, superávit fiscal que hacen parte de los recursos del balance al cierre de la vigencia 2022, por las diferentes fuentes de financiación, evidenciándose que el municipio de Calima Darién cerró la vigencia en cuestión, con flujo de efectivo en la fuente por recursos propios con MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS MDA. CTE. (\$1.716.411.146) recursos con los cuales podían pagar y financiar los gastos de funcionamiento que se cancelaron con el empréstito mencionado cifras reflejadas en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 48

MUNICIPIO CALIMA EL DARIEN Reservas con Tesorería Análisis Recursos a Incorporar Vigencia 2022						
Fuente	Saldo Estado del Tesorería 1	Valor Reservas de Apropriación 2	Valor Cuentas Por Pagar 3	Descuentos de nómina y otros en Tesorería 4	Superávit a Incorporar al Presupuesto Siguiendo Vigencia 5=1-(2+3+4)	Déficit a Incorporar al Presupuesto Siguiendo Vigencia 5=1-(2+3+4)
Recursos Propios	1.716.411.146	282.332.875	244.241.551	2.013.767	1.187.822.953	
Fondos Especiales	100.000.000			0	100.000.000	
TOTAL S.G. P	1.593.244.970	782.417.529	88.971.217	0	721.856.224	
Destinaciones Específicas	736.104.223	14.276.046	40.896.768	0	680.931.410	
Otras Destinaciones Específicas	8.426.072.819	6.555.656.134		0	1.870.416.685	
Recaudos en Tesorería por Descuentos y otros.	2.013.767			0	2.013.767	
Subtotales	12.573.846.926	7.634.682.584	374.109.536	2.013.767	4.563.041.039	0
TOTAL, PRESUPUESTO	12.573.846.926	7.634.682.584	374.109.536	2.013.767	4.563.041.039	0

Fuente: Área financiera 2022

De otra parte, se evidenció que la entidad presentaba en el momento del crédito con recursos por valor de \$100 millones en un certificado de depósito a término fijo.

Fuente de criterio y criterio

Constitución Política Colombiana, artículo 209 (Principio eficacia, economía, transparencia y responsabilidad). Decreto 678 de 2020 inciso primero artículo 3. Decreto 111 de 1996, artículos 16, 20, 21 y 73

7. Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, pago de intereses corrientes sin justificación

Causa

Ausencia de controles, seguimientos y monitoreos con la herramienta de planeación (PAC) que no permitieron advertir esta situación y que finalmente se ve reflejado en el superávit del municipio al término de la vigencia 2022, que está dando cuenta de la liquidez con la que pasa al siguiente período la administración municipal.

Efecto

Situación que termina en un presunto detrimento al erario público por \$40.481.404. Las conductas descritas generan una observación de índole administrativa con presunta incidencia disciplinaria, y fiscal, por vulneración de la Ley 1952 de 2019, numeral 1 de los artículos 38 y 39, Ley 610 en sus artículos 5 y 6.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Mediante Acuerdo No. 005 del 28 de febrero de 2023, el Concejo Municipal, aprobó la incorporación de los recursos de balance del año 2022, por valor total de \$4.563.041.039, por Recursos Propios, sólo teníamos \$801.701.469, en Consejo de Gobierno en ese periodo, se decidió que esa partida fortaleciera de la siguiente manera:

Como se aprecia, los rubros fortalecidos fueron estratégicamente estudiados y era necesario apropiarlos, debido a los compromisos que la Administración Municipal tenía frente a su Plan de Desarrollo; teniendo en cuenta que la obligación no estaba vencida lo cual, se realizaron otros traslados a los diferentes proyectos mencionados para dar cumplimiento a las metas e indicadores propuestos en el Plan de Desarrollo Municipal para el año 2023, considerando que el presupuesto para inversión en estos rubros no era suficiente para hacer cumplimiento de las metas e indicadores.

Una vez aclaradas las inquietudes que dieron origen al hallazgo, se solicita al ente de control eliminar el hallazgo planteado con incidencia disciplinaria y fiscal, por cuanto no existe ilicitud sustancial y la inexistencia del daño fiscal, de acuerdo a los deberes funcionales que rigen la función pública, se dieron los resultados buscados para el cumplimiento de los fines del Estado. Por lo que el ente de control, deberá reconsiderar la razón que se tiene frente a lo manifestado como incumplimiento para que sea valorado como contrario a derecho o al orden jurídico, pues lo que se reprocha no es en sí el quebrantamiento de la norma sino el resultado de su actuar, y como puede observar el equipo auditor el resultado de la gestión que se cuestiona fue positivo tanto para el Municipio, como para la comunidad, el deber funcional no fue un obstáculo para que el Estado alcance a través de la función pública los fines que la Constitución Política ha previsto para Colombia al definirla como un Estado Social de Derecho.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

En referencia a los recursos del cierre de la vigencia es cierto que la entidad incorporó \$4.563.041.039, pero no es cierto que de recursos propios solamente se tenían en estado del tesoro la suma \$801.701.469, lo que generó el cierre fiscal que se realiza con saldos bancarios determino que la entidad presentaba un superávit por la fuente de recursos

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

propios por valor de \$ 1.187.822.953, con los cuales se podían financiar los gastos de funcionamiento, aparte de esto. No se tuvo en cuenta antes de realizar el crédito que la entidad tenía 100 millones de pesos en un fondo especial como se ilustra en el cierre realizado por la auditoria, argumenta la entidad que los recursos propios fueron adicionados para cumplir el plan de desarrollo de las metas del 2023 , denotándose un deficiente planeación en su plan plurianual de inversiones donde desde un inicio debieron prever los recursos para financiar su plan, en total los recursos eran suficientes durante la vigencia 2022, para cancelar los gastos de funcionamiento, para los cuales se realizó el crédito, porque de ser contrario se tendría déficit en los recursos propios ,antes de cualquier consideración la entidad debe tener apalancados con sus ingresos propios los recursos para su funcionamiento, es claro que existió superávit por recursos propios con los cuales se debió cancelar los gastos de funcionamiento en lugar de acudir a créditos, por lo tanto, la observación se confirma en todos sus acápites.

8. Observación administrativa con presunta incidencia Disciplinaria, por utilización de recursos de crédito de tesorería, para pagar otro crédito que no estaba presupuestado con la adición presupuestal

Condición (situación detectada de incumplimiento):

En la vigencia 2022 se adquirió un crédito de tesorería con el banco agrario amparado en el decreto 678 de mayo 20 del 2022, recursos que fueron adicionados al presupuesto según el decreto 105 de junio 30 del 2022, En el ingreso a la apropiación 1,2,07,01 denominado en el presupuesto “recursos de créditos de tesorería” y en el gasto como está estipulado en dicho decreto, (funcionamiento) verificada la ejecución de los recursos se pudo identificar que con esos recursos se canceló otro crédito con el instituto financiero para el desarrollo del valle del cauca, afectando la partida recursos del crédito por valor de \$84.650.000 según Comprobante de Egreso 0000979 de 18 de julio de 2022, por valor de \$178.051.468.19, en el cual está incluido el pago del crédito., estos recursos destinados a funcionamiento en la adición presupuestal fueron desviados para cancelar un crédito de tesorería, como se puede evidenciar en el decreto anteriormente mencionado.

Fuente de criterio y criterio

Decreto 111 de 1993 Artículo 18 Principio de Especialización.

Decreto 105 de junio 30 de 2022 Por el cual se realizan adiciones al presupuesto emanado del despacho del alcalde.

Causa

El decreto 105 de junio 30 del 2022 en su artículo segundo adiciono 800 millones de pesos para gastos de funcionamiento y determino que partidas se verían afectadas, donde con estos dineros no presupuesto pagar créditos de tesorería como sucedió.

Efecto

Desfinanciación del presupuesto adicionado para cancelar gastos de funcionamiento obtenidos con el crédito de tesorería del Banco Agrario.

8. Observación administrativa con presunta incidencia Disciplinaria, por utilización de recursos de crédito de tesorería, para pagar otro crédito que no estaba presupuestado con la adición presupuestal

Las conductas descritas generan una Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria; por vulneración de la Ley 1952 de 2019, numeral 1 de los artículos 38 y 39.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Teniendo en cuenta que en el momento en que nos desembolsaron el Préstamo de Tesorería con el Banco Agrario de Colombia en fecha 30 de junio de 2023, por \$800 millones de pesos, y al realizar la distribución del mismo en los rubros para los cuales se destinó este recurso, se utilizó el valor de \$84.650.000, los cuales adicionamos para pagar el crédito que se traía con Infivalle número DOFI 2021 2615 PGN, y así, obtener el beneficio de ahorrarnos la suma de

\$3.882.351 y disminuir los gastos de funcionamiento para la vigencia 2022, y finalmente terminar el crédito e impactar positivamente en el desempeño fiscal del Municipio. .

Ver anexos en el Drive Proyección de Pago Préstamo Infivalle 2615PGN

No se acepta el hallazgo, porque se puede observar que con el actuar del servidor público no incurrió en una conducta sobre la ILICITUD SUSTANCIAL, que determina que “la conducta del disciplinable será ilícita cuando afecte sustancialmente el deber funcional sin justificación alguna”, es decir que, la Ilícitud Sustancial del servidor público debe ser entendida como una afectación sustancial a los deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de los principios que rigen la función pública, en otros términos, aunque el comportamiento llegare a encuadrarse en un tipo disciplinario, pero se determine que el mismo en nada incidió en la garantía de la función pública y los principios que la gobiernan, deberá concluirse que la conducta está desprovista de ilicitud sustancial.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

De la respuesta realizada a la observación por la entidad Analizamos lo siguiente:

“Teniendo en cuenta que en el momento en que nos desembolsaron el Préstamo de Tesorería con el Banco Agrario de Colombia en fecha 30 de junio de 2023, por \$800 millones de pesos, y al realizar la distribución del mismo en los rubros para los cuales se destinó este recurso, se utilizó el valor de \$84.650.000, los cuales adicionamos para pagar el crédito que se traía con Infivalle número DOFI 2021 2615 PGN”.

Es cierto que la entidad recibió un desembolso de 800 millones de pesos, pero no es verdad que se halla adicionado \$ 84.650.000 para pagar el crédito de tesorería de este préstamo. este préstamo fue adicionado al presupuesto según decreto 105 de junio de 2022 y en su artículo segundo claramente definió los ítems en que se ejecutarían esos recursos y como se puede evidenciar en dicho decreto no se determinó pagar crédito alguno, por lo anterior con el crédito realizado por la entidad no se podían cancelar otro crédito porque no estaba estipulado en el decreto de adición de estos recursos, por lo tanto, se confirma la observación administrativa con presunta incidencia Disciplinaria para el informe final.

9. Observación administrativa, con presunta incidencia disciplinaria por el no pago dentro de los términos que establece las reservas de apropiación y por ausencia de soportes donde se evidencien dichas reservas.

Condición (situación detectada de incumplimiento)

En el análisis de la confrontación de saldos presupuesto y tesorería se evidencia una diferencia de \$6.612.426.401.00, como a continuación de evidencia en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 49

MUNICIPIO CALIMA EL DARIEN Análisis confrontación de saldos presupuesto y tesorería Vigencia 2022									
(Recaudo En Efectivo + Recursos del Balance y/o Disponibilidad)ppto 1	Depositos Judiciales a Favor 2	pagos efectivos por ppto 3	Depositos judiciales en contra y anticipos sin legalizar 4	TOTAL 5=(1+2-3-4)	Estado de Tesorería 6	Descuentos de nómina y otros en Tesorería 7	Recursos Resguardos Indígenas 8	SALDO TESORERIA 9 = (6-7-8)	DIFERENCIA 10=(9-5)
19.279.149.279		13.319.742.522		5.959.406.757	12.573.846.926	2.013.767		12.571.833.158	6.612.426.401
Fuente: Área Financiera									

En el seguimiento realizado por el equipo auditor se confirmó que dicha diferencia corresponde a \$5.661.832.747.00 perteneciente al convenio DPS (Plaza de Mercado recursos Sin Situación de Fondos (S.S.F.)), más \$950.593.654.13 constituidas como reservas de presupuestales vigencias 2021, al respecto el artículo 89 del estatuto orgánico del presupuesto establece lo siguiente *“Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación, son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año estas a autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse.”* Se evidenció que a la fecha dichas reservas de apropiación del 2021 no se han cancelado

Fuente de criterio y criterio

Artículo 89 estatuto orgánico de presupuesto y artículos 14, 18,73 y 89 Decreto 111 de 1996.

Causa

Ausencia de mecanismos de seguimiento control y verificación de los procesos responsables.

Efecto

Uso inadecuado de los recursos

Los hechos descritos configuran una Observación administrativa, con presunta incidencia disciplinaria, en virtud a lo dispuesto en la Ley 734 de 2002, el numeral 1 de los artículos 34 y 35 y la Ley 1952 de 2019, numeral 1 de los artículos 38 y 39.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

En el análisis de la confrontación de saldos presupuesto y tesorería se evidencia una diferencia de \$6.612.426.401.00.

En cuanto a la ausencia de mecanismos de control es importante aclarar, que todos los mecanismos de control y verificación, se accionaron para que el convenio en referencia se pudiera ejecutar, como prueba se pueden verificar los documentos generados en el proceso

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

de dicho convenio, como lo son las prórrogas y las adiciones solicitadas por este despacho, y que anexo a la presente.

Se anuncia en el hallazgo que los hechos descritos configuran una Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, en virtud de lo dispuesto en la Ley 734 de 2002, el numeral 1 de los artículos 34 y 35 y la Ley 1952 de 2019, numeral 1 de los artículos 38 y 39.

Por su parte es importante anotar textualmente los artículos del Estatuto Disciplinario:

ARTÍCULO 38. DEBERES. Son deberes de todo servidor público:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de derechos humanos y derecho internacional humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.

(...)

Con relación al efecto a que se refiere, “Uso inadecuado de recursos”, al momento, la ejecución del convenio está por encima del 40% de avance, y al contratista se le ha pagado solo el 30% de acuerdo a los dos primeros hitos de facturación, la Alcaldía Municipal de Calima El Darién (V), no ha recibido recursos adicionales a los antes mencionados por parte del DPS, los cuales fueron trasladados para suplir el pago de las actividades ejecutadas por el contratistas las que obedecen al (30%) presentado en facturación; no se entiende entonces a que se refiere la Contraloría con el uso inadecuado de recursos, si fuera del 30% pagado al contratista la Alcaldía en ningún momento ha destinado estos recursos específicos en algo diferente más que a la ejecución del contrato en referencia.

ARTÍCULO 39. PROHIBICIONES. A todo servidor público le está prohibido:

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los Tratados Internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.

(...)

La utilización de los recursos destinados para la ejecución del contrato en referencia fueron destinados para la misma, cumpliendo todos y cada uno de los deberes como servidor público, acatando todos los procesos de recibo y destinación de recursos para el desarrollo de la obra, la cual desde el inicio ha estado supervisada por parte de la Alcaldía y con interventoría en todo momento como se puede evidenciar en todos los comités técnicos e informes presentados al DPS, y que reposan tanto en la Alcaldía, interventoría y DPS, es la razón por la que no se relaciona lo anunciado como hecho con la prohibición enunciada.

Porque el DPS no pudo pagar recurso al contratista de la galería en el 2022, y soporte de ello.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

En respuesta a lo solicitado por parte de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca debemos resaltar:

1. Que el pasado 15 de junio de 2021, se suscribió el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 382 FIP DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CALIMA – EL DARIEN VALLE DEL CAUCA Y EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS. cuyo objeto consiste en: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo para la PROSPERIDAD SOCIAL – FIP - Fondo de Inversión para la Paz – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecución de obras de infraestructura social vial, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y las generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social, de conformidad con la ficha anexa”. El cual tiene como plazo de ejecución total de acuerdo a que las partes suscribieron el otrosí No.1 y 2 el 29 y 30 de julio de 2022. Modificando la cláusula 2 del convenio de la siguiente manera: “2) PLAZO: El plazo de ejecución del presente convenio iniciará desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y será hasta el 30 de junio de 2023”. y lo seguidamente relacionado:

2. En relación a la no ejecución de los recursos fenecidos asignados en la reserva presupuestal del año 2022 los cuales fueron trasladados a déficit presupuestal por parte del DPS. Podemos indicar dichos recursos fenecieron debido a que la exigencia en ejecución de un avance del treinta (30 %) al finalizar dicha vigencia fiscal, se consideraba una meta física parcial, técnicamente imposible de alcanzar dado el cronograma de la obra y teniendo en cuenta con fecha 19 de septiembre de 2022, el contratista de la obra suscribió acta de iniciación, del contrato base de ejecución No. 310-13-06-170 DE 2022 RESULTADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN No.310-13-07.005 DE 202 CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCIÓN FASE 1 DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN” el cual no pudo comenzar en dicha fecha, debido a que el predio en donde se acometerían las obras, todavía estaba ocupado en un cuarenta (40%) por comerciantes del sector, en los cuales evidenció una mayor tasa de crecimiento en negocios informales con respecto al primer censo realizado por la administración municipal de Calima el Darién, lo que agravó la problemática social que afectó el desarrollo del proyecto de reubicación de los mismos. De acuerdo a lo manifestado por parte de la supervisión interna del proyecto en relación a la revisión técnica detallada de planos y documentos anexos, se evidenciaron elementos y situaciones que afectan la ruta crítica del proyecto desde su fase inicial, en tal virtud la supervisión analizó los argumentos expuestos por parte de la firma interventora así como el contratista de la obra sustentados en los diferentes comités de obra, donde se manifestó bajo el entendido que el término de ejecución inicialmente pactado resulta insuficiente para llevar a cabo la totalidad de obligaciones derivadas del objeto contractual

Por tales razones, y al no contar con área física totalmente libre para acometer las obras al igual que las revisiones técnicas de ajuste del proyecto y sumado a ello las condiciones de clima imperante en la zona no permitieron generar el hito de facturación proyectado en la vigencia 2022.

Es de anotar que el Convenio DPS ha presentado modificaciones, lo cual también ha tardado la ejecución del contrato, propias de una ejecución contractual de una obra compleja, modificaciones que han sido aprobadas por ambas entidades, es decir ni una ni

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

otra, DPS o Municipio de Calima ha manifestado algún tipo de incumplimiento o requerimiento por indebida ejecución contractual y/o de recursos del convenio interadministrativo No. 382 FIP de 2021.

Es decir, se trata de unos recursos de un proyecto amparado por vigencia futura y que aún se encuentra en ejecución, por consiguiente, se considera que el recurso que apoya dicho proyecto (SSF) debe permanecer vigente en razón de la ejecución.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Analizada la documental como los argumentos presentados por la entidad no se encuentra el acto administrativo donde se declare los proyectos de importancia estratégica se evidenció una solicitud del 27 de diciembre de 2022, en los siguientes pantallazos se observa los archivos digitales que remitió la entidad en el derecho de contradicción:

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
..			Carpeta de archivos		
CONVENIO 382 DE 2021	26.614.528	23.166.645	Carpeta de archivos		
CONVENIO 021 DEL 2021	2.360.625	1.807.419	Carpeta de archivos		

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
..			Carpeta de archivos		
CONVENIO 382 DE 2021	13.229.330	11.780.078	Carpeta de archivos		
CONTRATO 310 13 06 170 DE 2022	13.385.198	11.386.567	Carpeta de archivos		

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
..			Carpeta de archivos		
SOLICITUD SEGUNDO DESEMBOLSO PLAZA CALIMA0.docx	495.445	495.525	Documento de Mi...	10/11/2023 7:3...	9623F30D
SOLICITUD RESERVA PRESUPUESTAL BPIN 2021761260038.pdf	570.191	421.582	Archivo PDF	8/11/2023 11:1...	57EB9A79
SOLICITUD DESEMBOLSO AL DPS PLAZA DE 992.docx	482.313	482.388	Documento de Mi...	10/11/2023 7:0...	0B4FDF0D
SOLICITUD DE MODIFICACION DE CLAUSULA RESOLUTORIA PLA...	2.560.528	2.560.923	Documento de Mi...	10/11/2023 6:5...	E4FFDC18
OTROSI 03 CONVENIO 382 DEL 2021.pdf	1.273.433	991.378	Archivo PDF	15/06/2023 8:2...	FDE4B0DC
OTROSI 1 CONVENIO 382 FIP DE 2021 (1).pdf	108.288	96.091	Archivo PDF	15/06/2023 8:3...	CCFBFE7B
OFICIO SALDOS DE RESERVA CALIMA.docx	185.269	185.299	Documento de Mi...	10/11/2023 7:0...	0FC1EBA4
CONVENIO 382 DE 2021 GALERIA CALIMA EL DARIEN.pdf	6.853.423	5.846.342	Archivo PDF	7/06/2022 7:37 ...	5DA92085
CIIF_BTA_DPS_409_2021_3060_Aval_Prorroga_Convenio_Calima_38...	163.493	163.518	Documento de Mi...	10/11/2023 6:5...	02DD2CAD
ACTA DE SUSPENSION PLAZA CALIMA.docx	536.947	537.032	Documento de Mi...	10/11/2023 6:5...	E98E7A4B

En oficio “solicitud reserva presupuestal convenio 02 del 2021” la secretaria de Desarrollo Rural Umata, solicita en enero 1 de 2023 reserva presupuestal e igualmente solicita la declaratoria de importancia estratégica para el proyecto en cuestión, es decir esta solicitando vigencias futura excepcionales, las cuales debieron de llevarlas a cabo desde la etapa de planeación en razón a los inconvenientes que se ha presentado en el proyecto, como no se evidencia en la documental aportada por la entidad respuesta alguna acerca de la solicitud, como

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

tampoco se adjunta el acto administrativo de la constitución de vigencia futura cuando en los proyectos se considera de importancia estratégica.

Por otra parte, debemos de tener en claro el tema de las reservas presupuestales, así las cosas; Las reservas presupuestales corresponden a la diferencia entre los compromisos y las obligaciones, es decir, la reserva presupuestal constituidas en cada vigencia fiscal y que no fueron ejecutadas, ni liquidadas, automáticamente fenecen al cierre de cada vigencia fiscal, y se convierte en vigencias expiradas. Situación que tampoco se dio en el caso que nos ocupa, que viene siendo los \$950.593.654.13 constituidas como reservas de presupuestales vigencias 2021.

Expuesto lo anterior se evidencia que la entidad no desvirtúa lo evidenciado en el proceso auditor la observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria se confirma para el informe final.

10. Hallazgo Administrativo con presuntas incidencias Disciplinaria, Fiscal y Penal – Planeación, seguimiento y pago de Contrato de Comisión de Éxito

Contrato No. 310-13-06-060-2022

Objeto: Prestación de servicios profesionales de asesoría y soporte en la Tesorería municipal para la Gestión tributaria y en la liquidación, cobro y recuperación de cartera en el municipio de Calima El Darién

Valor: \$1.500.000 para efectos fiscales- Prima de éxito o cuota litis

Plazo: Hasta 30 de diciembre de 2022

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Etapas precontractual: En los estudios previos (folios 5 - 18) se especifica la necesidad de un apoyo para fortalecer la gestión de la Tesorería Municipal, en la ejecución de los procesos desarrollando actividades en relación con el archivo y los procesos de industria y comercio y predial (sic), tendientes al cumplimiento de metas y cometidos estatales.

Se observan errores de fondo en la planeación, pues contra expresa prohibición legal y jurisprudencial se realiza la delegación en terceros para fiscalizar, liquidar, realizar cobro coactivo y demás actuaciones como sanciones de los tributos municipales, aunado al desconocimiento del principio de conmutatividad y las reglas de su aplicación para el caso concreto. Fundando dentro de los estudios previos la actuación en torno a un concepto de la Dirección de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de abril de 2010, también se ampara el contrato en fallos del Consejo de Estado que desconocen la línea jurisprudencial en torno al principio de conmutatividad.

En el ítem Valor Estimado del Contrato y Justificación del mismo, se dice que el valor es indeterminado pero determinable, estableciendo la modalidad de prima de éxito o cuota litis, el cual para efectos fiscales iniciales fue de \$1.500.000, y se determinó que el valor contractual real sería el del término de la ejecución contractual.

Posteriormente, en la forma de pago se establece que los honorarios correspondientes a la comisión de éxito, se estimarían en forma mensual, según dos criterios:

10. Hallazgo Administrativo con presuntas incidencias Disciplinaria, Fiscal y Penal – Planeación, seguimiento y pago de Contrato de Comisión de Éxito

El 30% sobre recaudo efectivo generado por los procesos de cobro persuasivo, coactivo, de liquidación oficial, los nuevos contribuyentes declarantes y por las correcciones provocadas en el proceso de revisión de declaraciones sobre los impuestos predial unificado, industria y comercio y Avisos y Tableros, Publicidad Exterior Visual, Juegos Permitidos, Rifas y derechos de Rifas, Delineación Urbana, Espectáculos Públicos, *Sobretasa a la Gasolina Motor; Alumbrado Público y cualquier otro tributo o renta municipal de las vigencias 2019 y anteriores (a excepción de las sobretasas Ambiental, Bomberil y las Estampillas del orden Departamental).* Subrayado fuera del texto original, que se exalta para evidenciar falencias posteriores.

El 15% sobre el recaudo efectivo por los mismos procesos y conceptos de la vigencia 2020, con iguales excepciones. Existió una aclaración en donde se determinaba “En todos los casos los honorarios causados incluyen IVA”; se requirió para cada pago el informe del supervisor, con el cumplimiento de los requisitos legales, anexando el contratista informe y el pago de la SSI.

Aunque está enunciado un Análisis del Sector, éste adolece de foliatura y la interrumpe pues a pesar de estar después del folio 23 (final de los estudios previos), no sigue la trazabilidad del expediente (error de Archivo documental).

Aunado a lo cual, la estructura del documento obedece a una evaluación de las circunstancias generales del municipio, pero en modo alguno, al tipo de contratación que habría de realizarse, tampoco a profundizar las condiciones financieras o topes a regularse dentro del precio, que determine con claridad cómo se llegó a establecer que habría equilibrio económico dentro del contrato, al generar los pagos sobre las sumas recaudadas en el 30% (2019 y anteriores vigencias) y el 15% (2020). No se observa tampoco, el análisis de la base de datos a entregarse al contratista, o la cantidad de deudores que se están delegando para seguimiento, siendo parte de la fiscalización a cargo de la entidad, hacer el seguimiento de los omisos y su respectivo cobro, cartera que se considera de fácil recuperación, por tratarse de personas que se encuentran ubicables, y sobre las cuales no se habría hecho cobro previamente.

Por otra parte, en el Análisis del Riesgo y Forma de Mitigarlo, solo se establecieron 3 eventos de riesgo, sin contemplar riesgos con relación a las inconsistencias en la etapa precontractual, que pueden viciar la actuación a adelantarse.

Los estudios previos son suscritos por el Tesorero general y revisados por Asesor jurídico Externo, perteneciente a la oficina de contratación. Se observa la invitación al futuro contratista con idénticos parámetros en materia de porcentajes a reconocer (folios 19 a 23), y posteriormente la propuesta en los mismos términos de la invitación, es decir se manifiesta por el oferente que “*el valor y forma de pago de la prestación de este servicio corresponde al fijado al interior del Municipio de Calima*”, como soportes de experiencia y estudios se entregó abundante material probatorio (folios 25 al 103).

La falta de cumplimiento de las prohibiciones establecidas por la ley y para la comisión de éxito desde la planeación (jurisprudencia), la vulneración a los principios de conmutatividad y economía, genera que el presente contrato no cumpla el lleno de los requisitos de ley.

10. Hallazgo Administrativo con presuntas incidencias Disciplinaria, Fiscal y Penal – Planeación, seguimiento y pago de Contrato de Comisión de Éxito

Etapas contractual: A folios 107 al 113, vemos el contrato de prestación de servicios calendarado 26 de enero de 2022. Se observa que, en la cláusula 4ª; se modifican las condiciones que se establecieron en los estudios previos, en materia de los criterios que generarían los porcentajes pactados y se determina que el 30% de honorarios, se cobraría sobre las vigencias 2020 y anteriores; en tanto el 15% se aplicaría sobre la gestión adelantada sobre la vigencia 2021, lo único que permaneció igual fueron las excepciones de sobretasas; la modificación indicada no tiene soporte jurídico dentro del expediente contractual. Se nombra posteriormente supervisor al Tesorero. El contrato se publica el 11 de febrero de 2022 en el Secop I, incumpliendo el término para la publicidad concedido por la ley para la publicación de las actuaciones contractuales. El acta de inicio está calendarada 28-01-2022.

Se observan las Facturas electrónicas de venta: FEV No. JP-49, calendarada 21-03- 2022, por valor de \$12.247.694 (folio 121), acompañándola el informe del contratista a folios 122- 125, en este se hace alusión a un archivo electrónico en el Drive donde se encuentran las evidencias, mismas que no hacen parte de ninguno de los soportes; una relación de presuntos pagos del impuesto predial, con pagos que oscilan entre \$400 y \$8.750.000, no hay evidencia alguna de gestión de cobro. El pago de la SSI a folio 131, no corresponde al porcentaje determinado por ley del 40% del valor del contrato. Después se encuentra el informe del supervisor, definiendo que hubo cumplimiento de lo pactado.

Se observa la factura electrónica de venta (FEV) No. JP-50, calendarada 21-03- 2022, por valor de \$19.796.467 (folio 138) y el informe del contratista a folios 129- 157, en este se hace alusión al Drive de evidencias, una relación de presuntos pagos del impuesto predial, con pagos que oscilan entre \$109 y \$8.724.766, no hay evidencia alguna de gestión de cobro. El pago de la SSI a folio 165, no corresponde al porcentaje determinado por ley del 40% del valor del contrato.

Luego, vemos la FEV No. JP-53, calendarada 20-04- 2022, por valor de \$32.010.825 (folio 169), con el informe del contratista a folios 170- 199, en este se hace alusión a Drive de evidencias, una relación de pagos del impuesto predial, con pagos que oscilan entre \$86 y \$3.324.610, sin evidencia de gestión de cobro Después se encuentra el informe del supervisor. No se observa pago de la SSI en este período

Seguidamente, vemos la FEV No. JP-63, calendarada 09-06- 2022, por valor de \$27.525.000 (folios 207- 208), con el informe del contratista a folios 209 - 214, en este se hace alusión al Drive. Se observa pago de la SSI en este período por rubro que no corresponde al 40% del valor percibido, se cotiza sobre una base de \$4 millones como IBC (folio 221).

Posteriormente, vemos la FEV No. JP- 67, calendarada 29-06- 2022, por valor de \$24.561.423 (folios 227- 233), con el informe del contratista a folios 234 - 296, se hace alusión a Drive de evidencias. Cabe señalar, que en este período se incluyeron pagos de predial, cuyas sumas corresponden a la vigencia 2022; también se incluyeron conceptos que estaban expresamente excepcionados incluso en el contrato, como la *sobretasa Bomberil y ambiental, consecuentemente los intereses derivados de éstas*; sin que se sustente la razón por la cual se realiza la inclusión de los ítems determinados *fuera del acuerdo*. Se observa pago de la SSI en este período por rubro que no corresponde al 40% del valor percibido, se cotiza sobre una base de \$4 millones como IBC (folio 297).

10. Hallazgo Administrativo con presuntas incidencias Disciplinaria, Fiscal y Penal – Planeación, seguimiento y pago de Contrato de Comisión de Éxito

Ulteriormente, se registra la FEV No. JP- 76, calendada 13-07- 2022, por valor de \$20.747.219 (folios 309 - 310), con el informe del contratista a folios 311 - 314, en iguales condiciones que los anteriores. No hay reporte del recaudo realizado, a pesar de que se enuncia en el documento informe.

Luego, se registran las facturas FEV No. JP- 86, calendada 20 -08- 2022, por valor de \$62.653.441 (folios 328 - 329), acompañándola el informe del contratista a folios 330 - 314, FEV No. JP- 92, calendada 13- 09 - 2022, por valor de \$13.290.849 (folio 351) y el informe del contratista a folios 352 - 389. Cabe señalar, que en este período se incluyeron sumas correspondientes a la vigencia 2022; también conceptos que estaban *expresamente excepcionados* incluso en el contrato, como la *sobretasa Bomberil y ambiental*, consecencialmente los intereses derivados de éstas. FEV No. JP- 106, calendada 23 - 10- 2022, por valor de \$64.333.771 (folios 400 - 401), con el informe del contratista a folios 402 - 404, en este se hace alusión al Drive. No hay reporte del recaudo realizado. FEV No. JP- 128, calendada 13 - 12- 2022, por valor de \$9.466.103 (folio 414), con el informe del contratista de octubre a folios 415 - 426.

En la trazabilidad se observa la FEV No. JP- 129, calendada 13 - 12- 2022, por valor de \$98.195.008 (folios 438), con el informe del contratista de noviembre a folios 439 – 465. Se discrimina el cobro del 30% por recaudo de impuesto a la publicidad, cuando entre los períodos pagados se incluyó 2022, que no era parte del contrato (folio 445). El pago de la SSI cancelada a folio 467 no es coincidente con el valor cobrado en el período.

Finalmente, se observa la FEV No. JP- 131, calendada 28 - 12- 2022, por valor de \$380.820.923 (folios 479 y 480) y el informe del contratista de diciembre a folios 481 - 465, se alude al Drive de evidencias. El pago de la SSI cancelada a folio 498 no es coincidente con el valor cobrado en el período.

Desde los informes correspondientes a los meses de junio en adelante se determinó la existencia de Resoluciones de caducidad de facultad de Aforo o prescripción, al igual que en junio, este tema se resalta por cuanto la administración municipal negó la existencia de prescripciones o sumas que no se pudieran cobrar respecto de los impuestos predial e industria y comercio, que se tendrá en cuenta más adelante en otra observación.

Es necesario precisar, que se solicitaron los enlaces del Drive en los que presuntamente se encontraban las evidencias de la gestión encomendada, mismos en donde se pudieron ver soportes como: formatos para liquidación de impuestos (2021), resoluciones de caducidad de facultad de aforo, respuestas de tutela (2021), que correspondían a un contratista anterior, pues a pie de página en la sección de elaboración, aparecía la razón social de contratista de la vigencia 2021. Muy pocas de tales actuaciones tenían el soporte de haber sido elaboradas por el contratista y mes a mes se repitió básicamente la misma información en el archivo.

Se verificó la inexistencia de otro sí, que justificara el cambio de las condiciones contractuales, que permitiera el ajuste del porcentaje de lo recaudado por la vigencia 2020, la inclusión de las vigencias 2021 y 2022.

10. Hallazgo Administrativo con presuntas incidencias Disciplinaria, Fiscal y Penal – Planeación, seguimiento y pago de Contrato de Comisión de Éxito

En síntesis, las inconsistencias no solo se presentaron en la planeación, sino que viciaron la gestión del contratista ante los soportes presentados e inclusión de anualidades y conceptos no contratados ni permitidos. Lo anterior, implica la existencia de un presunto detrimento que se detalla en el siguiente cuadro, por los pagos reconocidos, en tales circunstancias:

Cuadro No. 50

Municipio de Calima El Darién		
Contrato No. 310- 13- 06- 060- 2022		
Comprobante de Pago	Fecha	Valor Pagado
304	29/03/2022	\$ 32.044.161
479	28/04/2022	\$ 32.610.825
772	10/06/2022	\$ 27.525.000
932	13/07/2022	\$ 38.767.400
1146	18/08/2022	\$ 20.747.219
1446	10/10/2022	\$ 13.290.849
1591	5/11/2022	\$ 62.653.441
1690	24/11/2022	\$ 64.333.771
2112	29/12/2022	\$ 488.482.035
Total		\$ 780.454.701

Fuente: Municipio de Calima El Darién

Elaboró: Equipo Auditor

Fuente de criterio y criterio

Ley 594 de 2000, artículos 1 a 4, 11 a 17; Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 13, 23 y 24, Ley 1386 de 2010; en su artículo 1º, Ley 1474 de 2011, artículos 82 a 84; Constitución Nacional, artículo 209; Contrato en sus componentes pre y contractual (estudios previos, propuesta y minuta); manual de contratación de la entidad. Sentencia Consejo de Estado, Sección III Subsección C; Radicación número: 76001-23-31-000-2003-01754-01(35268). M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa del 06- 05- 2015.

Causa

Planeación antijurídica y antieconómica, con vulneración al principio de conmutatividad, falencias en el seguimiento de las actividades por parte de la supervisión.

Efecto

Pérdida del recurso e inadecuada gestión en favor de la comunidad, generando un presunto detrimento por valor de \$780.454.701.

Los hechos descritos constituyen una Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal y Penal, por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39; Ley 610 de 2000, artículos 5 y 6; Ley 599 de 2000, artículo 397.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Referente a esta observación, en la cual se hacen varias afirmaciones contrarias a la verdad y al derecho, poniendo en tela de juicio la legalidad del proceder por parte de la administración.

Por las graves acusaciones que allí se hacen y sin perjuicio de esta respuesta, se procederá en derecho como corresponde para salvaguardar el buen nombre de la entidad y del contratista.

Se reproduce en forma literal el texto elaborado por el equipo auditor de la Contraloría Departamental y que firma en condición de informe preliminar la señora Ligia Stella Chaves Ortiz en calidad de Contralora Departamental:

10. Hallazgo Administrativo con presuntas incidencias Disciplinaria, Fiscal y Penal – Planeación, seguimiento y pago de Contrato de Comisión de Éxito

Contrato No. 310-13-06-060-2022

Objeto: Prestación de servicios profesionales de asesoría y soporte en la Tesorería municipal para la Gestión tributaria y en la liquidación, cobro y recuperación de cartera en el municipio de Calima El Darién

Valor: \$1.500.000 para efectos fiscales- Prima de éxito o cuota litis Plazo: Hasta 30 de diciembre de 2022

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Etapas precontractual: En los estudios previos (folios 5 - 18) se especifica la necesidad de un apoyo para fortalecer la gestión de la Tesorería Municipal, en la ejecución de los procesos desarrollando actividades en relación con el archivo y los procesos de industria y comercio y predial (sic), tendientes al cumplimiento de metas y cometidos estatales.

Se observan errores de fondo en la planeación, pues contra expresa prohibición legal y jurisprudencial se realiza la delegación en terceros para fiscalizar, liquidar, realizar cobro coactivo y demás actuaciones como sanciones de los tributos municipales, aunado al desconocimiento del principio de conmutatividad y las reglas de su aplicación para el caso concreto. Fundando dentro de los estudios previos la actuación en torno a un concepto de la Dirección de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de abril de 2010, también se ampara el contrato en fallos del Consejo de Estado que desconocen la línea jurisprudencial en torno al principio de conmutatividad.

En el ítem Valor Estimado del Contrato y Justificación del mismo, se dice que el valor es indeterminado pero determinable, estableciendo la modalidad de prima de éxito o cuota litis, el cual para efectos fiscales iniciales fue de

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

\$1.500.000, y se determinó que el valor contractual real sería el del término de la ejecución contractual.

Posteriormente, en la forma de pago se establece que los honorarios correspondientes a la comisión de éxito, se estimarían en forma mensual, según dos criterios:

El 30% sobre recaudo efectivo generado por los procesos de cobro persuasivo, coactivo, de liquidación oficial, los nuevos contribuyentes declarantes y por las correcciones provocadas en el proceso de revisión de declaraciones sobre los impuestos predial unificado, industria y comercio y Avisos y Tableros, Publicidad Exterior Visual, Juegos Permitidos, Rifas y derechos de Rifas, Delineación Urbana, Espectáculos Públicos, Sobretasa a la Gasolina Motor; Alumbrado Público y cualquier otro tributo o renta municipal de las vigencias 2019 y anteriores (a excepción de las sobretasas Ambiental, Bomberil y las Estampillas del orden Departamental). Subrayado fuera del texto original, que se exalta para evidenciar falencias posteriores.

El 15% sobre el recaudo efectivo por los mismos procesos y conceptos de la vigencia 2020, con iguales excepciones. Existió una aclaración en donde se determinaba “En todos los casos los honorarios causados incluyen IVA”; se requirió para cada pago el informe del supervisor, con el cumplimiento de los requisitos legales, anexando el contratista informe y el pago de la SSI.

Aunque está enunciado un Análisis del Sector, éste adolece de foliatura y la interrumpe pues a pesar de estar después del folio 23 (final de los estudios previos), no sigue la trazabilidad del expediente (error de Archivo documental).

Aunado a lo cual, la estructura del documento obedece a una evaluación de las circunstancias generales del municipio, pero en modo alguno, al tipo de contratación que habría de realizarse, tampoco a profundizar las condiciones financieras o topes a regularse dentro del precio, que determine con claridad cómo se llegó a establecer que habría equilibrio económico dentro del contrato, al generar los pagos sobre las sumas recaudadas en el 30% (2019 y anteriores vigencias) y el 15% (2020). No se observa tampoco, el análisis de la base de datos a entregarse al contratista, o la cantidad de deudores que se están delegando para seguimiento, siendo parte de la fiscalización a cargo de la entidad, hacer el seguimiento de los omisos y su respectivo cobro, cartera que se considera de fácil recuperación, por tratarse de personas que se encuentran ubicables, y sobre las cuales no se habría hecho cobro previamente.

Por otra parte, en el Análisis del Riesgo y Forma de Mitigarlo, solo se establecieron 3 eventos de riesgo, sin contemplar riesgos con relación a las inconsistencias en la etapa precontractual, que pueden viciar la actuación a adelantarse.

Los estudios previos son suscritos por el Tesorero general y revisados por Asesor jurídico Externo, perteneciente a la oficina de contratación. Se observa

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

la invitación al futuro contratista con idénticos parámetros en materia de porcentajes a reconocer (folios 19 a 23), y posteriormente la propuesta en los mismos términos de la invitación, es decir se manifiesta por el oferente que “el valor y forma de pago de la prestación de este servicio corresponde al fijado al interior del Municipio de Calima”, como soportes de experiencia y estudios se entregó abundante material probatorio (folios 25 al 103).

La falta de cumplimiento de las prohibiciones establecidas por la ley y para la comisión de éxito desde la planeación (jurisprudencia), la vulneración a los principios de conmutatividad y economía, genera que el presente contrato no cumpla el lleno de los requisitos de ley.

Etapa contractual: A folios 107 al 113, vemos el contrato de prestación de servicios calendarado 26 de enero de 2022. Se observa que, en la cláusula 4a; se modifican las condiciones que se establecieron en los estudios previos, en materia de los criterios que generarían los porcentajes pactados y se determina que el 30% de honorarios, se cobraría sobre las vigencias 2020 y anteriores; en tanto el 15% se aplicaría sobre la gestión adelantada sobre la vigencia 2021, lo único que permaneció igual fueron las excepciones de sobretasas; la modificación indicada no tiene soporte jurídico dentro del expediente contractual. Se nombra posteriormente supervisor al Tesorero. El contrato se publica el 11 de febrero de 2022 en el Secop I, incumpliendo el término para la publicidad concedido por la ley para la publicación de las actuaciones contractuales. El acta de inicio está calendarada 28-01-2022.

Se observan las Facturas electrónicas de venta: FEV No. JP-49, calendarada 21-03- 2022, por valor de \$12.247.694 (folio 121), acompañándola el informe del contratista a folios 122- 125, en este se hace alusión a un archivo electrónico en el Drive donde se encuentran las evidencias, mismas que no hacen parte de ninguno de los soportes; una relación de presuntos pagos del impuesto predial, con pagos que oscilan entre \$400 y \$8.750.000, no hay evidencia alguna de gestión de cobro. El pago de la SSI a folio 131, no corresponde al porcentaje determinado por ley del 40% del valor del contrato. Después se encuentra el informe del supervisor, definiendo que hubo cumplimiento de lo pactado.

Se observa la factura electrónica de venta (FEV) No. JP-50, calendarada 21- 03- 2022, por valor de \$19.796.467 (folio 138) y el informe del contratista a folios 129- 157, en este se hace alusión al Drive de evidencias, una relación de presuntos pagos del impuesto predial, con pagos que oscilan entre \$109 y \$8.724.766, no hay evidencia alguna de gestión de cobro. El pago de la SSI a folio 165, no corresponde al porcentaje determinado por ley del 40% del valor del contrato.

Luego, vemos la FEV No. JP-53, calendarada 20-04- 2022, por valor de \$32.010.825 (folio 169), con el informe del contratista a folios 170- 199, en este se hace alusión a Drive de evidencias, una relación de pagos del impuesto predial, con pagos que oscilan entre \$86 y \$3.324.610, sin evidencia de gestión

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

de cobro Después se encuentra el informe del supervisor. No se observa pago de la SSI en este período

Seguidamente, vemos la FEV No. JP-63, calendada 09-06- 2022, por valor de \$27.525.000 (folios 207- 208), con el informe del contratista a folios 209 - 214, en este se hace alusión al Drive. Se observa pago de la SSI en este período por rubro que no corresponde al 40% del valor percibido, se cotiza sobre una base de \$4 millones como IBC (folio 221).

Posteriormente, vemos la FEV No. JP- 67, calendada 29-06- 2022, por valor de \$24.561.423 (folios 227- 233), con el informe del contratista a folios 234 - 296, se hace alusión a Drive de evidencias. Cabe señalar, que en este período se incluyeron pagos de predial, cuyas sumas corresponden a la vigencia 2022; también se incluyeron conceptos que estaban expresamente excepcionados incluso en el contrato, como la sobretasa bomberil y ambiental, consecuentemente los intereses derivados de éstas; sin que se sustente la razón por la cual se realiza la inclusión de los ítems determinados fuera del acuerdo. Se observa pago de la SSI en este período por rubro que no corresponde al 40% del valor percibido, se cotiza sobre una base de \$4 millones como IBC (folio 297).

Ulteriormente, se registra la FEV No. JP- 76, calendada 13-07- 2022, por valor de \$20.747.219 (folios 309 - 310), con el informe del contratista a folios 311 - 314, en iguales condiciones que los anteriores. No hay reporte del recaudo realizado, a pesar de que se enuncia en el documento informe.

Luego, se registran las facturas FEV No. JP- 86, calendada 20 -08- 2022, por valor de \$62.653.441 (folios 328 - 329), acompañándola el informe del contratista a folios 330 - 314, FEV No. JP- 92, calendada 13- 09 - 2022, por valor de \$13.290.849 (folio 351) y el informe del contratista a folios 352 - 389. Cabe señalar, que en este período se incluyeron sumas correspondientes a la vigencia 2022; también conceptos que estaban expresamente excepcionados incluso en el contrato, como la sobretasa bomberil y ambiental, consecuentemente los intereses derivados de estas. FEV No. JP- 106, calendada 23 - 10- 2022, por valor de \$64.333.771 (folios 400 - 401), con el informe del contratista a folios 402 - 404, en este se hace alusión al Drive. No hay reporte del recaudo realizado. FEV No. JP- 128, calendada 13 - 12- 2022, por valor de \$9.466.103 (folio 414), con el informe del contratista de octubre a folios 415 - 426.

En la trazabilidad se observa la FEV No. JP- 129, calendada 13 – 12 - 2022, por valor de \$98.195.008 (folios 438), con el informe del contratista de noviembre a folios 439 – 465. Se discrimina el cobro del 30% por recaudo de impuesto a la publicidad, cuando entre los períodos pagados se incluyó 2022, que no era parte del contrato (folio 445). El pago de la SSI cancelada a folio 467 no es coincidente con el valor cobrado en el período.

Finalmente, se observa la FEV No. JP- 131, calendada 28 – 12 - 2022, por valor de \$380.820.923 (folios 479 y 480) y el informe del contratista de diciembre a

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

folios 481 - 465, se alude al Drive de evidencias. El pago de la SSI cancelada a folio 498 no es coincidente con el valor cobrado en el período.

Desde los informes correspondientes a los meses de junio en adelante se determinó la existencia de Resoluciones de caducidad de facultad de Aforo o prescripción, al igual que en junio, este tema se resalta por cuanto la administración municipal negó la existencia de prescripciones o sumas que no se pudieran cobrar respecto de los impuestos predial e industria y comercio, que se tendrá en cuenta más adelante en otra observación.

Es necesario precisar, que se solicitaron los enlaces del Drive en los que presuntamente se encontraban las evidencias de la gestión encomendada, mismos en donde se pudieron ver soportes como: formatos para liquidación de impuestos (2021), resoluciones de caducidad de facultad de aforo, respuestas de tutela (2021), que correspondían a un contratista anterior, pues a pie de página en la sección de elaboración, aparecía la razón social de contratista de la vigencia 2021. Muy pocas de tales actuaciones tenían el soporte de haber sido elaboradas por el contratista y mes a mes se repitió básicamente la misma información en el archivo.

Se verificó la inexistencia de otro sí, que justificara el cambio de las condiciones contractuales, que permitiera el ajuste del porcentaje de lo recaudado por la vigencia 2020, la inclusión de las vigencias 2021 y 2022.

En síntesis, las inconsistencias no solo se presentaron en la planeación, sino que viciaron la gestión del contratista ante los soportes presentados e inclusión de anualidades y conceptos no contratados ni permitidos. Lo anterior, implica la existencia de un presunto detrimento que se detalla en el siguiente cuadro, por los pagos reconocidos, en tales circunstancias.
(...).

Las observaciones se resumen así:

Comentario del equipo auditor	Página	Supuesta falencia
Se observan errores de fondo en la planeación, pues contra expresa prohibición legal y jurisprudencial se realiza la delegación en terceros para fiscalizar, liquidar, realizar cobro coactivo y demás actuaciones como sanciones	64	Se suscribió un contrato prohibido por la Ley
de los tributos municipales, aunado al desconocimiento del principio de Conmutatividad y las reglas de su aplicación	64	Se motivó el contrato en fallos del Consejo de Estado que desconocen la línea jurisprudencial en torno al principio

RESPUESTA DE LA ENTIDAD		
para el caso concreto. Fundando dentro de los		
estudios previos la actuación en torno a un		
Concepto de la Dirección de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de abril de 2010, también se ampara el contrato en fallos del Consejo de Estado que desconocen la línea jurisprudencial en torno al principio de conmutatividad.		de conmutatividad
Análisis del sector	65	Se anuncia, pero no está o está incompleto
	65	Hay un error en la organización de los documentos
	65	Es una evaluación de las circunstancias generales del municipio y no un verdadero análisis del sector
	65	No explica el tipo de contratación que habría de realizarse
	65	No profundiza las condiciones financieras o topes a regularse dentro del precio
	65	No explica cómo se llegó a establecer que habría equilibrio económico dentro del contrato
	65	No se observa tampoco, el análisis de la base de datos a entregarse al contratista, o la cantidad de deudores que se están delegando para seguimiento

RESPUESTA DE LA ENTIDAD		
	65	En el Análisis del Riesgo y Forma de Mitigarlo, solo se establecieron 3 eventos de riesgo, sin contemplar riesgos con relación a las inconsistencias en la etapa precontractual
Revisión del texto contractual y de la carpeta: estudios previos y contrato	66	Se observa que, en la cláusula 4a; se modifican las condiciones que se establecieron en los estudios previos (...) a modificación indicada no tiene soporte jurídico dentro del expediente contractual
	66	El contrato se publica el 11 de febrero de 2022 en el Secop I, incumpliendo el
		Término para la publicidad concedido por la ley para la publicación de las actuaciones contractuales.
Revisión de la FEV No. JP-49	66	No hay evidencias en el Drive
	66	No hay evidencia alguna de gestión decbro
	66	El pago de la SSI a folio 131, no corresponde al porcentaje determinado por ley del 40% del valor del contrato.
Revisión de la FEV No. JP-50	66	No hay evidencias en el Drive
	66	No hay evidencia alguna de gestión decbro
	66	El pago de la SSI a folio 165, no corresponde al porcentaje determinado por ley del 40% del valor del contrato.
Revisión de la FEV No. JP-53	66	No hay evidencias en el Drive

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

	67	No hay evidencia alguna de gestión decobro
	67	No hay PILA
Revisión de la FEV No. JP-63	67	No hay evidencias en el Drive
	67	No hay evidencia alguna de gestión decobro
	67	El pago de la SSI a folio 221, no corresponde al porcentaje determinado por ley del 40% del valor del contrato.
Revisión de la FEV No. JP-63	67	Evidencias del Drive no están
	67	no hay evidencia alguna de gestión decobro
	67	Se incluyeron pagos de la vigencia 2022 y de sobretasas
	67	El pago de la SSI a folio 297, no corresponde al porcentaje determinado por ley del 40% del valor del contrato.
Revisión de la Revisión de la FEV No. JP-76	67	Evidencias del Drive no están
	67	no hay evidencia alguna de gestión decobro
	67	Se incluyeron pagos de la vigencia 2022 y de sobretasas

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Revisión de la FEV No. JP-86	67	No hay informe de recaudo
Revisión de la FEV No. JP-92	67	Se incluyeron pagos de la vigencia 2022 y de sobretasas
Revisión de la FEV No. JP-106	67	Evidencias del Drive no están
	67	no hay evidencia alguna de gestión decobro
	67	No hay informe de recaudo
Revisión de la FEV No. JP-129	67	Se incluyó publicidad exterior 2022 que estaba excluido
	67	PILA no coincide con lo cobrado
Revisión de la FEV No. JP-131	68	Evidencias del Drive no están
	68	PILA no coincide con lo cobrado
Desde los informes correspondientes a los meses de junio en adelante se determinó la existencia de Resoluciones de caducidad de facultad de Aforo o prescripción, al igual que en junio	68	Si hay resoluciones de prescripción y sedijo que no
Se solicitaron los enlaces del Drive en los que presuntamente se encontraban las evidencias de la gestión encomendada, mismos en donde se pudieron ver soportes como: formatos para liquidación de impuestos (2021), resoluciones de caducidad de facultad de aforo, respuestas de tutela (2021), que correspondían a un contratista anterior, pues a pie de página en la sección de elaboración, aparecía la razón social de contratista de la vigencia 2021.	68	Los soportes de gestión son de otro contratista
Se verificó la inexistencia de otro sí, que justificara el cambio de las condiciones contractuales, que permitiera el ajuste del porcentaje de lo recaudado por la vigencia 2020, la inclusión de las vigencias 2021 y 2022.	68	Se incluyó en la base de liquidación de honorarios pagos por vigencias expresamente excluidas sin que existiera otro sí

Respuestas que desvirtúan la observación y los hallazgos:

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

- **Sobre la supuesta violación al artículo 1 de la Ley 1386 de 2010.**

No es cierto que exista prohibición legal para suscribir contratos como el No. 310-13-06-060- 2022 cuyo objeto fue la “Prestación de servicios profesionales de asesoría y soporte en la Tesorería municipal para la Gestión tributaria y en la liquidación, cobro y recuperación de cartera en el municipio de Calima El Darién” con valor indeterminado pero determinable a través del esquema de “prima de éxito o cuota litis”.

Para levantar el “hallazgo” el equipo auditor recurre a la Ley 1386 de 2010 que en su artículo 1º señala:

Artículo 1º. Prohibición de entregar a terceros la administración de tributos. No se podrá celebrar contrato o convenio alguno, en donde las entidades territoriales, o sus entidades descentralizadas, deleguen en terceros la administración, fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones, e imposición de sanciones de los tributos por ellos administrados. La recepción de las declaraciones, así como el recaudo de impuestos y demás pagos originados en obligaciones tributarias podrá realizarse a través de las entidades autorizadas en los términos del Estatuto Tributario Nacional, sin perjuicio de la utilización de medios de pago no bancarizados. (Subrayas fuera de texto).

Como puede leerse, la norma no prohibió contratos con remuneración de cuota litis sino los contratos que tengan por objeto la DELEGACIÓN EN TERCEROS de las funciones de administración, fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones, e imposición de sanciones de los tributos.

Se trata de una disposición prohibitiva, cuya interpretación es restrictiva. Sobre este particular viene al caso citar el Concepto C.E. 2166 de 2013 del Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil:

está de más recordar que las prohibiciones, en tanto limitan la libertad y los derechos de las personas, son de origen constitucional y legal; la tipificación de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa; y su aplicación es restrictiva, de manera que excluye la analogía Legis o iuris y la interpretación extensiva. Las normas legales de contenido prohibitivo hacen parte de un conjunto de disposiciones que integran un régimen jurídico imperativo y de orden público, razón por la cual no son disponibles ni pueden ser derogadas, modificadas, ampliadas o adicionadas por acuerdo o convenio o acto unilateral.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional²⁵ [[1]] y del Consejo de Estado²⁶ [[2]], coinciden en que las normas que establecen prohibiciones deben estar de manera explícita en la Constitución o en la ley y no podrán ser excesivas ni desproporcionadas. No pueden interpretarse extensivamente sino siempre en forma restrictiva o estricta; es decir, en la aplicación de las normas prohibitivas, el intérprete solamente habrá de tener en cuenta lo que en ellas expresamente se menciona y, por tanto, no le es permitido ampliar el natural y obvio alcance de los supuestos que contemplan, pues como entrañan una limitación -así fuere justificada- a la libertad

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

de actuar o capacidad de obrar, sobrepasar sus precisos términos comporta el desconocimiento de la voluntad del legislador.

Así, en esta materia cobra importancia la regla de hermenéutica consagrada en el artículo 31 del Código Civil, según la cual, “[l]o favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a toda ley se determinará por su genuino sentido, y según las reglas de interpretación...” (“favorabilidad sunt ampliada, odiosa sunt restringenda”); y de ahí la proscripción de las interpretaciones extensivas de las normas prohibitivas, tal y como lo precisó la Corte Suprema de Justicia, al señalar que “[e]n la interpretación de las leyes prohibitivas no deben buscarse analogías o razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos claramente en la prohibición”²⁷[[3]].

En consecuencia, la interpretación y aplicación restrictiva es una regla que rige tratándose de normas prohibitivas, dado que consagran limitaciones al ejercicio de un derecho o de competencias señaladas en la ley, criterio hermenéutico que responde al principio de taxatividad, de acuerdo con el cual solo operan las prohibiciones que en forma precisa establece el legislador.” (Subrayas fuera de texto).

El artículo 1 de la ley 1386 de 2010, por ser norma prohibitiva es de interpretación restrictiva. Así las cosas, lo que prohíbe es la práctica de la delegación de funciones de la gestión tributaria a terceros por vía contractual.

Sobre la delegación, el artículo 9 de la Ley 489 de 1998 dice:

“ARTÍCULO 9.- Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente Ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.

...”

(subrayas fuera de texto)

Si se revisa el contrato No. 310-13-06-060-2022, de su objeto y de las actividades específicas encomendadas al contratista, claramente se concluye que el contratista NUNCA fue destinatario de la delegación de ninguna función de la tesorería y que su labor consistió en la asesoría y el apoyo operativo.

Esta misma razón el ente de control se equivoca al señalar que en los estudios previos “No se observa tampoco, el análisis de la base de datos a entregarse al contratista, o la cantidad de deudores que se están delegando para seguimiento.”

Insisto, el contratista NUNCA recibió delegación y no es ese el objeto del contrato ni esa figura hace parte del alcance de las prestaciones.

Por esa razón el ente de control no puede afirmar que se contrató en contra de prohibición legal y por las mismas razones no puede predicarse un daño del que se desprenda responsabilidad de ningún tipo.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

• Sobre los contratos de prestación de servicios con remuneración cuota Litis.

Suele insinuarse que el pacto de remuneración por cuota litis es un indicador de la delegación. Nada más equivocado. El informe del ente de control incurre justamente en ese equívoco y refiere una supuesta vulneración al “principio de conmutatividad” expresado en una “línea jurisprudencial” del Consejo de Estado que no se encuentra explícita en el informe.

Para desvirtuar esas afirmaciones:

Las líneas jurisprudenciales son un concepto de la metodología de la investigación y se aplica en Colombia con efusividad a partir de la obra “EL DERECHO DE LOS JUECES” de Diego Eduardo López Medina. Consiste en esencia en un análisis histórico de precedentes para identificar su relevancia, identificar aquellas “hito” para construir teorías estructurales y a partir de ello reglas y subreglas frente a un tema.

Sin embargo, en derecho administrativo las líneas jurisprudenciales solamente adquieren verdadero valor normativo cuando se consagran en sentencias de unificación de conformidad con:

Artículo 10 Ley 1437 de 2011	ARTÍCULO 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas.
Artículo 102 Ley 1437 de 2011	ARTÍCULO 102. Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades. Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos. ...
Artículo 270 Ley 1437 de 2011	ARTÍCULO 270. Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.

Líneas jurisprudenciales se hacen explícitas de una forma concreta, no basta con señalar su existencia. En el informe de la Contraloría Departamental el equipo auditor se refiere a una línea que no explica, respecto de la cual solo cita la sentencia del 6 de mayo de 2015 proferida dentro del expediente con radicación 76001-23-31-000-2003-01754-01(35268) por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, consejero ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa, la cual no es de unificación, razón por la cual no puede

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

derivarse hallazgo administrativo, disciplinario, fiscal o penal de una regla de derecho que no existe.

- **Respecto del pacto de honorarios por comisión de éxito o por cuota litis debe señalarse de forma clara que la ley la autoriza y las reglas para su determinación están sujetas a la autonomía de las partes.**

A partir de la expedición del estatuto general de contratación (Ley 80 de 1993) el régimen contractual del sector oficial está integrado por principios, reglas generales y por una amplísima remisión al régimen contractual privado. Así se desprende del artículo 13:

ARTÍCULO 13.- De la Normatividad Aplicable a los Contratos Estatales. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta Ley.

(subrayas fuera de texto)

La remuneración por cuota litis es justamente una forma de pago típica de los contratos de mandato y de prestación de servicios con los profesionales en derecho. El contrato No. 310- 13-06-060-2022 cuyo objeto fue la “Prestación de servicios profesionales de asesoría y soporte en la Tesorería municipal para la Gestión tributaria y en la liquidación, cobro y recuperación de cartera en el municipio de Calima El Darién” con valor indeterminado pero determinable a través del esquema de “prima de éxito o cuota litis” se suscribió con una persona natural profesional en derecho (Abogado).

La Corte Constitucional en sentencia T-1143 de 28 noviembre de 2003 advirtió que entre las distintas modalidades de cobro de los abogados se encuentra la “Cuota litis”, la cual consiste en el:

"pacto que se suscribe entre el abogado y su cliente cuyo objeto es la obtención de un porcentaje del objeto del pleito, siempre que éste se gane. Se caracteriza, además, porque el profesional asume el cubrimiento de todos los gastos que conlleve la gestión que se comprometió a desarrollar”.

(...)

“correspondiente a la remuneración que corresponde al negocio contratado (que) no tiene carácter cierto y determinado, sino que es contingente y aleatoria (sic), como

Que su exigencia y cuantía dependen del resultado económico exitoso del proceso.”

El contrato No. 310-13-06-060-2022 se suscribió con una persona natural profesional del derecho, para adelantar gestiones de asesoría y apoyo, en dónde él (el contratista) asumió la totalidad de las expensas necesarias para el avance del contrato, sujeto a un resultado aleatorio del cual dependía la causación de los honorarios. Es decir, se pagó por un resultado más no, por la mera gestión.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Respecto de esta modalidad de contratos de apoyo a la gestión tributaria y la remuneración por éxito, la Sección Tercera del Consejo de Estado dijo en Sentencia 2000-01134 de marzo 16 de 2015 dictada dentro del expediente con radicación 25000-23-26-000-2000-01134-01 (27872), adujo lo siguiente:

“La asesoría para la proyección de documentos de cobro del impuesto de industria y comercio (ICA) por el servicio de energía no conduce a la nulidad absoluta del contrato estatal, pues el hecho de que se impida encomendar a particulares el recaudo de tributos no significa que contratistas privados no puedan adelantar ciertas labores de asesoría, siempre que la vigilancia y control de la función los mantenga la administración.”

Entonces, a la luz de las normas del derecho privado alusivas al mandato y a la prestación de servicios contratados con abogados, la remuneración por cuota litis es válida y no puede haber lugar a la crítica

- **Sobre la supuesta violación al principio de conmutatividad.**

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, en Sentencia del 22 de junio de 2011 dentro del expediente No. 85001-23-31-003-1998- 00070-01(18836) con ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa explica muy bien la cuestión de la conmutatividad expresó:

“El fenómeno de la conmutatividad del contrato estatal se edifica sobre la base del equilibrio, de la igualdad o equivalencia proporcional y objetiva de las prestaciones económicas y por consiguiente las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta y de la celebración del contrato deben permanecer durante su ejecución, e incluso su liquidación, manteniéndose en estas etapas las obligaciones y derechos originales así como las contingencias y riesgos previsibles que asumieron las partes, de tal suerte que de llegar a surgir fenómenos que rompan el equilibrio que garantiza el legislador, debe de inmediato restablecerse. Sin embargo, lo anterior no significa que en todas las hipótesis el contratista deba obtener con exactitud numérica la utilidad calculada y esperada por él pues no cualquier imprevisto que merme su ventaja tiene la virtualidad de conducir al restablecimiento económico. En efecto, sólo aquellas eventualidades imprevistas que alteran gravemente la ecuación financiera son idóneas para pretender con fundamento en ellas el restablecimiento económico pues si esto no se garantiza se afectaría el interés público que está presente en la contratación estatal. Así que el restablecimiento del equilibrio económico más que proteger el interés individual del contratista lo que ampara fundamentalmente es el interés público que se persigue satisfacer con la ejecución del contrato.”

(subrayas fuera de texto)

En principio se refiere a la equivalencia de prestaciones entre las partes, es decir, que al tiempo que el contratista percibe unos honorarios, ellos tengan sustento en la realización de unas actividades que los justifican.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Cierto que la sentencia del 6 de mayo de 2015 dictada en el proceso con radicación número 76001-23-31-000-2003-01754-01(35268) hace varias anotaciones especiales en relación con la comisión de éxito, sin embargo, no hay allí una “línea jurisprudencial” ni se trata de una sentencia de unificación, razón por la cual NO hay norma jurídica de la cual se desprenda responsabilidad para la administración.

En el caso del contrato No. 310-13-06-060-2022 cuya remuneración fue por comisión de éxito o de cuota litis, la conmutatividad resulta explícita tanto en los estudios previos como en el contrato mismo y se cumple incluso con los presupuestos de la sentencia del 6 de mayo de 2015:

(1) Se debe establecer en los estudios previos la metodología y la escala de límites razonables para determinar la cuantía	La cuantía del contrato es única y dependía del factor logro respecto de unos conceptos y vigencias concretas. Por esa razón, no podían definirse límites porque el objetivo del contrato era justamente hacer toda la recuperación de cartera de fuera posible.
(2) Se debe contar con los estudios financieros, económicos y presupuestales, que permitan sustentar y determinar su proyección en tiempo y cuantía, de manera que no se convierta en una obligación indeterminada, no motivada e irrazonable	Por tratarse de una comisión sujeta exclusivamente al éxito de la actividad, no resultaba posible fijar ninguna proyección del ingreso ni de la suma de honorarios a pagar precisamente porque el resultado era completamente aleatorio. El Municipio nunca pagaría sumas indeterminadas ni que faltaran a la razonabilidad porque en todos los casos el valor a pagar era equivalente al logro obtenido.
(3) para el reconocimiento y la cuantificación de toda comisión de éxito en los contratos de prestación de servicios debe contarse con los estudios económicos, financieros y de mercado que permitan establecer el valor que pueda representar el resultado o éxito efectivamente logrado con el objeto contratado	Los estudios previos señalan con claridad que se toma como referencia los promedios de contrataciones anteriores en el Municipio.
(4) el valor de la comisión de éxito comprende tanto el IVA, como los demás impuestos a que haya lugar a cargo del contratista	Tanto los estudios previos como el contrato señalan en forma clara que el valor pagado incluye el IVA y todos los demás recargos.
(5) en los contratos de prestación de servicios sólo se reconocerá la comisión de éxito siempre que efectivamente se logre beneficio [s] o éxito objetivamente identificado en los estudios previos, para el patrimonio público o el interés general	El contratista facturó únicamente cuando se acreditó el ingreso para el Municipio.
(6) en ningún caso podrá percibirse comisión de éxito por la simple ejecución del contrato cuando no se ha logrado o verificado efectivamente el beneficio o provecho para el patrimonio público	El contratista facturó únicamente cuando se acreditó el ingreso para el Municipio.
(7) no se puede pagar comisión de éxito por fuera de lo estipulado contractualmente	El contratista en cada informe detalló en forma precisa a partir del informe de recaudo entregado por la propia administración, los conceptos, períodos y pagos imputables a su gestión y que se tomaron como base para la liquidación de los honorarios. Sobre este aspecto se ampliará más adelante.
(8) presupuestalmente debe estar respaldado el pago de la comisión de éxito para su pago, de acuerdo con las normas y reglamentos, y en cumplimiento de la estricta legalidad de las disposiciones presupuestales aplicables por cada entidad pública	En todos los casos los pagos hechos al contratista estuvieron sujetos al cumplimiento de los procedimientos presupuestales y contables. De hecho, el contratista no necesariamente recibió los pagos en el mismo período en que facturó porque para el trámite de sus cuentas debían precisarse todas las reglas de orden presupuestal y contable, aspecto este sobre el que también se ampliará más adelante.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Ahora bien, mal podría pretender la Contraloría que en los documentos que componen la fase de planeación del contrato estatal se incluyan de forma

Esquemática y literal las cuestiones a las que se refiere una sentencia que no es de unificación, pues ello llevaría al sinsentido de que la administración deba construir escritos con fórmulas sacramentales inalcanzables por la variedad y cantidad de sentencias existentes, lo que haría imposible la contratación.

Entonces, no hay falta al denominado principio de conmutatividad, se cumplen los presupuestos incluso de esa sentencia que de forma aislada cita el ente de control y en todo caso, de la ausencia de determinadas literalidades y formas no se desprende ningún daño ni falta.

- **Sobre la planeación y ejecución del contrato**

Lo primero que debe anotarse es que la Ley 80 de 1993 no consagra ningún principio de planeación:

ARTÍCULO 23.- De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.

(subrayas fuera de texto)

La planeación es más bien un principio derivado y de desarrollo jurisprudencial como una manifestación del principio de economía.

- **sobre los denominados “estudios previos” el Decreto 1082 de 2015 reglamentario de la Ley 80 de 1993 señala respecto de su contenido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1.:**

Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Estos deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección:

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación.
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos.
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

como los calculó y soportar sus cálculos presupuestales en la estimación de aquellos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.

6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.

7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el proceso de contratación.

8. La indicación de si el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial.

Los estudios previos del contrato No. 310-13-06-060-2022 cumplen plenamente con la exigencia de contenido a que se refiere el decreto reglamentario. A ello hay que agregar que, dada la especialidad del servicio, el elemento fundamental de la selección del contratista estaba dado por la idoneidad, la experticia en la labor y la experiencia comprobada en la realización de esta.

Entonces, si los estudios previos cumplieron con el contenido exigido por la norma y el contratista seleccionado cumplía con los presupuestos de idoneidad, experticia y experiencia, no procede exigencia adicional -más allá de si es conveniente o no añadir elementos- y menos pretender derivar responsabilidades por faltas inexistentes.

● Sobre las diferencias entre el texto de los estudios previos y el contenido del contrato.

En el informe preliminar dice la contraloría que las condiciones de precio y forma de pago en los estudios previos difieren de las que finalmente se pactaron en el contrato y que no existe justificación jurídica para ello.

Si se revisan los documentos que hacen parte del contrato se observa que el sentido de las prestaciones es el mismo, esto es, el contratista tiene derecho a una remuneración contra resultado que depende directamente de la gestión que realiza y que, para efectos del cálculo de los honorarios se tienen dos (2) tarifas distintas que dependen de la antigüedad de la cartera que se recauda.

En efecto existe una diferencia en los periodos, pero claramente corresponde a un error en la redacción de los estudios previos, pues tanto en la oferta como el contrato coinciden:

Oferta	Estudios previos	Contrato

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

<p>4. Oferta económica y componentes</p> <p>Por la prestación de nuestros servicios causaremos en la modalidad de cuota Litis así:</p>	<p>FORMA DE PAGO</p> <p>La prima de éxito es equivalente a: Los honorarios correspondientes a las comisiones de éxito sobre recaudo efectivo, serán pagaderos en forma mensual, valor indeterminado que depende según los siguientes criterios:</p>	<p>CLÁUSULA CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor de este contrato es indeterminado pero determinable atendiendo a la modalidad de prima de éxito o cuota litis. Para todos los efectos legales y fiscales el valor de este Contrato es de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$1.500.000.00) para lo cual cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.0000050 del 19 de enero de 2022, los cuales se pagarán así: La prima de éxito es equivalente a: Los honorarios correspondientes a las comisiones de éxito sobre recaudo efectivo, serán pagaderos en forma mensual, valor indeterminado que depende según los siguientes criterios:</p>
<p>4.1. El TREINTA POR CIENTO (30%) sobre el recaudo efectivo generado por los procesos de cobro persuasivo (publicidad, oficios, llamadas, etc.), coactivo, de liquidación oficial y por los nuevos contribuyentes declarantes y por las correcciones provocadas en el proceso de revisión de declaraciones sobre los impuestos Predial Unificado, Industria y Comercio y Avisos y Tableros, Publicidad Exterior Visual, Juegos Permitidos, Rifas y derechos de Rifas, Delineación Urbana, Espectáculos Públicos, Sobretasa a la Gasolina Motor, Alumbrado Público y cualquier otro tributo o renta municipal de las <u>vigencias 2020 y anteriores</u> (a excepción de las Sobretasas Ambiental, Bomberil y las Estampillas del orden Departamental) así como por el recaudo de infracciones de tránsito y derechos de tránsito.</p>	<p>1. La suma que corresponda al cálculo equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) sobre el recaudo efectivo generado por los procesos de cobro persuasivo, coactivo, de liquidación oficial y por los nuevos contribuyentes declarantes y por las correcciones provocadas en el proceso de revisión de declaraciones sobre los impuestos Predial Unificado, Industria y Comercio y Avisos y Tableros, Publicidad Exterior Visual, Juegos Permitidos, Rifas y derechos de Rifas, Delineación Urbana, Espectáculos Públicos, Sobretasa a la Gasolina Motor, Alumbrado Público y cualquier otro tributo o renta municipal de las <u>vigencias 2019 y anteriores</u> (a excepción de las sobretasas Ambiental, Bomberil y las Estampillas del orden departamental);</p>	<p>1. La suma que corresponda al cálculo equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) sobre el recaudo efectivo generado por los procesos de cobro persuasivo, coactivo, de liquidación oficial y por los nuevos contribuyentes declarantes y por las correcciones provocadas en el proceso de revisión de declaraciones sobre los impuestos Predial Unificado, Industria y Comercio y Avisos y Tableros, Publicidad Exterior Visual, Juegos Permitidos, Rifas y derechos de Rifas, Delineación Urbana, Espectáculos Públicos, Sobretasa a la Gasolina Motor, Alumbrado Público y cualquier otro tributo o renta municipal de las <u>vigencias 2020 y anteriores</u> (a excepción de las sobretasas Ambiental, Bomberil y las Estampillas del orden departamental);</p>

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

<p>4.2. EL QUINCE POR CIENTO (15%) sobre el recaudo efectivo generado por los procesos de cobro persuasivo (publicidad, Oficios, llamadas, etc.), coactivo, de liquidación oficial y por los nuevos contribuyentes declarantes y por las correcciones provocadas en el proceso de revisión de declaraciones sobre los impuestos Predial Unificado, Industria y Comercio y Avisos y Tableros, Publicidad Exterior Visual, Juegos Permitidos, Rifas y derechos de Rifas, Delineación Urbana, Espectáculos Públicos, Sobretasa a la Gasolina Motor, Alumbrado Público y cualquier otro tributo o renta municipal de la vigencia 2021 (a excepción de las Sobretasas Ambiental Bomberil y las Estampillas del Orden Departamental).</p>	<p>2. La suma que corresponda al cálculo equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) sobre el recaudo efectivo generado por los procesos de cobro persuasivo, coactivo, de liquidación oficial y por los nuevos contribuyentes declarantes y por las correcciones provocadas en el proceso de revisión de declaraciones sobre los impuestos Predial Unificado, Industria y Comercio y Avisos y Tableros, Publicidad Exterior Visual, Juegos Permitidos, Rifas y derechos de Rifas, Delineación Urbana, Espectáculos Públicos, Sobretasa a la Gasolina Motor, Alumbrado Público y cualquier otro tributo o renta municipal de las vigencias 2019 y anteriores (a excepción de las sobretasas Ambiental, Bomberil y las Estampillas del orden departamental);</p>	<p>La suma que corresponda al cálculo equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) sobre el recaudo efectivo generado por los procesos de cobro persuasivo, coactivo, de liquidación oficial y por los nuevos contribuyentes declarantes y por las correcciones provocadas en el proceso de revisión de declaraciones sobre los impuestos Predial Unificado, Industria y Comercio y Avisos y Tableros, Publicidad Exterior Visual, Juegos Permitidos, Rifas y derechos de Rifas, Delineación Urbana, Espectáculos Públicos, Sobretasa a la Gasolina Motor, Alumbrado Público y cualquier otro tributo o renta municipal de la vigencia 2021 (a excepción de las sobretasas Ambiental, Bomberil y las Estampillas del orden departamental)</p>
---	--	---

En cualquier caso, corresponde puramente a una cuestión formal que no requiere de justificación jurídica o legal por tratarse de un error de digitación que no genera ningún daño al erario.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

- **Sobre la supuesta inadecuada liquidación de los aportes al sistema integral de seguridad social.**

En el informe preliminar que ha sido entregado por la Contraloría se afirma reiterativamente en las páginas 66 y 67 que los aportes a la seguridad social reportados por el contratista no fueron realizados tomando como base el valor cobrado en cada periodo. Lo que se observa es un error conceptual pues se confunden los verbos “cobrar”, “causar” y “percibir”.

La legislación colombiana le asigna al contratista independiente que percibe ingresos en contratos de cuantía indeterminada, la obligación de realizar aportes al sistema de seguridad social tomando como ingreso base de cotización (IBC) el 40% del valor causado. Sobre la causación es necesario recordar que el método de causación en caja que aplica a las personas naturales no comerciantes obliga a causar el ingreso cuando efectivamente se percibe.

En el caso concreto, el contratista es persona natural, no es comerciante, ejerce una profesión liberal, presentó facturas, pero no fueron pagadas en el mismo periodo, razón por la cual el IBC estaba constituido por los ingresos efectivamente percibidos en el periodo declarado.

Por otra parte, la legislación tributaria en Colombia les asigna a los contribuyentes del impuesto sobre la renta la obligación de verificar que los aportes realizados por sus prestadores de servicios se realicen tomando el IBC correspondiente a los ingresos percibidos en el periodo. Esta exigencia tiene un único propósito que es limitar las deducciones aceptadas en la declaración de renta. Si el contratante que es contribuyente de renta no verifica que su contratista haya realizado los aportes a la seguridad social tomando como base el 40% del IBC, no podrá tomarse esos pagos como deducciones en la declaración.

El municipio de Calima El Darién no es contribuyente y no es contribuyente del impuesto sobre la renta. Así lo dice de forma expresa el artículo 22 del Estatuto Tributario Nacional:

“ARTÍCULO 22. Entidades que no son contribuyentes. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y no deberán cumplir el deber formal de presentar declaración de ingresos y patrimonio, de acuerdo con el artículo 598 del presente Estatuto, la Nación, las entidades territoriales, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, las áreas metropolitanas, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana y su sistema federado, las superintendencias y las unidades administrativas especiales, siempre y cuando no se señalen en la ley como contribuyentes.

(Subrayas fuera de texto).

Entonces, además, el Municipio de Calima el Darién no estaba obligado a verificar el IBC de los aportes realizados por el contratista. El Municipio NO ES UN AUDITOR DE PLANILLAS, no existe norma de rango legal que se lo exija y en todo caso, ningún daño al erario del ente territorial se causa por una eventual errónea liquidación de los aportes por el contratista.

Aunque la observación es de suyo improcedente, revisados los documentos del contrato se observan las siguientes facturas, comprobantes de egreso y planillas

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

NOMBRE DEL DOCUMENTO: CONTESTACIÓN ENTES DEL ESTADO												
ORDEN	FECHA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1	1/22	52.180	5.514	147.504	504	1/22	8	70140	10.000	Robante de		
2	1/22	35.687	10.780	796.467	354	1/22	10	33632	10.000	Robante de		
3	1/22	54.038	16.770	110.826	479	1/22	11	36004	10.000	Robante de		
4	1/22	30.252	4.748	125.000	772	1/22	12	46338	17.000	Robante de		
5	1/22	14.486	8.437	162.843	772	1/22	13	46339	17.000	Robante de		
6	1/22	39.830	11.672	161.424	132	1/22	14	54211	10.000	Robante de		
7	1/22	34.636	2.581	147.219	132	1/22	15	47651	14.800	Robante de		
8	1/22	45.951	13.491	153.442	146	1/22	16	27424	10.000	Robante de		
9	1/22	68.781	2.048	190.850	446	1/22	17	31277	10.000	Robante de		
Centro Administrativo Municipal - CAM / Código DANE 35136 Calle 10 No. 5 - 31. Código Postal 760930 - Teléfono: (602) 2534305 - 2533476 - 2533536 Correo electrónico: atlas@calima.gov.co - atlas@calima.gov.co - atlas@calima.gov.co												
10	1/22	51.090	71.770	133.772	690	1/22	18	33667	10.000	Robante de		

Recuérdese que las planillas de liquidación de aportes se pagan mes VENCIDO, es decir, en el periodo febrero se incluyen los ingresos del mes de enero y así sucesivamente.

En el caso concreto la PILA del periodo enero 2022 corresponde a los ingresos del mes de diciembre de 2021, para cuando el contratista no tenía vínculo con el Municipio de Calima el Darién. En los meses de enero, febrero y marzo el contratista NO emitió ninguna factura ni recibió pagos del Municipio de Calima el Darién, razón por la cual las planillas de los meses de febrero, marzo y abril NO tenían ingresos imputables al contrato. Para los periodos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, el IBC corresponde en forma precisa al valor percibido por el contratista, realizando incluso aportes por el máximo legal permitido (Ej. Mayo, agosto y diciembre).

Así las cosas, de las normas referenciadas y de los documentos revisados se concluye que los aportes realizados por el contratista se ajustaron a la ley, que el Municipio hizo bien en aprobar los pagos partiendo de la existencia de vinculación al sistema y de la realización de los aportes que reportó el contratista y que, en todo caso, cualquier eventual indebido cálculo en el IBC no representa incumplimiento a ningún deber legal de la entidad territorial ni causa perjuicio al erario.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

- Sobre la supuesta inclusión en la base de liquidación de honorarios de conceptos excluidos**

Señala el auditor que se hicieron pagos tomando como base conceptos expresamente excluidos. Afirma que ello ocurrió con la presentación de las facturas JP-63, JP-76 y JP-92 que incluyeron pagos por impuesto predial y sobretasas de la vigencia 2022, y en la factura JP-129 en la que se tomaron pagos de impuesto a la publicidad exterior visual de la vigencia 2022.

Se hizo una revisión de dichas facturas y sus soportes y se encontró que:

Factura	Periodo al que corresponde	Revisión del reporte de recaudo
JP-63	Cuarto	No incluye los pagos a que hace referencia el equipo auditor. No hay ningún pago de la vigencia 2022 ni de las sobretasas. Todos los pagos corresponden a periodos INCLUIDOS en la base de liquidación de honorarios. Se anexa nuevamente el informe de recaudo entregado como soporte de esa factura.
JP-76	Sexto	No incluye los pagos a que hace referencia el equipo auditor. No hay ningún pago de la vigencia 2022 ni de las sobretasas. Todos los pagos corresponden a periodos INCLUIDOS en la base de liquidación de honorarios. Se anexa nuevamente el informe de recaudo entregado como soporte de esa factura.
JP-92	Octavo	No incluye los pagos a que hace referencia el equipo auditor. No hay ningún pago de la vigencia 2022 ni de las sobretasas. Todos los pagos corresponden a periodos INCLUIDOS en la base de liquidación de honorarios. Se anexa nuevamente el informe de recaudo entregado como soporte de esa factura.
JP-129	Undécimo	Los pagos por Impuesto a la Publicidad Exterior visual corresponden a los realizados por el señor Luis Ignacio Plata Erazo con C.C. 16.602.709 imputables a las liquidaciones oficiales LO-PUB-2021- 00013 y LO-PUB-2021-00014 objeto de cobro en el Mandamiento de Pago LO-PUB-2021-00013-2 del 6 de julio de 2022, obligaciones todas que son de las vigencias 2019 y 2020. Es fácticamente imposible que se hubieran incluido pagos de la vigencia 2022 porque los títulos de cobro (cuya copia se aporta) ni siquiera incluían ese periodo.

La conclusión del informe del ente de control es equivocada y no tiene soporte en los documentos del contrato. Se desconoce cuál fue la revisión y/o la lectura hecha por el equipo auditor.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

• Sobre el supuesto otorgamiento de prescripciones.

Señala el informe que “Desde los informes correspondientes a los meses de junio en adelante se determinó la existencia de Resoluciones de caducidad de facultad de Aforo o prescripción, al igual que en junio”. Esa afirmación sirve para concluir que se mintió previamente cuando se certificó la inexistencia de prescripciones.

Se trata nuevamente de una errónea interpretación por parte del equipo auditor.

En los informes de los períodos junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, el contratista reporta en el numeral 8 que hizo entrega de un formato de “Resolución de caducidad de facultad de aforo o de prescripción”. El informe nunca afirma que se “hicieron” resoluciones concediendo prescripciones o caducidades.

• Sobre la ausencia de soportes de la gestión

De forma reiterativa se señala en el informe preliminar que el equipo auditor no encontró soportes de la gestión, que no tuvo acceso a los enlaces al Drive que se referencia en cada informe o que los soportes corresponden a otro contratista.

Al respecto es preciso anotar que la información en las carpetas a donde apuntaban los enlaces incluidos en cada informe fue depurada por el contratista al terminar la vigencia del contrato. Esos enlaces se incluyeron con el objetivo de que el contratante, si lo consideraba pertinente, imprimiera o incluyera en la carpeta un CD. Ello para dar cumplimiento a la política nacional de cero papeles. Es entonces lógico que el equipo auditor no haya podido acceder a esa información virtual, lo que de ninguna manera puede interpretarse como ausencia de soportes o de ejecución del contrato. Proceder de esa manera supondría echar por tierra el principio de buena fe.

El contrato se ejecutó plenamente y todos los soportes que se anunciaron en cada informe efectivamente estuvieron disponibles y se procede ahora con la re-entrega

Factura	Fecha	Periodo	Periodo	Folios
JP49	21/03/22	1	Ene	Setenta y uno (71)
JP50	21/03/22	2	Feb	Ciento catorce (114)
JP53	20/04/22	3	Mar	Noventa y cinco (95)
JP63	9/06/22	4	Abr	Noventa y cinco (95)
JP66	28/06/22	4	Abr	
JP67	28/06/22	5	May	Quinientos treinta y tres (533)
JP76	13/07/22	6	Jun	Cuarenta y ocho (48)
JP86	10/08/22	7	Jul	Trescientos ocho (308)
JP92	13/09/22	8	Ago.	Cuarenta y seis (46)
JP106	23/10/22	9	Sep.	Veintisiete (27)

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

JP128	13/12/22	10	Oct	Ciento veinticinco (125)
JP129	13/12/22	11	Nov	Ochenta y seis (86)
JP131	28/12/22	12	Dic	Ciento treinta y dos(132)
Total				Mil seiscientos ochenta(1.680)

De acuerdo con lo anterior NO es cierto que no existan evidencias de la ejecución del contrato. Todo lo contrario, los documentos y comunicaciones son abundantes

3. Conclusiones

Comentario del equipo auditor	Página	Supuesta falencia	Respuesta
Se observan errores de fondo en la planeación, pues contra expresa prohibición legal y	64	Se suscribió un contrato prohibido	Desvirtuada
Jurisprudencial se realiza la delegación en terceros para fiscalizar, liquidar, realizar cobro coactivo y demás actuaciones como sanciones de los tributos municipales, aunado al desconocimiento del principio de conmutatividad y las reglas de su aplicación para el caso concreto. Fundando dentro de los estudios previos la actuación en torno a un concepto de la Dirección de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de abril de 2010, también se ampara el contrato en fallos del Consejo de Estado que desconocen la línea jurisprudencial en torno al principio de conmutatividad.	64	Se motivó el contrato en fallos del Consejo de Estado que desconocen la línea jurisprudencial al entorno al principio de conmutatividad	Desvirtuada
Análisis del sector	65	Se anuncia, pero no está o está incompleto	Desvirtuada
	65	Hay un error en la organización de los documentos	Desvirtuada
	65	Es una evaluación de las circunstancias generales del municipio y no un verdadero análisis del sector	Desvirtuada
	65	No explica el tipo de contratación que habría de realizarse	Desvirtuada
	65	No profundiza las condiciones financieras o topes a regularse dentro del	Desvirtuada

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

		65	precio No explica cómo se llegó a establecer que habría equilibrio económico dentro del contrato	Desvirtuada
		65	No se observa tampoco, el análisis de la base de datos a entregarse al	Desvirtuada
			contratista, o la cantidad de deudores que se están delegando para seguimiento	
		65	En el Análisis del Riesgo y Forma de Mitigarlo, solo se establecieron 3 eventos de riesgo, sin contemplar riesgos con relación a las inconsistencias en la etapa precontractual	Desvirtuada
Revisión del texto contractual y de la carpeta: estudios previos y contrato		66	Se observa que, en la cláusula 4a; se modifican las condiciones que se establecieron en los estudios previos (...) a modificación indicada no tiene soporte jurídico dentro del expediente contractual	Desvirtuada
		66	El contrato se publica el 11 de febrero de 2022 en el Secop I, incumpliendo el término para la publicidad concedido	Desvirtuada

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

		por la ley para la publicación de las actuaciones contractuales .	
Revisión de la FEV No. JP-49	66	No hay evidencia sen el Drive	Desvirtuada
	66	No hay evidencia alguna de gestiónde cobro	Desvirtuada
	66	El pago de la SSI afolio 131, no corresponde al porcentaje determinado por	Desvirtuada
	67	no hay evidencia alguna de gestiónde cobro	Desvirtuada
	67	Se incluyeron pagos de la vigencia 2022 y de sobretasas	Desvirtuada
	67	El pago de la SSI afolio 297, no corresponde al porcentaje determinado por ley del 40% del valor del contrato.	Desvirtuada
Revisión de la Revisión de la FEV No. JP-76	67	Evidencia s delDrive no están	Desvirtuada
	67	no hay evidencia alguna de gestiónde cobro	Desvirtuada
	67	Se incluyeron pagos de la vigencia 2022 y de sobretasas	Desvirtuada
Revisión de la FEV No. JP-86	67	No hay informe	Desvirtuada

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

		de recaudo	
Revisión de la FEV No. JP-92	67	Se incluyeron pagos de la vigencia 2022 y de sobretasas	Desvirtuada
Revisión de la FEV No. JP-106	67	Evidencias del Drive no están	Desvirtuada
	67	no hay evidencia alguna de gestión de cobro	Desvirtuada
	67	No hay informe de recaudo	Desvirtuada
Revisión de la FEV No. JP-129	67	Se incluyó publicidad exterior 2022 que estaba excluido	Desvirtuada
	67	PILA no coincide con lo cobrado	Desvirtuada
Revisión de la FEV No. JP-131	68	Evidencias del Drive no están	Desvirtuada
	68	PILA no coincide con lo cobrado	Desvirtuada
Desde los informes correspondientes a los meses de junio en adelante se determinó la existencia de Resoluciones de caducidad de facultad de Aforo o prescripción, al igual que en junio	68	Si hay resoluciones de prescripción y se dijo que no	Desvirtuada
Se solicitaron los enlaces del Drive en los que presuntamente se encontraban las evidencias de la gestión encomendada, mismos en donde se pudieron ver soportes como: formatos para liquidación de impuestos (2021), resoluciones de caducidad de facultad de aforo, respuestas de tutela (2021), que correspondían a un contratista anterior, pues a pie de página en la sección de elaboración, aparecía la razón social de contratista de la vigencia 2021.	68	Los soportes de gestión son de otro contratista	Desvirtuada
Se verificó la inexistencia de otro sí, que justificara el cambio de las condiciones contractuales, que permitiera el ajuste del porcentaje de lo recaudado por la vigencia 2020, la inclusión de las vigencias 2021 y 2022.	68	Se incluyó en la base de liquidación de honorarios pagos por vigencias expresamente excluidas sin que existiera otro sí	Desvirtuada

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

[1] Corte Constitucional. Sentencias: C-233 de 4 de abril de 2002, expediente: D-3704; C-551 de 9 de julio de 2003, expediente: CRF-001 de 9 de julio de 2003; C- 652 de 5 de agosto de 2003, expediente: D-4330; C-353 de 20 de mayo de 2009, expediente: D-7518, C-541 de 30 de junio de 2010, expediente: DD7966; entre otras.

[2] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 3 de marzo de 2005, expediente número 2004-00823-01(PI). Ver también, de la Sección Tercera. Sentencia de 22 de enero de 2002, expediente número 2001-0148-01 y, Sección Tercera. Sentencia de 20 de noviembre de 2001, expediente número 2001-0130-01(PI), entre otras.

[3] Corte Suprema de Justicia, Sentencia de 14 de diciembre de 1898, XIV, 92; reiterada por la Sala de Casación Laboral de esa misma corporación en Sentencia de 24 de julio de 1998, radicación 10767.

[4] *consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, Radicados: 1100-10-326-000-2003-000-14-01 (24.715) y otros –acumulados-, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Citada en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, sentencia de veintiocho (28) de mayo de dos mil once (2012), radicación número 07001-23-31-000-1999-00546-01(21489), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.*

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Sea lo primero antes de entrar a examinar los postulados de la defensa del municipio, hacer una revisión de los soportes traídos para su examen con la contradicción:

Se aprecian algunos archivos electrónicos, cuyo contenido corresponde a las gestiones adelantadas por parte del contratista, cabe mencionar que cada uno de estas carpetas contiene más de 15 archivos soportes y que al interior de algunos de ellos, se encuentran otras carpetas que terminan en la No. 11.

También hay que precisar que los documentos en referencia no hacían parte del contrato inicial, y a pesar de la sucinta explicación dada al respecto en la respuesta de la entidad, tenían que existir como soportes probatorios de la actividad desplegada y cancelada. Sobre el particular se profundizará, cuando nos adentremos a los postulados de la defensa esgrimida.

Muchos de los soportes corresponden a proyectos de actuaciones frente a los estrados judiciales (respuestas a las acciones de tutela, conceptos jurídicos, cobros de industria y comercio, avisos y tableros, respuestas a los recursos impetrados por deudores de los impuestos y orientaciones legales sobre el manejo de los cobros de los distintos impuestos municipales, entre otros encontramos proyectos de acuerdo para la modificación del estatuto tributario). Pero adentrándonos en los archivos encontramos literalmente lo siguiente (Soportes 1- 11):

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Auditoría Contraloría Vigencia 2022-20231110T203019Z-001.zip (evaluation copy)

File Commands Tools Favorites Options Help

Add Extract To Test View Delete Find Wizard Info VirusScan Comment SFX

Auditoría Contraloría Vigencia 2022-20231110T203019Z-001.zip Auditoría Contraloría Vigencia 20221010 - ZIP archive, unpacked size 1,079,668,392 bytes

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
10. SOPORTE 2			Carpeta de archivos		
10. SOPORTE 3			Carpeta de archivos		
10. SOPORTE 4			Carpeta de archivos		
10. SOPORTE 5			Carpeta de archivos		
10. SOPORTE 6			Carpeta de archivos		
10. SOPORTE 7			Carpeta de archivos		
10. SOPORTE 8			Carpeta de archivos		

Podemos evidenciar la cantidad de soportes que deberían haber sido parte del contrato, mediante medio magnético, todos fueron revisados:

Auditoría Contraloría Vigencia 2022-20231110T203019Z-001.zip (evaluation copy)

File Commands Tools Favorites Options Help

Add Extract To Test View Delete Find Wizard Info VirusScan Comment SFX

Auditoría Contraloría Vigencia 2022-20231110T203019Z-001.zip Auditoría Contraloría Vigencia 20221010 - ZIP archive, unpacked size 1,079,668,392 bytes

Auditoría Contraloría Vigencia 2022-20231110T203019Z-001.zip (evaluation copy)

File Commands Tools Favorites Options Help

Add Extract To Test View Delete Find Wizard Info VirusScan Comment SFX

Auditoría Contraloría Vigencia 2022-20231110T203019Z-001.zip Auditoría Contraloría Vigencia 20221010 - ZIP archive, unpacked size 1,079,668,392 bytes

Name	Size	Packed	Type
10. SOPORTE 2			Carpeta de archivos
10. SOPORTE 3			Carpeta de archivos
10. SOPORTE 4			Carpeta de archivos
10. SOPORTE 5			Carpeta de archivos
10. SOPORTE 6			Carpeta de archivos
10. SOPORTE 7			Carpeta de archivos
10. SOPORTE 8			Carpeta de archivos

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

UjmaJpbXuGS3vV... APznzaalRXtiAfhhAI5BMnpl... APznzaalRXtiAfhhAI5BMnpl... + Crear

ar Buscar texto o herramientas

6/11/23, 23:08 Gmail - Calima El Darién - Resolución y oficios de embargo a cuentas de Acción Fiduciaria

 Jorge Luis Peña Cortes <jorgepenacortes@gmail.com>

Calima El Darién - Resolución y oficios de embargo a cuentas de Acción Fiduciaria

Jorge Luis Peña Cortes <jorgepenacortes@gmail.com>
Para: Tesorería Calima <tesoreria@calimaeldarien-valle.gov.co>
Cc: Daniela España <sarquitha04@gmail.com>

3 de noviembre de 2022, 7:19

Cordial saludo,

Adjunto la resolución y oficios del asunto para su revisión y gestión.

Una vez firmados, a cada banco se llevan dos copias del oficio. El oficio que se deja en la entidad, debe llevar una copia de la resolución.

Al radicar es importante que el mensajero o la persona que lleve, exija que en el recibo se indique en forma expresa la hora en que queda radicado el oficio.

Recordar la importancia de tener manejo de la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario porque la próxima semana es posible que necesitemos disponer de esos recursos para aplicarlos a la cuenta de los predios.

Atentamente,

Jorge Luis Peña Cortés

Finalmente, vemos como algunos de los documentos producidos, son efectivamente proyectados y elaborados por la contratista sin perfil de abogado, para dar respuesta a solicitud de un deudor.

Centro Administrativo Municipal – CAM /
Calle 10 No. 6 - 25 Código Postal No.76126 - Tel: (2)2534305-2533470-2533363
E-Mail: alcaldia@calimaeldarien-valle.gov.co


Alianza
POR CALIMA EL DARIÉN
Alcaldía Municipal 2020-2023

	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 1000-10-01	
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	NIT. 890.309.611-8	Fecha: 02/01/2020	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: TESORERÍA GENERAL		Página: 2	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: OFICIOS DESPACHADOS			

Por lo anterior, para liberar el predio de las medidas, será necesario el pago de la totalidad de la deuda que presenta el inmueble.

En los anteriores términos queda atendida su solicitud.

Cordialmente

GUSTAVO CASTRO REBOLLEDO
Tesorero General

Proyectó y elaboró: Daniela España – Contratista
Revisó y aprobó: Gustavo Castro Rebollo – Tesorero General

DIRECTRICES

Como se verá en los documentos sucesivos, se imparten claras directrices para la actuación de la administración municipal, haciéndose señalamientos que No corresponden a la

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

actividad de un particular, sino que son parte de la función pública del cobro coactivo, como jurisdicción especial, es decir, propias de la entidad municipal y de los funcionarios a cargo:

ACHOG01... ACHOG04... ACHOG05... ACHOG06... ACHOG07... ACHOG08... ACHOG09... ACHOG10... ACHOG11... ACHOG12... ACHOG13... ACHOG14... ACHOG15... ACHOG16... ACHOG17... ACHOG18... ACHOG19... ACHOG20... ACHOG21... ACHOG22... ACHOG23... ACHOG24... ACHOG25... ACHOG26... ACHOG27... ACHOG28... ACHOG29... ACHOG30... ACHOG31... ACHOG32... ACHOG33... ACHOG34... ACHOG35... ACHOG36... ACHOG37... ACHOG38... ACHOG39... ACHOG40... ACHOG41... ACHOG42... ACHOG43... ACHOG44... ACHOG45... ACHOG46... ACHOG47... ACHOG48... ACHOG49... ACHOG50... ACHOG51... ACHOG52... ACHOG53... ACHOG54... ACHOG55... ACHOG56... ACHOG57... ACHOG58... ACHOG59... ACHOG60... ACHOG61... ACHOG62... ACHOG63... ACHOG64... ACHOG65... ACHOG66... ACHOG67... ACHOG68... ACHOG69... ACHOG70... ACHOG71... ACHOG72... ACHOG73... ACHOG74... ACHOG75... ACHOG76... ACHOG77... ACHOG78... ACHOG79... ACHOG80... ACHOG81... ACHOG82... ACHOG83... ACHOG84... ACHOG85... ACHOG86... ACHOG87... ACHOG88... ACHOG89... ACHOG90... ACHOG91... ACHOG92... ACHOG93... ACHOG94... ACHOG95... ACHOG96... ACHOG97... ACHOG98... ACHOG99... ACHOG100...

Buscar todo o herramientas

8:02:53, 21/01

Quel - Calima El Darién - Oficio calendario tributario

Gmail

Jorge Luis Peña Cortés <jorgepenacortes@gmail.com>

Calima El Darién - Oficio calendario tributario

1 mensaje

Jorge Luis Peña Cortés <jorgepenacortes@gmail.com> 26 de enero de 2022, 8:53

Para: Tesorería Calima <tesoreria@calimaeldarién-valle.gov.co>
Cc: Daniela España <dsan@calimaeldarién-valle.gov.co>

Sobre el oficio a los contribuyentes relacionado con la fecha y descuentos, es necesario anotar:

1. Los descuentos por pronto pago de predial efectivamente son los del Acuerdo 052.
2. El descuento por pronto pago incluso regulado por el Acuerdo 052 NO aplica a la vigencia actual si el contribuyente debe vigencias anteriores. Así lo dice expresamente el inciso final del Artículo 28 del Acuerdo 072 modificado por el Artículo 052. El descuento insisto NO aplica si debe vigencias anteriores.
3. En ICA el descuento por pronto pago quedó derogado por el Acuerdo 026 de 2021.

En mensaje independiente les haré saber sobre la posibilidad de aplicar un descuento del 80% sobre los intereses de las vigencias anteriores con base en el artículo 46 de la Ley 2155 de 2021.

Atentamente,

Jorge Luis Peña Cortés

Abogado @USBCal | Derecho Comercial @upbcolombia | Derecho Tributario @UExtornado | Máster Administración Tributaria @ef_es | Doctorando en Derecho @UN_EG

La información contenida en este mensaje electrónico y su cualquier adjunto incluido con él es confidencial y no debe ser divulgada a terceros. Si usted no es el destinatario autorizado, le rogamos que no responda a este mensaje y lo destruya.

ACHOG01... ACHOG04... ACHOG05... ACHOG06... ACHOG07... ACHOG08... ACHOG09... ACHOG10... ACHOG11... ACHOG12... ACHOG13... ACHOG14... ACHOG15... ACHOG16... ACHOG17... ACHOG18... ACHOG19... ACHOG20... ACHOG21... ACHOG22... ACHOG23... ACHOG24... ACHOG25... ACHOG26... ACHOG27... ACHOG28... ACHOG29... ACHOG30... ACHOG31... ACHOG32... ACHOG33... ACHOG34... ACHOG35... ACHOG36... ACHOG37... ACHOG38... ACHOG39... ACHOG40... ACHOG41... ACHOG42... ACHOG43... ACHOG44... ACHOG45... ACHOG46... ACHOG47... ACHOG48... ACHOG49... ACHOG50... ACHOG51... ACHOG52... ACHOG53... ACHOG54... ACHOG55... ACHOG56... ACHOG57... ACHOG58... ACHOG59... ACHOG60... ACHOG61... ACHOG62... ACHOG63... ACHOG64... ACHOG65... ACHOG66... ACHOG67... ACHOG68... ACHOG69... ACHOG70... ACHOG71... ACHOG72... ACHOG73... ACHOG74... ACHOG75... ACHOG76... ACHOG77... ACHOG78... ACHOG79... ACHOG80... ACHOG81... ACHOG82... ACHOG83... ACHOG84... ACHOG85... ACHOG86... ACHOG87... ACHOG88... ACHOG89... ACHOG90... ACHOG91... ACHOG92... ACHOG93... ACHOG94... ACHOG95... ACHOG96... ACHOG97... ACHOG98... ACHOG99... ACHOG100...

Buscar todo o herramientas

8:02:53, 21/01

Quel - Calima El Darién - Liquidaciones publicidad exterior visual

Gmail

Jorge Luis Peña Cortés <jorgepenacortes@gmail.com>

Calima El Darién - Liquidaciones publicidad exterior visual

1 mensaje

Jorge Luis Peña Cortés <jorgepenacortes@gmail.com> 26 de enero de 2022, 9:10

Para: Tesorería Calima <tesoreria@calimaeldarién-valle.gov.co>
Cc: Daniela España <dsan@calimaeldarién-valle.gov.co>

Cordial saludo,

Envío nuevamente las liquidaciones de publicidad exterior visual. La idea es que se impriman y se organicen carpetas por contribuyente. Cada carpeta debe quedar con la liquidación, la guía de entrega o impresión del correo de notificación (anexos entregados los guías) y posteriormente la factura y el pago.

A todos estos sujetos ya se les debe liquidar la vigencia 2022 de esas vallas.

Atentamente,

Jorge Luis Peña Cortés

Abogado @USBCal | Derecho Comercial @upbcolombia | Derecho Tributario @UExtornado | Máster Administración Tributaria @ef_es | Doctorando en Derecho @UN_EG

La información contenida en este mensaje electrónico y su cualquier adjunto incluido con él es confidencial y no debe ser divulgada a terceros. Si usted no es el destinatario autorizado, le rogamos que no responda a este mensaje y lo destruya.

4 adjuntos

LIQUIDACION OFICIAL LUIS IGNACIO PLATA ERAZO (1).pdf

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

quedará así:

ARTÍCULO 242. CAUSACIÓN. La Sobre-Tasa Especial que se impone mediante el presente acuerdo se causa en el mismo momento en que se factura y paga el Impuesto Predial Unificado.

Artículo nuevo: modificar el artículo 243 del Acuerdo No. 026 de 2021 el cual quedará así:

ARTÍCULO 243. BASE GRAVABLE. Se determina como base gravable para la Sobre-Tasa Especial de seguridad y convivencia ciudadana el valor del Impuesto Predial Unificado liquidado o facturado en el respectivo año gravable.

Artículo nuevo: modificar el artículo 244 del Acuerdo No. 026 de 2021 el cual quedará así:

ARTÍCULO 244. TARIFA. La tarifa de la Sobre-Tasa Especial de Seguridad y Convivencia es del 5% del Impuesto Predial Unificado.

Artículo nuevo: modificar el artículo 245 del Acuerdo No. 026 de 2021 el cual quedará así:

ARTÍCULO 245. LIQUIDACIÓN Y RECAUDO. La Sobre-Tasa Especial se declarará y pagará en la misma factura o liquidación que se emita para la liquidación y pago del Impuesto Predial Unificado y se deberá cobrar en forma conjunta e inseparable con éste.

Con estos nuevos artículos el Estatuto Tributario y de Rentas del Municipio de Calima El Darién dará cumplimiento a la Ley 2272 de 2022.

Agradeciendo su gestión,

GUSTAVO CASTRO REBOLLEDO
Tesorero General

Proyectó: Jorge Luis Peña Cortés - Contabilista



Señores:
ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Attn: Camilo Andrés Hernández C.
Representante legal
declaracionesalanza@gmail.com
Carrera 15 No. 82-99, Piso 3
Edificio Torre Alianza
Bogotá D.C.

Ref.: Reporte cese de actividades como agente de retención en el municipio
Asunto: Respuesta

Cordial saludo,

El suscrito Tesorero General en uso de las facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confiere el Acuerdo No. 026 de 2021, doy alcance a la comunicación de la referencia, recibida como anexo a mensaje de correo electrónico del 22 de noviembre de 2022. Para garantizar una respuesta de fondo (además de oportuna) reproduzco el sentido de sus solicitudes para darles enseguida solución:

"De conformidad con lo establecido en el Estatuto de Rentas municipal, por medio del presente oficio se reporta el cese de actividades en el municipio como agentes de Retención. A continuación, se relacionan los datos de la empresa para los trámites pertinentes por parte de la administración municipal y dejar dicho reporte."

Respuesta: De acuerdo con el artículo 110 del Acuerdo Municipal No. 026 de 2021 son agentes de retención de ICA en Calima El Darién:

- El Municipio de Calima El Darién.
 - Las personas jurídicas con domicilio en el Municipio de Calima El Darién.
 - Las personas jurídicas que realicen alguna actividad económica en la jurisdicción del Municipio de Calima El Darién aun cuando no tengan domicilio en esta localidad e independientemente de si la actividad esta o no gravada con el Impuesto de Industria y Comercio.
 - Las entidades de derecho público que realicen alguna actividad económica en la jurisdicción del Municipio de Calima El Darién aun cuando no tengan domicilio en esta localidad e independientemente de si la actividad esta o no gravada con el Impuesto de Industria y Comercio.
 - Los consorcios y las uniones temporales que realicen alguna actividad económica en la jurisdicción del Municipio de Calima El Darién aun cuando no tengan domicilio en esta localidad e independientemente de si la actividad esta o no gravada con el Impuesto de Industria y Comercio.
 - Los grandes contribuyentes clasificados así por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que intervengan en operaciones gravadas en el Municipio de Calima El Darién.
 - Las personas naturales o jurídicas, formas contractuales y demás entes con personería jurídica a quienes la Tesorería Municipal designe como agentes de retención del Impuesto de Industria y Comercio.
- Los agentes de retención están obligados a efectuar retención en la fuente a título del Impuesto de Industria y Comercio sobre todos los

pagos o abonos en cuenta que constituyan para quien los percibe, ingresos por el ejercicio de actividades industriales, comerciales y/o de servicios, sometidas al Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de Calima El Darién.

...

De la norma transcrita se desprende que la calidad de agente se tiene por el cumplimiento de unos presupuestos de hecho, sin que se requiera la calificación o reconocimiento. En el mismo sentido, la condición de obligado a retener NO se pierde por el hecho de reportarlo sino por la ausencia de hechos que den origen al deber formal.

Así las cosas, su comunicación se incorpora al expediente, no obstante, esta Tesorería ejercerá las funciones de fiscalización que correspondan a efectos de establecer si hubo o no obligación de practicar retenciones (Ej. En las actividades relacionadas con la vocería de patrimonios autónomos con bienes inmuebles ubicados en Calima el Darién) y en caso de no haberse cumplido con la obligación de retener y declarar esas retenciones, el suscrito procederá con los procesos de aforo, imposición de sanciones o de formulación de las denuncias por el delito de omisión de agente retenedor o recaudador.

En los anteriores términos quedan atendidas sus solicitudes.

Atentamente,

GUSTAVO CASTRO REBOLLEDO
Tesorero General

Proyectó: Jorge Luis Peña Cortés - Contabilista

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN		NET. 800.309.633-8	Fecha: 05/01/2020
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		MIPG-MIGI	Versión: 1
PROCESO: TESORERÍA GENERAL			Página: 1
NOMBRE DEL DOCUMENTO: OFICIO DESPACHADO			

LIQUIDACIÓN OFICIAL		No. LO-PUB-2021-00004
		12 de noviembre de 2021
Concepto: Impuesto a la Publicidad Exterior Visual	Año: 2021 y anteriores	Período: 01
Expediente: LO-PUB-2021-00002		
Nombres y apellidos, razón o denominación social: Paredón Los Calima SAS		
NIT: 800.303.202-1		
Dirección de notificación: Calle 23 Norte No. 1-23 Of. 001, San Felipe Barrios		
Ciudad: Cali		

LA TESORERÍA MUNICIPAL de Calima Darién (Valle), de conformidad con los preceptos por los artículos 85 de la Ley 382 de 1997, 58 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Libro 9º del Estatuto Tributario Nacional (E.T.N.), en uso de las facultades previstas por el Acuerdo 072 de 2017, y

CONSIDERANDO

- Que el artículo 14 de la Ley 140 de 1994 crea un impuesto a la publicidad exterior visual;
- Que el impuesto a la Publicidad Exterior Visual establecido por la Ley 140 de 1994 fue adoptado en Calima al Darién a través delos artículos 85 a 108 del Acuerdo Municipal No. 072 de 2017;
- Que los artículos 101, 102, 103 y 104 del Acuerdo Municipal No. 072 de 2017 consagran el ajuste previo, hecho previo, hecho generativo, base gravable y tarifa del impuesto a la Publicidad Exterior Visual en el Municipio de Calima al Darién;
- Que Paredón Los Calima SAS número de identificación 800.303.202-1 ha emitido y exhibe en la jurisdicción del Municipio de Calima al Darién los siguientes elementos visuales que incurren el Impuesto a la Publicidad Exterior Visual:



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 0000
MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN		NET. 800.309.633-8
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		MIPG-MIGI
PROCESO: TESORERÍA GENERAL		Versión: 1
NOMBRE DEL DOCUMENTO: OFICIO DESPACHADO		Página: 1

5. Que este Despacho es competente para determinar el impuesto mediante esta liquidación, la obligación tributaria a cargo de Paredón Los Calima SAS número de identificación 800.303.202-1.

Por lo anteriormente expuesto

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar oficialmente el Impuesto a la Publicidad Exterior Visual a Paredón Los Calima SAS número de identificación 800.303.202-1 por los elementos señalados en la parte motiva de este acto administrativo, como a continuación se indica:

Tipo elemento visual	Año	Tarifa	Impuesto a pagar
Valle + 8 metros cuadrados	2020	2 SMLMV	\$ 1.755.606
Valle + 8 metros cuadrados	2021	2 SMLMV	\$ 1.817.052

Valores que se incrementarán con los intereses moratorios a la fecha del pago, de conformidad con lo previsto por los artículos 824 y 825 del E.T.N.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente acto procede únicamente el recurso de reconsideración de conformidad con el artículo 725 del Estatuto Tributario Nacional, el que podrá interponerse ante la Tesorería Municipal dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación del presente acto administrativo con el fin de los recursos dispuestos en el artículo 722 del mismo.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese esta Liquidación Oficial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo 481 de 2020 o conforme con las reglas de los artículos 585, siguientes y demás concordantes del Estatuto Tributario Nacional.

NOTIFIQUE Y CUMPLA

Gustavo Castro Rebolledo
GUSTAVO CASTRO REBOLLEDO
Tesorero General

Proyectó y elaboró: Corporación Héro - Contraloría
Revisó y aprobó: Contraloría Departamental - Tesorería Municipal


DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 0000
MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN		NET. 800.309.633-8
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		MIPG-MIGI
PROCESO: TESORERÍA GENERAL		Versión: 1
NOMBRE DEL DOCUMENTO: OFICIO DESPACHADO		Página: 1

LIQUIDACIÓN OFICIAL		No. LO-PUB-2021-00001
		12 de noviembre de 2021
Concepto: Impuesto a la Publicidad Exterior Visual	Año: 2021 y anteriores	Período: 01
Expediente: LO-PUB-2021-00002		
Nombres y apellidos, razón o denominación social: Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - Contraloría And - COMFAMCO		
NIT: 800.001.206-6		
Dirección de notificación: Carrera 20 Sur 20a-40		
Ciudad: Cali		

LA TESORERÍA MUNICIPAL de Calima Darién (Valle), de conformidad con los preceptos por los artículos 85 de la Ley 382 de 1997, 58 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Libro 9º del Estatuto Tributario Nacional (E.T.N.), en uso de las facultades previstas por el Acuerdo 072 de 2017, y

CONSIDERANDO

- Que el artículo 14 de la Ley 140 de 1994 crea un impuesto a la publicidad exterior visual;
- Que el impuesto a la Publicidad Exterior Visual establecido por la Ley 140 de 1994 fue adoptado en Calima al Darién a través delos artículos 85 a 108 del Acuerdo Municipal No. 072 de 2017;
- Que los artículos 101, 102, 103 y 104 del Acuerdo Municipal No. 072 de 2017 consagran el ajuste previo, hecho previo, hecho generativo, base gravable y tarifa del impuesto a la Publicidad Exterior Visual en el Municipio de Calima al Darién;
- Que la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - Contraloría And - COMFAMCO número de identificación 800.001.206-6 ha emitido y exhibe en la jurisdicción del Municipio de Calima al Darién los siguientes elementos visuales que incurren el Impuesto a la Publicidad Exterior Visual:



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 0000
MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN		NET. 800.309.633-8
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		MIPG-MIGI
PROCESO: TESORERÍA GENERAL		Versión: 1
NOMBRE DEL DOCUMENTO: OFICIO DESPACHADO		Página: 2

5. Que este Despacho es competente para determinar el impuesto mediante esta liquidación, la obligación tributaria a cargo de Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - Contraloría And - COMFAMCO número de identificación 800.001.206-6.

Por lo anteriormente expuesto

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar oficialmente el Impuesto a la Publicidad Exterior Visual a Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - Contraloría And - COMFAMCO número de identificación 800.001.206-6 por los elementos señalados en la parte motiva de este acto administrativo, como a continuación se indica:

Tipo elemento visual	Año	Tarifa	Impuesto a pagar
Valle entrada familiar	2021	1.5 SMLMV	\$ 1.362.789

Valores que se incrementarán con los intereses moratorios a la fecha del pago, de conformidad con lo previsto por los artículos 824 y 825 del E.T.N.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente acto procede únicamente el recurso de reconsideración de conformidad con el artículo 725 del Estatuto Tributario Nacional, el que podrá interponerse ante la Tesorería Municipal dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación del presente acto administrativo con el fin de los recursos dispuestos en el artículo 722 del mismo.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese esta Liquidación Oficial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo 481 de 2020 o conforme con las reglas de los artículos 585, siguientes y demás concordantes del Estatuto Tributario Nacional.

NOTIFIQUE Y CUMPLA

Gustavo Castro Rebolledo
GUSTAVO CASTRO REBOLLEDO
Tesorero General

Proyectó y elaboró: Corporación Héro - Contraloría
Revisó y aprobó: Contraloría Departamental - Tesorería Municipal

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

ACFroGmVeli ACFroGpCa_ ACFroGpGp_ ACFroGpGp_ ACFroGpGp_ + Crea

Buscar texto o herramientas

Proceso: TESORERÍA GENERAL
Nombre del documento: OFICIO DESPACHADO

Hoja: 1

LIQUIDACIÓN OFICIAL No. LO-PUB-2021-00013
12 de noviembre de 2021

Concepto: Impuesto a la Publicidad Exterior Visual Año: 2021 y anteriores Período: 11

Expediente: LO-PUB-2021-00004

Nombre y apellidos, razón o denominación social: Luis Ignacio Plata Escobedo

NIT: 91.602.705


Dirección de notificación: Avenida Palermo - Carrera Maestral

Ciudad: Cali

LA TESORERÍA MUNICIPAL de Calima (Valle), de conformidad con los preceptos por los artículos 68 de la Ley 363 de 1987, 58 de la Ley 788 de 2002, en concordancia con el Libro IV del Estatuto Tributario Nacional (E.T.N.), en uso de las facultades previstas por el Acuerdo 072 de 2017, y

CONSIDERANDO

- Que el artículo 14 de la Ley 140 de 1984 crea el impuesto a la publicidad exterior visual.
- Que el impuesto a la Publicidad Exterior Visual adoptado por la Ley 140 de 1984 fue adaptado en Calima al Decreto 4 de 2017 del Acuerdo Municipal No. 072 de 2017.
- Que los artículos 157, 158, 159 y 164 del Acuerdo Municipal No. 072 de 2017 consagran el impuesto sobre, tanto pasivos, hecho generados sobre gravable y tarifa del impuesto a la Publicidad Exterior Visual en el Municipio de Calima (Valle).
- Que Luis Ignacio Plata Escobedo número de identificación 91.602.705 ha sido notificado y ordena en la jurisdicción del Municipio de Calima al Dado los siguientes elementos visuales que causan el impuesto a la Publicidad Exterior Visual.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Código: 0305
MUNICIPIO DE CALIMA DARÉN NIT: 901.309.613-4 Fecha: 09/11/2021
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG-MIGD Versión: 3
PROCESO: TESORERÍA GENERAL Página: 1
NOMBRE DEL DOCUMENTO: OFICIO DESPACHADO

5. Que este Despacho es competente para determinar oficialmente mediante esta liquidación, la obligación tributaria a cargo de Luis Ignacio Plata Escobedo número de identificación 91.602.705 por los elementos señalados en la parte motiva de este acto administrativo, sobre la conformidad se indica:

Por lo anteriormente expuesto

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar oficialmente el impuesto a la Publicidad Exterior Visual a Luis Ignacio Plata Escobedo número de identificación 91.602.705 por los elementos señalados en la parte motiva de este acto administrativo, sobre la conformidad se indica:

Tipo elemento visual	Año	Tarifa	Impuesto a pagar
Valla Muestril Ilum.	2019	5 SMLMV	\$ 1.696.232
Valla Muestril Ilum.	2020	5 SMLMV	\$ 1.733.808
Valla Muestril Ilum.	2021	5 SMLMV	\$ 1.817.052

Valores que se homologarán con los intereses moratorios a la fecha del pago, de conformidad con lo previsto por los artículos 834 y 835 del E.T.N.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente acto procede únicamente el recurso de reconsideración de conformidad con el artículo 725 del Decreto 2153 de 1991, el que podrá interponerse ante la Tesorería Municipal dentro de los diez (10) meses siguientes a la notificación del presente acto administrativo con el fin de los recursos disponibles en el artículo 722 del Decreto 2153 de 1991.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese esta Liquidación Oficial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo 481 de 2020 o conforme con las reglas de los artículos 365, siguientes y demás concordantes del Estatuto Tributario Nacional.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Gustavo Castro Rebolledo
GUSTAVO CASTRO REBOLLEDO
Tesorero General

Procedió y actuó: Copia para: - Contable
Fecha: 9 de noviembre de 2021

ACFroGAct_ ACFroGAGe_ ACFroGAlit_ ACFroGAMR_ ACFroGAsi_ + Crea

Buscar texto o herramientas

Proceso: TESORERÍA GENERAL
Nombre del documento: OFICIO DESPACHADO

Hoja: 1

LIQUIDACIÓN OFICIAL No. LO-PUB-2021-00014
12 de noviembre de 2021

Concepto: Impuesto a la Publicidad Exterior Visual Año: 2021 y anteriores Período: 11

Expediente: LO-PUB-2021-00004

Nombre y apellidos, razón o denominación social: Luis Ignacio Plata Escobedo

NIT: 91.602.705

Dirección de notificación: Avenida Palermo - Carrera Maestral

Ciudad: Cali

LA TESORERÍA MUNICIPAL de Calima (Valle), de conformidad con los preceptos por los artículos 68 de la Ley 363 de 1987, 58 de la Ley 788 de 2002, en concordancia con el Libro IV del Estatuto Tributario Nacional (E.T.N.), en uso de las facultades previstas por el Acuerdo 072 de 2017, y

CONSIDERANDO

- Que el artículo 14 de la Ley 140 de 1984 crea el impuesto a la publicidad exterior visual.
- Que el impuesto a la Publicidad Exterior Visual adoptado por la Ley 140 de 1984 fue adaptado en Calima al Decreto 4 de 2017 del Acuerdo Municipal No. 072 de 2017.
- Que los artículos 157, 158, 159 y 164 del Acuerdo Municipal No. 072 de 2017 consagran el impuesto sobre, tanto pasivos, hecho generados sobre gravable y tarifa del impuesto a la Publicidad Exterior Visual en el Municipio de Calima (Valle).
- Que Luis Ignacio Plata Escobedo número de identificación 91.602.705 ha sido notificado y ordena en la jurisdicción del Municipio de Calima al Dado los siguientes elementos visuales que causan el impuesto a la Publicidad Exterior Visual.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Código: 0305
MUNICIPIO DE CALIMA DARÉN NIT: 901.309.613-4 Fecha: 09/11/2021
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG-MIGD Versión: 3
PROCESO: TESORERÍA GENERAL Página: 1
NOMBRE DEL DOCUMENTO: OFICIO DESPACHADO

Por lo anteriormente expuesto

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar oficialmente el impuesto a la Publicidad Exterior Visual a Luis Ignacio Plata Escobedo número de identificación 91.602.705 por los elementos señalados en la parte motiva de este acto administrativo, sobre la conformidad se indica:

Tipo elemento visual	Año	Tarifa	Impuesto a pagar
Valla entrada vía Lotoquero - Calima	2019	5 SMLMV	\$ 414.058
Valla entrada vía Lotoquero - Calima	2020	5 SMLMV	\$ 438.902
Valla entrada vía Lotoquero - Calima	2021	5 SMLMV	\$ 454.263

Valores que se homologarán con los intereses moratorios a la fecha del pago, de conformidad con lo previsto por los artículos 834 y 835 del E.T.N.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente acto procede únicamente el recurso de reconsideración de conformidad con el artículo 725 del Decreto 2153 de 1991, el que podrá interponerse ante la Tesorería Municipal dentro de los diez (10) meses siguientes a la notificación del presente acto administrativo con el fin de los recursos disponibles en el artículo 722 del Decreto 2153 de 1991.

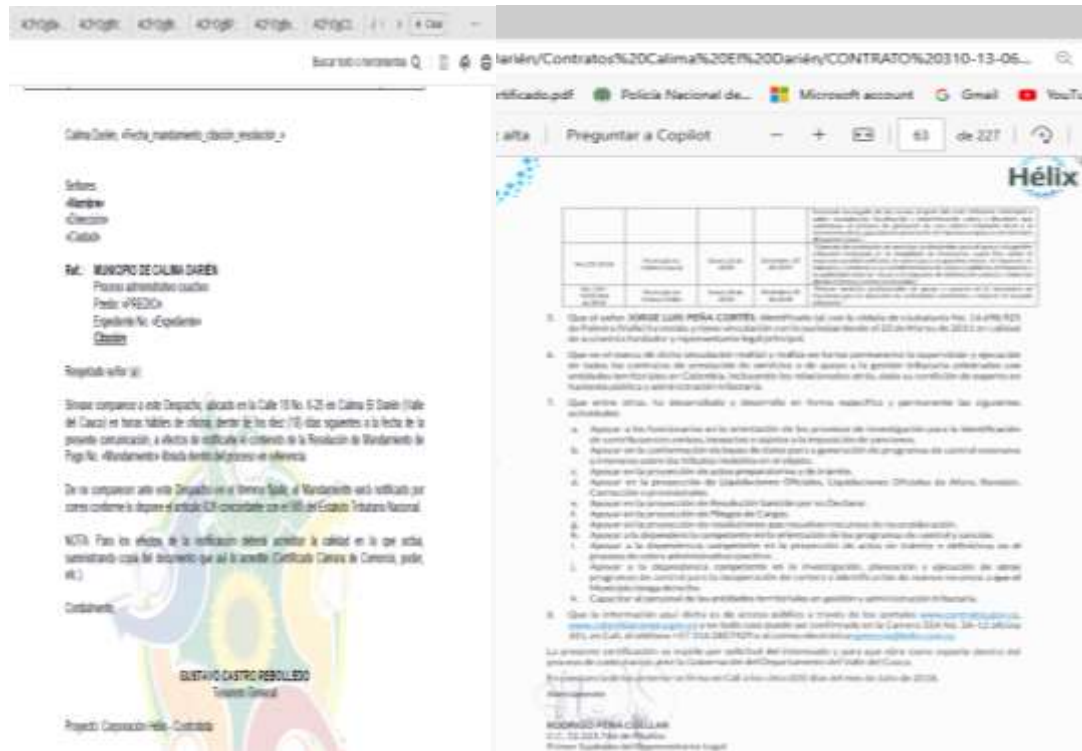
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese esta Liquidación Oficial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo 481 de 2020 o conforme con las reglas de los artículos 365, siguientes y demás concordantes del Estatuto Tributario Nacional.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Gustavo Castro Rebolledo
GUSTAVO CASTRO REBOLLEDO
Tesorero General

Procedió y actuó: Copia para: - Contable
Fecha: 9 de noviembre de 2021

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR



Es necesario, precisar que revisada la documentación se pudo establecer que el contratista fue el representante legal de la corporación, pero que como es bien sabido, para efectos jurídicos se trata de dos personas independientes una natural y otra jurídica, sujetos de distintos derechos y obligaciones.

a.- En cuanto al cobro de impuestos ICA, se presentan soportes en donde se evidencia que es el contratista el encargado de realizar investigación y seguimiento de los contribuyentes, así mismo es quien realiza las proyecciones de los actos administrativos y direcciona los procedimientos a seguir en cada caso, pues incluso imparte órdenes a ejecutar por la otra contratista que se encarga de la parte administrativa como envío de correspondencia, publicación y ejecución de las labores encomendadas por éste contratista, así se evidencia en innumerables correos electrónicos que se arriman en contradicción, resaltamos algunos de ellos:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Calima El Darién, 11 de abril de 2022

Señoras
FIVETECH S.A.S.
Attn. Diana Marcela Palacios
Calle 17 B No. 33A-26
Tel. (+57) 316 3853284
info@fivetech.com
Tuluá

Ref.: FIVETECH S.A.S. (NIT. 900.991.917-8)
Asunto: Solicitud de devolución

Cordial saludo,

En su calidad de Tesorero General del Municipio de Calima el Darién, en uso de las facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los Acuerdos Municipales No. 072 de 2017 y 026 de 2021, doy respuesta a la solicitud de devolución contenida en el PORS No. 23032937102 del 06 de abril de 2022.

Al respecto le informo que su solicitud de devolución inicial, recibida en nuestras instalaciones el 17 de marzo de 2022 se encuentra en trámite.

Sobre los plazos para resolver este tipo de solicitudes, de acuerdo con el artículo 555 del Estatuto Tributario Nacional, es de cincuenta (50) días hábiles.


La administración municipal está en tiempo de estudio y dentro de la oportunidad pertinente dará respuesta de fondo.

Atentamente,

GUSTAVO CASTRO REBOLLEDO
Tesorero

6/11/21 12:13

Quil: Pdr. David Pizarro FIVETECH SAS por Saludos Buenos

 **Gmail**

Jorge Luis Peña Cortés <jorgepenacortes@gmail.com>

Fwd: Derecho Petición FIVETECH SAS por Indevida Retención

Jorge Luis Peña Cortés <jorgepenacortes@gmail.com> 12 de abril de 2022, 7:32
Para: Tesorería Calima <tesoreria@calimadarien-valle.gov.co>
Cc: Daniela España <usapth4@gmail.com>

Adjunto respuesta parcial.

Sobre el fondo de la petición, el cierto que si el proveedor está en régimen simple no procedía la retención de ICA porque el impuesto lo paga en la tarifa consolidada de SIMPLE.

Siendo así, de fondo la devolución es procedente y debe transitarse. Por eso envío también el modelo de respuesta de fondo.

Atentamente,

Jorge Luis Peña Cortés

Alegado @USBCal | Derecho Comercial @upbcoiombia | Derecho Tributario @UEInternado
| Máster Administración Tributaria @ef_es |

La información contenida en este mensaje electrónico y su cualquier adjunto enviado con él está orientada al uso exclusivo del o de los destinatarios; puede contener información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario nombrado, tiene prohibido almacenarlo o distribuirlo y debe destruirlo inmediatamente.

El día: 7 de abril 2022 a las 17:05, Tesorería Calima <tesoreria@calimadarien-valle.gov.co> escribió:
Cordial saludo,

Adjunto PORS donde ordena la respuesta inmediata a la solicitud enviada anteriormente por parte de FIVETECH SAS

Como podemos ver, el contratista era quien se encargaba de conocer la gestión adelantada por la otra contratista que ejecutaba las labores para el impulso del cobro:

6/11/21 12:13

Quil: Calima El Darién - Respuesta petición Hughes de Colombia

 **Gmail**

Jorge Luis Peña Cortés <jorgepenacortes@gmail.com>

INFORMACIÓN DE HORIZONTE SOLUCIONES URBANAS

Jorge Luis Peña Cortés <jorgepenacortes@gmail.com> 11 de septiembre de 2022, 9:00
Para: Tesorería Calima <tesoreria@calimadarien-valle.gov.co>
Cc: Daniela Alexandra España Merino <usapth4@gmail.com>

Cordial saludo,

Para avanzar en el proceso de cobro contra HORIZONTE SOLUCIONES URBANAS S.A.S. adjunto el expediente completo. Se solicita imprimir y enviar la cédula a la dirección indicada allí.

Atentamente,

Jorge Luis Peña Cortés
Comercial | Tributario | Administración Tributaria |
 www.jorgepenacortes.com

La información contenida en este mensaje electrónico y su cualquier adjunto enviado con él está orientada al uso exclusivo del o de los destinatarios; puede contener información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario nombrado, tiene prohibido almacenarlo o distribuirlo y debe destruirlo inmediatamente.

El día: 4 may 2022 a las 9:24, Daniela Alexandra España Merino <usapth4@gmail.com> escribió:
Cordial saludo,

Adjunto información enviada por HORIZONTE SOLUCIONES URBANAS S.A.S. desde Medellín que está de salir conforme al municipio de Calima Darién y que ya se realizó el pago.

Muchas gracias

Saludos

2. Calima - Publicidad Exterior Visual, Teléfono 59 263 8006 - Gcal.pdf
175K

1. Calima - Publicidad Exterior Visual, Teléfono 59 263 8006.pdf

6/11/21 12:13

Quil: Calima El Darién - Respuesta petición Hughes de Colombia

 **Gmail**

Jorge Luis Peña Cortés <jorgepenacortes@gmail.com>

Calima El Darién - Respuesta petición Hughes de Colombia

3 de mayo

Jorge Luis Peña Cortés <jorgepenacortes@gmail.com>
Para: Tesorería Calima <tesoreria@calimadarien-valle.gov.co>

Cordial saludo,

Adjunto respuesta sugerida a la petición de devolución de ICA.

Atentamente,

Jorge Luis Peña Cortés
Comercial | Tributario | Administración Tributaria |
 www.jorgepenacortes.com

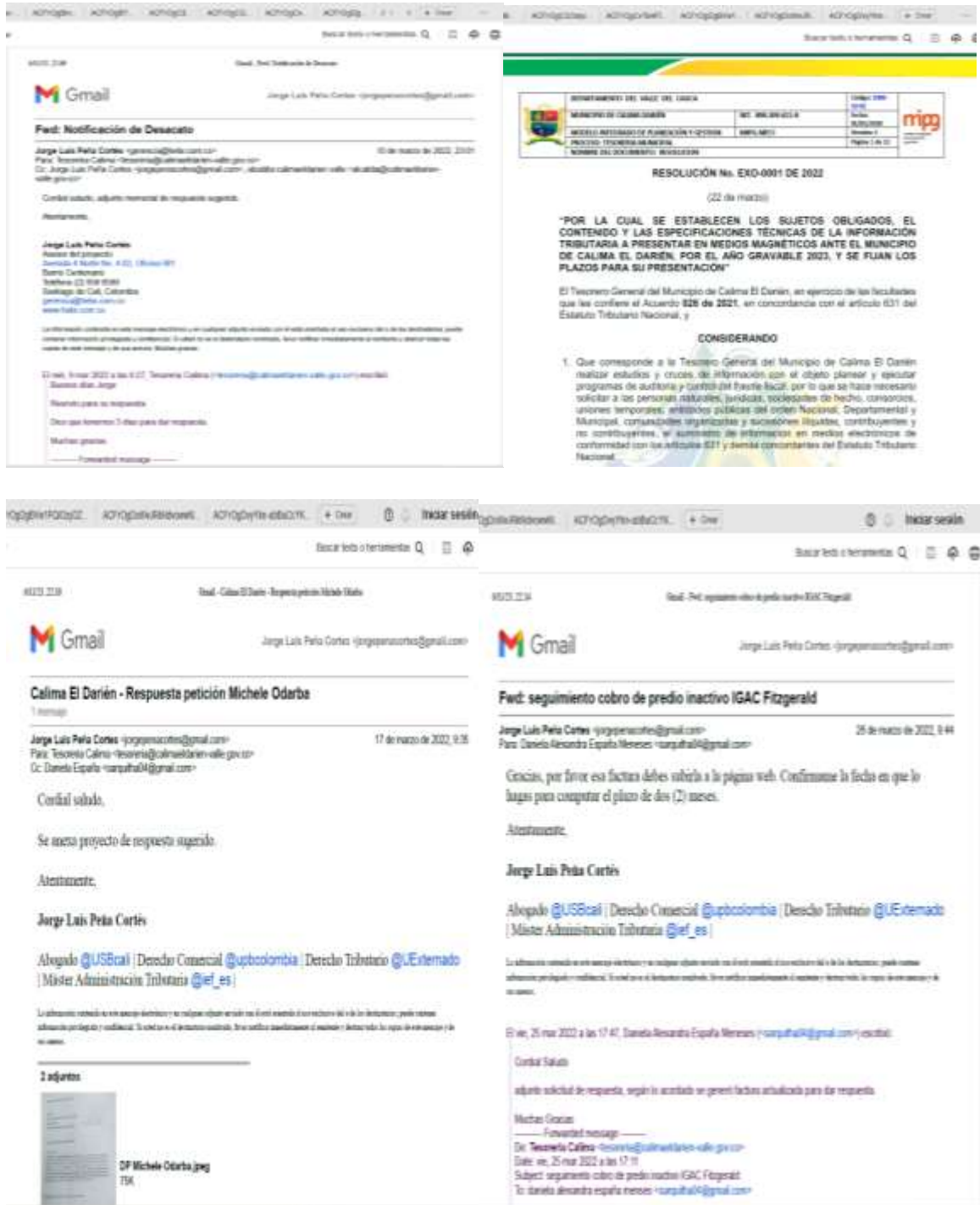
La información contenida en este mensaje electrónico y su cualquier adjunto enviado con él está orientada al uso exclusivo del o de los destinatarios; puede contener información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario nombrado, tiene prohibido almacenarlo o distribuirlo y debe destruirlo inmediatamente.

Calima el Darién - Respuesta solicitud de Devolución Hughes Colombia.docx
2061K

Aunado a lo cual vemos como se le remiten al Tesorero, las respuestas para resolver las inquietudes de los contribuyentes, como en el correo que antecede.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

c) También se trajeron soportes que dan cuenta de la Asesoría Jurídica brindada en la materia de los tributos:



The image displays four screenshots of digital communications:

- Top Left:** A Gmail interface showing an email from Jorge Luis Peña Cortés to the 'Fwd: Notificación de Desacato' (Forward: Notice of Contempt) dated 10 de marzo de 2022, 20:01. The email is addressed to the Tesorería Calima and includes contact information for Jorge Luis Peña Cortés.
- Top Right:** An official document titled 'RESOLUCIÓN No. EXO-0001 DE 2022' (Resolution No. EXO-0001 of 2022) dated 22 de marzo. It is issued by the Tesorero General del Municipio de Calima El Darién and relates to the presentation of tax returns for the year 2021.
- Bottom Left:** A Gmail interface showing an email from Jorge Luis Peña Cortés to 'Calima El Darién - Respuesta petición Michele Odarba' dated 17 de marzo de 2022, 9:38. The email is addressed to Daniela España and includes contact information for Jorge Luis Peña Cortés.
- Bottom Right:** A Gmail interface showing an email from Jorge Luis Peña Cortés to 'Fwd: seguimiento cobro de predio inactivo IGAC Fitzgerald' dated 25 de marzo de 2022, 8:44. The email is addressed to Daniela Alexandra España Meneses and includes contact information for Jorge Luis Peña Cortés.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

ACTOgajC... ACTOgajC... ACTOgajC... ACTOgajC... ACTOgajC... + Desc

Buscar todo o herramientas

Inicio sesión


ACTOgajC... ACTOgajC... ACTOgajC... ACTOgajC... ACTOgajC... + Desc

Buscar todo o herramientas

Inicio sesión

WUOL DZB

Mail - Remision Resolucion C.V.C.

 Jorge Luis Peña Cortés <jorgepenacortes@gmail.com>

Remision Resolucion C.V.C.

Jorge Luis Peña Cortés <jorgepenacortes@gmail.com> 9 de junio de 2022, 9:48
Para: Tesorería Calima <tesoreria@calimadarien-valle.gov.co>


Cordial saludo, adjunto proyecto de recursos de reposición y apelación.

Por favor ajustar el documento a la papetería del despacho para va una firma del señor Alcalde.

Seguro que se radique en la ventanilla de la CVC en Cali.


Atentamente,

Jorge Luis Peña Cortés
Comercial | Tributaría | Administración Tributaria |

 **Peña Cortés** www.jorgepenacortes.com

La información contenida en este mensaje electrónico y en cualquier adjunto enviado con él está orientada al uso exclusivo del o de los destinatarios, puede contener información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario señalado, debe notificar inmediatamente al remitente y destruir todas las copias de este mensaje y de sus adjuntos.

Si tiene dudas o consultas:

 Calima - Recursos de reposición y apelación C.V.C. docs

WUOL DZB

Mail - RECURSO DE RECONSIDERACION

 Jorge Luis Peña Cortés <jorgepenacortes@gmail.com>

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
1 mensaje

Daniela Alexandra Espinoza Meneses <sarguitha@gmail.com> 16 de junio de 2022, 11:47
Para: Jorge Luis Peña Cortés <jorgepenacortes@gmail.com>

Cordial saludo,

Adjunto recurso de reposición presentado por el señor RICARDO JAVIER BECERRA, quien se presentó el día de ayer manifestando que había enviado la solicitud hace varios días, pero a las oficinas de Tesorería llegó el día 16/06/2022.

Muchas gracias

2 adjuntos

 recurso de reconsideracion. RICARDO JAVIER BECERRA.docx 100K

 Correo de Gobierno en Línea Colombia - Fwd_ recurso de reconsideración.pdf 90K

ACTOgajC... ACTOgajC... ACTOgajC... ACTOgajC... ACTOgajC... + Desc

Buscar todo o herramientas

Inicio sesión

WUOL DZB

Mail - INFORMACION DE HORIZONTE SOLUCIONES URBANAS

 Jorge Luis Peña Cortés <jorgepenacortes@gmail.com>

INFORMACIÓN DE HORIZONTE SOLUCIONES URBANAS

Jorge Luis Peña Cortés <jorgepenacortes@gmail.com> 16 de septiembre de 2022, 11
Para: Tesorería Calima <tesoreria@calimadarien-valle.gov.co>, Daniela Alexandra Espinoza Meneses <sarguitha@gmail.com>

Cordial saludo,

Adjunto oficio solicitado. El escrito inicial no era un derecho de petición así que no se venía el plazo. Era necesario esperar a la ejecutoria de los autos y de la futura tutela. En ese caso independiente sería los documentos del expediente de culpa.

Atentamente,

Jorge Luis Peña Cortés
Comercial | Tributaría | Administración Tributaria |

 **Peña Cortés** www.jorgepenacortes.com

La información contenida en este mensaje electrónico y en cualquier adjunto enviado con él está orientada al uso exclusivo del o de los destinatarios, puede contener información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario señalado, debe notificar inmediatamente al remitente y destruir todas las copias de este mensaje y de sus adjuntos.

El día: 4 mayo 2022 a las 9:24, Daniela Alexandra Espinoza Meneses <sarguitha@gmail.com> escribió:
Cordial saludo,

Adjunto información enviada por HORIZONTE SOLUCIONES URBANAS S.A.S donde manifiesta que solo los cultivos pertenecen al municipio de Calima Darien y que ya se realizó el pago.

Muchas gracias

 Horizonte soluciones urbanas - Respuesta Particularizada 135K

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

PROYECTO: TESORERIA GENERAL

NOMBRE DEL DOCUMENTO: OFICIO DESPACHADO

Código: 2000-20-02

Fecha: 01/09/2020

Versión: 1

Página: 1



Resolución No. (..)

(2 de septiembre de 2022)

"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA Y DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO"

LA TESORERÍA MUNICIPAL DE CALIMA EL DARIEN (VALLE DEL CAUCA), en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas por los acuerdos Nos. 072 de 2017 y 026 de 2021, así como las señaladas en el Decreto Municipal No. 011 de 2016, en concordancia con el Libro 5º del Estatuto Tributario Nacional y

CONSIDERANDO

- Que de conformidad con el artículo 95 numeral 9 de la Constitución Nacional: "ARTÍCULO 95. La calidad de colombiano ejercelese a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerlo y dignificarlo. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. (...) Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. (...) Son deberes de la persona y del ciudadano: (...) B. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. (...)".
- La norma y según los destacados constituyen la fuente formal de los principios explícitos de la equidad y de la justicia en el impuesto.
- Que el artículo segundo de la Carta Política de 1991 establece: "ARTÍCULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa, cultural y de la familia; defender la integridad territorial, nacional, independiente de la

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

d) Actuaciones de Cobro Persuasivo y Coactivo en Impuesto Predial

No se identifican las actuaciones que se surten y que corresponden a los distintos períodos del contrato, es decir, cuáles son los que están dirigidos a deudores de 2019 y anteriores, cuales son de 2020 y cuáles de 2021 - 2022 que no estaban pactados en los estudios previos y la oferta. Se observa entonces, como al momento de tener en cuenta las gestiones realizadas y los dineros ingresados al municipio, se hace discriminación acerca de los dineros recaudados, por la fecha en que se hizo el pago, no por los períodos o vigencias comprendidas, solo de los valores totales:

ACFrOgDvqPz_egasv3f... + Clear

Buscar texto o herramientas

Concepto	Año en que se realizó el pago
Proceso masivo de cobro	2021
Proceso masivo de cobro	2022
Subtotal	

Proceso puntual de cobro	2021
Proceso puntual de cobro	2022
Subtotal	

Cantidad de actos	Pagos recibidos	Recaudo imputable
3788	601	\$ 1.347.754.826
3788	348	\$ 658.768.622
7576	949	\$ 2.006.523.448
554	54	\$ 804.245.300
554	61	\$ 35.140.467
1108	115	\$ 839.385.767

Aquí se observa el presunto soporte de la notificación “masiva” de deudores de impuesto predial, correspondiente a distintas vigencias y en donde se observa que la liquidación oficial corresponde a los años 2011 en adelante, así mismo se totalizan las obligaciones sin identificar que valor corresponde a cada vigencia, lo que implica un error en el procedimiento que no es subsanable, por cuanto se vulnera el debido proceso de los contribuyentes, así las cosas, expone al municipio a trámites judiciales en los cuales no solo NO van a ganar las pretensiones, sino que además los van a condenar al pago de intereses y agencias en derecho:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR



AVISO DE NOTIFICACIÓN

LA TESORERÍA MUNICIPAL de Calima Darién (Valle), de conformidad con lo previsto por los artículos 66 de la Ley 383 de 1997, 59 de la ley 788 de 2002, en concordancia con los Artículos 684 y 688 del Estatuto Tributario Nacional (E.T.N.), Ley 1819 de 2016, en uso de las facultades previstas por el Acuerdo 059 de 2016 procede a notificar las Factura-Liquidación Oficial que adelante se relacionan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificado por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010, modificado por el artículo los 354 de la Ley 1819.

Predio	Liquidación Oficial	Años	Propietario	Identificación	Dirección	Total
000000050032000	2011, 2015, 0583	2011, 2012, 2013, 2014, 2015	ABADIA * JORGE	14437723	LO	\$ 521.880
010000080027000	2011, 2015, 0689	2015	ACEVEDO * LUZ-ADRIANA	29434586	C 8	\$ 16.332
000000040947000	2011, 2015, 0526	2013, 2014, 2015	ACEVEDO OBANDO LEON-PEDRO	80362804	LO 2	\$ 1.057.624
010000080003000	2011, 2015, 0686	2011, 2012, 2013, 2014, 2015	ACEVEDO VELEZ ANABEYBA	29430342	C 8 3 23	\$ 62.020
010000090003000	2011, 2015, 0692	2011, 2012, 2013, 2014, 2015	ACEVEDO VELEZ ANABEYBA	29430342	C 8 2 29	\$ 51.008
010000780045000	2011, 2015, 0717	2013, 2014, 2015	ACUNA PEREZ ALEXANDER	94472575	LO 05	\$ 117.576
000000040272000	2011, 2015, 0472	2015	AERO-SANIDAD-AGRO-COLA-S-EN-C	X1168	PEDREGAL DEL LAGO	\$ 52.954
000000041319000	2011, 2015, 0556	2012, 2013, 2014, 2015	AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU	34561	PREDIO 3-02 SECTOR 3 TRAMO 7	\$ 1.010.422
000000041320000	2011, 2015, 0557	2012, 2013, 2014, 2015	AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU	34561	PREDIO 2-41 TRAMO 7	\$ 320.430
000000041321000	2011, 2015, 0558	2012, 2013, 2014, 2015	AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU	34561	PREDIO 2-39 TRAMO 7	\$ 4.331.461
000000041323000	2011, 2015, 0559	2012, 2013, 2014, 2015	AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU	34561	LO	\$ 45.780
000000041325000	2011, 2015, 0560	2012, 2013, 2014, 2015	AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU	34561	TRAMO 7 Lo 2 45	\$ 5.784
000000041338000	2011, 2015, 0562	2015	AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU	830125996-9	ZONA PARA VIA LO 3-37	\$ 70.321
000000041339000	2011, 2015, 0563	2015	AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU	830125996-9	ZONA PARA VIA LO 3-01	\$ 10.584
000000041513804	2011, 2015, 0566	2015	AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU	830125996-9	PREDIO 240-A LOS PINOS	\$ 39.678
000000041514804	2011, 2015, 0567	2015	AGENCIA-NACIONAL-DE-INFRAESTRUCTU	830125996-9	PREDIO 240-B LOS PINOS	\$ 107.369
000000020205000	2011, 2015, 0361	2011, 2012, 2013, 2014, 2015	AGREDO ORDONEZ HENRY	6286303	EL PORVENIR	\$ 319.658
000000010739603	2011, 2015, 0688	2015	AGUILAR MUNOZ MARTIN-GONZALO	70566270	LOTE 112	\$ 471.897
000000011695821	2011, 2015, 0262	2011, 2012, 2013, 2014, 2015	AGUILAR ZAMBRANO JAIME-ALBERTO	16730172	VEGAS DE CALIMA MZ H LO 44	\$ 1.097.012
000000010431000	2011, 2015, 0037	2011, 2012, 2013, 2014, 2015	AGUIRRE MARIN HECTOR-FABIO	6285215	LOTE	\$ 162.255
000000040282000	2011, 2015, 0470	2015	AGUIRRE MONTANO HOLMER-HERNAN	16664251	EL JARDINITO	\$ 104.271
000000041348000	2011, 2015, 0564	2015	AGUIRRE MONTANO HOLMER-HERNAN	16664251	LO 02 PUENTE TIERRA	\$ 4.396
000000041349000	2011, 2015, 0565	2015	AGUIRRE MONTANO HOLMER-HERNAN	16664251	LO 03 PUENTE TIERRA	\$ 4.396
000000011518802	2011, 2015, 0234	2015	ALARCON SILVA ALEXANDER	94417875	LO 1B EL REFUGIO DEL SOL	\$ 384.802
000000010534802	2011, 2015, 0048	2015	ALARCON SILVA GLORIA-AMPAO	31933122	PARCELACION EL REFUGIO DEL SOL 11A	\$ 1.266.288
010001930007000	2011, 2015, 0688	2011, 2012, 2013, 2014, 2015	ALBORNOZ TRUJILLO MILCIADES	18665756	MZ E LO 22	\$ 78.910
000000030278000	2011, 2015, 0397	2011, 2012, 2013, 2014, 2015	ALMEIDA * ARTURO	6456223	LOTE	\$ 184.181
010002670027000	2011, 2015, 0982	2011, 2012, 2013, 2014, 2015	ALVAREZ * GLORIA-INES	41929679	C 7A IN	\$ 111.112
000000040660000	2011, 2015, 0519	2013, 2014, 2015	ALVAREZ LAMIR MARTHA-LUZ	31830476	LOS REMANSOS LO 5	\$ 92.978
000000040664000	2011, 2015, 0520	2013, 2014, 2015	ALVAREZ LAMIR MARTHA-LUZ	31830476	LOS REMANSOS LO 2A SEGUNDA ZONA CO	\$ 19.151
000000040665000	2011, 2015, 0521	2013, 2014, 2015	ALVAREZ LAMIR MARTHA-LUZ	31830476	LOS REMANSOS LO 3A TERCERA ZONA CO	\$ 5.874
000000040667000	2011, 2015, 0518	2015	ALVAREZ LAMIR MONICA	66816280	LOS REMANSOS LO 2	\$ 23.667
010000280009000	2011, 2015, 0639	2011, 2012, 2013, 2014, 2015	ALVAREZ ROJAS CLARA-ROSA	38854072	K 9 LO 37	\$ 512.801
010000590005000	2011, 2015, 0679	2012, 2013, 2014, 2015	ALVAREZ VELEZ EDUAR-DE-JESUS	6286309	C 8 8 48	\$ 142.996
0000000112127000	2011, 2015, 0281	2014, 2015	ALVARO-VELEZ-ALVAREZ-Y-GIA-S-EN-C	800196611	EL VERGEL	\$ 106.534
010000780048000	2011, 2015, 0720	2014, 2015	ALZATE GUTIERREZ CARLOS-AUGUSTO	14897527	LO 08	\$ 77.670
010001090009000	2011, 2015, 0796	2011, 2012, 2013, 2014, 2015	ALZATE MARTINEZ PAULA-ANDREA	29287501	MZA LO:09	\$ 144.856
010002570068801	2011, 2015, 0675	2015	AMARILLO VIVAS NASMILLI	34511927	Mz 8 Ca 8 PARQUEADERO 13	\$ 66.796
000000010598802	2011, 2015, 0063	2011, 2012, 2013, 2014, 2015	ANDRADE MORA JOSE-IVAN	6286190	EL REFUGIO DEL SOL LO 66	\$ 15.088.066
000000012391000	2011, 2015, 0334	2012, 2013, 2014, 2015	ANDRADE NARANJO MIRIAM	31284983	LO	\$ 118.870
010001470005000	2011, 2015, 0831	2011, 2012, 2013, 2014, 2015	ANDRADE OTALORA ALBERTO	16661276	MIRADOR DEL LAGO MZ-F LO:03	\$ 150.801
010001780008000	2011, 2015, 0855	2011, 2012, 2013, 2014, 2015	ANGEL TOBON LUZ-MARINA	38850409	C 1A MZ B LO 08	\$ 112.724
010001780018000	2011, 2015, 0856	2015	ARANGO GIRALDO EDUARDO	16591030	C 2 MZ B LO 18	\$ 41.737
000000030537000	2011, 2015, 0431	2015	ARANGO LOPEZ UREL	9806536	LO	\$ 44.067
010000290003000	2011, 2015, 0642	2014, 2015	ARANGO MORALES JUAN-CARLOS	94424902	C 11 B 55	\$ 235.888

Lo anterior, a pesar de su enunciado, riñe con las disposiciones del artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificado por la Ley 1819 de 2016, cuando señala: **Artículo 69. Determinación oficial de los tributos territoriales por el sistema de facturación.** Sin perjuicio de la utilización del sistema de declaración, para la determinación oficial del impuesto predial unificado, del impuesto sobre vehículos automotores y el de circulación y tránsito, las entidades territoriales podrán establecer sistemas de facturación que constituyan determinación oficial del tributo y presten mérito ejecutivo.

Este acto de liquidación deberá contener la correcta identificación del sujeto pasivo y del bien objeto del impuesto (predio o vehículo), así como los conceptos que

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

permiten calcular el monto de la obligación. La administración tributaria deberá dejar constancia de la respectiva notificación.

Previamente a la notificación de las facturas la administración tributaria deberá difundir ampliamente la forma en la que los ciudadanos podrán acceder a las mismas.

La notificación de la factura se realizará mediante inserción en la página web de la Entidad y, simultáneamente, con la publicación en medios físicos en el registro, cartelera o lugar visible de la entidad territorial competente para la Administración del Tributo territorial. El envío que del acto se haga a la dirección del contribuyente surte efecto de divulgación adicional sin que la omisión de esta formalidad invalide la notificación efectuada... (Negrilla y subrayado fuera del texto original)

Como puede evidenciarse en el documento en referencia, no se identificaron adecuadamente los conceptos que integran cada obligación (según el deudor) en los distintos períodos, no hay constancia de la difusión amplia realizada a la ciudadanía y tampoco se soportaron las publicaciones en medio físico para efectos de que las notificaciones masivas, surtieran los efectos de interrupción de la prescripción. Adicionalmente, podemos ver que algunas personas jurídicas no tienen Nit adecuado para su identificación.

De otro lado, pudimos ratificar que los mandamientos de pago, proferidos tienen las mismas falencias, como quiera que no se determinan los rubros correspondientes a cada período fiscal:

The image shows two screenshots. The left screenshot is a web browser displaying the website of the Municipality of Calima, specifically the 'Mandamiento de Pago' (Payment Order) section. It shows a search bar, a table with columns for 'Municipio de Calima', 'Nit', 'Fecha', 'Período', and 'Página'. Below the table, there is a section titled 'MANDAMIENTO DE PAGO' with a number 'No. 2021-Cobro-00007' and a date 'Fecha: 27 de 2021'. The document lists the 'Deudor' as 'FIDECOMISO MVF - FIDECOMISO CALIMA RESORT' and provides details about the payment order, including the amount and the date of issuance. The right screenshot is a document titled 'RESUELVE' (Resolves) from the 'Municipio de Calima' and the 'Tesorería Municipal'. It contains three articles (ARTÍCULO PRIMERO, ARTÍCULO SEGUNDO, and ARTÍCULO TERCERO) that detail the resolution of the payment order, including the amount and the date of issuance. The document is signed by 'GUSTAVO CASTRO-BEDOLLEDO' and 'GUSTAVO CASTRO-BEDOLLEDO'.

Si siguiendo con los procedimientos de cobro coactivo, tenemos que también se hizo alusión en los documentos aportados, a las diligencias de secuestro de bienes inmuebles, aspecto

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

que es muy relevante, como quiera que, para adelantar una diligencia de secuestro (dentro de los procesos por cobro coactivo), es necesario que quien dirija la misma sea un abogado con conocimiento de procedimiento, pero en el caso que nos ocupa, no se acompañó con la asesoría al Tesorero, cuyo perfil profesional es el de un Financiero, quien es el encargado de tomar las decisiones dentro de tal diligencia, y en caso de que hubiera existido oposición dentro de ella, no hubieran existido los conocimientos jurídicos para absolver los obstáculos jurídicos, pues tales asuntos deben ser evacuados al momento de la diligencia:

gAZTKWyBFmwIDA...
ACFrOgB0DZVikWg9m--rH...
+ Crear
?
🔔
Iniciar sesión

Buscar texto o herramientas 🔍 | 📁 | 🔄

Calima el Darién - Diligencias de Secuestro de bienes
1 mensaje

Jorge Luis Peña Cortes <jorgepenacortes@gmail.com>
 Para: Tesorería Calima <tesoreria@calimaeldarien-valle.gov.co>
 Cc: Daniela España <sarquitha04@gmail.com>

Cordial saludo,

Como lo advertí ayer al final de la tarde, tuve que desplazarme a Bogotá de urgencia y no podré acompañarlos hoy en las diligencias programadas. Aquí les dejo un resumen sobre el cómo se realizan las mismas:

1. El secuestro de bienes es la entrega que hace un funcionario (en este caso el Tesorero) al perito, para que a título de custodia tenga los bienes que fueron objeto de la medida de embargo hasta tanto se resuelva la litis.
2. El Tesorero en este caso y en general durante todo el proceso de cobro actúa en ejercicio de las funciones que expresamente le asignan el estatuto tributario nacional y la Ley 1066 de 2006. Es el equivalente a un Juez.
3. Dado que el Tesorero ejerce una función pública, la decisión de ordenar el embargo y secuestro de bienes es de obligatorio cumplimiento y quienes impidan el cumplimiento de dichas órdenes pueden ser sujetos de imposición de multas de hasta 10 SMLMV e incluso la formulación de la denuncia penal por el delito de fraude a resolución judicial o administrativa.
4. Para realizar la diligencia se requiere:
 - Que el perito se poseione. Esto se hace con el formato anexo.
 - El perito necesitará revisar el expediente y en esencia buscar la consulta a VUR que es el equivalente al certificado de libertad y tradición del o de los bienes a secuestrar.
 - De VUR se sacan los datos del inmueble, los linderos y se comprueba que efectivamente el inmueble fue previamente embargado.
5. La diligencia consiste en desplazarse hasta el lugar del inmueble y levantar un acta en la que el Tesorero hace entrega al secuestre del bien, el cual se describe de la forma más específica posible. Esto se hace a manera de inventario de lo que hay en el inmueble.
6. Durante la diligencia puede ocurrir:
 - Que el administrador o el propietario no permitan la diligencia. Si eso ocurre, se les debe advertir sobre las consecuencias jurídicas de ese comportamiento (multas y posible denuncia).
 - Si definitivamente se resiste a la diligencia, en el acta de secuestro se consigna ese hecho y el inmueble de todas formas queda secuestrado.
 - Durante la diligencia puede darse lo que se llama "oposición al secuestro". No significa que no se realice la diligencia sino que en el acta se deja esa constancia para que después, dentro del expediente se resuelva si el secuestro se levanta o no.
 - Si todo sale bien, el acta se imprime y firma, y se entrega una copia al deudor si se hizo presente, o al administrador.

Atentamente,

Jorge Luis Peña Cortés
Comercial | Tributario | Administración Tributaria |

27 de julio de 2022, 8:15

Como es evidente del contenido del documento, lo que hace el contratista, es impartir instrucciones cuando su labor era apoyar al Tesorero en tales diligencias, pues como ya se indicó, hay aspectos puntuales que son del resorte de un jurídico y es menester adelantar en sitio la resolución de recursos u oposiciones.

De otro lado, lo más pertinente, hubiera sido comisionar al Inspector de Policía para adelantar tales secuestros, pues éste al tener el perfil profesional requerido, puede apoyar a que esos procedimientos se surtan sin violación al debido proceso y con todos los soportes pertinentes.

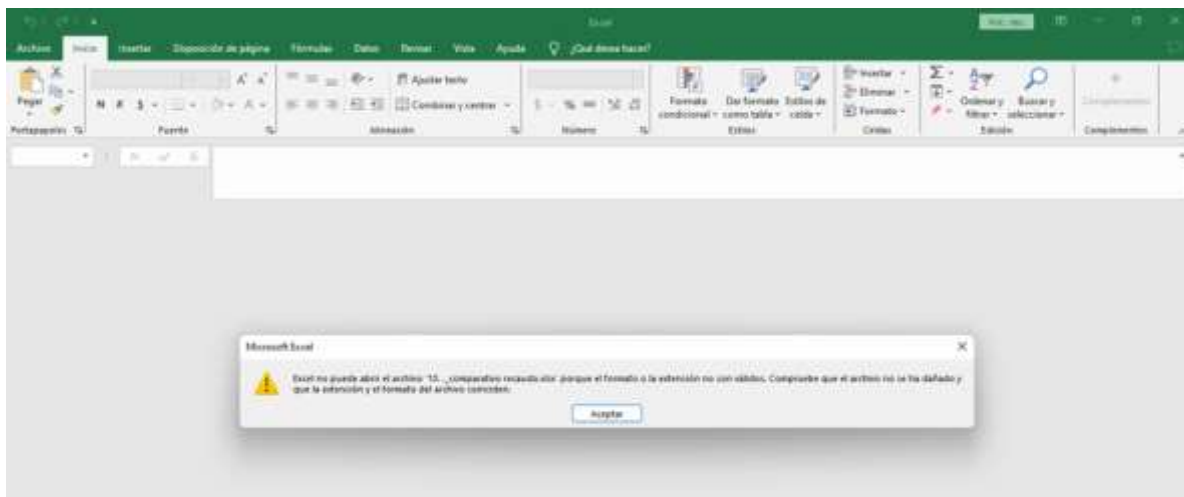
Este es un resumen respecto de los soportes traídos en contradicción los cuales fueron revisados en su totalidad, para verificar el alcance de los mismos, concluyendo que los

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

mismos tienen que ver con los soportes que permitieron los pagos (cada una de las facturas que fueron enunciadas dentro de la observación) y no, con el alcance del contrato desde el aspecto precontractual.

Afirma el sujeto en su contradicción “La conclusión del informe del ente de control es equivocada y no tiene soporte en los documentos del contrato. Se desconoce cuál fue la revisión y/o la lectura hecha por el equipo auditor”, circunstancia en la que no tiene la razón, ya que no se tenían los soportes del contrato, **razón por la cual se hicieron todos los reproches iniciales, pues estas pruebas solo aparecen al momento de la contradicción**, por razones ajenas a la auditoría que llega con un año de posterioridad a revisar expedientes incompletos, a pesar de que se hicieron oportunamente todos los pagos.

No obstante, se pudo comprobar que no se adjuntaron soportes dentro de los archivos electrónicos traídos, solo en excel se enuncia un archivo denominado Comparativo Recaudo relacionado en las carpetas Soportes 4 y 5; no abre para conocer su contenido:



Respecto de lo cual, no hay nada nuevo que valorar, por ende, nos atenderemos a los soportes del contrato en donde sí es más que evidente el pago de sumas correspondientes a impuestos 2022, como más adelante se verá.

Otros aspectos sobre los que la contradicción no hace referencia ni justificación alguna son los siguientes:

- a) Falta de Trazabilidad de las actuaciones (errores de archivo documental)
- b) Falta de publicación oportuna en el Secop I para efectos de publicidad
- c) Inconsistencias del pago sobre el 40% del valor del contrato como Ingreso Base de Cotización en el caso de la Seguridad Social Integral.

DE LAS PREMISAS DE LA CONTRADICCIÓN

Inicialmente, se manifestará que no es de recibo la amenaza implícita como argumento de defensa, todo funcionario estatal tiene derecho a dar respuesta en contradicción a los

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

planteamientos de los entes de control, quienes, a su vez, realizan la expedición de informes con fundamento en los aspectos técnicos, físicos, digitales y de soporte que se ponen de presente dentro del proceso auditor, y como respuesta a los distintos requerimientos. No sobra indicar, que son libres las partes (funcionarios y ente territorial) de obrar como a bien tengan, en el entendido que las actuaciones de este ente de control están más que evidenciadas y hay suficiente soporte de los requerimientos realizados para acreditar la certidumbre sobre las observaciones del informe preliminar.

Adentrándonos en los aspectos técnicos de la respuesta, procedemos de la siguiente manera:

El planteamiento de la observación obedece en un todo a la falta de soportes y evidencias que daban cuenta de la actuación del municipio desde lo precontractual; de éste y del contratista al momento de la revisión de la ejecución dentro del expediente contractual. Ahora bien, si la observación se sostiene o no como hallazgo y las incidencias que de ello se desprendan, se determinará luego del análisis de las premisas planteadas.

Enuncia el sujeto, haciendo alusión al artículo 1º de la Ley 1386 de 2010, que: “Como puede leerse, la norma no prohibió contratos con remuneración de cuota litis sino los contratos que tengan por objeto la DELEGACIÓN EN TERCEROS de las funciones de administración (sic), fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones, e imposición de sanciones de los tributos.

Se trata de una disposición prohibitiva, cuya interpretación es restrictiva. Sobre este particular viene al caso citar el Concepto C.E. 2166 de 2013 del Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil:

No está de más recordar que las prohibiciones, en tanto limitan la libertad y los derechos de las personas, son de origen constitucional y legal; la tipificación de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa; y su aplicación es restrictiva, de manera que excluye la analogía legis o iuris y la interpretación extensiva. Las normas legales de contenido prohibitivo hacen parte de un conjunto de disposiciones que integran un régimen jurídico imperativo y de orden público, razón por la cual no son disponibles ni pueden ser derogadas, modificadas, ampliadas o adicionadas por acuerdo o convenio o acto unilateral...”

Ello para desviar la atención acerca de la razón de ser del contrato (objeto), que no radica en la forma de pago, “cuota litis o por comisión de éxito”, pues la designación acerca de la forma de pago, no desvirtúa el objeto del contrato, que no solo vulnera la prohibición antes referida, sino que además no cumple con los postulados de la jurisprudencia para cumplir con el principio de conmutatividad. Téngase en cuenta que anteriormente y con los mismos soportes traídos a la contradicción, se estimó que efectivamente se estaba realizando fiscalización en el presente contrato, como pudimos evidenciar con amplios soportes de las actuaciones gestionadas, se impartieron directrices desde un particular a ejecutar por parte de la administración municipal, recordemos que no solo se expidieron actos administrativos de distintas índoles, se proyectó un nuevo estatuto tributario, etc, sino que además, se facultó implícitamente al contratista para direccionar las actuaciones de otro contratista, que tenía que ejecutar actuaciones que el primero no hacía y que desde el principio señaló como de “apoyo” a su propia gestión.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Como quiera que se olvida la administración municipal en su premisa, que la Ley da facultades a **los municipios y a sus funcionarios** para adelantar las gestiones de **fiscalización y cobro de los impuestos**, se hace necesario, traer a colación el alcance de normas complementarias en la materia, a saber:

Estatuto Tributario Nacional, artículo 688: “**COMPETENCIA PARA LA ACTUACIÓN FISCALIZADORA. Corresponde al Jefe de la unidad de fiscalización, proferir los requerimientos especiales, los pliegos y traslados de cargos o actas, los emplazamientos para corregir y para declarar y demás actos de trámite en los procesos de determinación de impuestos, anticipos y retenciones, y todos los demás actos previos a la aplicación de sanciones con respecto a las obligaciones de informar, declarar y determinar correctamente los impuestos, anticipos y retenciones.**

Corresponde a los funcionarios de esta Unidad, previa autorización o comisión del Jefe de Fiscalización, adelantar las visitas, investigaciones, verificaciones, cruces, requerimientos ordinarios y en general, las actuaciones preparatorias a los actos de competencia del jefe de dicha unidad.” (Negrilla y subrayado, fuera del texto original).

En este municipio, no hay jefe de Unidad de Fiscalización, ni siquiera secretario de Hacienda, por tanto, la función en la materia recae sobre el TESORERO, es decir, no sobre el particular especializado que se contrataría para tal fin.

Por tanto, no se hizo una inadecuada inferencia cuando se señaló que el contrato no cumplía con el lleno de los requisitos de Ley, independientemente de que no se haya colocado literalmente la delegación, con los soportes que se trajeron a la contradicción no queda duda alguna en la materia, así que la alusión a que “Si se revisa el contrato No. 310-13-06-060-2022, de su objeto y de las actividades específicas encomendadas al contratista, claramente se concluye que el contratista NUNCA fue destinatario de la delegación de ninguna función de la tesorería y que su labor consistió en la asesoría y el apoyo operativo”; no existió apoyo operativo, pues la parte operativa la realizó otra contratista y no el contratista asesor.

Para dilucidar si las actuaciones que se trajeron como parte de lo adelantado por el contratista corresponde o no a la delegación de funciones, nos atendremos a pronunciamientos específicos del Consejo de Estado, en orden a la indelegabilidad de funciones que son propias de los funcionarios públicos:

“3.1 Del cobro coactivo de impuestos municipales.

En pronunciamiento de la pasada anualidad esta Subsección abordó el análisis relativo a la **función administrativa de cobro coactivo de impuestos municipales, para efectos de examinar, a la luz del ordenamiento jurídico, la posibilidad de delegar dicha función a los particulares y de celebrar contratos para su ejercicio.**

En esa oportunidad, partió por precisar que el cobro coactivo consistía en la potestad que la Ley reconocía a la Administración Pública para decretar la existencia de una obligación, producir un título ejecutivo y hacerlo valer contra el patrimonio del obligado, sin necesidad de acudir a un Juez².

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Al adentrarse en el estudio del marco normativo anterior a la expedición de la Ley 489 de 1998, esta Sala se refirió acerca de la **indelegabilidad de dicha función administrativa a particulares** y, con sustento en ello, decidió confirmar la declaratoria de nulidad del contrato de prestación de servicios profesionales No. 047 celebrado entre el municipio de Neiva y un particular, tras advertir que por cuenta de su suscripción se vació íntegramente en el contratista la función administrativa fiscalizadora de impuestos municipales:

“3.1. Función Administrativa de cobro coactivo en materia de impuestos municipales.

Acerca de la función de cobro coactivo en materia tributaria, la Corte Constitucional “ha explicado que la denominada “jurisdicción coactiva”, es decir, la facultad para definir situaciones jurídicas sin necesidad de acudir a la acción judicial (autotutela ejecutiva), se enmarca dentro de la órbita de la función administrativa cuyo objetivo es lograr el cumplimiento de una obligación tributaria en sede administrativa.”³

En este sentido, **la función pública respectiva se debe ubicar dentro del marco constitucional de la distribución de los poderes públicos asignados a la rama ejecutiva, atribuida a los órganos que hacen parte de la estructura del Estado, con diversas competencias...**”

(...) Descendiendo al evento de la posible delegación de la función de cobro coactivo en particulares, la jurisprudencia ha observado que los Alcaldes NO gozan de la atribución de disponer el cobro coactivo de los impuestos por los particulares, por cuanto: i) no pueden asignar funciones públicas por fuera del marco legal y del reglamento del Concejo Municipal, ii) la delegación de la función de cobro coactivo establecida en la Ley de Municipios sólo le fue permitida en cabeza de las Tesorerías Municipales.

(...) Regresando a la inexistencia de Ley que permita la delegación de la función de cobro coactivo de los impuestos municipales en particulares, la Sala observa que la jurisprudencia de la Corte Constitucional advirtió la ilegalidad de delegación en casos concretos en los que encontró que el alcalde Municipal delegó funciones de cobro coactivo de los impuestos en los particulares.

(...) Con independencia de la naturaleza de la función de cobro coactivo, la posición acerca de la indelegabilidad en particulares, ha sido recientemente afianzada por la Corte Constitucional en sentencia C-243 de 2013, mediante la cual esa Corporación reiteró la tesis tradicional acerca de la imposibilidad del vaciamiento de la función de cobro coactivo, con fundamento en la cual declaró la inexecutable del Artículo 66 de la Ley 1480 de 2011 contentiva del Estatuto del Consumidor, además de que en esa oportunidad asumió la conformación de la unidad normativa con el aparte del Artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, que facultaba a las entidades estatales del orden nacional para contratar abogados externos encargados de adelantar el cobro coactivo y declaró la inexecutable del fragmento del Artículo 112 de la Ley 6ª de 1991 que disponía que “o podrá contratar apoderados especiales que sean abogados titulados”.

Esta misma posición fue mantenida en reciente pronunciamiento dictado por esta Subsección, en el cual se convino sobre la nulidad absoluta de un contrato de concesión de actualización de bases tributarias, celebrado en octubre de 1995, a través

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

del cual se había entregado a un particular la función administrativa de fiscalización, liquidación y cobro coactivo, de tributos municipales. En dicha providencia se resolvió:

“Ahora bien, aplicado lo anterior al sub examine se encuentra que, con el contrato de concesión de actualización de bases tributarias, *el municipio se excedió en el otorgamiento de sus competencias o funciones al contratista, llegando al vaciamiento de éstas, pues, no solo radicó en cabeza del contratista la obligación de determinar los sujetos pasivos de los impuestos municipales, sino que también le otorgó al contratista la facultad de expedir las liquidaciones de los mismos⁴, con sus correspondientes proyectos de resoluciones, y no se conformó con ello, sino que, adicionalmente lo facultó para elaborar los proyectos que resolvían los recursos de la vía gubernativa, tanto los de reposición como los de apelación, lo que, a todos luces, evidencia una usurpación de las funciones propias del municipio, límite máximo para que se le otorgara a un particular el ejercicio de una función administrativa.*

En efecto, los diferentes medios probatorios, relacionados en el acápite anterior, dan cuenta de ello, pues desde la propuesta presentada por el contratista se indicó que éste prepararía acuerdos, decretos, resoluciones y demás recursos legales, lo que en efecto hizo, según consta en el informe presentado en el mes de noviembre en el que específicamente se indicó que se había hecho entrega de un proyecto de acuerdo con su correspondiente exposición de motivos, así como en el informe correspondientes al 1 de noviembre de 1995 al 31 de marzo de 1996, e igualmente en el correspondiente al 1 de noviembre al 31 de diciembre de 1995 en el que se precisó que se trabajaba en los modelos de resoluciones.

(...) Para la fecha en que se suscribió el contrato de concesión (30 de octubre de 1995), aún no había sido promulgada la ley 489 de 1998, cuyos artículos 110 y 111 regularon el marco general para el ejercicio temporal de las funciones administrativas por los particulares, en desarrollo de los mandatos constitucionales indicados, de modo que, en principio, las funciones administrativas eran desempeñadas por los servidores públicos, salvo que la ley habilitara a los particulares para desempeñarlas (SIC).

...

En este caso, el municipio de Yumbo, mediante el contrato de concesión de actualización de bases tributarias, **entregó a un particular, ajeno a la administración pública, el ejercicio de la función administrativa que se encuentra a su cargo**, razón por la cual el contrato de concesión (sin número) del 30 de octubre de 1995 **se encuentra viciado de nulidad absoluta, por objeto ilícito, según se desprende de lo dispuesto por los artículos 15195 y 15236 del Código Civil, en la medida en que el objeto de las obligaciones del contrato⁷, esto es, aquello a lo que se obligó el deudor en virtud del contrato (el cumplimiento de la función administrativa por parte de un particular) no estaba permitido en aquella época por la ley (hoy en día se halla, incluso, expresamente prohibido por ésta).**⁸

Ahora bien, teniendo en cuenta que el contrato de prestación No. 077 que ocupa la atención de la Sala fue celebrado el 19 de diciembre de 2001, debe ponerse de presente que para esa época ya había sido expedida la Ley 489 de 1998, por la cual se expidieron normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, en cuyos

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

artículos 1109 y 11110 reguló el ejercicio de funciones administrativas por particulares en los siguientes términos:

“Artículo 110.- Condiciones para el ejercicio de funciones administrativas por particulares. Las personas naturales y jurídicas privadas podrán ejercer funciones administrativas, salvo disposición legal en contrario, bajo las siguientes condiciones:

La regulación, el control, la vigilancia y la orientación de la función administrativa corresponderá en todo momento, dentro del marco legal a la autoridad o entidad pública titular de la función la que, en consecuencia, deberá impartir las instrucciones y directrices necesarias para su ejercicio.

Sin perjuicio de los controles pertinentes por razón de la naturaleza de la actividad, la entidad pública que confiera la atribución de las funciones ejercerá directamente un control sobre el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas que deban ser observados por el particular.

Por motivos de interés público o social y en cualquier tiempo, la entidad o autoridad que ha atribuido a los particulares el ejercicio de las funciones administrativas puede dar por terminada la autorización.

La atribución de las funciones administrativas deberá estar precedida de acto administrativo y acompañado de convenios.

Artículo 111.- Requisitos y procedimientos de los actos administrativos y convenios para conferir funciones administrativas a particulares. Las entidades o autoridades administrativas podrán conferir el ejercicio de funciones administrativas a particulares, bajo las condiciones de que trata el artículo anterior, cumpliendo los requisitos y observando el procedimiento que se describe a continuación:

1. Expedición de acto administrativo, decreto ejecutivo, en el caso de ministerios o departamentos administrativos o de acto de la junta o consejo directivo, en el caso de las entidades descentralizadas, que será sometido a la aprobación del Presidente de la República, o por delegación del mismo, de los ministros o directores de departamento administrativo, mediante el cual determine:

- a. Las funciones específicas que encomendará a los particulares.**
- b. Las calidades y requisitos que deben reunir las entidades o personas privadas;**
- c. Las condiciones del ejercicio de las funciones;**
- d. La forma de remuneración, si fuera el caso;**

La duración del encargo y las garantías que deben prestar los particulares con el fin de asegurar la observancia y la aplicación de los principios que conforme a la Constitución Política y a la ley gobiernan el ejercicio de las funciones administrativas.

2. La celebración de convenio, si fuere el caso, cuyo plazo de ejecución será de cinco (5) años y para cuya celebración la entidad o autoridad deberá

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Elaborar un pliego o términos de referencia, con fundamento en el acto administrativo expedido y formular convocatoria pública para el efecto teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 80 de 1993 para la contratación por parte de entidades estatales.

Pactar en el convenio las cláusulas excepcionales previstas en la Ley 80 de 1993 y normas complementarias, una vez seleccionado el particular al cual se conferirá el ejercicio de las funciones administrativas.”

Nótese que en el aparte de la sentencia traída a colación que señala: **“el municipio se excedió en el otorgamiento de sus competencias o funciones al contratista, llegando al vaciamiento de éstas, pues, no solo radicó en cabeza del contratista la obligación de determinar los sujetos pasivos de los impuestos municipales, sino que también le otorgó al contratista la facultad de expedir las liquidaciones de los mismos⁴, con sus correspondientes proyectos de resoluciones, y no se conformó con ello, sino que, adicionalmente lo facultó para elaborar los proyectos que resolvían los recursos de la vía gubernativa, tanto los de reposición como los de apelación, lo que, a todos luces, evidencia una usurpación de las funciones propias del municipio, límite máximo para que se le otorgara a un particular el ejercicio de una función administrativa.”**

Fueron literalmente, éstos los soportes que se trajeron a la contradicción, el contratista realizó las liquidaciones de los tributos, pues fue quien proyectó las resoluciones, vimos proyectos de actos administrativos que resolvían recursos a los contribuyentes, entre muchas otras actuaciones que se entiende corresponden a la función pública.

Por ello, porque no se trata de interpretación sino de pruebas, es que no tiene asidero jurídico lo planteado por el sujeto al señalar: “Por esta misma razón el ente de control se equivoca al señalar que en los estudios previos “No se observa tampoco, el análisis de la base de datos a entregarse al contratista, o la cantidad de deudores que se están delegando para seguimiento.”

Insisto, el contratista NUNCA recibió delegación y no es ese el objeto del contrato ni esa figura hace parte del alcance de las prestaciones...”, es necesario precisar cuáles eran las obligaciones específicas del contratista en los estudios previos: 1. Cumplir con los procesos y procedimientos de la normatividad vigente para facilitar el buen uso de los instrumentos de cobro; 2. Apoyar en el programa de medios magnéticos municipales; 3. Apoyar en cruces de información; 4. Apoyar en la ubicación de personas naturales y jurídicas que están en la obligación contribuir al Municipio por concepto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos Tableros que no lo están haciendo. **Detección de omisos; Apoyar a la Tesorería Municipal ofreciendo consejo permanente en la adecuada gestión de recolección de información de utilidad para el control, fiscalización y liquidación del impuesto de industria y Comercio y su complementario de avisos y tableros; 6. Apoyar a la Tesorería Municipal en la selección de contribuyentes para la gestión de fiscalización y liquidación de los impuestos Predial Unificado, de industria y Comercio, de Avisos y Tableros y Publicidad Exterior Visual; 7. Apoyar a la Tesorería Municipal proponiendo y planeando la ejecución de programas de gestión de cobro coactivo de los Impuestos Predial Unificado, de industria y Comercio, de Avisos y Tableros y Publicidad Exterior Visual y sanciones de tránsito; 8. Apoyar a la Tesorería Municipal suministrando los formatos de actos de trámite y administrativos necesarios para la**

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

ejecución de los programas de fiscalización, liquidación y cobro de los Impuestos Predial Unificado, de industria y Comercio, de Avisos y Tableros e infracciones de tránsito; 9. Apoyar a la Tesorería Municipal suministrando una versión básica de procedimientos de gestión tributaria; **10.** Apoyar a la Tesorería Municipal en el proceso de modificación del sistema tributario cuando fuere necesario; **11. Emitir conceptos de interpretación jurídica tributaria;** **12.** Las demás que le sean asignadas par el Municipio y que tengan relación directa con el objeto del contrato y consignadas en él.” (Negrilla y subrayado fuera del texto original). No hay soportes del apoyo en programas de medio magnético. Los aspectos resaltados en negrilla **corresponden a las labores, cuyos soportes se agregaron en contradicción que no existieron dentro del expediente contractual.**

Aunado a lo anterior, en el Alcance del Objeto se especificó: “Implementar, desarrollar y consolidar los procesos de recaudo tributario y no tributario, basado en el sistema de gestión y recaudo de cartera, fortaleciendo el sistema financiero de la entidad, con una meta superior del índice de recaudo.” Sobre estos aspectos **nada se presentó como prueba** ni en el expediente, ni en los anexos digitales ni en la existencia de un proceso, es más no existe un procedimiento asociado al recaudo de ingresos tributarios y no tributarios, tan es así, que incluso se dejó una observación disciplinaria ante la falta de lineamientos claros para las obligaciones a cargo de la administración municipal. Por tanto, no hay soporte de tal gestión en cabeza del contratista, las otras, las de la delegación de la función de fiscalización y cobro, sí que están ampliamente probadas, aunque no se hayan especificado.

Los aspectos resaltados en la negrilla, corresponden a la función exclusiva de la administración y acorde a los soportes traídos en la contradicción se hizo mucho más que presentar formatos de actos de trámite, pues como arriba se indicó, lo que se hizo fue proyectar los actos administrativos de la entidad, evacuar la proyección de los recursos y peticiones presentados por los contribuyentes, y proyectar incluso la modificación del estatuto tributario, presentándola al Concejo municipal. Así que la aseveración de que NUNCA se delegó, pasa a ser una falacia dentro del argumento que se trajo, aunado a lo cual, la actuación realizada en tales términos controvierte como se había dicho inicialmente, la prohibición legal en la materia.

La posición es clara para la Corte Constitucional, ya que, sobre este tipo de actuaciones, ha señalado puntualmente: **“6. El examen de constitucionalidad de la habilitación a los particulares para efectuar el cobro coactivo.**

Teniendo claro el sentido del precepto demandado, a continuación, se efectuará el juicio de constitucionalidad con respecto a la facultad de las entidades estatales para contratar particulares que adelanten los procedimientos de cobro coactivo.

El reproche de inconstitucionalidad se justifica a partir dos argumentos. De un lado, la actora y la Procuraduría General de la Nación sostienen que como el procedimiento referido envuelve el ejercicio de facultades de orden jurisdiccional, los sujetos de derecho privado no podrían adelantarlos en virtud de lo dispuestos en el Artículo 116 de la Carta Política. Y por otra parte, la peticionaria afirma que la norma transfiere el ejercicio de competencias que son privativas de las autoridades públicas, y de las cuales no se pueden desprender por tener un carácter exorbitante. En ambos casos se esgrime como sustento del argumento la Sentencia C-666 de 2000, en el entendido de que este fallo marca un derrotero

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

interpretativo claro e inequívoco, desde el cual resulta constitucionalmente inadmisibles facultar a las entidades estatales para canalizar el cobro coactivo de sus créditos a través de abogados externos.

La Corte coincide con el planteamiento central de la accionante, en el sentido de que la función de cobranza no puede ser trasladada integralmente a los particulares. Sin embargo, difiere parcialmente de las premisas a partir de las cuales se arriba a tal conclusión.

Independientemente de que la competencia de cobro coactivo sea calificada como administrativa o jurisdiccional, cuestión que históricamente ha dado lugar a un amplio debate que aún no ha concluido satisfactoriamente, y frente al cual no existe una respuesta definitiva y concluyente a partir de la cual se pueda estructurar el juicio de constitucionalidad de las normas examinadas^[23], **lo cierto es que la transferencia funcional no satisface las condiciones que para este efecto ha previsto el ordenamiento superior, y que han sido sistematizadas en la jurisprudencia de esta Corporación.**

...Es decir, aunque la decisión se refiere al mismo precepto que se examina en esta ocasión, recae sobre un aparte normativo distinto, referido a una cuestión ajena al actual debate, en un doble sentido: **(i) Mientras allí se examinó la constitucionalidad de la facultad de algunas entidades estatales para realizar el cobro coactivo, ahora se debe determinar, no la validez de la figura como tal, sino de la intervención de los particulares en la misma;** (ii) mientras que en la Sentencia C-666 de 2000 se descartó el cobro coactivo respecto de los créditos obtenidos con ocasión de actividades asimilables a las de los particulares, ahora se examina la validez de la participación en los procedimientos.

...No obstante lo anterior, la Corte encuentra que la autorización contenida en el Artículo 66 de la Ley 1480 de 2011 y en el Artículo 112 de la Ley 6ª de 1992 para que las entidades estatales “externalicen” la cobranza de los créditos a su favor, desconoce las limitaciones constitucionales para el ejercicio de funciones públicas por los particulares [24]. Esto se explica porque, por un lado, se vacían de contenido las competencias de las autoridades públicas, y porque, por otro lado, la transferencia versa sobre una función que sólo puede ser ejercida por las propias agencias gubernamentales, en cuanto les ha sido atribuida en su condición de tales.

En efecto, por la naturaleza misma de los actos de apoderamiento, en los que se confiere plena autonomía al abogado para adelantar el procedimiento, y por los amplios términos en los que las disposiciones acusadas contemplan las facultades de los particulares en el cobro coactivo, el efecto jurídico de la previsión normativa no es únicamente el de permitir que el tercero ejecute material y directamente la totalidad del procedimiento de cobro, sino también que la entidad estatal pierde el control y el direccionamiento de la actividad que se entrega al tercero; es decir, las autoridades pierdan la facultad para orientar los cobros y para dirigir las decisiones del particular que actúa como mandatario, y en el mejor de los casos, únicamente podrían fijar unas pautas generales en los contratos estatales de vinculación al abogado, pero en modo alguno con tales derroteros se podría entender satisfecha la exigencia de que la transferencia de funciones no elimine poder de direccionamiento del Estado respecto de la actividad trasladada. Así las cosas, las mencionadas disposiciones prevén una transferencia integral de una competencia legal.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Esta falencia de la norma no se subsana por la consideración de que el cobro coactivo constituye una competencia auxiliar o de segundo orden que normalmente no tiene relación directa con el objeto principal de la agencia estatal. En efecto, el criterio constitucional que habilita para transferir el ejercicio de competencias de las autoridades públicas a los particulares no radica en su nivel o grado de importancia, pues el ordenamiento superior admite que algunas de las actividades de la mayor trascendencia sean externalizadas, y que a la inversa, algunas otras que son accesorias a la agencia estatal, no sean ejercidas por particulares. Asimismo, la Carta Política tampoco establece una distinción entre competencias relevantes o irrelevantes, o entre competencias de primero o de segundo orden según tenga incidencia directa o indirecta en el cumplimiento misional de las entidades estatales, a partir de la cual se pueda calificar el cobro coactivo como competencia secundaria, y susceptible de ser entregada completamente a los particulares.

La deficiencia constitucional tampoco se subsana por la consideración de que la medida legislativa apunta a evitar un desgaste en la administración pública en actividades que no se relacionan directamente con el objeto institucional de la mayor parte de las entidades estatales, y para las cuales normalmente no cuentan con los recursos humanos y técnicos requeridos. En efecto, tal objetivo podría garantizarse sin sacrificar las competencias constitucionales y legales del Estado. Así, por ejemplo, las agencias estatales cuentan con un amplio repertorio de posibilidades para materializar la cobranza: otorgar poderes a funcionarios de la propia institución para que adelanten la ejecución forzosa según las políticas de la entidad, creación de un departamento especializado encargado del procedimiento, o incluso, contratación de particulares para la instrumentación y proyección de documentos, entre muchos otros. En otras palabras, como la finalidad legítima de llevar a cabo eficientemente los procedimientos de ejecución forzosa pueden asegurarse a través de otros mecanismos que no anulen las competencias de las instituciones públicas, la medida legislativa resulta inadmisibles desde la perspectiva constitucional.

Por otro lado, la transferencia integral termina por desnaturalizar el procedimiento de cobro coactivo. En efecto, éste tiene por objeto fundamental que la administración cobre directamente, sin la mediación judicial, sus propios créditos; es decir, se trata de un privilegio de la administración pública para que ella misma ejecute sus acreencias. Ahora, la consecuencia inexorable de la consideración de que las instituciones públicas carecen de la idoneidad y de los recursos técnicos y humanos para llevarla a cabo, es que el procedimiento debe retornar a su agente natural, es decir, a la judicatura. Lo que no se puede sostener razonablemente es que se debe sustraer a los jueces la ejecución de las deudas de las entidades estatales y radicarla en estas, para luego afirmar que todas ellas son incompetentes para hacerlo, y sobre esta base transferir el cobro a los particulares.

Por tal motivo, la Corte concluye que la intervención de los abogados externos en el procedimiento de cobro coactivo, en caso de existir, debe circunscribirse a la fase de instrumentación y proyección de documentos, más no a la fase decisoria propiamente dicha, en la que se materializa la ejecución, porque esta debe quedar radicada en las instituciones públicas. Esta interpretación es compatible, tanto con la habilitación general para que los particulares participen en la gestión pública, y como con la prohibición constitucional de vaciamiento de competencias. En este escenario,

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

los sujetos de derecho privado podrían ofrecer apoyo logístico, técnico y administrativo a las entidades estatales, pero éstas conservarían la facultad decisoria que concreta el cobro, y en ella se radicaría la responsabilidad por las actuaciones realizadas en el marco de este procedimiento. Sentencia C- 224 de 2013, Corte Constitucional (Negrilla y subrayado fuera del texto original)..

Con los apartes aludidos, queda plenamente identificado al confrontar las actuaciones que realizó el contratista, versus el contenido de las disposiciones de las altas Cortes y de la Ley, que se obró más allá del alcance del contrato, incorporándose en la gestión del contratista, las labores propias del ente territorial, ello contra expresa prohibición legal.

De otra parte, se señaló: “Suele insinuarse que el pacto de remuneración por cuota litis es un indicador de la delegación”, a lo cual adiciona que “El informe del ente de control incurre justamente en ese equívoco y refiere una supuesta vulneración al “principio de conmutatividad” expresado en una “línea jurisprudencial” del Consejo de Estado que no se encuentra explícita en el informe”, resulta que, como bien debe saberlo cualquier funcionario del Estado, no hay necesidad de incorporar en los informes ejecutivos las sentencias del Consejo de Estado, particularmente en este caso, cabe acotar que el principio de conmutatividad, ha sido desarrollado jurisprudencialmente, y se puede acudir a cualquier medio electrónico para acceder al conocimiento del mismo.

Manifestó el Consejo de Estado, como definición del Principio de conmutatividad dentro del contrato estatal, lo siguiente: ***“1. Por averiguado se tiene que mediante el contrato estatal se persigue la prestación de los servicios públicos y por consiguiente la satisfacción de intereses de carácter general.***

Esta particularidad de la contratación estatal determina que la ejecución del objeto contractual sea un asunto vertebral y es por esto que la ley ha previsto diversos mecanismos que permiten conjurar factores o contingencias que puedan conducir a su paralización o inejecución.

Uno de tales mecanismos es precisamente aquel que permite que puedan reajustarse los precios pactados de tal suerte que, manteniéndose su valor real en el decurso del plazo negocial, el contratista pueda cumplir con sus obligaciones y se lleve a feliz término la ejecución del contrato.

Por estas razones es que el fenómeno de la conmutatividad del contrato estatal se edifica sobre la base del equilibrio, de la igualdad o equivalencia proporcional y objetiva de las prestaciones económicas y por consiguiente las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta y de la celebración del contrato deben permanecer durante su ejecución, e incluso su liquidación, manteniéndose en estas etapas las obligaciones y derechos originales así como las contingencias y riesgos previsibles que asumieron las partes, de tal suerte que de llegar a surgir fenómenos que rompan el equilibrio que garantiza el legislador, debe de inmediato restablecerse.

Sin embargo, lo anterior no significa que en todas las hipótesis el contratista deba obtener con exactitud numérica la utilidad calculada y esperada por él pues no cualquier imprevisto que merme su ventaja tiene la virtualidad de conducir al restablecimiento económico.” Sentencia 22 de junio de 2011, Radicación No. 85001-23-31-

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

003-1998-00070-01(18836), es decir, el principio de conmutatividad, debe atender a los principios de la contratación estatal en general.

Ahora bien, si el término “Línea jurisprudencial” es lo que aleja del conocimiento jurídico al sujeto de control, es necesario traer a colación entonces la disposición legal que obliga a todos los funcionarios públicos a acoger las sentencias de las altas cortes, tal y como lo dispone la Ley 1437 de 2011, cuando señala: “

ARTÍCULO 10. DEBER DE APLICACIÓN UNIFORME DE LAS NORMAS Y LA JURISPRUDENCIA. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas.” Adicionalmente, ha acotado la Corte Constitucional, respecto del tema, mediante Sentencia C-634-11 de 24 de agosto de 2011, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva, 'en el entendido que las autoridades tendrán en cuenta, junto con las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado y de manera preferente, las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia. Esto sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las sentencias que efectúan el control abstracto de constitucionalidad.'

En coherencia con la posición del Consejo de Estado, la Corte Constitucional en Sentencia C – 207 de 2019, señaló la preponderancia del Interés general y de los principios constitucionales dentro de la contratación pública, y acotó: **“3. LA PREVALENCIA DEL INTERÉS GENERAL COMO LÍMITE DEL MARGEN DE CONFIGURACIÓN DEL LEGISLADOR EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL**

Dada la importancia del contrato administrativo para el desarrollo de la actividad estatal y su vinculación con el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho, la facultad de su regulación está limitada por los mandatos de la Constitución, como corresponde necesariamente bajo el principio de supremacía de la norma fundamental. De esta forma “cuando las reglas establecidas por el Congreso de la República no se ajustan a los contenidos constitucionales y a la finalidad de los mismos, debe el Tribunal Constitucional ejercer la guarda de la Carta tal como se lo manda el artículo 241 de la misma Norma de Normas.”[56]

Por lo tanto, el legislador no puede regular el contrato estatal sin tener en cuenta en dicha tarea el interés general. Esta vinculación del legislador ha sido afirmada puntualmente en jurisprudencia de esta Sala:

“(…) El interés público implícito en la contratación estatal, afecta de tal manera este instituto jurídico, que determina la especial posición de las partes contratantes y la relación entre ellas. Esta relación no se desenvuelve dentro de los mismos parámetros de igualdad en que lo hace la contratación entre particulares, sino que implica la preminencia de la posición estatal. La autorización de cláusulas exorbitantes, como la de caducidad o las de terminación o modificación e interpretación unilaterales por parte de la Administración, son un claro ejemplo de esta situación. **La ley dota a la Administración de herramientas o mecanismos especiales, ausentes en las formas**

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

contractuales privadas, que están presentes para asegurar el cumplimiento de los fines estatales y del interés general^[57]

Se trata por lo tanto de una relación necesaria e inescindible, que limita y guía la función del legislador en cuanto atañe a la regulación de la contratación estatal.^[58]
Esta Sala, en la sentencia C-713 de 2009, y tras considerar in extenso la potestad del legislador en la materia, afirmó que: “(...) la defensa del principio del interés general no solo constituye la finalidad primordial sino el cimiento y la estructura de la contratación administrativa (...)”^[59]

Entonces, la noción de interés público alcanza la concreción suficiente en aquellos bienes jurídicos de los cuales es titular el conglomerado social, como sucede con la protección del patrimonio público en el ejercicio de la función contractual. Es en esa especificidad, suministrada por el tipo de bien jurídico referido, que el juez constitucional adelanta el correspondiente juicio de constitucionalidad frente a las normas que afectan o desarrollan los contenidos del interés general. Así sucede claramente con las leyes que regulan la contratación estatal.

3.1. El interés general como límite de la regulación de la contratación estatal

La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades sobre las finalidades de la contratación estatal y ha desarrollado una jurisprudencia uniforme en torno a la protección del interés general como uno de sus principios axiológicos. Con fundamento en los artículos 1°, 2° y 209 de la Constitución Política, la Sala Plena de esta Corporación ha indicado que todas las actuaciones estatales –incluida la contratación– deben obedecer las finalidades del Estado Social de Derecho.

El artículo 1° consagra a Colombia como un Estado social de Derecho fundado, entre otros principios, en la prevalencia del interés general. El artículo 2° establece que es fin esencial del Estado garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes. Por su parte, el artículo 209 de la Constitución indica que la función administrativa está al servicio del interés general y se desarrolla con fundamento en “los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”. Con base en estas disposiciones, la Corte Constitucional ha ligado la actividad contractual al cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho. Al respecto, la sentencia C-499 de 1992 señaló lo siguiente:

“Para el cumplimiento de los fines del Estado es necesario el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. Luego, el objeto de los contratos no es otro que la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y eficaz. Es por ello que el estudio y la comprensión de la contratación estatal debe inscribirse en los principios axiológicos del Estado Social de Derecho que irradian todas las disposiciones contractuales previstas en la Constitución”^[60].

De esta forma, en el marco del Estado Social de Derecho la función pública está al servicio del interés general y puesto que una de las formas de desarrollar la función pública es la contratación estatal, es dable concluir que dicha contratación se encuentra también al servicio del interés general. Esto implica que la regulación de la contratación estatal, en tanto potestad del legislador, no es una facultad ilimitada, sino que

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

está sometida a los postulados de la Carta y, en particular a la satisfacción del interés general.” (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

En este orden de ideas, no es un capricho del ente de control territorial, propender por el respetar al interés general, en procura del cual debe verificarse el cumplimiento del principio de conmutatividad, atendiendo al cual se señalaron unos claros parámetros para el respeto de éste principio, así como a los demás propios de la contratación estatal y la función pública, particularmente en los contratos de Comisión de Éxito o a Cuota litis, que era y es un precedente a obedecer desde los estudios previos.

Señala el Consejo de Estado, respecto de este principio en relación con los contratos de Comisión de Éxito, lo siguiente:

“4. Determinado lo anterior, la Sala encuentra necesario establecer las reglas con las que puede delimitarse la comisión de éxito como estipulación incorporada en los contratos estatales, las que obraran conjuntamente con las exigencias de la naturaleza de la [s] obligación [es] en las que quede comprendida.

4.1 El tratamiento de la comisión de éxito exige considerar que la “estructuración jurídica de un concepto operativo de contrato estatal o por lo menos cualquier aproximación que se intente en torno a la figura, reconociéndole su carácter de mecanismo fundamental para la realización efectiva de los cometidos a cargo del Estado, no sólo conlleva complicaciones formales y normativas, sino que también, dado el origen privado de la institución, significa admitir su naturaleza compleja: en primer lugar, la de instrumento básico para el cumplimiento de los fines estatales y la satisfacción del interés general, que, por lo demás, debe ser preservado en la economía del contrato mismo, por lo tanto sumida inevitablemente en conceptos que involucran compromisos con los intereses de la comunidad, y, en segundo lugar, la de fuente de obligaciones conforme a las elaboraciones del derecho privado, pero, como se advierte, bajo consideraciones inmanentes con los intereses públicos y comunitarios, esto es, en absoluta posición dicotómica respecto de los contenidos individualistas y subjetivos, derivadas de las corrientes clásicas sustentadoras del derecho privado, lo que implica inexorablemente, en la hora actual de la disciplina, la articulación de normas, reglas y principios derivados del subsistema jurídico positivo privatista en interrelación permanente con principios, reglas e incluso normas inspiradas en el mantenimiento y preservación de intereses públicos y generales vinculado necesariamente al carácter social de nuestro Estado de derecho, en lo que podríamos denominar la configuración de un peculiar régimen jurídico y conceptual de contrato estatal, que no recoge los extremos fundamentalistas de la pretendida sustantividad del contrato estatal, ni de la exclusiva sujeción a los parámetros de los principios

nugatorios de lo público.
<http://revistas.ueexternado.edu.co/index.php?journal=Deradm&page=issue&op=view&path%5B%5D=279>.

4.2 De la anterior argumentación puede servirse la Sala para afirmar que una cláusula como la de la comisión de éxito requiere para su análisis considerar desde la complejidad del contrato estatal el alcance de los principios y reglas de derecho privado en las que se sustenta, como de aquellos y aquellas inspiradas en el mantenimiento y preservación de los intereses públicos y generales. De estos últimos

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

resulta esencial para la Sala la consideración del principio de conmutatividad, que “como se advierte a partir de un análisis del contexto normativo del régimen de la contratación pública y de sus desarrollos doctrinales, difiere sustancialmente de la simple conmutatividad propia de las relaciones jurídicas negociales entre particulares, en cuanto deviene de consideraciones objetivas y no de razonamientos subjetivos y relativos derivados del principio de autonomía de la voluntad individualista, surge de manera inevitable de las verificaciones objetivas del mercado efectuadas en desarrollo del principio de planeación y que tienden a salvaguardar el interés y el patrimonio público, bajo el criterio de equilibrio entre los valores de los objetos, bienes o servicios y la retribución correspondiente, para llegar a la noción de un punto intangible de precio justo para las partes.

4.3 De acuerdo con los anteriores argumentos, la Sala considera que la estipulación de la comisión de éxito por virtud del principio de conmutatividad exige que se pacte por el Estado y los contratistas con base en referentes objetivos que se aproximen a un real equilibrio económico, sin sujetarse solamente a supuestos convencionales, bajo las siguientes reglas fundadas en el principio de conmutatividad: (1) por virtud del principio de planeación para la fijación de una comisión de éxito en los contratos de prestación de servicios que suscriba una entidad pública se debe establecer en los estudios previos la metodología y la escala de límites razonables para determinar la cuantía de la misma con el objeto de responder al principio de conmutatividad; (2) así mismo, se debe contar con los estudios financieros, económicos y presupuestales, que permitan sustentar y determinar su proyección en tiempo y cuantía, lo que debe quedar incorporado en los pliegos de condiciones y en el contrato, de manera que no se convierta en una obligación indeterminada, no motivada e irrazonable, que pueda afectar el interés público o genera, y vulnerar el principio de conmutatividad; (3) para el reconocimiento y la cuantificación de toda comisión de éxito en los contratos de prestación de servicios debe contarse con los estudios económicos, financieros y de mercado que permitan establecer el valor que pueda representar el resultado o éxito efectivamente logrado con el objeto contratado; (4) el valor de la comisión de éxito comprende tanto el IVA, como los demás impuestos a que haya lugar a cargo del contratista; (5) en los contratos de prestación de servicios sólo se reconocerá la comisión de éxito siempre que efectivamente se logre beneficio [s] o éxito objetivamente identificado en los estudios previos, para el patrimonio público o el interés general; (6) en ningún caso podrá percibirse comisión de éxito por la simple ejecución del contrato cuando no se ha logrado o verificado efectivamente el beneficio o provecho para el patrimonio público; (7) no se puede pagar comisión de éxito por fuera de lo estipulado contractualmente; y, (8) presupuestalmente debe estar respaldado el pago de la comisión de éxito para su pago, de acuerdo con las normas y reglamentos, y en cumplimiento de la estricta legalidad de las disposiciones presupuestales aplicables por cada entidad pública.” Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Magistrado ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, 6 de mayo de 2015, Radicación número: 76001-23-31-000-2003-01754-01(35268) - (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

Adicionalmente, el Consejo de Estado a definido expresamente, que en los contratos de prestación de servicios, no debe de encargarse al contratista de funciones propias de la entidad contratante, tal y como se aprecia en la siguiente Sentencia Unificadora:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

“c) Los contratos que tiene por objeto propiamente la “prestación de servicios”, los cuales constituyen la base de la causal de contratación directa del literal h) del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007.

92.- Para la Sala de Sección no cabe la menor duda de que la descripción legal de la causal en estudio involucra la problemática relativa a los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios para las entidades estatales.

93.- Se puede afirmar, sin lugar a mayor dubitación, que la realidad material de las expresiones legales “...para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión...” engloba necesariamente una misma sustancia jurídica: la del contrato de prestación de servicios definido en el artículo 32 No 3 de la ley 80 de 1993 y que no es otro que aquel que tiene por objeto apoyar la gestión de la entidad requirente en relación con su funcionamiento o el desarrollo de actividades relacionadas con la administración de la misma,⁸⁵ que en esencia no implican en manera alguna el ejercicio de funciones públicas administrativas⁸⁶.

94.- En realidad se trata de contratos a través de los cuales, de una u otra manera, se fortalece la gestión administrativa y el funcionamiento de las entidades públicas, dando el soporte o el acompañamiento necesario y requerido para el cumplimiento de sus propósitos y finalidades cuando estas por sí solas, y a través de sus medios y mecanismos ordinarios, no los pueden satisfacer; o la complejidad de las actividades administrativas o del funcionamiento de la entidad pública son de características tan especiales, o de una complejidad tal, que reclaman conocimientos especializados que no se pueden obtener por los medios y mecanismos normales que la ley le concede a las entidades estatales.

95.- El contrato de prestación de servicios resulta ser ante todo un contrato vital para la gestión y el funcionamiento de las entidades estatales porque suple las deficiencias de estas.

96.- Al respecto cabe recordar que, en relación con el contrato de prestación de servicios, el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 dispone lo siguiente:

"Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable".

97.- Ahora bien, relacionando lo anterior con la problemática relativa a la sustantividad de las expresiones “...**Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión...**”, se encuentra que el asunto ya fue objeto de decantación jurisprudencial por el Consejo de Estado al pronunciarse a propósito de la legalidad del artículo 13 del decreto 2170 de 2002, ejercicio del que surgió el precedente vinculante de esta Corporación⁸⁷, según el cual, tanto los contratos que tienen por objeto la “prestación servicios profesionales” como los que versan o asumen en su objeto el “apoyo a la gestión”, son componentes específicos del género “prestación de servicios” regulado en el artículo 32 No.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

3º de la Ley 80 de 1993 y que por lo tanto cualquier referencia a alguno de estos objetos negociales, en cualquier norma de contratación pública que se haga tal como ocurre de manera concreta en el literal h) del numeral 4º, del artículo 2º de la ley 1150 de 2007, debe reconducirse a esta preceptiva legal⁸⁸.

98.- En consecuencia, cualquier aproximación en relación con el contenido de esta norma habilitante de la “contratación directa” citada, ***debe hacerse sobre el entendido de que el legislador delimitó su campo de acción, esto es, restringió su operatividad y procedencia al ámbito del contrato de prestación de servicios legalmente definido, generando de esta forma una armonía sistemática para su aplicación y por lo tanto configurando la procedencia sustancial de la causal.***

99.- Caracterizado el género “contrato de prestación de servicios” establecido legalmente en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, pasa la Sala a establecer las notas características y diferenciadoras de cada uno de los géneros de que éste emanan, tal como se anunció supra.

d) El contrato propiamente dicho de prestación de servicios profesionales.

100.- En este sentido, y efectuando un análisis exclusivamente sobre los fundamentos legales expuestos, serán entonces contratos de “prestación de servicios profesionales” todos aquellos cuyo objeto esté determinado materialmente por el desarrollo de actividades identificables e intangibles que impliquen el desempeño de un esfuerzo o actividad tendiente a satisfacer necesidades de las entidades estatales en lo relacionado con la gestión administrativa o funcionamiento que ellas requieran, bien sea acompañándolas, apoyándolas o soportándolas, al igual que a desarrollar estas mismas actividades en aras de proporcionar, aportar, apuntalar, reforzar la gestión administrativa o su funcionamiento con conocimientos especializados, siempre y cuando dichos objetos estén encomendados a personas catalogadas de acuerdo con el ordenamiento jurídico como profesionales. En suma, lo característico es el despliegue de actividades que demandan la aprehensión de competencias y habilidades propias de la formación profesional o especializada de la persona natural o jurídica, de manera que se trata de un saber intelectual cualificado.

101.- Por consiguiente, el uso de esta concreta figura contractual queda supeditado a las necesidades a satisfacer por parte de la Administración Pública y la sujeción al principio de planeación; lo que encuentra su manifestación práctica en la elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de servicios profesionales.”

Sentencia de Unificación Radicación 11001- 03-26-000-2011-00039-00 (41719) del 02 de diciembre de 2013 Sección Tercera Subsección C, Magistrado Ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Podemos concluir, acorde a la sentencia Unificadora (de obligatorio cumplimiento), que en la prestación de servicios que nos ocupa, no podía entregarse al contratista la función propia de la administración municipal en materia de tributos hecho de facto, como efectivamente se hizo, todos los aspectos enunciados demuestran fehacientemente, la vulneración del principio de planeación por parte del municipio de omitiendo la preponderancia del interés

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

general, en orden a lo cual, también ha habido pronunciamientos del Consejo de Estado, a tener en cuenta:

“2. Nulidad absoluta por desconocimiento del principio de planeación

Ha sido la posición de esta Sala de Subsección decretar la nulidad absoluta del contrato cuando encuentra que este adolece de objeto ilícito por infringir el principio de planeación, en desconocimiento de los artículos 209, 331 y 341 constitucionales; los numerales 6, 7 y 11 a 14 del artículo 25, del numeral 3 del artículo 26, de los numerales 1 y 2 del artículo 30, todos de la ley 80 de 1993; y del artículo 2 del Decreto 01 de 1984; **según los cuales para el manejo de los asuntos públicos y el cumplimiento de los fines estatales, con el fin de hacer uso eficiente de los recursos y obtener un desempeño adecuado de las funciones, debe existir un estricto orden para la adopción de las decisiones que efectivamente deban materializarse a favor de los intereses comunales.**

Sin embargo, no puede pasarse por alto que en fallo del 21 de agosto de 2014, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ordenó proferir nuevamente la sentencia de segunda instancia dentro del Expediente No. 24.809[xxix], prescindiendo de una nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito, argumentando que, al pretender amparar el derecho fundamental de “acceder a la administración de justicia, en la modalidad de una sentencia efectiva”, debe decidirse el recurso de apelación, “bajo el entendido de que el desconocimiento del principio de planeación no genera nulidad del contrato por objeto ilícito.”

Al respecto, deben preverse los efectos inter parte de los fallos de tutela, sobre los cuales la Corte Constitucional ha expresado:

“Esta Corporación ha estimado que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 2591 de 1991, los fallos de tutela sólo producen efectos inter partes, como quiera que la acción de tutela se instituyó como un mecanismo de defensa subjetivo de carácter personal y de contenido concreto, cuyo titular es la persona agravada o amenazada en sus derechos fundamentales, quien tiene el deber de iniciarla directamente o por medio de apoderado”.

De manera que el fallo de tutela proferido el 21 de agosto de 2014 por la Sección Cuarta solo tiene efectos frente a las partes dentro del contrato sobre el cual recayó el litigio que allí se analizó, a menos que se trate de un evento en que se reúnen los presupuestos facticos y jurídicos necesarios para acudir a la aplicación del precedente judicial. Sin embargo, comoquiera que el Juez de Tutela ha proferido un fallo judicial donde se pronuncia sobre diferentes aspectos conceptuales, la Sala considera reiterar las precisiones que sobre el tema sostuvo:

“habida cuenta de los yerros conceptuales de carácter sustancial en que incurre el fallo de tutela, se precise y se recuerde, en primer lugar, que no es un elemento necesario para la configuración de la nulidad absoluta que alguna o todas las partes contractuales conozcan el vicio, puesto que como lo que se protege con esa sanción es el orden público y las normas imperativas, es decir el interés general, no es tolerable ignorancia o desconocimiento alguno para eludir su protección pues lo contrario implicaría privilegiar el interés individual de quien dice desconocer o

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

ignorar, en franco detrimento del interés general, lo cual es del todo inadmisibile.

Cuestión diferente es que del conocimiento o de la ignorancia del vicio se deriven algunos efectos que en verdad no atañen a la estructuración de la nulidad absoluta sino a las consecuencias que produce su decreto judicial, puntualmente en lo que se refiere a las restituciones mutuas, tal como es fácil advertir con sólo darle lectura al artículo 1525 del Código Civil, empero esto en modo alguno enerva la configuración de la invalidez.

En segundo lugar los artículos 6º y 1519 del Código Civil son las normas básicas sobre el objeto ilícito como causal de nulidad absoluta al prever respectivamente que “... en materia civil son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley, si en ella misma no se dispone otra cosa...” y que “hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación...”, lo que se traduce en que los artículos 1521, 1523 y 1741 del Código Civil y el artículo 899 del Código de Comercio son solamente aplicaciones concretas de ellos y **por consiguiente toda violación a un mandato imperativo o a una prohibición de la ley, comporta un vicio que genera nulidad absoluta si, por supuesto, ella no consagra una sanción diferente.**

Y es que las normas imperativas no son solamente aquellas que prohíben sino también las que mandan u ordenan y por ende la transgresión del orden público se presenta cuando se viola la que prohíbe, así como cuando no se observa o se desatiende la que ordena, casos todos estos que conducen a una nulidad absoluta por objeto ilícito.

Este entendimiento resulta natural y obvio, pues de no entenderse así se llegaría al absurdo de que la violación de una norma imperativa que sólo manda u ordena, pero que expresamente no prohíbe, no aparejaría sanción alguna o, lo que es lo mismo, que sería una norma inane, que manda, pero no manda porque puede ser inobseada sin ninguna consecuencia.

Aquel recto, natural y obvio entendimiento ya fue expuesto por la Corte Suprema de Justicia al poner de presente que el orden público puede ser positivo o negativo, dependiendo de “si prescribe cómo y qué debe hacerse” o si se vierte “en restricciones, limitaciones o prohibiciones”, y que su transgresión acarrea la nulidad absoluta del acto:

“El ius cogens, derecho imperativo de la Nación u orden público, representa una restricción a la autonomía privada dispositiva (cas. civ. sentencia de 30 de agosto de 2011, exp. 11001-3103-012-1999-01957-01), y su vulneración, a no dudarlo, produce la nulidad absoluta del contrato o de la estipulación afectada, ampara principios y valores fundamentales del sistema jurídico por constituir “núcleo central, medular, básico, cardinal, primario e inmanente de intereses vitales para la persona, la existencia, preservación, armonía y progreso de la sociedad [...] valores, principios e ideales considerados esenciales al concernir a materias, asuntos o intereses esenciales para la organización social en determinado momento histórico, en función al respeto y primacía de valores fundamentales del ordenamiento jurídico, la libertad, la democracia, los intereses individuales o sociales. En general, su concepto tutela razonables intereses nacionales vinculados a la organización política, económica o social del país, y no admite sustitución, cambio, modificación, derogación ni exclusión por decisión particular”, sea “positivo, si prescribe cómo y qué debe hacerse, ora negativo, al verse en restricciones, limitaciones o prohibiciones, y puede obedecer a factores estrictamente políticos,

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

económicos o sociales con sentido directivo o protector de ciertos intereses, situación, posición económica, social o jurídica”, “como mecanismo para la organización, productividad, eficiencia y equidad del sistema económico, [donde] hay una economía dirigida (orden público de dirección), y en ocasiones, para proteger determinados intereses (orden público tutelar o de protección) en razón de cierta posición económica, social, jurídica, factores sociales (Estado providencia, proteccionismo social) para proveer al bienestar social y la satisfacción de las necesidades económicas de los ciudadanos, suprimir o atenuar manifiestas desigualdades socio-económicos (contratos de adhesión, derecho del consumo), ora económicos (política deflacionista-control de precios-de crédito, derecho de la competencia, interés general)”, esto es, actúe en sentido político, social o económico (cas. civ. sentencias exequátur de 8 de noviembre de 2011, exp. E-2009-00219-00, y sentencia de 19 de octubre de 2011, exp. 11001-3103-032- 2001-00847-01).[xxx]

Pero el orden público comprende además los principios ínsitos en el ordenamiento, que se deducen de las normas imperativas, y su transgresión también apareja la nulidad absoluta como sanción:

“El derecho imperativo de la Nación se remite al orden público, comprende principios fundamentales del ordenamiento jurídico inferidos de las normas imperativas. Las reglas legales, según una antigua clasificación, son supletorias, dispositivas o imperativas. En la primera categoría están las que rigen en defecto de específica previsión de las partes, en ausencia de estipulación alguna y, por ello, suplen el silencio de los sujetos, integrando el contenido del acto dispositivo sin pacto expreso ninguno. El segundo tipo obedece a la posibilidad reconocida por el ordenamiento jurídico para disponer, variar, alterar o descartar la aplicación de una norma. Tratase de preceptos susceptibles de exclusión o modificación en desarrollo de la autonomía privada, libertad contractual o de contratación. Son imperativas aquellas cuya aplicación es obligatoria y se impone a las partes sin admitir pacto contrario.

Por lo común estas normas regulan materias de vital importancia. De suyo esta categoría atañe a materias del ius cogens, orden público social, económico o político, moralidad, ética colectiva o buenas costumbres, restringen o cercenan la libertad en atención a la importancia de la materia e intereses regulados, son taxativas, de aplicación e interpretación restrictiva y excluyen analogía legis o iuris. Dicha nomenclatura, se remite en cierta medida a los elementos del negocio jurídico, o sea, lo de su estructura existencial (esencialia negotia), o perteneciente por ley, uso, costumbre o equidad sin necesidad de estipulación a propósito (naturalia negotia) y lo estipulado expressis verbis en concreto (accidentalia negotia), que “se expresa en los contratos” (artículo 1603 C.C) o “pactado expresamente en ellos” (art. 861 C.Co), y debe confrontarse con la disciplina jurídica del acto y las normas legales cogentes, dispositivas o supletorias, a punto que la contrariedad del ius cogens, el derecho imperativo y el orden público, entraña la invalidez absoluta.”[xxxi]

Así que no es cierto que para que un acto o contrato sea absolutamente nulo por objeto ilícito es indispensable la existencia de una norma que diga, expresa y sacramentalmente, que “es nulo”, como consecuencia, el acto que la contraviene, pero desde luego que lo que sí debe existir es la norma que expresamente mande o prohíba. Pero que sean las palabras de Claro Solar las que recuerden lo elemental, pero al parecer ignorado o por lo menos olvidado, sobre el objeto ilícito:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

“1918. – Hemos visto que, para la validez de toda declaración de voluntad, o sea para todo acto o contrato, no basta que su objeto sea posible, cierto y determinado, sino que se requiere también que sea lícito. Para ser lícito es necesario que el objeto se conforme con la ley, sea reconocido por ella, y lo proteja y ampare. Para efectuar este reconocimiento y prestar la protección y amparo al objeto lícito, la ley adopta formas diversas que limitan de diversas maneras y en distinta forma la libertad individual con el objeto de asegurar la armonía y el orden social. De aquí resultan las distintas clases de leyes en que las decisiones del legislador se presentan; ya como simples declaraciones que indican, más que a la inteligencia que a la voluntad humana las condiciones necesarias a una institución jurídica para su validez y correcto funcionamiento ante los derechos e intereses privados en juego; ya para prescribir el mandato imperativo que debe ser ejecutado en beneficio de la generalidad y para asegurar el orden social y público; ya, en fin, para evitar por medio de una expresa prohibición la realización de actos o hechos que son contrarios al funcionamiento de todos los intereses legítimos y al mantenimiento de las buenas costumbres, de la justicia y de la equidad en las convenciones de los particulares.

La forma con que el legislador ha revestido sus preceptos manifiesta la importancia que les atribuye; y da a entender su verdadera intención. Por eso distinguiendo la forma que toma el precepto del legislador, se considera que hay en general objeto ilícito en todo acto o contrato prohibido por la ley, y que obra contra la ley el que ateniéndose a lo literal de las palabras y al sentido a que éstas pueden darse desconoce su verdadero espíritu y obra contra lo en ella preceptuado. No es dudoso decían los emperadores Theodosius y Valentinianus, que obra contra la ley, el que ateniéndose a sus palabras, obra contra su voluntad: non dubium est in legem committere eum qui verba legis amplexus contra legis nititur voluntatem; ni podrá eximirse de las penas prescritas en las leyes, el que obra contra su sentido y maliciosamente se excusa, fijándose en el material sentido de sus palabras, nec poenas insertas legibus evitabit qui se contra iuris sententiam saeva praerrogativa verborum fraudulenter excussat. Y en seguida disponían: Nullum enim pactum, nullam conventionem, nullum contractum inter eos videri volumus subsecutum qui contrahunt lege contrahere prohibente. Quod ad omnes etiam legum interpretationes, tam veteres quam novellas trahi generaliter imperamus ut legislatori quod fieri non vult tantum prohibuisse sufficiat; ceteraque quasi expresa ex legis liceat voluntate colligere hoc est ut ea qua lege fieri prohibentur si fuerint facta non solum inutilia sed pro infectis etiam habeantur: licet legislator fieri prohibuerit tantum nec specialiter dixerit inutile esse debere quod factum est; por lo mismo es nulo el pacto, nula la convención, nulo el contrato, celebrado por aquellos que contratan contra la prohibición de la ley de contratar. Para las interpretaciones de las leyes, tanto antiguas como modernas, se aplicará el principio general; basta que el legislador haya prohibido lo que no quiere que se haga, y el resto se colige de esta misma voluntad; de suerte que si se verifica el acto prohibido por la ley, no sólo será inútil, sino como no hecho aun cuando el legislador al prohibirlo no hubiera añadido que sería inútil y de ninguna fuerza y valor.”[xxxii]

Así que tampoco es cierto, como desatinadamente lo pregona el fallo de tutela que el desconocimiento del principio de planeación del contrato estatal jamás puede conducir a una nulidad absoluta por objeto ilícito, aunque por supuesto, no toda deficiencia en la planeación del negocio jurídico estatal conduce inexorablemente a la nulidad del contrato por ilicitud de su objeto, toda vez que las falencias que producen ésta mácula en el contrato de la administración son aquellas que desde el momento de su celebración ponen en evidencia que el objeto contractual no podrá ejecutarse o que su ejecución va a depender

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

de situaciones indefinidas o inciertas por necesitar de decisiones de terceros o que los tiempos de ejecución acordados no podrán cumplirse y por ende habrá de sobrevenir el consiguiente detrimento patrimonial de la entidad contratante por los sobrecostos en que habrá de incurrirse por el retardo.

Finalmente, jamás debe confundirse el objeto del contrato con el objeto de la obligación puesto que el primero, el del contrato, es el derecho o interés que es materia de la regulación mediante el respectivo negocio jurídico, al paso que el segundo, el de la obligación, es la prestación que no es otra cosa que la conducta comisiva u omisiva que el deudor debe desplegar en favor del acreedor.

Pero además, sostener que el objeto del contrato son “las obligaciones asumidas por las partes” (se subraya), como de forma simplista lo dijo el fallo de tutela, o que, con más simplicidad, es la prestación (lo que a su vez supone confundir la obligación con su objeto), implica incurrir en otro error aún más protuberante como es el de creer que los contratos sólo producen obligaciones cuando es elementalmente sabido que ellos también pueden regularlas o extinguirlas como de manera paladina lo dice el artículo 864 del Código de Comercio al preceptuar que “el contrato es un acuerdo entre dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial...” (Se subraya).

Incurrir en semejantes confusiones conceptuales puede conducir, como en efecto ocurre y ha ocurrido en este caso, a negar la existencia de un objeto ilícito cuando un contrato se celebra en circunstancias contrarias a las ordenadas imperativamente por la ley, tal como sería el caso de no observar el principio de planeación en la celebración de los contratos estatales.

Lo particular de este asunto es que los integrantes de la Sala de Decisión que determinaron el sentido en que había de fallarse la tutela, excepción hecha por obvia razón del Conjuez que hubo de designarse para superar el empate, en precedente oportunidad habían acompañado la posición de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo cuando en sentencia del 8 de julio de 2014[xxxiii] al decidir sobre el control de legalidad inmediato del Decreto 2962 de 2011, refiriéndose al principio de planeación se sostuvo:

“(...) es una manifestación del principio de economía que rige los contratos de la administración, en la medida en que su cabal cumplimiento garantiza que la ejecución del futuro contrato, en las condiciones razonablemente previsibles, se adelantará sin tropiezos, dentro de los plazos y especificaciones acordados, puesto que la correcta planeación allana el camino para evitar las múltiples dificultades que se pueden presentar alrededor de las relaciones contractuales de las entidades estatales.

Contrario sensu, el incumplimiento de este deber se traducirá en una errática ejecución contractual, que se enfrentará a diversos obstáculos e inconvenientes, los cuales a su vez se pueden traducir en demoras y sobre costos en la obtención del objeto contractual en cuestión, todo lo cual, obviamente, atenta contra el mencionado principio de economía que debe regir en la contratación estatal.”[xxxiv]

Luego, si el principio de planeación en los contratos estatales es una exigencia perentoria del ordenamiento jurídico, no puede entenderse, sino de manera irrazonable, que se sostenga que su violación no constituye un objeto ilícito y que no sea una causa de nulidad absoluta del negocio jurídico respectivo.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Y no se olvide que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1742 del Código Civil y en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993, la nulidad absoluta puede y debe ser decretada de oficio por el juez cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato, y siempre y cuando estén presentes en el proceso todas las partes que lo celebraron, posibilidad que constituye un poder deber para el juzgador y por lo tanto, como deber, no puede eludirse ni excusarse cada vez que se reúnan los presupuestos para decretar oficiosamente la invalidez absoluta.

En efecto, si se tiene en cuenta que la nulidad absoluta protege fundamentalmente el interés general que envuelve el orden público y las buenas costumbres, se entiende y se justifica ese control de legalidad que el orden jurídico ha puesto en manos de los juzgadores.

Así que el juez que no ejerce ese poder y no cumple con ese deber, está violando la ley"[xxxiv]

En este sentido, la Sala reitera que en determinados y concretos eventos el desconocimiento del principio de planeación puede conllevar la configuración de la nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito, cuando las falencias que producen esta mácula sean:

1. *Situaciones que desde el momento de la celebración del negocio jurídico evidencian que el objeto contractual no podrá ejecutarse.*
2. *Situaciones que desde el momento de la celebración del negocio jurídico evidencian que la ejecución del contrato va a depender de circunstancias indefinidas o inciertas por necesitar de decisiones de terceros.*
3. *Situaciones que desde el momento de la celebración del negocio jurídico evidencian que los tiempos de ejecución acordados no podrán cumplirse y por ende habrá de sobrevenir el consiguiente detrimento patrimonial de la entidad..." Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3, subsección C, Radicación 73001- 23- 31- 000- 2012- 00012- 01 (51489), del 10 de diciembre de 2015, Magistrado Ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa*

Así las cosas, se ratifica que el fin último de la contratación estatal es el cumplimiento del interés general y vemos vulnerado el principio de economía, respecto del contrato en ciernes, cuando se evidencia lo siguiente:

1. Se incumplieron los principios de planeación y economía, pues no se estableció en los estudios previos la metodología acorde a las actuaciones, alcance de las mismas, vigencias o topes mínimos y una escala de límites, no resulta entonces razonable la construcción de los estudios para determinar la cuantía de la remuneración con el objeto de responder al principio de conmutatividad; ello sencillamente, por cuanto el contratista podía gestionar o no, pero se cobraba sobre el 100% de los valores ingresados al patrimonio del municipio por concepto de impuesto predial.

Es importante resaltar, que no se establecieron en los estudios previos, contractualmente ni en los soportes de contradicción, cual fue la base de datos con la cual trabajó el contratista, para poder confrontar si hubo injerencia sobre los morosos, o sobre toda la base de contribuyentes del municipio incluso quienes estaban al día.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

A continuación, para ilustrar el motivo de reproche, un ejemplo con 60 predios que presentaban obligaciones por concepto de impuesto predial, extraídos de los listados con los cuales se reconocieron los rubros por honorarios al profesional contratista, préstese especial atención a los números que aparecen resaltados en amarillo, mismos que corresponden a valores de obligaciones (algunas veces nimias \$228), de pagos “realizados” que corresponden a la vigencia 2022.

Estos listados aportados, que son los mismos que hacen parte del expediente contractual, nos permiten ver la dinámica del pago de los contribuyentes, sin que necesariamente esté amarrada a las actividades del contratista, materia sobre la cual se plantearon interrogantes, que no fueron resueltas con la documental allegada.

Pues si bien es cierto, se trajeron soportes de actividades sobre el impuesto predial, ello no implica, que cada peso recaudado en favor del municipio obedezca a dicha labor, de esta manera poder estandarizar si los pagos realizados eran o no pertinentes, a la luz de unas reglas para el reconocimiento que no fueron parametrizadas.

A pesar de lo dicho dentro de su escrito de contradicción, vemos como dentro de la información aportada se establece claramente el cobro de sumas de dinero que corresponden a la vigencia 2022, así como el cobro sobre los conceptos exentos (sobretasa bomberil), que tampoco fueron pactados dentro de los estudios previos, la propuesta y el contrato.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Predio	Identificación	Propietario	Concepto	Columna	No. Facto	Fecha de Pag.	Fecha de	Peric	Valor Pag.
0030000	6284467	Jurado Sanchez Jorge-Alberto	0001	Predial Unificado	683877	8/5/2022	8/5/2022	2022	8.837
0030000	6284467	Jurado Sanchez Jorge-Alberto	0008	Soportes Bomberos	683877	8/5/2022	8/5/2022	2022	778
0030000	6284467	Jurado Sanchez Jorge-Alberto	0011	Factura Predial	683877	8/5/2022	8/5/2022	2022	228
0030000	6284467	Jurado Sanchez Jorge-Alberto	0003	Interes Predial Unificado	683877	8/5/2022	8/5/2022	2022	269
0030000	6284467	Jurado Sanchez Jorge-Alberto	0008	Interes Soportes Bomberos	683877	8/5/2022	8/5/2022	2022	9
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	1005	Predial Unificado	684580	3/5/2022	3/5/2022	2018	82.000
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	1005	Predial Unificado	684580	3/5/2022	3/5/2022	2018	84.000
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	1005	Predial Unificado	684580	3/5/2022	3/5/2022	2020	312.715
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	1005	Predial Unificado	684580	3/5/2022	3/5/2022	2021	370.409
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	1005	Predial Unificado	684580	3/5/2022	3/5/2022	2022	324.234
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	0008	Soportes Ambiental - CVC	684580	3/5/2022	3/5/2022	2018	0.300
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	0008	Soportes Ambiental - CVC	684580	3/5/2022	3/5/2022	2018	24.600
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	0008	Soportes Ambiental - CVC	684580	3/5/2022	3/5/2022	2020	46.807
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	0008	Soportes Bomberos	684580	3/5/2022	3/5/2022	2018	3.200
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	0008	Soportes Bomberos	684580	3/5/2022	3/5/2022	2018	6.360
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	0008	Soportes Bomberos	684580	3/5/2022	3/5/2022	2020	12.509
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	0008	Soportes Bomberos	684580	3/5/2022	3/5/2022	2021	10.884
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	0008	Soportes Bomberos	684580	3/5/2022	3/5/2022	2022	10.270
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	0011	Factura Predial	684580	3/5/2022	3/5/2022	2018	400
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	0011	Factura Predial	684580	3/5/2022	3/5/2022	2018	400
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	0011	Factura Predial	684580	3/5/2022	3/5/2022	2020	400
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	0011	Factura Predial	684580	3/5/2022	3/5/2022	2021	406
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	0011	Factura Predial	684580	3/5/2022	3/5/2022	2022	228
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	0005	Interes Predial Unificado	684580	3/5/2022	3/5/2022	2018	86.070
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	0005	Interes Predial Unificado	684580	3/5/2022	3/5/2022	2018	104.373
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	0005	Interes Predial Unificado	684580	3/5/2022	3/5/2022	2020	169.76
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	0005	Interes Predial Unificado	684580	3/5/2022	3/5/2022	2021	79.625
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	0005	Interes Predial Unificado	684580	3/5/2022	3/5/2022	2022	4.826
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	0008	Interes Soportes Ambiental - CVC	684580	3/5/2022	3/5/2022	2018	12.928
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	0008	Interes Soportes Ambiental - CVC	684580	3/5/2022	3/5/2022	2018	16.858
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	0008	Interes Soportes Ambiental - CVC	684580	3/5/2022	3/5/2022	2020	33.387
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	0008	Interes Soportes Bomberos	684580	3/5/2022	3/5/2022	2018	3.447
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	0008	Interes Soportes Bomberos	684580	3/5/2022	3/5/2022	2018	4.975
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	0008	Interes Soportes Bomberos	684580	3/5/2022	3/5/2022	2020	5.965
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	0008	Interes Soportes Bomberos	684580	3/5/2022	3/5/2022	2021	2.749
0077000	900870025	N.Y.JM-INVERSIONES-S.A-S	0008	Interes Soportes Bomberos	684580	3/5/2022	3/5/2022	2022	8
0094000	29871782	QUIJANO MOSQUERA ESNEDA	1005	Predial Unificado	685071	25/5/2022	25/5/2022	2020	201.960
0094000	29871782	QUIJANO MOSQUERA ESNEDA	1005	Predial Unificado	685071	25/5/2022	25/5/2022	2021	238.274
0094000	29871782	QUIJANO MOSQUERA ESNEDA	1005	Predial Unificado	685071	25/5/2022	25/5/2022	2022	208.640
0094000	29871782	QUIJANO MOSQUERA ESNEDA	0008	Soportes Ambiental - CVC	685071	25/5/2022	25/5/2022	2020	30.074
0094000	29871782	QUIJANO MOSQUERA ESNEDA	0008	Soportes Bomberos	685071	25/5/2022	25/5/2022	2020	0.048
0094000	29871782	QUIJANO MOSQUERA ESNEDA	0008	Soportes Bomberos	685071	25/5/2022	25/5/2022	2021	8.280
0094000	29871782	QUIJANO MOSQUERA ESNEDA	0008	Soportes Bomberos	685071	25/5/2022	25/5/2022	2022	8.336
0094000	29871782	QUIJANO MOSQUERA ESNEDA	0011	Factura Predial	685071	25/5/2022	25/5/2022	2020	400
0094000	29871782	QUIJANO MOSQUERA ESNEDA	0011	Factura Predial	685071	25/5/2022	25/5/2022	2021	438
0094000	29871782	QUIJANO MOSQUERA ESNEDA	0011	Factura Predial	685071	25/5/2022	25/5/2022	2022	328
0094000	29871782	QUIJANO MOSQUERA ESNEDA	0005	Interes Predial Unificado	685071	25/5/2022	25/5/2022	2020	95.922
0094000	29871782	QUIJANO MOSQUERA ESNEDA	0005	Interes Predial Unificado	685071	25/5/2022	25/5/2022	2021	90.834
0094000	29871782	QUIJANO MOSQUERA ESNEDA	0005	Interes Predial Unificado	685071	25/5/2022	25/5/2022	2022	2.982
0094000	29871782	QUIJANO MOSQUERA ESNEDA	0008	Interes Soportes Ambiental - CVC	685071	25/5/2022	25/5/2022	2020	14.388
0094000	29871782	QUIJANO MOSQUERA ESNEDA	0008	Interes Soportes Bomberos	685071	25/5/2022	25/5/2022	2020	3.836
0094000	29871782	QUIJANO MOSQUERA ESNEDA	0008	Interes Soportes Bomberos	685071	25/5/2022	25/5/2022	2021	1.768
0094000	29871782	QUIJANO MOSQUERA ESNEDA	0008	Interes Soportes Bomberos	685071	25/5/2022	25/5/2022	2022	184
0180000	6762395	ARAS CARDONA MAURICIO	0005	Predial Unificado	684295	24/5/2022	24/5/2022	2022	148.737
0180000	6762395	ARAS CARDONA MAURICIO	0008	Soportes Bomberos	684295	24/5/2022	24/5/2022	2022	30.981
0180000	6762395	ARAS CARDONA MAURICIO	0011	Factura Predial	684295	24/5/2022	24/5/2022	2022	228
0180000	6762395	ARAS CARDONA MAURICIO	0003	Interes Predial Unificado	684295	24/5/2022	24/5/2022	2022	6.778
0180000	6762395	ARAS CARDONA MAURICIO	0008	Interes Soportes Bomberos	684295	24/5/2022	24/5/2022	2022	373
0120000	67902346	ZAFRA VALENCIA MARTHA-ELENA	0005	Predial Unificado	683740	24/5/2022	24/5/2022	2022	1.954.6

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

2. No contó la etapa precontractual, con los estudios financieros, económicos y presupuestales, que permitan sustentar y determinar su proyección en tiempo y cuantía, lo que debió quedar incorporado en los pliegos de condiciones y en el contrato, de manera que no se convierta en una obligación indeterminada, de pagar sobre cualquier suma de dinero que el municipio pueda llegar a percibir por concepto de impuestos; lo cual torna el reconocimiento realizado no motivado e irrazonable, afectando el patrimonio público o el interés general, y vulnerando el principio de conmutatividad;
3. No se determinó acorde con estudios económicos, financieros y de mercado, el valor que pueda representar el resultado o éxito efectivamente logrado con el objeto contratado; por ello vemos el pago de los porcentajes establecidos, sobre sumas como \$228, \$400 y cualquier otra cifra que, por insignificante, implica sumatoria en la globalización que se realizó de los ingresos por concepto de impuesto predial.
4. A pesar de que se estandarizó que el valor de la comisión de éxito comprendía tanto el valor a pagar como el IVA, vemos en cada factura como se establece una diferencia entre el valor efectivamente recaudado a cancelar y el IVA se adiciona, lo que tampoco era legal.
5. La simple ejecución de este contrato No daba lugar a percibir comisión de éxito por cuando, no se podía verificar (por inexistencia de topes), el logro, beneficio o provecho para el patrimonio público;
6. Se pagó comisión de éxito por fuera de lo estipulado contractualmente;

En ese orden de ideas el análisis del sector, fue ineficiente e ineficaz, así como antieconómico para la protección del interés general. Como quiera que, aunque en el mismo se hizo alusión a los honorarios que se regularon pactar en prestación de servicios a los distintos profesionales, no se ajustaron los elementos indispensables en materia de la Comisión de Éxito (principio de conmutatividad), y lo pactado para un profesional especializado, como el contratista difiere de lo cancelado por cientos de millones, acorde a la tabla estandarizada:

lineamientos y necesidades de la ejecución por parte del profesional.

Tabla de Honorarios

El personal contratado debe ajustarse a la siguiente tabla de honorarios y cumplir con sus requisitos específicos.

Tabla de honorarios proyectada para la vigencia 2022

Categoría	Nivel	Hasta (Valor)	Requisitos
I	ASISTENCIAL	\$1.500.000 A \$1.800.000	TB
II	TECNICO	\$1.801.000 A \$2.500.000	TFTP
III	TECNOLOGICO	\$2.501.000 A \$3.400.000	TFT
IV	PROFESIONAL	\$3.401.000 A \$4.000.000	TP
V	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	\$4.001.000 A \$4.300.000	E

Siglas de interpretación de la tabla:

TB: Título de Bachiller o Diploma de Bachiller
TFTP: Título de Formación Técnica Profesional
TFT: Título de Formación Tecnología o estudiante profesional
TP: Título Profesional
E: Título de Postgrado en la Modalidad de Especialización.
MA: Título de Postgrado en la Modalidad de Maestría.
ME: Meses de Experiencia Laboral
MEP: Meses de Experiencia Profesional.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Es necesario verificar cual fue el alcance de los valores determinados en los estudios previos, la oferta y el Contrato, pues la administración omitió las condiciones que estructuró en su expediente:

ETAPA PRECONTRACTUAL

Estudios Previos

Porcentaje del 30% para los cobros de las vigencias 2019 y anteriores, en los impuestos referidos y con las excepciones estipuladas a continuación:

/AFG%20Calima%20EI%20Darien/Contratos%20Calima%20EI%20Darien/CONTRATO%20310-13-06%2006...

Inicia sesión: Cuent... Certificado.pdf Policía Nacional de... Microsoft account Gmail YouTube Maps



Lectura en voz alta Preguntar a Copilot 11 de 227

El presente es el primer de los documentos que se han elaborado para el proceso de adquisición de bienes y servicios, el cual se estructura de la siguiente manera:

1. La suma que corresponda al cálculo equivalentes al TREINTA POR CIENTO (30%) sobre el recaudo efectivo, serán pagaderos en forma mensual, valor indeterminado que depende según los siguientes criterios:

Centro Administrativo Municipal - CAM /
Calle 10 No. 6 - 25 Código Postal No. 76126 - Tel: (2)2633137-3633117
E-Mail: alcaldia@calimadarien-valle.gov.co

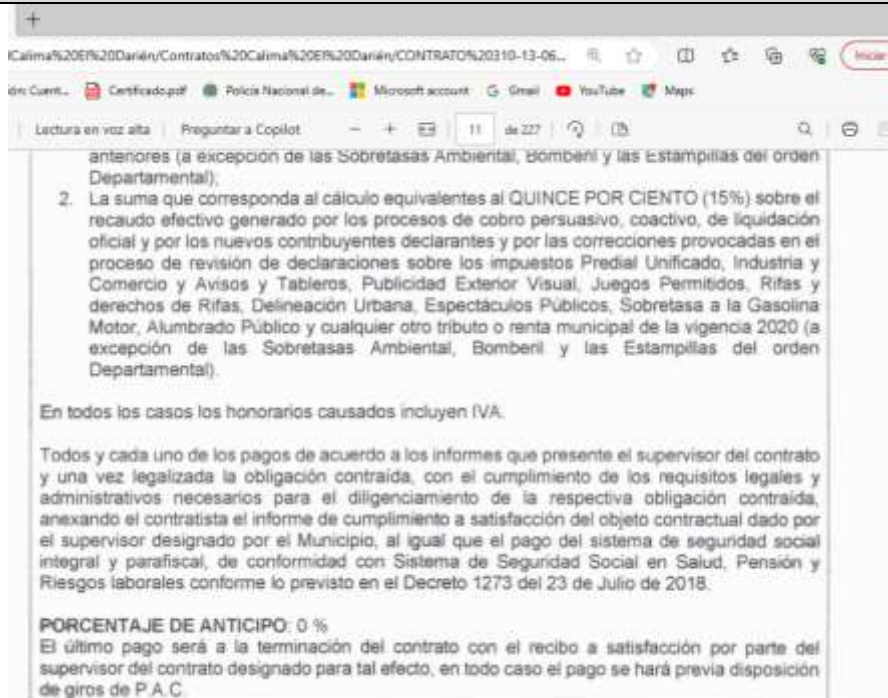
ALIANZA
POR CALIMA DARIEN
Alcaldía Municipal 2020-2023

	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Código: 310-13-06		
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	NIT. 890.309.611-8		Fecha: 01/01/2020
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	MIPG-MECI		Versión: 3
	PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			Página 8 de 14
NOMBRE DEL DOCUMENTO: ESTUDIOS PREVIOS				

el recaudo efectivo generado por los procesos de cobro persuasivo, coactivo, de liquidación oficial y por los nuevos contribuyentes declarantes y por las correcciones provocadas en el proceso de revisión de declaraciones sobre los impuestos Predial Unificado, Industria y Comercio y Avisos y Tableros, Publicidad Exterior Visual, Juegos Permitidos, Rifas y derechos de Rifas, Delineación Urbana, Espectáculos Públicos, Sobretasa a la Gasolina Motor, Alumbrado Público y cualquier otro tributo o renta municipal de las vigencias 2019 y anteriores (a excepción de las Sobretasas Ambiental, Bomberil y las Estampillas del orden Departamental);

Porcentaje del 15% para los cobros de las vigencias 2020, en los impuestos referidos y con las excepciones estipuladas a continuación:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR



En la propuesta:



Como se aprecia con claridad, el valor y la forma de pago correspondía al fijado al interior del Municipio, es decir, lo estandarizado para las vigencias 2019 y anteriores (30%) y para 2020 (15%).

ETAPA CONTRACTUAL

No obstante, aunque se trate de minimizar el cambio surtido, lo que se pactó en la minuta contractual, incluyó hasta la vigencia 2021, que debe considerarse como cartera sana y recuperable, incremento el valor de la remuneración del 2020 al 30% e incluyó nueva vigencia sin soporte jurídico alguno, pactando lo siguiente:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

na%20EI%20Darién/Contratos%20Calima%20EI%20Darién/CONTRATO%20310-13-06...

uent... Certificado.pdf Policía Nacional de... Microsoft account Gmail YouTube Maps

Lectura en voz alta Preguntar a Copilot 113 de 227

Calima El Darién - Departamento del Valle del Cauca

CLAUSULA CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor de este contrato es indeterminado pero determinable atendiendo la modalidad de prima de éxito o cuota litis. Para todos los efectos legales y fiscales el valor de este Contrato es de **UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$1.500.000.00)** para lo cual cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. . 0000050 del 19 de enero de 2022, los cuales se pagarán así: La prima de éxito es equivalente a: Los honorarios correspondientes a las comisiones de éxito sobre recaudo efectivo, serán pagaderos en forma mensual, valor indeterminado que depende según los siguientes criterios:

1. La suma que corresponda al cálculo equivalentes al TREINTA POR CIENTO (30%) sobre el recaudo efectivo generado por los procesos de cobro persuasivo, coactivo, de liquidación oficial y por los nuevos contribuyentes declarantes y por las correcciones provocadas en el proceso de revisión de declaraciones sobre los impuestos Predial Unificado, Industria y Comercio y Avisos y Tableros, Publicidad Exterior Visual, Juegos Permitidos, Rifas y derechos de Rifas, Delineación Urbana, Espectáculos Públicos, Sobretasa a la Gasolina Motor, Alumbrado Público y cualquier otro tributo o renta municipal de las vigencias 2020 y anteriores (a excepción de las Sobretasas Ambiental, Bomberil y las Estampillas del orden Departamental);
2. La suma que corresponda al cálculo equivalentes al QUINCE POR CIENTO (15%) sobre el recaudo efectivo generado por los procesos de cobro persuasivo, coactivo, de liquidación oficial y por los nuevos contribuyentes declarantes y por las correcciones provocadas en el proceso de revisión de declaraciones sobre los impuestos Predial Unificado, Industria y Comercio y Avisos y Tableros, Publicidad Exterior Visual, Juegos Permitidos, Rifas y derechos de Rifas, Delineación Urbana, Espectáculos Públicos, Sobretasa a la Gasolina Motor, Alumbrado Público y cualquier otro tributo o renta municipal de la vigencia 2021 (a excepción de las Sobretasas Ambiental, Bomberil y las Estampillas del orden Departamental).

En todos los casos los honorarios causados incluyen IVA.

Por el análisis hecho hasta este punto, se sostiene la incidencia disciplinaria, fiscal y penal del contrato, pues no se trata solamente de falta de soportes sino de pactar en un contrato aspecto que la ley prohíbe de manera expresa.

Luego el enunciado "Análisis del Sector" solo fue la denominación de un aparte, para cumplir con los presupuestos legales, pero no identificó los parámetros necesarios no solo para la forma de pago de la contratación a realizarse, sino que vulneró las mismas disposiciones internas en materia de reconocimiento de honorarios a profesionales contratistas.

De otra parte y ya como complemento, tenemos que los soportes traídos no dan cuenta del manejo integral de la cartera del municipio, **que sustente el motivo por el cual se le hacen reconocimientos al contratista sobre cada peso que ingresó al municipio por concepto de pago de predial,** como aparece en el siguiente listado:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

000000010573802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1005	Predial Unificado	685310	26/05/2022	26/05/2022	2021	629.319
000000010573802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1005	Predial Unificado	685310	26/05/2022	26/05/2022	2022	734.624
000000010573802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1008	Sobretasa Bomberil	685310	26/05/2022	26/05/2022	2021	21.891
000000010573802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1008	Sobretasa Bomberil	685310	26/05/2022	26/05/2022	2022	30.061
000000010573802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1011	Factura Predial	685310	26/05/2022	26/05/2022	2021	327
000000010573802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1011	Factura Predial	685310	26/05/2022	26/05/2022	2022	228
000000010573802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1505	Interes Predial Unificado	685310	26/05/2022	26/05/2022	2021	113.865
000000010573802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1505	Interes Predial Unificado	685310	26/05/2022	26/05/2022	2022	10.503
000000010573802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1508	Interes Sobretasa Bomberil	685310	26/05/2022	26/05/2022	2021	3.961
000000010573802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1508	Interes Sobretasa Bomberil	685310	26/05/2022	26/05/2022	2022	365
000000010574802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1005	Predial Unificado	685315	26/05/2022	26/05/2022	2021	2.841.102
000000010574802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1005	Predial Unificado	685315	26/05/2022	26/05/2022	2022	3.316.512
000000010574802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1008	Sobretasa Bomberil	685315	26/05/2022	26/05/2022	2021	98.820
000000010574802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1008	Sobretasa Bomberil	685315	26/05/2022	26/05/2022	2022	135.714
000000010574802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1011	Factura Predial	685315	26/05/2022	26/05/2022	2021	327
000000010574802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1011	Factura Predial	685315	26/05/2022	26/05/2022	2022	228
000000010574802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1505	Interes Predial Unificado	685315	26/05/2022	26/05/2022	2021	514.050
000000010574802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1505	Interes Predial Unificado	685315	26/05/2022	26/05/2022	2022	47.416
000000010574802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1508	Interes Sobretasa Bomberil	685315	26/05/2022	26/05/2022	2021	17.880
000000010574802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1508	Interes Sobretasa Bomberil	685315	26/05/2022	26/05/2022	2022	1.649
000000010575802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1005	Predial Unificado	685320	26/05/2022	26/05/2022	2021	630.147
000000010575802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1005	Predial Unificado	685320	26/05/2022	26/05/2022	2022	735.591
000000010575802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1008	Sobretasa Bomberil	685320	26/05/2022	26/05/2022	2021	21.918
000000010575802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1008	Sobretasa Bomberil	685320	26/05/2022	26/05/2022	2022	30.101
000000010575802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1011	Factura Predial	685320	26/05/2022	26/05/2022	2021	327
000000010575802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1011	Factura Predial	685320	26/05/2022	26/05/2022	2022	228
000000010575802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1505	Interes Predial Unificado	685320	26/05/2022	26/05/2022	2021	114.015
000000010575802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1505	Interes Predial Unificado	685320	26/05/2022	26/05/2022	2022	10.517
000000010575802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1508	Interes Sobretasa Bomberil	685320	26/05/2022	26/05/2022	2021	3.966
000000010575802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1508	Interes Sobretasa Bomberil	685320	26/05/2022	26/05/2022	2022	366
000000010576802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1005	Predial Unificado	685322	26/05/2022	26/05/2022	2021	571.476
000000010576802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1005	Predial Unificado	685322	26/05/2022	26/05/2022	2022	667.102
000000010576802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1008	Sobretasa Bomberil	685322	26/05/2022	26/05/2022	2021	19.878
000000010576802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1008	Sobretasa Bomberil	685322	26/05/2022	26/05/2022	2022	27.298
000000010576802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1011	Factura Predial	685322	26/05/2022	26/05/2022	2021	327
000000010576802	16277991	HAEUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1011	Factura Predial	685322	26/05/2022	26/05/2022	2022	228

Las tres últimas columnas corresponden en su orden, a la fecha del pago, período pagado y valor cancelado.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

000000010576802	16277991	HAUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1505	Interes Predial Unificado	685322	26/05/2022	26/05/2022	2022	9.538
000000010576802	16277991	HAUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1508	Interes Sobretasa Bomberil	685322	26/05/2022	26/05/2022	2021	3.597
000000010576802	16277991	HAUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1508	Interes Sobretasa Bomberil	685322	26/05/2022	26/05/2022	2022	332
000000010577802	16277991	HAUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1005	Predial Unificado	685321	26/05/2022	26/05/2022	2021	738.111
000000010577802	16277991	HAUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1005	Predial Unificado	685321	26/05/2022	26/05/2022	2022	861.620
000000010577802	16277991	HAUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1008	Sobretasa Bomberil	685321	26/05/2022	26/05/2022	2021	25.674
000000010577802	16277991	HAUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1008	Sobretasa Bomberil	685321	26/05/2022	26/05/2022	2022	35.258
000000010577802	16277991	HAUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1011	Factura Predial	685321	26/05/2022	26/05/2022	2021	327
000000010577802	16277991	HAUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1011	Factura Predial	685321	26/05/2022	26/05/2022	2022	228
000000010577802	16277991	HAUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1505	Interes Predial Unificado	685321	26/05/2022	26/05/2022	2021	133.549
000000010577802	16277991	HAUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1505	Interes Predial Unificado	685321	26/05/2022	26/05/2022	2022	12.319
000000010577802	16277991	HAUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1508	Interes Sobretasa Bomberil	685321	26/05/2022	26/05/2022	2021	4.645
000000010577802	16277991	HAUSLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1508	Interes Sobretasa Bomberil	685321	26/05/2022	26/05/2022	2022	428
000000010619802	29345012	ROJAS GARCIA CLAUDIA-PATRICIA	1005	Predial Unificado	685110	27/05/2022	27/05/2022	2022	1.166.160
000000010619802	29345012	ROJAS GARCIA CLAUDIA-PATRICIA	1008	Sobretasa Bomberil	685110	27/05/2022	27/05/2022	2022	47.720
000000010619802	29345012	ROJAS GARCIA CLAUDIA-PATRICIA	1011	Factura Predial	685110	27/05/2022	27/05/2022	2022	228
000000010619802	29345012	ROJAS GARCIA CLAUDIA-PATRICIA	1505	Interes Predial Unificado	685110	27/05/2022	27/05/2022	2022	16.673
000000010619802	29345012	ROJAS GARCIA CLAUDIA-PATRICIA	1508	Interes Sobretasa Bomberil	685110	27/05/2022	27/05/2022	2022	580
000000010627802	7684433	CORDOBA BONILLA JUAN-MANUEL	1005	Predial Unificado	678448	17/05/2022	17/05/2022	2022	1.358.836
000000010627802	7684433	CORDOBA BONILLA JUAN-MANUEL	1008	Sobretasa Bomberil	678448	17/05/2022	17/05/2022	2022	55.605
000000010627802	7684433	CORDOBA BONILLA JUAN-MANUEL	1011	Factura Predial	678448	17/05/2022	17/05/2022	2022	228
000000010627802	7684433	CORDOBA BONILLA JUAN-MANUEL	1505	Interes Predial Unificado	678448	17/05/2022	17/05/2022	2022	19.427
000000010627802	7684433	CORDOBA BONILLA JUAN-MANUEL	1508	Interes Sobretasa Bomberil	678448	17/05/2022	17/05/2022	2022	676
000000010628802	7684433	CORDOBA BONILLA JUAN-MANUEL	1005	Predial Unificado	678449	17/05/2022	17/05/2022	2022	596.981
000000010628802	7684433	CORDOBA BONILLA JUAN-MANUEL	1008	Sobretasa Bomberil	678449	17/05/2022	17/05/2022	2022	24.429
000000010628802	7684433	CORDOBA BONILLA JUAN-MANUEL	1011	Factura Predial	678449	17/05/2022	17/05/2022	2022	228
000000010628802	7684433	CORDOBA BONILLA JUAN-MANUEL	1505	Interes Predial Unificado	678449	17/05/2022	17/05/2022	2022	8.535
000000010628802	7684433	CORDOBA BONILLA JUAN-MANUEL	1508	Interes Sobretasa Bomberil	678449	17/05/2022	17/05/2022	2022	297
000000010651802	94267103	LOPEZ CAICEDO JULIAN-ANDRES	1005	Predial Unificado	678467	17/05/2022	17/05/2022	2022	600.516
000000010651802	94267103	LOPEZ CAICEDO JULIAN-ANDRES	1008	Sobretasa Bomberil	678467	17/05/2022	17/05/2022	2022	24.574
000000010651802	94267103	LOPEZ CAICEDO JULIAN-ANDRES	1011	Factura Predial	678467	17/05/2022	17/05/2022	2022	228
000000010651802	94267103	LOPEZ CAICEDO JULIAN-ANDRES	1505	Interes Predial Unificado	678467	17/05/2022	17/05/2022	2022	8.586
000000010651802	94267103	LOPEZ CAICEDO JULIAN-ANDRES	1508	Interes Sobretasa Bomberil	678467	17/05/2022	17/05/2022	2022	299
000000010662000	X144	MABISOY * ISAIAS	1005	Predial Unificado	678474	17/05/2022	17/05/2022	2022	43.797
000000010662000	X144	MABISOY * ISAIAS	1008	Sobretasa Bomberil	678474	17/05/2022	17/05/2022	2022	1.792
000000010662000	X144	MABISOY * ISAIAS	1011	Factura Predial	678474	17/05/2022	17/05/2022	2022	228
000000010662000	X144	MABISOY * ISAIAS	1505	Interes Predial Unificado	678474	17/05/2022	17/05/2022	2022	626

Respecto de la inclusión de rubros de 2022 en los pagos con los cuales se liquidaron los honorarios, previamente se resalta que respecto de las facturas electrónicas de Venta (FEV) Nos. JP 67 y JP 86, no se hizo pronunciamiento alguno en los argumentos de la defensa, lo que implica su aceptación tácita, pues en estos soportes se verificó con claridad que sí se hicieron pagos sobre impuesto predial 2022 y también el cobro de las sobretasas que estaban “exentas” para efectos de liquidación.

Esta circunstancia no fue objeto de reproche para las facturas FEV JP63 y JP76, pues lo que sí se endilgaba para ellas, es que los soportes de tales pagos no eran parte del expediente ni del Drive, ni se trajeron en contradicción como soporte específico de la gestión del predial.

Este es un aparte de los listados con los cuales se liquidó el dinero incluido en la FEV JP92, donde se evidencia el pago de sumas no incluidas dentro del contrato, ya que puede verse en los últimos tres renglones, fecha de pago, periodo pagado y valor cancelado:

Las tres últimas columnas corresponden en su orden, a la fecha del pago, período pagado y valor cancelado.

Se evidencia de la simple lectura, que se hicieron pagos correspondientes a impuesto predial de la vigencia 2022, sobretasa bomberil y otros conceptos que, en TODOS los documentos del contrato, estaban por fuera de la participación del contratista.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

DE 20 x CONTRATO 310-13-06 060 DE 20 x +

AFG%20Calima%20EI%20Darién/Contratos%20Calima%20EI%20Darién/CONTRATO%20310-13-06...

Inicia sesión: Cuent... Certificado.pdf Policía Nacional de... Microsoft account Gmail YouTube Maps

Lectura en voz alta Preguntar a Copilot 19 de 521

00000001057802	16277991	HAESLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1505	Interes Predial Unificado	685322	26/05/2022	26/05/2022	2022	9.538
00000001057802	16277991	HAESLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1508	Interes Sobretasa Bomberil	685322	26/05/2022	26/05/2022	2021	3.597
00000001057802	16277991	HAESLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1508	Interes Sobretasa Bomberil	685322	26/05/2022	26/05/2022	2022	332
00000001057802	16277991	HAESLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1005	Predial Unificado	685321	26/05/2022	26/05/2022	2021	738.111
00000001057802	16277991	HAESLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1005	Predial Unificado	685321	26/05/2022	26/05/2022	2022	861.620
00000001057802	16277991	HAESLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1008	Sobretasa Bomberil	685321	26/05/2022	26/05/2022	2021	25.674
00000001057802	16277991	HAESLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1008	Sobretasa Bomberil	685321	26/05/2022	26/05/2022	2022	35.258
00000001057802	16277991	HAESLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1011	Factura Predial	685321	26/05/2022	26/05/2022	2021	327
00000001057802	16277991	HAESLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1011	Factura Predial	685321	26/05/2022	26/05/2022	2022	228
00000001057802	16277991	HAESLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1505	Interes Predial Unificado	685321	26/05/2022	26/05/2022	2021	133.549
00000001057802	16277991	HAESLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1505	Interes Predial Unificado	685321	26/05/2022	26/05/2022	2022	12.319
00000001057802	16277991	HAESLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1508	Interes Sobretasa Bomberil	685321	26/05/2022	26/05/2022	2021	4.645
00000001057802	16277991	HAESLER TOBAR HELMUTH-ENRIQUE	1508	Interes Sobretasa Bomberil	685321	26/05/2022	26/05/2022	2022	428
000000010619802	29345012	ROJAS GARCIA CLAUDIA-PATRICIA	1005	Predial Unificado	685110	27/05/2022	27/05/2022	2022	1.166.160
000000010619802	29345012	ROJAS GARCIA CLAUDIA-PATRICIA	1008	Sobretasa Bomberil	685110	27/05/2022	27/05/2022	2022	47.720
000000010619802	29345012	ROJAS GARCIA CLAUDIA-PATRICIA	1011	Factura Predial	685110	27/05/2022	27/05/2022	2022	228
000000010619802	29345012	ROJAS GARCIA CLAUDIA-PATRICIA	1505	Interes Predial Unificado	685110	27/05/2022	27/05/2022	2022	16.673
000000010619802	29345012	ROJAS GARCIA CLAUDIA-PATRICIA	1508	Interes Sobretasa Bomberil	685110	27/05/2022	27/05/2022	2022	580
000000010627802	7684433	CORDOBA BONILLA JUAN-MANUEL	1005	Predial Unificado	678448	17/05/2022	17/05/2022	2022	1.358.836
000000010627802	7684433	CORDOBA BONILLA JUAN-MANUEL	1008	Sobretasa Bomberil	678448	17/05/2022	17/05/2022	2022	55.605
000000010627802	7684433	CORDOBA BONILLA JUAN-MANUEL	1011	Factura Predial	678448	17/05/2022	17/05/2022	2022	228
000000010627802	7684433	CORDOBA BONILLA JUAN-MANUEL	1505	Interes Predial Unificado	678448	17/05/2022	17/05/2022	2022	19.427
000000010627802	7684433	CORDOBA BONILLA JUAN-MANUEL	1508	Interes Sobretasa Bomberil	678448	17/05/2022	17/05/2022	2022	676
000000010628802	7684433	CORDOBA BONILLA JUAN-MANUEL	1005	Predial Unificado	678449	17/05/2022	17/05/2022	2022	596.981
000000010628802	7684433	CORDOBA BONILLA JUAN-MANUEL	1008	Sobretasa Bomberil	678449	17/05/2022	17/05/2022	2022	24.429
000000010628802	7684433	CORDOBA BONILLA JUAN-MANUEL	1011	Factura Predial	678449	17/05/2022	17/05/2022	2022	228
000000010628802	7684433	CORDOBA BONILLA JUAN-MANUEL	1505	Interes Predial Unificado	678449	17/05/2022	17/05/2022	2022	8.535
000000010628802	7684433	CORDOBA BONILLA JUAN-MANUEL	1508	Interes Sobretasa Bomberil	678449	17/05/2022	17/05/2022	2022	297
000000010651802	94267103	LOPEZ CAICEDO JULIAN-ANDRES	1005	Predial Unificado	678467	17/05/2022	17/05/2022	2022	600.516
000000010651802	94267103	LOPEZ CAICEDO JULIAN-ANDRES	1008	Sobretasa Bomberil	678467	17/05/2022	17/05/2022	2022	24.574
000000010651802	94267103	LOPEZ CAICEDO JULIAN-ANDRES	1011	Factura Predial	678467	17/05/2022	17/05/2022	2022	228
000000010651802	94267103	LOPEZ CAICEDO JULIAN-ANDRES	1505	Interes Predial Unificado	678467	17/05/2022	17/05/2022	2022	8.586
000000010651802	94267103	LOPEZ CAICEDO JULIAN-ANDRES	1508	Interes Sobretasa Bomberil	678467	17/05/2022	17/05/2022	2022	299
000000010662000	X144	MABISOY * ISAIAS	1005	Predial Unificado	678474	17/05/2022	17/05/2022	2022	43.797
000000010662000	X144	MABISOY * ISAIAS	1008	Sobretasa Bomberil	678474	17/05/2022	17/05/2022	2022	1.792
000000010662000	X144	MABISOY * ISAIAS	1011	Factura Predial	678474	17/05/2022	17/05/2022	2022	228
000000010662000	X144	MABISOY * ISAIAS	1505	Interes Predial Unificado	678474	17/05/2022	17/05/2022	2022	626

Como de lo traído por el sujeto en contradicción, no hay **nada** que tenga que ver con la gestión del pago y con las bases de datos del seguimiento o los requerimientos masivos realizados, precisamente a todos y cada uno de los deudores del impuesto predial (6800 según la base de datos que se adjuntó inicialmente) que pagaron y por cuenta de lo cual se hizo la liquidación al contratista sobre el 100% de los valores recaudados por el municipio en TODO CONCEPTO tributario, no habría lugar a esos pagos, **aún** si el contrato no se hubiera hecho en abierta violación a norma prohibitiva y sin los parámetros jurisprudencialmente referidos.

Se hará el ajuste igualmente, en materia de las resoluciones de caducidad de la facultad sancionatoria (prescripción), pues efectivamente nunca se entregó ninguno de los actos administrativos, a pesar de que se solicitaron expresamente.

Por las consideraciones anteriores, se procede a dejar en firme la observación y pasa a ser un hallazgo de idénticas connotaciones. Al cual se ajustará el tenor literal para no incluir lo

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

pertinente a línea jurisprudencial como quiera que le asiste la razón al ente territorial, en cuanto a que la sentencia que señala los parámetros no es de unificación.

Se realizó Comité de Calidad al informe con la alta gerencia, para verificar el contenido de los hallazgos, y se determinó la realización del hallazgo en los siguientes términos:

“Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal y Penal – Planeación, seguimiento y pago de Contrato de Comisión de Éxito.

Contrato No. 310-13-06-060-2022

Objeto: Prestación de servicios profesionales de asesoría y soporte en la Tesorería municipal para la Gestión tributaria y en la liquidación, cobro y recuperación de cartera en el municipio de Calima El Darién

Valor: \$1.500.000 para efectos fiscales- Prima de éxito o cuota litis

Plazo: Hasta 30 de diciembre de 2022

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Etapas precontractual: En los estudios previos (folios 5 - 18) se especifica la necesidad de un apoyo para fortalecer la gestión de la Tesorería Municipal, en la ejecución de los procesos desarrollando actividades en relación con el archivo y los procesos de industria y comercio y predial (sic), tendientes al cumplimiento de metas y cometidos estatales.

Se observan errores de fondo en la planeación, pues contra expresa prohibición legal y jurisprudencial se realiza la delegación en terceros para fiscalizar, liquidar, realizar cobro coactivo y demás actuaciones como sanciones de los tributos municipales, aunado al desconocimiento del principio de conmutatividad y las reglas de su aplicación para el caso concreto. Fundando dentro de los estudios previos la actuación en torno a un concepto de la Dirección de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de abril de 2010, también se ampara el contrato en fallos del Consejo de Estado que desconocen el principio de conmutatividad.

En el ítem Valor Estimado del Contrato y Justificación del mismo, se dice que el valor es indeterminado pero determinable, estableciendo la modalidad de prima de éxito o cuota litis, el cual para efectos fiscales iniciales fue de \$1.500.000, y se determinó que el valor contractual real sería el del término de la ejecución contractual.

Posteriormente, en la forma de pago se establece que los honorarios correspondientes a la comisión de éxito, se estimarían en forma mensual, según dos criterios:

El 30% sobre recaudo efectivo generado por los procesos de cobro persuasivo, coactivo, de liquidación oficial, los nuevos contribuyentes declarantes y por las correcciones provocadas en el proceso de revisión de declaraciones sobre los impuestos predial unificado, industria y comercio y Avisos y Tableros, Publicidad Exterior Visual, Juegos Permitidos, Rifas y derechos de Rifas, Delineación Urbana, Espectáculos Públicos, Sobretasa a la Gasolina Motor; Alumbrado Público y cualquier otro tributo o renta municipal de las vigencias 2019 y anteriores (a excepción de las sobretasas Ambiental, Bomberil y las Estampillas del orden Departamental). Subrayado fuera del texto original, que se exalta para evidenciar falencias posteriores.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

El 15% sobre el recaudo efectivo por los mismos procesos y conceptos de la vigencia 2020, con iguales excepciones. Existió una aclaración en donde se determinaba “En todos los casos los honorarios causados incluyen IVA”; se requirió para cada pago el informe del supervisor, con el cumplimiento de los requisitos legales, anexando el contratista informe y el pago de la Seguridad Social Integral (SSI).

Aunque está enunciado un Análisis del Sector, éste adolece de foliatura y la interrumpe pues a pesar de estar después del folio 23 (final de los estudios previos), no sigue la trazabilidad del expediente (error de Archivo documental).

Aunado a lo cual, la estructura del documento obedece a una evaluación de las circunstancias generales del municipio, pero en modo alguno, al tipo de contratación que habría de realizarse, tampoco a profundizar las condiciones financieras o topes a regularse dentro del precio, que determine con claridad cómo se llegó a establecer que habría equilibrio económico dentro del contrato, al generar los pagos sobre las sumas recaudadas en el 30% (2019 y anteriores vigencias) y el 15% (2020). No se observa tampoco, el análisis de la base de datos a entregarse al contratista, o la cantidad de deudores que se están delegando para seguimiento, siendo parte de la fiscalización a cargo de la entidad, hacer el seguimiento de los omisos y su respectivo cobro, cartera que se considera de fácil recuperación, por tratarse de personas que se encuentran ubicables, y sobre las cuales no se habría hecho cobro previamente.

Por otra parte, en el Análisis del Riesgo y Forma de Mitigarlo, solo se establecieron 3 eventos de riesgo, sin contemplar riesgos con relación a las inconsistencias en la etapa precontractual, que pueden viciar la actuación a adelantarse.

Los estudios previos son suscritos por el Tesorero general y revisados por Asesor jurídico Externo, perteneciente a la oficina de contratación. Se observa la invitación al futuro contratista con idénticos parámetros en materia de porcentajes a reconocer (folios 19 a 23), y posteriormente la propuesta en los mismos términos de la invitación, es decir se manifiesta por el oferente que “el valor y forma de pago de la prestación de este servicio corresponde al fijado al interior del Municipio de Calima”, como soportes de experiencia y estudios se entregó abundante material probatorio (folios 25 al 103).

El incumplimiento de las prohibiciones establecidas por la ley y los parámetros jurisprudenciales para la determinación de la comisión de éxito desde la planeación, la vulneración a los principios de conmutatividad y economía, genera que el presente contrato no cumpla el lleno de los requisitos de ley.

Etapas contractuales: A folios 107 al 113, vemos el contrato de prestación de servicios calendarado 26 de enero de 2022. Se observa que, en la cláusula 4ª; se modifican las condiciones que se establecieron en los estudios previos, en materia de los criterios que generarían los porcentajes pactados y se determina que el 30% de honorarios, se cobraría sobre las vigencias 2020 y anteriores; en tanto el 15% se aplicaría sobre la gestión adelantada sobre la vigencia 2021, lo único que permaneció igual fueron las excepciones de sobretasas; la modificación indicada no tiene soporte jurídico dentro del expediente contractual. Se nombra posteriormente supervisor al Tesorero. El contrato se publica el 11 de febrero de 2022 en el Secop I, incumpliendo el término para la publicidad concedido por

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

la ley para la publicación de las actuaciones contractuales. El acta de inicio está calendada 28-01-2022.

Etapas contractual: A folios 107 al 113, vemos el contrato de prestación de servicios calendado 26 de enero de 2022. Se observa que, en la cláusula 4ª; se modifican las condiciones que se establecieron en los estudios previos, en materia de los criterios que generarían los porcentajes pactados y se determina que el 30% de honorarios, se cobraría sobre las vigencias 2020 y anteriores; en tanto el 15% se aplicaría sobre la gestión adelantada sobre la vigencia 2021, lo único que permaneció igual fueron las excepciones de sobretasas; la modificación indicada no tiene soporte jurídico dentro del expediente contractual. Se nombra posteriormente supervisor al Tesorero. El contrato se publica el 11 de febrero de 2022 en el Secop I, incumpliendo el término para la publicidad concedido por la ley para la publicación de las actuaciones contractuales. El acta de inicio está calendada 28-01-2022.

Es necesario precisar, que se solicitaron los enlaces del Drive en los que presuntamente se encontraban las evidencias de la gestión encomendada, mismos en donde se pudieron ver soportes como: formatos para liquidación de impuestos (2021), resoluciones de caducidad de facultad de aforo, respuestas de tutela (2021), que correspondían a un contratista anterior, pues a pie de página en la sección de elaboración, aparecía la razón social de contratista de la vigencia 2021. Muy pocas de tales actuaciones tenían el soporte de haber sido elaboradas por el contratista y mes a mes se repitió básicamente la misma información en el archivo.

En contradicción se prueba la gestión en cuanto a algunos cobros de impuestos de publicidad exterior, respuestas a derechos de petición y tutelas, proyección de actos administrativos, liquidaciones, asesoría jurídica y directrices a la administración para el manejo de los tributos y gestiones a su cargo.

En síntesis, las inconsistencias no solo se presentaron en la planeación (ilegalidad de los estudios previos), sino que viciaron la gestión del contratista ante los soportes presentados e inclusión de anualidades y conceptos no contratados ni permitidos. En la contradicción se trajeron documentos que evidencian una gestión que ratifica la delegación tácita de la función que corresponde al municipio, aunado a lo cual no se aportaron las evidencias de la gestión sobre todos y cada uno de los 6000 predios que aproximadamente, se encontraban en la base de datos inicial, que justificara la inclusión de cada rubro a favor de los honorarios del contratista.

Los pagos que generaron el detrimento se observan las Facturas electrónicas de venta:

- 1.- FEV No. JP-49, calendada 21-03- 2022, por valor de \$12.247.694 (folio 121), acompañándola el informe del contratista a folios 122- 125.
- 2.- FEV No. JP-50, calendada 21-03- 2022, por valor de \$19.796.467 (folio 138) y el informe del contratista a folios 129- 157
- 3.- FEV No. JP-53, calendada 20-04- 2022, por valor de \$32.010.825 (folio 169), con el informe del contratista a folios 170- 199
- 4.- FEV No. JP-63, calendada 09-06- 2022, por valor de \$27.525.000 (folios 207- 208), con el informe del contratista a folios 209 – 214

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

- 5.- FEV No. JP- 67, calendada 29-06- 2022, por valor de \$24.561.423 (folios 227- 233), con el informe del contratista a folios 234 – 296 (en este período se incluyeron pagos de predial, cuyas sumas corresponden a la vigencia 2022; también se incluyeron conceptos que estaban expresamente excepcionados incluso en el contrato, como la *sobretasa bomberil y ambiental, consecuentemente los intereses derivados de éstas*)
- 6.- FEV No. JP- 76, calendada 13-07- 2022, por valor de \$20.747.219 (folios 309 - 310), con el informe del contratista a folios 311 – 314
- 7.- FEV No. JP- 86, calendada 20 -08- 2022, por valor de \$62.653.441 (folios 328 - 329), acompañándola el informe del contratista a folios 330 – 314
- 8.- FEV No. JP- 92, calendada 13- 09 - 2022, por valor de \$13.290.849 (folio 351) y el informe del contratista a folios 352 – 389 (Se incluye vigencia 2022 y los ítems excepcionados)
- 9.- FEV No. JP- 106, calendada 23 - 10- 2022, por valor de \$64.333.771 (folios 400 - 401), con el informe del contratista a folios 402 – 404
- 10.- FEV No. JP- 128, calendada 13 - 12- 2022, por valor de \$9.466.103 (folio 414), con el informe del contratista de octubre a folios 415 - 426.
- 11.- FEV No. JP- 129, calendada 13 - 12- 2022, por valor de \$98.195.008 (folios 438), con el informe del contratista de noviembre a folios 439 – 465
- 12.- FEV No. JP- 131, calendada 28 - 12- 2022, por valor de \$380.820.923 (folios 479 y 480) y el informe del contratista de diciembre a folios 481 y s.s.

El pago de la SSI a folios 131, 165, 221, 297, 467, 498, no corresponde al porcentaje determinado por ley del 40% del valor del contrato, abril no se evidencia.

Lo anterior, implica la existencia de un presunto detrimento que se detalla en el siguiente cuadro, por los pagos reconocidos, en tales circunstancias:

Cuadro No. 32

Municipio de Calima El Darién		
Contrato No. 310- 13- 06- 060- 2022		
Comprobante de Pago	Fecha	Valor Pagado
304	29/03/2022	\$ 32.044.161
479	28/04/2022	\$ 32.610.825
772	10/06/2022	\$ 27.525.000
932	13/07/2022	\$ 38.767.400
1146	18/08/2022	\$ 20.747.219
1446	10/10/2022	\$ 13.290.849
1591	5/11/2022	\$ 62.653.441
1690	24/11/2022	\$ 64.333.771
2112	29/12/2022	\$ 488.482.035
Total		\$ 780.454.701

Fuente: Municipio de Calima El Darién

Elaboró: Equipo Auditor

Fuente de criterio y criterio

Ley 594 de 2000, artículos 1 a 4, 11 a 17; Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 13, 23 y 24, Ley 1386 de 2010; en su artículo 1º, Ley 1474 de 2011, artículos 82 a 84; Constitución Nacional, artículo 209; Contrato en sus componentes pre y contractual (estudios previos, propuesta y minuta); manual de contratación de la entidad. Sentencia Consejo de Estado, Sección III

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Subsección C; Radicación número: 76001-23-31-000-2003-01754-01(35268). M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa del 06- 05- 2015.

Causa

Planeación antijurídica y antieconómica, con vulneración al principio de conmutatividad, falencias en el seguimiento de las actividades por parte de la supervisión.

Efecto

Pérdida del recurso e inadecuada gestión en favor de la comunidad, generando un presunto detrimento por valor de \$780.454.701.

Los hechos descritos constituyen una observación administrativa con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal y Penal, por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39; Ley 610 de 2000, artículos 5 y 6; Ley 599 de 2000, artículos 397 y 410.

11.Oobservación administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y fiscal-Planeación, seguimiento y actividades sin revisión en el pago de Contrato

Convenio de Asociación No. 310-13- 08- 012- 2022

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la instalación de las iluminaciones especiales para la temporada navideña vigencia 2022 en el municipio de Calima – El Darién (Valle del Cauca)

Valor: \$123 millones

Plazo: Hasta 30 de diciembre de 2022

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Etapas Precontractual: En los estudios previos se especifica la necesidad de promover participación comunitaria, bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de su población y para contribuir con este propósito se requería ejecutar proyectos de acuerdo a las necesidades que se presentaban, el prestador de servicios debía estar facultado para la ejecución de programas para la adecuación y embellecimiento de las instalaciones culturales del municipio; a través de la secretaría de fomento al turismo; requiere adelantar las etapas previas y de planeación con la finalidad de garantizar Calima Pueblo Mágico y Ancestral, lo anterior con motivo de las festividades navideñas. Concretamente se requería brindar iluminación especial (folios 8- 29).

En la planeación no se tomó en cuenta, que con el otro sí que prorrogó el contrato de concesión, se determinó expresamente que el Concesionario sería en lo sucesivo el encargado de realizar la iluminación navideña del municipio, siendo del resorte del municipio, proveer el soporte económico para tal fin. Lo que le resta soporte jurídico en el gasto.

11.Oobservación administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y fiscal– Planeación, seguimiento y actividades sin revisión en el pago de Contrato

No se determinó la necesidad de garantías, a pesar de que se determinó el pago del 50% de los aportes del municipio, al momento de la suscripción del acta de inicio, aunque no se le denomina como anticipo el sentido de tal pago tiene idéntica destinación. El otro 50% del valor de aportes se pagaría en actas parciales.

A folios 37 – 79, se encuentran la propuesta y anexos de la oferente, no hay soportes que demuestren la experiencia del contratista, más allá de la mera enunciación de los mismos en la hoja de vida del contratista ESAL, por tanto, no se cumple el criterio de ser una entidad de reconocida idoneidad, tampoco se evidencia el soporte del registro en el Secop.

Etapla contractual: Se observa el contrato suscrito a folios 80 - 85 del 30-11-2022, en la cláusula sexta se determina el pago del 50% de los aportes del municipio con el acta de inicio, sin que se exijan garantías que respalden el anticipo que se desembolsa. Se designa como supervisora a la asesora de fomento al Turismo, el acta de inicio se suscribió el 30 – 11- 2022. Se observa publicación en el Secop I, extemporánea del 11 -12- 2022 (folios 97 - 98).

A partir del folio 101 se encuentra la solicitud de pago del 50% del valor del aporte del municipio al contrato, a folio 102 FELE 48 del 06 de diciembre de 2022, por \$61.500.000. A folios 108 a los 146 informes del contratista con fotos sin fecha ni hora, posteriormente informe del supervisor manifestando cumplimiento; en ningún aparte del expediente hubo amortización del anticipo recibido, pagos a folios 141- 143.

Como jurisprudencialmente se estableció que los dineros de anticipo, es de propiedad de la entidad estatal, el mismo debió tener los soportes del gasto e inversión correspondientes, previo al desembolso final del valor del contrato. La no presentación de los documentos y la falta de soportes al interior del expediente (Contratos, facturas, bienes adquiridos), deriva en el detrimento por el valor del anticipo entregado.

No se encuentra representada la inversión hecha por el contratista, que justificó la modalidad de contratación directa como convenio.

Criterio y fuente de criterio

Ley 594 de 2000, artículos 1 a 4, 11 a 17; Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 13, 23 y 24, Ley 1474 de 2011, artículos 82 a 84 y 91; Constitución Nacional, artículo 209; Contrato en sus componentes pre y contractual (estudios previos, propuesta y minuta); manual de contratación de la entidad; Decreto 092 de 2017, artículos 1 -3, 7, 8 y 9.

Causa

Planeación antieconómica, que vulnera los principios de la contratación pública y falencias en el seguimiento de las actividades por parte de la supervisión.

11.Oobservación administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y fiscal– Planeación, seguimiento y actividades sin revisión en el pago de Contrato

Efecto

Perdida del recurso e inadecuada gestión en favor de la comunidad, generando un presunto detrimento por valor de \$61.500.000.

Los hechos descritos constituyen una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y Fiscal, por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39; Ley 610 de 2000, artículos 5 y 6.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

OBSERVACIÓN 11: Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y fiscal– Planeación, seguimiento y actividades sin revisión en el pago de Contrato.

Tal y como se encuentra consignado desde los estudios previos el Convenio apunta

Convenio de Asociación No. 310-13- 08- 012- 2022

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la instalación de las iluminaciones especiales para la temporada navideña vigencia 2022 en el municipio de Calima – El Darién (Valle del Cauca)

Valor: \$123 millones

Plazo: Hasta 30 de diciembre de 2022

a dar cumplimiento al el programa “FORTALECIMIENTO DEL TURISMO PARA LA POBLACIÓN DARIENITA”, con la finalidad de realizar actividades encaminadas al desarrollo de la ejecución de “CALIMA PUEBLO MÁGICO Y ANCESTRAL”; es decir que también el proyecto se encaminó al fortalecimiento turístico del municipio, con motivo de las festividades navideñas, es decir, haciendo llamativa la época navideña con un alumbrado o iluminación especial que permitiera más visitas a nuestro territorio.

Igualmente fue requerido desde previos que acorde con el análisis técnico, económico y del sector, así como al hecho que se trata de iluminaciones especiales, se ha considerado adecuado adquirir elementos acordes con el diseño que elabore el proponente en vista del concepto artesanal.

Ahora, de lo afirmado por el Ente de Control en cuanto a que “no se tomó en cuenta, que con el otro sí que prorrogó el contrato de concesión, se determinó expresamente que el Concesionario sería en lo sucesivo el encargado de realizar la iluminación navideña del municipio, siendo del resorte del municipio, proveer el soporte económico para tal fin. Lo que le resta soporte jurídico en el gasto.”, resulta una actividad potestativa del municipio, pues está claro en el otro sí No. 2, de fecha 14 de septiembre de 2021, al contrato de Concesión de Alumbrado Público que el concesionario “podrá atender las obras necesarias para el diseño, elaboración, fabricación, instalación, operación, mantenimiento, desmontaje y disposición final del alumbrado navideño en el Municipio de Calima El Darién...” lo que permite

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

determinar que se trata de una actividad, que en primer lugar generará un costo a la administración municipal, pues no se encuentra establecido dentro de la tarifa de alumbrado público y en segundo lugar es una actividad potestativa, y dentro de esta potestad, haciendo uso del aporte que una Entidad sin Ánimo de Lucro estuvo dispuesta a hacer la entidad acudió a la normativa que permite fomentar el apoyo del privado a la gestión pública.

En cuanto a la solicitud de garantías, dentro del proceso se actuó bajo amparo legal contenido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto No. 1082 de 2015, que establece que las garantías no serán obligatorias en los procesos bajo las modalidades de contratación directa, por consiguiente, no podría determinarse hallazgo por actuar bajo amparo legal.

Es de anotar que, frente a las normas contractuales, no podríamos ampararnos en el principio de analogía, pues los aportes entregados a la convenida, no son pagos ni entrega de dinero bajo el concepto de anticipo, sino aportes en cumplimiento de las obligaciones convenidas pues las partes de un convenio aportan al mismo, mas no realizan pagos a uno o a otro, al no tratarse de anticipo sino de entrega de aportes, no podríamos hablar de amortizaciones.

En atención a la utilización de los recursos aportados al convenio, se allega certificación emitida por la representante legal de la convenida.

Una vez aclarados los factores que dieron origen al hallazgo anunciado, se solicita con respeto al ente de control se elimine todo reparo por esta causa, pues se ha demostrado que no ha existido una conducta dolosa o gravemente culposa, como tampoco un detrimento patrimonial

ANEXOS

- Certificación de gasto
- RUP 2022 en el cual se evidencia la idoneidad de la convenida
- Certificación Agencia para la Infraestructura del Meta

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Previamente a la evaluación sobre si la observación desaparece o pasa a ser un hallazgo de iguales connotaciones o no dentro del informe final, es menester, revisar los archivos electrónicos entregados para validar lo manifestado por el municipio, a saber:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Auditoría Contraloría Vigencia 2022-20231110T203019Z-001.zip (copia de evaluación)

Archivo Órdenes Herramientas Favoritos Opciones Ayuda

Añadir Extraer en Comprobar Ver Eliminar Buscar Asistente Información Buscar virus Comentario auto extraíble

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
...			Carpeta de archivos		
Certificado CONVENIOAIM Codempresas.pdf	7.580.627	7.559.045	Microsoft Edge PD...	8/11/2023 6:50 ...	D09CE81A
RESPUESTA SOLICITUD CONTRALORIA.pdf	2.938.017	2.729.567	Microsoft Edge PD...	5/11/2023 7:18 ...	E1FBA0C2
RUP 2022.pdf	734.657	184.502	Microsoft Edge PD...	8/11/2023 6:50 ...	75CB0D7F

El contenido de la documentación es la siguiente: Un certificado de un contrato con empresa del Meta con su correspondiente acta de liquidación que data de 2017 (4 folios); respuesta de la contratista en donde manifiesta mediante cuadro de su propia autoría la inversión del dinero del aporte del municipio, sin que dentro de los soportes aparezcan en donde se invirtieron los elementos adquiridos (11 folios), y sin que se observe en fotografías u otros medios la entrega o uso de los mismos en el servicio dispensado al municipio, dichos valores ascienden a la suma de \$123 millones de pesos aproximadamente.

Finalmente, en el RUP de la empresa se da cuenta de la idoneidad de la misma en distintos contratos (32 folios), documento que no debió aportarse dentro de la contradicción sino ser parte del expediente contractual, como quiera que los convenios han de hacerse con entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad y en cumplimiento del principio de transparencia, la misma debería encontrarse plenamente probada dentro del expediente contractual.

EMPRESARIAL Y SOCIAL CODEMPRESAS
NIT. 81000828-2

Calima el Darién, Valle del Cauca Octubre de 2023.
COR-001

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE CALIMA EL DARIÉN
Atte. DR. MARTÍN ALFONSO MEJÍA LONDOÑO
Alcalde
alcaldia@calimaeldarien-valle.gov.co
Calle 10 #4-20

ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTO
No. 11 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL-AUDITORIA ARTICULADA

Cordial Saludo.

De la manera más atenta, adjunto enviamos la relación con los soportes de inversión de los recursos entregados a la Corporación Para el Desarrollo Gestión Empresarial y Social CODEMPRESAS, del Convenio 310-13-08-012 de 2022.

PROYECTO	IDENTIFICACION	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	VALOR
PROYECTO 001	PROYECTO 001	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 002	PROYECTO 002	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 003	PROYECTO 003	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 004	PROYECTO 004	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 005	PROYECTO 005	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 006	PROYECTO 006	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 007	PROYECTO 007	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 008	PROYECTO 008	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 009	PROYECTO 009	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 010	PROYECTO 010	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 011	PROYECTO 011	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 012	PROYECTO 012	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 013	PROYECTO 013	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 014	PROYECTO 014	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 015	PROYECTO 015	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 016	PROYECTO 016	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 017	PROYECTO 017	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 018	PROYECTO 018	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 019	PROYECTO 019	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 020	PROYECTO 020	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 021	PROYECTO 021	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 022	PROYECTO 022	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 023	PROYECTO 023	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 024	PROYECTO 024	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 025	PROYECTO 025	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 026	PROYECTO 026	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 027	PROYECTO 027	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 028	PROYECTO 028	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 029	PROYECTO 029	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 030	PROYECTO 030	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 031	PROYECTO 031	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 032	PROYECTO 032	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 033	PROYECTO 033	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 034	PROYECTO 034	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 035	PROYECTO 035	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 036	PROYECTO 036	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 037	PROYECTO 037	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 038	PROYECTO 038	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 039	PROYECTO 039	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 040	PROYECTO 040	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 041	PROYECTO 041	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 042	PROYECTO 042	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 043	PROYECTO 043	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 044	PROYECTO 044	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 045	PROYECTO 045	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 046	PROYECTO 046	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 047	PROYECTO 047	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 048	PROYECTO 048	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 049	PROYECTO 049	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 050	PROYECTO 050	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 051	PROYECTO 051	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 052	PROYECTO 052	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 053	PROYECTO 053	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 054	PROYECTO 054	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 055	PROYECTO 055	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 056	PROYECTO 056	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 057	PROYECTO 057	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 058	PROYECTO 058	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 059	PROYECTO 059	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 060	PROYECTO 060	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 061	PROYECTO 061	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 062	PROYECTO 062	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 063	PROYECTO 063	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 064	PROYECTO 064	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 065	PROYECTO 065	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 066	PROYECTO 066	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 067	PROYECTO 067	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 068	PROYECTO 068	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 069	PROYECTO 069	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 070	PROYECTO 070	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 071	PROYECTO 071	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 072	PROYECTO 072	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 073	PROYECTO 073	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 074	PROYECTO 074	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 075	PROYECTO 075	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 076	PROYECTO 076	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 077	PROYECTO 077	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 078	PROYECTO 078	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 079	PROYECTO 079	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 080	PROYECTO 080	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 081	PROYECTO 081	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 082	PROYECTO 082	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 083	PROYECTO 083	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 084	PROYECTO 084	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 085	PROYECTO 085	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 086	PROYECTO 086	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 087	PROYECTO 087	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 088	PROYECTO 088	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 089	PROYECTO 089	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 090	PROYECTO 090	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 091	PROYECTO 091	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 092	PROYECTO 092	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 093	PROYECTO 093	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 094	PROYECTO 094	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 095	PROYECTO 095	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 096	PROYECTO 096	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 097	PROYECTO 097	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 098	PROYECTO 098	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 099	PROYECTO 099	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000
PROYECTO 100	PROYECTO 100	MONEDAS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN	1.000.000.000

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.320.947-5

112-04-04-0753

LA SUSCRITA DIRECTORA OPERATIVA DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

CERTIFICA:


Que la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SOCIAL CODEMPRESAS, identificada con NIT: 81000828-2, representada legalmente por LINA JOHANNA MARIN LOAIZA, identificada con cedula de ciudadanía No. 25.112.295 de Manizales, suscribió el convenio de asociación número 173 de 2017 y LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM.

Contrato N°	173 DE 2017
Objeto:	ADECUACIÓN ILUMINACIONES ESPECIALES PARA LA TEMPORADA NAVIDEÑA DEL 2017 EN DIFERENTES SITIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.
Valor inicial:	\$2.754.200.000.00 DOS MIL SETECIENTOS VEINTE Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS.

Adentrándonos en el tema de la argumentación traída como defensa en la contradicción, queremos destacar que, dadas las características del objeto contractual, la actuación a

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Esta Factura es un stub de ejemplo. Véase el código de Comercio.



ELECTRICOS LIDER SAS

NIT: 90108530-1


CARRERA 20 NO 20 46

Tel: 8945191 - Cel.: 3133531159 - Nariño - Calles - Colombia

E-mail: auditand@electronicaslider.com

PERSONA JURÍDICA RESPONSABLE DE IVA

SOMOS RETENEDORES Y AUTORETENCIONES DE IVA.



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. CON6576

Resolución 004/2019 del Departamento del Valle del Cauca, de 20 de Agosto de 2019, por la cual se adopta el formato de Factura Electrónica de Venta.

VALIDACIÓN PREVA DIAH - FECHA EXPIRACIÓN: 19/03/2022 11:23:47 a. m.

CUFE: 4567890123456

De las siguientes facturas (Nos. CRE 5813, FESF 23332), ambas están calendadas el 17 de diciembre de 2022, pero especialmente la No. 23332, fue expedida por persona jurídica con ubicación en la ciudad de Villavicencio - Departamento del Meta, en donde se adquirieron amarras plásticas de distintos centímetros de grosor, cinta aislante y guayas, llama la atención, que la factura de mayor valor entre estas primeras 6, sea de un proveedor que se encuentra a más de 11 horas de la ciudad de Calima El Darién. No hay claridad sobre si tales bienes corresponden exclusivamente a esta contratación. Sobre todo, si tenemos en cuenta que el soporte probatorio traído como experiencia del contratista pertenece a un contrato de Adecuación de Iluminaciones Navideñas, realizado en del Departamento del Meta, que pudo haberse repetido en el 2022 o en otras partes del país.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

Actividad Económica:	Razón Social: JUAN PABLO ALZATE ORTEGA	Número: JPAO-6	Fecha: 30/12/2022 16:38
4220 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	Identificación: 75085058-4	Forma de pago: Contado	
	Teléfono: 3104561074	Medio de pago: Efectivo	
	Dirección: CL 64 B 20 A 55, Manzales, Caldas, COLOMBIA.		
	Condición IVA: IVA		
	Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros		

Sr. (es): CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN EMPRESARIAL Y SOCIAL CODEMPRESAS	NIT: 810005828-2
Dirección: CR 16 16 40, .	Tel: 3104074588
Municipio: Manzales, Caldas, COLOMBIA.	
Moneda: Pesos Colombianos	Muni, Dest.: Manzales

Lín.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		Venta de elementos luminosos		1.00	Und	19%	84,033,614.00	0.00	84,033,614.00

Esta factura se asume en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

Subtotal:	84,033,614.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	84,033,614.00
IVA 19%:	15,966,386.66

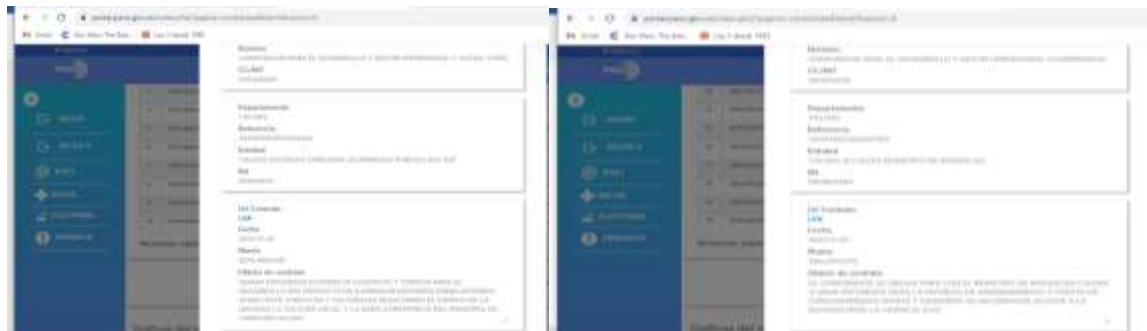
Fecha y hora de validación: 30/12/2022 16:38

CUFE: 31158040752e16c16b2b699bde1e23d21154ed957e14e06c3a5bcb5ac184e850434b0095cb62e00e510466b721

Valor a Pagar: \$ 100,000,000.66

QR

Se consulta, para efectos de poder evidenciar las actividades de la ESAL a nivel contractual en general, el portal PACO CONTRATISTA, y se evidencia que para el mismo período de tiempo y con objetos similares, se ejecutaron por parte de la empresa sin ánimo de lucro los siguientes contratos, lo que no nos permite establecer si los bienes o suministros comprados iban a ser destinados en exclusiva para el contrato del municipio de Calima El Darién, pues la mera exposición de las facturas, no implica per se, la conclusión de que con tales productos se cumplió con la obligación en el municipio:



CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR



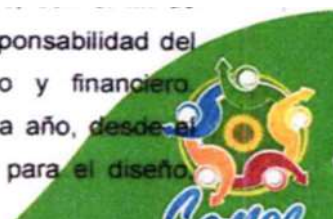
Como quiera que ya se hizo revisión y análisis de los documentos aportados en la contradicción y que no eran parte del expediente contractual al momento de la revisión, procedemos a evaluar las premisas de la defensa que se expuso en contradicción:

Informa el sujeto de control que el convenio apuntaba a “...dar cumplimiento al el programa **“FORTALECIMIENTO DEL TURISMO PARA LA POBLACIÓN DARIENITA”**, con la finalidad de realizar actividades encaminadas al desarrollo de la ejecución de **“CALIMA PUEBLO MÁGICO Y ANCESTRAL”**; es decir que también el proyecto se encaminó al fortalecimiento turístico del municipio, con motivo de las festividades navideñas...” circunstancia que no se discute, sobre lo que sí se llamó la atención era sobre el hecho cierto, de que en el análisis no se tomó en cuenta el Otro sí No. 2 de la Concesión, pues aunque se manifieste que *“...se ha considerado adecuado adquirir elementos acordes con el diseño que elabore el proponente en vista del concepto artesanal”*, no es menos cierto que, dentro del Otro sí a la Concesión, se enunció la relevancia de que fuera precisamente el Concesionario el encargado de asumir dicha iluminación habida cuenta de los aspectos técnicos que son de su especialidad.



No es cierto que fuera una facultad potestativa del municipio, quien ostentaba la facultad potestativa era el Concesionario, que podría desistir de realizar el alumbrado, no del ente territorial, la excusa que se trae acerca de que se iba a realizar un aporte de la entidad Sin Ánimo de Lucro, no es de recibo, pues el famoso aporte de la ESAL nunca se evidenció en el contrato, ni siquiera se parametrizó la forma de hacer seguimiento a este valor.

Respecto del alcance de las obligaciones pactadas entre las partes, tenemos lo siguiente, acorde a los extractos del Otro Sí No. 2 suscrito por el municipio:

alcanzar un grado óptimo en la prestación del servicio. Será responsabilidad del CONCESIONARIO establecer su propio esquema económico y financiero iluminación navideña. EL CONCESIONARIO podrá atender, cada año, desde el 07 de diciembre y hasta el 07 de enero, las obras necesarias para el diseño



CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 300-340-31-04	 <small>Modelo integrado de planeación y gestión</small>
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	NIT. 890.309.611-8	Fecha: 01/01/2020	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	MEC-NTCGP 1000-2009- SISTEDA	Versión: 1	
	PROCESO: DESPACHO DEL ALCALDE		Página: 17	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: OTROS SI MODIFICATORIO			

elaboración, fabricación, instalación, operación, mantenimiento, desmontaje y disposición final del alumbrado navideño en el Municipio de Calima El Darién, conforme a las órdenes impartidas por la administración municipal. Para efectos de lo anterior, las partes suscribirán Actas de Ejecución en las cuales se deberá establecer el monto de la iluminación navideña, la fuente de financiamiento, la descripción y el valor de las actividades a ejecutar y la forma de pago a favor del concesionario, la cual, en todo caso, deberá ajustarse a lo dispuesto en el presente otrosí"

De otro, lado y ateniéndose al equilibrio financiero, se establece en el clausulado del Otro sí No. 2, lo siguiente:

10.3. Forma de pago de las actividades de iluminación navideña. Las obras de iluminación navideña ejecutadas por el **CONCESIONARIO** conforme al "Acta de ejecución" suscrita con el **MUNICIPIO** para tal fin, serán remuneradas al concesionario a través de la fiducia destinada para tal efecto y/o a través de las cuentas propias del Municipio, cuando así se disponga de los remantes causados una vez se hayan cubierto los costos inherentes a la prestación del servicio de alumbrado público, a saber, remuneración del AOM del concesionario conforme al

Se hace evidente que sí es parte de las obligaciones contractuales del Concesionario, encargarse de la iluminación navideña. De igual manera, hay lugar a la inversión para la realización de la iluminación, que de todas formas se financia con los recursos del alumbrado público.

Parágrafo Cuarto. En caso de que en el mes de septiembre de cada año, no existieran recursos suficientes para realizar el proyecto de iluminación navideña, las partes acuerdan que no representa incumplimiento por parte del **CONCESIONARIO** la no realización de la iluminación navideña en el municipio, en todo caso, podrá el **MUNICIPIO** ordenar la ejecución de las obras de iluminación navideña conforme a los recursos que existieren como remanentes del sistema, de ser así, dicha disposición deberá quedar expresada en el Acta de ejecución, en el apartado de fuente de financiamiento"

De los soportes traídos a la contradicción no queda claro en donde quedó representada la inversión del contratista, pues en la información suministrada no se hace alusión alguna al tema.

Como pudo verse dentro del Otro sí No. 2, el concesionario tiene a su cargo la cobertura de pólizas que garantizan cualquier riesgo que pueda gestarse a propósito de tal contratación, sin embargo, minimiza la entidad, la importancia de los amparos mediante póliza de

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

seguros, porque si bien la ley no EXIGE que se soliciten pólizas, no es menos cierto que señala que acorde al objeto del contrato se pueden llegar a determinar.

Ahora bien el objeto de debate es que según el municipio “...frente a las normas contractuales, no podríamos ampararnos en el principio de analogía, pues los aportes entregados a la convenida, no son pagos ni entrega de dinero bajo el concepto de anticipo, sino aportes en cumplimiento de las obligaciones convenidas pues las partes de un convenio aportan al mismo, mas no realizan pagos a uno o a otro, al no tratarse de anticipo sino de entrega de aportes, no podríamos hablar de amortizaciones.”, para entrar a validar o no esta hipótesis, traemos la postura de la Corte Constitucional, frente a la interpretación por analogía:

En sentencia C- 083 de 1995, señaló la Corte Constitucional, en relación con la analogía manifestó lo siguiente: “Es claro, para la Corte, que bajo el imperio de la Constitución de 1886 se consagraban en Colombia, como fuentes formales de derecho obligatorias, dos: la legislación y la costumbre. Tal consagración se derivaba de los artículos 8° y 13 de la ley 153 de 1887, respectivamente. Pero el primero de los citados, además de la ley “exactamente aplicable al caso controvertido”, enunciaba la analogía (“aquellas que regulen casos o materias semejantes”), la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho. Cabe preguntar: ¿tenían las tres últimas fuerzas obligatoria? ¿La tienen aún bajo el imperio de la nueva Carta? Para absolver tal cuestión es preciso asignar un valor a cada una de esas expresiones.

a) La analogía. Es la aplicación de la ley a situaciones no contempladas expresamente en ella, pero que sólo difieren de las que sí lo están en aspectos jurídicamente irrelevantes, es decir, ajenos a aquéllos que explican y fundamentan la ratio juris o razón de ser de la norma. La consagración positiva de la analogía halla su justificación en el principio de igualdad, base a la vez de la justicia, pues, en función de ésta, los seres y las situaciones iguales deben recibir un tratamiento igual. Discernir los aspectos relevantes de los irrelevantes implica, desde luego, un esfuerzo interpretativo que en nada difiere del que ordinariamente tiene que realizar el juez para determinar si un caso particular es o no subsumible en una norma de carácter general.

Aunque el razonamiento se cumple, en apariencia, de lo particular a lo particular, es inevitable la referencia previa a lo general, pues los casos análogos tienen en común, justamente, el dejarse reducir a la norma que los comprende a ambos, explícitamente a uno de ellos y de modo implícito al otro. En la analogía se brinda al juez un fundamento para crear derecho, pero ese fundamento se identifica con la ley misma que debe aplicar. El juez que apela al razonamiento per analogiam no hace, pues, otra cosa que decidir que en una determinada situación, es el caso de aplicar la ley.

Por ende, la analogía no constituye una fuente autónoma, diferente de la legislación. El juez que acude a ella no hace nada distinto de atenerse al imperio de la ley. Su consagración en la disposición que se examina resulta, pues, a tono con el artículo 230 de la Constitución.

b. La doctrina constitucional. Las normas de la Constitución política, y ésta no es una característica privativa de ellas, tienen una vocación irrevocable hacia la individualización, tal como lo ha subrayado Kelsen [4] al tratar del ordenamiento jurídico. De ordinario pasan

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

por una fase previa consistente en su desarrollo legal. Pero no todas alcanzan dicho desarrollo, bien porque no lo requieren, bien porque, requiriéndolo, el legislador lo omite. Pero tal omisión no desvirtúa su carácter normativo, si ya lo tienen. Pueden, entonces, ser aplicadas a situaciones específicas subsumibles en ellas, que no están explícitamente contempladas en la ley.

Pero si la individualización de las normas legales, dada su generalidad (que a menudo deviene en ambigüedad), aparece problemática y generadora de inseguridad jurídica, más problemática e incierta resulta aún la actuación directa de las normas constitucionales a los casos particulares, por concurrir en ellas, superlativamente, las mismas notas distintivas advertidas en la ley.

Parece razonable, entonces, que, al señalar a las normas constitucionales como fundamento de los fallos, a falta de ley, se agregue una cualificación adicional, consistente en que el sentido de dichas normas, su alcance y pertinencia, hayan sido fijados por quien haga las veces de intérprete autorizado de la Constitución. Que, de ese modo, la aplicación de las normas superiores esté tamizada por la elaboración doctrinaria que de ellas haya hecho su intérprete supremo. (art. 241 C.P.)

Pero como la Constitución es derecho legislado por excelencia, quien aplica la Constitución aplica la ley, en su expresión más primigenia y genuina. Es preciso aclarar que no es la jurisprudencia la que aquí se consagra como fuente obligatoria. A ella alude claramente otra disposición, el artículo 4° de la ley 69 de 1896, para erigirla en pauta meramente optativa para ilustrar, en ciertos casos, el criterio de los jueces. Así dice el mencionado artículo en su parte pertinente:

"Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos ..." (Subraya de la Sala).

Es claro entonces que la norma transcrita resulta armónica con lo dispuesto en el artículo 230 de la Carta del 91.

Así mismo, conviene precisar que no hay contradicción entre la tesis que aquí se afirma y la sentencia C-131/93, que declaró inexecutable el artículo 23 del Decreto legislativo 2067 del 91 en el cual se ordenaba tener "como criterio auxiliar obligatorio" "la doctrina constitucional enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional", mandato, ese sí, claramente violatorio del artículo 230 Superior. **Lo que hace, en cambio, el artículo 8° que se examina -valga la insistencia- es referir a las normas constitucionales, como una modalidad del derecho legislado, para que sirvan como fundamento inmediato de la sentencia, cuando el caso sub iudice no está previsto en la ley.** La cualificación adicional de que si las normas que van a aplicarse han sido interpretadas por la Corte Constitucional, de ese modo debe aplicarse, constituye, se repite, una razonable exigencia en guarda de la seguridad jurídica.

Es necesario distinguir la función integradora que cumple la doctrina constitucional, en virtud del artículo 8°, cuya constitucionalidad se examina, de la función interpretativa que le atribuye el artículo 4° de la misma ley, al disponer:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

"Los principios del Derecho natural y las reglas de la jurisprudencia servirán para ilustrar la Constitución en casos dudosos. La doctrina constitucional es, a su vez, norma para interpretar las leyes" (Subraya la Corte).

La disposición transcrita corrobora, además, la distinción que atrás queda hecha entre doctrina constitucional y jurisprudencia. Es apenas lógico que si el juez tiene dudas sobre la constitucionalidad de la ley, el criterio del intérprete supremo de la Carta deba guiar su decisión. Es claro eso sí que, salvo las decisiones que hacen tránsito a la cosa juzgada, las interpretaciones de la Corte constituyen para el fallador valiosa pauta auxiliar, pero en modo alguno criterio obligatorio, en armonía con lo establecido por el artículo 230 Superior.

Lo anterior encuentra claro apoyo, además, en el artículo 5° de la misma ley (153 de 1887), cuyo texto reza:

"Dentro de la equidad natural y la doctrina constitucional, la crítica y la hermenéutica servirán para fijar el pensamiento del legislador y aclarar o armonizar disposiciones legales oscuras o incongruentes" (Subraya la Corte).

La disposición destaca, nítidamente, la función que está llamada a cumplir la doctrina constitucional en el campo interpretativo. Es un instrumento orientador, mas no obligatorio, como sí ocurre cuando se emplea como elemento integrador: porque en este caso, se reitera, es la propia Constitución -ley suprema-, la que se aplica.

c. Las reglas generales de derecho. Se dijo un poco más arriba que cuando el juez razona por analogía, aplica la ley a una situación no contemplada explícitamente en ella, pero esencialmente igual, para los efectos de su regulación jurídica, a la que sí lo está. Esta modalidad se conoce en doctrina como analogía legis, y se la contrasta con la analogía juris en la cual, a partir de diversas disposiciones del ordenamiento, se extraen los principios generales que las informan, por una suerte de inducción, y se aplican a casos o situaciones no previstas de modo expreso en una norma determinada..." (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

De otra parte, para complementar las conclusiones del Consejo de Estado, frente al tema del Anticipo, que ofrece una distinción entre el uno y el otro, que hemos de tener en cuenta. Inicialmente, refiriéndose al anticipo, tenemos que el Consejo de Estado- Sección Tercera, Sentencia del 13 de septiembre de 1999, consejero Ponente Ricardo Hoyos Duque, manifestó:

"se han considerado públicos u oficiales los recursos y de la exclusiva propiedad del ente estatal constituyéndose en un adelanto, avance o anticipo del precio no causado para la iniciación del objeto contractual, los trabajos o servicios, la atención de los gastos preliminares y su aplicación a los fines del contrato, que sólo se incorporan al patrimonio [...] del contratista e implican un pago en la medida de su amortización."

No puede perderse de vista que los dineros que se le entregan al contratista por dicho concepto son oficiales o públicos. El pago de dicha suma lo era y lo sigue siendo un adelanto del precio que aún no se ha causado, que la entidad pública contratante hace al contratista para que a la iniciación de los trabajos disponga de unos fondos que le permitan proveerse de materiales y atender los primeros gastos del contrato, tales como los

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

salarios de los trabajadores que disponga para la obra. No es otra la razón por la cual adicionalmente se exige que sea garantizada, que se presente un plan para su utilización y que se amortice durante la ejecución del contrato en cada acta parcial de cobro.

[...]

en el pago anticipado, se ha señalado que es un pago del precio y, por tanto, se incorpora al patrimonio del contratista y es de su propiedad.”

Posición reiterada por la Sección Tercera, Sentencia del 10 de noviembre de 2000, en donde se establece diferencia entre Anticipo y pago anticipado:

De una parte, **el anticipo**, diferente a pago anticipado, **son dineros de la Administración, administrados por el contratista**. Tanto es así que el contratista tiene que presentar una garantía única, en la cual se ampara entre otros el manejo del anticipo **y dicho anticipo lo va amortizando el contratista, por descuentos que le hace la Administración a las sumas que ésta misma le debe pagar**.

También señaló, el Consejo de Estado en sentencia del 22 de junio de 2001, en cuanto a la naturaleza del anticipo, lo siguiente:

En la práctica contractual administrativa con fundamento en la ley, lo usual es que la entidad pública contratante le entregue al contratista un porcentaje del valor del contrato, a título de anticipo, el cual habrá de destinarse al cubrimiento de los costos iniciales en que debe incurrir el contratista para la iniciación de la ejecución del objeto contratado. De ahí que se sostenga que es la forma de facilitarle al contratista la financiación de los bienes, servicios u obras que se le han encargado con ocasión de la celebración del contrato. Se convierte así este pago en un factor económico determinante para impulsar la ejecución del contrato. Si el anticipo se entrega al contratista antes o simultáneamente con la iniciación del contrato, esto es, cuando aún el contratista no ha prestado el servicio, ejecutado la obra o entregado los bienes y precisamente espera dicha suma para iniciarlo y la fecha de ese pago marca la pauta para el cómputo del término del contrato, el pago de la suma de dinero que las partes convengan a ese título se hace en calidad de préstamo. Esto significa que las sumas entregadas como anticipo son de la entidad pública y esa es la razón por la cual se solicita al contratista que garantice su inversión y manejo y se amortice con los pagos posteriores que se facturen durante la ejecución del contrato.

Se puede colegir de las sentencias traídas a estudio que el anticipo, son valores que se cancelan para impulsar el contrato y que no son de propiedad del contratista, como quiera que era una parte del valor del convenio que **no** se había causado.

Aunado a ello, el mismo Manual de Contratación del municipio, manifiesta sobre el tema, señalando que en los estudios previos se debe prevenir lo siguiente:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

2.1.1.6.5. Forma de pago

Deben precisarse la cantidad de pagos, la periodicidad (pago único, pagos parciales, mensual, bimensual, etc.) Los porcentajes y/o valores correspondientes a cada pago, si hay anticipo o pago anticipado, además de los soportes que el contratista debe presentar para efectos del pago.



Frente al anticipo y el pago anticipado se tendrá en cuenta que:

- Acorde con el Estatuto de Contratación y siempre y cuando la Tesorería cuente con los recursos líquidos disponibles, en los contratos o convenios que celebre el Municipio de Calima El Darién, se podrá pactar la entrega de anticipos y de pagos anticipados y su monto no podrá exceder el 50% del valor del respectivo contrato, de conformidad con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

- Los anticipos que se efectúen en los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, deberán ser asignados a la fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba el contratista a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista.
- De igual forma cuando se pacte el anticipo se indicará la forma en que operará la amortización del mismo y se exigirá un plan de inversión del anticipo al contratista.
- Si el convenio o contrato se encuentra parcialmente financiado con vigencias futuras, el valor del anticipo más los impuestos y las retenciones a que hubiere lugar, no podrán ser igual al 100% de la apropiación de la vigencia.

62

Acorde a la jurisprudencia transcrita, vamos a hacer revisión de lo manifestado por el sujeto de control en aras de revisar si es o no aplicable la analogía al tema en revisión:

- 1.) La **analogía legis**, como mecanismo interpretativo, **está validado por la jurisprudencia en casos en donde la situación no está contemplada en la ley** (anticipo sin esa denominación en convenios administrativos). No obstante, se cumplen dos criterios propios del anticipo, a saber: a.) Un pago que se hace sin que haya habido actuación alguna por parte de la contratista distinta a la suscripción del acta de inicio; b.) El pago de suma de dinero correspondió al 50% del valor correspondiente a la inversión del municipio.
- 2.) El pago realizado se entregó íntegramente al contratista, sin que se sustenten dentro de los soportes traídos en la contradicción **la inversión del dinero entregado, ni la que correspondía a la ESAL**, por cuenta de su “aporte”, que fue el que justificó la modalidad de esta contratación, la falta de pólizas y la escogencia del contratista.
- 3.) La factura allegada y que sustenta aproximadamente el 70% del valor del contrato tiene fecha de expedición del día en que terminaba el contrato, luego no hay coherencia con lo que pretende demostrarse.

Retomando el tema de la **Analogía legis**, tenemos que se trató para el caso que nos ocupa de un dinero que se desembolsó en favor de un tercero, sin que realizara actividad alguna que sustentara ese pago, sin evidencias de la inversión del aporte del municipio antes de la finalización del contrato. Así las cosas, tenemos que las circunstancias del convenio se

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

presentan - en relación con este primer pago- igual a un anticipo, independientemente del nombre asignado a las de cualquier contrato que tenga anticipo, con unos agravantes, no se pensó en salvaguardar el dinero que se entregaba al contratista sin que se lo hubiera ganado y sin que se sustentara dentro del contrato, cuáles eran los bienes o servicios que se entregaban, verbo y gracia: Pesebre con X tamaño, 30 figuras de bastones; 3 ovejas, etc., que permitieran corroborar con los soportes de las fotografías las circunstancias de hecho que ellas pretenden demostrar.

Dado lo anterior, se sostendrá la observación y pasará al informe como un hallazgo.

Realizado Comité de Calidad, se generaron unos parámetros que implicaron la desaparición de la connotación fiscal, acorde a tal circunstancia, queda la redacción como a continuación se determina:

“Convenio de Asociación No. 310-13- 08- 012- 2022

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la instalación de las iluminaciones especiales para la temporada navideña vigencia 2022 en el municipio de Calima – El Darién (Valle del Cauca)

Valor: \$123 millones

Plazo: Hasta 30 de diciembre de 2022

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Etapas Precontractual: En los estudios previos se especifica la necesidad de promover participación comunitaria, bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de su población y para contribuir con este propósito se requería ejecutar proyectos de acuerdo a las necesidades que se presentaban, el prestador de servicios debía estar facultado para la ejecución de programas para la adecuación y embellecimiento de las instalaciones culturales del municipio; a través de la secretaría de fomento al turismo; requiere adelantar las etapas previas y de planeación con la finalidad de garantizar Calima Pueblo Mágico y Ancestral, lo anterior con motivo de las festividades navideñas. Concretamente se requería brindar iluminación especial (folios 8- 29).

En la planeación no se tomó en cuenta, que con el otro sí que prorrogó el contrato de concesión, se determinó expresamente que el Concesionario sería en lo sucesivo el encargado de realizar la iluminación navideña del municipio, siendo del resorte del municipio, proveer el soporte económico para tal fin. Lo que le resta soporte jurídico en el gasto.

No se determinó la necesidad de garantías, a pesar de que se determinó el pago del 50% de los aportes del municipio, al momento de la suscripción del acta de inicio, aunque no se le denomina como anticipo el sentido de tal pago tiene idéntica destinación. El otro 50% del valor de aportes se pagaría en actas parciales.

A folios 37 – 79, se encuentran la propuesta y anexos de la oferente, no hay soportes que demuestren la experiencia del contratista, más allá de la mera enunciación de los mismos en la hoja de vida del contratista ESAL, por tanto, no se cumple el criterio de ser una entidad de reconocida idoneidad, tampoco se evidencia el soporte del registro en el Secop.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Etapas contractual: Se observa el contrato suscrito a folios 80 - 85 del 30-11-2022, en la cláusula sexta se determina el pago del 50% de los aportes del municipio con el acta de inicio, sin que se exijan garantías que respalden el anticipo que se desembolsa. Se designa como supervisora a la asesora de fomento al Turismo, el acta de inicio se suscribió el 30 - 11- 2022. Se observa publicación en el Secop I, extemporánea del 11 -12- 2022 (folios 97 - 98).

A partir del folio 101 se encuentra la solicitud de pago del 50% del valor del aporte del municipio al contrato, a folio 102 FELE 48 del 06 de diciembre de 2022, por \$61.500.000. A folios 108 a los 146 informes del contratista con fotos sin fecha ni hora, posteriormente informe del supervisor manifestando cumplimiento.

En contradicción se trajeron facturas de los pagos realizados, que no son parte de la trazabilidad del expediente y sustentan debilidades de archivo documental.

No se encuentra representada la inversión hecha por el contratista, que justificó la modalidad de contratación directa como convenio.

Criterio y fuente de criterio

Ley 594 de 2000, artículos 1 a 4, 11 a 17; Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 13, 23 y 24, Ley 1474 de 2011, artículos 82 a 84 y 91; Constitución Nacional, artículo 209; Contrato en sus componentes pre y contractual (estudios previos, propuesta y minuta); manual de contratación de la entidad; Decreto 092 de 2017, artículos 1 -3, 7, 8 y 9.

Causa

Planeación antieconómica, que vulnera los principios de la contratación pública y falencias en el seguimiento de las actividades por parte de la supervisión.

Efecto

Inadecuado seguimiento del recurso y gestión en favor de la comunidad. Debilidades en el proceso de supervisión.

Los hechos descritos constituyen un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39."

12.Observación administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y fiscal-Planeación, seguimiento y actividades para evidenciar inversión de anticipo

Convenio de Asociación No. 310-13- 08- 013- 2022

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la realización de los diferentes eventos culturales y artísticos dentro del marco de la celebración de la Navidad Mágica

Valor: \$210.300.394 Aporte del Municipio \$147.568.326

Plazo: Hasta 26 de diciembre de 2022.

12.Observación administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y fiscal-Planeación, seguimiento y actividades para evidenciar inversión de anticipo

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Etapla Precontractual: En los estudios previos se hacen especificaciones del objeto en 16 ítems entre los que se encuentran varias actividades, entre las que se encuentran 3000 almuerzos, 3800 juguetes Niños/niñas de 0 -9 años; 10 incentivos población rural; 3000 refrigerios niños/niñas participantes novenas (1 galleta navideña y jugo caja) En ningún aparte se hacen requerimientos mínimos en relación con las Buenas Prácticas de Manufacturas, tampoco se establece el mecanismo de control para establecer que en cada uno de los almuerzos van a estar los 200 gr de picada que se requirieron, o las condiciones de transporte de los alimentos. Estudios previos (folios 10 - 24), aunque en los estudios no se establece anticipo propiamente, se determinó que el primer desembolso por valor del 50% del aporte del municipio se haría y el saldo al término de la ejecución del contrato, sin embargo, por tratarse de “convenio de asociación” no se determinaron garantías para amparar el anticipo entregado.

Los riesgos asociados a este contrato son los mismos de cualquier otro contrato. Sin tener en cuenta el riesgo inherente a la entrega de alimentos que se manipulan por el contratista.

La invitación está a folios 35- 39 sin firma del alcalde; aunque se determina que aportará la ESAL \$73.784.163 al costo del convenio no se especifica en qué elementos se encuentra representada la participación, así como tampoco se establecieron los mecanismos para comprobar el aporte mismo.

No se encuentra en el expediente el soporte de ser una entidad de reconocida idoneidad, ni su registro en el Secop.

Etapla contractual: Se observa el contrato suscrito a folios 81 - 88 del 13-12-2022, en la cláusula sexta se determina el pago del 50% de los aportes del municipio con el acta de inicio, sin que se exijan garantías que respalden el anticipo que se desembolsa, así no se le dé tal denominación. Se designa como supervisora a la Asesora de fomento al Turismo. El Acta de inicio se suscribe el 13 - 12- 2022. Se observa publicación en el Secop I, extemporánea del 19 -12- 2022 (folios 101 - 102).

A partir del folio 105 se encuentra la solicitud de pago del 50% del valor del aporte del municipio al contrato, misma que señala unos soportes anexos, ninguno de los cuales hace parte del expediente contractual. A folio 106 y s.s., solicitud de pago final con Factura electrónica FEV No. FD35 del 22 de diciembre de 2022, posteriormente se encuentran informes del contratista con fotografías y listados de asistencia. En ningún aparte hay amortización del anticipo recibido, también se observan los pagos (folios 115- 418). No se evidencian en la trazabilidad del expediente: Soporte de los Incentivos para la población rural por \$10.000.000. No se evidencian los pagos de las 16 personas requeridas para logística.

12.Observación administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y fiscal– Planeación, seguimiento y actividades para evidenciar inversión de anticipo

No hay soporte de los contratos para entrega de agua, refrigerios y almuerzos en las cantidades y formas determinadas, pues las fotografías por sí solas no dan soporte de la cantidad de entregas determinadas y como los listados no determinan si los beneficiarios que suscribían se les entregaban regalos, almuerzos, refrigerios o qué actividad, no pueden servir per se de soporte a todos los ítems contratados.

Como jurisprudencialmente se estableció que los dineros de anticipo (independientemente del nombre que se le asigne por las partes contratantes), es de propiedad de la entidad estatal, el mismo debió tener los soportes del gasto e inversión correspondientes, previo al desembolso final del valor del contrato. La no presentación de los documentos y la falta de soportes al interior del expediente (Contratos, facturas, bienes adquiridos), deriva en el detrimento por el valor del anticipo entregado.

Fuente de criterio y criterio

Ley 594 de 2000, artículos 1 a 4, 11 a 17; Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 13, 23 y 24, Ley 1474 de 2011, artículos 82 a 84 y 91; Constitución Nacional, artículo 209; Contrato en sus componentes pre y contractual (estudios previos, propuesta y minuta); manual de contratación de la entidad; Decreto 092 de 2017, artículos 1 -3, 7, 8 y 9.

Causa

Planeación antieconómica, falencias en el seguimiento de las actividades por parte de la supervisión.

Efecto

Pérdida del recurso e inversión del erario público sin las debidas garantías, generando un presunto detrimento por valor de \$73.784.163.

Los hechos descritos constituyen una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y Fiscal, por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39; Ley 610 de 2000, artículos 5 y 6.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

OBSERVACIÓN 12: Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y fiscal– Planeación, seguimiento y actividades para evidenciar inversión de anticipo.

Convenio de Asociación No. 310-13- 08- 013- 2022

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la realización de los diferentes eventos culturales y artísticos dentro del marco de la celebración de la Navidad Mágica

Valor: \$210.300.394 Aporte del Municipio \$147.568.326

Plazo: Hasta 26 de diciembre de 2022

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Frente a las normas contractuales, no podríamos ampararnos en el principio de analogía, pues los aportes entregados a la convenida no son pagos ni anticipo, sino aportes en cumplimiento de las obligaciones contraídas, al no tratarse de anticipo sino de entrega de aportes, no podríamos hablar de amortizaciones.

Sin embargo, lo anterior, fue presentado por el convenio el informe económico del convenio:

CONVENIO DE ASOCIACION 330-13-DE-13 DE 2022 NAVIDAD MAGICA CAJUMA DABEN INFORME ECONOMICO				
CONCEPTO	PORCENTAJE	DEBITO	CREDITO	210.811.894
valor del convenio			0	0
VALOR NETO GRAVADO	N/A	210.811.894		210.811.894
VALOR NETO RECIBIDO				210.811.894
ANIMACION CON DIFER TARIFFA EVENTO DE INTEGRACION COMUNIDAD RURAL Y URBANA 18 DE DICIEMBRE DE 2022				
5000W NIÑOS				
EQUIPO DE SONIDO 8 LINEA ARRAN 8 BAJOS 30.000WARRS CONSOLA Y MICROFONO PARA PRESENTACIONES ARTISTICA				
CARPA 12*8 METROS				
TARIMA 800 METROS PARA PRESENTACIONES				
CHURROS DE COCOES DULCES Y SALADOS 120 GRAMOS				
ALMUERZO - 3 PLACADA 200 GRAMOS DE CARNE DE CERDO ACOMPAÑADO DE PAPA, PLATANO Y JUGO EN CAJA				
			30.011.894	30.011.894
			60.000.000	60.000.000
			37.000.000	37.000.000
			2.920.000	2.920.000
			12.000.000	12.000.000
			1.280.000	1.280.000
			32.000.000	32.000.000
			10.000.000	10.000.000
			2.000.000	2.000.000
			4.000.000	4.000.000

Fueron Incluidos los riesgos aplicables, que si bien se manifiesta que “son los mismos de cualquier otro contrato” fueron considerados como los aplicables, no podría afirmarse que no fueron analizados.

En cuanto a lo manifestado por el ente de control de soporte de “contratos” de entrega de agua, el convenio no determinó la obligatoriedad de subcontratar actividades, por consiguiente, para la verificación de la ejecución de las actividades no se puede obligar a la presentación de soportes subcontractuales.

Se evidencia en el informe económico cuentas de cobro por cada uno de los servicios contratados por la empresa, lo cual permite inferir razonablemente que estos servicios o suministros tienen acuerdos internos entre el contratista y proveedores.

Para la administración municipal fue suficiente el poder verificar y evidenciar el cumplimiento por parte del convenido, lo cual se puede evidenciar en los registros fotográficos y listados de asistencia, lo cual da garantía del cumplimiento del objeto del convenio.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 092 de 2017, la entidad sin ánimo de lucro es de reconocida idoneidad cuando es adecuada y apropiada para

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

desarrollar las actividades que son objeto del Proceso de Contratación y cuenta con experiencia en el objeto a contratar, lo cual se demuestra con el objeto de la entidad registrado en el certificado de existencia y representación legal, y la experiencia reportada.

Sin embargo, con el fin de atender el requerimiento del ente de control, fue extendido al convenio quien aportó el certificado de Manipulación de Alimentos a quien se ocupó de la preparación de alimentos.

Una vez aclaradas las inquietudes que dieron origen al hallazgo, se solicita al ente de control eliminar el hallazgo planteado con incidencia disciplinaria y fiscal, por cuanto no existe ilicitud sustancial y la inexistencia del daño fiscal, de acuerdo a los deberes funcionales que rigen la función pública, se dieron los resultados buscados para el cumplimiento de los fines del Estado. Por lo que el ente de control, deberá reconsiderar la razón que se tiene frente a lo manifestado como incumplimiento para que sea valorado como contrario a derecho o al orden jurídico, pues lo que se reprocha no es en sí el quebrantamiento de la norma sino el resultado de su actuar, y como puede observar el equipo auditor el resultado de la gestión que se cuestiona fue positivo tanto para el Municipio, como para la comunidad, el deber funcional no fue un obstáculo para que el Estado alcance a través de la función pública los fines que la Constitución Política ha previsto para Colombia al definirla como un Estado Social de Derecho.

ANEXOS:

- Certificación Manipulación de Alimentos
- Informe Económico Convenio
- Cuentas de Cobro Convenio
- Certificaciones aportadas con las cuales se verificó la idoneidad.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Previamente a verificar las premisas del argumento traído por la defensa de la entidad, en aras a establecer si la observación se sustentó o no, se procede a revisar el contenido de los soportes traídos a la contradicción:



Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
Carpeta de archivos					
CERTIFICACION DE MANIPULACION DE ALIMENTOS.jpeg	44.609	44.619	Archivo JPEG	08/11/2023 6:51	DBD7B5F9
Certificaciones 013-2022.pdf	532.963	438.936	Microsoft Edge PD...	09/11/2023 6:26	FB6EAB53
CUENTAS DE COBRO (1).pdf	741.525	691.852	Microsoft Edge PD...	08/11/2023 16:23	976980D3
INFORME ECONOMICO (1).pdf	451.325	426.969	Microsoft Edge PD...	08/11/2023 16:23	F962BB0F

La certificación de manipulación de Alimentos, está calendada 25 de noviembre de 2019, como podemos ver a continuación:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR



En el ítem cuentas de cobro, se presentan 9 cuentas que coinciden con el Informe económico, cuyo contenido se observa en la respuesta de la entidad, no hay anexos a las cuentas.

Respecto de estas cuentas de cobro, se observa que de los 9, solo 2 de los subcontratistas presenta Número de identificación Tributaria (NIT), aunque en varios documentos se enuncia no ser responsables del IVA, al menos deberían contar con Registro Único Tributario (RUT), cosa que se evidencia fácilmente como quiera que en el lugar en donde se hace tal identificación no aparece dígito de verificación. Tales cuentas no van acompañadas con el soporte del Rut (copia simple) que se pide a todos los contratistas (públicos o privados) para poder hacer los desembolsos correspondientes:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

CUENTA COBRO NO. 622

Tuluá, diciembre 28 de 2022

FUNDACION UNA MANO MÁS PARA VIVIR

NIT. 900.541.445-1

DEBE A:

ANDRES FELIPE ARIAS PRODUCCIONES SASO

NIT. 1.006.465.944

TEL.3214589670

POR CONCEPTO:

SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ANIMACIÓN CON SU EN TABARRA FUENTE DE INTEGRACIÓN COMUNITARIO RURAL Y URBANA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	1	2.811.894	2.811.894
SHOW MÚSICA	1	4.000.000	4.000.000
EQUIPO DE SONIDO 8 LINEA ARIA 4 BANDA 5000WATTS CONSOLA Y MICROFONO PARA PRESENTACIONES ARTISTICA	1	9.000.000	9.000.000
CARPA 12*6 METROS	1	3.000.000	3.000.000
TABARRA 400 METROS PARA PRESENTACIONES	1	3.000.000	3.000.000
CRISPITAS DE COLORES SUAVES Y SALADAS 330 GRAMOS	1000	3.000	3.000.000

VALOR TOTAL: TRENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL (\$ 30.011.894) MCTE


 ANDRES FELIPE ARIAS NIT. 1.006.465.944

CUENTA COBRO NO. 0132

Tuluá, 28 DE DICIEMBRE de 2022

FUNDACION UNA MANO MÁS PARA VIVIR

NIT. 900.541.445-1

DEBE A:

MARIA LUISA GIL POSSO

NIT. 66.814.088-1

CL 10 9-52 BARRIO SAN VICENTE

POR CONCEPTO:

SERVICIO DE COMEDOR DISCRIMINADO ASI:

3000 ALMUERZO - 1 picada 200 gramos de carne de cerdo acompañado de papa, plátano y jugo en caja. VALOR UNITARIO 20.000 VALOR TOTAL 60.000.000
SESENTA MILLONES DE PESOS


 MARIA LUISA GIL POSSO NIT. 66.814.088-1

La falta del soporte del RUT, también impide verificar si la actividad que se refleje en cada uno de ellos, es coincidente con las actividades presuntamente desarrolladas para este contrato.

En relación con la cuenta de la señora María Luis Gil Posso, quien aparece como la encargada del Servicio de Comedor, tenemos que la certificación aportada no es el requisito señalado por norma, para ser exigible sino el seguimiento de un plan o programa de capacitación anual de obligatorio cumplimiento, documentos que, por supuesto no se anexan.

La norma especial en la materia es la Ley 9 de 1979, y fue el Ministerio de Salud y Protección Social, el encargado de regular los aspectos correspondientes a los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales o jurídicas que ejercen actividades de procesamiento, preparación o distribución de alimentos, entre otros, señala la Resolución 2674 de 2013, Título II Capítulo I, lo siguiente:

“CONDICIONES BÁSICAS DE HIGIENE EN LA FABRICACIÓN DE ALIMENTOS

Artículo 5. Buenas Prácticas de Manufactura. Las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos, se ceñirán a los principios de las Buenas Prácticas de Manufactura contempladas en la presente resolución. “

Más adelante, acota en cuanto al personal y su capacitación:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

“CAPÍTULO III

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

Artículo 11. Estado de salud. El personal manipulador de alimentos debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Contar con una certificación médica en el cual conste la aptitud o no para la manipulación de alimentos. La empresa debe tomar las medidas correspondientes para que al personal manipulador de alimentos se le practique **un reconocimiento médico, por lo menos una vez al año.**

2. Debe efectuarse un reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo motivada por una infección que pudiera dejar secuelas capaces de provocar contaminación de los alimentos que se manipulen. Dependiendo de la valoración efectuada por el médico, se deben realizar las pruebas de laboratorio clínico u otras que resulten necesarias, registrando las medidas correctivas y preventivas tomadas con el fin de mitigar la posible contaminación del alimento que pueda generarse por el estado de salud del personal manipulador.

3. En todos los casos, como resultado de la valoración médica se debe expedir un certificado en el cual conste la aptitud o no para la manipulación de alimentos.

4. La empresa debe garantizar el cumplimiento y seguimiento a los tratamientos ordenados por el médico. Una vez finalizado el tratamiento, el médico debe expedir un certificado en el cual conste la aptitud o no para la manipulación de alimentos.

5. La empresa es responsable de tomar las medidas necesarias para que no se permita contaminar los alimentos directa o indirectamente por una persona que se sepa o sospeche que padezca de una enfermedad susceptible de transmitirse por los alimentos, o que sea portadora de una enfermedad semejante, o que presente heridas infectadas, irritaciones cutáneas infectadas o diarrea. Todo manipulador de alimentos que represente un riesgo de este tipo debe comunicarlo a la empresa.

Artículo 12. Educación y capacitación. Todas las personas que realizan actividades de manipulación de alimentos deben tener formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos. Igualmente, deben estar capacitados para llevar a cabo las tareas que se les asignen o desempeñen, con el fin de que se encuentren en capacidad de adoptar las precauciones y medidas preventivas necesarias para evitar la contaminación o deterioro de los alimentos.

Las empresas deben tener un plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación y luego ser reforzado mediante charlas, cursos u otros medios efectivos de actualización. Dicho plan debe ser de por lo menos 10 horas anuales, sobre asuntos específicos de que trata la presente resolución. Esta capacitación estará bajo la responsabilidad de la

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

empresa y podrá ser efectuada por ésta, por personas naturales o jurídicas contratadas y por las autoridades sanitarias. Cuando el plan de capacitación se realice a través de personas naturales o jurídicas diferentes a la empresa, éstas deben demostrar su idoneidad técnica y científica y su formación y experiencia específica en las áreas de higiene de los alimentos, Buenas Prácticas de Manufactura y sistemas preventivos de aseguramiento de la inocuidad.

Artículo 13. Plan de capacitación. El plan de capacitación debe contener, al menos, los siguientes aspectos: Metodología, duración, docentes, cronograma y temas específicos a impartir. El enfoque, contenido y alcance de la capacitación impartida debe ser acorde con la empresa, el proceso tecnológico y tipo de establecimiento de que se trate. En todo caso, la empresa debe demostrar a través del desempeño de los operarios y la condición sanitaria del establecimiento la efectividad e impacto de la capacitación impartida.

Parágrafo 1. Para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas, se colocarán en sitios estratégicos avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de su observancia durante la manipulación de alimentos.

Parágrafo 2. El manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender y manejar el control de los puntos del proceso que están bajo su responsabilidad y la importancia de su vigilancia o monitoreo; además, debe conocer los límites del punto del proceso y las acciones correctivas a tomar cuando existan desviaciones en dichos límites. (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

En el marco comparativo de las normas en comento, es inocuo el contenido de lo aportado por el municipio, pues no se registra, soporte del seguimiento frente a las Buenas Prácticas de manufactura dentro del proceso contractual, demostrando el nulo seguimiento dentro del expediente contractual de esta delicada labor.

Adolece de asidero jurídico, que se minimice la trascendencia de los alimentos contratados y pagados sin los correspondientes controles, a la luz de las obligaciones que le corresponden al subcontratista encargado de la elaboración de los 3000 almuerzos, que - según el documento cuenta de cobro - realizó una sola persona, sin que se acreditara en modo alguno el cumplimiento de las disposiciones legales, transversales a este asunto, por la incidencia que podría implicar la contaminación cruzada o intoxicación masiva del personal que se pretendía atender con el contrato.

No se van a vaciar en este documento todas y cada una de las cuentas de cobro relacionadas en el archivo, por cuanto, como ya se informó las mismas carecen de las características mínimas que requiere cualquier empresa para proceder a su pago, pero sí es pertinente examinar las más relevantes:

A continuación, vemos una cuenta de cobro de persona natural, quien dice haber provisto más de 3800 juguetes, pero tampoco se observa el soporte del establecimiento de comercio o discriminación del valor de cada uno de los juguetes que, tratándose de una venta y no de una prestación del servicio, deberían estar discriminadas en valor por unidad y valor total, pero como vemos la cuenta se presenta generalizada, por un valor general o globalizado.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

También se observa el cobro del servicio de transporte, brindado presuntamente a los 16 miembros de logística que iban a ser contratados para llevarlos a 11 veredas y cuatro barrios, ida y regreso por 9 días, sin embargo, no se soportaron, ni las placas de los vehículos ni los contratos de transporte, personas beneficiarias, identificación por día y cualquier otra circunstancia que aportara claridad al presunto gasto realizado. En cambio, al superponer esa cuenta de cobro con la de la Señora Castrillón torna incoherente el gasto, pues en la cuenta de ésta se dice que la señora realizó 16 turnos, lo cual no fue el requerimiento municipal.

Se reafirma, que no hay soporte ni siquiera en fotografías del transporte que se cobra en tales términos, como veremos más adelante solo hubo 1 persona en logística, lo que torna aún más incongruente que se cobraron \$480 mil pesos más que lo estipulado en la oferta.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">CUENTA DE COBRO No. 0795</p> <p style="text-align: center;">No responsable de IVA</p> </div> <p>Oril, 22 de diciembre 2022</p> <p style="text-align: center;">FUNDACION UNA MANO MÁS PARA VIVIR</p> <p style="text-align: center;">NIT. 900.541.445-1</p> <p style="text-align: center;">DEBE A:</p> <p style="text-align: center;">KELLY JHOANA PERDOMO BUITRAGO</p> <p style="text-align: center;">NIT. 9.538.800.542</p> <p style="text-align: center;">CARRERA 25 A # 45 - 30</p> <p style="text-align: center;">CEL. 3054230749</p> <p style="text-align: center;">POR CONCEPTO: JUGUETERIA</p> <p>1500 JUGUETAS PARA NIÑOS ENTRE LOS 0 Y 3 AÑOS POR VALOR DE \$5.000 CADA UNO</p> <p>1500 CARROS PARA NIÑOS ENTRE LOS 0 Y 3 AÑOS POR VALOR DE \$5.000 CADA UNO</p> <p>VALOR TOTAL: CINCUENTA Y SIETE MILLORES DE PESOS (\$ 57.000.000)</p> <p>N/DTE.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  KELLY JHOANA PERDOMO BUITRAGO CC.9.538.800.542 </div>	<p>Cuenta cobro No. 201</p> <p>Tuluá, 18 de diciembre de 2022.</p> <p style="text-align: center;">FUNDACION UNA MANO MÁS PARA VIVIR</p> <p style="text-align: center;">NIT. 900.541.445-1</p> <p style="text-align: center;">DEBE A:</p> <p style="text-align: center;">WILLIAM ALZATE GOMEZ</p> <p style="text-align: center;">NIT. 16.360.540</p> <p style="text-align: center;">MZ M CASA 11 PARAISO</p> <p style="text-align: center;">CEL. 3113121258</p> <p>POR CONCEPTO: servicio de transporte de logística requerido durante 9 días de las novenas de aguinaldos, (11 veredas y 4 barrios) ida y regreso</p> <p>VALOR TOTAL: TRES MILLONES DE PESOS</p> <p>(\$ 3.000.000) MCTE.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  WILLIAM ALZATE GOMEZ CC. 16.360.540 </div>
---	--

Para finalizar con el estudio del material allegado en la contradicción hemos de decir, que solo se referencia una cuenta de cobro a nombre de la señora Alicia Castrillón como **personal de logística**, cuando lo pactado entre las partes era la contratación de 16 personas (unidad de medida que se verá más adelante) para que se atendieran las necesidades de la comunidad durante el contrato, no de una que hiciera 16 turnos, porque entonces no se requeriría un transporte tan costoso como el que se cobró.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

ALMUERZO - 1 PICADA 200 GRAMOS DE CARNE DE CERDO ACOMPAÑADO DE PAPA, PLATANO Y JUGO EN CAJA.	MARIA LUISA GIL CUENTA DE COBRO 132	60.000.000	120.800.000
JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS ENTRE LOS 0 Y 9 AÑOS	KELLY JOHANNA PERDOMO CUENTA D COBRO 075	57.000.000	63.800.000
SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOGISTICA REQUERIDO DURANTE 9 DIAS DE LAS NOVENAS DE AGUINALDOS.(11 VEREDAS Y 4 BARRIOS) IDA Y REGRESO	WILLIAM ALZATE CUENTA DE COBRO 201	2.520.000	61.280.000
REFRIGERIOS PARA NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DE LAS NOVENAS DE AGUINALDO - 1 GALLETA NAVIDENA Y 1 JUGO EN CAJA	MARIA LUISA GIL CUENTA DE COBRO 138	12.000.000	49.280.000
PERSONAL DE LOGISTICA, APOYO Y CONTROL DURANTE LAS ACTIVIDADES	ALICIA CASTRILLON PATIÑO CUENTA 2315	1.280.000	48.000.000
PRESENTACION ARTISTICA JHON JAIRO PEREZ DON EBRIIO	VALNCIA CUENTA DE COBRO 523	32.000.000	16.000.000
10 JUEGOS DE PALINES, PALAS, CARETAS	LUIS EDILSON FERNANDEZ CUENTA DE COBRO 389	10.000.000	6.000.000
2 LECHONES		2.000.000	4.000.000
HIDRATACION 2,000 BOTELLAS DE AGUA	MARIA FERNANDA ARANGO SILVA CUENTA COBRO 514	4.000.000	0

Tal y como se aprecia en los estudios previos, éstos fueron los requerimientos realizados por el municipio al contratista:

ACTIVIDAD Y DESCRPCION	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
ANIMACIÓN	ANIMACIÓN CON DJ EN TARIMA EVENTO DE INTEGRACION-NAVIDAD MAGICA COMUNIDAD RURAL Y URBANA 18 DE DICIEMBRE DE 2022	UND	1
PRESENTACIÓN ARTÍSTICA	PRESENTACION ARTISTICA EN TARIMA INTEGRACION NAVIDAD MAGICA COMUNIDAD RURAL Y URBANA 18 DE DICIEMBRE DE 2022	UND	1
SHOW NIÑOS	SHOW NIÑOS EN TARIMA INTEGRACION NAVIDAD MAGICA COMUNIDAD RURAL Y URBANA 18 DE DICIEMBRE DE 2022	UND	1
EQUIPO DE SONIDO	8 LINEA ARR4J 4 BAJOD 10.000WARRS CONSOLA Y MICROFONO PARA PRESENTACIONES ARTISTICAS, INTEGRACION NAVIDAD MAGICA COMUNIDAD RURAL Y URBANA 18 DE DICIEMBRE DE 2022	UND	1
TARIMA	TARIMA 6X6 METROS PARA PRESENTACIONES ARTISTICAS, INTEGRACION NAVIDAD MAGICA COMUNIDAD RURAL Y URBANA 18 DE DICIEMBRE DE 2022	UND	1
CARPA	CARPA 12*6 METROS PARA PRESENTACIONES ARTISTICAS, INTEGRACION NAVIDAD MAGICA COMUNIDAD RURAL Y URBANA 18 DE DICIEMBRE DE 2022	UND	1
HIDRATACION	1 BOTELLA DE AGUA DE 600 MILILITROS	UND	2000
CRISPETAS	CRISPETAS DE COLORES DULCES Y SALADAS 120 GRAMOS	UND	2000
ALMUERZO	ALMUERZO - 1 PICADA 200 GRAMOS DE CARNE DE CERDO ACOMPAÑADO DE PAPA, PLATANO Y JUGO EN CAJA.	UND	3000
JUGUETES	ENTREGA DE JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS ENTRE LOS 0 Y 9 AÑOS	UND	3800
INCENTIVOS	INCENTIVOS PARA LA POBLACION RURAL	UND	10
PREMIACION	PREMIACION CONCURSO DE PESEBRES EN EL SECTOR RURAL Y URBANO	UND	2
TRANSPORTE PERSONAL DE LOGÍSTICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOGISTICA REQUERIDO DURANTE 9 DIAS DE LAS NOVENAS DE AGUINALDOS (11 VEREDAS Y 4 BARRIOS) IDA Y REGRESO	UND	14
ANIMACIÓN	ANIMACIÓN CON DJ EN TARIMA PRINCIPAL FIESTAS DE INTEGRACION CAMPESINA VEREDA LA GAVIOTA	UND	1
PERSONAL DE LOGISTICA	PERSONAL LOGISTICA -APOYO Y CONTROL DURANTE LAS ACTIVIDADES	PERSONAS	16
REFRIGERIOS	REFRIGERIOS PARA NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DE LAS NOVENAS DE AGUINALDO - 1 GALLETA NAVIDENA Y 1 JUGO EN CAJA	UND	3000

Los ítems determinados como 10 juegos de palines serían presuntamente el incentivo para la población rural, pero ¿cómo se determinó que eran esos los incentivos rurales para

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

navidad?, cuando en el expediente no aparece nada al respecto y son los bienes que usualmente entrega el municipio a la población rural como apoyo.

De otra parte, los 2 lechones no se encontraban dentro de los ítems previstos en el contrato, representando un rubro no identificado en él, así como la alteración de los requerimientos pactados que se redujera a 1 el personal de logística requerido, sin que haya justificación jurídica de ello en el contrato.

Ahora bien el objeto de debate es que según el municipio "...Frente a las normas contractuales, no podríamos ampararnos en el principio de analogía, pues los aportes entregados a la convenida no son pagos ni anticipo, sino aportes en cumplimiento de las obligaciones contraídas, al no tratarse de anticipo sino de entrega de aportes, no podríamos hablar de amortizaciones.", para entrar a validar o no esta hipótesis, traemos la postura de la Corte Constitucional, frente a la interpretación por analogía:

En sentencia C- 083 de 1995, señaló la Corte Constitucional, en relación con la analogía manifestó lo siguiente: "Es claro, para la Corte, que bajo el imperio de la Constitución de 1886 se consagraban en Colombia, como fuentes formales de derecho obligatorias, dos: la legislación y la costumbre. Tal consagración se derivaba de los artículos 8° y 13 de la ley 153 de 1887, respectivamente. Pero el primero de los citados, además de la ley "exactamente aplicable al caso controvertido", enunciaba la analogía ("aquellas que regulen casos o materias semejantes"), la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho. Cabe preguntar: ¿tenían las tres últimas fuerzas obligatoria? ¿La tienen aún bajo el imperio de la nueva Carta?. Para absolver tal cuestión es preciso asignar un valor a cada una de esas expresiones.

a) La analogía. Es la aplicación de la ley a situaciones no contempladas expresamente en ella, pero que sólo difieren de las que sí lo están en aspectos jurídicamente irrelevantes, es decir, ajenos a aquéllos que explican y fundamentan la ratio juris o razón de ser de la norma. La consagración positiva de la analogía halla su justificación en el principio de igualdad, base a la vez de la justicia, pues, en función de ésta, los seres y las situaciones iguales deben recibir un tratamiento igual. Discernir los aspectos relevantes de los irrelevantes implica, desde luego, un esfuerzo interpretativo que en nada difiere del que ordinariamente tiene que realizar el juez para determinar si un caso particular es o no subsumible en una norma de carácter general.

Aunque el razonamiento se cumple, en apariencia, de lo particular a lo particular, es inevitable la referencia previa a lo general, pues los casos análogos tienen en común, justamente, el dejarse reducir a la norma que los comprende a ambos, explícitamente a uno de ellos y de modo implícito al otro. En la analogía se brinda al juez un fundamento para crear derecho, pero ese fundamento se identifica con la ley misma que debe aplicar. El juez que apela al razonamiento per analogiam no hace, pues, otra cosa que decidir que en una determinada situación, es el caso de aplicar la ley.

Por ende, la analogía no constituye una fuente autónoma, diferente de la legislación. El juez que acude a ella no hace nada distinto de atenerse al imperio de la ley. Su consagración en la disposición que se examina resulta, pues, a tono con el artículo 230 de la Constitución.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

b. **La doctrina constitucional. Las normas de la Constitución política, y ésta no es una característica privativa de ellas, tienen una vocación irrevocable hacia la individualización, tal como lo ha subrayado Kelsen[4] al tratar del ordenamiento jurídico. De ordinario pasan por una fase previa consistente en su desarrollo legal. Pero no todas alcanzan dicho desarrollo, bien porque no lo requieren, bien porque, requiriéndolo, el legislador lo omite. Pero tal omisión no desvirtúa su carácter normativo, si ya lo tienen. Pueden, entonces, ser aplicadas a situaciones específicas subsumibles en ellas, que no están explícitamente contempladas en la ley.**

Pero si la individualización de las normas legales, dada su generalidad (que a menudo deviene en ambigüedad), aparece problemática y generadora de inseguridad jurídica, más problemática e incierta resulta aún la actuación directa de las normas constitucionales a los casos particulares, por concurrir en ellas, superlativamente, las mismas notas distintivas advertidas en la ley.

Parece razonable, entonces, que al señalar a las normas constitucionales como fundamento de los fallos, a falta de ley, se agregue una cualificación adicional, consistente en que el sentido de dichas normas, su alcance y pertinencia, hayan sido fijados por quien haga las veces de intérprete autorizado de la Constitución. Que, de ese modo, la aplicación de las normas superiores esté tamizada por la elaboración doctrinaria que de ellas haya hecho su intérprete supremo. (art. 241 C.P.)

Pero como la Constitución es derecho legislado por excelencia, quien aplica la Constitución aplica la ley, en su expresión más primigenia y genuina. Es preciso aclarar que no es la jurisprudencia la que aquí se consagra como fuente obligatoria. A ella alude claramente otra disposición, el artículo 4° de la ley 69 de 1896, para erigirla en pauta meramente optativa para ilustrar, en ciertos casos, el criterio de los jueces. Así dice el mencionado artículo en su parte pertinente:

"Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos ..." (Subraya de la Sala).

Es claro entonces que la norma transcrita resulta armónica con lo dispuesto en el artículo 230 de la Carta del 91.

Así mismo, conviene precisar que no hay contradicción entre la tesis que aquí se afirma y la sentencia C-131/93, que declaró inexecutable el artículo 23 del Decreto legislativo 2067 del 91 en el cual se ordenaba tener "como criterio auxiliar obligatorio" "la doctrina constitucional enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional", mandato, ese sí, claramente violatorio del artículo 230 Superior. **Lo que hace, en cambio, el artículo 8° que se examina -valga la insistencia- es referir a las normas constitucionales, como una modalidad del derecho legislado, para que sirvan como fundamento inmediato de la sentencia, cuando el caso sub judice no está previsto en la ley.** La cualificación adicional de que si las normas que van a aplicarse han sido interpretadas por la Corte Constitucional, de ese modo deben aplicarse, constituye, se repite, una razonable exigencia en guarda de la seguridad jurídica.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Es necesario distinguir la función integradora que cumple la doctrina constitucional, en virtud del artículo 8°, cuya constitucionalidad se examina, de la función interpretativa que le atribuye el artículo 4° de la misma ley, al disponer:

"Los principios del Derecho natural y las reglas de la jurisprudencia servirán para ilustrar la Constitución en casos dudosos. La doctrina constitucional es, a su vez, norma para interpretar las leyes" (Subraya la Corte).

La disposición transcrita corrobora, además, la distinción que atrás queda hecha entre doctrina constitucional y jurisprudencia. Es apenas lógico que si el juez tiene dudas sobre la constitucionalidad de la ley, el criterio del intérprete supremo de la Carta deba guiar su decisión. Es claro eso sí que, salvo las decisiones que hacen tránsito a la cosa juzgada, las interpretaciones de la Corte constituyen para el fallador valiosa pauta auxiliar, pero en modo alguno criterio obligatorio, en armonía con lo establecido por el artículo 230 Superior.

Lo anterior encuentra claro apoyo, además, en el artículo 5° de la misma ley (153 de 1887), cuyo texto reza:

"Dentro de la equidad natural y la doctrina constitucional, la crítica y la hermenéutica servirán para fijar el pensamiento del legislador y aclarar o armonizar disposiciones legales oscuras o incongruentes" (Subraya la Corte).

La disposición destaca, nítidamente, la función que está llamada a cumplir la doctrina constitucional en el campo interpretativo. Es un instrumento orientador, mas no obligatorio, como sí ocurre cuando se emplea como elemento integrador: porque en este caso, se reitera, es la propia Constitución -ley suprema-, la que se aplica.

c. Las reglas generales de derecho. Se dijo un poco más arriba que cuando el juez razona por analogía, aplica la ley a una situación no contemplada explícitamente en ella, pero esencialmente igual, para los efectos de su regulación jurídica, a la que sí lo está. Esta modalidad se conoce en doctrina como analogía legis, y se la contrasta con la analogía juris en la cual, a partir de diversas disposiciones del ordenamiento, se extraen los principios generales que las informan, por una suerte de inducción, y se aplican a casos o situaciones no previstas de modo expreso en una norma determinada..." (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

De otra parte, para complementar las conclusiones, tenemos la posición entregada por el Consejo de Estado, frente al tema del Anticipo, que ofrece una distinción entre el uno y el otro, que hemos de tener en cuenta. Inicialmente, refiriéndose al anticipo, tenemos que el Consejo de Estado- Sección Tercera, Sentencia del 13 de septiembre de 1999, Consejero Ponente Ricardo Hoyos Duque, manifestó:

"se han considerado públicos u oficiales los recursos y de la exclusiva propiedad del ente estatal constituyéndose en un adelanto, avance o anticipo del precio no causado para la iniciación del objeto contractual, los trabajos o servicios, la atención de los gastos preliminares y su aplicación a los fines del contrato, que sólo se incorporan al patrimonio [...] del contratista e implican un pago en la medida de su amortización."

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

No puede perderse de vista que los dineros que se le entregan al contratista por dicho concepto son oficiales o públicos. El pago de dicha suma lo era y lo sigue siendo un adelanto del precio que aún no se ha causado, que la entidad pública contratante hace al contratista para que a la iniciación de los trabajos disponga de unos fondos que le permitan proveerse de materiales y atender los primeros gastos del contrato, tales como los salarios de los trabajadores que disponga para la obra. No es otra la razón por la cual adicionalmente se exige que sea garantizada, que se presente un plan para su utilización y que se amortice durante la ejecución del contrato en cada acta parcial de cobro.
[...]

en el pago anticipado, se ha señalado que es un pago del precio y, por tanto, se incorpora al patrimonio del contratista y es de su propiedad .”

Posición reiterada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 10 de noviembre de 2000, en donde se establece diferencia entre Anticipo y pago anticipado:

De una parte, **el anticipo**, diferente a pago anticipado, **son dineros de la Administración, administrados por el contratista.** Tanto es así que el contratista tiene que presentar una garantía única, en la cual se ampara entre otros el manejo del anticipo y **dicho anticipo lo va amortizando el contratista, por descuentos que le hace la Administración a las sumas que ésta misma le debe pagar.**

También señaló, el Consejo de Estado en sentencia del 22 de junio de 2001, en cuanto a la naturaleza del anticipo, lo siguiente:

En la práctica contractual administrativa con fundamento en la ley, lo usual es que la entidad pública contratante le entregue al contratista un porcentaje del valor del contrato, a título de anticipo, el cual habrá de destinarse al cubrimiento de los costos iniciales en que debe incurrir el contratista para la iniciación de la ejecución del objeto contratado. De ahí que se sostenga que es la forma de facilitarle al contratista la financiación de los bienes, servicios u obras que se le han encargado con ocasión de la celebración del contrato. Se convierte así este pago en un factor económico determinante para impulsar la ejecución del contrato. Si el anticipo se entrega al contratista antes o simultáneamente con la iniciación del contrato, esto es, cuando aún el contratista no ha prestado el servicio, ejecutado la obra o entregado los bienes y precisamente espera dicha suma para iniciarlo y la fecha de ese pago marca la pauta para el cómputo del término del contrato, el pago de la suma de dinero que las partes convengan a ese título se hace en calidad de préstamo. Esto significa que las sumas entregadas como anticipo son de la entidad pública y esa es la razón por la cual se solicita al contratista que garantice su inversión y manejo y se amortice con los pagos posteriores que se facturen durante la ejecución del contrato.

Se puede colegir de las sentencias traídas a estudio que los dineros del anticipo, son valores que se cancelan para impulsar el contrato y que no son de propiedad del contratista, como quiera que era una parte del valor del convenio que **no** se había causado.

De otra parte, el mismo Manual de Contratación manifiesta en relación al anticipo, señalando que en los estudios previos se debe prevenir lo siguiente:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

2.1.1.6.5. Forma de pago

Deben precisarse la cantidad de pagos, la periodicidad (pago único, pagos parciales, mensual, bimensual, etc.) Los porcentajes y/o valores correspondientes a cada pago, si hay anticipo o pago anticipado, además de los soportes que el contratista debe presentar para efectos del pago.



Frente al anticipo y el pago anticipado se tendrá en cuenta que:

- Acorde con el Estatuto de Contratación y siempre y cuando la Tesorería cuente con los recursos líquidos disponibles, en los contratos o convenios que celebre el Municipio de Calima El Darién, se podrá pactar la entrega de anticipos y de pagos anticipados y su monto no podrá exceder el 50% del valor del respectivo contrato, de conformidad con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Cosa que tampoco se cumplió, pues no existieron ni amortización ni plan de inversión en la materia.

Acorde a la jurisprudencia transcrita, vamos a hacer revisión de lo manifestado por el sujeto de control en aras de revisar si es o no aplicable la analogía al tema en revisión, aunque – como ya se indicó- el manual de contratación ya rebela lo pertinente:

- 1.) La analogía legis, como mecanismo interpretativo, está validado por la jurisprudencia en casos en donde la situación no está contemplada en la ley (anticipo sin esa denominación en convenios administrativos). No obstante, se cumplen dos criterios propios del anticipo, a saber: a.) Un pago que se hace sin que haya habido actuación alguna por parte de la contratista distinta a la suscripción del acta de inicio; b.) El pago de suma de dinero correspondió al 50% del valor correspondiente a la inversión del municipio.
- 2.) El pago realizado se entregó íntegramente al contratista, sin que se sustenten dentro de los soportes traídos en la contradicción la inversión del dinero entregado, ni la que correspondía a la ESAL, por cuenta de su “aporte”, que fue el que justificó la modalidad de esta contratación, la falta de pólizas y la escogencia del contratista.
- 3.) Como quiera que no se allegaron factura, sino solamente cuentas de cobro con sendas deficiencias en su estructura y sin ningún soporte de lo ordinariamente establecido en cualquier transacción comercial (Rut, identificación de vehículos, soporte de buenas prácticas de manufactura, entre otros), no hay coherencia con la transparencia contractual que pretende demostrarse.

Retomando el tema de la Analogía legis, tenemos que se trató para el caso que nos ocupa de un dinero que se desembolsó en favor de un tercero, sin que realizara actividad alguna que sustentara ese pago, sin evidencias de la inversión del aporte del municipio antes de la finalización del contrato.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Así las cosas, tenemos que las circunstancias del convenio se presentan - en relación con este primer pago- igual a un anticipo, independientemente del nombre asignado a las de cualquier contrato que tenga anticipo, con unos agravantes, no se pensó en salvaguardar el dinero que se entregaba al contratista sin que se lo hubiera ganado y sin que se sustentara dentro del contrato, cuales fueron los controles para la entrega de los 3000 almuerzos o garantizar el aspecto sanitario de su elaboración, cuáles eran los juguetes que iban a ser entregados, descripción mínima respecto del rango etario, listados de los recorridos, desde y hasta durante los 9 días de la novena, y demás aspectos que no se encuentran debidamente soportados en el contrato, en sus anexos o en las pruebas traídas en la contradicción.

Dado lo anterior, debidamente analizado, y las inconsistencias encontradas en los soportes entregados en contradicción que siguen sin ser un sustento del anticipo, se sostendrá la observación y pasará al informe como un hallazgo de idénticas connotaciones, al cual se hará un ajuste literal, acorde a las directrices del Comité de Calidad:

“Convenio de Asociación No. 310-13- 08- 013- 2022

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la realización de los diferentes eventos culturales y artísticos dentro del marco de la celebración de la Navidad Mágica

Valor: \$210.300.394 Aporte del Municipio \$147.568.326

Plazo: Hasta 26 de diciembre de 2022

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Etapas Precontractual: En los estudios previos se hacen especificaciones del objeto en 16 ítems entre los que se encuentran varias actividades, entre las que se encuentran 3000 almuerzos, 3800 juguetes Niños/niñas de 0 -9 años; 10 incentivos población rural; 3000 refrigerios niños/niñas participantes novenas (1 galleta navideña y jugo caja) En ningún aparte se hacen requerimientos mínimos en relación con las Buenas Prácticas de Manufacturas, tampoco se establece el mecanismo de control para establecer que en cada uno de los almuerzos van a estar los 200 gr de picada que se requirieron, o las condiciones de transporte de los alimentos. Estudios previos (folios 10 - 24), aunque en los estudios no se establece anticipo propiamente, se determinó que el primer desembolso por valor del 50% del aporte del municipio se haría y el saldo al término de la ejecución del contrato, sin embargo, por tratarse de “convenio de asociación” no se determinaron garantías para amparar el anticipo entregado.

Los riesgos asociados a este contrato son los mismos de cualquier otro contrato. Sin tener en cuenta el riesgo inherente a la entrega de alimentos que se manipulan por el contratista.

La invitación está a folios 35- 39 sin firma del alcalde; aunque se determina que aportará la ESAL \$73.784.163 al costo del convenio no se especifica en qué elementos se encuentra representada la participación, así como tampoco se establecieron los mecanismos para comprobar el aporte mismo.

No se encuentra en el expediente el soporte de ser una entidad de reconocida idoneidad, ni su registro en el Secop.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Etapla contractual: Se observa el contrato suscrito a folios 81 - 88 del 13-12-2022, en la cláusula sexta se determina el pago del 50% de los aportes del municipio con el acta de inicio, sin que se exijan garantías que respalden el anticipo que se desembolsa, así no se le dé tal denominación. Se designa como supervisora a la Asesora de fomento al Turismo. El Acta de inicio se suscribe el 13 - 12- 2022. Se observa publicación en el Secop I, extemporánea del 19 -12- 2022 (folios 101 - 102).

Jurisprudencialmente se ha establecido (Consejo de Estado, Sala contencioso Administrativa, sentencia 22 de junio de 2001, consejero Ponente Ricardo Hoyos Duque) que los dineros de anticipo (independientemente del nombre que se le asigne por las partes contratantes), son de propiedad de la entidad estatal, el mismo debió tener los soportes del gasto e inversión correspondientes, previo al desembolso final del valor del contrato. La falta de amortización de tales rubros con documentos y soportes al interior del expediente (Contratos, facturas, bienes adquiridos), deriva en el detrimento por el valor del anticipo entregado.

Tampoco se evidencian en la trazabilidad del expediente, los pagos de las 16 personas requeridas para logística, en contradicción se aporta 1 persona que según los soportes realizó 16 turnos, no siendo ello lo pactado.

No hay soporte de los contratos para entrega de agua, refrigerios y almuerzos en las cantidades y formas determinadas, pues las fotografías por sí solas no dan soporte de la cantidad de entregas determinadas y como los listados no determinan si los beneficiarios que suscribían se les entregaban regalos, almuerzos, refrigerios o qué actividad, no pueden servir *per se* de soporte a todos los ítems contratados.

A partir del folio 105 se encuentra la solicitud de pago del 50% del valor del aporte del municipio al contrato, misma que señala unos soportes anexos, que no se evidencian. En contradicción, entregan dos cuentas de cobro por \$90 millones aproximadamente, sin soportes del Rut de los contratistas, contratos, pagos de SSI, ni Matrícula mercantil o certificado de existencia y representación que den cuenta de la actividad contratada.

Fuente de criterio y criterio

Ley 594 de 2000, artículos 1 a 4, 11 a 17; Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 13, 23 y 24, Ley 1474 de 2011, artículos 82 a 84 y 91; Constitución Nacional, artículo 209; Contrato en sus componentes pre y contractual (estudios previos, propuesta y minuta); manual de contratación de la entidad; Decreto 092 de 2017, artículos 1 -3, 7, 8 y 9.

Causa

Planeación antieconómica, falencias en el seguimiento de las actividades por parte de la supervisión.

Efecto

Pérdida del recurso e inversión del erario público sin las debidas garantías, generando un presunto detrimento por valor de \$73.784.163.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Los hechos descritos constituyen un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y Fiscal, por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39; Ley 610 de 2000, artículos 5 y 6.”

13. Observación administrativa con presunta Incidencia disciplinaria, fiscal y penal – Etapas Precontractual - Regulación de honorarios

Contrato Nro. 209 de 2019.

Objeto: Prestación servicios profesionales a cuota litis para conciliación y acuerdo de sentencias a favor de entidad privada y en contra del Municipio de Calima Darién

Valor: \$1.000.000 o 4% de cuota litis.

Plazo: un mes.

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Etapas Precontractual: Se observan errores de fondo en la planeación, pues contra expresa prohibición jurisprudencial, se proyectó una contratación desconociendo el principio de conmutatividad y las reglas de su aplicación para el caso concreto. Fundando dentro de los estudios previos la actuación en torno a un “análisis financiero” que no es tal, según el cual, se debían conciliar dos sentencias en contra del municipio (realmente había 4); sin determinar con qué análisis económico se estableció que el porcentaje del 4% como honorarios en caso de éxito, era equitativo para los intereses del municipio. No se hizo alusión a las circunstancias de cada uno de los fallos, y se estableció como exitosa la gestión que implicara el 40% de las sumas adeudadas

También se estimó que en caso de que no hubiera éxito, el valor del contrato sería de \$1 millón de pesos.

La vulneración al principio de conmutatividad, al no determinarse con claridad por qué se estableció el porcentaje de cuota litis, aunado a la falta de controles sobre el estado real de las obligaciones a transarse, generan un contrato sin el lleno de los requisitos legales.

Etapas Contractual: El contrato se encuentra suscrito y visible a folios 45- 55, mismo que no se rindió en la plataforma de SECOP I.

En la cláusula tercera del contrato, se estipula:

Conciliar la sentencia del 26 de marzo de 2010

Conciliar la sentencia Nro. 138 de septiembre de 2018

El acta de inicio se suscribió el 01-08-2019, mismo día en que se firmó el contrato. El valor estipulado por el abogado, en su informe Estudio sentencias judiciales para propuesta de pago manifiesta “el valor del total liquidado en las sentencias es de 8.382.383.418, de esta deuda según el informe se pagará, la suma de \$3.400.715.364 a Comfandi, generando un

valor de éxito de 4.981.668.054 donde se le aplicaría el 4% de cuota de éxito, dando como resultado a pagar la suma \$199.266.722.

Se observan a folios 58 – 103, los soportes de la actuación realizada por el contratista, en especial se observa la transacción de fecha agosto 23 de 2019, visible a folios 93 a 100, en su cláusula segunda, se destaca que los rubros cancelados corresponden a la suma de \$8.382.383.418. Las sumas correspondientes a las dos sentencias referidas en los estudios previos ascienden a \$3.778.673.581, entre las cuales se encuentra una que corresponde a una entidad distinta del municipio, y que se incluyó al momento de la transacción. Por tanto, no se cumplieron los parámetros de los estudios previos, consistentes en:

3. Pago inferior al 40% de las sumas referidas en los estudios de los \$4.280 millones a cancelar
4. Lograr que no se impactara el marco fiscal del mediano plazo del municipio, sin embargo, se vio afectado.

Como el contrato estipuló una suma máxima de \$150.000.000, esta se canceló según comprobante de 0001160 del 30 de agosto del 2019. Con fundamento en la literalidad de la transacción, se evidencia que no se generó cuota de éxito ya que el valor pactado en el contrato, es el valor de las sentencias que presuntamente ascendían a \$8.382.383.418.

Fuente de Criterio y criterio

Ley 594 de 2000, artículos 1 a 4, 11 a 17; Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 13, 23 y 24, Ley 1386 de 2010; en su artículo 1º, Ley 1474 de 2011, artículos 82 a 84; Constitución Nacional, artículo 209; Contrato en sus componentes pre y contractual (estudios previos, propuesta y minuta Clausula novena valor y forma de pago); manual de contratación de la entidad. Sentencia Consejo de Estado, Sección III Subsección C; Radicación número: 76001-23-31-000-2003-01754-01(35268). M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa del 06- 05- 2015.

Causa

Pago de lo no debido, y falencias de la supervisión

Efecto

Pérdida de recursos y un presunto detrimento patrimonial por \$150.000.000.

Las conductas descritas generan una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal; al tenor de lo dispuesto en la Ley 734 de 2002, numeral 1 de los artículos 34 y 35; Ley 1952 de 2019, numeral 1 de los artículos 38 y 39; Ley 610 de 2000; artículo 5 y 6 y Ley 599 de 2000, artículos 397 y 249.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

OBSERVACIÓN 13: observación administrativa con presunta Incidencia disciplinaria, fiscal y penal – Etapa Precontractual - Regulación de honorarios.

Revisado el contrato se encontró que la deuda inicial de las sentencias estaba por un valor de \$11.463.978.681, y de acuerdo a la gestión realizada por el profesional en derecho desarrolló una negociación en \$8.382.383.418, para ser cancelado en el término de 14 años bajo la modalidad de compensación de tributos municipales en la jurisdicción del municipio, como gravámenes futuros, industria y comercio, aviso y tableros, predial, contribuciones, tasas, sobretasas, valorizaciones, licencias ambientales, urbanísticas y demás que serán compensados con el rubro total debido y/o adeudado por el Municipio de Calima El Darién a COMFANDI.

Se presentó el contrato de transacción al Juzgado Segundo Administrativo Oral de Guadalajara de Buga (V), cuya radicación es 76111333300220150012100, a través del AUTO INTERLOCUTORIO No. 565 El 19 de noviembre de 2020, el despacho judicial negó la solicitud de terminación del proceso por transacción, y por AUTO DE SUSTANCIACIÓN No. 243 concedió en el efecto suspensivo y ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte ejecutante, en contra del Auto Interlocutorio No. 565 del 19 de noviembre de 2020.

La Administración Municipal actual se encuentra a la espera de la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, sobre el contrato de transacción presentado objeto del resultado de la gestión del abogado JOHN SEBASTIAN MEJÍA TRIVIÑO.

El contrato fue suscrito en la vigencia 2019, se desconocen las causas por las cuales no se publicó en el SECOP.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Antes de realizar un análisis de las premisas de la defensa, se establece que, se trajo un único documento probatorio, que es el contrato mismo, como quiera que ha sido suficientemente revisado, se procederá a decantar los postulados de la defensa.

Alude el municipio, que “...la deuda inicial de las sentencias estaba por un valor de \$11.463.978.681, y de acuerdo a la gestión realizada por el profesional en derecho desarrolló una negociación en \$8.382.383.418, para ser cancelado en el término de 14 años bajo la modalidad de compensación de tributos municipales en la jurisdicción del municipio”. Esto es una falacia, como quiera que, según el análisis de sector del contrato mismo, la situación de las 2 sentencias de COMFANDI contra el municipio (Sentencias del 26 de marzo de 2010 y 138 de septiembre de 2018), era la siguiente:

(Extraído del contrato)

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

El Municipio de Calima el Darién perdió la demanda instaurada por COMFANDI, debiendo pagar una suma superior a **los CUATRO MIL MILLONES DOSCENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS (\$4.235.097.134)**, sin la indexación correspondiente.

Representados en dos Sentencias Judiciales con cobro ejecutivo listo para embargo de las cuentas que no estén marcadas por el banco como inembargable estas dos sentencias con interés moratorio y corrientes son:

CONCEPTO	CAPITAL INICIAL	INT/CTE	INT/MORA	TOTAL
Sentencia 26 Marzo 2010	590.619.555	806.016.592	205.521.410	1.602.157.557
Sentencia 138 de Septiembre 2018	709.808.158	1.902.606.631	75.014.011	2.687.428.800
TOTAL DEUDA CON INTERESES	1.300.427.713	2.708.623.223	280.535.421	4.289.586.357

Sentencia 1= Sentencia 26 de marzo de 2010, que en la parte resolutive declara la nulidad de las Resoluciones 221-222-223-224-225 y 226 del 26 de diciembre de 2005 y Resoluciones 116-117-118-119-120 y 121 del 17 de marzo de 2006, proferidas por la Tesorería Municipal de Calima el Darién. Condena al municipio a reintegrar a COMFANDI las sumas de dinero indexadas y los intereses de ley generados.

Sentencia 2= Sentencia 138 del 27 de septiembre de 2018, declara la nulidad de las Resolución ADC/03 No.098 del 24 de junio de 2003 la 138 del IMPREDE, condena a la devolución de dineros efectos de estas resoluciones indexados y con los interese de ley.

La indexación está establecida en el artículo 178 del código Contencioso Administrativo, bajo la fórmula:

$$R = R_h \times \text{Índice final} / \text{Índice inicial}$$

Así que la aseveración sobre que el monto de la obligación a cargo del municipio por las sentencias referidas, era superior a 11 mil millones, es falsa, como se observa claramente, se trata de dos sentencias cuyo monto no asciende al rubro referido.

El monto para el reconocimiento de la comisión de éxito o cuota litis, estaba sometido a una obligación condicional, como a continuación se observa:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

*Para lo anterior, la Contraloría General de la República ha conceptuado que "la viabilidad de la cuota Litis como forma de pago de honorarios por parte de la administración pública requiere de una clara justificación en donde se denote que esta **forma beneficia a la administración, que es la forma económicamente más adecuada de gestionar los recursos del Estado representados jurídicamente en acciones procesales de un contenido patrimonial a su favor.** Corresponde en este orden al gestor fiscal demostrar que esta forma de honorarios es la que más conviene a la administración pública dada la situación concreta en que se percibe el servicio jurídico a realizar" (Concepto Contraloría General de la República 80112-EE38755 del 13 de julio de 2009.) subrayado fuera de texto.*

Por lo anterior se pretende que el profesional establezca mediante la modalidad de cuota Litis con un porcentaje de ganancial a su favor del 4% por la diferencia que deje de cancelar el ente territorial a la entidad demandante en este caso a COMFANDI, esto si logra que la entidad deje de cancelar menos del 50% del valor de la Sentencia. De lo contrario solo se le cancelará el valor del contrato que será de UN MILLON DE PESOS (\$1.000.000), la entidad emitirá el certificado de disponibilidad hasta por CIENTO CINCUETA MILLONES DE PESOS (\$150.000.000), que será el tope máximo de la cuota Litis.

Se desconocen las razones por las cuales, se trajo a colación que el contrato de transacción no había dado lugar a la terminación del proceso en el Juzgado de conocimiento, pues el documento tiene falencias que no corresponde a esta instancia entrar a determinar, pues no somos competentes para tal fin. Así que sobre tal punto no se hará comentario alguno.

No tiene presentación que el municipio haya asumido una actitud pasiva frente a la falta de cumplimiento frente a la transacción, pues a menos que se atacara el documento en acción contenciosa, el mismo sirve de título ejecutivo en contra del erario público municipal.

Como no hay una defensa técnica real, de esta observación se sostendrá la misma, no sin antes, entrar a evaluar lo dicho por la jurisprudencia en torno al principio de conmutatividad y de los contratos de comisión de éxito:

Manifestó el Consejo de Estado, como definición del Principio de conmutatividad dentro del contrato estatal, lo siguiente: "**1. Por averiguado se tiene que mediante el contrato estatal se persigue la prestación de los servicios públicos y por consiguiente la satisfacción de intereses de carácter general.**

Esta particularidad de la contratación estatal determina que la ejecución del objeto contractual sea un asunto vertebral y es por esto que la ley ha previsto diversos mecanismos que permiten conjurar factores o contingencias que puedan conducir a su paralización o inejecución.

Uno de tales mecanismos es precisamente aquel que permite que puedan reajustarse los precios pactados de tal suerte que manteniéndose su valor real en el decurso del plazo negocial, el contratista pueda cumplir con sus obligaciones y se lleve a feliz término la ejecución del contrato.

Por estas razones es que el fenómeno de la conmutatividad del contrato estatal se edifica sobre la base del equilibrio, de la igualdad o equivalencia proporcional y objetiva de las prestaciones económicas y por consiguiente las condiciones existentes al momento de la

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

presentación de la propuesta y de la celebración del contrato deben permanecer durante su ejecución, e incluso su liquidación, manteniéndose en estas etapas las obligaciones y derechos originales así como las contingencias y riesgos previsibles que asumieron las partes, de tal suerte que de llegar a surgir fenómenos que rompan el equilibrio que garantiza el legislador, debe de inmediato restablecerse.

Sin embargo, lo anterior no significa que en todas las hipótesis el contratista deba obtener con exactitud numérica la utilidad calculada y esperada por él pues no cualquier imprevisto que merme su ventaja tiene la virtualidad de conducir al restablecimiento económico. Sentencia 22 de junio de 2011, Radicación No. 85001-23-31-003-1998-00070-01(18836), es decir, el principio de conmutatividad, debe atender a los principios de la contratación estatal en general.

En coherencia con la posición del Consejo de Estado, la Corte Constitucional en Sentencia C – 207 de 2019, señaló la preponderancia del Interés general y de los principios constitucionales dentro de la contratación pública, y acotó: “ **3. LA PREVALENCIA DEL INTERÉS GENERAL COMO LÍMITE DEL MARGEN DE CONFIGURACIÓN DEL LEGISLADOR EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL**

Dada la importancia del contrato administrativo para el desarrollo de la actividad estatal y su vinculación con el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho, la facultad de su regulación está limitada por los mandatos de la Constitución, como corresponde necesariamente bajo el principio de supremacía de la norma fundamental. De esta forma “cuando las reglas establecidas por el Congreso de la República no se ajustan a los contenidos constitucionales y a la finalidad de los mismos, debe el Tribunal Constitucional ejercer la guarda de la Carta tal como se lo manda el artículo 241 de la misma Norma de Normas.”^[56]

Por lo tanto, el legislador no puede regular el contrato estatal sin tener en cuenta en dicha tarea el interés general. Esta vinculación del legislador ha sido afirmada puntualmente en jurisprudencia de esta Sala:

“(…) El interés público implícito en la contratación estatal, afecta de tal manera este instituto jurídico, que determina la especial posición de las partes contratantes y la relación entre ellas. Esta relación no se desenvuelve dentro de los mismos parámetros de igualdad en que lo hace la contratación entre particulares, sino que implica la preeminencia de la posición estatal. La autorización de cláusulas exorbitantes, como la de caducidad o las de terminación o modificación e interpretación unilaterales por parte de la Administración, son un claro ejemplo de esta situación. **La ley dota a la Administración de herramientas o mecanismos especiales, ausentes en las formas contractuales privadas, que están presentes para asegurar el cumplimiento de los fines estatales y del interés general.**”^[57]

Se trata por lo tanto de una relación necesaria e inescindible, que limita y guía la función del legislador en cuanto atañe a la regulación de la contratación estatal.^[58] Esta Sala, en la sentencia C-713 de 2009, y tras considerar in extenso la potestad del legislador en la materia, afirmó que: “(…) la defensa del principio del interés general no solo constituye la finalidad primordial sino el cimiento y la estructura de la contratación administrativa (...)”^[59]

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Entonces, la noción de interés público alcanza la concreción suficiente en aquellos bienes jurídicos de los cuales es titular el conglomerado social, como sucede con la protección del patrimonio público en el ejercicio de la función contractual. Es en esa especificidad, suministrada por el tipo de bien jurídico referido, que el juez constitucional adelanta el correspondiente juicio de constitucionalidad frente a las normas que afectan o desarrollan los contenidos del interés general. Así sucede claramente con las leyes que regulan la contratación estatal.

3.1. El interés general como límite de la regulación de la contratación estatal

La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades sobre las finalidades de la contratación estatal y ha desarrollado una jurisprudencia uniforme en torno a la protección del interés general como uno de sus principios axiológicos. Con fundamento en los artículos 1°, 2° y 209 de la Constitución Política, la Sala Plena de esta Corporación ha indicado que todas las actuaciones estatales –incluida la contratación– deben obedecer las finalidades del Estado Social de Derecho.

El artículo 1° consagra a Colombia como un Estado social de Derecho fundado, entre otros principios, en la prevalencia del interés general. El artículo 2° establece que es fin esencial del Estado garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes. Por su parte, el artículo 209 de la Constitución indica que la función administrativa está al servicio del interés general y se desarrolla con fundamento en “los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”. Con base en estas disposiciones, la Corte Constitucional ha ligado la actividad contractual al cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho. Al respecto, la sentencia C-499 de 1992 señaló lo siguiente:

“Para el cumplimiento de los fines del Estado es necesario el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. Luego, el objeto de los contratos no es otro que la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y eficaz. Es por ello que el estudio y la comprensión de la contratación estatal debe inscribirse en los principios axiológicos del Estado Social de Derecho que irradian todas las disposiciones contractuales previstas en la Constitución”[60].

De esta forma, en el marco del Estado Social de Derecho la función pública está al servicio del interés general y puesto que una de las formas de desarrollar la función pública es la contratación estatal, es dable concluir que dicha contratación se encuentra también al servicio del interés general. Esto implica que la regulación de la contratación estatal, en tanto potestad del legislador, no es una facultad ilimitada, sino que está sometida a los postulados de la Carta y, en particular a la satisfacción del interés general.” (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

En este orden de ideas, no es un capricho del ente de control territorial, propender por el respetar al interés general, en procura del cual, debe verificarse el cumplimiento del principio de conmutatividad, atendiendo al cual se señalaron unos claros parámetros para el respeto de éste principio, así como a los demás propios de la contratación estatal y la función pública, particularmente en los contratos de Comisión de Éxito o a Cuota litis, que era y es un precedente a obedecer desde los estudios previos.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Señala el Consejo de Estado, respecto de este principio en relación con los contratos de Comisión de Éxito, lo siguiente:

“3.1 La Sala al examinar contrastada y armónicamente el contrato de prestación de servicios, el Oficio, de 29 de agosto de 2000 ... encuentra que lo pactado en el parágrafo I de la cláusula cuarta del contrato **comprendía una obligación que se encontraba sujeta a una condición, o a un hecho futuro e incierto, que con las pruebas que obran en el proceso no se estableció con plena y suficiente verosimilitud y credibilidad**, ya que la existencia de unos listados, de unas normas y de unas condiciones no imponía como conclusión que esto ya despejaba aquel hecho en los términos de ahorro para la entidad demandada, cuando la realidad material del proceso no permite razonablemente llegar a esa conclusión.

3.2 De acuerdo con el artículo 1530 del Código Civil, cuando se trata de una obligación sujeta a condición se hace referencia a aquella que depende para su concreción de un acontecimiento futuro e incierto, que puede producirse, suceder o acaecer o no. Por lo tanto, cuando la obligación se forma en el marco de un acuerdo o convención y se subordina a un acontecimiento de la naturaleza enunciada, permanecerá en suspenso hasta que el mismo se realice, o se resolverá según se materialice o no el acontecimiento.

3.3 Las obligaciones condicionales, pues, revisten unas condiciones a observar: (1) el hecho a las que se subordinan debe ser futuro después de la celebración del contrato o negocio jurídico; (2) debe ser objetivamente incierto, de manera tal que pueda establecerse si se concretará o realizará o no, lo que lo hace diferir del plazo; y, (3) incorporación dentro del contrato debe ser expresa, que puede revistar el carácter excepcional y pactarse por cláusulas accidentales o prevista en la legislación.

3.4 Dentro de la tipología de las condiciones reconocidas por la legislación civil encontramos: (1) positivas que radican en el acontecimiento de una cosa, debiendo ser física y moralmente posibles [bien porque no son contrarias a las leyes de la naturaleza, o porque no comprenden un hecho prohibido, o que es opuesto a las buenas costumbres o al orden público, o cuyos términos son ininteligibles –artículo 1532 del Código Civil-]; (2) negativas que radican en que no se realice una cosa. Cuando tratándose de una condición negativa la cosa es material y físicamente imposible, la obligación pasa a ser pura y simple, pero si comprende la abstención del acreedor frente a un hecho inmoral o prohibido, se produce un vicio de la disposición [artículo 1533 del Código Civil]; (3) potestativas, en aquellos eventos en las que depende de la voluntad bien sea del acreedor, o del deudor; (4) casuales cuando dependen de la voluntad de terceros o de un acaso; (5) mixta cuando dependen en parte del acreedor o del deudor, y parte de un tercero; (6) suspensivas cuando suspende la exigibilidad del derecho, o impide su nacimiento en tanto se cumpla; y, (7) resolutivas, cuando extinguen el derecho al cumplirse [artículo 1536 del Código Civil].

...4. Determinado lo anterior, la Sala encuentra necesario establecer las reglas con las que puede delimitarse la comisión de éxito como estipulación incorporada en los contratos estatales, las que obrarán conjuntamente con las exigencias de la naturaleza de la [s] obligación [es] en las que quede comprendida.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

4.1 El tratamiento de la comisión de éxito exige considerar que la “estructuración jurídica de un concepto operativo de contrato estatal o por lo menos cualquier aproximación que se intente en torno a la figura, reconociéndole su carácter de mecanismo fundamental para la realización efectiva de los cometidos a cargo del Estado, no sólo conlleva complicaciones formales y normativas, sino que también, dado el origen privado de la institución, significa admitir su naturaleza compleja: en primer lugar, la de instrumento básico para el cumplimiento de los fines estatales y la satisfacción del interés general, que, por lo demás, debe ser preservado en la economía del contrato mismo, por lo tanto sumida inevitablemente en conceptos que involucran compromisos con los intereses de la comunidad, y, en segundo lugar, la de fuente de obligaciones conforme a las elaboraciones del derecho privado, pero, como se advierte, bajo consideraciones inmanentes con los intereses públicos y comunitarios, esto es, en absoluta posición dicotómica respecto de los contenidos individualistas y subjetivos, derivadas de las corrientes clásicas sustentadoras del derecho privado, lo que implica inexorablemente, en la hora actual de la disciplina, la articulación de normas, reglas y principios derivados del subsistema jurídico positivo privatista en interrelación permanente con principios, reglas e incluso normas inspiradas en el mantenimiento y preservación de intereses públicos y generales vinculado necesariamente al carácter social de nuestro Estado de derecho, en lo que podríamos denominar la configuración de un peculiar régimen jurídico y conceptual de contrato estatal, que no recoge los extremos fundamentalistas de la pretendida sustantividad del contrato estatal, ni de la exclusiva sujeción a los parámetros de los principios nugatorios de lo público.
<http://revistas.uexternado.edu.co/index.php?journal=Deradm&page=issue&op=view&path%5B%5D=279>

4.2 De la anterior argumentación puede servirse la Sala para afirmar que una cláusula como la de la comisión de éxito requiere para su análisis considerar desde la complejidad del contrato estatal el alcance de los principios y reglas de derecho privado en las que se sustenta, como de aquellos y aquellas inspiradas en el mantenimiento y preservación de los intereses públicos y generales. De estos últimos resulta esencial para la Sala la consideración del principio de conmutatividad, que “como se advierte a partir de un análisis del contexto normativo del régimen de la contratación pública y de sus desarrollos doctrinales, difiere sustancialmente de la simple conmutatividad propia de las relaciones jurídicas negociales entre particulares, en cuanto deviene de consideraciones objetivas y no de razonamientos subjetivos y relativos derivados del principio de autonomía de la voluntad individualista, surge de manera inevitable de las verificaciones objetivas del mercado efectuadas en desarrollo del principio de planeación y que tienden a salvaguardar el interés y el patrimonio público, bajo el criterio de equilibrio entre los valores de los objetos, bienes o servicios y la retribución correspondiente, para llegar a la noción de un punto intangible de precio justo para las partes.

4.3 De acuerdo con los anteriores argumentos, la Sala considera que la estipulación de la comisión de éxito por virtud del principio de conmutatividad exige que se pacte por el Estado y los contratistas con base en referentes objetivos que se aproximen a un real equilibrio económico, sin sujetarse solamente a supuestos convencionales, bajo las siguientes reglas fundadas en el principio de conmutatividad: (1) por virtud del principio de planeación para la fijación de una comisión de éxito en los contratos de prestación de servicios que suscriba

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

una entidad pública se debe establecer en los estudios previos la metodología y la escala de límites razonables para determinar la cuantía de la misma con el objeto de responder al principio de conmutatividad; (2) así mismo, se debe contar con los estudios financieros, económicos y presupuestales, que permitan sustentar y determinar su proyección en tiempo y cuantía, lo que debe quedar incorporado en los pliegos de condiciones y en el contrato, de manera que no se convierta en una obligación indeterminada, no motivada e irrazonable, que pueda afectar el interés público o genera, y vulnerar el principio de conmutatividad; (3) para el reconocimiento y la cuantificación de toda comisión de éxito en los contratos de prestación de servicios debe contarse con los estudios económicos, financieros y de mercado que permitan establecer el valor que pueda representar el resultado o éxito efectivamente logrado con el objeto contratado; (4) el valor de la comisión de éxito comprende tanto el IVA, como los demás impuestos a que haya lugar a cargo del contratista; (5) en los contratos de prestación de servicios sólo se reconocerá la comisión de éxito siempre que efectivamente se logre beneficio [s] o éxito objetivamente identificado en los estudios previos, para el patrimonio público o el interés general; (6) en ningún caso podrá percibirse comisión de éxito por la simple ejecución del contrato cuando no se ha logrado o verificado efectivamente el beneficio o provecho para el patrimonio público; (7) no se puede pagar comisión de éxito por fuera de lo estipulado contractualmente; y, (8) presupuestalmente debe estar respaldado el pago de la comisión de éxito para su pago, de acuerdo con las normas y reglamentos, y en cumplimiento de la estricta legalidad de las disposiciones presupuestales aplicables por cada entidad pública.” Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Magistrado ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, 6 de mayo de 2015, Radicación número: 76001-23-31-000-2003-01754-01(35268) - (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

Se decanta de lo anterior, que, tratándose de una obligación sometida a una condición, al no ser cumplida la segunda, desaparece la primera, como en el caso que nos ocupa. Aunado a ello, vemos como no se perfeccionó la reducción del 50% - 40% esperada de la obligación en contra del ente territorial.

Podemos concluir, acorde a la sentencia Unificadora (de obligatorio cumplimiento), que en la prestación de servicios que nos ocupa, debió establecerse claramente que, sin el cumplimiento de la obligación condicional, no habría lugar a otro reconocimiento económico distinto del valor de un millón de pesos acordado, omitiendo el municipio dar la preponderancia al interés general, en orden a lo cual, también ha habido pronunciamientos del Consejo de Estado, a tener en cuenta por su omisión al momento de la planeación:

“2. Nulidad absoluta por desconocimiento del principio de planeación

Ha sido la posición de esta Sala de Subsección decretar la nulidad absoluta del contrato cuando encuentra que este adolece de objeto ilícito por infringir el principio de planeación, en desconocimiento de los artículos 209, 331 y 341 constitucionales; los numerales 6, 7 y 11 a 14 del artículo 25, del numeral 3 del artículo 26, de los numerales 1 y 2 del artículo 30, todos de la ley 80 de 1993; y del artículo 2 del Decreto 01 de 1984; según los cuales para el manejo de los asuntos públicos y el cumplimiento de los fines estatales, con el fin de hacer uso eficiente de los recursos y obtener un desempeño adecuado de las funciones, debe existir un estricto orden para la adopción de las decisiones que efectivamente deban materializarse a favor de los intereses comunales.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Sin embargo, no puede pasarse por alto que en fallo del 21 de agosto de 2014, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ordenó proferir nuevamente la sentencia de segunda instancia dentro del Expediente No. 24.809[xxix], prescindiendo de una nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito, argumentando que, al pretender amparar el derecho fundamental de “acceder a la administración de justicia, en la modalidad de una sentencia efectiva”, debe decidirse el recurso de apelación, “bajo el entendido de que el desconocimiento del principio de planeación no genera nulidad del contrato por objeto ilícito.”

Al respecto, deben preverse los efectos inter parte de los fallos de tutela, sobre los cuales la Corte Constitucional ha expresado:

“Esta Corporación ha estimado que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 2591 de 1991, los fallos de tutela sólo producen efectos interpartes, como quiera que la acción de tutela se instituyó como un mecanismo de defensa subjetivo de carácter personal y de contenido concreto, cuyo titular es la persona agravada o amenazada en sus derechos fundamentales, quien tiene el deber de iniciarla directamente o por medio de apoderado”.

De manera que el fallo de tutela proferido el 21 de agosto de 2014 por la Sección Cuarta solo tiene efectos frente a las partes dentro del contrato sobre el cual recayó el litigio que allí se analizó, a menos que se trate de un evento en que se reúnen los presupuestos facticos y jurídicos necesarios para acudir a la aplicación del precedente judicial. Sin embargo, comoquiera que el Juez de Tutela ha proferido un fallo judicial donde se pronuncia sobre diferentes aspectos conceptuales, la Sala considera reiterar las precisiones que sobre el tema sostuvo:

“habida cuenta de los yerros conceptuales de carácter sustancial en que incurre el fallo de tutela, se precise y se recuerde, en primer lugar, que no es un elemento necesario para la configuración de la nulidad absoluta que alguna o todas las partes contractuales conozcan el vicio, puesto que como lo que se protege con esa sanción es el orden público y las normas imperativas, es decir el interés general, no es tolerable ignorancia o desconocimiento alguno para eludir su protección pues lo contrario implicaría privilegiar el interés individual de quien dice desconocer o ignorar, en franco detrimento del interés general, lo cual es del todo inadmisibles. Cuestión diferente es que del conocimiento o de la ignorancia del vicio se deriven algunos efectos que en verdad no atañen a la estructuración de la nulidad absoluta sino a las consecuencias que produce su decreto judicial, puntualmente en lo que se refiere a las restituciones mutuas, tal como es fácil advertir con sólo darle lectura al artículo 1525 del Código Civil, empero esto en modo alguno enerva la configuración de la invalidez.

En segundo lugar los artículos 6º y 1519 del Código Civil son las normas básicas sobre el objeto ilícito como causal de nulidad absoluta al prever respectivamente que “... en materia civil son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley, si en ella misma no se dispone otra cosa...” y que “hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación...”, lo que se traduce en que los artículos 1521, 1523 y 1741 del Código Civil y el artículo 899 del Código de Comercio son solamente aplicaciones concretas de ellos y por consiguiente toda violación a un mandato imperativo o a una prohibición de la ley, comporta un vicio que genera nulidad absoluta si, por supuesto, ella no consagra una sanción diferente.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Y es que las normas imperativas no son solamente aquellas que prohíben sino también las que mandan u ordenan y por ende la transgresión del orden público se presenta cuando se viola la que prohíbe, así como cuando no se observa o se desatiende la que ordena, casos todos estos que conducen a una nulidad absoluta por objeto ilícito.

Este entendimiento resulta natural y obvio, pues de no entenderse así se llegaría al absurdo de que la violación de una norma imperativa que sólo manda u ordena, pero que expresamente no prohíbe, no aparejaría sanción alguna o, lo que es lo mismo, que sería una norma inane, que manda, pero no manda porque puede ser inobservada sin ninguna consecuencia.

Aquel recto, natural y obvio entendimiento ya fue expuesto por la Corte Suprema de Justicia al poner de presente que el orden público puede ser positivo o negativo, dependiendo de “si prescribe cómo y qué debe hacerse” o si se vierte “en restricciones, limitaciones o prohibiciones”, y que su transgresión acarrea la nulidad absoluta del acto:

“El ius cogens, derecho imperativo de la Nación u orden público, representa una restricción a la autonomía privada dispositiva (cas. civ. sentencia de 30 de agosto de 2011, exp. 11001-3103-012-1999-01957-01), y su vulneración, a no dudarlo, produce la nulidad absoluta del contrato o de la estipulación afectada, ampara principios y valores fundamentales del sistema jurídico por constituir “núcleo central, medular, básico, cardinal, primario e inmanente de intereses vitales para la persona, la existencia, preservación, armonía y progreso de la sociedad [...] valores, principios e ideales considerados esenciales al concernir a materias, asuntos o intereses esenciales para la organización social en determinado momento histórico, en función al respeto y primacía de valores fundamentales del ordenamiento jurídico, la libertad, la democracia, los intereses individuales o sociales. En general, su concepto tutela razonables intereses nacionales vinculados a la organización política, económica o social del país, y no admite sustitución, cambio, modificación, derogación ni exclusión por decisión particular”, sea “positivo, si prescribe cómo y qué debe hacerse, ora negativo, al verse en restricciones, limitaciones o prohibiciones, y puede obedecer a factores estrictamente políticos, económicos o sociales con sentido directivo o protector de ciertos intereses, situación, posición económica, social o jurídica”, “como mecanismo para la organización, productividad, eficiencia y equidad del sistema económico, [donde] hay una economía dirigida (orden público de dirección), y en ocasiones, para proteger determinados intereses (orden público tutelar o de protección) en razón de cierta posición económica, social, jurídica, factores sociales (Estado providencia, proteccionismo social) para proveer al bienestar social y la satisfacción de las necesidades económicas de los ciudadanos, suprimir o atenuar manifiestas desigualdades socio-económicas (contratos de adhesión, derecho del consumo), ora económicos (política deflacionista-control de precios-de crédito, derecho de la competencia, interés general)”, esto es, actúe en sentido político, social o económico (cas. civ. sentencias exequátur de 8 de noviembre de 2011, exp. E-2009-00219-00, y sentencia de 19 de octubre de 2011, exp. 11001-3103-032- 2001-00847-01).[xxx]

Pero el orden público comprende además los principios ínsitos en el ordenamiento, que se deducen de las normas imperativas, y su transgresión también apareja la nulidad absoluta como sanción:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

“El derecho imperativo de la Nación se remite al orden público, comprende principios fundamentales del ordenamiento jurídico inferidos de las normas imperativas. Las reglas legales, según una antigua clasificación, son supletorias, dispositivas o imperativas. En la primera categoría están las que rigen en defecto de específica previsión de las partes, en ausencia de estipulación alguna y, por ello, suplen el silencio de los sujetos, integrando el contenido del acto dispositivo sin pacto expreso ninguno. El segundo tipo obedece a la posibilidad reconocida por el ordenamiento jurídico para disponer, variar, alterar o descartar la aplicación de una norma. Tratase de preceptos susceptibles de exclusión o modificación en desarrollo de la autonomía privada, libertad contractual o de contratación. Son imperativas aquellas cuya aplicación es obligatoria y se impone a las partes sin admitir pacto contrario.

Por lo común estas normas regulan materias de vital importancia. De suyo esta categoría atañe a materias del ius cogens, orden público social, económico o político, moralidad, ética colectiva o buenas costumbres, restringen o cercenan la libertad en atención a la importancia de la materia e intereses regulados, son taxativas, de aplicación e interpretación restrictiva y excluyen analogía legis o iuris. Dicha nomenclatura, se remite en cierta medida a los elementos del negocio jurídico, o sea, lo de su estructura existencial (esencialia negotia), o perteneciente por ley, uso, costumbre o equidad sin necesidad de estipulación a propósito (naturalia negotia) y lo estipulado expressis verbis en concreto (accidentalia negotia), que “se expresa en los contratos” (artículo 1603 C.C) o “pactado expresamente en ellos” (art. 861 C.Co), y debe confrontarse con la disciplina jurídica del acto y las normas legales cogentes, dispositivas o supletorias, a punto que la contrariedad del ius cogens, el derecho imperativo y el orden público, entraña la invalidez absoluta.”[xxxii]

Así que no es cierto que para que un acto o contrato sea absolutamente nulo por objeto ilícito es indispensable la existencia de una norma que diga, expresa y sacramentalmente, que “es nulo”, como consecuencia, el acto que la contraviene, pero desde luego que lo que sí debe existir es la norma que expresamente mande o prohíba. Pero que sean las palabras de Claro Solar las que recuerden lo elemental, pero al parecer ignorado o por lo menos olvidado, sobre el objeto ilícito:

“1918. – Hemos visto que, para la validez de toda declaración de voluntad, o sea para todo acto o contrato, no basta que su objeto sea posible, cierto y determinado, sino que se requiere también que sea lícito. Para ser lícito es necesario que el objeto se conforme con la ley, sea reconocido por ella, y lo proteja y ampare. Para efectuar este reconocimiento y prestar la protección y amparo al objeto lícito, la ley adopta formas diversas que limitan de diversas maneras y en distinta forma la libertad individual con el objeto de asegurar la armonía y el orden social. De aquí resultan las distintas clases de leyes en que las decisiones del legislador se presentan; ya como simples declaraciones que indican, más que a la inteligencia que a la voluntad humana las condiciones necesarias a una institución jurídica para su validez y correcto funcionamiento ante los derechos e intereses privados en juego; ya para prescribir el mandato imperativo que debe ser ejecutado en beneficio de la generalidad y para asegurar el orden social y público; ya, en fin, para evitar por medio de una expresa prohibición la realización de actos o hechos que son contrarios al funcionamiento de todos los intereses legítimos y al mantenimiento de las buenas costumbres, de la justicia y de la equidad en las convenciones de los particulares.

La forma con que el legislador ha revestido sus preceptos manifiesta la importancia que les atribuye; y da a entender su verdadera intención. Por eso distinguiendo la forma que toma

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

el precepto del legislador, se considera que hay en general objeto ilícito en todo acto o contrato prohibido por la ley, y que obra contra la ley el que ateniéndose a lo literal de las palabras y al sentido a que éstas pueden darse desconoce su verdadero espíritu y obra contra lo en ella preceptuado. No es dudoso decían los emperadores Theodosius y Valentinianus, que obra contra la ley, el que ateniéndose a sus palabras, obra contra su voluntad: non dubium est in legem committere eum qui verba legis amplexus contra legis nititur voluntatem; ni podrá eximirse de las penas prescritas en las leyes, el que obra contra su sentido y maliciosamente se excusa, fijándose en el material sentido de sus palabras, nec poenas insertas legibus evitabit qui se contra iuris sententiam saeva praerrogativa verborum fraudulenter excussat. Y en seguida disponían: Nullum enim pactum, nullam conventionem, nullum contractum inter eos videri volumus subsequutum qui contrahunt lege contrahere prohibente. Quod ad omnes etiam legum interpretationes, tam veteres quam novellas trahi generaliter imperamus ut legislatori quod fieri non vult tantum prohibuisse sufficiat; ceteraque quasi expresa ex legis liceat voluntate colligere hoc est ut ea qua lege fieri prohibentur si fuerint facta non solum inutilia sed pro infectis etiam habeantur: licet legislator fieri prohibuerit tantum nec specialiter dixerit inutile esse debere quod factum est; por lo mismo es nulo el pacto, nula la convención, nulo el contrato, celebrado por aquellos que contratan contra la prohibición de la ley de contratar. Para las interpretaciones de las leyes, tanto antiguas como modernas, se aplicará el principio general; basta que el legislador haya prohibido lo que no quiere que se haga, y el resto se colige de esta misma voluntad; de suerte que si se verifica el acto prohibido por la ley, no sólo será inútil, sino como no hecho aun cuando el legislador al prohibirlo no hubiera añadido que sería inútil y de ninguna fuerza y valor.”[xxxii]

Así que tampoco es cierto, como desatinadamente lo pregona el fallo de tutela que el desconocimiento del principio de planeación del contrato estatal jamás puede conducir a una nulidad absoluta por objeto ilícito, aunque por supuesto, no toda deficiencia en la planeación del negocio jurídico estatal conduce inexorablemente a la nulidad del contrato por ilicitud de su objeto, toda vez que las falencias que producen ésta mácula en el contrato de la administración son aquellas que desde el momento de su celebración ponen en evidencia que el objeto contractual no podrá ejecutarse o que su ejecución va a depender de situaciones indefinidas o inciertas por necesitar de decisiones de terceros o que los tiempos de ejecución acordados no podrán cumplirse y por ende habrá de sobrevenir el consiguiente detrimento patrimonial de la entidad contratante por los sobrecostos en que habrá de incurrirse por el retardo.

Finalmente, jamás debe confundirse el objeto del contrato con el objeto de la obligación puesto que el primero, el del contrato, es el derecho o interés que es materia de la regulación mediante el respectivo negocio jurídico, al paso que el segundo, el de la obligación, es la prestación que no es otra cosa que la conducta comisiva u omisiva que el deudor debe desplegar en favor del acreedor.

Pero además, sostener que el objeto del contrato son “las obligaciones asumidas por las partes” (se subraya), como de forma simplista lo dijo el fallo de tutela, o que, con más simplicidad, es la prestación (lo que a su vez supone confundir la obligación con su objeto), implica incurrir en otro error aún más protuberante como es el de creer que los contratos sólo producen obligaciones cuando es elementalmente sabido que ellos también pueden regularlas o extinguirlas como de manera paladina lo dice el artículo 864 del Código de

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Comercio al preceptuar que “el contrato es un acuerdo entre dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial...” (Se subraya).

Incurrir en semejantes confusiones conceptuales puede conducir, como en efecto ocurre y ha ocurrido en este caso, a negar la existencia de un objeto ilícito cuando un contrato se celebra en circunstancias contrarias a las ordenadas imperativamente por la ley, tal como sería el caso de no observar el principio de planeación en la celebración de los contratos estatales.

Lo particular de este asunto es que los integrantes de la Sala de Decisión que determinaron el sentido en que había de fallarse la tutela, excepción hecha por obvia razón del Conjuez que hubo de designarse para superar el empate, en precedente oportunidad habían acompañado la posición de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo cuando en sentencia del 8 de julio de 2014[xxxiii] al decidir sobre el control de legalidad inmediato del Decreto 2962 de 2011, refiriéndose al principio de planeación se sostuvo:

“(...) es una manifestación del principio de economía que rige los contratos de la administración, en la medida en que su cabal cumplimiento garantiza que la ejecución del futuro contrato, en las condiciones razonablemente previsibles, se adelantará sin tropiezos, dentro de los plazos y especificaciones acordados, puesto que la correcta planeación allana el camino para evitar las múltiples dificultades que se pueden presentar alrededor de las relaciones contractuales de las entidades estatales.

Contrario sensu, el incumplimiento de este deber se traducirá en una errática ejecución contractual, que se enfrentará a diversos obstáculos e inconvenientes, los cuales a su vez se pueden traducir en demoras y sobre costos en la obtención del objeto contractual en cuestión, todo lo cual, obviamente, atenta contra el mencionado principio de economía que debe regir en la contratación estatal.”[xxxiv]

...En este sentido, la Sala reitera que en determinados y concretos eventos el desconocimiento del principio de planeación puede conllevar la configuración de la nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito, cuando las falencias que producen esta mácula sean:

1. Situaciones que desde el momento de la celebración del negocio jurídico evidencian que el objeto contractual no podrá ejecutarse.
2. Situaciones que desde el momento de la celebración del negocio jurídico evidencian que la ejecución del contrato va a depender de circunstancias indefinidas o inciertas por necesitar de decisiones de terceros.
3. Situaciones que desde el momento de la celebración del negocio jurídico evidencian que los tiempos de ejecución acordados no podrán cumplirse y por ende habrá de sobrevenir el consiguiente detrimento patrimonial de la entidad...” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3, subsección C, Radicación 73001- 23- 31- 000- 2012- 00012- 01 (51489), del 10 de diciembre de 2015, Magistrado Ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Así las cosas, se ratifica que el fin último de la contratación estatal es el cumplimiento del interés general, al margen de lo cual, vemos vulnerados los principios de Planeación y economía, respecto del contrato en ciernes, cuando se evidencia lo siguiente:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

1. Se incumplieron los principios enunciados, pues no se estableció en los estudios previos la metodología acorde a las actuaciones, que debían surtir de manera extraordinaria en un mes, cumpliendo no solo con la disminución de la obligación en cabeza del municipio (Un 50% o 40% menos de las condenas), sino sin prever el alcance de las actuaciones de COMFANDI que ya ostentaba sentencias en firme a su favor, por unos montos considerables y cuya “rebaja” era poco factible.
2. La inadecuada revisión y seguimiento de las actuaciones del contratista, quien mediante un informe ejecutivo afirmó su éxito con la transacción realizada, a pesar de que en la literalidad de la misma, se evidenció que se hizo por más de \$8000 millones de pesos, y no por 2 sentencias sino por 4.
3. El error ostensible del supervisor, quien hizo caso omiso de los parámetros de los estudios previos y la obligación condicional en cabeza del contratista, que no fue cumplida y procedió al pago de las “sumas acordadas” por concepto de cuota litis.

Por las razones expuestas, se sostendrá la observación y pasará a ser un hallazgo de idénticas connotaciones.

14. Observación administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. Seguimiento de las actuaciones del contratista

Contrato No. 310-13- 06.166- 2022 MC

Objeto: Interventoría Técnica, administrativa y financiera al contrato de Concesión No. 001 de octubre de 2003, del servicio de alumbrado público del municipio de Calima – El Darién (Valle del Cauca)

Valor: \$27.489.000

Plazo: Hasta 30 de octubre de 2022

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Etapas precontractual: En el proyecto se establecen rubros por valor de \$125 millones, para ejecutar las acciones por dos años, durante el cual debe ejecutarse el seguimiento técnico, administrativo, operativo y financiero de la Concesión de Alumbrado público que tuvo su inicio en el año 2003.

En los estudios previos (folios 6 - 49) se especifica que, en cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes aplicables a la Concesión, se requiere de la prestación de una interventoría de alcance técnico, contable, legal, ambiental, financiero, administrativo y de calidad al servicio de alumbrado público. Se requiere como perfil, persona natural o jurídica cuya actividad económica incluya el desarrollo del objeto a contratar, como experiencia mínima en realización de interventoría mediante presentación de certificaciones o contratos, también se requirió para tales efectos un equipo de profesionales como 1 Director de Interventoría, 1 Profesional Jurídico, 1 técnico electricista, 1 profesional financiero, con una experiencia determinada, que se estima indispensable para poder adelantar la labor a desempeñar.

Se exigen como obligaciones al futuro contratista: informes mensuales consolidados relacionados en norma integral con todos los aspectos relevantes en torno a; Condiciones mínimas requeridas, exigencias y especificaciones, sistema de alumbrado público, verificación de la calidad del suministro, procedimientos y realización de los trabajos de operación conforme a las normas RETILAP; deficiencias encontradas, seguimiento de los

reclamos de los usuarios, *revisar y aprobar planes de trabajo, exponer al municipio las razones que ameriten imposición de sanciones por incumplimiento*; inspeccionar suficiencia y calidad de las instalaciones, *velar porque el flujo de caja mensual responda a los parámetros trazados con anterioridad*, verificar que los cobros que se realicen correspondan al acuerdo municipal, reportar mensualmente el análisis y evaluación económica de las tarifas; *revisar las cuentas de cobro presentadas por la fiducia; realizar registro cronológico de pagos y deducciones*; informe mensual del desarrollo financiero del encargo fiduciario, *revisar los ingresos por recaudo del impuesto de alumbrado público, supervisar el costo de operación del sistema; velar y validar el plan de inversiones y proyectos a ejecutar, validar y efectuar el seguimiento del mismo, entre otras.*

Se realizó invitación y se presenta la oferta con sus anexos; se observa que la hoja de vida se encuentra incompleta en el expediente, entre los soportes que sustentan el requerimiento de experiencia requerido (folios 50 - 271). Sin embargo, se validan, existiendo en la trazabilidad concepto jurídico de la asesora jurídica externa aprobando los documentos del contratista.

Etapas contractuales: Por tratarse de mínima cuantía, se observa la aceptación de la propuesta a folios 272 – 277, suscrito el 03 – 08- 2022. Por errores de archivo documental, se observa póliza de cumplimiento de fecha 10 de agosto de 2022, posteriormente el nombramiento de la secretaria de Obras, como supervisora, la aprobación de la póliza y el acta de inicio, están calendadas 10 de agosto de 2022. El registro del contrato en el Secop I se hizo de manera extemporánea el 11- 08- 2022 (folios 284 - 286).

Sin que se registre ningún tipo de actuación contractual, ni requerimiento de prórroga por parte de la supervisión, se observa Otro sí de adición y prórroga por \$13.744.500; y en tiempo hasta el 15- 12-2022, que se adjunta y suscribe el 28 – 10- 2022 (por errores de archivo documental, no hay foliatura en estos documentos), cerrando los mismos la primera carpeta del expediente.

Vemos a partir del folio 296 (segundo tomo) y hasta el folio 530, en su orden: Informes de supervisión, del contratista y pagos. En el Informe del supervisor del 30 de noviembre, manifestando el cumplimiento de las labores por parte del contratista durante el mes de agosto, es importante señalar que quien firma el informe es un secretario de obra distinto de la supervisora nombrada, y a éste, no se le hizo acto de delegación de la supervisión. El informe de interventoría folios 309- 421, corresponde al 10 de agosto hasta el 30 de septiembre (no mensual como se estipuló), es de anotar que dentro del mismo se compila la información del contrato desde enero a septiembre de 2022; con recuento de la realización de las actividades, que contienen fotos sin fecha y hora de su realización, relación de proyecciones realizadas, es de anotar que se informa el decrecimiento de las luminarias de 1891 a 1869 (22 menos), manifestando que durante el año solo se repuso 1 y sin que se dé cuenta del Plan de expansión (folio 371), no se observa en los informes el componente jurídico.

Dentro del informe se estiman valores a devolver a distintos usuarios debido a la pérdida de asequibilidad del Acuerdo No. 015 de 2021, según Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo con radicado 76001-23-33-000-2022-00044- 00, mediante los cuales se hicieron cobros de más a los usuarios (folio 376 vuelto), de cuya gestión no se ha hecho manifestación alguna valores que ascienden a \$54.266.757, que podrían generar intereses

en caso de ser solicitadas, especialmente por los clientes especiales (no regulados) que son 18, a cada uno de los cuales habría de devolverse tales sumas.

El interventor señaló que al municipio se le viene facturando el Alumbrado Público, cuando es el sujeto activo del mismo y pidió que se revisara y notificara al comercializador para el retiro del cobro. Lo cual no se hizo. Es necesario acotar, que a la fecha no existe contrato con el comercializador, para lograr el cobro por KW en condiciones más económicas para el municipio y no como cliente No Regulado.

Un segundo informe del mes de octubre, nuevamente se hace el correspondiente análisis.

En el informe del contratista correspondiente al período 01 de noviembre al 15 de diciembre a folios 476 – 530, se repite todo lo observado en el informe de octubre, en cuanto a la falta de transferencias por mayor valor por parte de la Comercializadora en contra de los intereses del municipio, sin que ni el Interventor ni el Supervisor, hayan realizado ninguna radicación al respecto para recuperar esos mayores valores en su favor, lo que incrementó el monto del valor adeudado al concesionario en la suma de \$328.772.268,60.

Cabe acotar, que el contratista debió hacer seguimiento a las obligaciones técnicas que se desprendían del Anexo del Otro Sí No. 2 de la concesión, que incluyó la inversión por \$1.600 millones que debió adelantar el concesionario a partir de agosto de 2021 por 18 meses, que, para diciembre de 2022, cumpliría 16 meses de adelanto, pero esa información no se estandarizó en ninguno de los informes del contratista. Tampoco se hizo alusión alguna al manejo de los clientes No Regulados, a la cartera y el estado de la misma, así como a señalar posibles soluciones para que se conozca la razón de la fluctuación del recaudo.

En virtud de lo anterior, el último pago corresponde a repetición de la información en materia de recaudo, ignorando lo pertinente a la inversión del Otro sí, su porcentaje de avance, motivo fundamental para la prórroga de la concesión durante 10 años más. Así las cosas, se estima la existencia de un detrimento, por el último pago realizado, dada la información repetida, y la falta de alcance de la información reportada. Se considera un detrimento por valor de \$13.744.500, por concepto del último pago realizado.

Fuente de criterio y criterio

Ley 594 de 2000, artículos 1 a 4, 11 a 17; Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 13, 23 y 24, Ley 1474 de 2011, artículos 82 a 84; Constitución Nacional, artículo 209; Contrato en sus componentes pre y contractual (estudios previos, propuesta y minuta); manual de contratación y supervisión de la entidad; Ley 1508 de 2012, artículos 29 y 33; Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.6.3.

Causa

Planeación antieconómica y sin un análisis de costos acertado, falencias en el seguimiento de las actividades por parte de la supervisión.

Efecto

Pérdida del recurso por inadecuada gestión del interventor en favor de los intereses del municipio y la comunidad, generando un presunto detrimento por valor de \$13.744.500.

Los hechos descritos constituyen una observación administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal, por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39; Ley 610 de 2000, artículos 5 y 6.

ok

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

OBSERVACIÓN 14: observación administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. Seguimiento de las actuaciones del contratista.

Para esta respuesta la parte cursiva y en negrilla es el pensamiento del equipo auditor

Etapa precontractual: En el proyecto se establecen rubros por valor de \$125 millones, para ejecutar las acciones por dos años, durante el cual debe ejecutarse el seguimiento técnico, administrativo, operativo y financiero de la Concesión de Alumbrado público que tuvo su inicio en el año 2003. En los estudios previos (folios 6 - 49) se especifica que, en cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes aplicables a la Concesión, se requiere de la prestación de una interventoría de alcance técnico, contable, legal, ambiental, financiero, administrativo y de calidad al servicio de alumbrado público. Se requiere como perfil, persona natural o jurídica cuya actividad económica incluya el desarrollo del objeto a contratar, como experiencia mínima en realización de interventoría mediante presentación de certificaciones o contratos, también se requirió para tales efectos un equipo de profesionales como 1 Director de Interventoría, 1 Profesional Jurídico, 1 técnico electricista, 1 profesional financiero, con una experiencia determinada, que se estima indispensable para poder adelantar la labor a desempeñar. Se exigen como obligaciones al futuro contratista: informes mensuales consolidados relacionados en norma integral con todos los aspectos relevantes en torno a; Condiciones mínimas requeridas, exigencias y especificaciones, sistema de alumbrado público, verificación de la calidad del suministro, procedimientos y realización de los trabajos de operación conforme a las normas RETILAP; deficiencias encontradas, seguimiento de los reclamos de los usuarios, revisar y aprobar planes de trabajo, exponer al municipio las razones que ameriten imposición de sanciones por incumplimiento; inspeccionar suficiencia y calidad de las instalaciones, velar porque el flujo de caja mensual responda a los parámetros trazados con anterioridad, verificar que los cobros que se realicen correspondan al acuerdo municipal, reportar mensualmente el análisis y evaluación económica de las tarifas; revisar las cuentas de cobro presentadas por la fiducia; realizar registro cronológico de pagos y deducciones; informe mensual del desarrollo financiero del encargo fiduciario, revisar los ingresos por recaudo del impuesto de alumbrado público, supervisar el costo de operación del sistema; velar y validar el plan de inversiones y proyectos a ejecutar, validar y efectuar el seguimiento del mismo, entre otras. 77 Se realizó invitación y se presenta la oferta con sus anexos; se observa que la hoja de vida se encuentra incompleta en el expediente, entre los soportes que sustentan el requerimiento de experiencia requerido (folios 50 - 271). Sin embargo, se validan, existiendo en la trazabilidad concepto jurídico de la asesora jurídica externa aprobando los documentos del contratista.

En el análisis realizado por la Contraloría en la observación No. 14, se hace referencia a la necesidad de un equipo de trabajo idóneo para la ejecución de la interventoría al Contrato de Concesión por medio del cual se presta el servicio de alumbrado público, al respecto, es importante tener en cuenta que el Contratista allegó los certificados correspondientes en los cuales verifica la idoneidad del equipo de trabajo y el cumplimiento de las condiciones del

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

proceso de mínima cuantía. Adicional a lo anterior, en el curso de la ejecución del contrato el Contratista presentó tres (3) informes que contenían la evidencia de las actividades ejecutadas, de los cuales reposa en la administración municipal copia con todos sus anexos.

No se establece por parte del Ente de control las causas de denominación de la Hoja de Vida del Proponente hoy contratista como incompleta, pues de la revisión de la propuesta se habilita la propuesta por cumplir con las especificaciones y exigencias de la invitación pública.

Etapas contractuales: Por tratarse de mínima cuantía, se observa la aceptación de la propuesta a folios 272 – 277, suscrito el 03 – 08- 2022. Por errores de archivo documental, se observa póliza de cumplimiento de fecha 10 de agosto de 2022, posteriormente el nombramiento de la secretaria de Obras, como supervisora, la aprobación de la póliza y el acta de inicio, están calendadas 10 de agosto de 2022. El registro del contrato en el Secop I se hizo de manera extemporánea el 11- 08- 2022 (folios 284 - 286).

R/ En cuanto al Acto de designación de la supervisión, en la misma inicial se determinó que corresponde la supervisión a quien ostente la calidad de secretario de Obras Públicas, significando con ello que quien ocupe el cargo deberá hacer el seguimiento contractual y suscribir los respectivos actos, como en efecto sucedió

Sin que se registre ningún tipo de actuación contractual, ni requerimiento de prórroga por parte de la supervisión, se observa Otro sí de adición y prórroga por \$13.744.500; y en tiempo hasta el 15- 12-2022, que se adjunta y suscribe el 28 – 10- 2022 (por errores de archivo documental, no hay foliatura en estos documentos), cerrando los mismos la primera carpeta del expediente.

Más adelante en sus observaciones, la Contraloría manifiesta que no existe ningún tipo de requerimiento de prórroga del Contrato de Interventoría, sin embargo, el mismo contenido del otrosí suscrito entre las partes el 28 de octubre del año 2022, si se hace referencia a la solicitud presentada por la Secretaría de Obras en los numerales 5 y 8 de los considerandos, en esa misma calenda para la viabilidad de la prórroga del contrato de interventoría en orden de garantizar la vigilancia continua a la prestación del servicio.

Dicha prórroga se realizó conforme a lo dispuesto en el párrafo [1] del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 ampliando el término de ejecución y el valor del contrato por \$13.744.500 hasta el 15 de diciembre de 2022.

En conclusión, el otrosí de adición con suscripción del día 28 de octubre de 2022, tuvo su espíritu en continuar con el seguimiento al Contrato de Concesión, previa existencia de los nuevos recursos, y dada la necesidad de la continuidad, y en un sentido restringido, el determinado por la Ley 80 de 1993, en cuanto a la imposibilidad de realizar adiciones al valor de todo contrato superior al 50%.

Vemos a partir del folio 296 (segundo tomo) y hasta el folio 530, en su orden: Informes de supervisión, del contratista y pagos. En el Informe del supervisor del 30 de noviembre, manifestando el cumplimiento de las labores por parte del contratista durante el mes de agosto, es importante señalar que quien firma el informe es un secretario de obra distinto de la supervisora nombrada, y a éste, no se le hizo acto de delegación de la supervisión.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

R/ Informe de supervisión no conocido, no sabemos quién firma dicho documento.

El informe de interventoría folios 309- 421, corresponde al 10 de agosto hasta el 30 de septiembre (no mensual como se estipuló), es de anotar que dentro del mismo se compila la información del contrato desde enero a septiembre de 2022; con recuento de la realización de las actividades, que contienen fotos sin fecha y hora de su realización, relación de proyecciones realizadas, es de anotar que se informa el decrecimiento de las luminarias de 1891 a 1869 (22 menos), manifestando que durante el año solo se repuso 1 y sin que se dé cuenta del Plan de expansión (folio 371), no se observa en los informes el componente jurídico.

En relación a la entrega de informes presentados por la Interventoría, el cual correspondió al Contrato CM No. 310-13-06.166 de 2022 y cuyo Objeto contractual fue la Interventoría Técnica, administrativa y financiera al Contrato de concesión No. 001 de Octubre de 2003 del servicio de alumbrado público del Municipio de Calima- El Darién (Valle del Cauca) y para los cuales se presentaron 3 Informes, según Contrato firmado cláusula 4.3 literal I; dos que corresponden al contrato inicial que iba desde la fecha de firma del acta de inicio (agosto 10 de 2022) hasta el 30 de octubre de 2022 y un informe que correspondió a la prórroga del contrato firmado el día 28 de octubre según oficio de solicitud de ampliación entregado el mismo día por parte del Supervisor del Contrato ante Despacho Municipal con copia a la Oficina de Contratación, evidenciando en el último informe (anexo a dicha respuesta) entrega compilada de la información, a saber:

- Información técnica,
- Avance de obras según otrosí No. 2 del Contrato de Concesión,
- Informe de facturación y recaudo consolidado de enero a noviembre de 2022, incluye análisis de crecimiento o decrecimiento mensual,
- Conciliación de las cuentas del contrato de fiducia con Fiduciaria de Occidente, incluye saldo al mes de noviembre de 2022,
- Seguimiento a la remuneración mensual del concesionario de acuerdo a abonos realizados con el recaudo trasladado del Operador de red (menos descuento por suministro de energía),
- Proyección de flujo financiero según comportamiento mensual de recaudo menos costos del sistema del impuesto de Alumbrado Público;
- Seguimiento de No regulados a cargo de operadores diferentes a la Compañía de Electricidad, consolidado de Suministro de energía de acuerdo a recibos recibidos,
- Verificación del cumplimiento del pago de seguridad social, cumplimiento de documentación de operarios y vehículos de la Concesión de Alumbrado público.

Adicionalmente, se aclara que la disminución del inventario de luminarias con base en la infraestructura del año 2021 correspondió al retiro de 21 luminarias de sodio (11 luminarias de 70W y 10 luminarias de 150W) del Proyecto de Modernización Estadio Entrada 4.

Respecto de las actuaciones del componente jurídico para el desarrollo de los informes de Interventoría, correspondió al acompañamiento y desarrollo de oficios determinados en el proceso de inexequibilidad del Acuerdo No. 015 de 2021, actuaciones frente a los procesos

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

de revisión a los diferentes modelos para implementación de acuerdo municipal, verificación de las actuaciones frente al proceso de devolución de recurso, cobro de cartera.

Dentro del informe se estiman valores a devolver a distintos usuarios debido a la pérdida de asequibilidad del Acuerdo No. 015 de 2021, según Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo con radicado 76001-23-33-000-2022-00044- 00, mediante los cuales se hicieron cobros de más a los usuarios (folio 376 vuelto), de cuya gestión no se ha hecho manifestación alguna valores que ascienden a \$54.266.757, que podrían generar intereses en caso de ser solicitadas, especialmente por los clientes especiales (no regulados) que son 18, a cada uno de los cuales habría de devolverse tales sumas.

El interventor señaló que al municipio se le viene facturando el Alumbrado Público, cuando es el sujeto activo del mismo y pidió que se revisara y notificara al comercializador para el retiro del cobro. Lo cual no se hizo. Es necesario acotar, que a la fecha no existe contrato con el comercializador, para lograr el cobro por KW en condiciones más económicas para el municipio y no como cliente No Regulado.

R/ interventoría: notificación entregada al Municipio para actuación.

En el informe del contratista correspondiente al período 01 de noviembre al 15 de diciembre a folios 476 – 530, se repite todo lo observado en el informe de octubre, en cuanto a la falta de transferencias por mayor valor por parte de la Comercializadora en contra de los intereses del municipio, sin que ni el Interventor ni el Supervisor, hayan realizado ninguna radicación al respecto para recuperar esos mayores valores en su favor, lo que incrementó el monto del valor adeudado al concesionario en la suma de \$328.772.268,60.

La interventoría entregó informe final correspondiente al período del 01 de noviembre al 15 de diciembre de 2022 (anexo a este informe) compilado de enero a noviembre de 2022, en el capítulo financiero se concilian los valores trasladados a la fiduciaria de occidente por el Operador de red, el cual corresponde al recaudo del impuesto de alumbrado público menos los rubros del suministro de energía, costos por transferencia, evidenciando un mayor valor transferido en el mes de agosto por valor de \$3.021.997, valor que fue requerida para aclaración por la interventoría de alumbrado público mediante correo electrónico el día 23 de octubre de 2022; dichos traslados se verifican y consolidan en la siguiente tabla:

El valor trasladado a la fiduciaria de Occidente es abonado al Concesionario con cargo al valor de remuneración mensual, el cual presenta un déficit y por ende un valor como cuenta por pagar a la concesión; la cartera generada al Concesionario se determina en el siguiente cuadro:

Cabe acotar, que el contratista debió hacer seguimiento a las obligaciones técnicas que se desprendían del Anexo del Otro Sí No. 2 de la concesión, que incluyó la inversión por \$1.600 millones que debió adelantar el concesionario a partir de agosto de 2021 por 18 meses, que, para diciembre de 2022, cumpliría 16 meses de adelanto, pero esa información no se estandarizó en ninguno de los informes del contratista. Tampoco se hizo alusión alguna al manejo de los clientes No Regulados, a la cartera y el estado de la misma, así como a señalar posibles soluciones para que se conozca la razón de la fluctuación del recaudo.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

La interventoría de Alumbrado Público en el seguimiento mensual a las labores determinadas por el Concesionario y en el informe No. 3 correspondiente al período del 01 de noviembre al

15 de diciembre de 2022, se realiza un avance general de ejecución de las obras contempladas en el Otrosí No. 2 correspondiente al 57% de avance; dicho avance se encuentra detallado en el numeral 1.4 Proceso de Modernización Municipio Calima el Darién; otrosí que se encuentra dentro de los tiempos establecidos del proceso de ejecución teniendo en cuenta el acta de inicio suscrita el 20 de septiembre de 2022.

Teniendo en cuenta el Acta de inicio de las obras correspondientes a la inversión del Concesionario se realizaron recorridos de verificación de la instalación de infraestructura y lo correspondiente a las revisiones de cumplimiento de los parámetros de diseño establecidos, en el periodo correspondiente al 30 de Octubre y el 15 de Diciembre se realizaron las siguientes actividades desde el punto de vista técnico y de terreno:

- Verificación a la ejecución del proyecto estadio entrada 4; en dicha verificación se evidenció que el proyecto no contaba con la instalación exclusiva de la sub- estación eléctrica, el proyecto se encontraba energizado mediante conexión provisional de la red de distribución local, en tal sentido se convocó a un comité técnico para evaluar la conveniencia de instalar dicha sub-estación, la cual se realizó el día 9 de diciembre de 2022 definiendo con base en este criterio de la Interventoría la no necesidad de dicha instalación.
- Se realizaron en el mes de noviembre, visitas de campo al proyecto fontana la unión elaborando un informe uno a uno de la infraestructura instalada (postes, redes y retenidas), las cuales fueron reportadas en los informes presentados.

[1] ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. “(...) PARÁGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.”

Se encuentra publicado por parte de la Administración Municipal público el informe técnico y financiero para la viabilidad de ampliación del contrato de concesión No. 001 de 2003.

Para concluir con esta observación, el Municipio de Calima El Darién (V), no acepta el hallazgo con incidencia disciplinaria y fiscal, por cuanto no existe ilicitud sustancial y la inexistencia del daño fiscal, de acuerdo a los deberes funcionales que rigen la función pública, se dieron los resultados buscados para el cumplimiento de los fines del Estado. Por lo que el ente de control, deberá reconsiderar la razón que se tiene frente a lo manifestado como incumplimiento para que sea valorado como contrario a derecho o al orden jurídico, pues lo que se reprocha no es en sí el quebrantamiento de la norma sino el resultado de su actuar, y como puede observar el equipo auditor el resultado de la gestión que se cuestiona fue positivo tanto para el Municipio, como para la comunidad, el deber funcional no fue un obstáculo para que el Estado alcance a través de la función pública los fines que la Constitución Política ha previsto para Colombia al definirla como un Estado Social de Derecho.

<https://www.calimaeldarien-valle.gov.co/noticias/estudio-juridico-tecnico-y-financiero-viabilidad-de>

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Antes de realizar un análisis de las premisas de la defensa, se establece que, se trajeron abundantes documentos probatorios, pero algunos de ellos, no abren, como en el caso de la carpeta denominada 4. Plano Fotométrico, en el caso de los archivos de memorias de cálculo y archivos CANT, se desconoce la procedencia de la información relacionada en los mismos, pues no tiene registro de la fecha de su realización o quien las suscribe, adoleciendo de firma de quien realizó tal trabajo.


En cuanto al archivo cálculo DPEA se desconoce la fecha de creación del documento pues no lo tiene incorporado, y dentro del contrato revisado no aparecía.

Información aportada para estudio



Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
Carpeta de archivos					
DF_APCAL VIAS RURALES-V1 (VEREDAS LA FLORIDA, LA GAVOTA, EL MIRADOR, RIO BRAV...	219.715.933	179.629.823	Carpeta de archivos		
ANEXOS PUNTO 14.pdf	75.133.621	72.098.590	Microsoft Edge PD...	08/11/2023 13:57	F8D38688
DESIGNACIÓN SUPERVISOR INT. ALUM PUB..pdf	1.079.060	1.042.002	Microsoft Edge PD...	07/11/2023 17:45	D53FA4CE

Aceptación de la oferta en adelante, se observa el informe calendado en el mes de septiembre, el archivo contiene 455 folios, que incluyen desde la aceptación de la oferta en adelante:

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	NIT. 890.309.611-8	Código: 310	
MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	MIPS	Fecha: 01/01/2020	
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		Versión: 1	
PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 1 de 6	

CONTRATO No. 310-13-06. 166 DE 2022

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN - VALLE DEL CAUCA Y VICTOR JAIME CASTAÑO ACOSTA

Calima - El Darién (Valle del Cauca), tres (03) de Agosto de 2022

Señor:
VICTOR JAIME CASTAÑO ACOSTA
C.C. No. 10.016.399 de Pereira
Dirección: Carrera 25 # 25-36 Tulua Valle
Teléfono: 3006127072
Correo electrónico: vica724@hotmail.com

REFERENCIA: ACEPTACIÓN OFERTA INVITACIÓN PÚBLICA No. 310-13-07.043 DE 2022

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito comunicarle la aceptación de su oferta en la invitación Pública de la referencia de conformidad con el numeral 6 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015, en los siguientes términos:

- OBJETO CONTRACTUAL:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 001 DE OCTUBRE 06 DE 2003. DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN VALLE DEL CAUCA Y LOS DEMAS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS O DERIVADOS DE LA CONCESIÓN, VIGENCIA 2022
- ACTIVIDADES A DESARROLLAR:** Para el logro del objeto el Contratista deberá cumplir con las características mínimas requeridas en la invitación pública.
- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**
 - Dar estricto y oportuno cumplimiento al objeto contractual y a las condiciones técnicas exigidas.
 - Presentar los informes requeridos por el área supervisora para el seguimiento de las tareas encomendadas;
 - Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por razón del contrato llegue a conocer, obligación deberá ser cumplida por el CONTRATISTA aún después de terminado el contrato;
 - Una vez finalice el objeto del contrato, el CONTRATISTA deberá entregar al supervisor del mismo, un informe consolidado de las actividades realizadas durante su ejecución indicando en el mismo los asuntos asignados, tramitados y pendientes por resolver, así como los archivos físicos y magnéticos que se hubieren generado durante la ejecución del mismo, que deberá reposar en el área supervisora, cuando a ella hubiere lugar.

Memorias aportadas en contradicción

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Auditoría Contraloría Vigencia 2022-20231110T203019Z-001.zip

Archivo Órdenes Herramientas Favoritos Opciones Ayuda

Añadir Extraer en Comprobar Ver Eliminar Buscar Asistente Información Buscar virus Comentario auto extraíble

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
2. Descripción del Proyecto AP	4.521.742	2.532.392	Carpeta de archivos		
3. Memorias de Cálculo	9.462.709	5.134.933	Carpeta de archivos		
4. Plano Fotométrico	139.805.475	109.239.143	Carpeta de archivos		
5. Archivo CANT	261.810	227.040	Carpeta de archivos		
6. Declaración de Cumplimiento	6.588.297	5.764.370	Carpeta de archivos		
7. Uso Racional de Energía en AP	1.806.789	1.404.421	Carpeta de archivos		
8. Cálculo Factor de Mantenimiento	13.583.627	11.429.457	Carpeta de archivos		
9. Información técnica	33.919.329	31.080.172	Carpeta de archivos		
10. Validación de Software	15.210.354	14.817.896	Carpeta de archivos		

En el archivo Descripción de Mantenimiento, archivo de cálculo de mantenimiento, se pudo observar que, no se integra al mismo el Plan de Mantenimiento Ambiental de la empresa, simplemente se enuncia, éste y otros documentos no tienen fecha de presentación ni forman parte del expediente contractual. Se exalta la importancia de tales insumos, para conocimiento del alcance de las obligaciones del concesionario, no obstante, las evidencias solo se traen en contradicción y algunos de los documentos aportados, tienen fecha de marzo o abril de 2022, a pesar de que el contrato que nos ocupa inició en agosto.

Auditoría Contraloría Vigencia 2022-20231110T203019Z-001.zip

Archivo Órdenes Herramientas Favoritos Opciones Ayuda

Añadir Extraer en Comprobar Ver Eliminar Buscar Asistente Información Buscar virus Comentario auto extraíble

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	M
9.1 Catálogo	5.256.408	4.640.251	Carpeta de archivos	
9.2 Instructivo de Montaje	411.672	393.119	Carpeta de archivos	
9.3 Fichas Técnicas	5.514.414	4.530.417	Carpeta de archivos	
9.4 Características de Luminarias	26.142	11.898	Carpeta de archivos	
9.5 Protocolos de Pruebas	19.339.704	16.442.740	Carpeta de archivos	
9.6 Certificado de Producto - RETILAP	1.295.300	1.074.884	Carpeta de archivos	
9.7 Cartas de Certificaciones	3.406.500	3.354.410	Carpeta de archivos	
9.8 Manual de Mantenimiento	54.842	51.081	Carpeta de archivos	
9.9 Certificados ISO Roy Alpha	614.547	581.372	Carpeta de archivos	

Todos estos archivos, debieron ser parte de la información del contrato, pues son la razón de ser de la interventoría, y de sus pagos, generando un presunto control que no se evidenció. Se entregaron archivos que no abren (características de luminarias), fichas técnicas e incluso soportes de la certificación del producto a RETILAP, que se hacen por una persona jurídica cuya certificación ISO se encontraban vencidos (el último en septiembre de 2021).

Se compartieron varios archivos que se adelantan en papelería de Oxitech, de quien se desconoce en qué calidad trabaja dentro de la concesión, pues no aparece información debidamente sustentada al respecto.

El link que se compartió en la contradicción como anexo, trata de la publicación del estudio en la página web de la entidad, que se realizó apenas el 09 de noviembre de 2023, cuando

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

el estudio se realizó en el año 2021, es decir, sin que se cumpliera el principio de Transparencia y publicidad de que trata la norma específica en la materia.



Adentrándonos en las premisas de la defensa, se dirá inicialmente, que no es de recibo que se indique que la observación señala el pensamiento del equipo auditor, como quiera que el informe es resultado de análisis técnicos de la información suministrada, también de la que no existía debiendo estar al momento de la ejecución la auditoría, y varios fueron los requerimientos realizados en la materia, sin que los soportes se entregaran en la forma y términos que establecía el mismo Otro sí No. 2 del contrato, y en cumplimiento de las obligaciones que devienen del contrato de la interventoría.

Respecto de la información traída en la contradicción y que se expuso en anteriores párrafos, queda claro que solo hasta el momento de presentar el derecho de defensa se incorporaron los documentos que corresponden al seguimiento eficaz, por parte de la Interventoría, a pesar de que el pago por tal trabajo se hizo en la vigencia 2022. Que solamente se limitó a manifestar el contratista, que el acta de inicio de las actuaciones incorporadas en el Otro sí, estaba calendada en septiembre de 2022, sin tener en cuenta, que NO ES PERTINENTE un “ACTA DE INICIO”, como quiera que el Otro sí No. 2 es parte del contrato de concesión inicial, que ya se encontraba en ejecución y que el haber suscrito tal documento NO MODIFICA las condiciones exigidas por el municipio en el Otro Sí, que conllevaron a la extensión del plazo para que se realizara la inversión inmediata dentro de los 18 meses subsiguientes a la suscripción del mismo.

No se encuentra en discusión si efectivamente el contratista “allegó los certificados correspondientes en los cuales verifica la idoneidad del equipo de trabajo y el cumplimiento de las condiciones del proceso de mínima cuantía”, el problema radica en que el trabajo del denominado “Equipo de Trabajo” no se observa en el resultado práctico de la información entregada al municipio y que hace parte de los informes que sustentan los pagos realizados por el ente territorial. En los tres informes a los que se hace relación, se evidencia una absoluta falta de gestión desde el punto de vista jurídico, como quiera que se dejaron de

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

revisar aspectos administrativos de alta relevancia, como se trata del seguimiento de las obligaciones del concesionario, derivadas precisamente del Otro Sí No. 2, con el cual se prorroga el contrato por 10 años más y se incrementa el monto del reconocimiento económico en favor de un tercero, sometido a una CONDICION, claramente establecida, como lo es el cumplimiento de la inversión de que trató el estudio técnico en el plazo de 18 meses, contados a partir de la suscripción del Otro sí, y no desde el momento en que se suscribiera un “Acta de inicio” que no puede ser tal, pues el contrato se venía ejecutando, desde hace 19 años atrás. Los anexos se revisaron y nadie dijo que no se encontraban los 3 informes, pero si la obligación era de presentar informes mensuales, y el contrato inició en agosto según el acta suscrita, tenían que haberse presentado 5 informes y no se hicieron.

Cuando en la administración pública se nombra a alguien como Supervisor, este asunto debe ser notificado a la parte, como quiera que se le van a imponer una serie de responsabilidades que devienen de su seguimiento y control sobre un tercero contratista, minimizar la trascendencia del nombramiento, señalando que en el marco general se sobreentiende que el Secretario de Obras será el supervisor, es una falacia, pues los efectos de la Ley 1474 de 2011, no pueden darse, si no se prueba o hay soporte del nombramiento del nuevo secretario como supervisor de las actuaciones de la Interventoría.

No tiene recibo, el argumento de la defensa según el cual “el mismo contenido del otrosí suscrito entre las partes el 28 de octubre del año 2022, si se hace referencia a la solicitud presentada por la Secretaría de Obras en los numerales 5 y 8 de los considerandos, en esa misma calenda para la viabilidad de la prórroga del contrato de interventoría en orden de garantizar la vigilancia continua a la prestación del servicio”, como quiera que el Manual de Contratación de la entidad y la Ley misma, señalan la necesidad de que el supervisor manifieste a la administración de manera previa al término del plazo contractual, que se requiere de tal actuación, justificar que en el mismo otro sí, se sustenta la necesidad es una inconsistencia de fondo que simplemente recalca que se hicieron actuaciones de hecho. Aunado a lo cual, se incumple el procedimiento previsto al respecto en el manual de contratación:

Para la asignación de un supervisor, el Secretario de Despacho deberá tener en cuenta que el perfil profesional del servidor público designado se ajuste al objeto del contrato cuya supervisión se le asigna y tendrá en cuenta además, si este cuenta con la disponibilidad de tiempo y logística para desarrollar correctamente sus funciones.

Cuando se presenten faltas temporales del supervisor, por cualquier causa, el ordenador del gasto deberá nombrar un suplente durante el tiempo que dure la ausencia del supervisor principal. En caso que la falta sea definitiva, se debe nombrar un nuevo supervisor.

Hay que señalar adicionalmente, que la persona encargada como secretario de Obras, no ostenta el perfil profesional idóneo, ni siquiera es técnico en alguna de las áreas afines a la Ingeniería, sin embargo, es el supervisor.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Aunado a lo cual, para efectos de la prórroga no se tuvieron en cuenta, los lineamientos del manual de contratación que sigue vigente, en donde se determina que la modificación del contrato obedecerá a documento presentado por la Secretaría de obras con informe actualizado, recomendando la suscripción de la modificación o adición, al cual se adjuntarían los documentos que abajo se señalan y de los cuales, no hay soporte alguno en el expediente contractual, ni se trajo soporte alguno para su evaluación:

6. Pueden anexarse todos aquellos documentos que soporten el modificatorio.

4.1.2.2. Adición

Quando hablamos de esta figura hacemos relación a la inclusión, inyección de más dinero al contrato inicial en aras de garantizar la existencia de recursos suficientes para continuar satisfaciendo la necesidad de la Administración. Esta categoría de modificación contractual no conlleva necesariamente al cambio de las especificaciones técnicas o circunstancias accesorias del objeto contractual inicialmente pactado, pero si hace necesario el presupuesto de más cantidad de objeto o más calidad del mismo.



Documentos necesarios para la adición:

1. Manifestación escrita del contratista en donde solicite la adición o acepte la intención de adición hecha por el Municipio de Calima El Darién con indicación expresa de la propuesta de presupuesto previsto para el efecto, el cual en todo caso deberá basarse en los precios de la propuesta inicial y en la fórmula de reajuste de precios que se haya establecido en el contrato, según el caso.
2. La manifestación escrita del supervisor y/o interventor del contrato donde justifica su concepto sobre la procedencia de la adición. En caso de que el contrato cuente también con un interventor, deberá adjuntarse el pronunciamiento e informe de este respecto de la adición pretendida, avalado por el supervisor.
3. Presupuesto oficial que soporta la adición suscrito por el supervisor y/o interventor.
4. Expediente completo del contrato o convenio.



CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

5. Informe actualizado del supervisor y/o interventor del contrato. Para el caso del informe del interventor, éste y sus anexos deben estar avalados por el supervisor.
6. Nuevo cronograma de trabajo que respalda la prórroga.
7. Expediente completo del contrato o convenio.
8. Informe actualizado del supervisor y/o interventor del contrato. Para el caso del informe del interventor, éste y sus anexos deben estar avalados por el supervisor.
9. Historial del contrato en donde se registre la información sobre el estado actual del contrato.
10. Pueden anexarse todos aquellos documentos que soporten la prórroga.

En el evento que un contrato, previa justificación, deba ser modificado en las condiciones estipuladas inicialmente, adicionado y ampliado, deberá cumplirse con los cada uno de los requisitos señalados anteriormente.

Los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales (Ver parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1508 de 2012), salvo las excepciones que establezca la ley, verbo y gracia el contrato de interventoría.

Verificando la información que antecede, podemos descartar la asertividad del argumento del ente territorial, que desconoce lo reglado dentro de su propio manual de contratación y nos remite a la Ley 80 de 1993, pues lo reprochado no fue el monto de la adición de la prórroga, sino la falta de sustento y cumplimiento por parte del municipio para que se validara tal actuación.

Nuevamente en su defensa, señala el municipio que se presentaron 3 informes acorde uno desde el 10 de agosto al 30 de Octubre, “un informe que correspondió a la prórroga del contrato firmado el día 28 de octubre según oficio de solicitud de ampliación entregado el mismo día por parte del Supervisor del Contrato” e informe final del 01 de noviembre al 15 de diciembre, cuando esos no fueron los compromisos contractuales, como queda plenamente demostrado en los estudios previos y en el punto 4.1 inciso C, de la aceptación de la propuesta los informes eran periódicos y con consolidados mensuales:

Estudios previos

0000083 del 24 de enero de 2022.	
4.1	FORMA DE PAGO
El municipio pagara en valor del contrato de la siguiente manera: Se pagarán cuotas fijas mensuales (mensualidades vencidas) previa entrega de informes de interventoría, acta de recibido a satisfacción por parte del Supervisor y se acredite el pago de la seguridad social por parte del contratista.	
4.2.	PLAZO: A partir de la suscripción del acta de inicio de hasta el 31 de diciembre de 2022

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

En la aceptación:

4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: En cumplimiento del objeto contractual el CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

4.1. PLANIFICACION: Son funciones de la interventoría relacionadas con la planificación las siguientes:

- a) Mantener como objetivo principal las condiciones mínimas requeridas desde el punto de vista normativo y contractual en cumplimiento de una adecuada y oportuna prestación del servicio de alumbrado público tendientes a garantizar: los niveles y calidades de la energía lumínica requerida en la actividad visual, la seguridad en el abastecimiento energético, la protección del consumidor y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos originados por la instalación y uso de sistemas de iluminación;
- b) Evaluar las exigencias y especificaciones mínimas para que las instalaciones de iluminación garanticen la seguridad y confort con base en su buen diseño y desempeño, así como los requisitos de los productos empleados en las mismas;
- c) Realización Informes periódicos y consolidados mensuales relacionado de forma integral con todos los aspectos inherentes al sistema de alumbrado público del Municipio;
- d) Revisión del contrato de Fiducia y de los informes presentados por la Fiduciaria encargada de la administración de los recursos;

4.2. TÉCNICAS: Dentro de las funciones técnicas se debe cumplir como mínimo con las siguientes actividades:

- a) Verificar la calidad del suministro de los materiales y elementos utilizados, en cumplimiento de la normatividad vigente;
- b) Velar porque las herramientas y equipos utilizados por el Concesionario estén conforme al tipo de actividad que se debe realizar;

Luego el contratista interventor, no venía ciñéndose a lo establecido desde la etapa precontractual del proceso, e hizo caso omiso de la periodicidad de los informes, se aclara que, aunque los pagos no fueron mensuales, ello no es óbice para el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, que como podemos evidenciar eran múltiples, en procura de brindar al municipio una pauta técnica y especializada en los distintos aspectos del contrato de Concesión:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

- 4.4. FINANCIERAS:** Son funciones de la interventoría relacionadas con la parte financiera las siguientes:
- a) Velar porque el flujo de caja mensual responda a los parámetros trazados con anterioridad dentro de la operación del servicio;
 - b) Verificar que los cobros que se realicen por concepto de tarifas de Alumbrado Público a la comunidad estén ajustadas a los parámetros trazados en los términos del Acuerdo de Concejo Municipal;
 - c) Reportar mensualmente el análisis y evaluación económica de las tarifas;
 - d) Revisar las cuentas de cobro presentadas a la fiducia con cargo al impuesto;
 - e) Llevar registro cronológico de pagos y deducciones que efectuó la fiducia por concepto de pagos;
 - f) Preparar y entregar mensualmente MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN, un informe del desarrollo financiero del encargo fiduciario que administra el recaudo del impuesto;
 - g) Revisar los ingresos por recaudo del impuesto de alumbrado público;
 - h) Supervisar el costo de operación del sistema de alumbrado público;
 - i) Efectuar la revisión a la facturación mensual del servicio de energía que abastece el sistema de alumbrado público.
- 4.5. OPERATIVAS:** Son funciones de la interventoría relacionadas con la operatividad las siguientes:
- a) Velar por que se realice y mantenga actualizado censo de luminarias;
 - b) Verificar y validar el Plan de inversiones y proyectos a ejecutar;
 - c) Velar por el manejo y disposición adecuado de equipos y materiales retirados del sistema;
 - d) Validar la existencia de equipos, herramientas y vehículos necesarios para el desarrollo del servicio;
 - e) Validar y efectuar seguimiento al plan de mantenimiento para el sistema de alumbrado público.
 - f) Efectuar el seguimiento y validación a los indicadores de prestación del servicio del sistema de alumbrado público.
 - g) Realizar, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de la operación del servicio, según el plazo y la clase de contrato. En dichas reuniones participará, por derecho propio, el Municipio de Calima El Darién. De dichas reuniones, se elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la interventoría.

Contrario a lo que se dice en el argumento traído vemos documentos que no fueron parte de la trazabilidad del contrato, y que acorde a su relevancia, implican perjuicio para las necesidades del municipio, en este orden de ideas vemos el documento denominado “Proyecto Vías Rurales”, el cual fue suscrito en exclusiva por el Concesionario, en donde señala, inconvenientes para el inicio de labores, hecho que no se plasma de manera específica dado el impacto en las obligaciones del Otro Sí No. 2:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR



electroingeniería

trabajando con buena energía

Santiago de Cali, 19 de abril de 2022

Señor(s).
Alcaldía Municipal de Calima El Darién - Valle Del Cauca

Asunto: Proyecto Vías Rurales: Vereda La Florida, Vda La Gaviota, Vda El Mirador & Vda Rio Bravo.

Cordial Saludo,

Se adjunta a la presente **los objetivos, alcance y modificaciones adicionales que se contemplan** para el Proyecto en asunto de Municipio de Calima El Darién (Valle del Cauca) con el cual se busca aumentar la seguridad, productividad y mejoramiento de la calidad de vida de la población. El proyecto se ha desarrollado siguiendo las indicaciones suministradas.

OBJETIVO	"Realizar los diseños fotométricos contemplados en el proyecto de alumbrado público del municipio de Calima El Darién".
ALCANCE	"Cumplir con las normas técnicas y el uso eficiente de energía con los diseños de iluminación".
REQUERIMIENTOS ADICIONALES	No se cuenta con un documento formal de datos básicos; por lo cual, nos regimos a los acuerdos determinados en los recorridos interdisciplinarios realizados en los años 2020, 2021 y 2022, en donde se validaron obstáculos y viabilidad de instalación por redes de media tensión.

El diseño se realizó con productos certificados los cuales cumplen con las exigencias del RETILAP y normatividad internacional (CIE 140 Y 115). **Toda la información relacionada con las luminarias usadas para el desarrollo del proyecto lo podrá encontrar en la carpeta #5 del paquete entregado.**

Con base a los diseños desarrollados, los datos obtenidos de los programas ULYSES, DIALUX o LITESTAR 10, y después de plasmar la información en el plano del proyecto se hace entrega de las memorias de cálculo del proyecto y documentación adicional que se generó en el desarrollo de este.

Electroingeniería como principal responsable en la entrega de documentación requerida en la aprobación de proyectos de alumbrado público para la interventoría del Municipio de Calima El Darién aclara:

Que todo documento entregado a revisión cumple con las especificaciones técnicas del RETILAP y que en caso de que este sea aprobado por interventoría por medio de correo y/o oficios, se dará por entendido que se aprueban todas las condiciones sobre el cual este es entregado.

Quedamos atentos a cualquier información adicional que estimen conveniente.

Atentamente

Simplemente procede el Concesionario a manifestar que en ausencia de un documento formal de datos básicos se ceñirán a lo establecido en los "acuerdos determinados en los recorridos interdisciplinarios realizados en los años 2020, 2021 y 2022", así que de manera unilateral se introdujeron cambios que se desconocen, pues ni siquiera se documentaron tangencialmente, para conocer en qué consistían tales acuerdos, y su impacto en las obligaciones programadas, acorde al Estudio Técnico y al Otro Sí No. 2. Hecho que siendo Información Técnica de alta relevancia no se incluyó en los informes.

Aludir a que el componente jurídico del contrato correspondió "al acompañamiento y desarrollo de oficios determinados en el proceso de inexequibilidad del Acuerdo No. 015 de 2021, actuaciones frente a los procesos de revisión a los diferentes modelos para implementación de acuerdo municipal, verificación de las actuaciones frente al proceso de devolución de recurso, cobro de cartera" es un exabrupto jurídico, sencillamente porque no es factible que se reduzca el acompañamiento en tanto exista el contrato, pues en los estudios previos no se segmentó en forma alguna tal apoyo del equipo de trabajo, en los informes entregados solo se hace mención de que hay que hacer devolución del recurso pero no se presentó ni se trajeron a contradicción los soportes de tales actuaciones y en cuanto al cobro de cartera, el municipio contrató a comisión de éxito a persona natural para

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

gestionar la cartera de todos los tributos municipales, incluido el impuesto de alumbrado público, por ello y por la ausencia de una base de datos para el cobro y su manejo, que fue ampliamente requerida y no aportada, carece de sustento tal aseveración. Sin tener en cuenta que, las pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual no se revisan para evidenciar si cumplen con los amparos exigidos por el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.3.2.9 y sin que de ello se haga mención en lo absoluto, por cuenta del apoyo jurídico.

Dentro de su respuesta señala que en el informe final se conciliaron los valores trasladados a la Fiduciaria de Occidente por el operador de Red, lo que implica una falta de ejecución por su parte ya que no solo recaudaba el operador mencionado (Celsia), sino que falta la información del recaudo del cliente especial (Vatia- Hidroeléctrica), que ni se conoce ni se entregaron soportes de las gestiones del Interventor.

Se hace alusión a que “El valor trasladado a la fiduciaria de Occidente es abonado al Concesionario con cargo al valor de remuneración mensual, el cual presenta un déficit y por ende un valor como cuenta por pagar a la concesión; la cartera generada al Concesionario se determina en el siguiente cuadro”. Sin embargo, en cada uno de los informes se omite incluir el valor de los rendimientos generados en la Fiducia y que siendo del Estado no acrecen los valores abonados. También se alude a dos tablas que no se incorporaron a la respuesta.

Ante el reproche por la falta de seguimiento a la inversión que debió iniciar la Concesión de manera inmediata a partir de la suscripción del Otro sí, se limita a repetir que dentro del informe No. 3 se realizó “un avance general de ejecución de las obras contempladas en el Otrosí No. 2 correspondiente al 57% de avance; dicho avance se encuentra detallado en el numeral 1.4 Proceso de Modernización Municipio Calima el Darién; otrosí que se encuentra dentro de los tiempos establecidos del proceso de ejecución teniendo en cuenta el acta de inicio suscrita el 20 de septiembre de 2022”: Ésta sin duda, es una falacia argumentativa, como quiera que, no hay otro sí del Otro sí No. 2, no hay un sustento jurídico que haya soportado porque si el plazo para la ejecución de las obras era de 12 meses, prorrogables por una sola vez por 6 meses más, y, como resultado de un evento de caso fortuito o fuerza mayor documentado, que no se sustentó, pueda decir el Interventor que está el Concesionario dentro de los términos establecidos.

Ello precisamente, demuestra la falta de acompañamiento jurídico en el seguimiento de las obligaciones contractuales del contrato a intervenir, en donde el Concesionario se benefició del dinero del municipio y de la prórroga por 10 años más del contrato; sin que haya cumplido con lo pactado, en modo ni forma. Con el agravante, de que esta percibiendo unos dineros y tiene un saldo a favor que crece continuamente en detrimento del erario público (desequilibrio económico), sin que se haya allanado al cumplimiento de lo literalmente pactado.

La publicación extemporánea del estudio técnico, no permite per se, el saneamiento del vicio de no haber sido publicado al momento de su realización y previo al momento de la prórroga del contrato.

Finaliza su argumentación señalando la inexistencia de ilicitud sustancial y la inexistencia de un daño fiscal, aludiendo que se dieron los resultados de los fines del Estado, puntualizando que lo que se reprocha no es la violación de una norma, sino el resultado del

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

actuar del municipio...Lo que no es cierto. Se evidencia con lo traído a la contradicción, que no se realizaron los ajustes pertinentes desde el aspecto integral del seguimiento a las obligaciones del Concesionario y más bien se “justifican” las actuaciones del mismo sin amparo dentro del Otro Sí No. 2, cuyas obligaciones eran bien claras y no se cumplieron oportunamente.

Dentro de las falencias del contrato está el reiterado incumplimiento de las disposiciones de los estudios previos y del Manual de contratación especialmente lo determinado en los numerales, 1.3.4; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.13; 1.3.14; 1.3.21; 1.3.24.

13. En la Ejecución del Contrato

1. En los contratos de interventoría incluir como obligación del contratista suscribir las adiciones y prórrogas a que haya lugar.
2. Incluir en los pliegos de condiciones y en las invitaciones públicas la cláusula de indemnidad como una obligación del contratista, conforme a la cual se pacte la obligación del contratista de mantenerla a la entidad libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
3. Incluir como obligación del contratista el pago oportuno a sus proveedores so pena de incurrir en una posible sanción.
4. En el expediente del contrato deben reposar los documentos originales que se generen durante todo el Proceso de Contratación.
5. La designación de supervisión debe hacerse a más tardar en la fecha de inicio del contrato. Es designación de supervisión no delegación y debe hacerse por escrito.
6. No solo la garantía que se constituye para el inicio del contrato debe ser revisada y aprobada, sino también aquellas que se expiden para las modificaciones al contrato, esto es, para adiciones, modificaciones, prórrogas, suspensiones y reanudaciones.

10. En aquellos casos en que el contrato cuente con interventoría externa se debe proyectar como obligación del interventor la elaboración del acta de liquidación del contrato.

Cuando durante la ejecución del contrato hay un cambio de supervisor, inmediatamente se debe designar otro funcionario que se encargue de dichas funciones previo informe que entregue el supervisor saliente, o si la ausencia del supervisor es temporal deberá designarse un supervisor suplente únicamente por el tiempo que dure la ausencia del supervisor principal.

11. En la minuta del contrato debe señalarse el término para liquidar el contrato.

12. Toda modificación a los contratos que implique una modificación del riesgo debe ser notificada a la compañía aseguradora que expidió la póliza.

13. Durante la ejecución del contrato se deben revisar y monitorear los riesgos de la contratación y adoptar las medidas necesarias para mitigarlos.

14. La suspensión del contrato, la revisión de precios, la potestad de modificación unilateral de los contratos, son prácticas de buena gestión reguladas en la ley 80 de 1993 o delimitadas por la jurisprudencia, que utilizadas correctamente pueden dar solución a las contingencias en forma ágil y significar una negociación ventajosa o ahorro de recursos públicos.

15. La revisión periódica de precios es una facultad que puede usar la administración para impedir que se configure la ruptura del equilibrio económico.

16. El supervisor debe asegurar que las garantías se encuentren vigentes por el término previsto en el contrato, de ahí la importancia de comunicar a las compañías aseguradoras las suspensiones y reactivas de los contratos.

21. Todo requerimiento efectuado a un contratista debe ser por escrito e ir con copia a la compañía aseguradora.

22. Suspendido un contrato no pueden ejecutarse actividades, ello implica asumir riesgos, además de que contraría la motivación misma de la suspensión.

23. Los consorcios y uniones temporales deben constituir un RUT para cada contrato y una vez liquidado deben cancelarlo.

24. Las adiciones deben estar soportadas el presupuesto y debe indicarse si afectan o no la forma de pago pactada en el convenio inicial.

25. Se mantendrá el equilibrio del contrato durante toda su ejecución, por ello la entidad reconocerá y pagará los imprevistos en los contratos a los que haya lugar, debidamente justificados.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Se concluye con la revisión de las evidencias aportadas en la contradicción que no se prueban las circunstancias de hecho reprochadas, y que dieron lugar al incumplimiento de las labores propias de la interventoría. Originando un detrimento que no solo se probó sino que es evidente ante la falta de informes del contrato y de los soportes idóneos en el seguimiento, aunado a las falencias en soportes al momento de la realización del Otro Sí.

Así las cosas, se sostiene la observación pasando a ser un hallazgo de idénticas connotaciones.

15.observación administrativa con presunta connotación Disciplinaria - Gestión de la Dimensión de Control interno en la entidad

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Se evidenciaron deficiencias en el seguimiento y realización de las auditorías internas, pues durante la vigencia 2022, solo se realizó una sola auditoría a la contratación, cuando los riesgos del ente territorial se extendían en distintas áreas, como consecuencia de la falta de procesos y procedimientos. Por tanto, no se realizó un proceso de planeación y seguimiento de los distintos riesgos de la entidad.

De otra parte, también se evidenciaron falencias que corresponden a la primera y segunda línea de defensa del municipio, pues no se realizó una gestión de los riesgos por cada una de las secretarías e igualmente el seguimiento para minimizar los mismos. No se observaron seguimientos y actualizaciones sobre los riesgos desde la secretaría de planeación, lo que implica que, para la vigencia, se desconocieron riesgos que se materializaron ante la inexistencia de gestión, no solo por la alta dirección sino también por falta de apropiación sobre el tema por parte de los funcionarios de la entidad.

Como consecuencia de lo anterior, no existe conexidad al interior del ente territorial, que permita que funcione la dimensión de Control Interno.

Fuente de criterio y criterio

NIA 500 (Norma Internacional de Auditoría), a partir del 2009, y de la Ley 87 de 1993 artículos 1 y 2, reglamentada por el Decreto 648 de 2017; modificado por el Decreto 1083 de 2015, Artículos 2.2.21.3.1, 2.2.21.3.11; 2.2.21.4.7; 2.2.21.4.8 y 2.2.21.4.9.

Causa

Deficiencias en el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditorías internas de la entidad y auditorías internas y planes de mejoramiento inefectivos.

Efecto

Riesgos institucionales que se materializan y afectan el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

Las circunstancias descritas generan una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

OBSERVACIÓN 15: Observación administrativa con presunta connotación Disciplinaria
- Gestión de la Dimensión de Control interno en la entidad.

Se manifiestan deficiencias en el seguimiento y realización de auditorías internas, por solo programarse una auditoría para la vigencia 2022, identificando no conexidad al interior del ente territorial en lo que respecta a la implementación de los componentes del MECI, para lo cual se contradice lo observado de la siguiente manera:

Entendiendo que a partir de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, El Modelo Estándar de Control Interno MECI es una dimensión la N° 07 cuyo atributo es promover el mejoramiento continuo de las entidades, estableciendo acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste.

En aras a lograr dichas acciones el Comité Institucional de Control Interno en acompañamiento de la Asesora de Control Interno, ha venido desarrollando la implementación de la Política de Control Interno, conforme los métodos, lineamientos y acciones determinados en los manuales operativos para la implementación de la Dimensión determinados en el micrositio MIPG de la Función Pública.

Desarrollando sus responsabilidades conforme el Manual Operativo Criterios Diferenciales anexo 2,3,5,6 y 7 para la implementación de los cinco componentes i) Ambiente de Control; ii) Evaluación del Riesgo; iii) Actividades de Control; iv) Información y Comunicación; v) Actividades de Monitoreo.

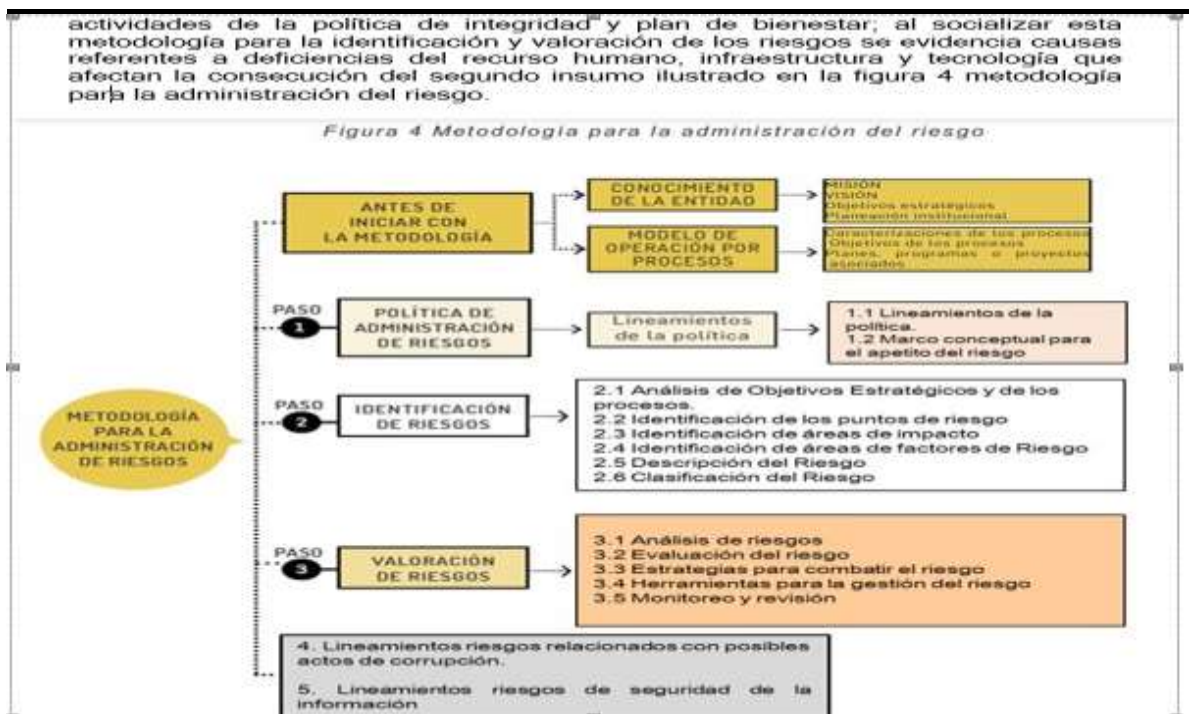
Respecto de los cuales la Entidad ha ejecutado las siguientes acciones:

1. Ambiente de Control:

1.1 La Asesora de Control Interno propone el Plan Anual de Auditorías basado en riesgos a 31 de enero de 2022 en razón a los riesgos observados en el informe preliminar contestado a la CDVC y la auditoría interna realizada en la vigencia anterior, esta modalidad de Auditoría De Cumplimiento Gestión Contractual Vigencia 2020, quedó en firme con el informe final en fecha FEBRERO 2022, documento que evidencia las debilidades en la gestión contractual de la entidad, razón por la cual el CICI aprueba dicha auditoría además de las actividades de seguimiento determinadas en dicho plan; siendo pertinentes las actividades determinadas teniendo en cuenta que no se cuenta con personal multidisciplinario como lo determina la Ley para las OCI. Por otro lado lo referente a la administración del riesgo en la entidad; es menester informar que la metodología para la administración del riesgo determinada en la Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en Entidades Públicas vr5 de la Función Pública; ha venido siendo desarrollada por el Secretario de Planeación en la Entidad en acompañamiento con la Asesora de Control Interno, realizando el primer paso de la guía, un análisis inicial relacionado con el estado actual de la estructura de riesgos y su gestión en la entidad, donde se construyó un

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

documento desde el punto de vista estratégico, adoptado en fecha 02 de marzo de 2022 Política de Administración del Riesgo y socializada mediante circular N° 09 de 25 de marzo de 2022, emitida por el secretario de gobierno de la época DR. Carlos Arturo Contreras y de cuya actividad se adjunta el material didáctico socializado en dicho espacio determinado con ocasión de la ejecución de las



El Modelo de Operación por Procesos es un producto en construcción de manera muy pausada en razón a la carencia de personal idóneo e itinerancia de las actividades de apoyo a la gestión y desarticulación de las obligaciones con este tipo de actividades de levantamiento de procesos que fueron identificadas respecto del personal contratista de la entidad, ya que al iniciar el proceso de identificación de los riesgos por parte de las secretarías de despacho y en acompañamiento de la Asesora de Control Interno, y el enlace designado por la Secretaría de Transparencia de la Gobernación del Valle, de forma virtual y presencial se genera la necesidad de articular los procesos de manera armónica y complementaria, la estrategia institucional, la estructura y la planta de personal. Se adjuntan los informes generados

Presentada esta consecuencia se inicia la implementación de la política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos, con dos objetivos claros para la administración: Comprender muy bien la situación por la que atraviesa la entidad. Por otro lado, hacer un ejercicio de diseño o rediseño en el cual se reconozcan los esfuerzos y condiciones en los que se ha incurrido en el tiempo. Para facilitar esta implementación se suscribe con la

Escuela Superior de Administración Pública un acta de entendimiento con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la administración municipal. (Proceso en ejecución).

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

2. Evaluación de Riesgos: En acompañamiento con la secretaria de Transparencia de la Gobernación se realizó por parte de la suscrita la asesoría referente a la metodología para la identificación y valoración de los riesgos de corrupción. Se adjunta informe y link de mapa de riesgos de corrupción.

3. Actividades de Control: la evaluación de los diseños, en el entendido que se construyeron en la vigencia 2022 dichos riesgos, su análisis de verificación se determinó ya con la periodicidad identificada para cada riesgo. Ejecutándose actividades de construcción de dichos controles una vez identificada la causa y las probabilidad e impacto y nivel de riesgo.

Corolario de lo anterior puede evidenciarse que lo determinado por Función Pública, líder en la modernización y el mejoramiento continuo de las instituciones públicas, en lo que respecta a la implementación del MECI en la entidad fue que si existió mejora continua durante la vigencia 2022 en lo que respecta a la dimensión de control interno, afirmación soportada en los resultados de la medición en el Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión, el cual mide la gestión y desempeño institucional frente al MECI, fue el siguiente vigencia 2022: Dimensión 7: puntaje 73,5



COLOMBIA VIDA **MEDICIÓN** **Resultados Índice de Desempeño Institucional**
 Octubre 2023 - Versión 1

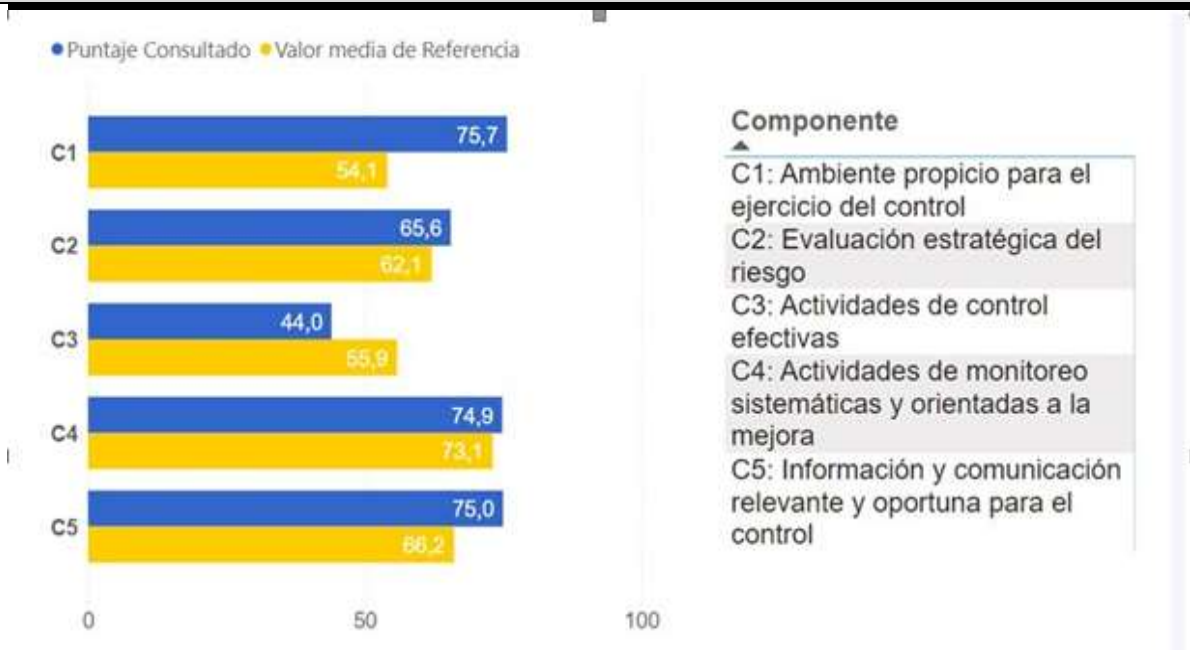
Nombre de la Entidad:

Consulte por el nombre completo de su Entidad. Ejemplo: "ALCALDIA DE SOGAMOSO"

Tenga en cuenta que solo podrá consultar los resultados de las políticas que aplican particularmente a cada entidad, de acuerdo con los criterios establecidos por cada líder de política; por ejemplo, la política de Mejora



RESPUESTA DE LA ENTIDAD



Estos resultados son productos de las variables de desempeño institucional definido por cada líder de política y por medio de las cuales se crean los estándares lógicos para evidenciar el fenómeno de estudio, que en este caso es el desempeño en la política de Control Interno.

Es por lo anterior que se manifiesta que si bien es cierto la implementación de la dimensión de control interno, se encuentra en un nivel intermedio, no es menos cierto que hablar de una incidencia de connotación disciplinaria no es aceptable por esta administración ya que los servidores públicos de la primera y segunda línea de defensa al igual que la tercera línea han desarrollado conforme su deber funcional y los insumos de personal y tecnológicos lo necesario y suficiente para que se avance en la implementación de esta política de control interno, solicitándoles amablemente que su dictamen respecto de la implementación de la dimensión de control interno tenga en cuenta que estamos dando continuidad a las actuaciones administrativas tendientes a lograr la preservación de los recursos del Estado y su manejo eficiente y eficaz como lo manda la constitución. Pues si bien es cierto nuestro avance es lento y en algunos casos traumático por la multiplicidad de funciones y sectores en un solo empleo o dependencia dichas actuaciones en la vigencia 2022 por parte de los servidores públicos de las líneas de defensa de la entidad no generaron transgresión suficiente para afectar la buena prestación del servicio público y quebrantar el funcionamiento del Estado, por lo conceptuado como observación. Siendo pertinente rogar a este equipo de auditoría descartar la incidencia disciplinaria ya que es palpable que las conductas endilgadas no tuvieron repercusión en el conglomerado social afectando su derecho a acceder a la prestación de los servicios del ente territorial, además de contar con servidores públicos que conocen de los valores del servidor público en este caso lo referente a la diligencia considerando nuestras actuaciones asignadas de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado. Soportes documentales:

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

1. Acta de aprobación del plan anual de auditorías vigencia 2022
2. Circular N° 09 de 25/03/2022
3. Material de socialización de la política
4. Informe anual de asistencia técnica para la alcaldía por parte de la oficina de transparencia a dic 2022
5. Acta de entendimiento Escuela Superior de Administración Pública.
6. Excel resultado FURAG vigencia 2022

2. circular N° 09 emitida por el secretario de Gobierno en el año 2022 25 de marzo con su recibido por parte de los funcionarios en donde se socializa la política de administración de riesgos. así como del informe de asistencia técnica recibida por la Secretaría de Transparencia de la Gobernación del Valle

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

El modelo estándar de control interno es un sistema integrado por el esquema de la organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad. En este orden de ideas como se pudo constatar que los procedimientos de la entidad están desactualizados, que apenas se está en la construcción del manual de operación por procesos, como lo manifiesta la entidad en su respuesta, procesos estos que son fundamentales dentro del sistema de control interno.

El sistema como tal no logro identificar la materialización de riesgos graves como fue, que su sistema financiero no tuviera identificadas las propiedades del municipio, que solo con la presencia del grupo auditor la entidad tuviese certeza a través los certificados de tradición, riesgos como sentencias en contra del municipio sin cifras reales dentro de los estados financieros. Deficiencias en la supervisión de los contratos. La entidad como medio de defensa presenta acta de aprobación del plan de auditorías, circular 09 de MIPG, Informes finales de la secretaria de transparencia, asistencia técnica de la misma, presentación de los riesgos.

Resultados MECI del territorio, documentos, estos con los que se intenta desvirtuar la observación.

El sistema de control interno del municipio es ineficiente porque su estado de evaluación por parte de asesor interno es inexistente.

Por lo anterior se confirma la observación y quedará como un Hallazgo administrativo disciplinario.

16. Observación administrativa con presunta incidencia Disciplinaria- Planeación y seguimiento de los contratos de la muestra

Condición (situación detectada de incumplimiento):

En los contratos de la muestra, se detectaron las siguientes inconsistencias de las actuaciones contractuales:

Etapas Precontractual

En los estudios previos no se evidencia en el Análisis del sector, sustento que permita conocer cómo se establecieron los precios de las actividades a contratar y que permiten llegar al precio estimado del contrato, pues no se registra estudio de mercado. De otra parte, corresponde a un documento “tipo” en el caso de los contratos de prestación de servicios, otro tanto ocurre en materia de los riesgos de la contratación, ya que se toman los mismos riesgos en todos los contratos, con pleno desconocimiento o evaluación de las variables de uno u otro objeto contractual.

Los expedientes incumplen archivo documental, no tienen orden cronológico de las actuaciones del expediente, así las cosas, aparece primero la solicitud de pago al contratista y posteriormente el informe de éste con sus correspondientes soportes de actuaciones realizadas.

Etapas Contractual: En los contratos de la muestra la publicación en el Secop de la suscripción del contrato, se hizo por fuera del término señalado por la ley para tal fin.

Las Pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual en los contratos Nos. 310-13-06-121-2022 y 310-13-06-182-2022, no contienen los amparos expresos de daño emergente y lucro cesante; contratistas y subcontratistas; vehículos propios y no propios, en general los amparos dispuestos en la norma, sin embargo, se aprueba en acto administrativo que suscribe el alcalde.

No se observan registradas las labores de seguimiento y control desplegados por el supervisor del contrato, más allá del formato preestablecido para tal fin.

Inconsistencias de cumplimiento del manual de contratación, en relación con el informe del supervisor solicitado para la prórroga del contrato principal, en materia del plazo mínimo determinado para su solicitud.

Como podemos observar, hay una serie de falencias, que son del resorte de la planeación y también del supervisor, cuyas labores de seguimiento no son plenamente evidenciadas, pues no quedan registradas en la trazabilidad de los expedientes, y que podrían lesionar la adquisición del bien o servicio que pretendía contratarse.

Fuente de criterio y criterio

Con estas actuaciones se lesionan la Ley 594 de 2000, artículos 1 a 4, 11 a 17; Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 13, 23 y 24, Ley 1474 de 2011, artículos 82 a 84; Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.2.1.4 Contratos en sus componentes pre y contractual (estudios previos, propuesta y minuta); manual de contratación; Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.1.1.7.1.

16. Observación administrativa con presunta incidencia Disciplinaria- Planeación y seguimiento de los contratos de la muestra

Causa

Esto sucede por una defectuosa planeación, y debilidades de seguimiento que implican la prórroga de los contratos, y aceptación de garantías sin cumplir los requisitos establecidos por el ente territorial y la ley.

Efecto

Ello genera, errores de la planeación, falta de trazabilidad del objeto contratado e inconsistencias en la supervisión, lesionando la satisfacción de la necesidad que generó los contratos.

Los hechos descritos constituyen una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

OBSERVACIÓN 16: Observación administrativa con presunta incidencia Disciplinaria-Planeación y seguimiento de los contratos de la muestra.

Según lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, es deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. Como en efecto se hizo dentro del proceso de contratación cuestionado.

Efectivamente, en los procesos media el respectivo análisis del sector, que atendiendo las cotizaciones, en caso de suministros, precios de gobernación en caso de obras, y análisis de apoyo a la gestión den caso de prestaciones de servicios, se determina en presupuesto de cada contrato.

Para el caso de los contratos de apoyo a la gestión y de prestación de servicios profesionales, se mantuvo una uniformidad de acuerdo a las actividades a desarrollar por quien ostentara un nivel educativo diferencial, es por ello que fue elaborado un análisis de mercado de apoyo a la gestión y uno para profesionales, atendiendo las condiciones de mercado, formación, profesionalización, experiencia que pudiera determinar unos rangos en cuanto a la asignación de honorarios, lo cual del marco normativo del sistema de contratación pública no se encuentra prohibido.

En cuanto al archivo documental, se trata de casos aislados, pues desde la oficina de contratación se ha tratado de dar una dinámica adecuada en cuanto a las disposiciones archivísticas.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

En cuanto a la póliza de responsabilidad contractual de dos contratos específicos, es deber manifestar que una vez revisado el clausulado de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual que amparan los contratos Nos. 310-13- 06-121- 2022, y 310-13-06-182-2022, adjuntas al expediente, en el amparo Básico de Predios, Labores y Operaciones se encuentran incluidos cobertura de perjuicios por daño emergente y lucro cesante, las cuales son aportadas con esta contestación

Precisamente, con el fin de unificar y mantener un sistema de gestión adecuado, se realizan los seguimientos contractuales creados para tal fin, no se comprende lo anunciado por el ente de control en cuanto a que no se evidencia seguimiento y controles desplegados de la supervisión, cuando estas acciones se encuentran en el resultado del informe de ejecución respectivo.

Una vez aclaradas las inquietudes que dieron origen al hallazgo, se solicita al ente de control eliminar el hallazgo planteado con incidencia disciplinaria, porque se puede observar que con el actuar del servidor público no incurrió en una conducta sobre la ILICITUD SUSTANCIAL, que determina que “la conducta del disciplinable será ilícita cuando afecte sustancialmente el deber funcional sin justificación alguna”, es decir que, la Ilícitud Sustancial del servidor público debe ser entendida como una afectación sustancial a los deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de los principios que rigen la función pública, en otros términos, aunque el comportamiento llegare a encuadrarse en un tipo disciplinario, pero se determine que el mismo en nada incidió en la garantía de la función pública y los principios que la gobiernan, deberá concluirse que la conducta está desprovista de ilicitud sustancia.


CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Antes de revisar el contenido de los argumentos del ente territorial, procedemos a revisar los soportes traídos a contradicción, encontrando que se trajeron solamente dos pólizas, la primera denominada póliza 121 de 2022 y la Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada Cumplimiento; las cuales se encuentran completas con sus anexos en donde se identifican los amparos y exclusiones que rigen el contrato de seguro, como quiera que dentro de lo planteado por el sujeto se acota “En cuanto a la póliza de responsabilidad contractual de dos contratos específicos, es deber manifestar que una vez revisado el clausulado de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual que amparan los contratos Nos. 310-13- 06-121- 2022, y 310-13-06-182- 2022, adjuntas al expediente, en el amparo Básico de Predios, Labores y Operaciones se encuentran incluidos cobertura de perjuicios por daño emergente y lucro cesante, las cuales son aportadas con esta contestación”, lo que no es el punto enrostrado, como quiera que se habló de todos los amparos expresos determinados en el decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.3.2.9, a saber: Contratistas, subcontratistas, vehículos propios y no propios, amparo patronal entre otros, que efectivamente no están cubiertos como se puede apreciar:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

 PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA CONTRATISTAS DE ENTIDADES ESTATALES RCE SEGURESTATO ESTATAL NO. 22-24-10100231	
<p>CLÁUSULA PRIMERA</p> <p>1. AMPARO</p> <p>1.1 AMPARO BASADO EN PERDIDAS, LABORES Y OPERACIONES</p> <p>SEGURO DEL ESTADO S.A. QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTATO, POR VIRTUD DEL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE PÓLIZA DE SEGURO A FAVOR DEL BENEFICIARIO, HASTA EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO FIJADO, LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES COMO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, EN EL CASO DEL SUJETO DE VALOR ASEGURADO QUE PARA LUCRO CESANTE SE ESTABLECE EN LA CARÁTULA) QUE LE CAUSE EL ASEGURADO, CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR HECHOS O ACCIONES COMO RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AFIANZADO ESPERADO EN ESTA PÓLIZA Y DURANTE LA VIGENCIA DE LA MISMA, DE CARÁCTER ACCIDENTAL, TAL COMO SE INDIQUE EN EL CASO, AL ASEGURADO QUE ORIGINEN LA MUERTE, LESIÓN O ENFERMEDAD EN LA SALUD DE LAS PERSONAS Y/O EL DAÑO O LA DESTRUCCIÓN DE BIENES Y/O PERJUICIOS ECONÓMICOS, RECIPIENDO LUCRO CESANTE, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE TALES HECHOS.</p> <p>LA PRESENTE PÓLIZA TIENE COMO PROPOSITO EL REPARAMIENTO DE LA VÍCTIMA, LA CUAL, EN TAL VIRTUD, SE CONSTITUYE EN EL BENEFICIARIO DE LA INDENIZACIÓN, EN PERJUICIO DE LAS PRETENSIONES QUE SE LE RECONOZCAN AL ASEGURADO (INCLUIDO LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES A QUE SEA CONDENADO ACCIDENTE SENTENCIA DECLARATORIA, EJECUTORIA, HASTA EL SUJETO DE VALOR ASEGURADO QUE PARA PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES SUMA EL ASEGURADO, ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA).</p> <p>LA VÍCTIMA TIENE ACCIÓN DIRECTA CONTRA SEGURESTATO, PARA ACREDITAR SU DERECHO ANTE ÉL LA VÍCTIMA EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN DIRECTA PARA EN UN SOLO PROCESO JUDICIAL, DEMOSTRANDO LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO Y DEMAGOGIA LA INDENIZACIÓN DE SEGURESTATO, PERO ESTA ÚLTIMA PODRÁ PODER A LA VÍCTIMA, TODAS LAS EXCEPCIONES QUE HUBIERE PODER ALEVAR CONTRA EL TOMADOR O EL ASEGURADO.</p> <p>SEGURESTATO RECONOCERÁ, AL ASEGURADO, INCLUIDA EN LA SUMA ASEGURADA Y HASTA UN DÍO POR CIENTO (10%) DE LA MISMA, LOS GASTOS Y GASTOS DEL PROCESO JUDICIAL, QUE EL TERCERO DAMNIFICADO O SUS CAUSAHABIENTES PRECUIVEN EN SU CONTRA, PARA DECLARARLO CIVILMENTE RESPONSABLE, CON LAS SALVEDADES SIGUIENTES:</p> <p>1. SI LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO, PROVIENE DE DAÑO O ESTÁ EXPRESAMENTE EXCLUIDA.</p> <p>2. SI EL ASEGURADO EFECTUÓ EL PROCESO JUDICIAL CONTRA ORDEN ESCRITO DE SEGURESTATO.</p> <p>3. SI LA CORONA POR LOS PERJUICIOS DECLARADOS A LA VÍCTIMA EXCEDE LA SUMA QUE DELIMITA LA RESPONSABILIDAD DE SEGURESTATO.</p> <p>ESTA SOLO RESPONDERÁ POR LOS GASTOS DEL PROCESO EN PROPORCIÓN A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA INDENIZACIÓN.</p> <p>CON RELACIÓN A LAS CONDICIONES ANTERIORES, EL AMPARO OTORGADO BAJO LA PRESENTE PÓLIZA SE LIMITA A LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EL ASEGURADO DERIVADA DE:</p> <p>1. LA POSESIÓN O USO O EL MANTENIMIENTO DE LOS PRECIOS PRECISADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O EN ANEXO A ÉLLA, EN LOS CUALES EL ASEGURADO EJECUTA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL OBJETO DEL CONTRATO DESCRITO EN ESTE CONTRATO DE SEGURO.</p> <p>2. LAS LABORES O OPERACIONES QUE LLEVE A CABO EL ASEGURADO EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y OTRAS OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO INCLUIDAS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O EN SUS ANEXOS. ESTA COBERTURA INCLUYE TODOS LOS DAÑOS QUE PROVENIRAN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO Y QUE SON INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ASEGURADO EN EL OBJETO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO INCLUIDAS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O EN ANEXOS O CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN DE ÉLLA, TALES COMO:</p>	<p>A. POSESIÓN O USO DE ASIGNADORES Y EXALANAS AUTOMÁTICAS.</p> <p>B. POSESIÓN O USO DE MADURAS Y FONDOS DE TRABAJO DE CARBÓN, DESECHABLE Y DE TRANSPORTE DENTRO DE LOS PRECIOS ASEGURADOS.</p> <p>C. OPERACIONES DE CARGUE Y DESCARGUE.</p> <p>D. POSESIÓN O USO DE AVIONES Y VALLAS PUBLICITARIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL.</p> <p>E. POSESIÓN O USO DE INSTALACIONES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS Y/O CUANTO QUE EL ASEGURADO, REALICE EN ÉLLAS.</p> <p>F. REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR EL ASEGURADO.</p> <p>G. VALOR DE FUNCIONARIOS EMPLEADOS DEL ASEGURADO DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.</p> <p>H. PARTICIPACIÓN DEL ASEGURADO EN FERIA Y EXPOSICIONES NACIONALES.</p> <p>I. VIOLANCIA DE LOS PRECIOS ASEGURADOS, DONDE SE DESARROLLE EL OBJETO CONTRACTUAL AFIANZADO EJECUTADO POR PERSONAL DE VIGILANCIA EMPLEADO DEL ASEGURADO, INCLUIDO EL USO DE ARMAS Y DE PERROS GUARDIANES, PARA TALES PROPOSITOS.</p> <p>J. POSESIÓN O USO DE DEPÓSITOS, TANQUES Y TUBERÍAS DENTRO DE LOS PRECIOS EN DONDE SE DESARROLLE EL OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO.</p> <p>K. ACTUACIONES DE LOS DIRECTIVOS, Y EMPLEADOS DEL ASEGURADO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL OBJETO CONTRACTUAL AFIANZADO.</p> <p>L. POSESIÓN O USO DE CAFETERÍAS, CASINOS Y RESTAURANTES PARA UTILIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS DEL ASEGURADO, QUE SE CONTRATA PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO.</p> <p>M. INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN PRODUCIDOS DENTRO DE LOS PRECIOS EN DONDE SE EJECUTA Y DESARROLLE EL CONTRATO AFIANZADO.</p> <p>UNEFECTO O CONADATO, PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO.</p> <p>ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CON EXTRACONTRACTUAL QUE SE DA EN LA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES QUE ORIGINARIAMENTE TIENE QUE TENER CONTRATADA EL ASEGURADO, AMPARANDO EL (O) (O) VEHÍCULO) OBJETO DE ESTA COBERTURA ADICIONAL.</p>
<p>CLÁUSULA SEGUNDA</p> <p>2. EXCLUSIONES</p> <p>QUEDA EXPRESAMENTE EXCLUIDO QUE LAS COBERTURAS DE LA PÓLIZA NO OPERAN CUANDO SE PRESENTEN LOS SIGUIENTES EVENTOS:</p> <p>2.1 EXCLUSIONES GENERALES</p> <p>2.1.1 LOS DAÑOS CAUSADOS VOLUNTARIAMENTE O INTER-COMERCIALMENTE POR EL ASEGURADO O CON SU COMPLICIDAD O POR PERSONAS QUE EN EL CASO DE LAS ACTIVIDADES CON EL, POR UN CONTRATO DE TRABAJO O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CON LA COMPLICIDAD DE LAS MISMAS O COMO CONSECUENCIA DE ACTIVIDADES ILÍCITAS.</p> <p>2.1.2 LOS PERJUICIOS QUE SUPERA EL ASEGURADO EN SU PERSONA O EN LOS BIENES DE SU PROPIEDAD O SOBRE LOS QUE EJERZA POSESIÓN O CUSTODIA EN EL EVENTO QUE EL ASEGURADO SEA UNA PERSONA JURÍDICA NO SE CUMPLEN TAMPOCO LOS PERJUICIOS SUPLENTE POR LOS SOCIOS, DIRECTORES, REPRESENTANTES LOCALES Y EMPLEADOS DE LA MISMA, EN SUS PERSONAS O EN SUS BIENES.</p>	

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

 PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL PARA CONTRATISTAS DE ENTIDADES ESTATALES RCE SEGURESTADO ESTATAL NO. 52-54-101000272	
<p>CLÁUSULA PRIMERA</p> <p>1. AMPAROS</p> <p>1.1 AMPARO BÁSICO: PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES</p> <p>SEGUROS DEL ESTADO S.A. QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO, EN VIRTUD DEL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE PÓLIZA SE OBLIGA A INDEMNIZAR AL BENEFICIARIO, HASTA EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, SIN EXCEDER DEL SUBLÍMITE DE VALOR QUE PARA LA MUERTE, LESIÓN O MENOSCABO EN LA SALUD DE LAS PERSONAS Y/O EL DAÑO O LA DESTRUCCIÓN DE BIENES Y/O PERJUICIOS ECONÓMICOS, INCLUYENDO LUCRO CESANTE, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE TALES HECHOS.</p> <p>LA PRESENTE PÓLIZA TIENE COMO PROPÓSITO EL RESARCIMIENTO DE LA VÍCTIMA, LA CUAL, EN TAL VIRTUD, SE CONSTITUYE EN EL BENEFICIARIO DE LA INDEMNIZACIÓN, SIN PERJUICIO DE LAS PRESTACIONES QUE SE LE RECONOZCAN AL ASEGURADO INCLUYENDO LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES A QUE SEA CONDENADO, MEDIANTE SENTENCIA DEBIDAMENTE EJECUTORIADA, HASTA EL SUBLÍMITE DE VALOR ASEGURADO QUE PARA PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES ASUMA EL ASEGURADO, ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA).</p> <p>LA VÍCTIMA TIENE ACCIÓN DIRECTA CONTRA SEGURESTADO, PARA ACREDITAR SU DERECHO ANTE ELLA, LA VÍCTIMA EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN DIRECTA PODRÁ EN UN SOLO PROCESO JUDICIAL, DEMOSTRAR TANTO LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO Y DEMANDAR LA INDEMNIZACIÓN DE SEGURESTADO, PERO ESTA ÚLTIMA PODRÁ OPONER A LA VÍCTIMA, TODAS LAS EXCEPCIONES QUE HUBIERE PODIDO ALEGAR CONTRA EL TOMADOR O EL ASEGURADO.</p> <p>SEGURESTADO RECONOCERÁ, AL ASEGURADO, INCLUIDA EN LA SUMA ASEGURADA Y HASTA UN DIEZ POR CIENTO (10%) DE LA MISMA, LOS COSTOS Y GASTOS DEL PROCESO JUDICIAL QUE EL TERCERO DAMNIFICADO O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN SU CONTRA, PARA DECLARARLO CIVILMENTE RESPONSABLE, CON LAS SALVEDADES SIGUIENTES:</p> <p>1. SI LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO, PROVIENE DE DOLO O ESTA EXPRESAMENTE EXCLUIDA.</p> <p>2. SI EL ASEGURADO AFRONTA EL PROCESO JUDICIAL CONTRA ORDEN EXPRESA DE SEGURESTADO.</p> <p>3. SI LA CONCIENCIA POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A LA VÍCTIMA EXCEDE LA SUMA QUE DELIMITA LA RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO.</p> <p>ESTA SOLO RESPONDERÁ POR LOS GASTOS DEL PROCESO EN PROPORCIÓN A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA INDEMNIZACIÓN.</p> <p>CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES ARRIBA MENCIONADAS, EL AMPARO OTORGADO BAJO LA PRESENTE PÓLIZA SE LIMITA A LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO DERIVADA DE:</p> <p>1. LA POSESIÓN, EL USO O EL MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS INDICADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O EN ANEXO A ELLA, EN LOS CUALES EL ASEGURADO EJECUTA LAS ACTIVIDADES Y/O OBRAS OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO DESCRITO EN ESTE CONTRATO DE SEGUROS.</p> <p>2. LAS LABORES U OPERACIONES QUE LLEVE A CABO EL ASEGURADO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y/O OBRAS OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO, INDICADAS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O EN SUS ANEXOS, LAS CUALES FORMAN PARTE DEL RIESGO ASEGURADO Y QUE SON INHERENTES A LAS ACTIVIDADES POR EL ASEGURADO EN EL GRUPO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO INDICADAS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O EN ANEXOS O CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN DE ELLA, TALES COMO:</p>	<p>A. POSESIÓN O USO DE ASCENSORES Y ESCALERAS AUTOMÁTICAS.</p> <p>B. POSESIÓN O USO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO, DE CARGUE, DESCARGUE Y DE TRANSPORTE DENTRO DE LOS PREDIOS ASEGURADOS.</p> <p>C. OPERACIONES DE CARGUE Y DESCARGUE.</p> <p>D. POSESIÓN O USO DE AVISOS Y VALLAS PUBLICITARIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL.</p> <p>E. POSESIÓN O USO DE INSTALACIONES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS Y LOS EVENTOS QUE EL ASEGURADO, REALICE EN ELLAS.</p> <p>F. REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR EL ASEGURADO.</p> <p>G. VIAJES DE FUNCIONARIOS EMPLEADOS DEL ASEGURADO DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.</p> <p>H. PARTICIPACIÓN DEL ASEGURADO EN FERIAS Y EXPOSICIONES NACIONALES.</p> <p>I. VIGILANCIA DE LOS PREDIOS ASEGURADOS, DONDE SE DESARROLLE EL OBJETO CONTRACTUAL AFIANZADO, EJERCIDA POR PERSONAL DE VIGILANCIA EMPLEADO DEL ASEGURADO, INCLUYENDO EL USO DE ARMAS Y DE PERROS GUARDIANES, PARA TALES PROPOSITOS.</p> <p>J. POSESIÓN O USO DE DEPÓSITOS, TANQUES Y TUBERÍAS DENTRO DEL CONTRATO AFIANZADO.</p> <p>K. ACTUACIONES DE LOS DIRECTIVOS, Y EMPLEADOS DEL ASEGURADO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL OBJETO CONTRACTUAL AFIANZADO.</p> <p>L. POSESIÓN O USO DE CAFETERÍAS, CASINOS Y RESTAURANTES PARA UTILIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS DEL ASEGURADO, QUE SE CONTRATAN PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO.</p> <p>M. INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN PRODUCIDOS DENTRO DE LOS PREDIOS EN DONDE SE EJECUTA Y DESARROLLE EL CONTRATO AFIANZADO.</p> <p>USUFRUCTO O COMODATO, PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO.</p> <p>ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL QUE SE PACTE EN LA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES QUE OBLIGATORIAMENTE TIENE QUE TENER CONTRATADA EL ASEGURADO, AMPARANDO EL(LOS) VEHÍCULO(S) OBJETO DE ESTA COBERTURA ADICIONAL.</p>
<p>CLÁUSULA SEGUNDA</p> <p>2. EXCLUSIONES</p> <p>QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS COBERTURAS DE LA PÓLIZA NO OPERAN, CUANDO SE PRESENTEN LOS SIGUIENTES EVENTOS:</p> <p>2.1 EXCLUSIONES GENERALES</p> <p>2.1.1 LOS DAÑOS CAUSADOS VOLUNTARIA O INTENCIONALMENTE POR EL ASEGURADO O CON SU COMPLICIDAD, O POR PERSONAS QUE SE ENCUENTREN VINCULADAS CON EL, POR UN CONTRATO DE TRABAJO O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CON LA COMPLICIDAD DE LAS MISMAS O COMO CONSECUENCIA DE ACTIVIDADES ILÍCITAS.</p> <p>2.1.2 LOS PERJUICIOS QUE SUFRAN EL ASEGURADO EN SU PERSONA O EN LOS BIENES DE SU PROPIEDAD O SOBRE LOS QUE EJERZA POSESIÓN O CUSTODIA EN EL EVENTO QUE EL ASEGURADO SEA UNA PERSONA JURÍDICA NO SE CUBREN TAMPOCO, LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LOS SOCIOS, DIRECTORES, REPRESENTANTES LEGALES Y EMPLEADOS DE LA MISMA, EN SUS PERSONAS O EN SUS BIENES.</p>	

En algunos otros contratos no se determinó la necesidad de respaldar las actividades con pólizas, a pesar de que en la ejecución del contrato se evidenciaban pluralidad de actuaciones que entrañaban un mayor nivel de riesgos para el contratista y para los subcontratistas. Sin embargo, tales consideraciones no son tenidas en cuenta, pues si no obliga la norma, no se hacen ese tipo de evaluaciones a pesar de que el Manual de contratación, señala la necesidad de tal análisis:

2.1.1.6.9. Análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura para garantizar las obligaciones contractuales.

Una vez tipificados, estimados y asignados los riesgos previsibles, la secretaría de despacho responsable para el proceso específico de contratación o la Oficina Asesora Jurídica deberá procurar la manera de mitigarlos, siendo una de ellas la constitución de garantías contractuales, que pueden consistir en:

- Garantía única de cumplimiento.
- Contratos de seguro
- Fiducia mercantil de garantía, o
- Garantías bancarias o cartas de crédito stand by.

Para la valoración de la suficiencia y cobertura se tendrán en cuenta lo establecido en la sección 3, artículos 2.2.1.2.3.1.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015.

En la contratación directa, de empréstitos, de contratos interadministrativos, de contratos de seguros, mínima cuantía, adquisición en grandes superficies, se deberá justificar la necesidad de exigir o no la constitución de garantías.


Como documentos guía para la determinación de las garantías aplicables a los procesos de contratación se podrá consultar la Guía de garantías en Procesos de Contratación el cual se puede consultar en el siguiente link: <http://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias>

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Como no se trajeron más soportes, entraremos a la revisión de las premisas de la defensa previamente a determinar si se sostiene o no la observación:

A pesar de que se trae la norma que obliga a analizar el sector, nada se dice en torno a las falencias detectadas, los llamados análisis de apoyo a la gestión para el caso de las prestaciones de servicio, son genéricos, a pesar de que en los contratos de la muestra se contrataron por esta modalidad desde asesores jurídicos especializados, hasta personal de apoyo que hacía encuestas, si bien hay un modelo para uno y otro, no se tuvieron en cuenta las labores a desarrollar que generan diferencias avísales entre éstos. No puede estandarizarse igual, al contratista especializado, al contratista profesional de apoyo, a pesar de ser ambos profesionales, no hay manera de decantar en la literalidad de los documentos porqué se cancela una suma determinada a uno mientras que al otro se lo beneficia por encima de los topes que la misma administración municipal ha señalado.

Otro ejemplo: El análisis del sector en el caso de los convenios, no permite determinar las circunstancias por las cuales se contrataron a precios globales determinadas actividades, ni por qué se requirieron unos bienes en abstracto para entregar a la población, dejando casi al arbitrio del contratista, la determinación del bien a ser dado a la comunidad. En general, colocar un título y tener un documento estándar no satisface la necesidad jurídica de dar claridad a las circunstancias de la necesidad que se pretende satisfacer, pues un mismo criterio, no puede envolver todos los pormenores de las distintas contrataciones. Señala el Manual de Contratación de la entidad:



Para la contratación directa, el análisis del sector debe tener en cuenta el objeto del proceso de contratación, particularmente las condiciones del contrato, como los plazos y formas de entrega y de pago. El análisis del sector debe permitir sustentar la decisión de hacer una contratación directa, la elección del proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia, transparencia y economía.

En un contrato de prestación de servicios profesionales, el análisis del sector depende del objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollar dicho objeto. Por ejemplo, si se trata de la contratación de un Contador Público para llevar a cabo la contabilidad municipal, se debe hacer una reflexión sobre la necesidad de contratar el servicio y las condiciones de los procesos de contratación que ha adelantado en el pasado para contratar ese tipo de servicios, teniendo en cuenta los plazos, el valor y forma de pago.

En los procesos de contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado a su valor, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados. En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de los potenciales oferentes. En estos casos, es necesario revisar las condiciones particulares de otros procesos de contratación similares, recopilar información suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los documentos del proceso, siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la necesidad de la entidad, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando promover la sana y libre competencia.

Como puede leerse, se marcaron unas pautas para mayor claridad de los estudios previos como mecanismo para sustentar la necesidad, en algunos casos los requerimientos para

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

idoneidad y experiencia requeridas fueron mínimos, no sin antes exaltar lo prioritario de cumplir con los principios de la contratación estatal.

La temática del archivo documental, no trata de casos aislados, trata de la contratación de la muestra y de la contratación a la cual se dio alcance, pues siendo de otras vigencias pudo constatar que no se respeta el archivo documental, que algunos contratos se encontraban sin soportes y que estos tuvieron que ser requeridos para poder evaluar el cumplimiento del objeto contractual y se pierde la transparencia de las actuaciones, a pesar de expresa orden en el ordenamiento interno:

4.1.5. Expediente Contractual

Los documentos originados con ocasión de la actividad contractual se incluirán en carpetas y estarán debidamente foliados de acuerdo con el orden establecido en las listas de chequeo que socialice la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación, para cada modalidad de selección.

Las carpetas de expedientes contractuales contendrán los documentos previos, pliego de condiciones, pliego de condiciones, adendas, constancias de publicación en el Portal único de Contratación SECOP, actos de audiencias, listados de asistencia, observaciones y documentos de respuesta, actos administrativos, contrato, pólizas, oficios, documentos modificatorios, actas de inicio, suspensiones, la relación de contratación derivada, copia de los contratos derivados, documentos de correspondencia entre contratante y contratista, las actas de liquidación de los mismos, e informes de ejecución que el contratista haya presentado, los informes de supervisión o interventoría, actas del comité de asesoría y verificación, así como todos los documentos soporte de la ejecución contractual, actos administrativos de imposición de sanciones, sus respectivas constancias de ejecutoria y oficios derivados de esta actividad.

Esta carpeta debe encontrarse bajo custodia del archivo Oficina Asesora Jurídica y de Contratación y no podrá salir de sus dependencias, conforme al tiempo de retención sugerido por el archivo Municipal.

El responsable de la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación podrá adelantar las diligencias necesarias cuando se requiera la reconstrucción de expedientes administrativos contractuales.

128

Nada se dice en relación con los riesgos de los contratos, cuando de la adecuada valoración de los mismos, pueden generarse mecanismos de control que ayuden a minimizar su impacto o a evitar su ocurrencia, cuando se manejan como si se tratara siempre de las mismas partes, hechos y obligaciones, necesariamente se disparan los puntos ciegos de la administración y se hará más amplia la gama de falencias que puedan presentarse.

En cuanto al seguimiento y control, los documentos que aparecen en la contratación revisada, generan tan poca gestión del supervisor frente al control que se ejerce que dieron lugar a las observaciones del informe, y aquellas que no se determinaron en observación aparte, se dieron porque al menos, el seguimiento tenía más soportes (fotografías con fecha y hora, listados de asistencia), aunque les faltara efectivamente el soporte de control ejercido.

Es decir, no basta con firmar el informe, hay que comprobar que se cumple con las funciones como supervisor de los contratos: Que lo dicho por el contratista queda evidenciado; en el caso de las pólizas, que tengan los amparos de ley, en el caso de contratistas cuya labor requiere de subcontratación cumplir con los parámetros que determina el manual:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

4.1.1. Inicio del Contrato

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, el supervisor y/o interventor deberá suscribir el acta de inicio.

Para dichos fines el supervisor y/o interventor del contrato y el contratista deberán ponerse en contacto para suscribir el acta de inicio, la cual deberá formar parte del expediente del proceso contractual.

En todo contrato que celebre el Municipio de Calima El Darién en el que para su ejecución el contratista deba utilizar personal, el supervisor o interventor al momento de elaborar el acta de inicio, deberá consignar la relación del personal que se destinará por parte del contratista, con la correspondiente identificación; así como su remuneración, y cualquier cambio deberá ser informado al supervisor o interventor; igualmente se dejará consignado la fecha de terminación alcance de los amparos de las garantías y si se hace o no necesario la ampliación de misma teniendo en cuenta el plazo de ejecución del contrato.

En el caso de la trazabilidad de los expedientes que demuestra la transparencia de la gestión, en el caso de la publicación en el Secop que implica cumplimiento del principio de Publicidad

3.1.3. Publicación del Contrato

Los contratos suscritos por el Municipio de Calima El Darién se publicarán en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP, conforme lo dispuesto en las normas vigentes aplicables. (Ver artículo 223 del Decreto Ley 0019 de 2012 y artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015).

Como para que se prorroguen o adicionen los contratos en cumplimiento de la documentación requerida previo al hecho; pero se observó el incumplimiento reiterado de las disposiciones del Manual de Contratación y las normas en él contemplados.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

4.1.2.1. Modificación a los Contratos Estándar e adicionales.

La modificación contractual obedece al cambio en las condiciones estipuladas inicialmente en el contenido del contrato, bien sea porque el Municipio de Calima El Darién, lo considere



pertinente o a solicitud del contratista. Esta figura es la que comúnmente se conoce como contrato modificatorio que consiste en una modificación hecha por las partes de mutuo acuerdo o bilateral.

Téngase presente, que los acuerdos planteados en el contenido del contrato obedecen a su esencia y su naturaleza concordados con las prescripciones civiles, comerciales y del estatuto contractual. Por ello, atendiendo de lo inicialmente pactado.

Para modificar un contrato en el que es parte el Municipio de Calima El Darién, la Secretaría de Despacho responsable del contrato debe seguir las orientaciones que se describen a continuación:

La dependencia que generó la necesidad y ejerce la supervisión del contrato deberá presentar y analizar el caso que genera la modificación, caso que se presentará con el informe actualizado del supervisor y/o interventor, y recomendará al ordenador del gasto la suscripción del modificatorio. Los documentos que deben aportarse y verificarse como mínimo son:

1. La manifestación escrita del contratista en la que conste su solicitud justificada o la

1. La manifestación escrita del contratista en la que conste su solicitud justificada o la aceptación de la propuesta del Municipio de Calima El Darién de modificar el contenido del contrato.

2. La manifestación escrita del supervisor y/o interventor del contrato donde justifica su concepto sobre la procedencia de la modificación. En caso de que el contrato cuente también con un interventor, deberá adjuntarse el pronunciamiento e informe de éste respecto de la modificación pretendida, avalado por el supervisor.

3. Expediente completo del contrato o convenio.

4. Informe actualizado del supervisor y/o interventor del contrato. Para el caso del informe del interventor, éste y sus anexos deben estar avalados por el supervisor.

5. Historial del contrato en donde se registre la información sobre el estado actual del contrato.

6. Pueden anexarse todos aquellos documentos que soporten el modificatorio.

4.1.2.2. Adición

Cuando hablamos de esta figura hacemos relación a la inclusión, inserción de más dinero al contrato inicial en aras de garantizar la existencia de recursos suficientes para continuar satisficiendo la necesidad de la Administración.

Esta categoría de modificación contractual no conlleva necesariamente al cambio de las especificaciones técnicas o circunstancias accesorias del objeto contractual inicialmente pactado, pero si hace necesario el presupuesto de más cantidad de objeto o más calidad del mismo.

Documentos necesarios para la adición:

1. Manifestación escrita del contratista en donde solicite la adición o acepte la intención de adición hecha por el Municipio de Calima El Darién con indicación expresa de la propuesta de presupuesto previsto para el efecto, el cual en todo caso deberá basarse en los precios de la propuesta inicial y en la fórmula de reajuste de precios que se haya establecido en el contrato, según el caso.
2. La manifestación escrita del supervisor y/o interventor del contrato donde justifica su concepto sobre la procedencia de la adición. En caso de que el contrato cuente también con un interventor, deberá adjuntarse el pronunciamiento e informe de este respecto de la adición pretendida, avalado por el supervisor.
3. Presupuesto oficial que soporta la adición suscrito por el supervisor y/o interventor.
4. Expediente completo del contrato o convenio.
5. Informe actualizado del supervisor y/o interventor del contrato. Para el caso del informe del interventor, éste y sus anexos deben estar avalados por el supervisor.
6. Nuevo cronograma de trabajo que respalda la prórroga.
7. Expediente completo del contrato o convenio.
8. Informe actualizado del supervisor y/o interventor del contrato. Para el caso del informe del interventor, este y sus anexos deben estar avalados por el supervisor.
9. Historial del contrato en donde se registre la información sobre el estado actual del contrato.
10. Pueden anexarse todos aquellos documentos que soporten la prórroga.

En el evento que un contrato, previa justificación, deba ser modificado en las condiciones estipuladas inicialmente, adicionado y ampliado, deberá cumplirse con los cada uno de los requisitos señalados anteriormente.

Los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales (Ver parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1508 de 2012), salvo las excepciones que establezca la ley, verbo y gracia el contrato de interventoría.


CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Puntualmente el Manual de Contratación de la entidad determina el alcance que han de tener las actuaciones de la supervisión, misma que no se vé reflejada en los informes de los supervisores en los contratos de la muestra, miremos a continuación el alcance que dá la norma interna a la supervisión:

I. FUNCIONES, FACULTADES, RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES

1.1. Funciones de la Supervisión y la Interventoría

Los supervisores y/o interventores ejercen una vigilancia y control a través de las funciones asignadas por la ley, así como las demás disposiciones que regulan la materia, según la clase de:



actividad que se debe realizar, las funciones se clasifican en las siguientes, las cuales han sido definidas por la doctrina así:

- **Función Técnica:** vigilancia y control sobre las labores encaminadas a determinar si las obras, servicios o bienes, se ajustan a las cantidades, especificaciones y calidades establecidas en los Pliegos de Condiciones y en el Contrato, o si las obras se ejecutan con sujeción a los diseños, proyectos y planos previamente aprobados.
- **Función Administrativa:** comprende las actividades encaminadas a impulsar la ejecución del contrato y a verificar el cumplimiento por parte del contratista de los trámites y diligencias que debe realizar.
- **Función Contable y financiera:** comprende las actividades dirigidas a controlar el buen manejo e inversión de los recursos del contrato, y autorizar el pago a subcontratistas, trabajadores o proveedores, según se establezca en el contrato.
- **Función Jurídica o legal:** comprende las actividades dirigidas a asegurar que las conductas de las partes durante la ejecución del contrato se ciñan a la ley.

- 7) Elaborar informes parciales del seguimiento de las funciones asignadas según el caso, técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica.
- 8) Generar actas de recibo parcial o recibo a satisfacción, y dar trámite a los pagos correspondientes, previa verificación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
- 9) Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista, para suscribir o proyectar los requerimientos correspondientes, conforme a su competencia.
- 10) Autorizar el pago a través de actas de la mayor cantidad de obra, con cargo a los mismos recursos del contrato y a los precios convenidos para el respectivo ítem, en los contratos a precios unitarios o tarifas unitarias, toda vez que éstas no darán lugar a celebrar contratos adicionales, sin perjuicio de los límites por razón de la disponibilidad presupuestal.
- 11) Elaborar y suscribir el Acta de Terminación o Finalización del contrato

1.4. Actividades Técnicas de la Supervisión y la Interventoría

Presentar un plan de trabajo detallado o manual de Interventoría, al iniciar sus actividades, con su respectivo cronograma, en el cual se deben establecer y describir las actividades y visitas que planea realizar para la ejecución de la supervisión o interventoría.

- 1) Realizar las visitas de verificación, durante la vigencia del contrato, en los sitios donde se está ejecutando cada contrato o convenio suscrito y a suscribirse, en los que la temática del objeto sean las obras públicas y de infraestructura que erogan de la secretaría.
- 2) Diseñar y aplicar instrumentos de recolección de información que le permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones, pactadas contractualmente, por parte del Contratistas. Estos instrumentos deberán servir para verificar como mínimo los siguientes aspectos:
- 3) El Interventor y/o supervisor controlará permanentemente el desarrollo de los proyectos, a efectos de constatar el cumplimiento, por parte del Contratista, de las condiciones establecidas para la ejecución del objeto contractual la obra o actividad y determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos. Para ello ejercerá las siguientes funciones:
- 4) Será obligación de la Interventoría poner en conocimiento de la entidad contratante, con la debida anticipación, la necesidad de prórroga o el vencimiento del contrato. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite pertinente, previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de la Secretaría la determinación final.

Finalmente, no son de recibo las justificaciones del sujeto de control.

Cerramos la conclusión señalando que la instancia competente para verificar si existe o no Ilicitud Sustancial no es la Contraloría Departamental, como quiera que por ley no se la inviste de tal facultad, por tanto, el alegato pertinente deberá ser presentado en su oportunidad ante la autoridad competente, quien dirimirá si les asiste o no la razón en tal sentido.

Así pues, se confirman los presupuestos de la observación inicial y pasa a ser un hallazgo de idénticas connotaciones en el informe final

17.Observación administrativa con presuntas incidencias Disciplinaria, Fiscal y Penal – Estudio Técnico de Referencia y cumplimiento de obligación condicional

CONCESION No. 001 de 2003

Objeto: Atención integral del Servicio de alumbrado público del municipio de Calima El Darién

Cuántía: Indeterminada

Plazo: 30 años

Otro Sí No. 2 del 14 de septiembre de 2021 Valor: \$1.680.893.278

La prórroga que se hizo al contrato de Concesión, adolece de la solicitud que debería haber hecho la Supervisión y/o la Interventoría, para efectos de la prórroga del contrato.

Aunado a lo cual se requería de un estudio técnico de referencia, acorde a la ley que regula las asociaciones público privadas, aunque se realizó un estudio técnico en 2019, éste no buscó la mejor opción para el manejo del Alumbrado público municipal, sino para sustentar las razones de la prórroga, como a continuación se observa: *“Que con el objetivo de garantizar una adecuada planeación a la modificación del contrato de concesión y en especial a los proyectos de iluminación que se van a ejecutar en el municipio se contrató la elaboración de un estudio jurídico, técnico y financiero, para la viabilidad de la ampliación del Contrato de Concesión No. 001 de 2003...”* Tampoco fue publicado en la página web de la entidad ni por ningún otro medio.

Es importante señalar, que la realización de este estudio, estuvo a cargo, de quien con posterioridad y hasta la presente vigencia se desempeña como Interventor, lo que resulta en un conflicto de intereses. El estudio, no señaló el impacto económico del escenario adverso frente a la inversión y el incremento de la deuda, por intereses y otras sanciones que pudieran derivarse del incumplimiento por parte del municipio.

Revisado el documento, vemos que solamente se estudia como escenario financiero, uno en el que la modificación del acuerdo para el cobro del impuesto es un hecho. No obstante, aunque el Concejo municipal, aprobó el incremento, posteriormente fue declarado inexecutable el acuerdo por parte de la jurisdicción contencioso administrativa, dejando desamparado al municipio ante un escenario financiero poco sostenible, sin posibilidad de saneamiento, pues tal circunstancia, no fue tomada en cuenta, por quien realizó el estudio para justificar el Otro sí que se suscribió en agosto de 2021.

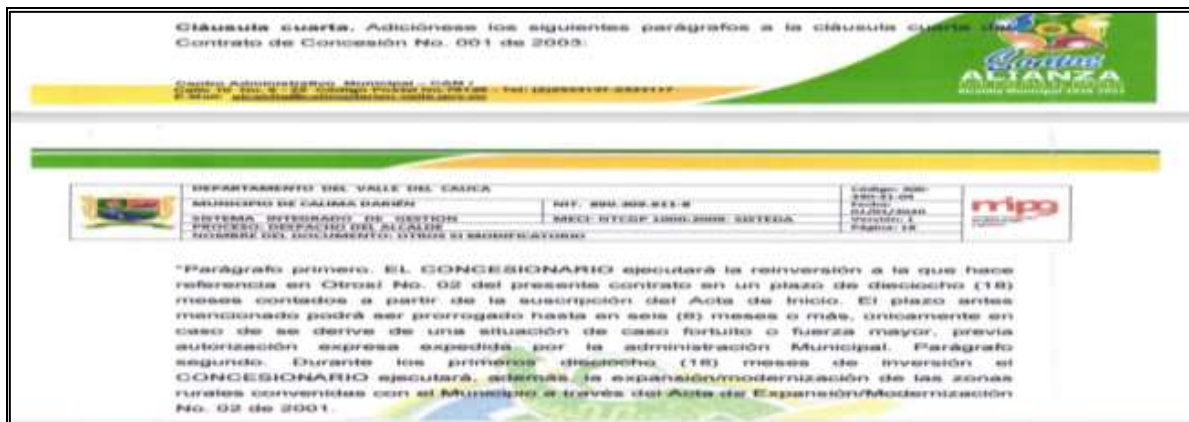
No se realizó por parte de la entidad, un análisis financiero que permita establecer parámetros para la continuidad del negocio jurídico, descartando la Licitación pública de facto, misma que debía realizarse, o que evitara un eventual desequilibrio económico, que es el escenario que se presenta en la actualidad. De otro lado, observamos que no se realizó un inventario de los bienes que integraban la red de alumbrado público, en aras a determinar el cumplimiento del alcance de la concesión inicial, y cuáles eran los bienes que deberían tenerse en cuenta para la reversión.

Es más, se introdujeron cláusulas modificatorias en tal sentido, en donde sin que el municipio reconozca mediante un documento cuales son los activos iniciales, cuales los que deben ser retornados, y cuales los que se desprenderán de la nueva inversión (Anexo técnico que no se entregó)

17. Observación administrativa con presuntas incidencias Disciplinaria, Fiscal y Penal – Estudio Técnico de Referencia y cumplimiento de obligación condicional

Como sustento de las necesidades que se necesitaban satisfacer, encontramos que se estableció el plazo máximo para la realización de las inversiones que hacen parte del anexo No. 2:

Imagen No. 27



Cabe señalar que a la fecha de la auditoría el término para la ejecución de las obras se encuentra más que vencido, encontrándonos que las obras no solo, No están terminadas, sino que, además el desequilibrio económico que se alega a septiembre de 2023, supera los \$506 millones de pesos, sin que el Interventor haya manifestado en ninguno de sus informes el incumplimiento de las obras del anexo del Otro sí No. 2, ni la supervisión haya realizado los llamamientos pertinentes.

Vemos un documento denominado “Acta de Inicio” según Otro sí No. 2, la cual no se encuentra suscrita por el Supervisor (Secretaría de Obras), hecho que incumple lo dispuesto en el Manual de contratación del municipio, por tanto, adolecen las actuaciones surtidas de soporte jurídico:

Como corolario de la situación, se evidencia que los seguimientos realizados a los distintos aspectos del contrato son defectuosos, como resultado de varios factores, a saber:

- 1.- No se realiza cobro a los Clientes No regulados, ni siquiera existe una base de datos que permita estandarizar el cobro del impuesto de Alumbrado Público para sanear los cobros coactivos y manejar adecuadamente la cartera. La Tesorería no comunica ninguna información al respecto a la Secretaría de Obras públicas que funge como Supervisora del contrato.
- 2.- Se desconocen por la supervisión los cobros realizados directamente por la tesorería del municipio, en materia de clientes especiales del impuesto (Hidroeléctrica) y de los recaudos por predial (lotes), sobre los cuales no hay control. Por tanto, los valores cobrados a los clientes especiales, no ingresan a sanear las obligaciones generadas por la concesión, hecho que se desprende de la información emanada de la Fiducia, en donde solo ingresan los valores trasladados por la comercializadora. Constituyéndose en una desviación del recurso, cuya destinación es específica.
- 3.- No hay un contrato con las comercializadoras de energía, lo que redundo en que el Kilovatio se cobre a la tasa más alta por tratarse al municipio como un cliente No Regulado.

17.Observación administrativa con presuntas incidencias Disciplinaria, Fiscal y Penal – Estudio Técnico de Referencia y cumplimiento de obligación condicional

4.- No se hace seguimiento adecuado a las diferencias marcadas entre lo facturado y lo percibido por la comercializadora, el Interventor no realizó control alguno sobre los valores relacionados, que pueden fluctuar de un mes a otro sin justificación alguna, con el agravante de que en algunos meses hay recuperaciones de más del 100% del recaudo, lo que implica una falta de constante en los registros, que no puede deberse a los clientes, pues éstos no cambian dentro de lapsos tan breves de manera significativa.

5.- La interventoría contratada, no ha realizado seguimiento a la inversión que originó el Otro Sí, ni ha manifestado en los informes el avance o retardo para conocimiento del municipio. Se reitera que, no se han finiquitado las obras, a pesar de que el término se encuentra más que vencido.

6.- El supervisor del contrato, desconoce las obligaciones al interior de la Concesión, no conoce las obligaciones del interventor, por tanto, no ejerce ningún tipo de control sobre ellos.

7.- No existe inventario de los bienes objeto de reversión en la primera parte de la Concesión pues el Otro sí solamente aplicaría sobre la nueva etapa de la misma, en caso de continuidad.

Según la información documentada del Concesionario, y calendada en febrero de 2023, las actividades y obras a su cargo finiquitarán el 20 de marzo de 2024, a pesar del incumplimiento de la obligación condicional, bajo la cual se constituyó el negocio jurídico de prórroga.

Es necesario puntualizar que el contrato adolece de toda trazabilidad, los estudios previos iniciales, la propuesta y los aspectos técnicos no existen en las carpetas, no hay soporte de los seguimientos previos la vigencia auditada, y aún del Otro sí No.2, no aparece tampoco el anexo técnico que detalla el alcance de la inversión.

Todo lo anterior, permite concluir que, presuntamente se está beneficiando a terceros particulares en detrimento de los intereses del municipio y de sus conciudadanos.

Componente Técnico Medioambiental

Los municipios deben realizar un Estudio Técnico de Referencia y publicarlo en su página web, el cual incluirá como mínimo: el estado actual de la prestación del servicio en materia de infraestructura, cobertura, calidad y eficiencia energética, el inventario de la infraestructura, inventario de los espacios públicos de libre circulación peatonal o vehicular, la descripción de la población, la cobertura del servicio de energía eléctrica, el diagnóstico del ETR, los indicadores, las expansiones del servicio armonizadas con el Plan de Ordenamiento Territorial, POT y con los planes de expansión de otros servicios públicos, los costos desagregados de prestación para las diferentes actividades del servicio de alumbrado público, los costos del suministro de la energía, las tarifas empleadas para el cálculo, las cantidades medidas en los medidores disponibles, el aforo, la liquidación y los descuentos por indisponibilidad, los costos de la inversión, los costos de administración, operación y mantenimiento de los activos del servicio de alumbrado público, entre otros.

El municipio no incluyó en los rubros presupuestales y cuentas contables, independientes, los costos de la prestación del servicio de alumbrado público y los ingresos obtenidos por el

17.Observación administrativa con presuntas incidencias Disciplinaria, Fiscal y Penal – Estudio Técnico de Referencia y cumplimiento de obligación condicional

impuesto de alumbrado público, por la sobretasa al impuesto predial en caso de que se establezca como mecanismo de financiación de la prestación del servicio de alumbrado público, y/o por otras fuentes de financiación.

El municipio no está liquidando directamente el impuesto de alumbrado público: a pesar de que está prohibido la entrega a terceros la administración de tributos. No se podrá celebrar contrato o convenio alguno, en donde las entidades territoriales, o sus entidades descentralizadas, deleguen en terceros la administración, fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones, e imposición de sanciones de los tributos por ellos administrados.

En la revisión realizada a la facturación del sector residencial, se identificó que el municipio no ha liquidado adecuadamente el impuesto de alumbrado público a los contribuyentes, a pesar de que el Estatuto tributario establece que será el mayor valor que resulte de comparar el 7% del valor del consumo mensual de energía eléctrica sin tener en cuenta los descuentos por subsidios e incrementos por contribución con las tarifas mínimas para cada estrato socioeconómico. En los siguientes cuadros se ilustra lo anterior.

Cuadro No. 51

Facturado por el comercializador al sector residencial										
Tarifa	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Diciembre	Total
Estrato 1	3.200.967	2.106.384	3.233.082	2.106.227	3.240.383	2.110.034	3.240.268	3.592.445	2.113.219	24.943.008
Estrato 2	22.929.507	16.285.818	23.021.827	17.826.613	23.135.620	17.900.744	23.279.572	27.047.487	17.775.667	189.202.857
Estrato 3	9.390.449	6.030.675	9.383.979	5.997.295	9.369.453	6.030.690	9.485.545	8.577.873	5.966.538	70.232.497
Estrato 4	5.305.002	1.652.280	5.332.011	1.605.539	5.380.460	1.604.483	5.408.073	1.603.281	1.575.650	29.466.780
Estrato 5	9.716.699	662.227	9.713.173	558.857	9.656.199	564.505	9.675.020	590.200	618.000	41.754.880
Estrato 6	7.929.284	1.130.200	7.920.246	1.105.211	7.933.967	1.113.453	7.982.002	1.086.209	1.245.357	37.445.929
Total	58.471.907	27.867.585	58.604.318	29.199.742	58.716.083	29.323.909	59.070.480	42.497.496	29.294.432	393.045.953

Solo se tomaron esos meses por que fue la entrega por la entidad

Fuente: Municipio de Calima El Darién

Elaboro: Equipo auditor

Cuadro No. 52

Facturación aplicando el Estatuto tributario										
Tarifa	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Diciembre	Total
Estrato 1	8.753.509	4.151.618	9.083.904	3.577.529	9.327.825	3.690.849	9.545.316	3.769.256	3.859.290	55.759.096
Estrato 2	43.446.008	33.027.219	43.325.066	29.465.092	43.719.642	26.390.417	40.036.851	28.110.042	30.897.931	318.418.268
Estrato 3	11.186.740	6.613.961	10.253.167	7.247.677	10.732.867	5.960.444	10.709.059	7.948.031	9.269.735	79.921.681
Estrato 4	6.371.469	2.311.929	6.472.428	1.993.492	6.695.805	2.130.270	6.512.447	1.862.499	2.395.765	36.746.104
Estrato 5	9.627.176	793.426	10.217.544	587.669	11.231.897	547.637	10.274.547	589.412	800.183	44.669.490
Estrato 6	10.272.566	2.853.485	10.017.406	1.372.551	9.520.873	1.392.954	9.484.956	1.256.175	2.034.919	48.205.886
Total	89.657.467	49.751.639	89.369.516	44.244.010	91.228.909	40.112.570	86.563.176	43.535.415	49.257.824	583.720.526

Fuente: Municipio de Calima El Darién

Elaboro: Equipo auditor

Cuadro No. 53

Diferencia entre la Facturación aplicando el Estatuto tributario vs Facturado por el comercializador al sector residencial										
Tarifa	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Diciembre	Total
Estrato 1	5.552.542	2.045.234	5.850.822	1.471.301	6.087.442	1.580.815	6.305.048	176.811	1.746.072	30.816.088
Estrato 2	20.516.501	16.741.401	20.303.239	11.638.479	20.584.022	8.489.672	16.757.278	1.062.555	13.122.264	129.215.411
Estrato 3	1.796.291	583.286	869.188	1.250.382	1.363.414	-70.246	1.223.514	-629.841	3.303.197	9.689.184
Estrato 4	1.066.467	659.649	1.140.417	387.954	1.315.344	525.787	1.104.374	259.217	820.115	7.279.324
Estrato 5	-89.523	131.199	504.371	28.812	1.575.698	-16.868	599.527	-789	182.183	2.914.610
Estrato 6	2.343.282	1.723.284	2.097.161	267.340	1.586.906	279.501	1.502.954	169.966	789.562	10.759.956
Total	31.185.561	21.884.054	30.765.198	15.044.268	32.512.826	10.788.661	27.492.696	1.037.918	19.963.392	190.674.573

Fuente: Municipio de Calima El Darién

Elaboro: Equipo auditor

17.Observación administrativa con presuntas incidencias Disciplinaria, Fiscal y Penal – Estudio Técnico de Referencia y cumplimiento de obligación condicional

Mayo	20.000
Junio	20.000
Julio	20.000
Agosto	6.085.550
Diciembre	5.089.830
Total	28.168.860

Fuente: Municipio de Calima El Darién
Elaboro: Equipo auditor

Configurándose un presunto detrimento patrimonial de **\$218.843.433**, el cual corresponde a la diferencia entre las tarifas cobradas y las tarifas establecidas en el estatuto tributario (\$190.674.573), más lo cobrado de más en las facturas de energía (**\$28.168.860**).

Criterio y fuente de criterio

Ley 594 de 2000, artículos 1 a 4, 11 a 17; Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 13, 23 y 24, Ley 1474 de 2011, artículos 82 a 84; Constitución Nacional, artículo 209; Contrato en sus componentes pre y contractual (estudio técnico realizado, Otro sí, y anexo técnico); manual de contratación de la entidad. Ley 1508 de 2012, artículos 7, 29, 31, 33 y 34; Ley 1819 de 2016, artículos 350 - 352.

Causa

Planeación antijurídica y antieconómica, con vulneración al principio de economía, eficiencia, eficacia y debido proceso, así como falencias en el seguimiento de las actividades por parte de la supervisión.

Falta de mecanismos de seguimiento y control para garantizar que los ingresos generados por este impuesto se utilicen adecuadamente para el mantenimiento y mejora del alumbrado público.

Efecto

Pérdida del recurso e inadecuada inversión del rubro de los impuestos, en favor de la comunidad y su zona rural, generando un presunto detrimento por valor de \$218.843.433.

Deficiencias en el mantenimiento del alumbrado público: La falta de ingresos derivados de este impuesto dificulta la realización de trabajos de mantenimiento y mejoras en el sistema de alumbrado público, lo que puede resultar en un servicio deficiente y en áreas mal iluminadas.

Los hechos descritos constituyen una observación administrativa con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal y Penal, por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39; Ley 610 de 2000, artículos 5 y 6; Ley 599 de 2000, artículos 397 y 399.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

OBSERVACIÓN 17: observación administrativa con presuntas incidencias Disciplinaria, Fiscal y Penal – Estudio Técnico de Referencia y cumplimiento de obligación condicional.

En primer lugar, nos referimos a la prórroga del Contrato de Concesión No. 001 de 2003, al respecto es importante tener en cuenta que la terminación del mismo, de acuerdo con el acta de inicio, estaba determinada para el 21 de noviembre del año 2024. De lo anterior que la administración municipal en función de sus atribuciones contenidas en el numeral 3[1] del artículo 315 de la norma superior haya tomado la decisión, con base a los resultados del Estudio jurídico, técnico y financiero, de renegociar y modificar los acuerdos del contrato de concesión, pues se insiste, esté está vigente.

Al respecto, es importante tener en cuenta que los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en especial, en aras de lograr la realización de los fines del Estado, figura que es permitida a la luz de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. En especial, esta posibilidad toma relevancia teniendo en cuenta lo determinado por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-300 de 2012:

“Las concesiones son por naturaleza contratos incompletos, debido a la incapacidad que existe de prever y redactar una consecuencia contractual para todas y cada uno de las posibles variables y contingencias que pueden surgir en el desarrollo del objeto, lo que impone un límite a las cláusulas contractuales efectivamente redactadas. Por ello adquiere especial relevancia la posibilidad de renegociar y modificar los contratos con el fin, entre otros, (i) de recuperar el equilibrio económico, en los eventos en los que se materializan obstáculos no previsibles, extraordinarios y no imputables al contratista, o (ii) de adecuar la prestación del servicio a las nuevas exigencias de calidad, por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico. Además, debe tenerse en cuenta que los contratos de concesión tienen características de contratos relacionales.”

De esta manera, en atención al principio de planeación que rige la actuación administrativa, se adelantó el Proceso de Mínima Cuantía No. 088-2019 el cual tuvo como resultado el “ESTUDIO JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO: VIABILIDAD DE AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 001 DE 2003.” el cual evidenció que existían aspectos de la prestación del servicio de alumbrado público que era necesario tener en cuenta en orden de garantizar la prestación continua y eficiente del servicio de alumbrado público. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia antes referida dispuso: “El Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha señalado que el plazo es un elemento accidental del contrato –no de su esencia ni de su naturaleza- y por ello puede ser materia de modificaciones.” razón por la cual, no existe en el caso de análisis, impedimentos a la ampliación del Contrato de Concesión No. 001 de 2023, máxime cuando la modificación obedeció a razones autorizadas en la ley, debidamente probadas y fundamentadas.

Ahora bien, la Contraloría en su informe preliminar hace referencia a un conflicto de intereses entre el consultor que desarrolló el “ESTUDIO JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO: VIABILIDAD DE AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 001 DE 2003.” y

quien posteriormente fue adjudicado con el contrato de “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

CAUCA”, al respecto es importante tener en cuenta que en palabras del Consejo de Estado [2], un conflicto de intereses es:

“El conflicto de intereses podría definirse como aquella conducta en que incurre un servidor público, contraria a la función pública, en la que, movido por un interés particular prevalente o ausente del interés general, sin declararse impedido, toma una decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función pública. Por ello, la norma exige ante la pugna entre los intereses propios de la función y los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues es la manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial.”

Así las cosas, es fácil evidenciar que no existe conflicto alguno en que una misma persona natural y jurídica ejecute más de un contrato con una misma Entidad y mucho menos cuándo los objetos contractuales son disímiles entre sí y no se trata de un servidor público pues a la luz de lo dispuesto en el artículo 123 superior “Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.” Condición que no cumple el actual interventor del Contrato de Concesión No. 001 de 2003.

Adicional a lo anterior, la Contraloría en su informe alega que en el Estudio adelantado por la administración municipal no se realizó un análisis económico juicioso del impacto que tendría para las finanzas del municipio la modificación al contrato de concesión, sin embargo, dicho estudio contiene un acápite completo de “Análisis financiero”, el cual contiene, entre otras cosas:

- Costos actuales de la prestación del servicio de alumbrado público.
- Modelo financiero que tienen en cuenta los costos proyectados con las modificaciones introducidas al modelo tarifario, así como la comparación con los costos actuales.
- Ecuación financiera actual de la prestación del servicio.
- Propuesta del modelo tarifario con base en las modificaciones planteadas.
- Conclusiones financieras.

De esta manera, no es correcto afirmar que no se realizó un análisis del impacto económico que conllevaría la ampliación del Contrato de concesión pues el estudio contempló los escenarios financieros del nuevo modelo financiero del Contrato de Concesión así como el modelo tarifario necesario para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de alumbrado público. Adicional a lo anterior, no tenía que la administración municipal evaluar ninguna tipología contractual diferente a la de la continuidad del contrato de concesión vigente puesto que este aún no estaba cerca de su terminación, fue la modificación la herramienta necesaria y pertinente para regular algunos aspectos de la prestación del servicio que requerían atención, entre ellos, el inicio de la modernización a tecnología LED. De lo anterior que, la observación presentada por la Contraloría en su informe preliminar respecto de los bienes objeto de reversión sea innecesaria.

Ahora bien, con el objetivo de señalar unos incumplimientos inexistentes en la ejecución de la inversión objeto de la prórroga del Contrato de concesión, la Contraloría realiza un análisis limitado de la cláusula décima cuarta, la cual determina que la inversión del proyecto de iluminación se ejecutaría en un plazo máximo de 18 meses contados a partir de la firma del

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

acta de inicio, siendo este último aspecto el que no fue tenido en cuenta por la Contraloría puesto que el acta de inicio de dicho proyecto se suscribió el 20 de septiembre del año 2022 por razones meramente conservadoras en materia financiera y de sostenibilidad del sistema de alumbrado público pues como es de su conocimiento, el Acuerdo No. 015 de 2021 fue declarado inexecutable por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a través de la Sentencia con Radicado No. 76001-23-33-000-2022-00044-00.

En virtud de lo anterior, en conjunto con el concesionario se tomó la decisión de esperar el inicio de las obras objeto del proyecto de inversión en iluminación hasta en tanto existiera una mejor certeza de financiación de la prestación del servicio pues al no existir un modelo tarifario ajustado a las necesidades del sistema, se estaba generando una remuneración pendiente a favor del concesionario y era necesario tomar medidas para evitar el aumento en dicho rubro a favor del operador del sistema, razón por la cual, se tomó la decisión de iniciar el proyecto, una vez se hubiera concertado la presentación por parte del Alcalde Municipal, de

un nuevo modelo tarifario que estuviera ajustado a las necesidades de la prestación del servicio.

Más adelante en su informe, la Contraloría observa que el Acta de Inicio suscrita entre las partes para el efectivo inicio de las obras, no estaba firmada además por el Supervisor del Contrato, al respecto es importante tener en cuenta que, como se mencionó anteriormente en el presente documento, la acción administrativa de un municipio está en cabeza exclusiva del alcalde municipal así como la vigilancia y control de los contratos a su cargo tal como lo dispone el numeral 1[3] del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, de lo anterior que sea el alcalde municipal quien esté plenamente facultado para suscribir los documentos que fueren necesarios durante la ejecución contractual.

Adicional, erróneamente la Contraloría observa que existen obligaciones del contrato -no especifica si del Contrato de concesión o de interventoría- las cuales no se están ejecutando, sin embargo, desconoce que existen labores que son exclusivas de la Entidad tales como la liquidación y cobro de clientes no regulados, liquidación directa a través de la administración municipal, la suscripción del contrato de suministro de energía para el sistema de alumbrado público, entre otras actividades propias de la función administrativa municipal. Por el contrario, la Contraloría desconoce el contenido de los informes presentados por la interventoría entre los meses de agosto a diciembre de 2022.

Finalmente, el informe dicta: “Todo lo anterior, permite concluir que, presuntamente se está beneficiando a terceros particulares en detrimento de los intereses del municipio y de sus conciudadanos.”, sin embargo, la relación de las observaciones presentadas en el informe preliminar no encaja la actuación de la administración municipal en ninguno de los tipos penales en contra de la administración municipal contemplados en el Título XV de la Ley 599 de 2000.

Respecto del Componente Técnico Medioambiental.

Más adelante en el informe, pretende iniciar un análisis del Estudio técnico, jurídico y financiero adelantado por la administración municipal, sin embargo, desvía el análisis en temas presupuestales propios del Municipio de Calima así como en la liquidación del

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

impuesto de alumbrado público, observando erróneamente la prohibición contemplada en el artículo 1 de la Ley 1386 de 2010 desconociendo que no es la comercializadora de energía quien liquida el impuesto de alumbrado público sino que en virtud de la facultad otorgada a la Entidad en el artículo 352 de la Ley 1819 de 2016 factura y recauda el impuesto de alumbrado público a través de la factura de energía eléctrica domiciliaria de los usuarios a quienes les presta el servicio.

Ahora bien, la fiscalización del impuesto de alumbrado público está en cabeza de la administración municipal quien con la interventoría actual del sistema de alumbrado público se ha venido realizando seguimiento a la liquidación del impuesto con el objetivo de adelantar las acciones que sean necesarias para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de alumbrado público, así como garantizar las acciones de cobro del impuesto.

En el análisis realizado por la Contraloría se desconoce si se están teniendo en cuenta las particularidades de la liquidación del impuesto de alumbrado público puesto que existen factores que influyen en la liquidación del impuesto de alumbrado público, a saber:

- Facturación bimensual en algunos sectores rurales.
- Variación en el consumo de energía eléctrica domiciliaria de los usuarios.
- Facturación pendiente a los usuarios de energía eléctrica domiciliaria.
- Corrección de clasificación errónea de usuarios de un mes a otro.

Los factores antes mencionados son los que influyen en la facturación del impuesto de alumbrado público y que conllevan a que la facturación no sea tal cual se proyecta en el modelo tarifario, para ello se debe realizar un análisis a cada una de las facturas y usuarios en orden de identificar los factores que influyeron en la facturación.

Al final de esta observación, dispone: “Configurándose un presunto detrimento patrimonial de \$218.843.433, el cual corresponde a la diferencia entre las tarifas cobradas y las tarifas establecidas en el estatuto tributario (\$190.674.573), más lo cobrado de más en las facturas de energía (\$28.168.860).” Sin embargo, no existe tal afectación fiscal puesto que la liquidación del impuesto se va ajustando mes a mes y en la actual vigencia, la interventoría del sistema ha solicitado información al comercializador de energía en orden de ajustar las diferencias o errores presentados en la liquidación del impuesto.

[1] Constitución Política de Colombia. Artículo 315. “Son atribuciones del alcalde: (...) 3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. (...)”

[2] CONSEJO DE ESTADO. RADICACIÓN 11001-03-25-000-2005-00068-00 C.P. CÉSAR PALOMINO CORTÉS.

[3] ARTÍCULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. (...) 1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2. De este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado. (...)”

No se acepta el hallazgo, porque con lo expuesto anteriormente se puede concluir que la Entidad no ha incumplido su deber legal frente a la presentación del proyecto de Acuerdo cuestionado, por lo cual se solicita al Ente de Control eliminar todo hallazgo al respecto, por no existir en la conducta una incidencia disciplinaria o penal del servidor público; en el proceder cuestionado no concurren elementos que configuren una conducta punible, y mucho menos existe un daño al patrimonio público, al igual que no existe ilicitud en la conducta del servidor público, como se pretende configurar en el informe preliminar, para que pueda pregonarse la configuración de esta categoría jurídica resulta necesario que la identidad entre el proceder del servidor público y la genérica consagración el tipo sea integral, es decir, que todos los aspectos considerados en la norma concurren en la acción u omisión investigada, pues si falta cualquier elemento de los contemplados en la norma no se concreta el delito y la actuación deviene atípica, por demás con la concurrencia de culpa, culpa grave o dolo, las cuales no existieron en el actuar de las funciones, razones suficientes para retirar el hallazgo con las incidencias disciplinaria, fiscal y penal.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Previamente a definir si con las premisas de la defensa de desestima o afirma la observación presentada, vemos que solo se trajo un archivo digital que corresponde a la parte que existe del contrato de concesión y que no corresponde al anexo técnico requerido en los estudios previos o pliegos de condiciones de la época, según se observa a continuación:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR



Ahora bien, procederemos a realizar una lectura de las premisas de la defensa del municipio, previo a concluir si le asiste o no razón al municipio:

Señala el ente territorial que *“En primer lugar, nos referimos a la prórroga del Contrato de Concesión No. 001 de 2003, al respecto es importante tener en cuenta que la terminación del mismo, de acuerdo con el acta de inicio, estaba determinada para el 21 de noviembre del año 2024. De lo anterior que la administración municipal en función de sus atribuciones contenidas en el numeral 3[1] del artículo 315 de la norma superior haya tomado la decisión, con base a los resultados del Estudio jurídico, técnico y financiero, de renegociar y modificar los acuerdos del contrato de concesión, pues se insiste, esté está vigente.”* No es cierto, pues de hecho la administración municipal, excedió la capacidad de sus funciones, pues obró contra expresa disposición interna, el manual de contratación señala para efecto de las modificaciones contractuales, deben agotarse los siguientes pasos:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

4.1.2.1. Modificación a los Contratos Estatales o adicionales.

La modificación contractual obedece al cambio en las condiciones estipuladas inicialmente en el cláusulado del contrato, bien sea porque el Municipio de Calima El Darién lo considere



pertinente o a solicitud del contratista. Esta figura es la que comúnmente se conoce como contrato modificatorio que consiste en una modificación hecha por las partes de mutuo acuerdo o bilateral.

Téngase presente, que los acuerdos plasmados en el cláusulado del contrato obedecen a su esencia y su naturaleza concordados con las prescripciones civiles, comerciales y del estatuto contractual. Por ello, naturaleza de lo inicialmente pactado.

Para modificar un contrato en el que es parte el Municipio de Calima El Darién, la Secretaría de Despacho responsable del contrato debe seguir las orientaciones que se describen a continuación:

La dependencia que generó la necesidad y ejerce la supervisión del contrato deberá presentar y analizar el caso que genera la modificación, caso que se presentará con el informe actualizado del supervisor y/o interventor, y recomendará al ordenador del gasto la suscripción del modificatorio. Los documentos que debes aportarse y verificarse como mínimo son:

1. La manifestación escrita del contratista en la que conste su solicitud justificada o la

1. La manifestación escrita del contratista en la que conste su solicitud justificada o la aceptación de la propuesta del Municipio de Calima El Darién de modificar el cláusulado del contrato.
2. La manifestación escrita del supervisor y/o interventor del contrato donde justifica su concepto sobre la procedencia de la modificación. En caso de que el contrato cuente también con un interventor, deberá adjuntarse el pronunciamiento e informe de éste respecto de la modificación pretendida, avalado por el supervisor.
3. Expediente completo del contrato o convenio.
4. Informe actualizado del supervisor y/o interventor del contrato. Para el caso del informe del interventor, éste y sus anexos deben estar avalados por el supervisor.
5. Historial del contrato en donde se registre la información sobre el estado actual del contrato.
6. Pueden anexarse todos aquellos documentos que soporten el modificatorio.

4.1.2.2. Adición

Cuando hablamos de esta figura hacemos relación a la inclusión, inyección de más dinero al contrato inicial en aras de garantizar la existencia de recursos suficientes para continuar satisfaciendo la necesidad de la Administración.

Esta categoría de modificación contractual no conlleva necesariamente al cambio de las especificaciones técnicas o circunstancias accesorias del objeto contractual inicialmente pactado, pero si hace necesario el presupuesto de más cantidad de objeto o más calidad del mismo.

Documentos necesarios para la adición:

1. Manifestación escrita del contratista en donde solicite la adición o acepte la intención de adición hecha por el Municipio de Calima El Darién con indicación expresa de la propuesta de presupuesto previsto para el efecto, el cual en todo caso deberá basarse en los precios de la propuesta inicial y en la fórmula de reajuste de precios que se haya establecido en el contrato, según el caso.
2. La manifestación escrita del supervisor y/o interventor del contrato donde justifica su concepto sobre la procedencia de la adición. En caso de que el contrato cuente también con un interventor, deberá adjuntarse el pronunciamiento e informe de este respecto de la adición pretendida, avalado por el supervisor.
3. Presupuesto oficial que soporta la adición suscrito por el supervisor y/o interventor.
4. Expediente completo del contrato o convenio.
5. Informe actualizado del supervisor y/o interventor del contrato. Para el caso del informe del interventor, éste y sus anexos deben estar avalados por el supervisor.
6. Nuevo cronograma de trabajo que respalda la prórroga.
7. Expediente completo del contrato o convenio.
8. Informe actualizado del supervisor y/o interventor del contrato. Para el caso del informe del interventor, este y sus anexos deben estar avalados por el supervisor.
9. Historial del contrato en donde se registre la información sobre el estado actual del contrato.
10. Pueden anexarse todos aquellos documentos que soporten la prórroga.

En el evento que un contrato, previa justificación, deba ser modificado en las condiciones estipuladas inicialmente, adicionado y ampliado, deberá cumplirse con los cada uno de los requisitos señalados anteriormente.

Los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales (Ver parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1508 de 2012), salvo las excepciones que establezca la ley, verbo y gracia el contrato de interventoría.

Ninguno de tales soportes, se encuentra en la trazabilidad del expediente, el revisado o el que se trajo para revisión. Ello se evidencia en la siguiente captura de pantalla en donde se

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

demuestra no solo falta de trazabilidad sino de vulneración al principio de transparencia, de la actuación desplegada por la administración municipal.

ACTA DE INICIO CONTRATO

En el Despacho del Señor Alcalde Municipal del Calima el Darién, Departamento del Valle del Cauca, se reunieron: En representación del municipio el Señor Gustavo Adolfo Florente Triviño en su condición de Alcalde Municipal en ejercicio y por tanto Representante del Municipio y el Señor Elbert López Ortiz, en Calidad de Gerente y representante Legal de la firma ELECTROINGENIERIA LTDA. El objeto de la reunión es suscribir por las partes, el ACTA DE INICIO de los labores del contrato de concesión No. 001-03. Una vez revisados los documentos del Contrato y considerando que se dan las condiciones legales y formales, por el inicio de los labores, las partes acuerdan establecer como fecha formal de inicio del contrato de concesión No. 001-03, el día **01 DE DICIEMBRE DE 2004**. Para todos los efectos formales del contrato, incluida la aplicación de los valores reflejados en la oferta presentada por ELECTROINGENIERIA LTDA. El Concesionario se tendrá como mes uno de la operación el mes de **DICIEMBRE DE 2004**. A partir del citado mes correrán los plazos y condiciones establecidos en los términos referencia que soportaron la contratación y que fueron aceptados por las partes a la suscripción del contrato.

Se firma la presente acta por las partes en Calima el Darién, a los veintidós (22) días de Noviembre de Dos Mil Cuatro (2004).

POR EL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN


GUSTAVO ADOLFO FLORENTE TRIVIÑO
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN

POR EL CONCESIONARIO


ELBERT LOPEZ ORTIZ
GERENTE GENERAL
ELECTRO INGENIERIA LTDA.

"Un Gobierno de Todos, Un Calima Posible"
Calle 10 No 6-25 Teléfono: 253 3117 – 253 3175 Ext. 18 Fax: 253 3322
Correo Electrónico: elalifragir@hotmail.com.co

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 300-300-31-04	
MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	NIT. 890.309.611-9	Fecha: 01/01/2026	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	MED-NTGCP 1000-2009-SISTEDA	Versión: 1	
PROCESO: DESPACHO DEL ALCALDE		Página: 1	
NOMBRE DEL DOCUMENTO: OTROS SI MODIFICATORIO			

OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 001 DE OCTUBRE 06 DE 2003, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN Y ELECTROINGENIERIA S.A.S.

Entre los suscritos, MARTÍN ALFONSO MEJÍA LONDOÑO, mayor de edad, vecino del municipio de Calima El Darién, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.955.976, actuando en su calidad de Alcalde Municipal de Calima El Darién.

Aquí se evidencia que entre el folio del acta de inicio y el del Otro Sí No. 2 no existe ningún otro tipo de soporte, ni siquiera la solicitud hecha por el supervisor y por el Interventor.

Es cierto, que la administración tiene atribuciones, pero ellas no están por encima de los lineamientos y parámetros que la misma administración municipal ha establecido. Y es relevante que el municipio admita que el contrato está vigente, como quiera que ello desestima, lo que han llamado como "Acta de Inicio", porque no hay sino 1 acta de inicio por contrato y el Otro sí No. 2 No lo requería, por tanto, no había un lapso de tiempo adicional para que se surtieran las obligaciones que se adquirían con su firma.

Como quiera que se enrostró la falta de publicación del estudio técnico en la contradicción en la observación hecha a la interventoría, se trajo el link de publicación calendado en los primeros días del mes de noviembre de 2023, cuando el contrato se ejecutó en el 2019 y el Otro Sí se suscribió en 2021, violándose los principios de transparencia y publicidad.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Seguidamente, se hace alusión al principio de planeación, mismo que bien direccionado habría solicitado del estudio técnico, todos los escenarios posibles, incluyendo uno en el que no se modificaran tarifas, o en el que se incluyan los valores que hasta la fecha se dejan por fuera del sistema correspondientes a los clientes No Regulados, a la Hidroeléctrica y a los que se recaudan a través del predial, valores que no están ingresando a la fiducia. Tampoco se vé reflejado en el estudio (que no se aportó al expediente de la concesión), la situación real de equilibrio o desequilibrio a la fecha de su realización.

Como vemos el estudio adolece de la revisión de los distintos escenarios (que no conllevaron un nuevo modelo financiero), porque solo previó el escenario del cambio tarifario que permitía la sustentación de la prórroga, modelo tarifario necesario para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, en un evento futuro e incierto que no dependía exclusivamente del querer de la administración sino que tenía múltiples variables, entre ellas, la aprobación del Concejo o la nulidad del acto administrativo, evento sobreviniente que echó por tierra la proyección realizada.

No es viable que se desestime que quien realizó el estudio sea también quien realiza seguimiento, no obstante, puede ajustarse la redacción en tal sentido.

Ahora bien, frente a que *“no tenía que la administración municipal evaluar ninguna tipología contractual diferente a la de la continuidad del contrato de concesión vigente puesto que este aún no estaba cerca a su terminación”*, ello no es cierto, pues el estudio técnico realizado es una exigencia de la Ley que específicamente acota, se debe hacer el mismo como mínimo dos años antes de la terminación del contrato de concesión, en miras a evaluar el modelo de negocio y verificar si se satisfizo la necesidad o hay que continuar con un nuevo contrato de concesión, en cuyo caso se hacía menester la licitación pública, dada la cuantía de la negociación; para obtener en tal caso, pluralidad de oferentes en igualdad de condiciones y en este sentido incluso, hay disposición interna que rige la materia, a saber:



2.1.2.1. LICITACIÓN PÚBLICA

La licitación pública corresponde a la regla general de los procesos de contratación y consiste en el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable. La regla general para la escogencia de contratistas es la Licitación Pública, salvo que el contrato a celebrar se encuentre entre las excepciones previstas para la selección a través de las otras modalidades y además, supera una cuantía superior a doscientos ochenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (280 SMMLV), el contratista será seleccionado a través del procedimiento previsto para la Licitación Pública.

Cuando la dependencia encargada de adelantar el proceso de selección lo determine viable y conveniente en la realización de los estudios previos, la oferta en el proceso de licitación pública podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica en subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento.

ETAPA	TRAMITE	TÉRMINOS	RESPONSABLE
-------	---------	----------	-------------

De otro lado, el tema de la reversión no es un elemento menor a tener en cuenta, pues lo que trata el punto, es sobre la devolución de los bienes que van a acrecer el patrimonio del

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

municipio, con motivo de la inversión realizada de los dineros del impuesto de alumbrado público, pero para ello era necesario tener claridad del Inventario de luminarias, así como de los bienes entregados a la concesión desde sus inicios, lamentablemente como se observa el contrato se encuentra incompleto, no hay soporte del inventario inicial, y el inventario existente es una construcción del particular, con anuencia del comercializador.

Determinar que son inexistentes los cumplimientos, cuando no hay soportes de las actuaciones del municipio, son argucias jurídicas que carecen de sustento, lo que se reprocha no es la cláusula décimo cuarta, como vemos a continuación:

Cláusula cuarta. Adiciónese los siguientes párrafos a la cláusula cuarta del Contrato de Concesión No. 001 de 2003:

Centro Administrativo Municipal - CAM /
Calle 16 No. 6 - 25 Código Postal No. 79126 - Tel: (2)2823127-2823117
E-Mail: gubandefiscalizacion@cam.vc.gov.co

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO DE CALIMA DARÉN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: DESPACHO DEL ALCALDE

NOMBRE DEL DOCUMENTO: OTROS SI MODIFICATORIO

Código: 300-390-31-02

Fecha: 01/01/2020

Versión: 1

Página: 18

Parágrafo primero. EL CONCESIONARIO ejecutará la reinversión a la que hace referencia en Otrosí No. 02 del presente contrato en un plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. El plazo antes mencionado podrá ser prorrogado hasta en seis (6) meses o más, únicamente en caso de se derive de una situación de caso fortuito o fuerza mayor, previa autorización expresa expedida por la administración Municipal. Parágrafo segundo. Durante los primeros dieciocho (18) meses de inversión el CONCESIONARIO ejecutará, además, la expansión/modernización de las zonas rurales convenidas con el Municipio a través del Acta de Expansión/Modernización No. 02 de 2001.

Resulta que la clausula modificada, tenía que ver con el inicio del contrato y por tanto con el acta de inicio, pero resulta que la prórroga no es un nuevo contrato, luego no requería un acta de inicio, para que se empezaran las actuaciones que devenían del contrato y que consistían en inversiones por más de \$1600 millones de pesos, que se incorporan en un anexo técnico que no hace parte de la trazabilidad del expediente contractual y que solo parecen conocer el concesionario y la administración pero que hasta la fecha no se ha hecho público:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Cláusula decima cuarta. Hará parte del contrato de Concesión No. 001 de 2003, el Anexo 2 denominado: Zonas de reinversión, de conformidad con lo descrito en la parte considerativa del presente otrosí. El valor total del proyecto de iluminación tiene un costo de MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$1.680.893.278) los cuales serán pagados al CONCESIONARIO según lo indicado en la columna B del Anexo 1. El CONCESIONARIO se compromete a efectuar esta reinversión en un plazo máximo de DIECIOCHO (18) meses una vez las partes firmen el acta de inicio de este proyecto, y el MUNICIPIO garantice y certifique la disponibilidad de los recursos para la recuperación de la inversión a la que se refiere esta cláusula, ya sea por recursos del recaudo del impuesto de alumbrado público, para lo cual realizará la modificación tarifaria pertinente que le proporcione sostenibilidad financiera al sistema, o en su defecto, con recursos propios del municipio de Calima El Darién. Parágrafo. Una vez culminadas las obras de reinversión a cargo del CONCESIONARIO, se suscribirá el Acta de entrega de obras, por medio de la cual se dé cuenta de la entrega del proyecto al municipio; dicha Acta podrá ser suscrita por el MUNICIPIO o por el INTERVENTOR, en su representación.

Con fundamento, no en la ley ni en los documentos soportes exigidos por el Manual de Contratación se desestiman las inconsistencias presentes y se señala que se suscribió acta de inicio el 20 de septiembre de 2022, firmando la misma no el supervisor ni el interventor, sino el alcalde municipal, como si el procedimiento interno, pudiera obviarse sin consecuencia alguna, a propósito de lo cual se traen a colación algunas disposiciones del manual:

BUENAS PRÁCTICAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

I. PRÁCTICAS A DESARROLLAR EN EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

1.1. En la Etapa de Planeación

1. El instrumento de planeación es la piedra angular para que el proceso de contratación inicie con todas las garantías de transparencia e integridad, por eso la planeación debe ser una constante en la gestión contractual. Para ello es indispensable elaborar juiciosamente el Plan Anual de Adquisiciones el cual debe estar aprobado y publicado en el SECOP a más tardar el 31 de enero de cada vigencia fiscal.
2. Gestionar vigencias futuras para aquellos contratos cuyo plazo de ejecución supera la vigencia fiscal.
3. En caso de contradicción entre lo consignado en el presente Manual y las normas legales y reglamentarias vigentes en la materia, prevalecerán estas últimas.
4. La publicación electrónica de los actos y de todos los documentos que se generen en desarrollo del Proceso de Contratación deberá hacerse en la fecha de su expedición, o a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.

1.3. En la Ejecución del Contrato

1. En los contratos de interventoría incluir como obligación del contratista suscribir las adiciones y prórrogas a que haya lugar.
2. Incluir en los pliegos de condiciones y en las invitaciones públicas la cláusula de indemnidad como una obligación del contratista, conforme a la cual se pacte la obligación del contratista de mantenerla a la entidad libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
3. Incluir como obligación del contratista el pago oportuno a sus proveedores so pena de incurrir en una posible sanción.
4. En el expediente del contrato deben reposar los documentos originales que se generen durante todo el Proceso de Contratación.
5. La designación de supervisión debe hacerse a más tardar en la fecha de inicio del contrato. Es designación de supervisión no delegación y debe hacerse por escrito.
6. No solo la garantía que se constituye para el inicio del contrato debe ser revisada y aprobada, sino también aquellas que se exigen para las modificaciones al contrato, esto es, para adiciones, modificaciones, prórrogas, suspensiones y ratificaciones.
7. No se puede adicionar un contrato si ya se cumplió el objeto contractual, esto es, si estamos en frente de una ejecución física del 100%.
8. Cuando se requiere la adición de un contrato, se debe pactar si es necesario, la forma de pago, en caso contrario, aplica la que se haya pactado en el contrato inicial.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Las circunstancias que son “razones meramente conservadoras en materia financiera y de sostenibilidad del sistema de alumbrado público” y tampoco “en conjunto con el concesionario se tomó la decisión de esperar el inicio de las obras objeto del proyecto de inversión en iluminación hasta en tanto existiera una mejor certeza de financiación de la prestación del servicio pues al no existir un modelo tarifario ajustado a las necesidades del sistema” no quedan demostradas dentro del expediente, pues si su trascendencia es tal que afecta la inversión las mismas debieron ser oportunamente documentadas tanto por el concesionario, como por el interventor y el supervisor, y de ello no existe material probatorio.

Dentro de las falencias del contrato está el reiterado incumplimiento de las disposiciones del Manual de contratación especialmente lo determinado en los numerales, 1.3.1, 1.3.4; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.10 inciso; 1.3.13; 1.3.15; 1.3.16; 1.3.21; 1.3.25.

10. En aquellos casos en que el contrato cuente con interventoría externa se debe proyectar como obligación del interventor la elaboración del acta de liquidación del contrato.

Cuando durante la ejecución del contrato hay un cambio de supervisor, inmediatamente se debe designar otro funcionario que se encargue de dichas funciones previo informe que entregue el supervisor saliente, o si la ausencia del supervisor es temporal deberá designarse un supervisor suplente únicamente por el tiempo que dure la ausencia del supervisor principal.

11. En la minuta del contrato debe señalarse el término para liquidar el contrato.

12. Toda modificación a los contratos que implique una modificación del riesgo debe ser notificada a la compañía aseguradora que emitió la póliza.

13. Durante la ejecución del contrato se deben revisar y monitorear los riesgos de la contratación y adoptar las medidas necesarias para mitigarlos.

14. La suspensión del contrato, la revisión de precios, la potestad de modificación unilateral de los contratos, son prácticas de buena gestión reguladas en la ley 80 de 1993 o delimitadas por la jurisprudencia, que utilizadas correctamente pueden dar solución a las contingencias en forma ágil y significar una negociación ventajosa o ahorro de recursos públicos.

15. La revisión periódica de precios es una facultad que puede usar la administración para impedir que se configure la ruptura del equilibrio económico.

16. El supervisor debe asegurar que las garantías se encuentren vigentes por el término previsto en el contrato, de ahí la importancia de comunicar a las compañías aseguradoras las suspensiones y reinicios de los contratos.

1.3. En la Ejecución del Contrato

1. En los contratos de interventoría incluir como obligación del contratista suscribir las adiciones y prórrogas a que haya lugar.

2. Incluir en los pliegos de condiciones y en las invitaciones públicas la cláusula de indemnidad como una obligación del contratista, conforme a la cual se pacte la obligación del contratista de mantenerla a la entidad libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

3. Incluir como obligación del contratista el pago oportuno a sus proveedores so pena de incurrir en una posible sanción.

4. En el expediente del contrato deben reposar los documentos originales que se generen durante todo el Proceso de Contratación.

5. La designación de supervisión debe hacerse a más tardar en la fecha de inicio del contrato. Es designación de supervisión no delegación y debe hacerse por escrito.

6. No solo la garantía que se constituye para el inicio del contrato debe ser revisada y aprobada, sino también aquellas que se expiden para las modificaciones al contrato, esto es, para adiciones, modificaciones, prórrogas, suspensiones y ramificaciones.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

21. Todo requerimiento efectuado a un contratista debe ser por escrito e ir con copia a la compañía aseguradora.
22. Suspendido un contrato no pueden ejecutarse actividades, ello implica asumir riesgos, además de que contraría la motivación misma de la suspensión.
23. Los consorcios y uniones temporales deben constituir un RUT para cada contrato y una vez liquidado deben cancelarlo.
24. Las adiciones deben estar soportadas el presupuesto y debe indicarse si afectan o no la forma de pago pactada en el convenio inicial.
25. Se mantendrá el equilibrio del contrato durante toda su ejecución, por ello la entidad reconocerá y pagará los imprevistos en los contratos a los que haya lugar, debidamente justificados.

Manifiesta el sujeto que “*existen obligaciones del contrato -no especifica si del Contrato de concesión o de interventoría- las cuales no se están ejecutando, sin embargo, desconoce que existen labores que son exclusivas de la Entidad tales como la liquidación y cobro de clientes no regulados, liquidación directa a través de la administración municipal, la suscripción del contrato de suministro de energía para el sistema de alumbrado público, entre otras actividades propias de la función administrativa municipal. Por el contrario la Contraloría desconoce el contenido de los informes presentados por la interventoría entre los meses de agosto a diciembre de 2022*” Lo que parece olvidar la administración municipal, es que las falencias citadas afectan el recaudo del Impuesto de Alumbrado Público, que viene sosteniéndose exclusivamente, de los dineros que el comercializador (Celsia), transfiere, pero que contribuyen al desequilibrio económico y que en su respuesta el municipio no sustenta ni prueba lo contrario

Es necesario, traer antes de concluir lo dispuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C – 207 de 2019, señaló la preponderancia del Interés general y de los principios constitucionales dentro de la contratación pública, y acotó: “ **3. LA PREVALENCIA DEL INTERÉS GENERAL COMO LÍMITE DEL MARGEN DE CONFIGURACIÓN DEL LEGISLADOR EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL**

Dada la importancia del contrato administrativo para el desarrollo de la actividad estatal y su vinculación con el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho, la facultad de su regulación está limitada por los mandatos de la Constitución, como corresponde necesariamente bajo el principio de supremacía de la norma fundamental. De esta forma “cuando las reglas establecidas por el Congreso de la República no se ajustan a los contenidos constitucionales y a la finalidad de los mismos, debe el Tribunal Constitucional ejercer la guarda de la Carta tal como se lo manda el artículo 241 de la misma Norma de Normas.”^[56]

Por lo tanto, el legislador no puede regular el contrato estatal sin tener en cuenta en dicha tarea el interés general. Esta vinculación del legislador ha sido afirmada puntualmente en jurisprudencia de esta Sala:

“(…) El interés público implícito en la contratación estatal, afecta de tal manera este instituto jurídico, que determina la especial posición de las partes contratantes y la relación entre ellas. Esta relación no se desenvuelve dentro de los mismos parámetros de igualdad en que lo hace la contratación entre particulares, sino que implica la preminencia de la posición estatal. La autorización de cláusulas exorbitantes,

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

como la de caducidad o las de terminación o modificación e interpretación unilaterales por parte de la Administración, son un claro ejemplo de esta situación. **La ley dota a la Administración de herramientas o mecanismos especiales, ausentes en las formas contractuales privadas, que están presentes para asegurar el cumplimiento de los fines estatales y del interés general.**^[57]

Se trata por lo tanto de una relación necesaria e inescindible, que limita y guía la función del legislador en cuanto atañe a la regulación de la contratación estatal.^[58] Esta Sala, en la sentencia C-713 de 2009, y tras considerar in extenso la potestad del legislador en la materia, afirmó que: “(...) la defensa del principio del interés general no solo constituye la finalidad primordial sino el cimiento y la estructura de la contratación administrativa (...)”^[59]

Entonces, la noción de interés público alcanza la concreción suficiente en aquellos bienes jurídicos de los cuales es titular el conglomerado social, como sucede con la protección del patrimonio público en el ejercicio de la función contractual. Es en esa especificidad, suministrada por el tipo de bien jurídico referido, que el juez constitucional adelanta el correspondiente juicio de constitucionalidad frente a las normas que afectan o desarrollan los contenidos del interés general. Así sucede claramente con las leyes que regulan la contratación estatal.

3.1. El interés general como límite de la regulación de la contratación estatal

La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades sobre las finalidades de la contratación estatal y ha desarrollado una jurisprudencia uniforme en torno a la protección del interés general como uno de sus principios axiológicos. Con fundamento en los artículos 1°, 2° y 209 de la Constitución Política, la Sala Plena de esta Corporación ha indicado que todas las actuaciones estatales –incluida la contratación– deben obedecer las finalidades del Estado Social de Derecho.

El artículo 1° consagra a Colombia como un Estado social de Derecho fundado, entre otros principios, en la prevalencia del interés general. El artículo 2° establece que es fin esencial del Estado garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes. Por su parte, el artículo 209 de la Constitución indica que la función administrativa está al servicio del interés general y se desarrolla con fundamento en “los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”. Con base en estas disposiciones, la Corte Constitucional ha ligado la actividad contractual al cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho. Al respecto, la sentencia C-499 de 1992 señaló lo siguiente:

“Para el cumplimiento de los fines del Estado es necesario el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. Luego, el objeto de los contratos no es otro que la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y eficaz. Es por ello que el estudio y la comprensión de la contratación estatal debe inscribirse en los principios axiológicos del Estado Social de Derecho que irradian todas las disposiciones contractuales previstas en la Constitución^[60].

De esta forma, en el marco del Estado Social de Derecho la función pública está al servicio del interés general y puesto que una de las formas de desarrollar la función

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

pública es la contratación estatal, es dable concluir que dicha contratación se encuentra también al servicio del interés general. Esto implica que la regulación de la contratación estatal, en tanto potestad del legislador, no es una facultad ilimitada, sino que está sometida a los postulados de la Carta y, en particular a la satisfacción del interés general.” (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

Se concluye con la revisión de las evidencias aportadas en la contradicción que no se prueban las circunstancias de hecho reprochadas por el componente jurídico, y que dieron lugar al incumplimiento de las labores propias del municipio, el supervisor y el concesionario. Originando un perjuicio ostensible al erario público, recordemos que el desequilibrio según el contratista supera en la actualidad los \$700 millones de pesos y los soportes de seguimiento tanto de la supervisión como de la Interventoría son poco idóneos, aunado a las falencias en soportes al momento de la realización del Otro Sí.

Así las cosas, se sostiene la observación pasando a ser un hallazgo de idénticas connotaciones.

Con respecto al componente ambiental :

El problema no es que la comercializadora facture y recaude porque esto es lo permitido por la ley, el problema es la liquidación de los regulados, la cual debe realizarla la entidad, para que el comercializadora la facture, actividad que no está realizando la Administración Municipal.

En el análisis que realizó la contraloría se tuvo en cuenta la facturación bimensual para la zona rural, la diferencia de consumo mes a mes de los usuarios , evidenciando las diferencias que se presentaron, además el mismo Estatuto tributario establece cuando se debe aplicar en cada caso (el mayor valor que resulte de comparar el 7% del valor del consumo mensual de energía eléctrica sin tener en cuenta los descuentos por subsidios e incrementos por contribución con las tarifas mínimas para cada estrato socioeconómico), acción que no la realizan en todo los casos.

Por lo tanto, lo argumentado por la entidad no desvirtúa la observación en el componente ambiental, confirmando el hallazgo

18.Observación administrativa con presunta Incidencias Disciplinaria y Fiscal – Seguimiento del producto y cumplimiento de las obligaciones contractuales

Contrato No. 310-13- 06.208- 2022 MC

Objeto: Consultoría para el acompañamiento técnico para el ajuste de los documentos que forman parte del proceso existente del esquema de ordenamiento territorial del municipio de Calima – El Darién (Valle del Cauca)

Valor: \$102.250.000

Plazo: Hasta 20 de diciembre de 2022

Etapas precontractual: En los estudios previos (folios 39 - 93) se especifica la necesidad de proponer una ruta metodológica que permitiera aunar los criterios técnicos, financieros y jurídicos para el proceso de ajuste del EOT; ajustar las modificaciones de los documentos relacionados al EOT, complementar el EOT en los aspectos normativos o de programación de actuaciones no consideradas en los documentos existentes acorde a lo dispuesto en el Decreto 1232 de 2020 y las recomendaciones de la CVC. Se requirió entre otros aspectos realizar el balance de la información disponible: El inventario de la información secundaria disponible (infraestructura, proyectos, estudios y/o cartografía) que sea pertinente como insumo para el proceso, considerando la información de carácter sectorial (agropecuario, industrial, transporte, minero- energético e hidrocarburos y turismo); ii) Inventario de licencias ambientales, licencias urbanísticas, títulos y/o permisos mineros vigentes, así como las áreas adjudicadas para la exploración y explotación de hidrocarburos en jurisdicción del municipio; iii) El inventario de los instrumentos que se hayan expedido en la vigencia del Plan, que le desarrollen y complementen; iv) identificación de las áreas o inmuebles declarados patrimonio cultural; planes de especial manejo y protección PEMP; v) información de detalle de la cual disponen los prestadores de servicios públicos domiciliarios sobre las capacidades de infraestructura y fuentes de abastecimiento, la proyección de la expansión, reposición y/o ampliación de la capacidad de redes para cubrir el déficit de cobertura actual y proyectado, el catastro de redes matrices de las infraestructuras de servicios públicos domiciliarios, así como los planes de expansión para ampliar el perímetro de servicios; vi) inventario de información primaria que se debe elaborar; vii) determinación de recursos necesarios para adelantar el proceso; viii) determinantes ambientales y estudios aportados por la autoridad ambiental competente; ix) información correspondiente a las demás determinantes establecidas en la ley.

Así como en la dimensión ambiental, caracterización geográfica, caracterización de los elementos que constituyen el sistema biofísico, identificación de las áreas de conservación y protección ambiental, planes de manejo y demás instrumentos emanados de la autoridad ambiental, caracterización de la cobertura y uso actual del suelo, aptitud potencial de uso, identificación y análisis de los factores y áreas de degradación ambiental y la determinación de los conflictos de uso del suelo y estudios para la incorporación de la gestión del riesgo (estudios básicos de amenazas). En la Dimensión funcional, determinar entre otros: iii) Servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas...v) Espacio público...vii) Patrimonio material (si existen).

En la dimensión institucional, ii) capacidad financiera del municipio precisando la disponibilidad de los ingresos corrientes para financiar las intervenciones y proyectos propuestos, luego de atender los compromisos de gasto recurrentes (funcionamiento, inversiones sectoriales sociales, así como procesos judiciales, sentencias o conciliaciones en contra del municipio, compromisos de deuda pública.

18.Observación administrativa con presunta Incidencias Disciplinaria y Fiscal – Seguimiento del producto y cumplimiento de las obligaciones contractuales

Se exigen condiciones de experiencia 2 contratos con entidades públicas o privadas, cuyo valor ejecutado supere el 100% del presupuesto del contrato. También se solicita un equipo de consultoría: 1 director del proyecto, 1 Arquitecto especialista en derecho urbano; Geólogo con magister profesional ambiental; 1 administrador público con especialización en servicios públicos domiciliarios; 1 Abogado.

Se observan los pre pliegos y después los pliegos, a folios 99- 208. Seguidamente, se presenta oferta, por errores de archivo documental, la propuesta y sus anexos no se encuentran dentro de la trazabilidad del contrato principal, por ende, se pierde la transparencia del contrato para determinar la oportunidad de la llegada de la misma. Se observa a folio 215 y s.s. el trámite de escogencia. Posteriormente, se realiza el informe preliminar de evaluación, adjudicándose el contrato en audiencia, luego se registra en el contrato la resolución de adjudicación (folios 226 - 227).

Etapla contractual: Se observa el contrato suscrito a folios 228 – 237, del 22 – 09- 2022. Por errores de archivo documental, se observa la aprobación de la póliza y luego la póliza de cumplimiento ambos de fecha 29 – 09- 2022, el acta de inicio, está calendada 01 -10- 2022, no se evidencia el nombramiento de supervisor, pero está suscrita por el secretario de Planeación de la época. El registro del contrato en el Secop I se hizo de manera extemporánea el 06- 10- 2022 (folios 224 - 225).

Sin que se evidencie ningún tipo de actuación contractual se observan las facturas electrónicas de venta FEDV12 del 30-11-2022 y FEDV15 del 27- 12 -2022, informes de quien funge como supervisor de facto, luego el pago. En la trazabilidad del expediente se observan 2 CD con información sobre el producto entregado.

Fuera de la trazabilidad se encuentra un segundo tomo de fortalecimiento de participación democrática en el ordenamiento territorial, en donde se observan 11 actas; también 5 A-Z que contienen la propuesta, con una serie de hojas de vida y documentos complementarios del equipo de trabajo requerido, sin embargo, dentro de la información de la carpeta principal, la única SSI que se cancela es la del contratista suscribiente, así que no hay certeza sobre la intervención de otros profesionales, pues tampoco se anexaron al expediente los contratos y pagos de los intervinientes subcontratistas, que daban idoneidad a la propuesta.

No se observa en el entregable visible en las AZ, el documento técnico de la metodología, ni la cartografía base utilizada. Es más, señala el contratista como no hay coincidencia con la división zonal realizada por el gestor catastral frente a las veredas y la división existente según el acuerdo que aprobó el PBOT en 1999.

De otro lado, también se encuentran en A-Z, información correspondiente a Estudios básicos de amenaza por movimientos en masa, que no aparecen suscritos por el correspondiente profesional a cargo de tal punto. Sin embargo, llama la atención que para el desarrollo de los mismos se requiere la cartografía base, que no se tenía según documento aportado por el contratista, por cuanto el gestor catastral no había adelantado lo pertinente, en tanto, el cumplimiento en tales términos no era posible, a la luz de la norma vigente que rige la materia.

18. Observación administrativa con presunta Incidencias Disciplinaria y Fiscal – Seguimiento del producto y cumplimiento de las obligaciones contractuales

Apoyo Técnico Medioambiente

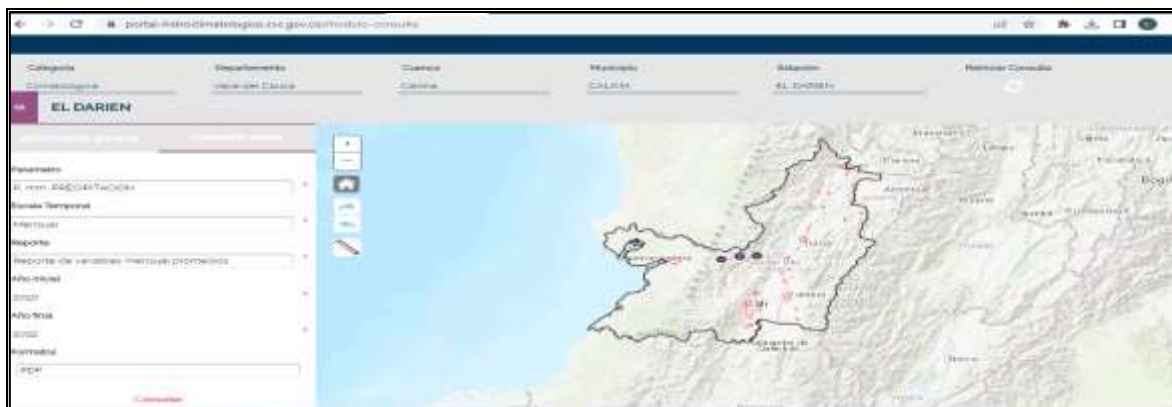
Se encontraron deficiencias significativas en la calidad y el cumplimiento de los resultados estipulados en el contrato. El objetivo del contrato era realizar un diagnóstico que permita conocer el estado actual del municipio, para confrontarlo con la imagen deseada de tal manera que permita formular adecuadamente la planeación del territorio del municipio.

Sin embargo, el análisis realizado reveló que:

- Información desactualizada: se encontró que los datos históricos con los que hizo los análisis del sistema biofísico son hasta 2017, cuando en el portal de la CVC, GeoCVC hay información reciente.

Imagen No. 29

Imagen de GEOCVC con los datos de la precipitación en el municipio de Calima el Darién



<https://portal-hidroclimatologico.cvc.gov.co/>

<https://informacionambiental.cvc.gov.co/fichero>

En la hidrología solo hace referencia al río Calima y al río Agua Clara y según la información de la CVC la cuenta del río Calima tiene 2 subcuentas, la del Río Calima y el Bajo San Juan.

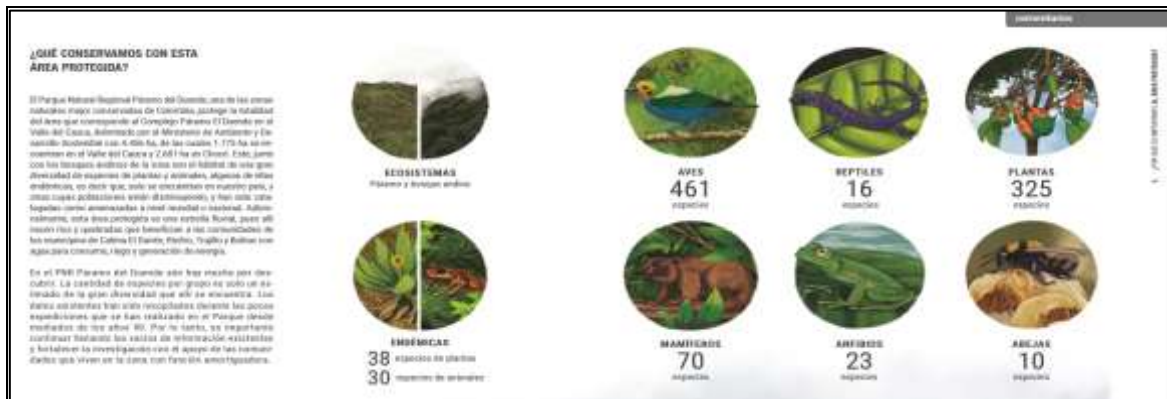
Con respecto a los humedales no identifica su ubicación.

El área total del páramo está desactualizada, figura 14.513 hectáreas, según la última actualización de la CVC son 18.127 hectáreas.

No hay un análisis de las especies que se protegen con la conservación del páramo del Duende, a pesar de que existe información recopilada por la CVC.

18. Observación administrativa con presunta Incidencias Disciplinaria y Fiscal – Seguimiento del producto y cumplimiento de las obligaciones contractuales

Imagen No. 30



Fuente: imagen tomada de la Síntesis del Plan de Manejo Parque Natural Regional Paramo del Duende Valle del Cauca ambiental del Páramo CVC

El plan de manejo ambiental del parque natural del duende no establece como se va realizar la protección del área, que actividades se van a desarrollar, cómo se van a mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados.

La identificación y análisis de los factores y áreas de degradación ambiental se hacen de manera general

La priorización de las amenazas que se deben evaluar y zonificar con el fin de incorporar esta información en el Plan de Ordenamiento Territorial, está basado en el estudio que realizó la EPSA en el 2017, no se evidencia el trabajo de los expertos que componen la consultoría.

- Incoherencia en los datos: se identificaron inconsistencias, la fuente de información que utilizan para todo el estudio es Equipo Consultor EOT 2019, el cual corresponde al mismo estudio que realizó el consultor a través del contrato 449 de diciembre de 2018

Imagen No. 31

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 300.13.06.7	SIG MECI SISTEDA
MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN		Fecha: 03/01/2016	
NIT: 890.309.611-8		Versión: 1	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página: 2 DE 3	
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			
NOMBRE DEL DOCUMENTO: HOJA DE RUTA			

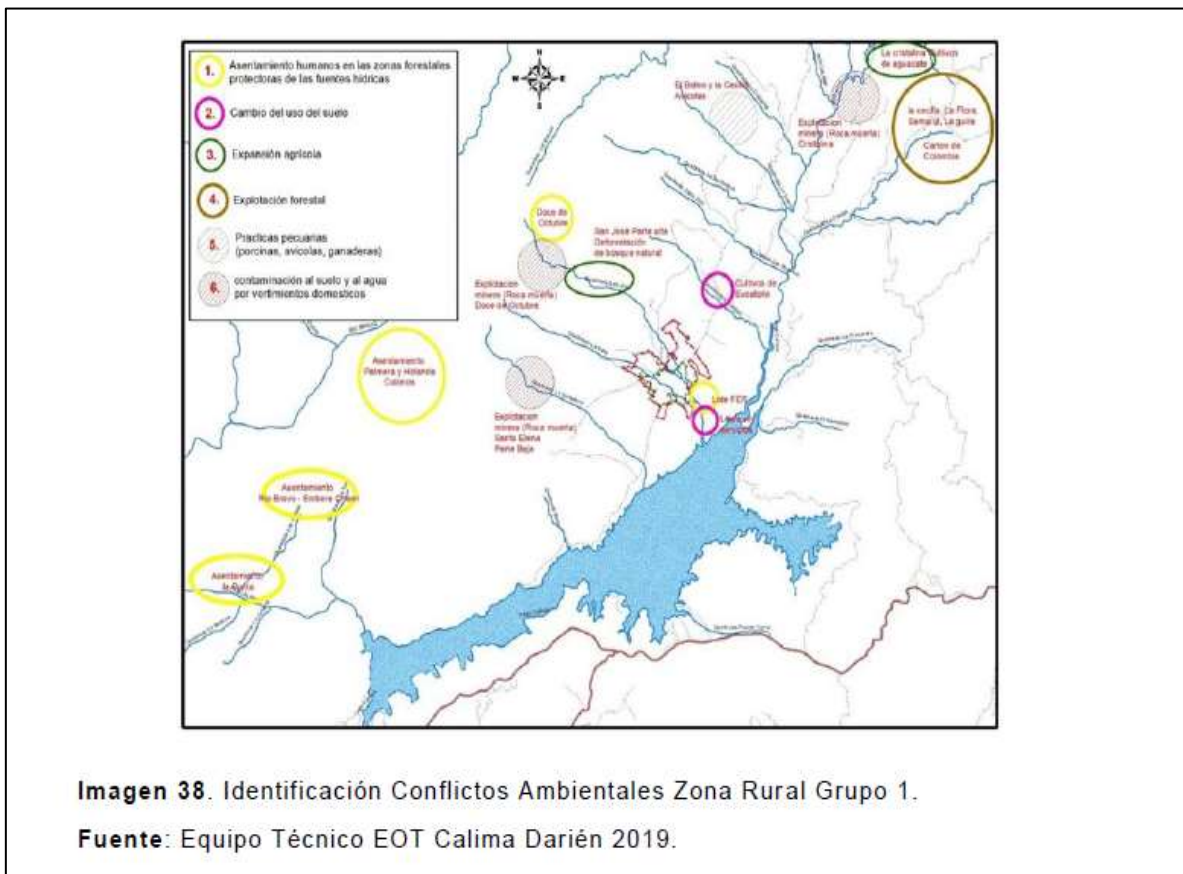
CONTRATO N°	DE	449 DE DICIEMBRE 11 DE 2018
MODALIDAD	DE	CONSULTORIA
CONTRATACION		
MUNICIPIO		CALIMA EL DARIEN
N.I.T. No.		890.309.611-8
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR FABIO ZAPATA ARIAS
		ALCALDE MUNICIPAL
C.C. No.		14.894.225 DE GUADALAJARA DE BUGA (V.)
CONTRATISTA:		FREDY MARQUEZ OROZCO
NIT:		16.453.673 YUMBO
DIRECCION:		CARRERA 4 NO. 11-55 YUMBO VALLE
OBJETO:		CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CALIMA- DARIEN- VALLE DEL CAUCA DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LA LEY 388 DE 1.997 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.
VIGENCIA		DOCE (12) MESES
VALOR:		TRESCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESO MCTE (\$330.364.651.00)

18.Observación administrativa con presunta Incidencias Disciplinaria y Fiscal – Seguimiento del producto y cumplimiento de las obligaciones contractuales

Imagen No. 32



Imagen No. 33



18.Observación administrativa con presunta Incidencias Disciplinaria y Fiscal – Seguimiento del producto y cumplimiento de las obligaciones contractuales

Imagen No. 34



Imagen No. 35



Como se puede observar la información base y los registros fotográficos corresponden al estudio realizado en el 2019, no se evidencia el análisis de los especialistas que componen la consultoría. No se encontró ni un documento firmado por los expertos que respalden los resultados del estudio.

Falta de transparencia: Se detectaron irregularidades en la documentación, el diagnóstico de la cartografía es una fiel copia del diagnóstico realizado por el mismo contratista en el 2018, como se evidencia en los siguientes apartes:

18. Observación administrativa con presunta Incidencias Disciplinaria y Fiscal – Seguimiento del producto y cumplimiento de las obligaciones contractuales

Imagen No. 36

Actual

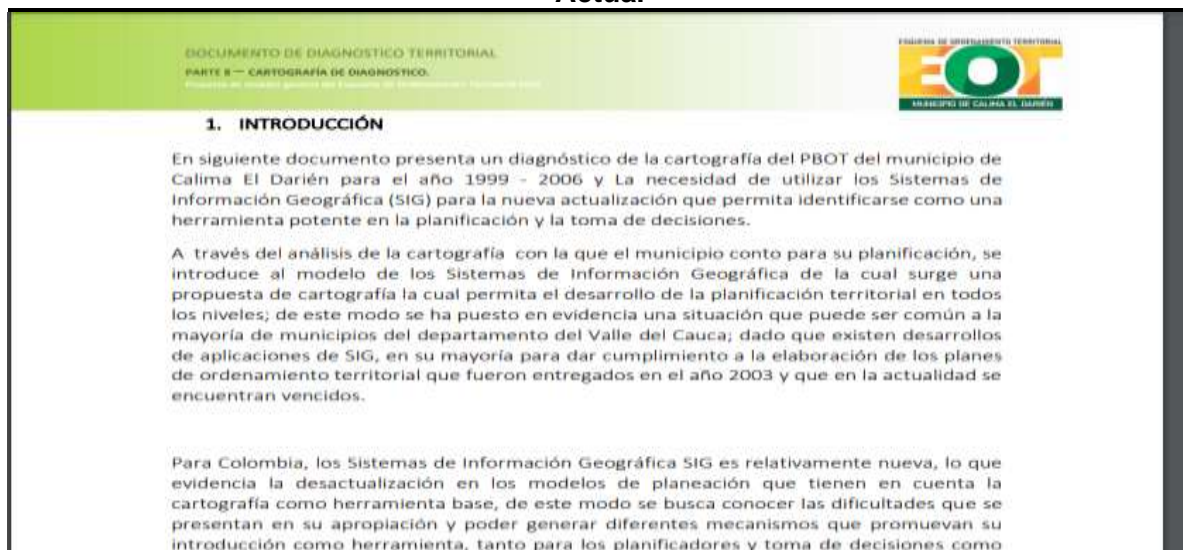
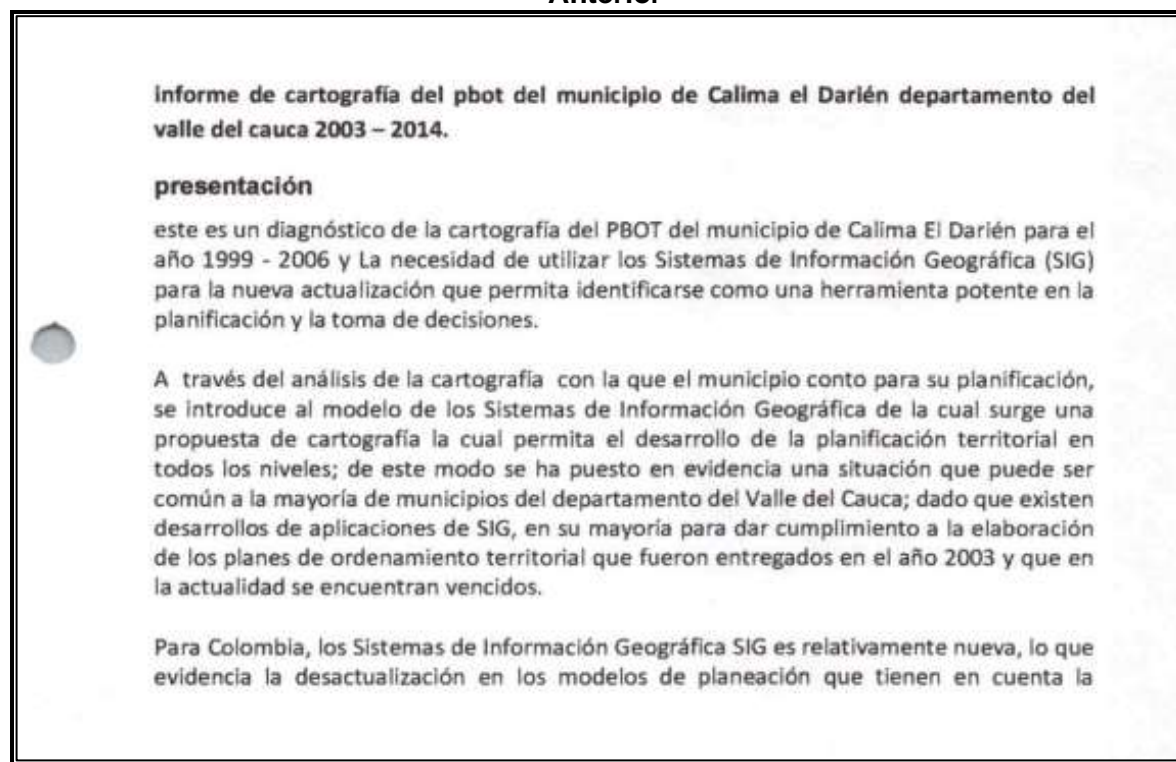


Imagen No. 37

***Anterior**



18. Observación administrativa con presunta Incidencias Disciplinaria y Fiscal – Seguimiento del producto y cumplimiento de las obligaciones contractuales

Imagen No. 38

Actual

3. METODOLOGÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA

Para la propuesta de cartografía del EOT del municipio de Calima El Darién, se plantean las siguientes fases tanto de levantamiento de información, como de sustento y soporte técnico para la elaboración del diagnóstico, en cada una de sus componentes.

1. Levantamiento de la información primaria

Se levantará la información de campo suficiente para la elaboración del EOT, esta información será recopilada en bases de datos y/o los diferentes formatos SHP o DWG que esté disponible con el fin de procesarla para la adecuada evaluación objetiva en los distintos componentes, las fuentes de información cartográfica primaria y secundaria serán:

- Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.
- Gobernación del Departamento del Valle del Cauca.
- Alcaldía Municipal de Calima Darién.

2. Levantamiento de información secundaria

Página 5



GAIPOT
Gestión y Asistencia Integral
en Planes de Ordenamiento Territorial
Fredy Marquez Orozco – Consultor

Imagen No. 39

Anterior

CONSULTORIA EOT CALIMA EL DARIEN 2018



técnico para la elaboración del diagnóstico, en cada una de sus componentes.

Levantamiento de la información primaria

Se levantará la información de campo suficiente para la elaboración del EOT, esta información será recopilada en bases de datos y/o los diferentes formatos SHP o DWG que esté disponible con el fin de procesarla para la adecuada evaluación objetiva en los distintos componentes, las fuentes de información cartográfica primaria y secundaria serán:

- Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.
- Gobernación del Departamento del Valle del Cauca.
- Alcaldía Municipal de Calima Darién.

Levantamiento de información secundaria

Se realizará la consulta necesaria en las diferentes entidades de orden local, regional y nacional, con el ánimo de tener en cuenta instrumentos de planeación y ordenamiento territorial, la información secundaria de carácter ambiental, social y económica será investigada, procesada y actualizada por esta consultoría a través de fuentes secundarias.

Serán consultadas además las siguientes páginas web:

- SIAC. Sistema de Información Ambiental de Colombia. (<http://www.siac.gov.co>)
- SIGOT. Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial. IGAC (<http://sigotn.igac.gov.co/siganh/>).
- SIGOTANH. Sistema de consulta para Áreas de Reglamento Especial.
- IGAC-ANH. (<http://sigotn.igac.gov.co/siganh/>).
- ICANH. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. (www.icanh.gov.co).
- SINCV2. Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras (<http://200.93.135.173/>).

18.Observación administrativa con presunta Incidencias Disciplinaria y Fiscal – Seguimiento del producto y cumplimiento de las obligaciones contractuales

Imagen No. 40

Actual

LA SITUACIÓN DE LA CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN

En su momento, la cartografía con la que contaba el PBOT del municipio de Calima El Darién comprendía y abarcaba las necesidades primarias o básicas para un análisis de la situación del municipio, estos instrumentos siguen teniendo vigencia, dado que los cambios físicos han tenido transformaciones pero definitivamente los impactos sociales al medio ambiente suponen una representación mucho más precisa, para comprender el estado del municipio de tal manera que permita proyectar los lineamientos para una ocupación equitativa de su entorno social, económico y ambiental del municipio; de los retos que en materia de planificación eficiente para el municipio, tendremos al alcance del proyecto de actualización del EOT municipal, poderosas herramientas de análisis espacial a escala 1:5000 para el área urbana, 1:10.000 y 1:30.000 para el área rural cumpliendo con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y el decreto 1077 DE 2015 (Antes Decreto 1807 DE 2014) en cuanto a la incorporación de los estudios de gestión del riesgo en los POTs.

Imagen No. 41

Anterior

la situación de la cartografía del municipio de Calima el Darién

En su momento, la cartografía con la que contaba el PBOT del municipio de Calima El Darién comprendía y abarcaba las necesidades primarias o básicas para un análisis de la situación del municipio, estos instrumentos siguen teniendo vigencia, dado que los cambios físicos han tenido transformaciones pero definitivamente los impactos sociales al medio ambiente suponen una representación mucho más precisa, para comprender el estado del municipio de tal manera que permita proyectar los lineamientos para una ocupación equitativa de su entorno social, económico y ambiental del municipio.

De los retos que, en materia de planificación eficiente para el municipio, tendremos al alcance del proyecto de actualización del EOT municipal, poderosas herramientas de análisis espacial a escala 1:5000 para el área urbana, 1:10.000 y 1:30.000 para el área rural cumpliendo con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y el decreto 1077 DE 2015 (Antes

18.Observación administrativa con presunta Incidencias Disciplinaria y Fiscal – Seguimiento del producto y cumplimiento de las obligaciones contractuales

Criterio y fuente de criterio.

Ley 594 de 2000, artículos 1 a 4, 11 a 17; Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 13, 23 y 24, Ley 1474 de 2011, artículos 82 a 84; Constitución Nacional, artículo 209; Contrato en sus componentes pre y contractual (estudios previos, propuesta y minuta); manual de contratación de la entidad; Ley 388 de 1997, artículo 10; Ley 489 de 1998, Artículo 3º; Decreto Ley 019 de 2012, Numeral 11 del artículo 189; Decreto 1807 de 2014, Artículos 1 parágrafo 2 y 8º; Decreto 1232 de 2020 Artículo 2.2.2.1.2.1.2 Etapa de Diagnóstico.

Causa

Planeación antieconómica y falta de coherencia en los datos recopilados, así como falencias en el seguimiento de las actividades por parte de la supervisión, que no revisa el producto y acepta las falencias del mismo.

Efecto

Menoscabo al patrimonio público e inadecuada gestión en favor de la comunidad dada la deficiencia en la calidad y precisión de la información proporcionada, generando un presunto detrimento por valor de \$102.250.000.

Los hechos descritos constituyen una observación administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal, por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39; Ley 610 de 2000, artículos 5 y 6.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

OBSERVACIÓN 18: Observación administrativa con presunta Incidencias Disciplinaria y Fiscal – Seguimiento del producto y cumplimiento de las obligaciones contractuales

El Contrato No. 310-13- 06.208- 2022 MC suscrito entre el Municipio de Calima El Darién y el Profesional Especializado Fredy Márquez Orozco, cuyo objeto contractual es: Consultoría para el acompañamiento técnico para el ajuste de los documentos que forman parte del proceso existente del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Calima – El Darién (Valle del Cauca).

El Equipo Auditor inicia sus afirmaciones con una hipótesis absolutamente lejana de lo que describimos en los Estudios Previos y desconociendo el contexto que nos generó la Acción Popular instaurada por la Procuraduría 21 Judicial II Ambiental y Agraria del Valle del Cauca y que por reparto le correspondió al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Guadalajara de Buga, bajo el radicado 76-11-33-33-002-2022-00022-00.

Revisando las pretensiones de la Acción Popular, decidimos iniciar, sin propósito de culminar, la Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial existente, el cual tenía vencido todos los períodos, de corto, de mediano y de largo plazo. Sin propósito de culminar o de finiquitar la Revisión y Ajuste del EOT, porque el resultado de la Acción Popular y su respectiva Sentencia podría cambiar los términos y condiciones de la Revisión y Ajuste, al darle, posiblemente, una mayor prevalencia a ciertos aspectos, o darle un mayor alcance,

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

al que nosotros en el Municipio y la Comunidad que participaría de este proceso. Además no habíamos llegado, en la mecánica procesal de la Acción Popular, a la sesión de Pacto de Cumplimiento, en la cual podrían surgir compromisos, que podrían quedar en contraflujo a lo que hubiésemos esquematizado como necesidad en los documentos precontractuales.

El Plan de Ordenamiento Territorial existente a la fecha, aprobado por el Honorable Concejo Municipal, con calendas del 31 de diciembre de 1999 mediante Acuerdo 050, no contempló, en ninguno de sus aspectos la Ley 2 de 1959, ni había recogido otra legislación ambiental, como el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente expedido el pasado 18 de diciembre de 1974 bajo el Decreto Ley 2811, entre otras.

Conocedores del Manual para la incorporación de la Dimensión Ambiental en los Instrumentos de Planificación Territorial, expedido por la CVC, el 24 de diciembre del 2021, decidimos iniciar nuestros primeros pasos en la Revisión y Ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial, contando con la orientación del Departamento Nacional de Planeación, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, del Departamento Administrativo de Planeación del Valle del Cauca y de la ESAP. Estas Entidades nos daban orientación de modo virtual y de modo presencial en nuestro Municipio. Es verificable con estas Entidades. Con ellos concertamos, que una Revisión y Actualización completa significa entre 12 y 18 meses de trabajo continuo y conformando un Equipo de Trabajo idóneo.

La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, inició estos preliminares, acompañado de su Equipo de Contratistas que hacían parte de esta dependencia, aprovechando al máximo las competencias profesionales de ellos y las capacidades legales y funcionales con las que contábamos.

A la par, fuimos atendiendo la mecánica procesal de la Acción Popular, que nos permitió una interacción más cercana con las Entidades involucradas en el Proceso Jurídico, lo que nos permitió encauzarlos un poco más. En este camino, también se sumó a nuestros esfuerzos el Equipo Técnico de CELSIA.

Por ello, el alcance de este contrato; por esto, no podría ser, lo que propone el Informe de Auditoría, porque necesitábamos otros esfuerzos, de todo tipo, y la vigencia fiscal, no nos daría el espacio suficiente para sacarlo adelante. Además, teníamos que tener la cautela y la prudencia, que la Sentencia de la Acción Popular podría significar desandar el camino, al no haber realizado una orden de su Fallo y el contrato quedaría obsoleto de facto e ipso facto.

Por todo lo anterior, en la etapa precontractual, la entidad analizó los procesos en la gestión documental, verificando los documentos soportes de cada una de las etapas del proceso de contratación, al realizar la revisión se observa que se encuentran los documentos necesarios para el soporte del proceso contractual, los cuales permitieron realizar la contratación dentro de los términos de la Ley, es necesario tener en cuenta que las anexos se encuentran en su totalidad, para lo cual y en aras de subsanar el error de manera involuntaria en archivo documental, se organizó la carpeta teniendo en cuenta las etapas de la contratación, de esta manera seguir una ruta y la trazabilidad del proceso contractual, el cual contiene todos los elementos exigidos dentro de la norma.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Dentro del contrato, se enuncia que el Supervisor del contrato será asignado por el Alcalde Municipal, quien teniendo en cuenta las funciones de la Secretaría de Planeación, y que el ajuste del estudio del EOT corresponde a esta dependencia, asigna por notificación a este despacho como Supervisor del contrato, es importante tener en cuenta que este documento no se encontraba dentro del archivo principal del contrato, si no a su vez en la correspondencia de la secretaría, generando un error involuntario dentro del proceso de archivo, el cual se anexa a las evidencias. Notificado el secretario de Planeación de su asignación como Supervisor, procede a suscribir el Acta de Inicio, como en efecto se hizo, prueba de ello es el Acta de Inicio, suscrita entre las partes el 01 de octubre del 2022, en la cual en sus apartes estipula que: (...) el señor ARTURO BETANCOURT HOYOS en calidad de SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL y SUPERVISOR del contrato objeto de la presente Acta de Inicio (...).

Con respecto a las fechas, el contrato se encuentra en la secuencia que establece la Ley, lo que no genera hechos cumplidos ni alteración en la ejecución del contrato, de igual manera se encuentra registrado en el SECOP I. La entidad ha implementado procesos para subsanar el registro de los contratos en la plataforma SECOP y evitar hacerlo en tiempos extemporáneos, aunque en algunas oportunidades hemos tenido fallas en el servicio de internet, a veces del día completo, que retrasa todo lo de plataformas y genera cuellos de botella, con procesos perentorios que se están adelantando, como las licitaciones y audiencias públicas. Algunas Entidades del Estado recibieron nuestra solicitud de excusa, por este tipo de problemas técnicos.

Los informes se entregaron en tiempo, y con la documentación necesaria enmarcado dentro los términos de la Ley de manera magnética, además se recibió en la Entidad el tomo de Participación Democrática, impulsada en gran parte por el Supervisor, como lo pueden confirmar cada uno de los participantes; esta Participación Democrática, hace parte del material teniendo en cuenta el proceso de la ejecución del contrato, entrega de informes, cuenta de cobro por factura digital, verificación por parte del supervisor del contrato y pago del producto entregado. El sólo hecho de que el Supervisor del contrato haya estado en todas las sesiones de Participación Democrática y en todas las Mesas de Trabajo con las Entidades mencionadas y el Equipo de Trabajo del Contratista, es una evidencia irrefutable, del seguimiento y acompañamiento del Supervisor en el desarrollo del Contrato. Lo anterior fue apalancado con conceptos, criterios, enfoques, perspectivas, visiones y experiencias en este territorio y en otros territorios, que permiten afirmar, sin lugar a equívoco, de la constante y permanente acción del Supervisor en la ejecución del Contrato.

Es importante tener en cuenta, que se cumplió con obligación del pago de seguridad social del contratista quien firmó el contrato, por el monto requerido dentro de los términos de la Ley, sin embargo, se anexan evidencias de vínculo laboral y el pago de la seguridad social de los profesionales contratados por el consultor para realizar sus aportes a la consultoría, pero se hace énfasis que el pago del contratista se hizo en los términos que la Ley lo requiere.

Es importante agregar que dentro de las primeras mesas técnicas realizadas entre el profesional consultor y la administración municipal, se propuso una ruta metodológica, además se realizó un análisis sobre el documento actual del EOT, el cual era necesario ajustar en los términos del decreto 1232 del 2020, donde el objeto contractual era ajustar los documentos que forman parte del proceso existente del esquema de ordenamiento

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

territorial, es importante tener en cuenta que la ejecución del contrato era ajustar y complementar unos documentos existentes, no realizar de nuevo un estudio técnico, donde el alcance del contrato es:

A. Proponer una ruta metodológica que permita aunar los criterios técnicos, financieros y jurídicos de tal forma que sea posible adoptar las recomendaciones necesarias para el proceso de ajuste del EOT.

B. Realizar los ajustes y/o modificaciones de los documentos con que dispone la Alcaldía en referencia al EOT, que tengan como propósito la concertación con CVC.

C. Complementar el EOT en sus aspectos normativos o de programación de actuaciones no consideradas en los documentos existentes y las cuales deberán incorporar lo establecido en el Decreto 1232 del 2020, así como lo que se desprendan de las recomendaciones de CVC.

D. Actualizar los documentos del EOT, a la luz de nuevas normas que hayan sido expedidas en el lapso del tiempo que ha estado en disponibilidad de la administración municipal.

De igual manera es importante exponer que dentro del contrato no se establecen los estudios de gestión del riesgo y amenazas, estudios que fueron gestionados con otra entidad que en su momento el resultado sería anexado al documento técnico al igual que una nueva cartografía diagnóstica.

En este orden de ideas, el contrato no era para realizar los estudios diagnósticos del EOT, si no a su vez para ajustar y complementar los estudios ya realizados por la administración municipal, por ello la similitud de los contenidos en los documentos, los cuales al verificar los productos fueron ajustados por los profesionales dentro del marco del Decreto 1232 del 2020 y las necesidades actuales para presentar a la CVC.

Al verificar los documentos se observa que, si se cumplió con el objeto contractual, además con las obligaciones estipuladas para el contratista, quien facilitó los entregables, en tiempo y condiciones, es importante resaltar que respecto a la cartografía base se encontraba en proceso de actualización por parte del gestor catastral y para efectos del contrato en mención el trabajo se realizó con la cartografía oficial de la administración municipal, teniendo en cuenta el estudio realizado en el año 2018 (que por error involuntario se digitó 2019) y el Acuerdo 050 y sus acuerdos modificatorios. De igual manera se contó con la información consignada con el geovisor de la CVC , cuya información es oficial.

En términos de la gestión del riesgo, se precisó con la norma a nivel nacional y departamental, hasta que la entidad encargada de dichos estudios entregará el producto, para ser anexado como un capítulo especial.

En conclusión, el contratista entregó el producto final en los términos establecidos dentro del proceso contractual, precisando en ajuste y complemento, por lo tanto no hay incoherencia en los datos recopilados, los cuales fueron verificados por la administración municipal, no se elude el hecho que se presentaron errores en la gestión documental, los cuales fueron errores involuntarios, sin la intencionalidad de generar problemas para la

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

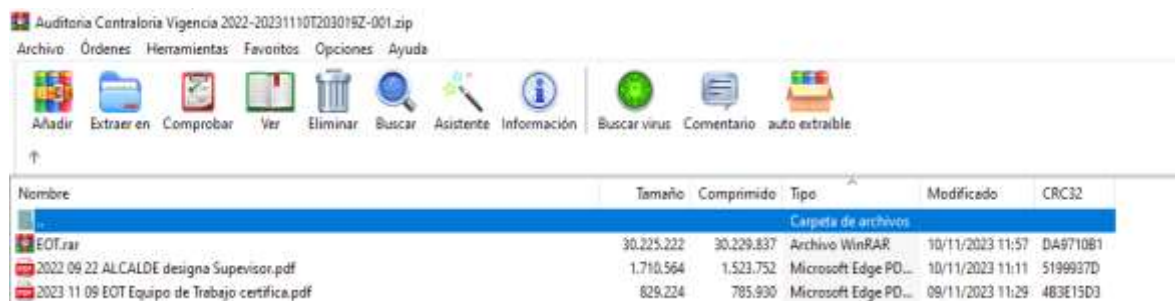
entidad, partiendo desde el principio de la buena fe de todos los funcionarios y atendiendo en todo momento la complejidad de la temática.

Por todo lo anterior, no se generó detrimento patrimonial, ya sé que se cumplió con el objeto contractual, se hizo entrega de los documentos útiles y de mucho alcance, en los términos requeridos, la administración municipal realizó el seguimiento al contrato en las sesiones de Participación Democrática (convocadas por los canales institucionales y algunas de ellas transmitidas en directo por Facebook live y por Calima TV) y en el momento de la entrega de informes, se anexaron las certificaciones y pago de seguridad social, además se verificaron todos los documentos en las diferentes carpetas de la secretaria lo que permitió mejorar los procesos de gestión documental.

Respetuosamente solicitamos su cuidadosa revisión, dado que las afirmaciones realizadas por el Equipo Auditor en este hallazgo, y verificada en el Comité de Calidad de la Contraloría Departamental, compromete los Principios y Lineamientos establecidos en la Guía de Auditoría Territorial 3.0 adoptada por la Resolución Reglamentaria 014 del 29 de diciembre del 2022 expedida por la Contraloría Departamental, así como también compromete lo establecido en el Código de Integridad y en el Código de Ética adoptados por la Entidad mencionada.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Antes de entrar a examinar los postulados de la defensa del municipio, se hará una revisión de los soportes traídos para su examen con la contradicción:



Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
Carpeta de archivos					
EOT.rar	30.225.222	30.229.837	Archivo WinRAR	10/11/2023 11:57	DA9710B1
2022 09 22 ALCALDE designa Supervisor.pdf	1.710.564	1.523.752	Microsoft Edge PO...	10/11/2023 11:11	5199937D
2023 11 09 EOT Equipo de Trabajo certifica.pdf	829.224	785.930	Microsoft Edge PO...	09/11/2023 11:29	4B3E15D3

En el archivo comprimido EOT se encuentran 2 archivos digitales más, uno de actas y otro de listados de asistencia, ambos archivos fueron debidamente revisados, y su contenido es similar a uno de los cuadernos sin foliación que hacía parte del expediente principal:

El Archivo de actas:

El Archivo de listados de asistencia:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Nombre	Salario	Compania	Tipo	Mediana	USD
1.000000	1.000000	Microsoft	Microsoft	1.000000	1.000000
2.000000	2.000000	Microsoft	Microsoft	2.000000	2.000000
3.000000	3.000000	Microsoft	Microsoft	3.000000	3.000000
4.000000	4.000000	Microsoft	Microsoft	4.000000	4.000000
5.000000	5.000000	Microsoft	Microsoft	5.000000	5.000000
6.000000	6.000000	Microsoft	Microsoft	6.000000	6.000000
7.000000	7.000000	Microsoft	Microsoft	7.000000	7.000000
8.000000	8.000000	Microsoft	Microsoft	8.000000	8.000000
9.000000	9.000000	Microsoft	Microsoft	9.000000	9.000000
10.000000	10.000000	Microsoft	Microsoft	10.000000	10.000000
11.000000	11.000000	Microsoft	Microsoft	11.000000	11.000000
12.000000	12.000000	Microsoft	Microsoft	12.000000	12.000000
13.000000	13.000000	Microsoft	Microsoft	13.000000	13.000000
14.000000	14.000000	Microsoft	Microsoft	14.000000	14.000000
15.000000	15.000000	Microsoft	Microsoft	15.000000	15.000000
16.000000	16.000000	Microsoft	Microsoft	16.000000	16.000000
17.000000	17.000000	Microsoft	Microsoft	17.000000	17.000000
18.000000	18.000000	Microsoft	Microsoft	18.000000	18.000000
19.000000	19.000000	Microsoft	Microsoft	19.000000	19.000000
20.000000	20.000000	Microsoft	Microsoft	20.000000	20.000000
21.000000	21.000000	Microsoft	Microsoft	21.000000	21.000000
22.000000	22.000000	Microsoft	Microsoft	22.000000	22.000000
23.000000	23.000000	Microsoft	Microsoft	23.000000	23.000000
24.000000	24.000000	Microsoft	Microsoft	24.000000	24.000000
25.000000	25.000000	Microsoft	Microsoft	25.000000	25.000000
26.000000	26.000000	Microsoft	Microsoft	26.000000	26.000000
27.000000	27.000000	Microsoft	Microsoft	27.000000	27.000000
28.000000	28.000000	Microsoft	Microsoft	28.000000	28.000000
29.000000	29.000000	Microsoft	Microsoft	29.000000	29.000000
30.000000	30.000000	Microsoft	Microsoft	30.000000	30.000000
31.000000	31.000000	Microsoft	Microsoft	31.000000	31.000000
32.000000	32.000000	Microsoft	Microsoft	32.000000	32.000000
33.000000	33.000000	Microsoft	Microsoft	33.000000	33.000000
34.000000	34.000000	Microsoft	Microsoft	34.000000	34.000000
35.000000	35.000000	Microsoft	Microsoft	35.000000	35.000000
36.000000	36.000000	Microsoft	Microsoft	36.000000	36.000000
37.000000	37.000000	Microsoft	Microsoft	37.000000	37.000000
38.000000	38.000000	Microsoft	Microsoft	38.000000	38.000000
39.000000	39.000000	Microsoft	Microsoft	39.000000	39.000000
40.000000	40.000000	Microsoft	Microsoft	40.000000	40.000000
41.000000	41.000000	Microsoft	Microsoft	41.000000	41.000000
42.000000	42.000000	Microsoft	Microsoft	42.000000	42.000000
43.000000	43.000000	Microsoft	Microsoft	43.000000	43.000000
44.000000	44.000000	Microsoft	Microsoft	44.000000	44.000000
45.000000	45.000000	Microsoft	Microsoft	45.000000	45.000000
46.000000	46.000000	Microsoft	Microsoft	46.000000	46.000000
47.000000	47.000000	Microsoft	Microsoft	47.000000	47.000000
48.000000	48.000000	Microsoft	Microsoft	48.000000	48.000000
49.000000	49.000000	Microsoft	Microsoft	49.000000	49.000000
50.000000	50.000000	Microsoft	Microsoft	50.000000	50.000000

Copia del nombramiento del Supervisor que se realizó en septiembre de 2022.



Archivo de 6 folios con 3 Certificaciones de los profesionales Luis Albeiro Gutiérrez Ayala (Abogado), Diego Mauricio Vanegas Moreno (Administrador), Fabio Augusto Salazar Rivera (Arquitecto), quienes manifestaron que desde octubre a diciembre desempeñaron labores en el marco de este contrato, como se ejemplifica a continuación:

Medellín, Valle, noviembre 9 de 2022.

LUIS ALBEIRO GUTIÉRREZ AYALA, identificado con C.C. No. 10443673, del municipio de San Juan de los Rios.

CERTIFICO QUE:

- El Profesional Luis Albeiro Gutiérrez Ayala, identificado con C.C. No. 10443673, me certifica y me garantiza que ha sido parte de un equipo de trabajo para la ejecución de los trabajos de construcción de la red de agua potable en el municipio de Calles y el Distrito de San Juan de los Rios, lo cual se ha verificado en el momento de la documentación requerida por el municipio de Calles y el Distrito de San Juan de los Rios.
- El Profesional Luis Albeiro Gutiérrez Ayala, identificado con C.C. No. 10443673, me certifica y me garantiza que ha sido parte de un equipo de trabajo para la ejecución de los trabajos de construcción de la red de agua potable en el municipio de Calles y el Distrito de San Juan de los Rios, lo cual se ha verificado en el momento de la documentación requerida por el municipio de Calles y el Distrito de San Juan de los Rios.
- Desde los meses de octubre a diciembre de 2022, en el marco del contrato No. 10443673, he sido parte de un equipo de trabajo para la ejecución de los trabajos de construcción de la red de agua potable en el municipio de Calles y el Distrito de San Juan de los Rios, lo cual se ha verificado en el momento de la documentación requerida por el municipio de Calles y el Distrito de San Juan de los Rios.

Atestado:


LUIS ALBEIRO GUTIÉRREZ AYALA
C.C. No. 10443673 del municipio de San Juan de los Rios
T.P. No. 10443673 del municipio de San Juan de los Rios

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Hasta aquí las pruebas electrónicas allegadas, procedemos a la revisión de los postulados de la defensa del municipio:

Señala el municipio que: *“El Equipo Auditor inicia sus afirmaciones con una hipótesis absolutamente lejana de lo que describimos en los Estudios Previos y desconociendo el contexto que nos generó la Acción Popular instaurada por la Procuraduría 21 Judicial II Ambiental y Agraria del Valle del Cauca y que por reparto le correspondió al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Guadalajara de Buga, bajo el radicado 76-11-33-33-002-2022-00022-00”*, cuando se limitó la observación a hacer un resumen del contenido literal de los estudios previos, en los cuales por cierto no se encuentra mencionada la acción popular, mal entonces, podría la Contraloría que entre las varias demandas en contra del municipio estuviera la que aquí se indica.

En ese orden de ideas, mal se puede pretender que el ente de control entienda y analice las intenciones de la administración municipal, ello es imposible, como quiera que tenemos que ceñirnos al contrato como se desarrolló en sus distintas etapas, así como a los documentos que se anexaron como entregable y a los que se adjuntaron frente a los requerimientos realizados. No podemos fundar una observación en cuestiones que no quedaron evidenciadas en pruebas que se hayan puesto a la vista del equipo auditor.

Cuando se manifiesta que se estaba recibiendo orientación de distintos estamentos en procura del ajuste al EOT, y que tal circunstancia es verificable con dichas entidades, pero nada se aporta para su revisión y validación. Frente a lo manifestado en la Etapa precontractual, no se traen hechos que revisar, solo planteamientos que no tienen soporte probatorio, intentar desmentir la realidad de los documentos en revisión es desconocer la contratación que se hizo, y que por tanto esta probada físicamente.

Ahora bien, frente al tema de la etapa contractual; se manifiesta que el supervisor fue debidamente nombrado pero que por error de archivo no se encontraba en la trazabilidad, frente a esto no tenemos reparo, pues los errores en la trazabilidad del contrato son ostensibles.

Los errores de la publicación en el Secop I fueron generales, así que el incumplimiento del término no está en discusión por ello, se refleja en el documento.

Si los informes se entregaron a tiempo o no, no hay forma de saberlo porque no aparece la fecha de recibido en los documentos y los errores de archivo documental no permiten inferirlo. También cabe manifestar que los soportes de certificación de los trabajos realizados por 3 de los profesionales, no tienen un soporte dentro del expediente, y de la documentación de los profesionales, solo 1 presentó pago de la Seguridad Social Integral, que corresponden a Octubre (pagado noviembre), noviembre que se pagó en enero de 2023 y diciembre que se pagó en febrero de este año. No hay otros pagos con los que se certifique la gestión de los profesionales.

En cuanto a que *“De igual manera es importante exponer que dentro del contrato no se establecen los estudios de gestión del riesgo y amenazas, estudios que fueron gestionados con otra entidad que en su momento el resultado sería anexado al documento técnico al igual que una nueva cartografía diagnóstica.”*, se reitera, en la parte precontractual y contractual se trajeron específicamente las obligaciones que se parametrizaron, es decir

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

nos limitamos al examen de lo suscrito. Pudo haberse traído el soporte de esta otra gestión, pero no se aportó y no hay prueba de ello en la trazabilidad.

Hasta aquí lo pertinente al análisis jurídico, desde la perspectiva de lo cual no se probó nada distinto de lo señalado, pues las alusiones y premisas de defensa no están aparejadas con el resultado indicado, y las intenciones de la administración municipal no tienen eco probatorio, para deducir asunto diferente a las incidencias señaladas, por tanto, se sostendrá la observación pasando a ser un hallazgo con idéntico tenor literal.

Con respecto a las afirmaciones dadas por la entidad en el componente ambiental, es importante precisar:

La administración Municipal en el proceso de planeación del contrato, no tuvo en cuenta el trabajo que el contratista realizó en la vigencia 2019, partió desde cero, sin tener en cuenta la inversión y el estudio que ya se había realizado el mismo contratista, el cual se refleja en el resultado del estudio, donde el contratista entrega la misma información, (se evidenció la fiel copia)

Si se hubiera partido del avance que ya se tenía, a la fecha la administración municipal hubiera realizado la Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial existente y les hubiera permitido cumplir lo que plantea sobre este aspecto la acción popular.

En los documentos entregados no se evidencia las competencias profesionales que hicieron parte del trabajo, ya que ninguno de los documentos es firmado por el profesional que desarrollo o dio el concepto sobre cada uno de los temas

La Contraloría no discute que no se encuentran los documentos necesarios para el soporte del proceso contractual, el problema es que la administración ya había realizado un contrato donde el resultado son los mismos entregables y se debió a tener en cuenta los avances que ya se habían hecho no partir desde cero.

Aunque en la Participación Democrática, se observa las firmas y registro fotográfico, no se evidencia los aportes que realiza la comunidad.

Al contrario de lo que expone la entidad, la observación cumple con los Principios y Lineamientos establecidos en la Guía de Auditoría Territorial 3.0 adoptada por la Resolución Reglamentaria 014 del 29 de diciembre del 2022 expedida por la Contraloría Departamental

La entidad no se pronunció con respecto a la copia del informe 2019, con el informe del 2022.

En conclusión, lo argumentado por la entidad no desvirtúa la observación y se confirma el hallazgo administrativo con la incidencia disciplinaria y fiscal.

19. Observación administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y fiscal-Planeación y seguimiento

Convenio de Asociación No. 310-13- 08- 006- 2022

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para llevar a cabo las jornadas de educación ambiental y la feria ambiental en el Municipio de Calima El Darién

Valor: \$10.000.000

Plazo: Hasta 07 de noviembre de 2022

Etapas Precontractual: En los estudios previos se hacen especificaciones del objeto en cuanto a que se requiere una persona natural o jurídica que apoye la logística para la realización de la Feria Ambiental, con programación para 3 días del 03 al 05 de noviembre de 2022, la programación incluye premiación con balones de futbol y baloncesto que participaran en la Gincana. Videoclips con temas ambientales por parte de los alumnos de las I.E. y serían premiados, también se determina que se entregarán refrigerios el día viernes 4. El sábado de 9 am – 3 pm, se daría almuerzo a las personas que participaran con sus exposiciones en su stand en la tarde, y se manifiesta que en el cierre habría entrega de recordatorios. Se requirieron 10 ítems entre los que se encuentran: 2 Servicios de transporte de estudiantes de veredas ITAF y Pablo Sexto por dos días ida y vuelta- 20 estudiantes por día; 60 almuerzos ejecutivos con su respectivo empaque; 20 camibuzos estampados CIDEA; 22 balones de basketball clásico No. 3 y otros 22 Zoom de futbol No. 5, cosido a máquina PVC y 15 balones de Voleyball en goma tipo costura vulcanizado; 2 Tablet 8.7 pulgadas, de 32 GB de almacenamiento. 3GB de RAM pantalla con calidad Full HD, Resolución 1340PX x 800 PX. Papelería y materiales para Gincana. En ningún aparte de los estudios previos se hacen requerimientos mínimos en relación con las Buenas Prácticas de Manufacturas, tampoco se establece el mecanismo de control para establecer qué tipo de proteína tendrían los almuerzos en procura de estandarizar el valor de los mismos; No se determina el objeto de la Tablet si iban a ser rifadas entre los asistentes, o cual sería su destinación, no se estableció la razón de la cantidad de balones requeridos (folios 4 - 27).

No se observa invitación; a folios 28 – 62, se encuentran la propuesta en donde *no* se indica, en qué ítems se encuentra representado el aporte de la Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL), no hay reporte de la idoneidad de la misma, o registro de la inscripción que determina la ley en tal caso, así como tampoco se establecieron los mecanismos para comprobar el aporte mismo, razón sobre la cual se fundamenta la modalidad de la contratación realizada.

Etapas Contractual: Se observa el contrato suscrito a folios 66 - 73 del 27-10-2022. Se designa supervisor, acta de inicio del 27 – 10- 2022. La publicación en el Secop I, se realiza extemporánea el 01 -11- 2022 (folios 78 - 79).

A partir del folio 83 al 130, se encuentra la solicitud de pago, informes del contratista con fotografías, no se observan listados de la entrega de los balones.

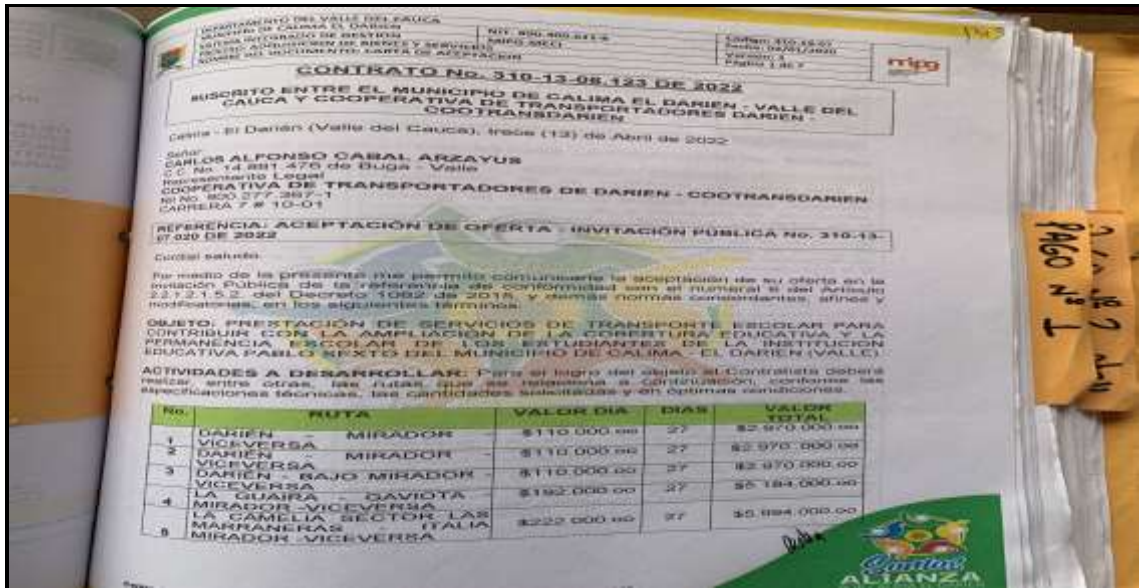
Apoyo Técnico Medioambiente

- ✓ No se evidenció soportes del aporte de la fundación.
- ✓ No se evidenció soporte del servicio de transporte de estudiantes de veredas ITAF y Pablo Sexto al evento. Adicionalmente, el valor que se pagó por recorrido, es mayor al

19. Observación administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y fiscal-Planeación y seguimiento

valor que el municipio paga por el mismo servicio, como se evidencia en el contrato 310-13-06. 123 de 2022, donde el valor pagado por ida y regreso es de \$220.000, para un total de total \$880.000 y en este evento se pagó \$3.000.000 por este servicio.

Imagen No. 42



- ✓ No se evidenciaron soportes de la entrega de los balones. El soporte que mostraron para la entrega de los balones, es el listado de los niños que participaron en la Yincana (18 participantes), teniendo en cuenta que en el registro fotográfico se observan algunos balones se dividirá el soporte, es decir se tendrá en cuenta el registro fotográfico y el listado entregado, por lo tanto, se tomará como soporte 6 balones de basketball, 6 de futbol y 6 de voleibol,, quedando pendiente por justificar 16 balones de basketball, 16 balones de futbol y 9 valones de voleyboll

Imagen No. 43



19. Observación administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y fiscal-Planeación y seguimiento

- ✓ Según las facturas presentadas por la fundación COMP 2991 y COMP 2992, el valor de cada table es \$450.000, por lo tanto, el valor total sería \$900.000 y se pagaron a \$700.000 para un valor total de \$1.400.000

En el siguiente cuadro se ilustra el consolidado:

Cuadro No. 56

Actividad	Unidad	Cant	Valor Unitario	Valor Total	Observación	Valor sin soporte
Soporte logístico planta eléctrica UPS, extensiones de largo alcance encauchetadas y RAC de conexiones para el sonido y amplificación	Und	1	1.800.000	1.800.000		
Servicio de transporte de estudiantes de veredas ITAF y Pablo Sexto por dos días ida y vuelta 20 estudiantes por día	Und	2	1.500.000	3.000.000	No se evidencia soporte del transporte. El municipio realizó el contrato 310-13-06. 123 de 2022, donde establece los precios que paga el municipio para el transporte de los alumnos al colegio y el mayor valor de recorrido es de 220.000, por lo tanto el valor a pagar sería 440.000 diarios, para un total \$880.000	2.120.000
Almuerzo ejecutivo con su respectivo empaque	Und	60	24.700	1.482.000		
Camibuzos estampados CIDEA	Und	20	65.000	1.300.000		
Balón basketball clásico N°3 cubierta en caucho tamaño N° 3 rebota aproximadamente de 120 a 140 cm	Und	22	52.000	1.144.000	No se evidenciaron soportes de la entrega de los balones. El soporte que entregaron como la entrega de los balones son los niños que participaron en la Gincana (18 participantes), teniendo en cuenta que en el registro fotográfico se observan algunos balones se dividirá el soporte, es decir se tendrá como soporte 6 balones de basketball, 6 de fútbol y 6 de voleibol para completar el soporte entregado	832.000
Balón Zoom de fútbol #5, 32 panes cosido a máquina PVC 1.6 MM peso oficial 240-260 gramos	Und	22	52.000	1.144.000		832.000
Balón de voleibol material de la pelota goma tipo costura vulcanizado	Und	15	52.000	780.000		468.000
Table 8.7(pulgadas) 32 GB de almacenamiento. 3 GB de RAM, pantalla con calidad full HD, resolución 1340 px x 800 px lector de micro SD, Android 11, cámara trasera 8px. Delantera 2PX // 8"(PULGADAS) 32 GB de almacenamiento, 2 GB de RAM, pantalla con calidad FULL HD, resolución 1280 px x 800px lector micro-SD, Android 10, cámara trasera 8px - delantera 2px	Und	2	700.000	1.400.000	Según las facturas presentadas por la fundación COMP 2991 y COMP 2992, el valor de cada tablea es \$450.000, por lo tanto el valor total sería \$900.000	500.000
Pendón 2 metros x 5 de largo y de ancho 1metro	Und	1	600.000	600.000		
Papelaria y materiales para la gincana	Und	1	350.000	350.000		
Total				13.000.000		4.752.000

Fuente: Municipio de Calima El Darién

Elaboro: Equipo auditor

Criterio y fuente de criterio.

Ley 594 de 2000, artículos 1 a 4, 11 a 17; Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 13, 23 y 24, Ley 1474 de 2011, artículos 82 a 84 y 91; Constitución Nacional, artículo 209; Contrato en sus componentes pre y contractual (estudios previos, propuesta y minuta); manual de contratación de la entidad; Decreto 092 de 2017, artículos 1 -3, 7, 8 y 9.

Causa

Planeación antieconómica y sin un análisis de costos acertado, falencias de control y seguimiento de las actividades por parte de la supervisión.

Efecto

Menoscabo al patrimonio público, representado en el mayor valor pagado por el servicio de transporte y por los desembolsos realizados sin el respectivo soporte. Daño que se cuantifica en la suma de \$4.752.000

19.Observación administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y fiscal– Planeación y seguimiento

Los hechos descritos constituyen una observación administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal, por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39; Ley 610 de 2000, artículos 5 y 6.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

OBSERVACIÓN 19: Observación administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y fiscal– Planeación y seguimiento.

Indica el Informe Preliminar de Auditoría, que en los Estudios Previos no se hicieron requerimientos mínimos en relación con las Buenas Prácticas de Manufactura, porque se consideran implícitas e inherentes en un empresario formal, que cuenta con trayectoria y reconocimiento en el mercado. Igual sucede con los mecanismos de control, los cuales están subyacentes en el ordenamiento legal, el cual incluye el Estatuto del Consumidor, y lo propio de las actividades del Supervisor.

En cuanto al destino de las Tablet y el número de balones requeridos, así como el detalle de todo lo requerido, fue determinado por una Comisión conformada por integrantes del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental -CIDEA-, cuya autonomía e independencia, ha respetado el Municipio, al ser un integrante más y no el que determina todos los aspectos y elementos que deberían de estar presente en la Feria Ambiental, cuya estructuración, recogió las experiencias de Ferias anteriores y consideraron que algunos aspectos deberíamos de dar continuidad, para cumplir con los Fines del CIDEA.

Este Comité identificó posibles Aliados Empresariales con los cuales, por su trayectoria, inspiraban la confianza para adelantar la Feria Ambiental del 2022. Fueron convocados y se les explicó, cuál era la aspiración del CIDEA, y en qué necesitaban su apoyo. Todos mostraron interés, y esta reunión, se tomó como la convocatoria, para que se presentaran al proceso contractual que manejaría el Municipio, tal como está estipulado en el Acuerdo Municipal, y por ser el receptor de los recursos financieros, que, con destinación específica para la Educación Ambiental, se gestionan en el Municipio a través de las formas institucionales y legales.

En cuanto a la experiencia del proponente, y que finalmente fue el Contratista, es plenamente observable en la propuesta, que incluso, participó como ejecutor en dos (02) Ferias Ambientales, en la Administración pasada, la que obró en el período constitucional 2016- 2019. Este mismo proponente ha ejecutado la misma actividad en otros municipios, cuyos contratos son verificables en el SECOP. Con estos elementos y otros que ponderó el Equipo Auditor queda plenamente demostrada la idoneidad del Contratista.

En cuanto a la verificación del aporte de la Fundación Contratista, está en la misma realización del evento, la cual se desarrolló en sitios a campo abierto, como el vivero de la CVC y el Parque Central, cuya infraestructura existente debía ser complementada, y es por ello, que se solicitó esos elementos en la reunión que se sostuvo con el CIDEA. Si este aporte no se hubiere realizado, no se habría podido realizar los eventos, y en este sentido no existe queja alguna, constituyéndose en un Hecho Notorio la Feria Ambiental en las fechas establecidas.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Conforme al artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 del 2015, los Estudios Previos son el soporte del proyecto de pliego, del pliego de condiciones y del contrato. Conforme a concepto de la Función Pública (<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gerentes/Modulo4/tema-2/2- estudios-previos.html>) y al de Colombia Compra Eficiente (<https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/preguntas-recuentes/planeacion>), nuestro

Estudio Previo, reúne el mínimo deseado y necesario. Las evidencias que se anexan soportan lo aquí expuesto.

En cuanto a la entrega de balones, se anexan fotos que permiten visualizar plenamente los balones dispuestos para ser entregados, incluso con planilla debidamente firmada. Se deduce perfectamente, que en este tipo de eventos, con jóvenes estudiantes que se están tratando de concientizar un poco más de lo que hace la Institución Educativa, en estos temas ambientales, de su importancia e impacto, lo exhibido, se entrega, porque es un incentivo, y porque está de por medio la reputación de Entidades muy significativas para nuestro medio, que no sólo obran como partícipes y que contribuyeron especialmente como se observa en las cartas y fotos adjuntas, sino que obran como inspectores o supervisores o auditores para sus respectivas Entidades que representan, y no se permitirían, que una situación de estas, como hipotéticamente se ha planteado, que se exhiban balones y no se entreguen o como lo afirma el Equipo Auditor, que se compraron más y que se entregaron menos. Esto es impensable, por la fuerza de los hechos, y por la estructura del CIDEA, cuyos integrantes, por su prestancia y trayectoria, no se prestarían para este tipo de situaciones atentatorias de su ética, de su moral, de sus Principios y Valores, personales y de la Entidad que representan. Se descarta de plano, cualquier conjetura al respecto.

Sucede exactamente con la afirmación que hace el Equipo Auditor, de que no hay soporte del servicio de transporte, y nos obliga a hacernos varias preguntas, entre otras, ¿si las Instituciones Educativas hacen parte del CIDEA, ¿cómo se va a contar con sus estudiantes, sin el consentimiento de la Institución Educativa?, por otra parte, ¿Cómo llegaron los estudiantes a los eventos programados contando con el acompañamiento de sus profesores, si no cuentan con transporte? Forzosamente se deduce que si hubo transporte y si hubo estudiantes, como se observa en las fotos y en el Informe del Contratista y en la evaluación realizada por el CIDEA en la sesión siguiente a la culminación de la Feria Ambiental. Respetuosamente solicitamos levantar estas observaciones, porque no caben en el ejercicio de Auditoría.

En cuanto a los valores del transporte, se hace necesario precisar varios aspectos:

1. El servicio de transporte para este evento no tiene como referente o como base el transporte escolar, porque no lo está contratando el Municipio, y por otra parte, la tarifa pactada por el Municipio, corresponde a cuarenta (40) semanas de transporte escolar, que dista demasiado de pactar un traslado puntual y específico.
2. Nosotros como Municipio, debemos respetar la autonomía e independencia jurídica y administrativa del Contratista, y por ningún motivo podemos incidir en sus negociaciones o pactos. Para el Municipio es suficiente, que el Contratista estudié el Pliego de Condiciones, se presente a la convocatoria y suscriba el respectivo Convenio. Sería una indebida

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

injerencia, para la ejecución del Convenio, que nosotros como Municipio estuviéramos direccionando e interviniendo en cada cotización, compra o acuerdo.

Respetuosamente también solicitamos levantar este hallazgo, con base en el respeto institucional que nos debe guiar al suscribir un Convenio con un Contratista idóneo.

Se aporta registro fotográfico, que tal vez no fue tenido en cuenta, y que indica los tres momentos diferentes en los que se utilizaron los balones como premio conforme a lo que determinó el jurado o como incentivo por participar en este tipo de eventos. Recordemos que, en la programación de estos eventos, se estima un número de participantes que puede diferir de los que realmente participaron. No hay exactitud y se trata de motivar hacia un propósito superior como son los temas ambientales, de linaje constitucional. Aquí también, respetuosamente solicitamos levantar esta observación.

En el ámbito empresarial es usual, que el costo de sus elementos para atender un contrato, no se trasladen exactamente al mismo valor, porque su ejercicio empresarial le implica costos y gastos y porque la ejecución contractual tiene costos y gastos muy específicos, como pólizas, estampillas y otros descuentos tributarios, además de incurrir en otros gastos generales (traslados y daños) e imprevistos, con ocasión del desarrollo o de la ejecución del contrato. Por lo tanto, no consideramos viable jurídicamente y técnicamente, solicitarle a un contratista que nos presente sus facturas de compra y exigirle que ese valor es el que nos debe cobrar, porque podríamos estar incurriendo en una conducta antijurídica que colocaría en riesgo al Municipio o daría lugar a una contingencia, como podría ser la invocación del equilibrio contractual. Por lo aquí enunciado, respetuosamente solicitamos levantar la observación sobre el costo de las Tablet, porque no podría proceder de modo alguno.

Además, en ninguna parte de los documentos precontractuales o contractuales, se pactó una contratación por precios unitarios, por lo tanto, no hubo menoscabo al patrimonio público. Por todo lo expuesto, se concluye, que no hubo omisión alguna, ni conducta dolosa en ningún momento, ni irregularidad alguna que implique o induzca resarcimiento alguno.

Respetuosamente solicitamos reconsiderar la observación, toda vez que se ha dado el cumplimiento a los Principios y Lineamientos establecidos en la Guía de Auditoría Territorial 3.0 adoptada por la Resolución Reglamentaria 014 del 29 de diciembre del 2022 expedida por la Contraloría Departamental, así como también compromete lo establecido en el Código de Integridad y en el Código de Ética adoptados por la Entidad mencionada, por lo que el Municipio de Calima El Darién (V), no acepta el hallazgo con incidencia disciplinaria y fiscal, por cuanto no existe ilicitud sustancial y la inexistencia del daño fiscal, de acuerdo a los deberes funcionales que rigen la función pública, se dieron los resultados buscados para el cumplimiento de los fines del Estado. Por lo que el ente de control, deberá replantear la razón que se tiene frente a lo manifestado como incumplimiento para que sea valorado como contrario a derecho o al orden jurídico, pues lo que se reprocha no es en sí el quebrantamiento de la norma sino el resultado de su actuar, y como puede observar el equipo auditor el resultado de la gestión que se cuestiona fue positivo tanto para el Municipio, como para la comunidad, el deber funcional no fue un obstáculo para que el Estado alcance a través de la función pública los fines que la Constitución Política ha previsto para Colombia al definirla como un Estado Social de Derecho.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Previamente a determinar si se sostiene o no la observación se hará revisión de los elementos traídos a la contradicción para su estudio:

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
Carpeta de archivos					
2022 11 04 Foto 2.jpg	40.791	40.801	Archivo JPG	08/11/2023 12:06	B7FA64AA
2022 11 04 Foto 3.jpg	40.370	40.380	Archivo JPG	08/11/2023 12:06	F408564C
2022 11 04 Foto 4.jpg	135.415	135.440	Archivo JPG	08/11/2023 12:13	D0079E32
2022 11 04 Foto 5.jpg	120.539	120.579	Archivo JPG	08/11/2023 12:13	3C447EA3
2022 11 04 Foto 6.jpg	135.146	135.171	Archivo JPG	08/11/2023 12:13	3AABE7DE
2022 11 04 Foto 7.jpg	107.089	107.089	Archivo JPG	08/11/2023 12:13	D4261156
2022 11 04 Foto 8.jpg	250.843	250.883	Archivo JPG	08/11/2023 12:13	62996872
2022 11 04 Foto 9.jpg	95.138	95.153	Archivo JPG	08/11/2023 12:13	F43AA372
2022 11 04 Foto 10.jpg	87.639	87.654	Archivo JPG	08/11/2023 12:13	B29C3345
2022 11 04 Foto 11.jpg	142.983	142.990	Archivo JPG	08/11/2023 12:13	DF3F37CA
2022 11 04 Foto 12.jpg	180.628	180.658	Archivo JPG	08/11/2023 12:13	BFD64030
2022 11 04 Foto 13.jpg	157.529	157.554	Archivo JPG	08/11/2023 12:14	A9793FE8
2022 11 04 Foto 14.jpg	126.608	126.628	Archivo JPG	08/11/2023 12:14	14C8F187
1. CERTIFICADO APORTES FERIA AMBIENTAL.pdf	5,042.782	4,424.268	Microsoft Edge #D...	11/10/2023 14:52	E269D136
2. EVIDENCIA ENTREGA DE BALONES.pdf	495.451	495.305	Microsoft Edge #D...	11/10/2023 14:53	05C73728
3. BALONES Y EVIDENCIAS.pdf	2,284.488	2,275.580	Microsoft Edge #D...	12/10/2023 13:00	30CA8568

Entre los que se encuentran 13 fotografías sin fecha ni hora de la realización de las actividades, y 9 balones dispuestos en una mesa (5 de Volleyball, 4 de Basketball), en otra fotografía se evidencian 8 balones de basketball, sin que pueda tenerse certeza sobre la cantidad de los mismos.

Se constata por el documento Certificación de aportes Feria Ambiental, que las empresas privadas aportaron alimentos a los eventos (Smurfit, Interaseo y Dar Pacífico), luego, no se identifica el motivo por el cual dentro del proceso contractual se pagaron más alimentos:

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 310
MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	NIT: 890.309.611-8	Fecha: 01/03/2020
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	MIPG	Versión: 1
PROCESO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL		Página: 1
NOMBRE DEL DOCUMENTO: OFICIO - CERTIFICADO		

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN, VALLE DEL CAUCA

CERTIFICA:

Que los aportes realizados en el marco de la feria ambiental No XII realizada los días 3, 4 y 5 de noviembre del 2022 bajo el convenio de asociación No 310-13-8-006 de 2022 fueron los siguientes:

- Centro vacacional comfandi Lago Calima: tableros y sillas para el desarrollo de la feria
- Smurfit Kappa: Refrigerios para las actividades desarrolladas dentro de la feria
- INTERASEO: entrega de crispelas y bebidas
- EMCALIMA: Tablet Samsung premiación concurso fotografía
- CELSIA: entrega de suvenires a integrantes del CIDEA y Tablet Samsung
- DAR PACIFICO ESTE: refrigerios para desarrollo de la Yincana

Se anexan evidencias fotográficas de las actividades realizadas con dichos aportes, las solicitudes y los agradecimientos
Dado en el Municipio de calima el Darién, Valle del Cauca a los once (11) días del mes de octubre de 2023

Los listados que se trajeron son de asistencia a la actividad de la Yincana, al menos así quedó identificado el documento, tampoco hay otros soportes que avalen la entrega referida, soportes que ya habían sido revisados en el municipio:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

No hay soportes del Rut de los subcontratistas que permita verificar la idoneidad de la provisión de los elementos o Matrículas mercantiles para soportar las transacciones.

Ya finiquitada la revisión de las facturas procede el apoyo jurídico a evaluar las premisas de la defensa en relación con lo enrostrado desde lo precontractual a lo contractual:

Como quiera que se han evidenciado la vulneración al principio de Planeación en general, llama la atención que se haga referencia a las Buenas Prácticas de Manufactura, cuando ni siquiera de manera tangencial se hizo la exigencia al contratista, y por supuesto que las normas en la materia son transversales, ello no implica, que pudieran hacerse especificaciones mínimas al menos en lo relativo al contenido del menú y a los cuidados a tener en la elaboración de los alimentos, en atención a una eventual contaminación cruzada, que generara perjuicio a la población estudiantil. El argumento en tales condiciones no sustenta la falencia del documento estudio previo.

El detalle de todo lo requerido, Pudo ser determinado en el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental -CIDEA-, pero, por independiente que sea, tales consideraciones debieron incorporarse aun tangencialmente a los estudios previos, para conocer las motivaciones que llevaron a la administración municipal a concluir que era esa y no otra la inversión a realizarse, ello por respeto a los principios de Transparencia y economía, en consonancia con el principio de Planeación, que debe ser respetado por todos los entes públicos.

Llama la atención que sea el municipio el que señale que el contratista es competente, pues ello no debe ser un señalamiento de la parte, debe quedar probado dentro de cada expediente contractual, así se contrate mil veces, es decir, deben registrarse los soportes de la actividad del oferente, bien en el RUP, bien en certificaciones debidamente acreditadas, no para buscar la idoneidad del mismo en el Secop, ya que ello riñe con el principio de Selección Objetiva determinado en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, cuando señala: ***“ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios:***

1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6o de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación... En este orden de ideas, no queda probado por búsqueda en las distintas contrataciones del Secop, la idoneidad de un oferente, sino porque ella se demuestra en la etapa precontractual para fines de transparencia en cada expediente.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Es una afirmación sin sustento la de que la Fundación aportó la realización del evento, pues -aunque se haya hecho-, no se cuantifica ni discriminó en ningún documento con los soportes del caso, lo que crea dudas en relación con la modalidad de contratación realizada, pues ni siquiera trató de valorarse o hacerse seguimiento al aporte de la ESAL que motivó la figura de convenio.

Si bien es cierto que en el decreto 1082 de 2015, se establece como deben ser los estudios previos, ellos son un mínimo que no se cumple por la mera repetición de títulos pues lo que se busca es dar mayor transparencia a los procesos contractuales, que en casos como el actual, resultan ambiguos, ya que ni siquiera trata de identificarse cuales son los almuerzos aceptables por el precio ofertado, ni como el trabajo desarrollado por el CIDEA, establece un lineamiento para la satisfacción de la necesidad, que solo se conoce en la contradicción pues no hay soporte de ello en la parte precontractual del expediente.

Es necesario precisar que en cuanto a las buenas prácticas hay normas específicas que atender, la norma especial en la materia es la Ley 9 de 1979, y fue el Ministerio de Salud y Protección Social, el encargado de regular los aspectos correspondientes a los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales o jurídicas que ejercen actividades de procesamiento, preparación o distribución de alimentos, entre otros, señala la Resolución 2674 de 2013, Título II Capítulo I, lo siguiente:

“CONDICIONES BÁSICAS DE HIGIENE EN LA FABRICACIÓN DE ALIMENTOS

Artículo 5. Buenas Prácticas de Manufactura. Las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos, se ceñirán a los principios de las Buenas Prácticas de Manufactura contempladas en la presente resolución. “

Más adelante, acota en cuanto al personal y su capacitación:

“CAPÍTULO III

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

Artículo 11. Estado de salud. El personal manipulador de alimentos debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Contar con una certificación médica en el cual conste la aptitud o no para la manipulación de alimentos. La empresa debe tomar las medidas correspondientes para que al personal manipulador de alimentos se le practique **un reconocimiento médico, por lo menos una vez al año.**

2. Debe efectuarse un reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo motivada por una infección que pudiera dejar secuelas capaces de provocar contaminación de los alimentos que se manipulen. Dependiendo de la valoración efectuada por el médico, se deben realizar las pruebas de laboratorio clínico u otras que resulten necesarias, registrando las medidas correctivas y preventivas tomadas con el fin de mitigar la posible

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

contaminación del alimento que pueda generarse por el estado de salud del personal manipulador.

3. En todos los casos, como resultado de la valoración médica se debe expedir un certificado en el cual conste la aptitud o no para la manipulación de alimentos.

4. La empresa debe garantizar el cumplimiento y seguimiento a los tratamientos ordenados por el médico. Una vez finalizado el tratamiento, el médico debe expedir un certificado en el cual conste la aptitud o no para la manipulación de alimentos.

5. La empresa es responsable de tomar las medidas necesarias para que no se permita contaminar los alimentos directa o indirectamente por una persona que se sepa o sospeche que padezca de una enfermedad susceptible de transmitirse por los alimentos, o que sea portadora de una enfermedad semejante, o que presente heridas infectadas, irritaciones cutáneas infectadas o diarrea. Todo manipulador de alimentos que represente un riesgo de este tipo debe comunicarlo a la empresa.

Artículo 12. Educación y capacitación. Todas las personas que realizan actividades de manipulación de alimentos deben tener formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos. Igualmente, deben estar capacitados para llevar a cabo las tareas que se les asignen o desempeñen, con el fin de que se encuentren en capacidad de adoptar las precauciones y medidas preventivas necesarias para evitar la contaminación o deterioro de los alimentos.

Las empresas deben tener un plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación y luego ser reforzado mediante charlas, cursos u otros medios efectivos de actualización. Dicho plan debe ser de por lo menos 10 horas anuales, sobre asuntos específicos de que trata la presente resolución. Esta capacitación estará bajo la responsabilidad de la empresa y podrá ser efectuada por ésta, por personas naturales o jurídicas contratadas y por las autoridades sanitarias. Cuando el plan de capacitación se realice a través de personas naturales o jurídicas diferentes a la empresa, éstas deben demostrar su idoneidad técnica y científica y su formación y experiencia específica en las áreas de higiene de los alimentos, Buenas Prácticas de Manufactura y sistemas preventivos de aseguramiento de la inocuidad.

Artículo 13. Plan de capacitación. El plan de capacitación debe contener, al menos, los siguientes aspectos: Metodología, duración, docentes, cronograma y temas específicos a impartir. El enfoque, contenido y alcance de la capacitación impartida debe ser acorde con la empresa, el proceso tecnológico y tipo de establecimiento de que se trate. En todo caso, la empresa debe demostrar a través del desempeño de los operarios y la condición sanitaria del establecimiento la efectividad e impacto de la capacitación impartida.

Parágrafo 1. Para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas, se colocarán en sitios estratégicos avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de su observancia durante la manipulación de alimentos.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Parágrafo 2. El manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender y manejar el control de los puntos del proceso que están bajo su responsabilidad y la importancia de su vigilancia o monitoreo; además, debe conocer los límites del punto del proceso y las acciones correctivas a tomar cuando existan desviaciones en dichos límites. (Negrilla y subrayado fuera del texto original). Elementos de los cuales nada se trajo para efectos de validar el seguimiento correspondiente.

En el marco comparativo de las normas en comento, es inocuo el contenido de lo aportado por el municipio, pues no se registra, soporte del seguimiento frente a las Buenas Prácticas de manufactura dentro del proceso, demostrando el nulo seguimiento dentro del expediente contractual de esta delicada labor.

Ahora bien, hay vulneración a las disposiciones del Manual de Contratación, como a continuación se evidencia:

Respecto de los estudios previos:



Para la contratación directa, el análisis del sector debe tener en cuenta el objeto del proceso de contratación, particularmente las condiciones del contrato, como los plazos y formas de entrega y de pago. El análisis del sector debe permitir sustentar la decisión de hacer una contratación directa, la elección del proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia, transparencia y economía.

En un contrato de prestación de servicios profesionales, el análisis del sector depende del objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollar dicho objeto. Por ejemplo, si se trata de la contratación de un Contador Público para llevar a cabo la contabilidad municipal, se debe hacer una reflexión sobre la necesidad de contratar el servicio y las condiciones de los procesos de contratación que ha adelantado en el pasado para contratar ese tipo de servicios, teniendo en cuenta los plazos, el valor y forma de pago.

En los procesos de contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado a su valor, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados. En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de los potenciales oferentes. En estos casos, es necesario revisar las condiciones particulares de otros procesos de contratación similares, recopilar información suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los documentos del proceso, siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la necesidad de la entidad, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando promover la sana y libre competencia.

Como puede leerse, se marcaron unas pautas para mayor claridad de la contratación del municipio, los estudios previos como mecanismo para sustentar la necesidad, por tanto, sí se determinan requerimientos para la elección del contratista y las condiciones de idoneidad y experiencia, no sin antes exaltar lo prioritario de cumplir con los principios de la contratación estatal.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

De otra parte, el señalamiento del inciso tercero del punto 4.1.1 y 4.1.5, resulta interesante se determina el cumplimiento de actividades que no se hicieron en este contrato de la manera indicada en la norma interna:

4.1.1. Inicio del Contrato

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, el supervisor y/o interventor deberá suscribir el acta de inicio.

Para dichos fines el supervisor y/o interventor del contrato y el contratista deberán ponerse en contacto para suscribir el acta de inicio, la cual deberá formar parte del expediente del proceso contractual.

En todo contrato que celebre el Municipio de Calima El Darién en el que para su ejecución el contratista deba utilizar personal, el supervisor o interventor al momento de elaborar el acta de inicio, deberá consignar la relación del personal que se destinará por parte del contratista, con la correspondiente identificación; así como su remuneración, y cualquier cambio deberá ser informado al supervisor o interventor; igualmente se dejará consignado la fecha de terminación alcance de los amparos de las garantías y si se hace o no necesario la ampliación de misma teniendo en cuenta el plazo de ejecución del contrato.

En relación al manejo del expediente contractual, también hay establecidos unos parámetros mínimos que se omitieron por la administración municipal, a saber:

4.1.5. Expediente Contractual

Los documentos originados con ocasión de la actividad contractual se incluirán en carpetas y estarán debidamente foliados de acuerdo con el orden establecido en las listas de chequeo que socialice la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación, para cada modalidad de selección.

Las carpetas de expedientes contractuales contendrán los documentos previos, pliego de condiciones, pliego de condiciones, adendas, constancias de publicación en el Portal único de Contratación SECOP, actos de audiencias, listados de asistencia, observaciones y documentos de respuesta, actos administrativos, contrato, pólizas, oficios, documentos modificatorios, actas de inicio, suspensiones, la relación de contratación derivada, copia de los contratos derivados, documentos de correspondencia entre contratante y contratista, las actas de liquidación de los mismos, e informes de ejecución que el contratista haya presentado, los informes de supervisión o interventoría, actas del comité de asesoría y verificación, así como todos los documentos soporte de la ejecución contractual, actos administrativos de imposición de sanciones, sus respectivas constancias de ejecutoria y oficios derivados de esta actividad.

Esta carpeta debe encontrarse bajo custodia del archivo Oficina Asesora Jurídica y de Contratación y no podrá salir de sus dependencias, conforme al tiempo de retención sugerido por el archivo Municipal.

El responsable de la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación podrá adelantar las diligencias necesarias cuando se requiera la reconstrucción de expedientes administrativos contractuales.

En el caso de la publicación en el Secop que implica cumplimiento del principio de Publicidad

3.1.3. Publicación del Contrato

Los contratos suscritos por el Municipio de Calima El Darién se publicarán en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP, conforme lo dispuesto en las normas vigentes aplicables. (Ver artículo 223 del Decreto Ley 0019 de 2012 y artículo 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015).

De la evaluación de todas estas características confrontados los soportes allegados y después de realizar la revisión de los argumentos del sujeto de control, no se estima que

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

tengan los mismos asidero jurídico, por tanto se confirma la observación en todas sus partes y pasará a ser un hallazgo con las mismas connotaciones.

Con respecto la respuesta de la entidad a lo planteado en el Apoyo Técnico Medio ambiental. es importante anotar:

La contraloría no cuestiona la cantidad de balones que haya definido el CIDEA, lo que se solicita es la evidencia de la entrega de los balones porque es recurso público, el cual debe estar justificado por mandato legal.

Dentro del proceso de contradicción entregaron los mismos soportes que se observaron en la carpeta contractual, donde solo se soportan 18 firmas de las personas que participaron en la yincana, las cuales se supone que son a los jóvenes que les entregaron los balones; no hay evidencia a quienes le entregador los balones restantes.

Ni en la carpeta contractual, ni en los anexos de contradicción se evidencia el aporte que realizó la fundación en dinero o en personal o en infraestructura. Es importante recordar que el aporte que le correspondía a la fundación es de \$3.000.000, el cual, sino se dio en efectivo, se debe indicar que actividad, acciones o logística se ejecutó que correspondiera a este valor no indican cual es la infraestructura que aportaron

Con respecto al transporte es por el valor que están pagando por este servicio, no porque lo usen, los valores que están pagando están por fuera del presupuesto para esta actividad y más cuando el municipio cuenta con valores bases.

Puede que el CIDEA sea el que organice el evento, pero el recurso es del municipio, por lo tanto, la entidad debe velar para que se haga un uso eficiente del recurso.

Con respecto a que la administración debe respetar la autonomía e independencia jurídica y administrativa del Contratista, y por ningún motivo puede incidir en sus negociaciones o pactos., es importante a notar que el municipio realizó el convenio con una fundación sin ánimo de lucro, es decir una organización que desarrolla o realiza actividades de bien social o interés general con fines legales, y que no tiene como objetivo obtener beneficios económicos, por lo tanto no tiene explicación los sobre costo.

Es importante anotar que la Contraloría en su análisis tuvo en cuenta los registros fotográficos, los formatos de asistencia, peor no soportan todo lo que compraron.

En cuanto a lo que expresa la administración que no saben con exactitud cuántos participaron, por lo menos deben informar a quien le entregaron los balones restantes, pero no hay ninguna información al respecto.

Al contrario de lo que la administración establece la observación que configuró el equipo auditor, cumple con los Principios y Lineamientos establecidos en la Guía de Auditoría Territorial 3.0.

Por lo tanto, lo argumentado por la entidad no desvirtúa la observación, configurándose el hallazgo con incidencia disciplinaria y fiscal.

20. Observación administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria – Fiscalización de los impuestos municipales y gestión de cobro persuasivo y coactivo

Condición (situación detectada de incumplimiento)

En la vigencia 2022, no se realizó Fiscalización por parte del municipio, de los impuestos de Industria y Comercio, Avisos y tableros, entre otros, tal labor se delegó en contratista. También, se requirió información del manejo de las liquidaciones y de los mandamientos de pago para el cobro coactivo del impuesto Predial, con la información aportada y acorde a muestra selectiva pudo evidenciarse lo siguiente:

- 1.- Existe un alto riesgo sobre la cartera, debido a que no se posee Software propio de la entidad y se delega el manejo de la base de datos a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), que estandariza los valores, y los acumula, tal circunstancia viola el debido proceso y gesta nulidades en las acciones de cobro, que al ser consultadas ante la jurisdicción ordinaria o contenciosa, generaran reconocimiento de prescripciones o pérdidas de la facultad sancionatoria, en detrimento del interés municipal
- 2.- Acorde a la circunstancia anterior, existe un inadecuado manejo de los capitales a incorporar en las liquidaciones y mandamientos de pago, pues la acumulación vá en contravía de la norma procesal que implica obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles, como quiera que no es posible determinar a qué vigencia corresponde el capital exigido, ni desde qué fechas se cobran los intereses.
- 3.- Se negó la existencia de prescripciones mediante certificación, no obstante, según los informes del contratista encargado de manejo de la cartera, se expidieron resoluciones de pérdida de la facultad sancionatoria; misma que, independientemente de su nombre, implica la prescripción de las sumas a que hay lugar. Sobre tal aspecto no se entregó la información requerida, por tanto, deberá revisarse en próxima auditoría, para determinar si existen sumas que constituyan detrimento por dicho concepto.
- 4.- La cartera presenta inconsistencias que se determinan a partir de una muestra seleccionada de 112 predios, en donde se avizora lo siguiente:

En el siguiente cuadro, vemos que no se realiza la depuración de la cartera, en donde se observan varios predios, con cuyos recursos se está contando, sin embargo, no se recuperará por tratarse de entidades públicas, que ni siquiera deberían estar:

Cuadro No. 57

Nación- Municipio. Personas jurídicas estatales							
Pedio	Identificación	Propietario	Dirección	Periodo	Predial Unificado	Int. Predial Unificado	Total sin depurar
000000050030000	32196	LA-NACION	BALDIAS	2018	5.546.256	6.972.243	
000000050030000	32196	LA-NACION	BALDIAS	2019	5.712.640	5.510.541	
000000050030000	32196	LA-NACION	BALDIAS	2020	5.884.016	4.019.327	
000000050030000	32196	LA-NACION	BALDIAS	2021	6.969.626	2.924.420	
010002090072801	30441	MUNICIPIO-DE-CALIMA	LO	2021	5.429.870	2.278.346	
010000460001000	35287	INCIVA-INSTITUTO-VALLECAUCA NO-DE-	C 10 11A 41 MUSEO ARQUEOLOGICO	2016	9.476.702	17.847.294	
No deben estar cuantificados como cuenta por cobrar					\$39.019.110	\$39.552.171	\$78.571.281

Fuente: Municipio de Calima E Darién

20. Observación administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria – Fiscalización de los impuestos municipales y gestión de cobro persuasivo y coactivo

Elaboración: Equipo Auditor

Vemos que, en la muestra de 120 predios, hay una serie de predios (19) a nombre de la misma persona jurídica que no se encuentra debidamente identificada (Nit), por tanto, la obligación descrita en las facturas y los mandamientos de pago (si existen), no resultaría exigible, al omitir, una parte sustancial del debido proceso:

Cuadro No. 58

Persona jurídica sin identificar con múltiples predios sin clasificar las obligaciones							
Predio	Identificación	Propietario	Dirección	Período	Predial Unificado	Int. Predial Unificado	Total Sin Identificar
000000010894000B14: E34B12B14:E33	31130	FONDO-PARA-EL-PLAN-DE-VIVIENDA-DE	LOTE	2013	11.606.944	32.259.620	43.866.564
000000010894000	31130	FONDO-PARA-EL-PLAN-DE-VIVIENDA-DE	LOTE	2014	12.683.220	31.491.268	44.174.488
000000010894000	31130	FONDO-PARA-EL-PLAN-DE-VIVIENDA-DE	LOTE	2015	13.063.716	28.656.120	41.719.836
000000010894000	31130	FONDO-PARA-EL-PLAN-DE-VIVIENDA-DE	LOTE	2016	16.329.645	30.902.384	47.232.029
000000010894000	31130	FONDO-PARA-EL-PLAN-DE-VIVIENDA-DE	LOTE	2017	18.479.000	28.974.125	47.453.125
000000010894000	31130	FONDO-PARA-EL-PLAN-DE-VIVIENDA-DE	LOTE	2018	19.033.424	23.927.070	42.960.494
000000010894000	31130	FONDO-PARA-EL-PLAN-DE-VIVIENDA-DE	LOTE	2019	18.379.155	17.728.946	36.108.101
000000010894000	31130	FONDO-PARA-EL-PLAN-DE-VIVIENDA-DE	LOTE	2020	18.930.525	12.931.300	31.861.825
000000010894000	31130	FONDO-PARA-EL-PLAN-DE-VIVIENDA-DE	LOTE	2021	22.423.206	9.408.665	31.831.871
000000010642802	31042	FONDO-PARA-LA-REHABILITACION-SOCI	EL REFUGIO DEL SOL LO 109	2012	5.022.228	15.400.790	20.423.018
000000010894000	31130	FONDO-PARA-EL-PLAN-DE-VIVIENDA-DE	LOTE	2012	5.803.472	17.796.495	23.599.967
000000010642802	31042	FONDO-PARA-LA-REHABILITACION-SOCI	EL REFUGIO DEL SOL LO 109	2013	5.172.900	14.377.238	19.550.138
000000010642802	31042	FONDO-PARA-LA-REHABILITACION-SOCI	EL REFUGIO DEL SOL LO 109	2014	5.328.084	13.229.142	18.557.226
000000010642802	31042	FONDO-PARA-LA-REHABILITACION-SOCI	EL REFUGIO DEL SOL LO 109	2015	5.487.924	12.038.122	17.526.046
000000010642802	31042	FONDO-PARA-LA-REHABILITACION-SOCI	EL REFUGIO DEL SOL LO 109	2016	6.859.905	12.981.753	19.841.658

20. Observación administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria – Fiscalización de los impuestos municipales y gestión de cobro persuasivo y coactivo

		REHABILITACION-SOCI	DEL SOL LO 109				
000000010642802	31042	FONDO-PARA-LA-REHABILITACION-SOCI	EL REFUGIO DEL SOL LO 109	2017	7.763.000	12.171.986	19.934.986
000000010642802	31042	FONDO-PARA-LA-REHABILITACION-SOCI	EL REFUGIO DEL SOL LO 109	2018	7.995.728	10.051.494	18.047.222
000000010642802	31042	FONDO-PARA-LA-REHABILITACION-SOCI	EL REFUGIO DEL SOL LO 109	2019	7.720.875	7.447.730	15.168.605
000000010642802	31042	FONDO-PARA-LA-REHABILITACION-SOCI	EL REFUGIO DEL SOL LO 109	2020	7.952.505	5.432.297	13.384.802
No hay identificación del deudor obligado					216.035.456	337.206.545	553.242.001

Fuente: Municipio de Calima E Darién

Elaboración: Equipo Auditor

Vemos que, en 4 personas jurídicas de la muestra, se encuentran concentrados más de \$700 millones de pesos, cuyas obligaciones no fueron discriminadas en la base de datos, encontramos sin identificar los periodos presuntamente en mora, lo que lesiona el alcance y legalidad de las liquidaciones, facturación y mandamientos de pago realizados:

Cuadro No. 59

Personas Jurídicas (4)						
Predio	Identificación	Dirección	Periodo	Predial Unificado	Int. Predial Unificado	Total sin identificar
000000010156000	891300750-6	BERLIN 1	2016	34.088.730	64.509.853	98.598.583
000000010156000	891300750-6	BERLIN 1	2017	38.576.000	60.485.191	99.061.191
000000010156000	891300750-6	BERLIN 1	2018	38.699.152	48.649.014	87.348.166
000000010156000	891300750-6	BERLIN 1	2019	37.368.870	36.046.853	73.415.723
000000010156000	891300750-6	BERLIN 1	2020	38.489.940	26.292.189	64.782.129
000000040815804	805014327	LOS PINOS I	2016	6.709.845	12.697.778	19.407.623
000000040815804	805014327	LOS PINOS I	2017	7.593.000	11.905.435	19.498.435
000000040815804	805014327	LOS PINOS I	2018	7.820.832	9.831.630	17.652.462
000000040815804	805014327	LOS PINOS I	2019	7.551.990	7.284.819	14.836.809
000000040815804	805014327	LOS PINOS I	2020	7.778.550	5.313.469	13.092.019
000000011822000	31084	LO 3B-1 3B-2 3B-3	2017	21.458.004	0	21.458.004
000000011822000	31084	LO 3B-1 3B-2 3B-3	2019	34.326.193	25.147.285	59.473.478
000000011822000	31084	LO 3B-1 3B-2 3B-3	2020	35.355.980	18.925.969	54.281.949
000000011822000	31084	LO 3B-1 3B-2 3B-3	2021	41.879.153	14.177.627	56.056.780

20. Observación administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria – Fiscalización de los impuestos municipales y gestión de cobro persuasivo y coactivo

000000040001000	32359	LAS ANTILLAS 1	2020	8.399.670	5.737.751	14.137.421
000000040315000	805012921-0	LAS ANTILLAS 2	2020	6.850.875	4.679.781	11.530.656
Monto sin definición e identificación				372.946.784	351.684.644	724.631.428

Fuente: Municipio de Calima E Darién

Elaboración: Equipo Auditor

En 4 personas naturales, se encuentra representados más de \$540 millones de pesos, con riesgo de prescripción o pérdida de facultades de cobro, como quiera que los valores no se encuentran debidamente desagregados, como vemos en el siguiente cuadro, no existe discriminación alguna de los capitales a partir de la vigencia inicialmente señalada, por tanto, habría violación al debido proceso en los términos antes referidos:

Cuadro No. 60

Personas Naturales (4)						
Predio	Identificación	Dirección	Periodo	Predial Unificado	Int. Predial Unificado	Total, sin identificar
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2018	10.211.984	12.837.567	23.049.551
000000011241816	1130596172	PARCELACION FLORENCIA I LO 62	2020	10.744.000	7.339.146	18.083.146
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2020	10.156.770	6.938.013	17.094.783
000000011241816	1130596172	PARCELACION FLORENCIA I LO 62	2021	18.165.440	7.622.128	25.787.568
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2021	12.030.702	5.048.022	17.078.724
000000040003000	38863025	ARIZONA	1998	5.180.780	21.554.739	26.735.519
000000040003000	38863025	ARIZONA	1999	5.672.960	22.402.292	28.075.252
000000040003000	38863025	ARIZONA	2000	6.240.256	23.322.333	29.562.589
000000040003000	38863025	ARIZONA	2001	6.240.256	22.002.144	28.242.400
000000040003000	38863025	ARIZONA	2002	6.365.062	21.095.598	27.460.660
000000040003000	38863025	ARIZONA	2003	6.587.834	20.440.204	27.028.038
000000040003000	38863025	ARIZONA	2004	7.207.572	20.838.244	28.045.816
000000040003000	38863025	ARIZONA	2005	7.387.764	19.796.252	27.184.016
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2011	6.227.448	20.734.462	26.961.910
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2012	6.414.276	19.669.541	26.083.817
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2013	6.606.708	18.362.275	24.968.983
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2014	6.804.912	16.895.970	23.700.882
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2015	7.009.056	15.374.825	22.383.881

20. Observación administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria – Fiscalización de los impuestos municipales y gestión de cobro persuasivo y coactivo

000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2016	8.761.320	16.580.010	25.341.330
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2017	9.915.000	15.546.212	25.461.212
000000040868000	14887979	LOTE 2	2019	5.241.797	5.056.355	10.298.152
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2019	9.860.940	9.512.085	19.373.025
000000040868000	14887979	LOTE 2	2020	5.399.053	3.688.053	9.087.106
000000040868000	14887979	LOTE 2	2021	6.395.182	2.683.386	9.078.568
	Totales en riesgo de prescripción			190.827.072	355.339.856	546.166.928

Fuente: Municipio de Calima E Darién

Elaboración: Equipo Auditor

Así las cosas, se evidencian inconsistencias, que lesionan de fondo las 554 actuaciones administrativas que de manera puntual se realizaron durante la vigencia y que se afectan por los errores que debieron ser detectados oportunamente.

Fuente de criterio y criterio

Lo anterior, vulnera lo dispuesto en la Estatuto Tributario, artículos 823 a 833-1; Ley 1066 de 2006, artículos 1 a 3, 5 y 6 y Reglamento Interno de Cartera

Causa

La causa de tales circunstancias es la falta de revisión sobre las actuaciones a cargo de la tesorería, así como inadecuada labor de seguimiento y cobro de los montos correspondientes.

Efecto

Pérdida de facultad sancionatoria y capacidad del recaudo de recursos a favor del municipio.

Los hechos descritos originan una Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, que genera la aplicación de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

OBSERVACIÓN 20: Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria – Fiscalización de los impuestos municipales y gestión de cobro persuasivo y coactivo.

Revisado el informe de la referencia, procedo a dar respuesta a la observación No. 10 “Administrativa con presuntas incidencias Disciplinaria, Fiscal y Penal – Planeación, seguimiento y pago de Contrato de Comisión de Éxito” en la que se hacen varias afirmaciones contrarias a la verdad y al derecho, poniendo en tela de juicio la legalidad de mi proceder.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Por las graves acusaciones que allí se hacen y sin perjuicio de esta respuesta, procederé en derecho como corresponde para salvaguardar mi honra y buen nombre.

1. La observación No. 10 que se responde

Reproduzco en forma literal el texto elaborado por el equipo auditor de la Contraloría Departamental y que firma en condición de informe preliminar la señora Ligia Stella Chaves Ortiz en calidad de Contralora Departamental:

“20. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria – Fiscalización de los impuestos municipales y gestión de cobro persuasivo y coactivo

Condición (situación detectada de incumplimiento)

En la vigencia 2022, no se realizó Fiscalización por parte del municipio, de los impuestos de Industria y Comercio, Avisos y tableros, entre otros, tal labor se delegó en contratista. También, se requirió información del manejo de las liquidaciones y de los mandamientos de pago para el cobro coactivo del impuesto Predial, con la información aportada y acorde a muestra selectiva pudo evidenciarse lo siguiente:

1.- Existe un alto riesgo sobre la cartera, debido a que no se posee Software propio de la entidad y se delega el manejo de la base de datos a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), que estandariza los valores, y los acumula, tal circunstancia viola el debido proceso y gesta nulidades en las acciones de cobro, que al ser consultadas ante la jurisdicción ordinaria o contenciosa, generaran reconocimiento de prescripciones o pérdidas de la facultad sancionatoria, en detrimento del interés municipal.

2.- Acorde a la circunstancia anterior, existe un inadecuado manejo de los capitales a incorporar en las liquidaciones y mandamientos de pago, pues la acumulación vá en contravía de la norma procesal que implica obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles, como quiera que no es posible determinar a qué vigencia corresponde el capital exigido, ni desde qué fechas se cobran los intereses.

3.- Se negó la existencia de prescripciones mediante certificación, no obstante, según los informes del contratista encargado de manejo de la cartera, se expidieron resoluciones de pérdida de la facultad sancionatoria; misma que, independientemente de su nombre, implica la prescripción de las sumas a que hay lugar. Sobre tal aspecto no se entregó la información requerida, por tanto, deberá revisarse en próxima auditoría, para determinar si existen sumas que constituyan detrimento por dicho concepto.

4.- La cartera presenta inconsistencias que se determinan a partir de una muestra seleccionada de 112 predios, en donde se avizora lo siguiente:

En el siguiente cuadro, vemos que no se realiza la depuración de la cartera, en donde se observan varios predios, con cuyos recursos se está contando, sin embargo, no se recuperará por tratarse de entidades públicas, que ni siquiera deberían estar:

[Sigue cuadro No. 39]

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Vemos que, en la muestra de 120 predios, hay una serie de predios (19) a nombre de la misma persona jurídica que no se encuentra debidamente identificada (Nit), por tanto, la obligación descrita en las facturas y los mandamientos de pago (si existen), no resultaría exigible, al omitir, una parte sustancial del debido proceso:

[Sigue cuadro No. 40]

Vemos que, en 4 personas jurídicas de la muestra, se encuentran concentrados más de \$700 millones de pesos, cuyas obligaciones no fueron discriminadas en la base de datos, encontramos sin identificar los periodos presuntamente en mora, lo que lesiona el alcance y legalidad de las liquidaciones, facturación y mandamientos de pago realizados:

[Sigue cuadro No. 41]

En 4 personas naturales, se encuentra representados más de \$540 millones de pesos, con riesgo de prescripción o pérdida de facultades de cobro, como quiera que los valores no se encuentran debidamente desagregados, como vemos en el siguiente cuadro, no existe discriminación alguna de los capitales a partir de la vigencia inicialmente señalada, por tanto, habría violación al debido proceso en los términos antes referidos:

[Sigue cuadro No. 42]

Así las cosas, se evidencian inconsistencias, que lesionan de fondo las 554 actuaciones administrativas que de manera puntual se realizaron durante la vigencia y que se afectan por los errores que debieron ser detectados oportunamente.

Fuente de criterio y criterio

Lo anterior, vulnera lo dispuesto en la Estatuto Tributario, artículos 823 a 833-1; Ley 1066 de 2006, artículos 1 a 3, 5 y 6 y Reglamento Interno de Cartera

Causa

La causa de tales circunstancias es la falta de revisión sobre las actuaciones a cargo de la tesorería, así como inadecuada labor de seguimiento y cobro de los montos correspondientes.

Efecto

Pérdida de facultad sancionatoria y capacidad del recaudo de recursos a favor del municipio. Los hechos descritos originan un Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, que genera la aplicación de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1o de los artículos 38 y 39."

Las observaciones se resumen así:

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Comentario del equipo auditor	Páginaa
En la vigencia 2022, no se realizó Fiscalización por parte del municipio, de los impuestos de Industria y Comercio, Avisos y tableros, entre otros, tal labor se delegó en contratista.	101
La Fiscalización por parte del municipio, de los impuestos de Industria y Comercio, Avisos y tableros se delegó en contratista.	101
No se realiza la depuración de la cartera, en donde se observan varios predios, con cuyos recursos se está contando, sin embargo, no se recuperará por tratarse de entidades públicas,	102
hay una serie de predios (19) a nombre de la misma persona jurídica que no se encuentra debidamente identificada (Nit), por tanto, la obligación descrita en las facturas y los mandamientos de pago (si existen), no resultaría exigible, al omitir, una parte sustancial del debido proceso	102
4 personas jurídicas de la muestra, se encuentran concentrados más de \$700 millones de pesos, cuyas obligaciones no fueron discriminadas en la base de datos, encontramos sin identificar los periodos presuntamente en mora, lo que lesiona el alcance y legalidad de las liquidaciones, facturación y mandamientos de pago	103
4 personas naturales, se encuentra representados más de \$540 millones de pesos, con riesgo de prescripción opérida de facultades de cobro, como quiera que los valores no se encuentran debidamente desagregados, como vemos en el siguiente cuadro, no existe discriminación alguna de los capitales a partir de la vigencia inicialmente señalada, por tanto, habría violación al debido proceso	104

2. Respuestas que desvirtúan la observación y los hallazgos

2.1. Sobre la supuesta ausencia de gestión de fiscalización del Impuesto de Industria y Comercio.

En primer lugar, debemos reiterar que el Municipio de Calima el Darién NUNCA delegó funciones en contratistas y en especial, NO delegó ninguna gestión de fiscalización.

En segundo, el equipo auditor parece entender que la ausencia de masivos de fiscalización de ICA supone la inexistencia de gestión. Dicha conclusión es equivocada pues la facultad fiscalizadora la administración tributaria que tiene como objeto probar “más allá de la certeza, la veracidad o la realidad de los hechos que justifican las declaraciones del contribuyente y el cumplimiento de los demás presupuestos que la ley dispone para legitimar el tributo declarado”, se cumple a través de la revisión e investigación incluso de simples operaciones aritméticas.

No se trata de abrir expedientes sino de confirmar el cumplimiento. Eso es justamente lo que ha ocurrido en el periodo 2022, en el que a partir de las informaciones disponibles no fue posible desvirtuar la veracidad de los datos consignados en las declaraciones:

“ARTÍCULO 746. PRESUNCIÓN DE VERACIDAD. Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija.”

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Respecto de la fiscalización de omisos, al equipo auditor se hizo saber que el programa de información exógena municipal comenzaría a tener efectos en el año 2023, momento a partir del cual el Municipio tendría la posibilidad de disponer de informaciones suficientes para Avanzar en procesos extensivos de fiscalización de omisos. Mal podría la administración abrir expedientes y dentro de ellos proferir emplazamientos previos por no declarar sin el cumplimiento del artículo 715 del Estatuto Tributario Nacional que exige la “previa comprobación de su obligación”.

El Municipio de Calima El Darién no estuvo ni está dispuesto a incurrir en la práctica recurrente de otras administraciones de emplazar masivamente a supuestos contribuyentes, pues está más que probado que ese proceder solamente termina en la masiva condena en costas procesales.

Por último, se advierte que la observación no refiere ningún daño.

2.2. Sobre la supuesta imposibilidad de cobrar Impuesto Predial Unificado a entidades públicas

Se trata de una errónea conclusión del ente de control. Excepción hecha por los predios del propio municipio, los inmuebles de propiedad de entidades de naturaleza pública están gravados con el Impuesto Predial Unificado de la misma forma como ocurre con los bienes de propiedad de los particulares.

La única distinción existente en la Ley tiene sustento en el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, norma a partir de la cual se distingue entre bienes fiscales (sin discusión sobre su sujeción al tributo), los bienes de uso público no explotados por particulares (no sujetos al gravamen) y los bienes de uso público explotados por particulares (sujetos también al tributo).

Como se sabe, la base de datos que toma la entidad territorial para la liquidación del Impuesto Predial Unificado y Sobretasas tiene origen en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En la fuente la información NO distingue entre predios fiscales, de uso público con o sin explotación por particulares, razón por la cual los predios de entidades de naturaleza pública son gestionados sin distinción, estando en cabeza del interesado acreditar la destinación especial que pueda suponer la exclusión del tributo.

No tiene sentido que, ante esa realidad, el equipo auditor acuse a la administración de una falta de gestión y menos que se señale un riesgo que es absolutamente indeterminado.

2.3. Sobre la supuesta imposibilidad de adelantar la cobranza sobre predios cuyo propietario no está identificado correctamente

Reiteramos que la base de datos que toma la entidad territorial para la liquidación del Impuesto Predial Unificado y Sobretasas tiene origen en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la administración municipal NO tiene competencia para hacer ajustes sobre ella. La mejora de los datos sigue siendo responsabilidad de la autoridad catastral como parte

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

de los procesos de conservación de la información, en cuyo desarrollo la Tesorería no interviene.

Precisamente ante esa realidad es que la Ley 1430 de 2011 asignó al Impuesto Predial Unificado la condición de gravamen real y expresamente consagró la procedencia de la cobranza sin importar quien sea el propietario:

“Artículo 60. Carácter real del impuesto predial unificado. El impuesto predial unificado es un gravamen real que recae sobre los bienes raíces, podrá hacerse efectivo con el respectivo predio independientemente de quien sea su propietario, de tal suerte que el respectivo municipio podrá perseguir el inmueble sea quien fuere el que lo posea, y a cualquier título que lo haya adquirido.

Esta disposición no tendrá lugar contra el tercero que haya adquirido el inmueble en pública subasta ordenada por el juez, caso en el cual el juez deberá cubrirlos con cargo al producto del remate.

Para autorizar el otorgamiento de escritura pública de actos de transferencia de domicilio sobre inmueble, deberá acreditarse ante el notario que el predio se encuentra al día por concepto del impuesto predial.

Para el caso del autoevaluó, cuando surjan liquidaciones oficiales de revisión con posterioridad la transferencia del predio, la responsabilidad para el pago de los mayores valores determinados recae en cabeza del propietario y/o poseedor de la respectiva vigencia fiscal.”

(Subrayas y negrillas fuera de texto)

Entonces a la luz de la norma transcrita, la cobranza procede ni cabe crítica a la constitución del título ejecutivo, incluso a pesar de la existencia de deficiencias en la información de origen.

2.4. Sobre la supuesta falta de discriminación de obligaciones

El equipo auditor formula una observación sobre los siguientes predios, que afirma concentran una gran cartera y no tienen gestión ni siquiera de liquidación. Al respecto hay que decir que el supuesto fáctico es cierto, pero que tiene plena justificación

000000010156000
000000040815804
000000011822000
000000040001000
000000040315000

Predios denominados BERLIN.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

No obstante, dichos predios NO han sido objeto de gestión porque su existencia está en duda y la cobranza resulta entonces imposible. En efecto, tales inmuebles no aparecen a nombre de la sociedad, tal y como consta en la consulta a la Ventanilla Única de Registro (VUR):

En ausencia de bienes sobre los cuales pudiera practicarse medida cautelar, se buscó al propietario con el propósito de aclarar la cartera o ejercer la cobranza contra otros bienes de su propiedad, pero, de acuerdo con el registro mercantil, el NIT. 891.300.750-6 corresponde a HACIENDA BELÉN LIMITADA EN LIQUIDACIÓN, cuya última renovación fue hecha en el año 1998 y sobre la cual pesan medidas cautelares ordenadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Por ello esos predios figuran en la cartera, pero su recuperación es improcedente. Lamentablemente los registros prediales no pueden suprimirse por la Tesorería sino hasta que el IGAC o el gestor catastral realice el proceso de conservación o de actualización.

No puede entonces derivarse ningún tipo de responsabilidad, ni procede siquiera plan de mejoramiento sobre una circunstancia afectada por factores externos o de terceros.

- Predio de la Parcelación Los Pinos

La Tesorería General SI tiene en trámite la cobranza coactiva sobre esos predios. Se anexa el expediente.

- Predio de la Denominada Fiduciaria Fidufes, fiduciaria SA y Alianza Fiduciaria

Se trata de un inmueble cuya cartera fue pagada íntegramente luego de una eficiente gestión de la Tesorería, que llevó a la sociedad Acción Fiduciaria en calidad de vocero del patrimonio autónomo a solicitar y suscribir una facilidad de pago por eso y otros predios. Lejos de ser una falta de gestión, este predio es prueba del éxito en la gestión de la Tesorería pues se pudo recuperar una cifra superior a los \$2.580.000.000.

Se anexa copia de la facilidad de pago

- Predios respectos de los cuales supuestamente no hay discriminación de valores

Se revisaron los siguientes predios, es decir todos los relacionados en el informe. Todos los títulos ejecutivos SI discriminan el valor de cada vigencia y concepto. La observación resulta contraria a la verdad:

Pedio	LOP	AÑOS	Propietario
00000001082680 9	2011_2015_0097	2011_2012_2013_2014_20 15	VALENCIA TRUJILLO GUILLERMO
00000001082680 9	2016_2020_0204	2016_2017_2018_2019_20 20	VALENCIA TRUJILLO GUILLERMO

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

00000001124181 6	2016_2020_0350	2020	GIRALDO GOMEZ ALEJANDRO
00000004086800 0	2016_2020_1612	2019_2020	TORRES MUTIS JAIME- ALBERTO
01000004000300 0	2011_2015_0601	2011_2012_2013_2014_20 15	OCANA YEPES JAVIER- ALFONSO
01000004000300 0	2016_2020_2026	2016_2017_2018_2019_20 20	OCANA YEPES JAVIER- ALFONSO

Se anexan copias de los títulos en donde se observa que la cartera SI está discriminada.

3. Conclusiones

Comentario del equipo auditor	Página	Conclusión
En la vigencia 2022, no se realizó Fiscalización por parte del municipio, de los impuestos de Industria y Comercio, Avisos y tableros, entre otros, tal labor se delegó en contratista.	101	Desvirtuada
La Fiscalización por parte del municipio, de los impuestos de Industria y Comercio, Avisos y tableros se delegó en contratista.	101	Desvirtuada
No se realiza la depuración de la cartera, en donde se observan varios predios, con cuyos recursos se está contando, sin embargo, no se recuperará por tratarse de entidades públicas,	102	Desvirtuada
hay una serie de predios (19) a nombre de la misma persona jurídica que no se encuentra debidamente identificada (Nit), por tanto, la obligación descrita en las facturas y los mandamientos de pago (si existen), no resultaría exigible, al omitir, una parte sustancial del debido proceso	102	Desvirtuada
4 personas jurídicas de la muestra, se encuentran concentrados más de \$700 millones de pesos, cuyas obligaciones no fueron discriminadas en la base de datos, encontramos sin identificar los periodos presuntamente en mora, lo que lesiona el alcance y legalidad de las liquidaciones, facturación y mandamientos de pago	103	Desvirtuada

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

4 personas naturales, se encuentra representados más de \$540 millones de pesos, con riesgo de prescripción o pérdida de facultades de cobro, como quiera que los valores no se encuentran debidamente desagregados, como vemos en el siguiente cuadro, no existe discriminación alguna de los capitales a partir de la vigencia inicialmente señalada, por tanto, habría violación al debido proceso

104

Desvirtuada

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Inicialmente, se manifestará que *no es de recibo* la amenaza implícita como argumento de defensa, todo funcionario estatal tiene derecho a dar respuesta en contradicción a los planteamientos de los entes de control, quienes, a su vez, realizan la expedición de informes con fundamento en los aspectos técnicos, físicos, digitales y de soporte que se ponen de presente dentro del proceso auditor, y como respuesta a los distintos requerimientos realizados y documentados. No sobra indicar, que son libres las partes (funcionarios y ente territorial) de obrar como a bien tengan, en el entendido que las actuaciones de este ente de control están más que evidenciadas y hay suficiente soporte de los requerimientos realizados para acreditar la certidumbre sobre las observaciones del informe, aún más en esta observación disciplinaria, por inconsistencias en el manejo de la cartera de la entidad.

Previamente a determinar si se sostiene o no la observación se hará revisión de los elementos traídos a la contradicción para su estudio:

Auditoría Contraloría Vigencia 2022-20231110T000162-001.zip

Archivo Ordenes Herramientas Favoritos Opciones Ayuda

Añadir Extraer en Comprobar Ver Eliminar Buscar Asistente Información Buscar virus Comentario auto extraíble

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRCS2
Carpeta de archivos					
20.1. LOP2011_2015-0297.pdf	406.483	406.273	Microsoft Edge PD...	09/11/2023 8:49	32EFA2E2
20.1. LOP2011_2015-0601.pdf	406.666	406.461	Microsoft Edge PD...	09/11/2023 8:49	0786F52E
20.1. LOP2016_2020-0204.pdf	407.670	406.474	Microsoft Edge PD...	09/11/2023 8:50	2C42A85C
20.1. LOP2016_2020-0350.pdf	407.644	406.454	Microsoft Edge PD...	09/11/2023 8:50	3FD47941
20.1. LOP2016_2020-0601.pdf	407.068	406.679	Microsoft Edge PD...	09/11/2023 8:51	21901450
20.1. LOP2016_2020-2026.pdf	407.953	406.744	Microsoft Edge PD...	09/11/2023 8:51	7D313CFA
20.Predial - Parcelación Los Pinos.pdf	2.797.383	2.541.605	Microsoft Edge PD...	09/11/2023 8:51	402F0481
20.RESOLUCION 100 - ACCION FIDUCIARIA ACUERDO.pdf	2.823.850	2.462.888	Microsoft Edge PD...	09/11/2023 8:52	48A4D528
20.RUES - Berlin.pdf	261.498	137.179	Microsoft Edge PD...	09/11/2023 8:52	1107288A
20.VUR - Berlin.pdf	131.486	124.477	Microsoft Edge PD...	09/11/2023 8:53	19EE038F

Se trajeron a revisión 6 Liquidaciones Oficiales del impuesto predial realizadas el 02 de agosto de 2021 por la Corporación Helix, actos administrativos que por sí solas no interrumpen los terminos de prescripción, para verificar que efectivamente no fueron hechas por el contratista de la vigencia 2022. En algunas de ellas se vincula hasta 10 años atrás de la vigencia en que se expidió el acto (2011), como lo podemos observar:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

20.1. LOP2011_2015-0097.pdf

25/20.1.%20LOP2011_2015-0097.pdf

ar a Copilot

8. Que el Impuesto Predial Unificado, Participación Ambiental y Sobretasa Bomberil por el Predio arriba señalado no ha sido satisfecho al momento de la expedición de este Acto por lo que procede la factura-liquidación oficial para constituir título ejecutivo que sirva de base al cobro coactivo. Que en mérito de las anteriores consideraciones La tesorería Municipal de CALIMA EL DARIÉN (Valle del Cauca)

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Liquidar oficialmente el Impuesto Predial Unificado, Sobretasa Ambiental y Sobretasa Bomberil al predio No. 0000000100200000 (Ver las vigencias (s) 2011_2012_2013_2014_2015 como a continuación se indica:

Centro Administrativo Municipal – CAM /
Calle 10 No. 6 - 25 Código Postal No.76126 - Tel: (2)2534305-2533470-2533363
E-Mail: alcaldia@calimaeldarien.valle.gov.co



		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Código: 1000-10-01
MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN		NIT. 890.309.611-8	Fecha: 02/01/2020
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION		MIPG-MECI	Versión: 1
PROCESO: TESORERÍA GENERAL			Página: 2
NOMBRE DEL DOCUMENTO: OFICIOS DESPACHADOS			



Año	Predial Unificado	Sob. Ambiental	Sob. Bomberil	Facturación	Total vigencia
2011	\$ 6.227.448	\$ 778.431	\$ 363.268		\$ 7.369.147
2012	\$ 6.414.276	\$ 801.785	\$ 374.168	\$ 2.000	\$ 7.592.227
2013	\$ 6.606.708	\$ 825.839	\$ 385.391	\$ 400	\$ 7.818.338
2014	\$ 6.804.912	\$ 850.614	\$ 396.953	\$ 400	\$ 8.052.879
2015	\$ 7.009.056	\$ 876.132	\$ 408.862	\$ 400	\$ 8.294.450
TOTAL SIN INCLUIR INTERESES					\$ 39.127.041

Valores que se incrementarán con los intereses moratorios a la fecha del pago, de conformidad con lo previsto por los artículos 634 y 635 del E.T.N.

ARTÍCULO 2: Contra la presente Factura-Liquidación Oficial procede únicamente el recurso de reconsideración de conformidad con el artículo 720 del Estatuto Tributario Nacional, el que podrá interponerse ante el Departamento Administrativo de Hacienda dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación del presente acto administrativo con el lleno de los requisitos dispuestos en el artículo 722 ibidem.

ARTÍCULO 3: Notifíquese esta Factura-Liquidación Oficial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificado por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010, modificado por el artículo los 354 de la Ley 1819.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE


GUSTAVO CASTRO REBOLLEDO
Tesorero General

Proyectó y Elaboró: Corporación H66x
Aprobó: Gustavo Castro Rebolledo – Director Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

04/201-1-162010OP2011_2015-0601.pdf

Departamento del Valle del Cauca

MUNICIPIO DE CALIMA BARRÉN

REGLAMENTO

APROBADO: El Concejo Administrativo del Municipio de Calima Barrén, en sesión ordinaria, el día 14 de mayo de 2015, con el fin de aprobar el presente Reglamento.

REGLAMENTO

El Concejo Administrativo del Municipio de Calima Barrén, en sesión ordinaria, el día 14 de mayo de 2015, con el fin de aprobar el presente Reglamento.

REGLAMENTO

El Concejo Administrativo del Municipio de Calima Barrén, en sesión ordinaria, el día 14 de mayo de 2015, con el fin de aprobar el presente Reglamento.

04/201-1-162010OP2011_2015-0601.pdf

Departamento del Valle del Cauca

MUNICIPIO DE CALIMA BARRÉN

REGLAMENTO

APROBADO: El Concejo Administrativo del Municipio de Calima Barrén, en sesión ordinaria, el día 14 de mayo de 2015, con el fin de aprobar el presente Reglamento.

REGLAMENTO

El Concejo Administrativo del Municipio de Calima Barrén, en sesión ordinaria, el día 14 de mayo de 2015, con el fin de aprobar el presente Reglamento.

REGLAMENTO

El Concejo Administrativo del Municipio de Calima Barrén, en sesión ordinaria, el día 14 de mayo de 2015, con el fin de aprobar el presente Reglamento.

Aunado a lo cual, revisadas las listas se observa que no se liquida al deudor como obligado sino que se liquida la obligación al predio, lo que jurídicamente no es viable pues el predio no tiene personería jurídica, por ende no es sujeto de derechos y obligaciones, en el caso de las liquidaciones 2 y 6 en el listado, tampoco se identifica al propietario (Javier Alfonso Ocaña Yepes) con cédula de ciudadanía o documento idóneo, ni con una dirección para ser notificado:

04/201-1-162010OP2011_2015-0601.pdf

Departamento del Valle del Cauca

MUNICIPIO DE CALIMA BARRÉN

REGLAMENTO

APROBADO: El Concejo Administrativo del Municipio de Calima Barrén, en sesión ordinaria, el día 14 de mayo de 2015, con el fin de aprobar el presente Reglamento.

REGLAMENTO

El Concejo Administrativo del Municipio de Calima Barrén, en sesión ordinaria, el día 14 de mayo de 2015, con el fin de aprobar el presente Reglamento.

REGLAMENTO

El Concejo Administrativo del Municipio de Calima Barrén, en sesión ordinaria, el día 14 de mayo de 2015, con el fin de aprobar el presente Reglamento.

El siguiente anexo es un archivo con 7 folios: Uno es la factura de impuesto predial, también de Vigencia 2021, Mandamiento Ejecutivo de Pago No. 2021- Cobro-00014, en donde no se identifica al Representante legal de la entidad, quien debería aparecer para efectos de la plena identificación de la persona jurídica y la discriminación de los periodos de pago con sus correspondientes intereses, que no se discrimina. Como podemos ver a pie de página el trabajo nuevamente, corresponde a la Corporación contratista vigencia 2021, que incurre

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

en errores similares en la expedición del Mandamiento de pago, y crea inconsistencias en el cobro coactivo:

The left screenshot displays the official website of the Municipality of Calima Darién, showing a table with financial data under the heading 'IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO'. The right screenshot shows a 'MANDAMIENTO DE PAGO' (Payment Mandate) issued by the Municipality of Calima Darién, dated August 27, 2021, for the 'CONJUNTO PARCELACIÓN LOS PINOS'.

Los otros documentos corresponden a medidas cautelares decretadas, sin que se evidencie la notificación al deudor, para la interrupción de los términos de prescripción de las obligaciones a cargo:

The screenshot shows a document header for the Municipality of Calima Darién, including the NIT (890.309.611-8), Fecha (02/05/2020), Versión (3), and Página (1). The document is titled 'MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN' and 'MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN'.

Calima Darién, Agosto 27 de 2021

Señores
CONJUNTO PARCELACIÓN LOS PINOS
Carrera 113 No. 11-49
Cali

Ref.: **MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN**
Proceso administrativo coactivo
Predio: 000000040815804
Expediente No. 2021-Cobro-00016
Citación

Respetado señor (a):

Sírvase comparecer a este Despacho, ubicado en la Calle 10 No. 6-25 en Calima El Darién (Valle del Cauca) en horas hábiles de oficina, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la presente comunicación, a efectos de notificarle el contenido de la Resolución de Mandamiento de Pago No. 2021-Cobro-00014 librada dentro del proceso en referencia.

De no comparecer ante este Despacho en el término fijado, el Mandamiento será notificado por correo conforme lo dispone el artículo 826 concordante con el 585 del Estatuto Tributario Nacional.

NOTA: Para los efectos de la notificación deberá acreditar la calidad en la que actúa, suministrando copia del documento que así lo acredite (Certificado Cámara de Comercio, poder, etc.).

Cordialmente

GUSTAVO CASTRO REBOLEDO
Tesorero General

Proyectó: Corporación Hélix - Contratista

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Los otros dos archivos corresponden al Certificado de existencia y representación de una persona jurídica y la consulta de bienes el el Vur de la misma, ambos documentos del 09 de noviembre de 2023, período que no se evalúa por tanto nada se comenta.

Ahora bien, adentrándonos en la respuesta del sujeto de control, diremos lo siguiente:

Luego de “resumir” a su arbitrio lo evidenciado en la observación, señala el sujeto que nunca se delegó la gestión de fiscalización, circunstancia ésta que fue suficientemente ventilada en la observación No, 10, por economía procesal, si es menester entender las razones de hecho y derecho de tales enunciados remitirse a la conclusión del equipo auditor al respecto.

Para desestimar la ausencia de fiscalización manifiesta el sujeto, que se hizo revisión e investigación pero nada se aporta en tal sentido, como quedó claro en la revisión de anexos allegados.

Erradamente se arguye, que como la información exogena municipal “*comenzaría a tener efectos en el año 2023*”, no podía la administración “*abrir expedientes y dentro de ellos proferir emplazamientos previos por no declarar sin el cumplimiento del artículo 715 del Estatuto Tributario Nacional que exige la “previa comprobación de su obligación”*”, lo cual resulta ilógico, pues su se hizo fiscalización no masiva, sino de 1 ó 100 contribuyentes, ésa era la gestión que se esperaba evidenciar, aun con requerimientos y sin necesidad de emplazamientos, meramente con la prueba de tales investigaciones que no se trajeron ni entregaron en auditoría.

Para precisar lo dicho en la observación:

1.- No se manifestó nada en relación con el Software que contiene la base de datos de los deudores del tributo de predial de la entidad ni sobre el riesgo de delegar el manejo de ella a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

2.- Se trajeron 6 ejemplos de liquidación de predial que no corresponden a la vigencia, que están ajustados en materia de capital, pero que no discriminan desde cuando corren los intereses; aunado a ello no hay una adecuada identificación del deudor, y se liquida la obligación al predio que no tiene personería.

Se trajo igualmente, una liquidación mediante factura también de la vigencia 2021, con un mandamiento ejecutivo que realiza inadecuada acumulación de las obligaciones a cargo de la parte deudora persona jurídica de quien no se identifica a su representante legal, al margen de lo cual, se encuentra proyectado por Corporación Hélix y no por el contratista de la vigencia, aunque se observan errores similares a los resaltados con antelación.

3.- Nada se dijo en cuanto a la resistencia en la entrega de la información concerniente a si se expidieron resoluciones de pérdida de la facultad sancionatoria.

4.- En cuanto a las inconsistencias de la cartera señaló: “ *Sobre la supuesta imposibilidad de cobrar Impuesto Predial Unificado a entidades públicas*” , cuando de lo que se trataba era de hacer énfasis en **la depuración de la cartera**, en un cuadro se observan varios predios, con cuyos recursos se está contando, siendo menester señalar que de los 6 bienes relacionados 4 pertenecen a la Nación, y uno al municipio; por tanto **no hay lugar a la recuperación de los rubros a su cargo**. Sobre la imposibilidad de cobro, señala el Consejo de Estado: “*...Por el artículo 2 de la Ley 29 de 1963 se derogaron todas las*

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

disposiciones de carácter nacional que decretaban exoneraciones o exenciones del impuesto predial para personas privadas. Y, en su parágrafo se dispuso que las exenciones temporales continuarían por dos años. Además, la Ley 29 limitó las exenciones que podían decretar los municipios.

De este recuento normativo se concluye que "en ningún momento las normas que crearon el tributo, que en sus comienzos fue nacional, establecieron expresamente el gravamen para los inmuebles de propiedad de las entidades públicas, y por el contrario de las normas que derogaron aquellas que concedían exenciones [se] permitía inferir que aquel (sic) solo gravaba a la propiedad privada" Sentencia de 24 de febrero de 2004, expediente 5001 C.P. doctor Jaime Abella Zárate.

Lo anterior, porque la facultad impositiva de los municipios es derivada, pues debe ejercerse de acuerdo con la Constitución y la ley; y, por ende, los municipios no pueden gravar los bienes públicos sin expresa autorización legal Ibídem.

Dicha autorización fue conferida por el artículo 61 de la Ley 55 de 1985, que dispuso que los bienes inmuebles de los **establecimientos públicos**, empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta del orden nacional podían ser gravados con el impuesto predial a favor del respectivo municipio. Por tanto, a partir de la vigencia de la Ley 55 de 1985 sólo ciertas entidades públicas eran sujetos pasivos del impuesto predial y dentro de las mismas no se incluyó a la Nación.

Por su parte, con base en las facultades extraordinarias otorgadas al Gobierno Nacional mediante la Ley 11 de 1986, con el fin de codificar las disposiciones constitucionales y legales sobre la organización y funcionamiento de la administración municipal, se expidió el Código de Régimen Municipal (Decreto 1333 de 1986), el cual no modificó el régimen del impuesto predial.

Fue así como el artículo 194 del Decreto 1333 reiteró que **los bienes inmuebles de propiedad de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta del orden nacional podían ser gravados con el impuesto predial en favor del correspondiente municipio, lo que corrobora que sólo tales entidades públicas son sujetos pasivos de dicho impuesto.** Consejo de Estado-Sección Cuarta, consejero Ponente: HECTOR J. ROMERO DIAZ, Radicación número: 88001-23-31-000-2002-00158-01(14226), diecinueve (19) de abril de dos mil siete (2007).

De lo anterior, se colige que excepto uno de los predios relacionados, todos los demás deberían ser objeto de depuración y no lo han sido, idea central del referido cuadro. Siendo probado el hecho de reproche, la falta de depuración de las bases de datos, y su manejo no corresponde al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sino al propio municipio.

El criterio traído según el cual la base de datos para la liquidación del impuesto predial tiene origen en el IGAC, es cierto en parte, pues era esa la entidad encargada de la información, pero ya no lo es más desde 2021 para el caso del Municipio Calima El Darién y claro que le corresponde al Tesorero depurar la información que contiene y para ello no se requiere de sobrada infraestructura, solo haría falta un Plan de Trabajo adecuado. Es la base de datos del Municipio y es éste el funcionario encargado de direccionar los cobros de los impuestos municipales.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Si bien es cierto lo dicho por el sujeto en relación al artículo 60 de la Ley 1430 de 2011, esta cualidad es tangible al momento de la persecución de los bienes en cualquier proceso y para la prelación de los pagos, pero no es menos cierto que las normas procedimentales **son de orden público y de obligatorio cumplimiento**, así las cosas lo que propende la Ley era darle la capacidad al Estado de perseguir con el inmueble cualquier saldo insoluto a su favor, en caso de liquidaciones de sociedades, etc, pero ello no es óbice para pretermitir el debido proceso, que tiene alcance constitucional, y es un derecho fundamental: **“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.**

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.”

En orden del cual al liquidar obligaciones sobre el predio inadecuadamente identificado (pues se determina además por número de predial y no por el número del Certificado de Tradición) y no sobre las personas naturales o jurídicas sujetos de obligación, se incurrirá en yerros por inadecuada aplicación del procedimiento y posible vulneración al debido proceso:

En Sentencia Unificadora SU041- 2022, refiriéndose a la aplicación de las normas de procedimiento: **“53.**

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se configura cuando “el juez renuncia a conocer un caso de fondo y a proteger un derecho sustancial como resultado de una aplicación irreflexiva de las normas procedimentales”^[33]. Este defecto encuentra fundamento en los artículos 29 y 228 de la Constitución, que prevén no solo la garantía del derecho al debido proceso y de acceso efectivo y real a la administración de justicia, sino que además establecen el principio de prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales -art. 228 de la Carta. Es por esto que se ha interpretado que las normas procesales constituyen “un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos”^[34] y no pueden por consiguiente constituirse en una barrera de acceso a la garantía de aplicación y protección del derecho sustancial.

54. Asimismo, el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto “no se configura ante cualquier irregularidad”^[35] ni con la aplicación de cualquier norma procedimental. Su alcance, ha dicho la Corte, “hace imprescindible el análisis casuístico que frente a un escenario de conflicto y contraposición de intereses procura brindar en cada caso un equilibrio entre las formas propias del juicio y la obligación de preservar el derecho sustancial”.^[36] En este sentido, son múltiples los pronunciamientos de la Corte en los que ha reiterado que “las normas procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas”^[37].

55. Lo anterior en modo alguno se traduce en una licencia al juez o a las partes para apartarse caprichosamente de las reglas procesales. En principio, estas son de obligatoria observancia, no solo porque se encuentran contenidas en normas de

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

orden público^[38] que, entre otros aspectos, aseguran que el Estado, a través de sus jueces, administre justicia en forma igualitaria, y no al arbitrio de los funcionarios o de las partes. No obstante, lo que sí exige el ordenamiento constitucional es que la interpretación de las reglas procesales se lleve a cabo a la luz de los postulados superiores que aquel consagra. Esto impone al juez valorar si, frente a una situación específica, la aplicación irreflexiva de una norma procesal desencadena un escenario de afectación desproporcionada de garantías fundamentales incompatible con la Carta. En estos eventos excepcionales, a efecto de no incurrir en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, el funcionario deberá armonizar dicha regla procesal con los principios constitucionales a los que aquella debe sujetarse^[39].” (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Deducir que los errores en la configuración de los títulos ejecutivos no tienen incidencia en los procesos de cobro coactivo, es un desacierto que puede traer desafortunadas consecuencias para el municipio.

Sobre el segundo cuadro en donde aparecen predios presuntamente de la entidad Fondo para la Rehabilitación Social, se desconoce incluso el NIT, y esa fue la falencia, nada se dijo al respecto.

Sobre los predios de 4 personas que ascienden a \$700 millones, se trató de justificar la falta de actuación respecto de la sociedad Berlin, pero tales actuaciones están calendadas en noviembre de 2023; respecto de la Parcelación los Pinos se hizo cuando se revisó el soporte traído, el análisis de sus inconsistencias; se alude al supuesto éxito de la gestión de cartera por un acuerdo de pago con Fidufes, que está en trámite, porque se dieron 2 años para el pago y falta una persona jurídica que no está, sin gestión ni identificación.

En el siguiente cuadro se identificaron 4 personas naturales con deudas por mas de \$500 millones sin gestión, respecto de los cuales se trajeron las liquidaciones (no los mandamientos ejecutivos) de 6 predios, pero no aparecen vinculadas todas las vigencias que aparecen en el cuadro, en donde se gestionó hasta la liquidación hace 2 años, los que están en amarillo, es menester recordar que lo que interrumpe la prescripción es la notificación del Mandamiento de Pago y no, la emisión de la liquidación que es lo que hay a la fecha:

Personas Naturales (4)						
Pedio	Identificación	Dirección	Periodo	Predial Unificado	Int. Predial Unificado	Total, sin identificar
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2018	10.211.984	12.837.567	23.049.551
000000011241816	1130596172	PARCELACION FLORENCIA LO 62	2020	10.744.000	7.339.146	18.083.146
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2020	10.156.770	6.938.013	17.094.783
000000011241816	1130596172	PARCELACION FLORENCIA LO 62	2021	18.165.440	7.622.128	25.787.568
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2021	12.030.702	5.048.022	17.078.724
000000040003000	38863025	ARIZONA	1998	5.180.780	21.554.739	26.735.519

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

000000040003000	38863025	ARIZONA	1999	5.672.960	22.402.292	28.075.252
000000040003000	38863025	ARIZONA	2000	6.240.256	23.322.333	29.562.589
000000040003000	38863025	ARIZONA	2001	6.240.256	22.002.144	28.242.400
000000040003000	38863025	ARIZONA	2002	6.365.062	21.095.598	27.460.660
000000040003000	38863025	ARIZONA	2003	6.587.834	20.440.204	27.028.038
000000040003000	38863025	ARIZONA	2004	7.207.572	20.838.244	28.045.816
000000040003000	38863025	ARIZONA	2005	7.387.764	19.796.252	27.184.016
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2011	6.227.448	20.734.462	26.961.910
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2012	6.414.276	19.669.541	26.083.817
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2013	6.606.708	18.362.275	24.968.983
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2014	6.804.912	16.895.970	23.700.882
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2015	7.009.056	15.374.825	22.383.881
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2016	8.761.320	16.580.010	25.341.330
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2017	9.915.000	15.546.212	25.461.212
000000040868000	14887979	LOTE 2	2019	5.241.797	5.056.355	10.298.152
000000010826809	14942909	LOS ALPES LO Y	2019	9.860.940	9.512.085	19.373.025
000000040868000	14887979	LOTE 2	2020	5.399.053	3.688.053	9.087.106
000000040868000	14887979	LOTE 2	2021	6.395.182	2.683.386	9.078.568
	Totales en riesgo de prescripción			190.827.072	355.339.856	546.166.928

Así que no es cierta la información que señala el sujeto de control como de trámite total de lo que aquí se manifestó. Eso por cuanto las liquidaciones no comprenden todo lo señalado, ni se ha gestionado eficientemente el cobro coactivo, para interrumpir los términos de la prescripción, acorde a lo dispuesto en el Estatuto Tributario Nacional:

“ARTÍCULO 817. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. <Artículo modificado por el artículo 53 de la Ley 1739 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, o de los servidores públicos de la respectiva administración en quien estos deleguen dicha facultad y será decretada de oficio o a petición de parte”

Se modificará en un único párrafo, el que está previo al cuadro No. 39, que quedará del siguiente tenor: “...En el siguiente cuadro, vemos que no se realiza la depuración de la cartera, en donde se observan varios predios, con cuyos recursos se está contando, sin embargo, no se observó gestión:”

Frente a la información aportada en el cuadro No. 41, no se hizo ajuste porque no se señaló con claridad cuales predios quedaron incluidos en el acuerdo de pago, no se modificará.

Habida cuenta de los hechos expuestos y ante la falta de soportes de las actuaciones en torno a los hechos señalados se sostendrá la observación y pasará a ser un hallazgo de idénticas connotaciones.

21.Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria - Procedimientos y gestión del riesgo

Condición (situación detectada de incumplimiento)

En el Municipio se hizo evidente, que no se trabajó en la creación y seguimiento de procesos y procedimientos, que permitieran escindir las obligaciones existentes en las distintas dependencias, especialmente en lo atinente a: La contratación, defensa jurídica, cobro de ingresos tributarios y planeación de la entidad. Ante la inexistencia de tales derroteros se constituyen elevados riesgos que, sin estar contemplados para la vigencia, se materializaron, ante la falta de coordinación entre las diferentes secretarías y la alta dirección.

La gestión del riesgo fue omitida por parte de la secretaría de planeación y cada dependencia omitió el deber de realizar seguimiento a los riesgos propios, con el fin de crear mecanismos para su control. Pues más allá del cumplimiento en la publicación del mapa de riesgos, se trata de controlar materialmente los procedimientos que se realizan al interior de cada secretaría en pro del interés general.

Criterio y fuente de criterio

Constitución Nacional, artículos 6; 209 y 315 numeral 3; Ley 498 de 1998, artículos 3 y 4; caracterización del proceso y procedimientos contratación pública del municipio; Decreto 1083 de 2015, artículos 2.2.1.4.1; 2.2.2.2.1; 2.2.2.6.1.

Causa

Errores de planeación estratégica y del proceso de contratación, que implica que no se desarrollan procedimientos y controles a pesar de las disposiciones legales.

21.Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria - Procedimientos y gestión del riesgo

Efecto

Realización de funciones sin parámetros de control, que incrementan los riesgos de la gestión de administración.

Los hechos descritos originan un Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, que genera la aplicación de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

OBSERVACIÓN 21: Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria - Procedimientos y gestión del riesgo.

Parte de este hallazgo se tratará con la respuesta del hallazgo 22, en referencia a los procedimientos que se deben desarrollar para defender los intereses y derechos del Municipio de Calima El Darién ante cualquier actuación judicial y/o administrativa y el fortalecimiento de las políticas de daño antijurídico y defensa judicial, igualmente con la atención y realización

de seguimiento a los riesgos de cada proceso y actuaciones administrativas.

La Administración Municipal tiene planteada la modernización administrativa a través del proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” y allí se encuentra la dependencia el ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. SECRETARIA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN:

PROCEDIMIENTO DEFENSA JUDICIAL Y TRÁMITE DE CONCILIACIONES

PREJUDICIALES, que actualmente cursa su estudio y debate en el Concejo Municipal, una vez se haya creado como acuerdo municipal, se tendrán las bases fundamentales para que la Secretaría cuando sea creada, cuente con un equipo de trabajo permanente que pueda desarrollar las funciones propias de esa la misma

No se acepta la incidencia disciplinaria, cuando lo que se está buscando es la normalización del funcionamiento de la defensa judicial, y de las actividades contractuales que desarrolla el municipio, debe entenderse entonces que no existe ilicitud en la conducta de los servidores públicos que tienen a su cargo la defensa jurídica, contratación, cobro de ingresos tributarios de la entidad,

Frente a las debilidades indicadas en la presente observación, El Municipio de Calima Darién para el plan de mejoramiento, deberá desarrollar la construcción de los procedimientos para el pago de sentencias y conciliaciones y procedencia de la acción de repetición, como el procedimiento de Defensa Jurídica, como se ha indicado en la respuesta del hallazgo 22, incorporando una vez establecidas dos (2) capacitaciones tendientes a

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

lograr por parte de sus servidores públicos del Municipio Calima El Darién, el conocimiento, la cultura del manejo y control del mapa de riesgos establecidos en el Municipio, como la necesidad y desarrollar los procedimientos de conciliación y defensa judicial.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Previamente a determinar si se sostiene o no la observación se hará revisión de los elementos traídos a la contradicción para su estudio:

Auditoría Contraloría Vigencia 2022-20231110T203019Z-001.zip

Archivo Órdenes Herramientas Favoritos Opciones Ayuda

Añadir Extraer en Comprimir Ver Eliminar Buscar Asistente Información Buscar virus Comentario auto extraíble

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
Carpeta de archivos					
09SentenciaTutela(23-362)BANCOLOMBIA.pdf	331.855	328.286	Microsoft Edge PDF...	01/11/2023 13:32	1882771D
Auto218AdmiteTutela 2023-003820Davivienda.pdf	78.889	64.413	Microsoft Edge PDF...	23/10/2023 8:18	EB133CDB
Respuesta Banco Davivienda C 1-38851634654.pdf	146.331	140.673	Microsoft Edge PDF...	26/10/2023 8:42	A031A80A
RespuestaBancolombia.pdf	278.684	250.112	Microsoft Edge PDF...	06/11/2023 13:00	D6A56593

Los archivos que se trajeron son de una sentencia de tutela en donde se declara el hecho superado, el auto de admisión de tutela de la sentencia contra el Banco Davivienda; las respuestas del Banco de Davivienda en donde no se observa, el origen del embargo y otra de Bancolombia en donde señala que no hubo embargo de la cuenta.

Ahora bien, frente a los hechos de la observación el municipio procede a manifestar que parte del “hallazgo” se tratará en la respuesta de la observación siguiente. Que se tiene planeada la modernización administrativa, que cursa para estudio y debate del Concejo Municipal. Manifiestan no aceptar la incidencia disciplinaria porque se está buscando la normalización de la defensa judicial, que por tanto no existe ilicitud en la conducta de los servidores públicos comprometidos en los temas señalados.

También se acota que dentro del plan de mejoramiento, se deberá desarrollar la construcción de procedimientos y dos capacitaciones tendientes a lograr el manejo y control del mapa de riesgos.

Frente a estos hechos que se cuentan, no hay nada que decir, pues es libre la administración de planear las acciones de mejora que a bien tenga.

No obstante, ello no justifica la omisión del deber de generar los procedimientos de aquellas actuaciones de cada dependencia, de la falta de gestión del riesgo por secretarías, de la falta de control en ausencia de procedimientos acorde a las funciones múltiples que tiene cada dependencia; lo que no corresponde al devenir normal de la administración del municipio, por tanto, intrínseco a la función administrativa.

Frente a la responsabilidad de los funcionarios públicos se pronunció la Corte Constitucional en sentencia SU259 de 2021, en donde señala: “**Los servidores y ex-servidores públicos, de los particulares que cumplen funciones públicas y de los contratistas de la administración, que con su actuar doloso o gravemente culposos, hayan causado un daño antijurídico imputable, en principio, al Estado**”^[53].

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

51. La Corte ha definido la acción de repetición como el medio judicial idóneo que la Constitución y la ley le otorgan a la Administración Pública para obtener de sus funcionarios o exfuncionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer como resultado de una condena de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por los daños antijurídicos que haya causado^[54]. En la sentencia C-832 de 2001 determinó que la acción de repetición, además de proteger el patrimonio y la moralidad administrativa, estimula el correcto ejercicio de la función pública:

“Por último, es importante resaltar que la acción de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, como lo señala el artículo 2 de la Constitución Política. “Si el legislador no hubiese creado mecanismos procesales para poder vincular a los funcionarios con el objeto de determinar si su conducta dolosa o gravemente culposa es la causa de la condena impuesta por el juez a la entidad, el Estado se encontraría sin herramientas para la defensa de la integridad de su patrimonio y para preservar la moralidad pública.”

52. Asimismo, el Consejo de Estado ha identificado que **“un efecto indirecto de esta acción se dirige a la reducción del manejo indebido de los dineros y bienes públicos, pues este mecanismo procesal se establece como la herramienta propicia para que las entidades públicas actúen contra los agentes que por conductas arbitrarias han generado una condena en contra del Estado, más aún, cuando se cuenta con la posibilidad de perseguir, directamente, su patrimonio, a través de medidas cautelares o de la ejecución de la sentencia”**. Bajo esa perspectiva “cuando una entidad pública interpone una acción de repetición, ejerce el derecho constitucional de acudir a la jurisdicción, para efectos de subsanar el desmedro patrimonial acaecido en razón del pago indemnizatorio realizado”^[55].

53. Tanto esta corporación como el Consejo de Estado^[56] coinciden en sostener que la acción de repetición no tiene por objeto medular imponer una sanción, sino que ella tiene “un carácter reparatorio o resarcitorio”^[57]. Su objeto consiste en “obtener el reembolso para el erario público de sumas de dinero pagadas como consecuencia del daño antijurídico ocasionado por un servidor estatal”^[58]. No obstante, si bien la acción de repetición es de carácter resarcitorio civil, también tiene funciones retributiva y preventiva^[59]. Tales características, sostiene la Corte, resultan relevantes a efectos de atender las tensiones que se derivan en su aplicación^[60]. Igualmente han precisado que la acción de repetición se caracteriza por ser subsidiaria^[61], subjetiva^[62] y sujetarse a criterios de proporcionalidad^[63].

54. De esta manera debe la Corte en esta ocasión enfatizar en que, si bien se trata de una acción con la finalidad específica de reintegrar al patrimonio del Estado lo pagado, ello no conspira con la necesidad de analizar toda la temática que gira a su alrededor con la lupa de tratarse del análisis de una **conducta humana reproachable. En esa medida todos los principios que se despliegan en un análisis de conducta son necesaria e imprescindiblemente aplicables. De no ser así, no se hubiera tomado el trabajo el constituyente originario de exigir dolo o culpa grave en el artículo 90 superior. De suerte que impera observar, caso a caso, si la persona de quien se predica la posible responsabilidad, conocía los hechos que realizaba y quería su realización, o dicho de otro modo, actuó con conciencia y voluntad de realizar una conducta, la cual a su vez**

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

trasgrede el catálogo funcional que juró cumplir (art 122.2 C.Pol.) al asumir el cargo. Igualmente es posible que esa responsabilidad se predique, no ya por la comparecencia de dolo, sino porque se ha actuado de manera contraria a las normas objetivas de cuidado en el ejercicio de la función concernida en cada caso.

55. En síntesis, la acción de repetición tiene por objeto (i) proteger el patrimonio público frente a las conductas dolosas o gravemente culposas de los agentes del Estado y (ii) preservar la moralidad administrativa, por medio de la reacción frente a las acciones desviadas, negligentes o sumamente imprudentes de los funcionarios. Ha precisado, en todo caso, que dicha acción no tiene como propósito (iii) imponer cargas desproporcionadas a quien asume el ejercicio del servicio público^[64].

56. Conforme a lo anterior, la acción de repetición debe aplicarse a la luz de los diversos mandatos constitucionales que puedan encontrarse en colisión^[65]. En ese sentido, la aplicación de la figura exige una labor de ponderación a efectos de valorar la atribución de responsabilidad a título de dolo o culpa grave^[66] y establecer el remedio procedente^[67].

c) Características de la consagración constitucional de la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado

57. Como se indicó antes, la comprensión constitucional de la acción de repetición ha permitido su caracterización a efectos de entender que se trata de una acción (i) subsidiaria, dado que “su procedencia está restringida a los eventos en los que la administración sea efectivamente condenada a pagar una indemnización por el daño antijurídico causado con dolo o culpa grave por parte de uno de sus agentes”; (ii) subjetiva, pues “depende de la demostración de que el daño que debió indemnizar el Estado fue causado con dolo o culpa grave por parte de uno de sus funcionarios, por lo que no cualquier equivocación o descuido permite que se ejecute la acción de regreso, pues se requiere que ante la autoridad competente se acredite plenamente que la conducta que derivó en el menoscabo obedeció a un supuesto de imprudencia calificada o de arbitrariedad”; y (iii) se sujeta a criterios de proporcionalidad de modo que la repetición al agente del Estado - por el valor de la indemnización que debió ser asumida por la administración- debe efectuarse sin incurrir en excesos^[68]. La mencionada ponderación entre principios constitucionales debe llevarse a cabo en el ejercicio de la acción de repetición, tanto en “(i) la valoración de la atribución de responsabilidad a título de dolo o culpa grave (elemento subjetivo), como en la formulación (ii) del remedio previsto, cual es el regreso de lo pagado por el Estado”^[69].

...

Jurisprudencia del Consejo de Estado

59. La Ley 678 de 2001 reglamenta actualmente la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o del llamamiento en garantía con fines de repetición. Sin embargo, sus disposiciones no son aplicables a hechos ocurridos antes de su vigencia^[73]. En estos casos, ha dicho el Consejo de Estado, es necesario acudir a lo previsto en los artículos 77 y 78 del Decreto Ley 01 de 1984^[74]. Debido a esta circunstancia, esa Corporación ha previsto reglas distintas para cada uno de los regímenes normativos en lo que respecta a la determinación del dolo y la culpa grave de los agentes del Estado^[75].

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

60. En lo concerniente a los hechos ocurridos antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001, el Consejo de Estado ha tenido en cuenta lo previsto en el artículo 63 del Código Civil frente a la culpa grave y el dolo^[76]. Además, ha reconocido que esas previsiones deben armonizarse con los artículos 6 y 91 de la Constitución, así como con los conceptos de buena y mala fe que en esta se mencionan^[77], y que en su aplicación es necesario dimensionar las “características particulares del caso”^[78]. En este sentido, ha establecido que los jueces al examinar la culpa grave y el dolo no deben “limitarse a tener en cuenta únicamente la definición que de estos conceptos trae el Código Civil referidos al modelo del buen padre de familia para establecerla por comparación con la conducta que en abstracto habría de esperarse del ‘buen servidor público’”^[79], sino que deben conciliarla con esos artículos de la Constitución...” (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

Acorde con lo anterior, ha señalado el Consejo de Estado en su Sección Segunda, Subsección B, Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, 14 de agosto de 2020; radicación No. 25000-23-42-000-2017-00876-01(4811-19):

“Conforme al artículo 209²⁰ de la Constitución Política, establece que la función administrativa tiene como fin el interés general y esta debe llevarse a cabo con sujeción a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, de manera que las autoridades administrativas deben realizar y coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Sumado a esto, la mencionada norma fundamental fijó un control sobre las actuaciones de la administración que debe encuadrar en los preceptos de responsabilidad fijados en sentido amplio, es decir, la infracción de la constitución y las leyes, tal como lo establece el artículo 6. C.N.²¹; además del incumplimiento de las funciones fijadas en la Ley o reglamentos específicos, tal como lo dispuso el artículo 122 de la norma Ibídem²².

En este orden de ideas, los mencionados funcionarios adquieren responsabilidad disciplinaria en el desempeño de sus deberes funcionales, dependiendo la asunción de competencias asignadas. En consecuencia, conforme a lo dispuesto por la Ley 734 de 2002²³, aquellos son sujetos disciplinables con la obligación de garantizar la función pública, tal como disponen los artículos 22 y 23 de la citada norma:

«[...] ARTÍCULO 22. GARANTÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. El sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

ARTÍCULO 23. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento. [...]»

En este orden de ideas, es necesario precisar que la finalidad de la Ley 734 de 2002 es la de garantizar el cumplimiento de los fines y funciones del Estado respecto a las conductas de los servidores públicos que los afecten o pongan en peligro, a través de la acción disciplinaria. Al respecto, a través de la Sentencia C-948 de 2002, la Corte Constitucional, sostuvo: «[...] las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública. [...]».

El derecho disciplinario como expresión de la facultad sancionatoria del Estado observa los postulados propios del debido proceso, de manera que en atención a su naturaleza y bienes jurídicos protegidos deben observarse principios como el de legalidad y tipicidad que la conducta que constituye falta disciplinaria y, en consecuencia, sanción, previamente, haya sido consagradas por el legislador. Sin embargo, no puede desconocerse que en el ámbito del derecho disciplinario la descripción de la conducta sancionable requiere una interpretación flexible, ya que, generalmente, la norma disciplinaria no es autónoma y exige recurrir a cuestiones reglamentadas en normas específicas relativas a la materia.

De esta manera, toda vez que en el derecho disciplinario la conducta sancionable tiene que ver con el desconocimiento del servidor público ya sea de sus deberes, prohibiciones o el régimen de incompatibilidades e inhabilidades, la precisión de la conducta típica no es igual a la del derecho penal, en tanto que la misma se estructura a través del complemento normativo que rige la actividad, por lo que las faltas se consagran en tipos abiertos, lo que se justifica en «[...] la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos donde se subsuman todas aquellas conductas que están prohibidas a las autoridades o de los actos antijurídicos de los servidores públicos²⁴ [...]».

Así pues, en el presente asunto se evidencia que la falta atribuida al demandante se estructuró de la siguiente manera. La conducta imputada al señor Juan Bautista Hernández Rodríguez constituyó una vulneración de las siguientes disposiciones de la Ley 734 de 2002:

«[...] ARTÍCULO 23. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento.

ARTÍCULO 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.

*Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.
[...]*

21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.

22. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.

[...]" (Negrilla y subrayado fuera del texto original). Es con fundamento en estas decisiones en donde se evidencia que por acción u omisión hay lugar a una presunta responsabilidad disciplinaria de los funcionarios de las dependencias en cita.

Por las razones expuestas, se confirma la observación y pasa a ser un hallazgo de idéntico contenido literal.

22.Observación Administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria –Defensa Judicial y Administrativa del Municipio - Comité de Conciliación

Condición (situación detectada de incumplimiento)

Se pudo observar en la auditoría que no se tiene una línea de base jurídica real, que permita que el municipio realice una adecuada cuantificación de los saldos en contra, producto de sentencias adversas, pues no existe aún a la fecha, información confiable en tal sentido. Por tanto, lo provisto tampoco tiene incidencia real frente a lo adeudado. Se constató que una cuenta muy importante producto de transacción se encontraba desfasada en miles de millones de pesos, con el agravante de no ser la única cuenta pendiente de pago por parte del Municipio.

En sitio se pudo constatar que existen al menos dos cuentas embargadas, cuyo demandante se desconoce, y que no fue objeto de seguimiento a pesar de tratarse de embargos de la vigencia 2022.

De otra parte, se evidenció que en el ítem de inventarios de bienes inmuebles existe un desfase considerable entre los bienes que verdaderamente hacen parte del municipio y aquellos que se tienen registrados para como tales. Es más, en la actualidad se encuentran embargados 30 inmuebles, medidas que datan de varios años, sin que ninguna de las administraciones a cargo, haya indagado por tales circunstancias, a saber:

22.Observación Administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria –Defensa Judicial y Administrativa del Municipio - Comité de Conciliación

Cuadro No. 61

Bienes Inmuebles del Municipio de Calima EL Darién Embargados por más de 10 años			
000000010007000	51766	LA PRIMAVERA	373-2805
000000010227000	51939	SAN JOSE	373-96480
000000012088813	51778	LLANITOS	373-82941
000000012089813	51779	LLANITOS	373-82942
000000012095813	51780	LLANITOS	373-82948
000000012097813	51781	LLANITOS	373-82950
000000012098813	51782	LLANITOS	373-82951
000000012099813	51783	LLANITOS	373-82952
000000012100813	51784	LLANITOS	373-82953
000000012101813	51785	LLANITOS	373-82954
000000012102813	51786	LLANITOS	373-82955
000000020139000	51772	LA CRISTALINA	373-21237
000000030100000	51833	LA GAVIOTA	373-90991
000000012354000	55080	EL VERGEL	373-101881
010055000000000	55087	VEREDA SAN JOSE	373-13647
000000010007000	51766	LA PRIMAVERA	373-2805
000000030105000	51937	JIGUALES	373-71954
000000030158000	51831	LA GUAIRA	373-71962
000000030314000	51832	LA RIVERA	373-71926
000000040203000	51941	LA PRIMAVERA	373-71972
010002370011000		PARCELACION CALAMAR	373-57604
010002480002000	51786	VEREDA SAN JOSE	373-57546
010002480003000	51795	VEREDA SAN JOSE	373-57554
010002480004000	51794	VEREDA SAN JOSE	373-57553
010002480005000	51793	VEREDA SAN JOSE	373-57552
010002480006000	51792	VEREDA SAN JOSE	373-57551
010002480007000	51791	VEREDA SAN JOSE	373-57550
010002480008000	51790	VEREDA SAN JOSE	373-57549
010002480009000	51789	VEREDA SAN JOSE	373-57548
010002480010000	51787	VEREDA SAN JOSE	373-57547

Algunos de los embargos son del departamento del Valle del Cauca, otros de la Nación – Ministerio de Hacienda, a pesar de llevar más de 10 años tales embargos, hasta la fecha se ha hecho caso omiso del deber de cuidado y no se ha indagado el estado del cobro que conllevó al embargo de los inmuebles, es decir no se realizó defensa jurídica idónea.

Se evidenció que no se realizaron las reuniones del comité de conciliación en la forma y términos de ley, pues no se dieron en la periodicidad, determinada por la ley, tampoco se están emitiendo lineamientos en materia de defensa jurídica de la entidad que permitan un derrotero claro de las actuaciones a seguir en cuanto a los procesos en contra.

22.Observación Administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria –Defensa Judicial y Administrativa del Municipio - Comité de Conciliación

Criterio y fuente de criterio

Constitución Nacional, artículo 6; Ley 498 de 1998, artículos 3 y 4; Decreto 1069 de 2015, artículos 2.2.4.3.1.2.4, 2.2.4.3.1.2.5 y 2.2.4.3.1.2.6.

Causa

Desconocimiento normativo, sobre implicaciones y alcances de la defensa jurídica del municipio, así como omisión de los deberes a cargo.

Efecto

Riesgos por pago de intereses y sanciones al municipio, que pueden lesionar el marzo de mediano plazo del municipio y los intereses de la comunidad.

Las conductas descritas generan una observación de índole administrativa con presunta incidencia disciplinaria, a la luz de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019 numeral 1, Artículos 38 y 39.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

OBSERVACIÓN 22: Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria – Defensa Judicial y Administrativa del Municipio - Comité de Conciliación.

La administración Municipal a través de la Contratación de Abogados ha venido desarrollando la defensa judicial del municipio de Calima Darién, en la actualidad se encuentra revisando la información encontrada dentro de los expedientes, para realizar actualización de los mismos, consultando en las plataformas para la actualización y conocimiento de nuevos procesos, con el objeto de actuar de manera diligente en cada uno de ellos en la defensa jurídica del municipio.

Igualmente se encuentra actuando frente a la información de las cuentas embargadas, se debió presentar tutelas a los bancos para obtener la información correspondiente, toda vez que ellos no están contestando a los requerimientos de información, las mismas tienen los radicados No. 76-126-40-89-001-2023-00362-00 (Tutela Bancolombia - Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Calima El Darién - Valle), y No. 76-606-40-89-001-2023-00383-00 (Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Restrepo - Valle) información que se aporta dentro del presente documento.

Así mismo a través de apoderado se encuentra actuando dentro de los procesos en las diferentes audiencias y contestación de requerimientos.

Ante la importancia de una modernización del cumplimiento de los fines esenciales del Estado como es la servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones a cargo del municipio de Calima el

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Darién ha presentado el proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN, Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES” y allí se encuentra la dependencia el ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. SECRETARÍA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN:

PROCEDIMIENTO DEFENSA JUDICIAL Y TRAMITE DE CONCILIACIONES PREJUDICIALES, que tiene como funciones

1. Representar judicial, extrajudicial y administrativamente al Municipio, en los procesos que se instauran en su contra o que ésta deba promover, mediante poder judicial o delegación otorgada por el alcalde.
2. Apoyar y asesorar jurídicamente a las diferentes dependencias de la administración municipal, con el fin que en el desarrollo de sus actuaciones y acciones se encuentren dentro del marco legal.
3. Expedir conceptos jurídicos que interesan y coadyuvan en el desarrollo de la gestión de las diferentes dependencias de la administración municipal.
4. Proyectar, revisar y avalar los proyectos de actos administrativos generados por las diferentes dependencias que conforman la administración municipal, que deba suscribir el alcalde.
5. Sustanciar los proyectos de decisiones que deba proferir el alcalde en el curso o como consecuencia de los procesos o actuaciones administrativas.
6. Formular e implementar políticas internas para asegurar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias y disposiciones de las políticas del Modelo Integrado de Planeación Y Gestión – MIPG.
7. Formular, dirigir, coordinar, controlar y vigilar el desarrollo contractual en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y postcontractual) de acuerdo con las normas de contratación pública vigente.
8. Conceptuar sobre las diferentes inquietudes, solicitudes, reclamos referentes a la contratación estatal del municipio.
9. Mantener actualizado el sistema de información contractual de acuerdo con las normas vigentes.
10. Desarrollar y evaluar la política normativa y de gestión de la contratación del Municipio.
11. Elaborar y mantener actualizado el manual de contratación del Municipio y realizar las acciones para asegurar su cumplimiento.
12. Garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación pública (SECOP) a través del Portal Único de Contratación o por el medio que señale el Gobierno Nacional

Frente a la indicación de los predios embargados ellos hacen referencia a embargos por Jurisdicción Coactiva por parte de la Nación a través de la Resolución 1985 del 2010 emanada del Ministerio de Hacienda y embargo por jurisdicción coactiva por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Tesorería General, oficio TGD3917 de 2010 de la Gobernación del Valle,

El predio 37357604 no tiene anotaciones de embargo ni gravámenes a la propiedad,

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

El Predio 373-2805 es propiedad de la Gobernación del Valle, el municipio de Calima El Darién lo tiene embargado al Departamento por Jurisdicción Coactiva

El Municipio de Calima Darién en el plan de mejoramiento, se construirá el procedimiento para el pago de sentencias y conciliaciones y procedencia de la acción de repetición, como el procedimiento de Defensa Jurídica.

Igualmente, para el plan de mejoramiento realizará la revisión de cada uno de los predios indicados en el informe preliminar de la Auditoría de Gestión, con el objeto de establecer las razones del embargo, como la no actuación por parte del accionante, y determinar las medidas a tomar frente a la recuperación de los inmuebles mentados. En el antes dicho informe

Para concluir esta observación, la Administración Municipal de Calima El Darién (V), no acepta la incidencia disciplinaria, toda vez que no existe ilicitud de la conducta, .no se encuentra afectando el deber funcional, no existe antijuridicidad pues esta no se limita a la sola adecuación típica de la conducta, porque no se está afectado la buena marcha de la función pública, ni el cumplimiento de los fines del Estado, aunque hipotéticamente se pensará que se encaja dentro de un tipo disciplinario, no existe una trascendencia tal en relación con la funciones del Municipio de Calima El Darién

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Previamente a determinar si se sostiene o no la observación se hará revisión de los elementos traídos a la contradicción para su estudio:

Auditoría Contraloría Vigencia 2022-2023 110T203019Z-001.zip

Archivo Ordenes Herramientas Favoritos Opciones Ayuda

Añadir Extraer en Comprobar Ver Eliminar Buscar Asistente Información Buscar virus Comentario auto extraíble

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
ACTO ADMINISTRATIVO POR EL CUAL SE ESTABLECE LA ESCALA SALARIAL CALIMA EL DA...	27.356	27.361	Carpeta de archivos	06/11/2023 8:29	CF8E857
Exposición de motivos PROYECTO DE ACUERDO ESTRUCTURA ORGANICA.docx	2.050.671	2.050.988	Documento de Mi...	06/11/2023 8:30	97136300
Exposición de motivos PROYECTO DE ACUERDO ESCALA SALARIAL.docx	2.046.634	2.046.948	Documento de Mi...	06/11/2023 8:29	887D3FBE
PORTADA.pdf	2.205.002	2.176.822	Microsoft Edge PD...	06/11/2023 8:30	5CC97604
rediseño Calima El Darién (1).pdf	4.717.987	3.945.200	Microsoft Edge PD...	06/11/2023 8:30	75F8135E

Se trajeron para su evaluación, un acto administrativo que establece escala salarial del municipio, exposición de motivos sobre los proyectos de acuerdo de estructura orgánica y escala salarial, la portada y el rediseño del municipio.

Ahora bien, adentrándonos en las premisas de la defensa tenemos lo siguiente: La información pertinente a la defensa judicial del municipio, no tenía que estar siendo revisada, ni encontrada dentro de los expedientes, recordemos que en cada vigencia se han realizado suficientes contrataciones como para que la información estuviera clara y actualizada, desafortunadamente por inadecuado seguimiento, no es así.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Se observó que se contesta y tramita lo urgente, pero se descuida lo necesario, y viene la administración postergando pagos, manejando en una balanza la situación financiera versus las condenas que se tramitan ante distintas instancias para el pago.

El llamado de la observación no era justificar lo injustificable, pues las omisiones son evidentes, era centrar la mirada sobre las falencias a tratar, para que la administración fije derroteros a seguir. De lo traído como pruebas, nada desestima la falta de actuación de las administraciones, no solo frente a la defensa judicial, sino frente a los bienes embargados, que ya se conoció al menos quien los embarga, pero a la fecha no se tiene ni idea, de cual es el monto al que ascienden tales obligaciones, para entrar a solucionar.

Nada se dijo en torno a la falta de las reuniones periódicas y mensuales del Comité de Conciliación, instancia encargada de velar por la defensa jurídica del municipio.

Frente a la responsabilidad de los funcionarios públicos se pronunció la Corte Constitucional en sentencia SU259 de 2021, en donde señala: **“Los servidores y ex-servidores públicos, de los particulares que cumplen funciones públicas y de los contratistas de la administración, que con su actuar doloso o gravemente culposo, hayan causado un daño antijurídico imputable, en principio, al Estado”**^[53].

51. La Corte ha definido la acción de repetición como el medio judicial idóneo que la Constitución y la ley le otorgan a la Administración Pública para obtener de sus funcionarios o exfuncionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer como resultado de una condena de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por los daños antijurídicos que haya causado^[54]. En la sentencia C-832 de 2001 determinó que la acción de repetición, además de proteger el patrimonio y la moralidad administrativa, estimula el correcto ejercicio de la función pública:

“Por último, es importante resaltar que la acción de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, como lo señala el artículo 2 de la Constitución Política. “Si el legislador no hubiese creado mecanismos procesales para poder vincular a los funcionarios con el objeto de determinar si su conducta dolosa o gravemente culposa es la causa de la condena impuesta por el juez a la entidad, el Estado se encontraría sin herramientas para la defensa de la integridad de su patrimonio y para preservar la moralidad pública.”

52. **Asimismo, el Consejo de Estado ha identificado que “un efecto indirecto de esta acción se dirige a la reducción del manejo indebido de los dineros y bienes públicos, pues este mecanismo procesal se establece como la herramienta propicia para que las entidades públicas actúen contra los agentes que por conductas arbitrarias han generado una condena en contra del Estado, más aún, cuando se cuenta con la posibilidad de perseguir, directamente, su patrimonio, a través de medidas cautelares o de la ejecución de la sentencia”.** Bajo esa perspectiva “cuando una entidad pública interpone una acción de repetición, ejerce el derecho constitucional de acudir a la jurisdicción, para efectos de subsanar el desmedro patrimonial acaecido en razón del pago indemnizatorio realizado”^[55].

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

53. Tanto esta corporación como el Consejo de Estado^[56] coinciden en sostener que la acción de repetición no tiene por objeto medular imponer una sanción, sino que ella tiene “un carácter reparatorio o resarcitorio”^[57]. Su objeto consiste en “obtener el reembolso para el erario público de sumas de dinero pagadas como consecuencia del daño antijurídico ocasionado por un servidor estatal”^[58]. No obstante, si bien la acción de repetición es de carácter resarcitorio civil, también tiene funciones retributiva y preventiva^[59]. Tales características, sostiene la Corte, resultan relevantes a efectos de atender las tensiones que se derivan en su aplicación^[60]. Igualmente han precisado que la acción de repetición se caracteriza por ser subsidiaria^[61], subjetiva^[62] y sujetarse a criterios de proporcionalidad^[63].

54. De esta manera debe la Corte en esta ocasión enfatizar en que, si bien se trata de una acción con la finalidad específica de reintegrar al patrimonio del Estado lo pagado, ello no conspira con la necesidad de analizar toda la temática que gira a su alrededor con la lupa de tratarse del análisis de una **conducta humana reprochable**. **En esa medida todos los principios que se despliegan en un análisis de conducta son necesaria e imprescindiblemente aplicables. De no ser así, no se hubiera tomado el trabajo el constituyente originario de exigir dolo o culpa grave en el artículo 90 superior. De suerte que impera observar, caso a caso, si la persona de quien se predica la posible responsabilidad, conocía los hechos que realizaba y quería su realización, o dicho de otro modo, actuó con conciencia y voluntad de realizar una conducta, la cual a su vez trasgrede el catálogo funcional que juró cumplir (art 122.2 C.Pol.) al asumir el cargo. Igualmente es posible que esa responsabilidad se predique, no ya por la comparecencia de dolo, sino porque se ha actuado de manera contraria a las normas objetivas de cuidado en el ejercicio de la función concernida en cada caso.**

55. **En síntesis, la acción de repetición tiene por objeto (i) proteger el patrimonio público frente a las conductas dolosas o gravemente culposas de los agentes del Estado y (ii) preservar la moralidad administrativa, por medio de la reacción frente a las acciones desviadas, negligentes o sumamente imprudentes de los funcionarios-**. Ha precisado, en todo caso, que dicha acción no tiene como propósito (iii) imponer cargas desproporcionadas a quien asume el ejercicio del servicio público^[64].

56. Conforme a lo anterior, la acción de repetición debe aplicarse a la luz de los diversos mandatos constitucionales que puedan encontrarse en colisión^[65]. En ese sentido, la aplicación de la figura exige una labor de ponderación a efectos de valorar la atribución de responsabilidad a título de dolo o culpa grave^[66] y establecer el remedio procedente^[67].

c) Características de la consagración constitucional de la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado

57. Como se indicó antes, la comprensión constitucional de la acción de repetición ha permitido su caracterización a efectos de entender que se trata de una acción (i) subsidiaria, dado que “su procedencia está restringida a los eventos en los que la administración sea efectivamente condenada a pagar una indemnización por el daño antijurídico causado con dolo o culpa grave por parte de uno de sus agentes”; (ii) subjetiva, pues “depende de la demostración de que el daño que debió indemnizar el Estado fue causado con dolo o culpa grave por parte de uno de sus funcionarios, por lo que no cualquier equivocación o descuido permite que se ejecute la acción de regreso, pues se requiere que ante la autoridad competente se acredite plenamente que la conducta que derivó en el

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

menoscabo obedeció a un supuesto de imprudencia calificada o de arbitrariedad”; y (iii) se sujeta a criterios de proporcionalidad de modo que la repetición al agente del Estado - por el valor de la indemnización que debió ser asumida por la administración- debe efectuarse sin incurrir en excesos^[68]. La mencionada ponderación entre principios constitucionales debe llevarse a cabo en el ejercicio de la acción de repetición, tanto en “(i) la valoración de la atribución de responsabilidad a título de dolo o culpa grave (elemento subjetivo), como en la formulación (ii) del remedio previsto, cual es el regreso de lo pagado por el Estado”^[69].

...

Jurisprudencia del Consejo de Estado

59. La Ley 678 de 2001 reglamenta actualmente la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o del llamamiento en garantía con fines de repetición. Sin embargo, sus disposiciones no son aplicables a hechos ocurridos antes de su vigencia^[73]. En estos casos, ha dicho el Consejo de Estado, es necesario acudir a lo previsto en los artículos 77 y 78 del Decreto Ley 01 de 1984^[74]. Debido a esta circunstancia, esa Corporación ha previsto reglas distintas para cada uno de los regímenes normativos en lo que respecta a la determinación del dolo y la culpa grave de los agentes del Estado^[75].

60. En lo concerniente a los hechos ocurridos antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001, el Consejo de Estado ha tenido en cuenta lo previsto en el artículo 63 del Código Civil frente a la culpa grave y el dolo^[76]. Además, ha reconocido que esas previsiones deben armonizarse con los artículos 6 y 91 de la Constitución, así como con los conceptos de buena y mala fe que en esta se mencionan^[77], y que en su aplicación es necesario dimensionar las “características particulares del caso”^[78]. En este sentido, ha establecido que los jueces al examinar la culpa grave y el dolo no deben “limitarse a tener en cuenta únicamente la definición que de estos conceptos trae el Código Civil referidos al modelo del buen padre de familia para establecerla por comparación con la conducta que en abstracto habría de esperarse del ‘buen servidor público’”^[79], sino que deben conciliarla con esos artículos de la Constitución... (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

Acorde con lo anterior, ha señalado el Consejo de Estado en su Sección Segunda, Subsección B, Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, 14 de agosto de 2020; radicación No. 25000-23-42-000-2017-00876-01(4811-19):

“Conforme al artículo 209²⁰ de la Constitución Política, establece que la función administrativa tiene como fin el interés general y esta debe llevarse a cabo con sujeción a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, de manera que las autoridades administrativas deben realizar y coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Sumado a esto, la mencionada norma fundamental fijó un control sobre las actuaciones de la administración que debe encuadrar en los preceptos de responsabilidad fijados en sentido amplio, es decir, la infracción de la constitución y las leyes, tal como lo establece el artículo 6. C.N.²¹; además del incumplimiento de las

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

funciones fijadas en la Ley o reglamentos específicos, tal como lo dispuso el artículo 122 de la norma Ibídem²².

En este orden de ideas, los mencionados funcionarios adquieren responsabilidad disciplinaria en el desempeño de sus deberes funcionales, dependiendo la asunción de competencias asignadas. En consecuencia, conforme a lo dispuesto por la Ley **734** de 2002²³, aquellos son sujetos disciplinables con la obligación de garantizar la función pública, tal como disponen lo artículos **22** y **23** de la citada norma:

«[...] ARTÍCULO 22. GARANTÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. El sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

ARTÍCULO 23. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento. [...]»

En este orden de ideas, es necesario precisar que la finalidad de la Ley 734 de 2002 es la de garantizar el cumplimiento de los fines y funciones del Estado respecto a las conductas de los servidores públicos que los afecten o pongan en peligro, a través de la acción disciplinaria. Al respecto, a través de la Sentencia C-948 de 2002, la Corte Constitucional, sostuvo: «[...] las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública. [...]».

El derecho disciplinario como expresión de la facultad sancionatoria del Estado observa los postulados propios del debido proceso, de manera que en atención a su naturaleza y bienes jurídicos protegidos deben observarse principios como el de legalidad y tipicidad que la conducta que constituye falta disciplinaria y, en consecuencia, sanción, previamente, haya sido consagradas por el legislador. Sin embargo, no puede desconocerse que en el ámbito del derecho disciplinario la descripción de la conducta sancionable requiere una interpretación flexible, ya que, generalmente, la norma disciplinaria no es autónoma y exige recurrir a cuestiones reglamentadas en normas específicas relativas a la materia.

De esta manera, toda vez que en el derecho disciplinario la conducta sancionable tiene que ver con el desconocimiento del servidor público ya sea de sus deberes, prohibiciones o el régimen de incompatibilidades e inhabilidades, la precisión de la conducta típica no es igual a la del derecho penal, en tanto que la misma se estructura a

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

través del complemento normativo que rige la actividad, por lo que las faltas se consagran en tipos abiertos, lo que se justifica en «[...] la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos donde se subsuman todas aquellas conductas que están prohibidas a las autoridades o de los actos antijurídicos de los servidores públicos²⁴ [...]».

Así pues, en el presente asunto se evidencia que la falta atribuida al demandante se estructuró de la siguiente manera. La conducta imputada al señor Juan Bautista Hernández Rodríguez constituyó una vulneración de las siguientes disposiciones de la Ley 734 de 2002:

«[...] ARTÍCULO 23. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento.

ARTÍCULO 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.

*Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.
[...]*

21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.

22. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.

[...]” (Negrilla y subrayado fuera del texto original). Es con fundamento en estas decisiones en donde se evidencia que por acción u omisión hay lugar a una presunta responsabilidad disciplinaria de los funcionarios de las dependencias en cita.

Por las razones expuestas, se confirma la observación y pasa a ser un hallazgo de idéntico contenido literal.

23.Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria – Cesiones Urbanísticas y medio ambiente

Condición (situación detectada de incumplimiento)

Se evidencia una falta de estructura dentro de los expedientes correspondientes a las licencias urbanísticas emanadas del municipio anteriores a la vigencia 2020, de las cuales se desconoce si cumplieron con la obligación de realizar las cesiones gratuitas que ordena la ley, o si se expidieron conforme a los lineamientos legales para todos los efectos. No hay evidencias de seguimiento y control a este respecto.

De otro lado, aunque para la vigencia 2023 se señaló un procedimiento en materia de licencias urbanísticas, se observa la inexistencia de lineamientos frente al tema de las cesiones gratuitas en los términos que señala el legislador, lo que impide conocer si efectivamente se han realizado las entregas correspondientes por parte de los distintos urbanizadores del municipio, sean ellos o no personas naturales o jurídicas. El estado actual de las cesiones a recibir es el siguiente:

Cuadro No. 62

Municipio de Calima El Darién	
Cesiones a recibir	
CEDULA CATASTRAL	URBANIZACION
00-00-0001-2166-000	Urbanización Galilea
00-00-0001-2166-000	Condominio La Riviera
00-00-0229-0004-000	PORTAL DE SAN ISIDRO
00-00-0001-0123-000	VIS FRANCISCO HURTADO

Fuente: Municipio de Calima E Darién

Elaboración: Equipo Auditor

Esta falta de lineamiento, es un riesgo en cuanto a que no se generan controles por parte del municipio en orden a preservar el medio ambiente, como quiera que la zona rural del municipio es parte de la zona de reserva del pacífico, y por tanto, zona de especial protección para el sostenimiento ambiental y de distintos ecosistemas.

Criterio y fuente de criterio

Constitución Nacional, artículo 6, Ley 498 de 1998, artículos 3 y 4; Ley 388 de 1997, artículos 1- 15; 37 y 38

Causa

Falta de procedimientos, que determinen controles para la urbanización en el municipio. Omisión de consultar y estar acorde a los lineamientos de la autoridad ambiental.

Efecto

Riesgos de sostenibilidad ambiental para el municipio, en contra de los intereses a un ambiente sano, para la comunidad.

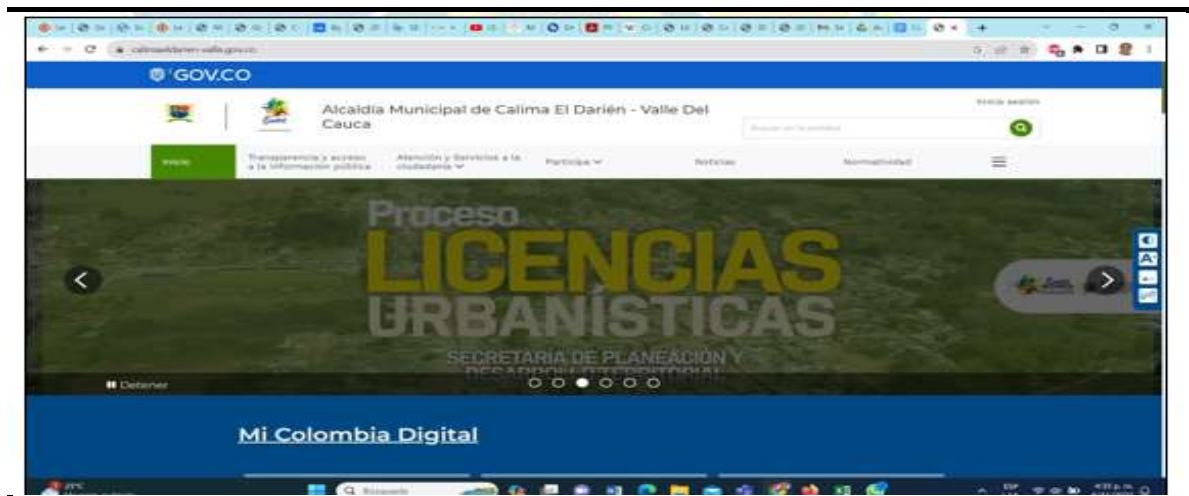
23.Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria – Cesiones Urbanísticas y medio ambiente

Los hechos descritos constituyen una Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 734 de 2002, numeral 1º de los artículos 34 y 35 y Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

OBSERVACIÓN 23: Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria – Cesiones Urbanísticas y medio ambiente.

Desde que se inició este período constitucional, una de las primeras acciones, fue ajustar el proceso de licencias urbanísticas y sus respectivos procedimientos; en la página web de la Alcaldía del Municipio de Calima El Darién consta, en el banner principal, cuya imagen anexamos. Es verificable, la fecha en que se colocó esta imagen, como evidencia del interés municipal por ajustar un proceso que venía presentando muchas contrariedades internas, por la anticultura generada en la Administración anterior y por el desapego a las normas vigentes.



Complementa lo anterior, el siguiente link: <https://www.calimaeldarién-valle.gov.co/procesos-y-procedimientos/proceso-licencias-urbanísticas> el cual indica que fue publicado inicialmente, el pasado 11 de septiembre del 2020, modificado el pasado 28 de abril del 2021, que se ha venido complementando como lo evidenció el Equipo Auditor, con las Actas que pudo examinar, lo cual controvierte, de modo irrefutable, la afirmación realizada en el Informe Preliminar, de que solamente en la presente vigencia 2023, se procedió. lo mismo que deja sin piso, la siguiente afirmación, de que no existían lineamientos frente a las cesiones gratuitas que tenían que hacer los urbanizadores o desarrolladores de copropiedades y condominios.

Por otra parte, lo que identificó el Equipo Auditor respecto de las Licencias Urbanísticas y de Construcción expedidas en el anterior período constitucional, esto es, las anteriores al 1

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

de enero del 2020, esta Administración fue la encargada de denunciar ante los Entes de Control estas irregularidades, como consta en los documentos adjuntos. Incluso en uno de ellos se observa, que un integrante del actual Equipo Auditor hizo parte de una visita realizada en el año 2021.

Esta Administración no sólo socializó en la página web, sino ante la Comunidad en General y ante el Honorable Concejo Municipal, el ajuste en los procedimientos de expedición de Licencias Urbanísticas y de Construcción, y desde luego, en aplicación de los Principios Rectores de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal, hizo la pedagogía de lo que significa la Ley 2 de 1959 en el contexto del Municipio y lo que implicaba la solicitud nuestra de que ellos realizaran el proceso de Sustracción a la Ley 2 de 1959, tal como lo indicaba la Resolución 110 del 2022 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Las reuniones de la Comunidad, se realizaron en varios ambientes, en reuniones con las JAC, con los Veedores, con los Administradores de Copropiedades, y grupos de interés como los ferreteros y constructores, muchas de ellas transmitidas por TV Calima y otras por el canal institucional de Facebook. Como anécdota tenemos, que incluso fue tema de la primera Rendición de Cuentas que realizó esta Administración que se transmitió en directo por Facebook y contó con la presencia del Personero Municipal. Otras sesiones abiertas fueron convocadas por personas representativas de la Comunidad, como el Representante a la Cámara, Doctor Christian Munir Garcés Aljure, motivado por lo que comúnmente se conoce como la orilla de El Lago, que son las Copropiedades, que se formaron desde finales de la década de los 80's y que existe múltiples evidencias que no adelantaron el riguroso proceso de sustracción de la Ley 2 de 1959. Estos últimos sectores de la Comunidad, impulsaron desde la vigencia fiscal 2020 la muy conocida Acción Popular, cuya demandante fue la Procuradora 21 Judicial II Ambiental y Agraria del Valle del Cauca, que incluyó Medidas Cautelares. Esta primera Acción Popular contó con insumos, los numerosos derechos de petición que nos radicaron, y entre otras, las respuestas que le entregamos oportunamente a la Procuradora 21 Judicial II Ambiental y Agraria del Valle del Cauca, sirvió de base para su estructuración, que finalmente, tumbó el Tribunal Contencioso del Valle del Cauca. Al poco tiempo, la misma demandante, la Procuradora 21 Judicial II Ambiental y Agraria del Valle del Cauca, la volvió a presentar, correspondiendo esta vez, al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Guadalajara de Buga adelantar el trámite, bajo el radicado No. 76-11-33- 33-002-2022-00022-00, emitiendo Sentencia el pasado 6 de febrero del 2023, que fue revisada y ajustada por el Tribunal Contencioso del Valle del Cauca. Esta decisión final, abordará alguna de las pretensiones del Equipo Auditor, y otras, que son las pretensiones de la demandante, que significa un largo y arduo camino, por las implicaciones de lo ordenado.

El Honorable Concejo Municipal citó en varias oportunidades a la Secretaría de Planeación a sesiones de Control Político, no sólo para revisar a fondo el tema, como en efecto se hizo, sino para atender varias inquietudes de sectores de la Comunidad, respecto de lo que ellos consideraban nuevos requisitos, y que sólo era la correcta aplicación de la normativa vigente. Respetuosamente solicitamos se sirva solicitar copia de las Actas de todas las sesiones en que se tocó el tema de Licenciamiento en el Municipio. Esta verificación le permitirá concluir que el abordaje fue integral y de muy exhaustiva revisión.

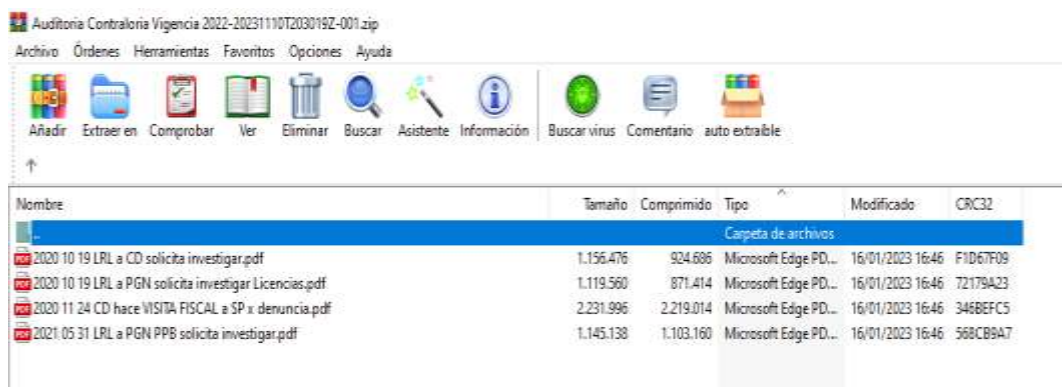
La Administración Municipal no se acepta el hallazgo, porque se puede observar que con el actuar del servidor público no incurrió en una conducta sobre la ILICITUD SUSTANCIAL,

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

que determina que “la conducta del disciplinable será ilícita cuando afecte sustancialmente el deber funcional sin justificación alguna”, es decir que, la Ilícitud Sustancial del servidor público debe ser entendida como una afectación sustancial a los deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de los principios que rigen la función pública, en otros términos, aunque el comportamiento llegare a encuadrarse en un tipo disciplinario, pero se determine que el mismo en nada incidió en la garantía de la función pública y los principios que la gobiernan, deberá concluirse que la conducta está desprovista de ilicitud sustancial.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Se trajeron a la contradicción 4 archivos digitales, que contienen 2 denuncias del 19 de octubre de 2020 y otra de mayo de 2020, de la entonces Secretaria de Planeación Municipal, dirigidas a la Contraloría Departamental y dos de ellas a la Procuraduría Provincial de Guadalajara de Buga, por actuaciones irregulares frente a la expedición de licencias urbanas. El otro archivo es una acta de visita fiscal, de auditores de la Contraloría Departamental.



Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
2020 10 19 LRL a CD solicita investigar.pdf	1.156.476	924.686	Microsoft Edge PD...	16/01/2023 16:46	F1D67F09
2020 10 19 LRL a PGN solicita investigar Licencias.pdf	1.119.560	871.414	Microsoft Edge PD...	16/01/2023 16:46	72179A23
2020 11 24 CD hace VISITA FISCAL a SP x denuncia.pdf	2.231.996	2.219.014	Microsoft Edge PD...	16/01/2023 16:46	346BEFC5
2021 05 31 LRL a PGN PPB solicita investigar.pdf	1.145.138	1.103.160	Microsoft Edge PD...	16/01/2023 16:46	568CB9A7

Revisados los mismos, se procede a examinar el contenido de las premisas de la defensa traída:

Manifiesta el ente territorial haber ajustado el proceso de licencias urbanísticas, hecho que está documentado y publicado, y sobre el que no se hizo reproche, por el contrario se especificó “*Se evidencia una falta de estructura dentro de los expedientes correspondientes a las licencias urbanísticas emanadas del municipio anteriores a la vigencia 2020*”, es decir, las licencias que corresponden a anteriores administraciones; y se continúa: “de las cuales se desconoce si cumplieron con la obligación de realizar las cesiones gratuitas que ordena la ley, o si se expidieron conforme a los lineamientos legales para todos los efectos. No hay evidencias de seguimiento y control a este respecto”, es decir, se solicitaron los soportes del seguimiento y control sobre las cesiones gratuitas que pudieran haberse generado anteriormente, y de las cuales no haya hecho el debido seguimiento la administración municipal, luego se defienden aspectos sobre los que no hay reproche. Luego nada habrá que discutir.

Posteriormente se reitera: “...se observa la inexistencia de lineamientos frente al tema de las cesiones gratuitas en los términos que señala el legislador, lo que impide conocer si

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

efectivamente se han realizado las entregas correspondientes por parte de los distintos urbanizadores del municipio, sean ellos o no personas naturales o jurídicas.”, nuevamente se pretende verificar si se hicieron gestiones tendientes a solucionar los aspectos señalados sobre Cesiones gratuitas, pero ninguno de los soportes entregados tiene relación con el reproche.

Es necesario acotar, que frente a la responsabilidad de los funcionarios públicos se pronunció la Corte Constitucional en sentencia SU259 de 2021, en donde señala: “**Los servidores y ex-servidores públicos, de los particulares que cumplen funciones públicas y de los contratistas de la administración, que con su actuar doloso o gravemente culposo, hayan causado un daño antijurídico imputable, en principio, al Estado**”^[53].

51. La Corte ha definido la acción de repetición como el medio judicial idóneo que la Constitución y la ley le otorgan a la Administración Pública para obtener de sus funcionarios o exfuncionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer como resultado de una condena de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por los daños antijurídicos que haya causado^[54]. En la sentencia C-832 de 2001 determinó que la acción de repetición, además de proteger el patrimonio y la moralidad administrativa, estimula el correcto ejercicio de la función pública:

“Por último, es importante resaltar que la acción de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, como lo señala el artículo 2 de la Constitución Política. “Si el legislador no hubiese creado mecanismos procesales para poder vincular a los funcionarios con el objeto de determinar si su conducta dolosa o gravemente culposa es la causa de la condena impuesta por el juez a la entidad, el Estado se encontraría sin herramientas para la defensa de la integridad de su patrimonio y para preservar la moralidad pública.”

52. Asimismo, el Consejo de Estado ha identificado que “un efecto indirecto de esta acción se dirige a la reducción del manejo indebido de los dineros y bienes públicos, pues este mecanismo procesal se establece como la herramienta propicia para que las entidades públicas actúen contra los agentes que por conductas arbitrarias han generado una condena en contra del Estado, más aún, cuando se cuenta con la posibilidad de perseguir, directamente, su patrimonio, a través de medidas cautelares o de la ejecución de la sentencia”. Bajo esa perspectiva “cuando una entidad pública interpone una acción de repetición, ejerce el derecho constitucional de acudir a la jurisdicción, para efectos de subsanar el desmedro patrimonial acaecido en razón del pago indemnizatorio realizado”^[55].

53. Tanto esta corporación como el Consejo de Estado^[56] coinciden en sostener que la acción de repetición no tiene por objeto medular imponer una sanción, sino que ella tiene “un carácter reparatorio o resarcitorio”^[57]. Su objeto consiste en “obtener el reembolso para el erario público de sumas de dinero pagadas como consecuencia del daño antijurídico ocasionado por un servidor estatal”^[58]. No obstante, si bien la acción de repetición es de carácter resarcitorio civil, también tiene funciones retributiva y preventiva^[59]. Tales características, sostiene la Corte, resultan relevantes a efectos de atender las tensiones que

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

se derivan en su aplicación^[60]. Igualmente han precisado que la acción de repetición se caracteriza por ser subsidiaria^[61], subjetiva^[62] y sujetarse a criterios de proporcionalidad^[63].

54. De esta manera debe la Corte en esta ocasión enfatizar en que, si bien se trata de una acción con la finalidad específica de reintegrar al patrimonio del Estado lo pagado, ello no conspira con la necesidad de analizar toda la temática que gira a su alrededor con la lupa de tratarse del análisis de una **conducta humana reproachable**. **En esa medida todos los principios que se despliegan en un análisis de conducta son necesaria e imprescindiblemente aplicables. De no ser así, no se hubiera tomado el trabajo el constituyente originario de exigir dolo o culpa grave en el artículo 90 superior. De suerte que impera observar, caso a caso, si la persona de quien se predica la posible responsabilidad, conocía los hechos que realizaba y quería su realización, o dicho de otro modo, actuó con conciencia y voluntad de realizar una conducta, la cual a su vez trasgrede el catálogo funcional que juró cumplir (art 122.2 C.Pol.) al asumir el cargo. Igualmente es posible que esa responsabilidad se predique, no ya por la comparecencia de dolo, sino porque se ha actuado de manera contraria a las normas objetivas de cuidado en el ejercicio de la función concernida en cada caso.**

55. **En síntesis, la acción de repetición tiene por objeto (i) proteger el patrimonio público frente a las conductas dolosas o gravemente culposas de los agentes del Estado y (ii) preservar la moralidad administrativa, por medio de la reacción frente a las acciones desviadas, negligentes o sumamente imprudentes de los funcionarios-** Ha precisado, en todo caso, que dicha acción no tiene como propósito (iii) imponer cargas desproporcionadas a quien asume el ejercicio del servicio público^[64].

56. Conforme a lo anterior, la acción de repetición debe aplicarse a la luz de los diversos mandatos constitucionales que puedan encontrarse en colisión^[65]. En ese sentido, la aplicación de la figura exige una labor de ponderación a efectos de valorar la atribución de responsabilidad a título de dolo o culpa grave^[66] y establecer el remedio procedente^[67].

c) Características de la consagración constitucional de la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado

57. Como se indicó antes, la comprensión constitucional de la acción de repetición ha permitido su caracterización a efectos de entender que se trata de una acción (i) subsidiaria, dado que “su procedencia está restringida a los eventos en los que la administración sea efectivamente condenada a pagar una indemnización por el daño antijurídico causado con dolo o culpa grave por parte de uno de sus agentes”; (ii) subjetiva, pues “depende de la demostración de que el daño que debió indemnizar el Estado fue causado con dolo o culpa grave por parte de uno de sus funcionarios, por lo que no cualquier equivocación o descuido permite que se ejecute la acción de regreso, pues se requiere que ante la autoridad competente se acredite plenamente que la conducta que derivó en el menoscabo obedeció a un supuesto de imprudencia calificada o de arbitrariedad”; y (iii) se sujeta a criterios de proporcionalidad de modo que la repetición al agente del Estado - por el valor de la indemnización que debió ser asumida por la administración- debe efectuarse sin incurrir en excesos^[68]. La mencionada ponderación entre principios constitucionales debe llevarse a cabo en el ejercicio de la acción de repetición, tanto en “(i) la valoración de la atribución de responsabilidad a título de dolo o culpa grave (elemento

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

subjetivo), como en la formulación (ii) del remedio previsto, cual es el regreso de lo pagado por el Estado”^[69].

...

Jurisprudencia del Consejo de Estado

59. La Ley 678 de 2001 reglamenta actualmente la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o del llamamiento en garantía con fines de repetición. Sin embargo, sus disposiciones no son aplicables a hechos ocurridos antes de su vigencia^[73]. En estos casos, ha dicho el Consejo de Estado, es necesario acudir a lo previsto en los artículos 77 y 78 del Decreto Ley 01 de 1984^[74]. Debido a esta circunstancia, esa Corporación ha previsto reglas distintas para cada uno de los regímenes normativos en lo que respecta a la determinación del dolo y la culpa grave de los agentes del Estado^[75].

60. En lo concerniente a los hechos ocurridos antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001, el Consejo de Estado ha tenido en cuenta lo previsto en el artículo 63 del Código Civil frente a la culpa grave y el dolo^[76]. Además, ha reconocido que esas previsiones deben armonizarse con los artículos 6 y 91 de la Constitución, así como con los conceptos de buena y mala fe que en esta se mencionan^[77], y que en su aplicación es necesario dimensionar las “características particulares del caso”^[78]. En este sentido, ha establecido que los jueces al examinar la culpa grave y el dolo no deben “limitarse a tener en cuenta únicamente la definición que de estos conceptos trae el Código Civil referidos al modelo del buen padre de familia para establecerla por comparación con la conducta que en abstracto habría de esperarse del ‘buen servidor público’”^[79], sino que deben conciliarla con esos artículos de la Constitución... (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

Acorde con lo anterior, ha señalado el Consejo de Estado en su Sección Segunda, Subsección B, consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, 14 de agosto de 2020; radicación No. 25000-23-42-000-2017-00876-01(4811-19):

“Conforme al artículo 209²⁰ de la Constitución Política, establece que la función administrativa tiene como fin el interés general y esta debe llevarse a cabo con sujeción a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, de manera que las autoridades administrativas deben realizar y coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Sumado a esto, la mencionada norma fundamental fijó un control sobre las actuaciones de la administración que debe encuadrar en los preceptos de responsabilidad fijados en sentido amplio, es decir, la infracción de la constitución y las leyes, tal como lo establece el artículo 6. C.N.²¹; además del incumplimiento de las funciones fijadas en la Ley o reglamentos específicos, tal como lo dispuso el artículo 122 de la norma Ibídem²².

En este orden de ideas, los mencionados funcionarios adquieren responsabilidad disciplinaria en el desempeño de sus deberes funcionales, dependiendo la asunción de competencias asignadas. En consecuencia, conforme a lo dispuesto por la Ley 734 de

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

2002²³, aquellos son sujetos disciplinables con la obligación de garantizar la función pública, tal como disponen lo artículos **22** y **23** de la citada norma:

«[...] ARTÍCULO 22. GARANTÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. El sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

ARTÍCULO 23. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento. [...]»

En este orden de ideas, es necesario precisar que la finalidad de la Ley 734 de 2002 es la de garantizar el cumplimiento de los fines y funciones del Estado respecto a las conductas de los servidores públicos que los afecten o pongan en peligro, a través de la acción disciplinaria. Al respecto, a través de la Sentencia C-948 de 2002, la Corte Constitucional, sostuvo: «[...] las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública. [...]».

El derecho disciplinario como expresión de la facultad sancionatoria del Estado observa los postulados propios del debido proceso, de manera que en atención a su naturaleza y bienes jurídicos protegidos deben observarse principios como el de legalidad y tipicidad que la conducta que constituye falta disciplinaria y, en consecuencia, sanción, previamente, haya sido consagradas por el legislador. Sin embargo, no puede desconocerse que en el ámbito del derecho disciplinario la descripción de la conducta sancionable requiere una interpretación flexible, ya que, generalmente, la norma disciplinaria no es autónoma y exige recurrir a cuestiones reglamentadas en normas específicas relativas a la materia.

De esta manera, toda vez que en el derecho disciplinario la conducta sancionable tiene que ver con el desconocimiento del servidor público ya sea de sus deberes, prohibiciones o el régimen de incompatibilidades e inhabilidades, la precisión de la conducta típica no es igual a la del derecho penal, en tanto que la misma se estructura a través del complemento normativo que rige la actividad, por lo que las faltas se consagran en tipos abiertos, lo que se justifica en «[...] la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos donde se subsuman todas aquellas conductas que están prohibidas a las autoridades o de los actos antijurídicos de los servidores públicos²⁴ [...]».

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Así pues, en el presente asunto se evidencia que la falta atribuida al demandante se estructuró de la siguiente manera. La conducta imputada al señor Juan Bautista Hernández Rodríguez constituyó una vulneración de las siguientes disposiciones de la Ley 734 de 2002:

«[...] ARTÍCULO 23. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento.

ARTÍCULO 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.

Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.

[...]

21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.

22. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.

[...]” (Negrilla y subrayado fuera del texto original). Es con fundamento en estas decisiones en donde se evidencia que por acción u omisión hay lugar a una presunta responsabilidad disciplinaria de los funcionarios y ex funcionarios de la dependencia en cita.

Acerca de la mentada Ilícitud sustancial, dilucidar si hay o no lugar a la misma, le corresponde al operador de los aspectos disciplinarios no a la Contraloría, pues no es de nuestro resorte o competencia tal calificación.

Por las razones expuestas, se confirma la observación y pasa a ser un hallazgo de idéntico contenido literal.

24. Administrativa Incumplimiento de las metas del plan de desarrollo pacto 4

GESTIÓN AMBIENTAL

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Durante el proceso auditor se identificó un incumplimiento significativo de los indicadores ambientales específicos establecidos en el plan de desarrollo.

Se fijó un indicador para aumentar la extensión de áreas protegidas dentro del municipio durante el período del plan. Sin embargo, no se ha registrado ningún aumento en las áreas protegidas, y algunas zonas de alto valor ecológico han sido degradadas. En el siguiente cuadro se ilustra el resultado de cada uno de los indicadores ambientales

Cuadro No. 63

Indicadores Ambientales					
Programa	Nombre del indicador	Unidad Medida	Meta Cuatrenio	Valor Físico Programado 2022	Valor Físico Ejecutado 2022
Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	Áreas en proceso de restauración	Hectáreas	40	0,5	No ejecutado
	Sectores que incorporan alternativas para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	Porcentaje	1	0,5	0
	Miles de hectáreas en áreas protegidas	Número	1	0,5	0
	Áreas bajo sistemas sostenibles de conservación (restauración*, sistemas agroforestales, manejo forestal sostenible)	Número	3	0,5	No ejecutado
	Áreas bajo sistemas sostenibles de conservación (restauración*, sistemas agroforestales, manejo forestal sostenible)		1	0,5	No reportado
	Áreas en proceso de restauración		1	0,5	0
Gestión de la información y el conocimiento ambiental	Sistemas de información ambiental interoperables	Número	1	0,25	0,25
	Sistemas de información ambiental interoperables	Hectáreas	6	3	0
Ordenamiento ambiental territorial	Municipios y departamentos con planes de ordenamiento territorial (pod y pot) que incorporan el componente de gestión del riesgo	Hectáreas	12	0,5	1
	Índice municipal de riesgo de desastres ajustado por capacidades	Hectáreas	12	1	0,32
	Índice municipal de riesgo de desastres ajustado por capacidades	Hectáreas	40	0,5	No reportado

Fuente: municipio de Calima El Darién

Fuente de criterio y criterio

Plan de desarrollo Municipal dimensión ambiental pacto 4 Somos Alianza por la Descentralización, Desarrollo Local y la defensa Medio Ambiental.

Causa

24. Administrativa Incumplimiento de las metas del plan de desarrollo pacto 4

Falta de un monitoreo continuo, establecer un sistema de seguimiento constante para evaluar el progreso hacia los indicadores ambientales y realizar ajustes según sea necesario.

Debilidades en la aplicación de regulaciones ambientales.

Efecto

Este incumplimiento afecta negativamente la capacidad del municipio para alcanzar sus objetivos, el bienestar de sus ciudadanos y del medio ambiente. Adicionalmente afecta la confianza de la comunidad en la capacidad del municipio para cumplir sus compromisos.

- *Dedicar un porcentaje no inferior al 1% del total de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica con el objeto de conservar los recursos hídricos o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas.*

Durante la vigencia fiscal 2022 los ingresos corrientes de libre destinación efectivamente recaudados ascendieron a \$.8.755.977.000. Por lo tanto, el 1% de los ICLD, que debía ser dedicado para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica, sería mínimo de \$87.559.770

Se evidenció que el municipio solo había transferido \$48.172.877, quedando pendiente por transferir como mínimo \$ 39.386.893

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

OBSERVACIÓN 24: Observación Administrativa Incumplimiento de las metas del plan de desarrollo pacto 4.

Desde la vigencia 2020 a la fecha, no hemos adquirido Predios de Interés Hídrico, en fecha del 17 de mayo del 2013, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República expidió el Decreto 0953 "por el cual se reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011", y estableció que estos recursos debían destinarse a ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA, esto es, áreas para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales.

De acuerdo a lo anterior, corresponde a la Autoridad Ambiental, identificar, delimitar y priorizar las áreas de importancia estratégica, con base en:

Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas,

- b. Planes de Manejo Ambiental de microcuencas,
- c. Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos
- d. Otros instrumentos de planificación ambiental relacionados con el recurso hídrico.

En cumplimiento de dichos postulados, la Administración Municipal, mediante el Radicado Nro. 731532021, elevó solicitud de CONCEPTO TÉCNICO SOBRE LOCALIZACIÓN DE PREDIOS EN ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA EL RECURSO HÍDRICO

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

(AIE) a la Corporación Autónoma Regional del Valle Del Cauca, - Regional, conforme a las reglas establecidas, con el fin de declarar la viabilidad del predio denominado como La Palmera, identificado con código Predial Nacional 761260000000000010252000000000 Y Matricula inmobiliaria No 373- 12693, donde se encuentra Microcuencas de las quebradas La Italia y San José, tributarias del Río Calima, Microcuenca de la quebrada La Cidreira o La Linda, tributaria del Río Azul, Tributario del Río Calima, lo que beneficiaría al Acueducto Municipal de Calima Darién, operado por la empresa EMCALIMA;

Sin embargo, la entidad ambiental, establece que la adquisición del referido predio no era viable, toda vez que el mismo no se encontraba ubicado en el área oferente del acueducto mencionado en la solicitud realizada.

Con lo anterior, se evidencia que la Administración Municipal ha trabajado para dar cumplimiento a la inversión del 1% y compensación forestal, respectivamente, establecidos en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015

Actualmente se está haciendo mantenimiento de las Áreas de Importancia Estratégica para la conservación del recurso hídrico, la identificación y delimitación de las áreas de importancia estratégica, la selección y priorización de predios, la incidencia de la compra en términos de cantidad y calidad del agua y la Densidad de la Población, con la finalidad de incorporar al proceso de priorización, aquellos predios que están en áreas de reserva o áreas estratégicas y que sean abastecedores de acueductos

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

La entidad en su respuesta no explica por qué no se han cumplido las metas establecidas en el tema ambiental, el cual era un compromiso establecido en el plan de desarrollo, por lo tanto, lo argumentado por la entidad no desvirtúa la observación, confirmándose el hallazgo administrativo para hacerle seguimiento en el plan de mejoramiento

25.Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal Incumplimiento en lo establecido por el artículo 111 de la Ley 99 de 1993

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Durante el proceso auditor se detectó que la administración municipal ha cumplido parcialmente con la obligación de trasladar el 1% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), ya que solo traslado \$48.172.877 y debía trasladar \$87.559.770, en cumplimiento del Artículo 111 de la Ley 99, el cual establece la obligación de destinar recursos a la protección y conservación del medio ambiente.

Fuente de criterio y criterio

Artículo 111 de Ley 99 de 1993, reglamentado por el Decreto 953 de 2013 Art. 3 de la Ley 2320 de 2023.

Causa

25.Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal Incumplimiento en lo establecido por el artículo 111 de la Ley 99 de 1993

Falta de conocimiento o comprensión de la obligación por parte de la administración municipal.

Desviación de los recursos de los ICLD hacia otros fines

Deficiencias en la gestión y el control de los fondos destinados al medio ambiente.

Efecto

Falta de inversión para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales.

Menoscabo al patrimonio público, representado en la falta de traslado de los recursos que tenía destinación específica para la ejecución de programas y proyectos ambientales para la protección y conservación del medio ambiente; daño que se cuantifica en la suma de \$39.386.893

Lo expuesto vulnera los principios de la función administrativa: responsabilidad y economía, señalados en el Artículo 209 de la Constitución Colombiana, en concordancia con el Artículo 3 de la Ley 489 de 1998. Así mismo, tienen presuntas incidencias disciplinarias al tenor de lo estipulado en el Artículo 39 de la Ley 1952 de 2019, adicionalmente pueden existir conductas fiscales por transgredir presuntamente lo establecido en los Artículos 5 y 6 de la Ley 610 del 2000.

➤ *Estrategias para asegurar el abastecimiento de agua para consumo humano: adquisición de áreas de interés para garantizar el suministro de agua en el acueducto municipal y en las veredas*

Durante la vigencia 2022 el municipio no adquirió predios de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua al acueducto municipal ni a los acueductos rurales.

Hasta la fecha no han implementado los esquemas de pago por servicios ambientales.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

OBSERVACIÓN 25: Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal Incumplimiento en lo establecido por el artículo 111 de la Ley 99 de 1993.

Se adjuntan Extractos Bancarios de la Cuenta 069640006339 correspondiente a los recursos exigidos según artículo 111 Ley 99, de los periodos: diciembre 2021 - diciembre 2022 y enero 2023, en los cuales se puede observar que el saldo de dicha cuenta al cierre del mes de diciembre 2021 fue de \$151.768.705,73, finalizando el cierre del mismo ejercicio presenta un saldo de \$243.390.215,73, cuya apropiación que soporta para la vigencia de

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

2022, tiene una adición de \$91.621.510, sobrepasando el 1% base de los ICLD para ese mismo periodo, cumpliendo con la normatividad.

Al cierre contable y presupuestal del año 2021, la cuenta corriente 0696400006339, del Banco Agrario, en la cual se destinan los recursos para cumplimiento del 1% de los ICLD, presento el siguiente saldo: \$151.768.705,63, cómo es posible apreciar en la siguiente imagen:

Banco Agrario de Colombia		ESTADO DE CUENTA CORRIENTE NORMAL			
NOMBRE: TESORERIA MPAL VIVIENDA OBRERA, DIRECCIÓN: CL. 10 NO 6 25 CIUDAD: VALLE DEL CA		MES: DICIEMBRE AÑO: 2021 NÚMERO DE CUENTA: 0696400006339 OFICINA: DARIEN			
RESUMEN DE MOVIMIENTO					
SALDO ANTERIOR: 129.959.862,73 TOTAL ABONOS: 1 TOTAL CARGOS: 0		SALDO ACTUAL: 151.768.705,73 PROMEDIO MES: 138.401.995,50			
INFORMACIÓN IMPORTANTE					
ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BÁSICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVÉS DE NUESTRA LÍNEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTÁ AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.		www.bancoagrario.gov.co • Banca Agropecuaria • Banca Personas • Banca Oficial • Banca Empresarial • Banca Microfinanzas			
DÍA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	Nº. DCTO	VALOR	SALDO
29	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA	00000008	21.808.843,00	151.768.705,73

Al cierre del año 2022, dicha cuenta tuvo el siguiente saldo: \$205.455.068,73 lo que evidencia que en ese mismo periodo de tiempo (año 2022), el incremento del saldo es de \$53.686.363,1 sustentado lo que a este momento de finalizar dicha vigencia se conocía como los ingresos corrientes de libre destinación, y sin haberse terminado las conciliaciones bancarias ni asentado los últimos pagos recibidos, debido a que al 31 de diciembre de 2022, los extractos bancarios definitivos del Banco no se habían recibido, por una parte, y por la otra, porque generalmente estos traslados presupuestales requieren autorización del Honorable Concejo Municipal, y no sesionan todos los meses.

Banco Agrario de Colombia		ESTADO DE CUENTA CORRIENTE NORMAL			
NOMBRE: MUNICIPIO DE CALBRA EL DARIEN VALLEY S.C., DIRECCIÓN: CL. 10 NO 6 25 CIUDAD: VALLE DEL CA		MES: DICIEMBRE AÑO: 2022 NÚMERO DE CUENTA: 0696400006339 OFICINA: DARIEN			
RESUMEN DE MOVIMIENTO					
SALDO ANTERIOR: 205.455.068,73 TOTAL ABONOS: 0 TOTAL CARGOS: 0		SALDO ACTUAL: 205.455.068,73 PROMEDIO MES: 205.455.068,73			
INFORMACIÓN IMPORTANTE					
ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BÁSICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVÉS DE NUESTRA LÍNEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTÁ AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.		www.bancoagrario.gov.co • Banca Agropecuaria • Banca Personas • Banca Oficial • Banca Empresarial • Banca Microfinanzas			
DÍA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	Nº. DCTO	VALOR	SALDO

RESPUESTA DE LA ENTIDAD



**EL CONTRALOR DELEGADO PARA ECONOMÍA
Y FINANZAS PÚBLICAS**

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley 617 de 2000 y de la Resolución Orgánica 5393 de 2002 y con base en la información enviada por la entidad territorial a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública -CHIP- Categoría Presupuestal CGR:


CERTIFICA:


Que el Municipio **CALIMA DEL DARIEN** del Departamento **VALLE DEL CAUCA**, durante la vigencia fiscal de 2022 recaudó Ingresos Corrientes de Libre Destinación -ICLD- por la suma de **\$8.755.977** miles.

Que los Gastos de Funcionamiento de dicho municipio representaron el **37,87%** de los ICLD.

La presente certificación se expide con base en la información reportada por la Entidad territorial. En caso de

Una vez practicado el Cierre Contable y Presupuestal de la vigencia 2022, a inicios del año 2023, se determinó que los ingresos corrientes de libre destinación del periodo 2022, ascendieron a \$8.755.977 miles, lo cual daba como resultado del 1% para cumplimiento de la ley 99 de 1993, artículo 111, con dicha base \$87.559.770, se procedió a depositar el restante, es decir, \$37.935.147, el día 20 de enero de 2023, como se puede apreciar en el respectivo extracto bancario de enero de 2023, adjunto, quedando con un saldo final de \$243.390.215,73 saldo que significa un sobrecumplimiento de dicha norma, es decir, que se apropiaron los recursos por un total de \$91.621.510,10 superando la cifra que realmente se debía apropiar (\$87.559.770), evidenciando el compromiso de esta Administración con estos temas tan sensibles y de tanto impacto a favor de la Comunidad.

 **Banco Agrario de Colombia**



CUENTA CORRIENTE NORMAL

PER: ENERO /AÑO: 2023

NÚMERO DE CUENTA: **069640006339**

OFICINA: **DARIEN**

NOMBRE: MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN VALLE 1% IC,

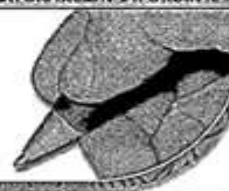
DIRECCIÓN: CL 10 NO 6 25

CIUDAD: VALLE DEL CA

RESUMEN DE MOVIMIENTO

No. Transacciones		Valor	Valor	
SALDO ANTERIOR		205.455.068,73	SALDO ACTUAL	243.390.215,73
TOTAL ABONOS	1	37.935.147,00	PROMEDIO MES	220.139.641,76
TOTAL CARGOS	0	0,00		

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELÉFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTÁ AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.



www.bancoagrario.gov.co

• Banca Agropecuaria • Banca Personas • Banca Oficial • Banca Empresarial • Banca Microfinanzas

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	Nº. DC'D	VALOR	SALDO
20	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA	60000000	37.935.147,00	243.390.215,73

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

todo lo anterior, no se acepta el hallazgo con incidencia disciplinaria y fiscal, por cuanto no existe ilicitud sustancial y la inexistencia del daño fiscal, de acuerdo a los deberes funcionales que rigen la función pública, se dieron los resultados buscados para el cumplimiento de los fines del Estado. Por lo que el ente de control, deberá replantear la razón que se tiene frente a lo manifestado como incumplimiento para que sea valorado como contrario a derecho o al orden jurídico, pues lo que se reprocha no es en sí el quebrantamiento de la norma sino el resultado de su actuar, que no tuvo la inmediatez que se observa, dado que la gestión requiere el cierre bancario y la recepción del respectivo extracto bancario, para realizar la consecuente conciliación bancaria, que necesariamente se hace en la vigencia fiscal siguiente y se procede al mes siguiente o subsiguiente; y como puede observar el equipo auditor el resultado de la gestión que se cuestiona fue positivo tanto para el Municipio, como para la comunidad, el deber funcional no fue un obstáculo para que el Estado alcance a través de la función pública los fines que la Constitución Política ha previsto para Colombia al definirla como un Estado Social de Derecho.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Teniendo en cuenta que el municipio demostró que había realizado la apropiación de la vigencia 2022 del 1% de los ICLD, cumpliendo con lo establecido con la normatividad vigente, se acepta el argumento por la entidad y se desvirtúa la observación y se elimina el hallazgo del informe

26.Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria - Predio de interés hídrico

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Durante el proceso auditor se identificó un predio de interés hídrico, de propiedad del municipio que no está debidamente registrado y carece de un certificado de tradición.

El predio denominado: La Palmera
Ubicación: Vereda La Cristalina
Matrícula Inmobiliaria Nro. 373-12693
Código Predial Nro. 76126000000010252000000000
Destino Económico: Agropecuario.

Dentro del expediente se evidenció la celebración de tres (3) contratos de compraventa:

i) Contrato De Compromiso De Compraventa, con fecha del 23 de diciembre de 2008, celebrado entre el Municipio de Calima El Calima (V),

Objeto: Transferir a título de venta real y material, el derecho real de dominio de un Lote de terreno rural, ubicado en la vereda La Cristalina, denominado La Palmera, jurisdicción del municipio de Calima El Darién, predio en venta que consta de una cabida superficial de 107 hectáreas con 1.228 metros cuadrados, predio que se desprende de uno de mayor extensión de 267 hectáreas con 8125 metros cuadrados.

Valor: Ciento Siete Millones Ciento Veintidós Mil Setecientos Sesenta y Ocho pesos Moneda Corriente (\$ 107.122.768)

26.Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria - Predio de interés hídrico

ii) Contrato Promesa De Compraventa, con fecha de 01 de abril de 2013, celebrado entre El Municipio de Calima El Darién (V)

Objeto: Transferir a título de venta real y material, el derecho real de dominio de un Lote de terreno rural, ubicado en la vereda La Cristalina, denominado La Palmera, jurisdicción del municipio de Calima El Darién, predio en venta que consta de una cabida superficiaria de 83 Hectáreas con 189 metros cuadrados.

Valor: Ochenta y Tres Millones Ciento Ochenta y Nueve Mil Setecientos Sesenta y Seis pesos (\$83.189.766)

iii) Contrato Promesa De Compraventa, con fecha de 01 de abril de 2013, celebrado entre El Municipio de Calima El Darién (V),

Objeto: Transferir a título de venta real y material, el derecho real de dominio de un Lote de terreno rural, ubicado en la vereda La Cristalina, denominado La Palmera, jurisdicción del municipio de Calima El Darién, predio en venta que consta de una cabida superficiaria de 1,5 Hectáreas, que se desprende de una de mayor extensión que tiene 77 Hectáreas con 6.708 metros cuadrados.

Valor: Un Millón Quinientos Mil Trece Pesos. (\$1.500.013).

Aunque se realizaron los pagos correspondientes al vendedor, y todas las transacciones financieras se llevaron a cabo según los registros municipales, los citados contratos de compraventa, no se protocolizaron y por consiguiente no se realizó la correspondiente inscripción en el certificado de tradición de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Es importante detonar que la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y por la otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales” Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos.

En este orden de ideas la tradición opera por mandato de la ley bajo dos presupuestos que son el título (escritura pública) y el modo (inscripción en el registro de instrumentos públicos), concluyéndose que es el certificado de libertad y tradición, el que indica el titular del derecho de dominio (propiedad).

Fuente de criterio y criterio

Código Civil artículos 740 y 756

Causa

Falta de procedimientos claros para la actualización y registro de propiedades municipales.

Deficiencias en la gestión documental y de propiedad.

26.Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria - Predio de interés hídrico

Desconocimiento de la importancia del registro y certificado de tradición en propiedades municipales.

Efecto

Control inadecuado de los recursos y gastos indebidos (intereses moratorios por el no registro en la Oficina de instrumentos públicos).

Lo expuesto vulnera los principios de la función administrativa: responsabilidad y economía, señalados en el Artículo 209 de la Constitución Colombiana, en concordancia con el Artículo 3 de la Ley 489 de 1998. Así mismo, tienen presuntas incidencias disciplinarias al tenor de lo estipulado en el Artículo 39 de la Ley 1952 de 2019.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

OBSERVACIÓN 26: Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Predio de interés hídrico.

La Administración Municipal se encuentra en la actualidad en la construcción de un nuevo documento El Municipio para generar los actos administrativos necesarios a la legalización de las promesas de venta descritas en el hallazgo a fin de tener la escritura pública disponible para su registro ante notaría y posterior registro ante la oficina de Instrumentos Públicos competentes.

No se acepta el hallazgo, toda vez que la conducta del servidor público no afecta con su actuar la función pública, porque no se desprende un daño o riesgo para el Municipio de Calima El Darién (V)

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Lo argumentado por la entidad no desvirtúa la observación, debido a que el no contar con el certificado de tradición a nombre del municipio es un riesgo, ya que puede ser vendido a un tercero, porque no hay un documento legal que establezca que el predio es el de municipio, por lo tanto, se confirma el hallazgo para hacerle seguimiento en el plan de mejoramiento

27.Observación Administrativa - Rendición de formato Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible ET

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Se identificó que el municipio no ha cumplido con la obligación de rendir el formato del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ET (Estudio Técnico). Este formato es esencial para evaluar y garantizar el cumplimiento de las regulaciones ambientales y la gestión sostenible de proyectos y actividades.

El Municipio debió presentar ante la Autoridad Ambiental CVC, un inventario detallado de los predios adquiridos y de los esquemas de pago por servicios ambientales implementados. Dicho inventario deberá ser actualizado anualmente con corte a 31 de diciembre de cada año.

Fuente de criterio y criterio

Artículo 14 del Decreto 953 de 2013

Causa

Falta de conocimiento o comprensión de la obligación de rendir este formato.

Deficiencias en la gestión documental y en los procesos de cumplimiento ambiental

Efecto

Se afecta la transparencia, accesibilidad y oportunidad de la información requerida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, incurriendo en posibles sanciones por parte de la entidad competente

➤ *Evaluar la calidad del agua en la zona rural del municipio de Calima El Darién*

En el siguiente cuadro se ilustra los Índices de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) en la zona rural del municipio de Calima El Darién, de acuerdo a los resultados fisicoquímicos y microbiológicos de las muestras de agua tomadas por la Unidad Ejecutora de Saneamiento Básico del Valle del Cauca UES Valle.

Cuadro No. 64 IRCA

zona rural

Resultados de las muestras de agua tomadas en los acueductos rurales			
N°	Nombre del Acueducto o Sistema de Abastecimiento	IRCA Promedio (%)	Nivel de riesgo
1	Acuadriamante	89.29	Inviabile
2	Acuaflorida Baja	76.31	Inviabile
3	Acuallanitos S.A.S.	28.33	Medio
4	Acueducto Bajo Boleo	83.33	Inviabile
5	Acueducto Alto Boleo	83.33	Inviabile
6	Acuasalud La Primavera	87.86	Inviabile
7	Acueducto Jiguales - Guaduales	91.00	Inviabile
8	Acueducto La Cristalina	87.93	Inviabile
9	Acueducto Parcelación La Clarita	63.58	Ato
10	Acueducto Parcelación Noruega	17.65	Medio
11	Acueducto Parcelación Agua Dulce	70.70	Ato
12	Acueducto Río Bravo - La Palmera	65.58	Ato
13	Acueducto Rural Acuaflorida Alta	88.40	Inviabile
14	Acueducto Rural La Gaviota Baja	41.24	Ato
15	Acueducto Rural La Gaviota Alta - Acuagaviota	44.16	Ato
16	Asociación Acueducto Rural Bella Vista	79.00	Ato
17	Asociación Comunitaria Administradora del Acueducto Rural El Vergel	85.80	Inviabile
18	Asociación Comunitaria del Acueducto de la Vereda Santa Elena	44.50	Ato
19	Asociación Comunitaria Administradora del Acueducto de la Vereda de El Mirador	39.30	Medio
20	Asociación de Usuarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Vereda La Unión - Asau	89.90	Inviabile
21	Asociación de Usuarios de Acueducto Veredal Manantial del Remoleno - Avemare	89.10	Inviabile
22	Asociación Junta Administradora Acueducto Vereda San José	24.20	Medio
23	Condominio Campestre Vegas del Calima	21.30	Medio

Fuente: Municipio de Calima El Darién

Elaboró: Equipo auditor

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

OBSERVACIÓN 27: Observación Administrativa - Rendición de formato Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible ET.

En el archivo adjunto, se observa el correo electrónico despachado desde la Oficina de la Unidad de Aseo, el día 28 de febrero de 2023 al correo notificacionesadministrativas@cvc.gov.co, adjuntando el formato dispuesto por ellos, conforme a la Resolución 1781 del 10 de noviembre del 2014 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual reglamentó el artículo 14 del Decreto 953 del 17 de mayo del 2013 expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por su parte CVC quien es responsable de remitir al ministerio de ambiente, confirma el recibido del mismo el día 1 de marzo de 2023, y precisando que había sido radicado bajo el número 217492023. (se adjunta pdf de soporte). A la fecha, no se conoce observación alguna por parte de CVC sobre el contenido de lo remitido.

El correo electrónico aquí mencionado tiene fecha del 28 de febrero del 2023, un mes antes de la fecha límite indicada en la Resolución 1781 del 10 de noviembre del 2014 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, esto es, el 31 de marzo de cada año, y la información remitida, corresponde a la vigencia 2022.

Todo lo anterior, indica que hubo plena conformidad con lo establecido en la normativa vigente, por lo que respetuosamente solicitamos el levantamiento del hallazgo.

Queremos reiterar nuestro compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las regulaciones ambientales y la gestión sostenible de proyectos y actividades. Estamos conscientes de la importancia de estos asuntos y trabajaremos de la manera más diligente para asegurar que los requisitos y obligaciones ambientales se cumplan adecuadamente.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

La entidad en la contradicción anexo el formato que no entregó en el proceso auditor, teniendo en cuenta que cumplieron con la normatividad, se acepta lo argumentado por la entidad y se desvirtúa la observación, el hallazgo se retirará del informe

28.Observación Administrativa - Agua no apta para el consumo humano en la zona rural de Calima El Darién

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Aunque la administración municipal ha intervenido algunos acueductos rurales, teniendo en cuenta los resultados fisicoquímicos y microbiológicos de la muestras de agua, tomadas por la Unidad Ejecutora de Saneamiento Básico del Valle del Cauca UES Valle, se observa que el Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) en la zona rural es de 63.48%, lo que indica, que los habitantes de las áreas rurales de Calima El Darién, durante el periodo analizado consumieron agua “nivel de riesgo Alto”, es decir, agua no apta para el consumo humano.

28. Observación Administrativa - Agua no apta para el consumo humano en la zona rural de Calima El Darién

Fuente de criterio y criterio

Resolución 2115 del 2007 Artículos 15

Causa

Deficiente gestión administrativa para dar solución a los problemas de calidad de agua reportados por las respectivas autoridades sanitarias.

Efecto

Posibilidad de incrementar los riesgos de contraer enfermedades de origen hídrico en la comunidad de la zona rural del municipio de Calima El Darién

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

OBSERVACIÓN 28: Observación Administrativa - Agua no apta para el consumo humano en la zona rural de Calima El Darién.

Mediante el Acuerdo Municipal No. 004 del 07 de junio de 2020, se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Calima El Darién, 2020-2023 "Somos Alianza por un Calima El Darién Sostenible y Emprendedor" y con el fin de garantizar el cumplimiento de los fines de estado, la función administrativa debe desarrollarse con fundamento en los principios ya citados, cuyo cabal cumplimiento constituye mecanismo idóneo, en cuanto permite definir los objetivos y metas de la acción estatal, y definir las prioridades en el uso de los recursos públicos y teniendo en cuenta que advirtió la necesidad del mejoramiento de la calidad del agua que consume la población rural, por ende la imperiosa necesidad de llevar a cabo la CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO.

Para cumplir con las metas referentes en aras a aumentar la cobertura del servicio público de acueducto en algunos sectores del municipio de Calima El Darién (V), se llevó a cabo el proceso de contratación del proyecto mencionado, proyecto enmarcado en el plan de desarrollo 2020-2023, mediante el Acuerdo No. 004 del 07 de junio de 2020, se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Calima El Darién "Somos Alianza por un Calima El Darién Sostenible y Emprendedor sector VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, PACTO SOCIAL 1. Somos Alianza por un Calima El Darién con inclusión social y equidad: Inclusión social y equidad.

En este orden de ideas se suscribió el convenio marco con la FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL, entidad sin ánimo de lucro, constituida bajo el tipo de asociación de carácter mixto como entidad de segundo orden descentralizada e indirecta por servicios, creada en virtud de lo establecido en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, siendo considerada empresa pública de carácter especial de las reguladas, en lo pertinente por la Ley 489 de 1998 y demás normas concordantes y afines, que tiene por objeto social: ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera lícita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas;

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

la ejecución de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorías, consultorías de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestión social.

En virtud de lo anterior, el Municipio de Calima El Darién (V), suscribió el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro. 006 derivado del convenio marco Nro. 310-13-08.003 de 2023, con la entidad anteriormente referida, el cual tuvo por objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, INTERVENTORÍA Y LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN.

De igual manera, en atención a la especial y detectada problemática del municipio, en lo concerniente a la prestación del servicio de agua potable, como servicio público y un elemento esencial para vivir; se identificó la problemática que padecía el sector del barrio la ciudadela, donde era común ver a las normal ver a las personas de este sector, consumir agua de un afluente (Quebrada) sin el mínimo tratamiento para el uso y consumo humano, aclarando que este barrio no estaba conectado con el acueducto del casco urbano del municipio.

El crecimiento de la población del municipio de Calima el Darién, ha generado una expansión de su casco urbano y la creación de barrios subnormales, carentes de servicios de acueducto, alcantarillado y otros. Hoy la carencia del servicio de acueducto en el barrio LA CIUDADELA, era vulneración del derecho fundamental a los servicios públicos esenciales.

En el barrio LA CIUDADELA de calima el Darién y la zona alta viven 1.200 familias que carecían de la calidad del servicio de acueducto, por ello la razón fundamental de la construcción de la planta de acueducto EL SINAÍ, a través del proyecto CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE TANQUE PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA PARA LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN EN EL DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.

Con referencia a este proyecto, BPIN No. 2021761260068 - CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE TANQUE PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA PARA LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN EN EL DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA, como del contrato No. 013 DE JUNIO DE 2022, entre el Contratante EMCALIMA E.I.C.E. E.S.P y el contratista CEHID CONSULTORIA S.A.S; representante legal: señor ALEJANDRO JOSE CESPEDES ARBELAEZ; cédula ciudadanía No 1.112.465.537 de Jamundí Valle, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE TANQUE PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA PARA LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN EN EL DEPARTAMENTO VALLE

DEL CAUCA" por valor de novecientos ocho millones seiscientos cincuenta y tres mil seiscientos trece pesos MCTE (\$ 908.653.613), con fecha de inicio del 13 de julio de 2022, acta de terminación del 29 de noviembre de 2022 y fecha de entrega institucional por parte del contratista a la Alcaldía municipal de Calima el Darién del 18 de enero de 2023.

CAPACIDAD TOTAL DEL SERVICIO. Antes de otorgar plenamente el servicio, es necesario realizar pruebas en el sistema de acueducto para evitar problemas como fugas, fraudes,

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

descompresión u otras situaciones que puedan perjudicar tanto el sistema como a los usuarios.

Aquí se ilustra de manera general los informes por parte de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, fechados veintisiete (27) de julio, treinta (30) de agosto, y once (11) de octubre de la presente vigencia (2023), identificándose en el último informe la siguiente anotación: “que la(s) muestra (s) de agua se clasifica (n) en el nivel de riesgo: SIN RIESGO. AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO.”

Lo anterior refleja el impacto positivo en los habitantes del referido sector del municipio de Calima El Darién (V), pues este proyecto está reflejando un beneficio en todo el municipio al permitirse el debido suministro de agua apta para consumo humano.

SOBRE EL PRINCIPIO DE CELERIDAD: En principio, se puede resaltar su cumplimiento, ya que incluso en el documento de la Contraloría, en el marco de la AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA EL DARIEN EMCALIMA E.I.C.E. ESP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, VIGENCIAS 2006-2007-2008 la entidad de control se expresa textualmente lo siguiente: “Se verificó el contrato (...) por valor de novecientos ocho millones seiscientos cincuenta y tres mil seiscientos trece pesos MCTE (\$ 908.653.613), con fecha de inicio del 13 de julio de 2022, acta de terminación del 29 de noviembre de 2022 y fecha de entrega institucional por parte del contratista a la alcaldía municipal de Calima el Darién del 18 de enero de 2023. (...)”

Conforme lo anterior, se vislumbra que el tiempo de ejecución del proyecto se llevó a cabo durante un periodo de tiempo de siete (7) meses, bajo unos términos que respetan estipulaciones contractuales. Esto permite paralelamente realizar una debida inspección de la puesta en marcha de la PTAP para que, en caso de ser necesario se puedan ejecutar las correspondientes pólizas en pro de una mejoría en el servicio.

SOBRE EL PRINCIPIO DE ECONOMÍA: El presente principio se cumplió dado que se logró adelantar la obra en cuestión, dentro de los parámetros establecidos. Esto fue posible gracias a la correcta asignación y utilización de los recursos disponibles y de acuerdo con el presupuesto aprobado.

El proyecto “CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, MEDIANTE TANQUE PARA TRATAMIENTO DE AGUA PARA LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”, es un proyecto que fue ejecutado en virtud de una política pública articulada con el Plan de Desarrollo Nacional y Departamental, ya que el Plan de Desarrollo Municipal “SOMOS ALIANZA POR UN CALIMA SOSTENIBLE Y EMPRENDEDOR 2020 - 2023”, en su eje de Dimensión Económica – Pacto Social No. 2 – Somos Alianza Por Emprendimiento y Desarrollo Económico de Nuestra Región, Programa del Plan de Desarrollo Municipal, acceso a la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico, y que dicho proyecto hace parte del plan de gobierno y compromisos adquiridos con el Municipio de Calima El Darién por parte de quien hoy lo gobierna. Así como también lo ha establecido la ley 2056 de 2020 en su artículo 30:

ARTÍCULO 30. Ejercicios de planeación. En el marco del proceso de formulación y aprobación de los planes de desarrollo de las entidades territoriales se identificarán y

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

priorizarán las iniciativas o proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos de las Asignaciones Directas, la Asignación para la Inversión Local y la Asignación para la Inversión Regional del Sistema General de Regalías, atendiendo los principios de desarrollo competitivo y productivo del territorio y de los de planeación con enfoque participativo, democrático y de concertación.

Que la ejecución de este proyecto, es una obra que está beneficiando la zona rural alta del Municipio, específicamente los sectores La Ciudadela, Canagueros y Altos de Darién, abastecimiento que cubre 460 viviendas, casi 500 suscriptores, es decir, que se cubre el servicio básico de agua, servicio esencial y vital para aproximadamente 1.500 a 1.700 personas de dichos sectores. Por esa razón, fue que el Municipio de Calima El Darién (V), realizó de manera acuciosa los estudios hidrológicos para la cuenca de la quebrada El SINAÍ de nuestro municipio, con el fin de diseñar una estructura de tanques de almacenamiento de agua y la planta de tratamiento de agua potable apta para el consumo humano, que está permitiendo mejorar el servicio a la comunidad de los sectores mencionados (La Ciudadela, Canagueros y Altos de Darién).

Como ya fue mencionado en incisos anteriores, se tienen los documentos allegados por la UESVALLE (Unidad Ejecutora de Saneamiento Básico) del Valle del Cauca, en la cual se evidencia la realización de los ensayos (IRCA) del agua para el consumo humano, con nivel de riesgo: inviable sanitariamente, alto o medio, mismos que reflejaron los siguientes resultados en los meses que a continuación se relacionan:

Informe de fecha 24 de junio de 2023, realizado en la calle 27 centro de integración, grifo instalado punto fijo, con No. de Acta de Muestreo 00009-23, IRCA (Índice Riesgo para el Consumo Humano) del 86.52%, nivel de riesgo inviable sanitariamente, característica por fuera de la norma se dice que residual; color aparente, ecoli, turbiedad, resultado obtenido: Se clasificó inviable sanitariamente no apta para el consumo humano según lo establecido en el artículo 15 de la Resolución No. 2115 de 2007 del Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Informe de fecha 22 de agosto de 2023, realizado en la calle 27 centro de integración, grifo instalado punto fijo, con No. de Acta de Muestreo 00048-23, IRCA (Índice Riesgo para el Consumo Humano) del 57.55%, nivel de riesgo Alto, característica por fuera de la norma se dice que residual; cloro residual, ecoli, resultado obtenido: Se clasificó; Alta. No es apta para el consumo humano según lo establecido en el artículo 15 de la Resolución No. 2115 de 2007 del Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

El último informe con fecha del 09 de octubre de 2023, realizado en la calle 27 centro de integración, grifo instalado punto fijo, con No. de Acta de Muestreo 00135-23, IRCA (Índice

Riesgo para el Consumo Humano) del 0.00%, nivel SIN RIESGO, Resultado obtenido; SIN RIESGO. AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO, según lo establecido en el artículo 15 de la Resolución No. 2115 de 2007 del Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Arrojando este resultado que gracias a la construcción, manejo y mantenimiento del tanque construido en la PTAP SINAÍ (zona rural) que ayuda a la prestación del servicio esencial de agua como derecho

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

fundamental de vida de los darienitas, es AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO SIN RIESGO ALGUNO.

Es importante citar, el trabajo conjunto que se adelantó con VALLECAUCANA DE AGUAS, bajo su Plan de Aseguramiento, el cual procuraba formalizar y legalizar los acueductos comunitarios, como en efecto se hizo a lo largo de dos (02) vigencias. Respetuosamente solicitamos se sirva verificar con esta Entidad, para mayor evidencia. Esta evidencia consolida nuestra perspectiva y enfoque de afinar la planificación contractual y la planeación en el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo. Fueron acciones prospectivas, que fortalecieron el compromiso con los Fines sociales del Estado, especialmente con la Calidad de Vida.

Por otra parte, los acueductos privados no son de nuestra competencia, tal como lo indica la Ley 715 del 2001; estos acueductos fueron desarrollados por algunas copropiedades, los cuales fueron incluidos erróneamente, así: Acuallanitos S.A.S., los acueductos de las siguientes parcelaciones: La Clarita, Noruega, Aguadulce y Vegas del Calima. Estos acueductos corresponden a particulares y no son objeto de inversión municipal. Sólo son objeto de Control por parte de la UES VALLE, en atención de propósitos superiores que son de su competencia legal y funcional.

Por todo lo anterior, respetuosamente solicitamos levantar el hallazgo proyectado, por haber quedado fundamentada todas nuestras acciones y gestiones, con innegables logros positivos y de alto impacto, las cuales requerían más de una vigencia, para materializarlas y concretarlas.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Con respecto a lo expuesto por la entidad es importante anotar:

Aunque existan acueductos privados, es obligación del municipio como responsable de la prestación de servicio, velar que se le suministre agua apta para consumo humano. Las actividades que está desarrollando la entidad para mejorar los procesos de tratamiento de agua potable, en están en ejecución, por lo tanto, se confirma el hallazgo para hacerle seguimiento en el plan de mejoramiento

29. Observación Administrativa - Seguimiento al PGRIS

Condición (situación detectada de incumplimiento):

A la fecha el Municipio de Calima El Darién no ha presentado al Concejo Municipal el informe sobre el estado de avance en el cumplimiento de las metas previstas en el PGIRS, ni ha realizado seguimiento a las actividades que deben ejecutar en el PGRIS las empresas prestadoras del servicio de aseo.

Criterio y fuente de criterio

Decreto 1077 de 2015 Artículo 2.3.2.2.3.87. *Plan para La Gestión Integral De Residuos Sólidos, PGIRS.* Artículo 2.3.2.2.3.90. *Programa de aprovechamiento*
Resolución 754 de 2014 Artículo 11 Seguimiento.

Causa

Falta de capacitación en la gestión de residuos y en la implementación del PGIRS, lo que dificulta la supervisión y el seguimiento.

Efecto

La falta de seguimiento y cumplimiento del PGIRS puede resultar en el incumplimiento de las regulaciones ambientales y de gestión de residuos, lo que puede llevar a sanciones legales y multas para la administración municipal

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

En relación a la presentación del avance en el cumplimiento de las metas previstas en el PGIRS al Concejo Municipal, que deben ser ejecutadas por el prestador del servicio, esta dependencia ha requerido periódicamente mediante el respectivo control político, el seguimiento a la empresa prestadora del servicio de aseo, quién implementa el Plan de Gestión Integral de Residuos.

De acuerdo a lo anterior, se adjunta soporte del último control político realizado, haciendo especial énfasis en el punto número 11 y los documentos adjuntados para la respuesta del mismo. Por otra parte, es menester mencionar que dentro del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental - CIDEA, se realizan por parte de la administración municipal y otros actores educación ambiental, jornadas de recuperación de materiales aprovechables entre otras que responden al Programa de Sensibilización, Educación y participación comunitaria, que el subprograma de educación ambiental contempla este tipo de actividades.

Ahora bien, confirmamos el envío del informe de seguimiento de las actividades ejecutadas por la empresa del servicio público de aseo - INTERASEO SAS ESP, según el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se adjunta nuevamente.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Con respecto a lo expuesto por la entidad, es importante aclarar que el PGIRS está a cargo de la administración municipal en coordinación con la empresa prestadora del servicio de aseo, por lo tanto, el encargado de evaluar el cumplimiento de las metas es la administración municipal

Es muy diferente el control político que realiza el concejo, con el informe de avance del PGRIS que por normatividad está obligado la administración de presenta.

La empresa INTERASEO S.A.S. E.S.P, realiza actividades como prestador del servicio de aseo, las cuales pueden estar incluidas en el cronograma del PGIRS, pero se debe hacer el respectivo seguimiento con el fin de que se cumpla las metas planteadas.

Por lo tanto, lo argumentado por la entidad no desvirtúa la observación, confirmando el hallazgo para hacerle seguimiento en el plan de mejoramiento

30. Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria - Prestación del servicio de aseo directamente

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Durante la revisión de los procedimientos de adquisición y contratación del Municipio, se identificó una falta de cumplimiento con respecto a la realización de la licitación para la prestación del servicio público de Aseo.

El Municipio de Calima El Darién ha contratado los servicios de recolección de residuos sólidos con la empresa Interaseo S.A. E.S.P. sin licitación pública durante los últimos dos años. Se encontró que no se llevó a cabo un proceso de licitación abierto y competitivo para seleccionar al proveedor de estos servicios, lo que contraviene las regulaciones vigentes en materia de contratación pública. Adicionalmente, se están transfiriendo subsidios a esta empresa sin un contrato formal.

Criterio y fuente de criterio

Resolución 943 de 2021 Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico Artículo 1.4.1.2.

Decreto 1077 de 2015 Artículo 2.3.4.1.2.11. Transferencias de dinero de las entidades territoriales.

Causa

Incumplimiento de las regulaciones y procedimientos legales, falta de transparencia.

Efecto:

Sin la competencia de licitación, no se garantiza que los servicios se estén prestando de la manera más eficiente y rentable posible, lo que podría tener un impacto negativo en el presupuesto municipal. De igual manera, La falta de licitación pública socava la transparencia en el proceso de contratación y puede generar preocupaciones sobre la imparcialidad y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos.

30. Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria - Prestación del servicio de aseo directamente

Lo expuesto vulnera los principios de la función administrativa: responsabilidad y economía, señalados en el Artículo 209 de la Constitución Colombiana, en concordancia con el Artículo 3 de la Ley 489 de 1998. Así mismo, tienen presuntas incidencias disciplinarias al tenor de lo estipulado en el Artículo 39 de la Ley 1952 de 2019.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

No es cierto lo anunciado por el ente de control en cuanto que el Municipio de Calima El Darién haya contratado los servicios de recolección de residuos sólidos con la empresa INTERASEO S.A. ESP, no existe contrato alguno de operación, ellos son prestadores del servicio de aseo en el Municipio de Calima El Darién bajo su esquema de libre competencia como lo dispone la Ley 142 de 1994 y la Constitución Política de Colombia, en el cual el municipio no tuvo, ni ha tenido algún tipo de incidencia o vinculación contractual, por el contrario el Municipio NO podría impedir a dicho prestador prestar sus servicios en el Municipio de Calima El Darién. No existiendo relación contractual alguna de operación entre el Municipio y la empresa INTERASEO, diferente a la que se suscribe con ocasión del otorgamiento de subsidios, conforme los lineamientos normativos, lo que ha sido expuesto al ente de control.

Como conclusión de lo anterior, no nos encontramos frente a una "Omisión de Licitación" como lo concluye el ente de control, sino porque la empresa prestadora inició con la prestación del servicio con la facultad de libre competencia que la misma ley de servicios publico atribuye, sin que sea requerimiento alguno de la existencia de un contrato y/ autorización diferente a la propia capacidad de la empresa para prestar su servicio, es decir, que no debe darse aplicación a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, especialmente lo normado en el parágrafo.

Con relación a la libre competencia, la Ley 142 de 1994, establece:

ARTÍCULO 10. LIBERTAD DE EMPRESA. Es derecho de todas las personas organizar y operar empresas que tengan por objeto la prestación de los servicios públicos, dentro de los límites de la Constitución y la ley.

Es decir que no se requiere algún tipo de licenciamiento, autorización ni contrato que permita a una empresa para constituirse como prestadora de servicios públicos domiciliarios ni como prestador de un municipio, cuando el régimen de prestadores lo permite, dando cumplimiento solo a los lineamientos normativos relacionados con su propio registro de prestadores y especialmente los lineamientos contenidos en los artículos 15 y 19 de la Ley 142 de 1994.

El servicio público de aseo, es el servicio por excelencia prestado bajo el esquema de libre competencia, pues ha sido determinado, no solo normativamente, sino jurisprudencial y doctrinariamente que los servicios públicos en Colombia se pueden prestar o en libre competencia (sea en el mercado o mediante áreas de servicio exclusivo), o de forma directa y exclusiva por parte del municipio/ciudad.

Con la expedición de la Constitución de 1991 se produjo un cambio en el modelo bajo el cual se prestan los servicios públicos en Colombia, es así como a la luz del artículo 365

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

superior, las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, hacen parte de la nueva orientación institucional, que permite que los servicios públicos sean prestados por el Estado en gestión directa o indirecta por comunidades organizadas o por los particulares, pero siempre sometidos a la intervención del Estado, quien es el encargado de la planeación, regulación, control y vigilancia de los servicios, no solo concibiendo así los servicios públicos como inherentes a la finalidad social del Estado, sino que, adicionalmente, los piensa como una actividad económica libre que puede ser desarrollada bien sea por los particulares, por el Estado, o por ambos, en condiciones de igualdad y libre competencia.

Continuando con lo establecido en la norma Constitucional, el segundo inciso del artículo 365 de la Constitución Política colombiana, ha determinado que los servicios públicos estarán sometidos al régimen que fije la Ley, razón por la cual se expidió la ley especial 142 de 1994, "Por la cual se establece el régimen de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones", ley que efectivamente establece el régimen de competencia de los servicios públicos, derechos, deberes, libertad de elección del prestador, etc., esto sin apartarse de que la libre competencia no podrá llevarse a cabo con menoscabo del bien común, de los usuarios y por qué no del medio ambiente, y bajo la intervención del Estado.

De acuerdo con las previsiones constitucionales contenidas en los artículos 333 y 365, el régimen de los servicios públicos domiciliarios se enmarca en un mercado de competencia, en el que priman los principios de libertad de empresa, libertad de entrada y libre elección del prestador del servicio por parte del usuario; sin embargo, la regla anterior, encuentra excepciones como la prevista en el artículo 40 de la Ley 142 de 1994. Al respecto, mediante Concepto SSPD-OJ-2014-352, de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, manifestó:

"(...) El artículo 22 de la Ley 142 de 1994 desarrolla el principio de libertad de empresa, comúnmente conocido como libertad de entrada, previsto en el artículo 10 de la misma ley. Este principio consiste en permitir que las empresas debidamente constituidas y organizadas desarrollen su objeto social sin que sea necesaria la expedición de algún título habilitante por parte de las autoridades administrativas. Con ello se busca que en el régimen de competencia de los servicios públicos domiciliarios no existan barreras legales o procedimientos administrativos que obstaculicen el ingreso de nuevos operadores al mercado. (...)

De este modo, según el régimen de funcionamiento de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, consagrado en el artículo 22 de la Ley 142 de 1994, no se requiere permiso para el desarrollo de su objeto social, pero para poder operar deberán obtener de las autoridades competentes, según sea el caso, las concesiones, permisos y licencias referidas en los artículos 25 y 26 Ibidem, de acuerdo con la naturaleza de su actividad.

(..., No obstante, lo anterior, el artículo 40 de la Ley 142 de 1994 permite que de manera excepcional se restrinja la operación de empresas de servicios públicos domiciliarios en determinadas áreas o zonas, por un tiempo determinado y siempre y cuando existan motivos de interés social y de ampliación de coberturas que permitan dicha restricción. En estos casos, se presenta una limitación al derecho de elegir el prestador del servicio, en la medida en que en el área o zona determinada sólo será posible la operación de un prestador que, en todo caso, ha de haber sido seleccionado luego de un proceso plural, en donde diversos

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

agentes han debido tener la oportunidad de disputarse la celebración del contrato de concesión que permita la operación en el área de servicio exclusivo. (...)

Atendiendo a lo citado, hay que precisarle que, en las zonas donde no exista área de servicio exclusivo, hay libertad de entrada y por tanto, toda autoridad administrativa debe permitir que las empresas debidamente constituidas y organizadas, así como las comunidades organizadas, desarrollen su objeto social sin que sea necesaria la expedición de algún título habilitante, atendiendo a que no pueden existir barreras legales o procedimientos administrativos que obstaculicen el ingreso de nuevos operadores al mercado.

De igual forma, se precisa que, en la situación de existir varios prestadores en una misma zona, dicha coexistencia se hará dentro del ejercicio de la libre competencia, por lo que se aceptará que quien demande el servicio pueda tener una gama de ofertas que le permitan decidir libremente a quien le compra, esto garantizar la libre escogencia de prestador prevista en el artículo 9 de la Ley 142 de 1994.

En este orden de ideas, en un escenario de libre competencia y donde no exista área de servicio exclusivo, es posible la prestación del servicio público por cualquiera de las personas autorizadas para ello, previstas en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994".

Lo anterior, permite concluir que la prestación del servicio por parte de la empresa que inició su servicio bajo Libre competencia no requiere de la mediación de contrato alguno, ni autorización, como ya se ha expuesto, máxime cuando en el Municipio de Calima El Darién, no existe ni ha existido área de Servicio Exclusivo, la que sería la única figura legal que impediría la prestación del servicio por libre competencia, pues mal estaría exigir que la existencia de un contrato, coartando el derecho de libertad de empresa.

En cuanto a la transferencia de subsidios se ampara en la norma constitucional establecido en el artículo 368, sobre lo cual la Corte Constitucional ha manifestado que esta obligación no es potestativa sino impositiva, norma constitucional que ha sido reglamentada y definidos los porcentajes en que son otorgados, no estando el Municipio en facultad de negar el otorgamiento de subsidios lo cual estaría en contra de los usuarios mas no de la empresa, lo que significa que no debe mediar algún tipo de contrato de operación para el otorgamiento de subsidios sino que estos deben ser otorgados a quien preste el servicio público sin importar su modalidad.

Con fundamento en los argumentos expuestos, solicito respetuosamente, se proceda con la eliminación y archivo de todo hallazgo determinado en el informe preliminar, y en derecho de contradicción refutado, por cuanto no se ha contrariado normatividad ni disposición alguna frente a la liberalidad de una empresa para prestar el servicio público domiciliario en el municipio, máxime cuando el Municipio de Calima EL Darién como ente territorial, no tiene participación en las decisiones de dicha empresa, ni se está realizando la entrega alguna de infraestructura que presuma la incidencia de un contrato para operación.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Con respecto a lo expuesto por la entidad es importante aclarar que el esquema de libre competencia en el servicio de aseo se refiere a la posibilidad de que diferentes empresas compitan entre sí para brindar el servicio de recolección y disposición de residuos sólidos. Esto implica que no haya restricciones o barreras para que nuevas empresas ingresen al mercado y compitan con las empresas existentes.

En el esquema de libre competencia, las empresas compiten en igualdad de condiciones, lo que puede llevar a una mayor eficiencia y calidad en la prestación del servicio. Además, la libre competencia puede fomentar la innovación y la mejora continua, ya que las empresas buscan destacarse y ganar clientes en un mercado competitivo.

Es importante destacar que, según la legislación colombiana, existe libertad de competencia en la prestación del servicio público de aseo y sus actividades complementarias, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Ley 142 de 1994 y las normas complementarias, las cuales establece que, en la concesión del servicio de aseo, se debe realizar licitación pública. Esto se hace para garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades para todas las empresas interesadas en brindar el servicio de aseo.

En resumen, el esquema de libre competencia en el servicio de aseo permite que diferentes empresas compitan entre sí para brindar el servicio de recolección y disposición de residuos sólidos, lo que puede llevar a una mayor eficiencia y calidad en la prestación del servicio, lo que no se dio en el caso de Calima Darién, donde se realizó una contratación directa, por lo tanto, lo argumentado por la entidad no desvirtúa la observación, por lo tanto, se confirma el hallazgo con incidencia disciplinaria.

31.Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal - Adquisición de insumos agrícolas por un valor superior al del mercado

Condición (situación detectada de incumplimiento):

En el Contrato de Suministro N°310-13-07.065 de 2022, cuyo objeto se detalla a continuación:

Objeto: *Suministro de insumos agrícolas acondicionador de suelo, bioensayos para el fortalecimiento de unidades productivas agrícolas de pequeños agricultores del municipio de Calima El Darién Valle Del Cauca*

Valor: \$9.661.948

Fecha de suscripción: 2022/12/15

Fecha de terminación 2022/12/28

Se observa diferencia entre el valor de adquisición de suministros agrícolas (cal, fungicida, insecticidas) y el precio de referencia consultado con las mismas especificaciones en el

31.Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal - Adquisición de insumos agrícolas por un valor superior al del mercado

sector local (cotización realizada en los estudios previos, los cuales fueron la base del estudio de la oferta), como se evidencia en la imagen, y se analiza en el cuadro siguiente:

Imagen No. 44

3- ESTUDIO DE LA OFERTA

Para determinar el valor estimado del contrato la Secretaría de Desarrollo Rural - UMATA procedió a determinar el valor de los bienes mediante cotizaciones en valor unitario.

INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	VALOR PROMEDIO
			VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	
CAL AGRÍCOLA	BULTO DE 50 KG	80	17.000	12.540	14.770
FUNGICIDA BIOLÓGICO EN POLVO A BASE DE TRICHODERMA SPP CON REGISTRO ICA	BOLSA 500 GRAMOS	65	49.000	40.470	44.735
INSECTICIDA BIOLÓGICO LÍQUIDO A BASE DE EXTRACTO DE AJO-AJI CON REGISTRO ICA	LITRO	64	58.000	57.760	

Centro Administrativo Municipal - CAM /
Calle 10 No. 6 - 25 Código Postal No.76126 - Tel: (2)2634306-2633470-2633363
Email: alcaldia@calimaeldarien-calle.gov.co

Santos ALIANZA
CON CALIMA EL CAJÓN
Municipio Municipal 2019-2023

Fuente: tomando de la carpeta contractual, documento análisis del sector, punto 3 estudio de la oferta, folio 43

Cuadro No. 65

comparación entre los precios promedio y la propuesta del contratista

Productos a contratar			Cotización		Valor promedio	Propuesta de ISR	Diferencia entre el promedio- ISR
Producto	Unidad	Cantidad	Cafioccidente	Ferreagro			
Cal agricola con registro ICA	Bulto de 50 kg	80	12.540	17.000	14.770	30.845	-16.075
Fulgicidad biologico en polvo a base de Trichoderma SPP con registro ICA	Bolsa de 500 gramos	65	40.470	49.000	44.735	55.820	-11.085
Inseticidad Biologico líquido a base de Extracto de ajo - aji con registro ICA	Litro	64	57.750	58.000	57.875	55.720	2.155

El costo que están pagando por la cal agrícola y el fungicida biológico es mayor valor promedio, estableciéndose diferencia en exceso por \$1.868.865, como se observa en el siguiente cuadro:

31.Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal - Adquisición de insumos agrícolas por un valor superior al del mercado

Cuadro No. 66

Productos contratados			Valor unitario	Valor total contratado (A)	Valor promedio	Valor total promedio (B)	Diferencia entre (A-B)
Producto	Unidad	Cantidad					
Cal agricola con registro ICA	Bulto de 50 kg	80	30.845	2.467.600	14.770	1.181.600	1.286.000
Fulgicidad biologico en polvo a base de Trichoderma SPP con registro ICA	Bolsa de 500 gramos	65	55.820	3.628.300	44.735	2.907.775	720.525
Inseticidad Biologico líquido a base de Extracto de ajo - aji con registro ICA	Litro	64	55.720	3.566.080	57.875	3.704.000	-137.920
Valor total				9.661.980		7.793.375	1.868.605

Fuente: municipio de Calima El Darién

Elaboro: equipo auditor

Fuente de criterio y criterio

Artículo 209 de la Constitución Política en concordancia con los Artículos 3º de la Ley 489 de 1998, artículo 83 y 84 de Ley 1474 de 2011

Estudios previos del Contrato de Suministro N°310-13-07.065 de 2022

Causa

Falta de mecanismos de seguimiento y control para garantizar que los ingresos generados por este impuesto se utilicen adecuadamente para el mantenimiento y mejora del alumbrado público.

Efecto

Menoscabo al patrimonio público, representado en el mayor valor pagado por los insumos agrícolas, daño que se cuantifica en la suma de \$1.868.865.

Lo expuesto vulnera los principios de la función administrativa: responsabilidad y economía, señalados en el Artículo 209 de la Constitución Colombiana, en concordancia con el Artículo 3 de la Ley 489 de 1998. Así mismo, tienen presuntas incidencias disciplinarias al tenor de lo estipulado en el numeral 1º del Artículo 39 de la Ley 1952 de 2019, adicionalmente pueden existir conductas fiscales por transgredir presuntamente lo establecido en los Artículos 5 y 6 de la Ley 610 del 2000.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Sea lo primero colocar de presente que las cotizaciones realizadas se hicieron en el Municipio de Calima y en el Municipio de Buga y no corresponden a la empresa que presentó su propuesta y la que finalmente resultó adjudicada, la cual correspondió a una empresa de Rionegro - Antioquia, quien fue oferente en razón a la publicidad del proceso.

El artículo 2.2.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

previos del Proceso de Contratación. Como en efecto se hizo dentro del proceso de contratación cuestionado.

Del resultado del análisis del sector se pretende estructurar el proceso de contratación, establece el valor del presupuesto así como el posible mercado donde se puedan encontrar oferentes, de acuerdo a lo cotizado, pero el análisis del sector no es camisa de fuerza, primero para que quienes coticen sean quienes se presenten en el proceso, y segundo que quienes se presenten al proceso se ciñan exclusivamente a los valores unitarios de la cotización, cuando lo que se pretende es que sea la cotización de menor valor de acuerdo al presupuesto, que incluso se ha quedado en tela de juicio, si también sería posible revisar calidades, pues la norma contractual pública solo da primacía al menor valor de la oferta, pero bajo ningún aspecto se discrimina el valor unitario, pues los precios que se obtienen en el análisis del sector, son unos precios de referencia, mas no existe obligatoriedad a que el precio unitario sea exclusivamente el mismo del análisis.

Está claro entonces que en el proceso de Selección de Mínima Cuantía, es el precio el factor de selección de la oferta, pero no el precio de cada uno de los ítems o componentes, lo cual no se encuentra consagrado en ninguna norma. Es decir, como se encuentra determinado en la Guía de Selección de Mínima Cuantía de Colombia Compra Eficiente, con soporte en la normatividad de contratación estatal, se deberá adjudicar el proceso de contratación al proponente que cumpla con todos los requisitos exigidos y que ofrezca el menor valor, menor valor del total de la oferta, no el menor valor de cada uno del componente de la propuesta.

Claramente se evidencia que en proceso de contratación en Cuestión, se determinó un presupuesto oficial de DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000), y su aceptación fue por valor de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$9.661.948), siendo la oferta de menor valor, y encontrarse dentro del presupuesto oficial, y si hubo variación de precios en unitarios son criterios del proponente, de los cuales la entidad no estaría obligada a ahondar, pues como bien se observa se trata de una empresa incluso en otro departamento, cuyos precios podrían variar por sus condiciones de mercado.

En conclusión, la Entidad dio cumplimiento a los lineamientos de selección del proceso de Mínimo cuantía, por lo cual se solicita al ente de control eliminar todo hallazgo al respecto

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Con respecto a la respuesta de la entidad es importante anotar:

El estudio del sector es un punto de referencia para la contratación y la entidad realizó varias cotizaciones y determinó un valor promedio, y a pesar de determinar un valor promedio para cada uno de los elementos, compró por un valor por encima del valor del mercado.

No es justificación que por que no se pase el presupuesto, se compre productos por encima del valor del mercado, por lo tanto, lo argumentado por la entidad no desvirtúa la observación y se confirma el hallazgo

32. Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria Incumplimiento de la experiencia

Contrato de Prestación de Servicio de Apoyo a la Gestión N°310-13-06.017 de 2022

Objeto: *Prestación de servicios de apoyo a la gestión como técnico ambiental en la secretaria de Desarrollo Rural UMATA del municipio de Calima El Darién Valle Del Cauca*

Valor \$9.210.000

Fecha de suscripción 2022/01/20

Fecha de terminación 2022/06/30

Condición (situación detectada de incumplimiento)

En el proceso de contratación de la técnica ambiental para la secretaria de Desarrollo Rural UMATA, se identificó que la candidata seleccionada no cumplía con los requisitos mínimos de experiencia, ya que exigía un año de experiencia relacionada con el objeto contractual. El título de la candidata seleccionado es técnico en manejo ambiental del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del 5 de mayo del 2021.

Criterio y fuente de criterio

Artículo 209 de la Constitución Política en concordancia con los Artículos 3º de la Ley 489 de 1998, Minuta contractual

Causa

Falta de planificación en la elaboración del proyecto que sustenta esta contratación y deficientes controles en las respectivas instancias que deben revisar y evaluar las diferentes etapas de la contratación.

Efecto

Existe un riesgo significativo de que el proyecto no se gestione de manera efectiva y se enfrente a problemas debido a la falta de experiencia del técnico.

Lo expuesto vulnera los principios de la función administrativa: responsabilidad y economía, señalados en el Artículo 209 de la Constitución Colombiana, en concordancia con el Artículo 3 de la Ley 489 de 1998. Así mismo, tienen presuntas incidencias disciplinarias al tenor de lo estipulado en el Artículo 39 de la Ley 1952 de 2019.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

En el estudio previo se definió como perfil tener Formación Académica en Manejo Ambiental, del cual no se estima un tiempo de obtención del título, y experiencia de 1 año de acuerdo al Objeto Contractual, mas no se determina que la experiencia sea profesional, sino que esta sea de acuerdo con el objeto contractual lo que se asimila como actividades relacionadas con el objeto contractual.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

En cuanto a la experiencia relacionada Esta es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones similares a las del cargo a proveer o en una determinada área de trabajo o área de la profesión, ocupación, arte u oficio, es decir que se requería que la contratista hubiera desarrollado actividades similares, pues de esta experiencia no se exigió que fuera profesional relacionada.

Para el caso específico, la señora NILSA MARIA QUINTERO LOPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.112.880.048, cuenta con certificación de realización de pasantías con ocasión de su formación como Técnico en Manejo Ambiental, realizadas entre el 25 de febrero de 2020 al 24 de agosto de 2020 (6 meses), más el desarrollo del contrato de Prestación de Servicios suscrito en el año 2021, con objeto que desarrollaba actividades relacionadas, estando así el cumplimiento de experiencia.

En conclusión, la Entidad dio cumplimiento a los lineamientos de selección de la contratista, por lo cual se solicita al ente de control eliminar todo hallazgo al respecto.

ANEXOS:

- Certificación de Pasantías y Bitácoras 2020
- Certificación Ejecución contratos incluida 2021

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

La experiencia que se exige en el contrato es un año de experiencia relacionada con el objeto contractual, y el objeto contractual es como técnico ambiental, y la contratista se graduó el 5 de mayo del 2021 y se contrató el 20 de enero del 2022, por lo tanto, no cumple con la experiencia exigida en el cargo. Por lo tanto, lo argumentado por la entidad no desvirtúa la observación, confirmando el hallazgo

33.Observación Administrativa con presuntas incidencias Disciplinaria - Pago de Transacción y sentencias

Condición (situación detectada de incumplimiento)

Se observó que en la vigencia 2019, se realizó Transacción por un valor superior a \$8000 millones de pesos con persona jurídica, en la misma se acordó que en caso de incumplimiento habría lugar a una cláusula penal pecuniaria por \$500 millones de pesos. La mencionada transacción se empezaría a pagar en la vigencia 2020. La actual administración estimó inconsistencias en la transacción, pero no generó ningún tipo de actuación contingente.

Al momento de la auditoría se constata que se inició el procedimiento judicial de cobro, lo que conlleva a un perjuicio grave en contra de los intereses del municipio, pues no solamente se habrán de cobrar el capital acordado y los intereses, sino también la multa por el no pago.

Como quiera que se evidencia que no se han realizado otros pagos de sentencias condenatorias a la fecha, tales eventos y su reliquidación hacen más onerosa la carga del municipio, contra expresa prohibición en tal sentido.

33.Observación Administrativa con presuntas incidencias Disciplinaria - Pago de Transacción y sentencias

Fuente de Criterio y criterio

Constitución Nacional, artículo 209; Ley 489 de 1998, artículos 3 y 4; Decreto 111 artículo 21, artículos 45 y 112 Parágrafo.

Causa

Omisión del deber de cuidado. Inobservancia en la ejecución de los pagos decretados en Sentencias y transacciones.

Efecto

Pérdida de recursos, posibles detrimentos patrimoniales que pueden lesionar financieramente al municipio, y generar una reestructuración del municipio

Las conductas descritas generan una Observación Administrativa con incidencia disciplinaria; al tenor de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

OBSERVACIÓN 33: Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria - Pago de Transacción y sentencias.

TEMA DE COMFANDI DEL CONTRATO Se encuentra en el expediente el oficio ATG-1010-10-1-25 del 4 de febrero de 2022 remitiendo el contrato de transacción por \$8.382.38.418.00 para que se emita concepto jurídico sobre el contrato de transacción del que se conoce que fue

AUTO INTERLOCUTORIO No. 565 de fecha 19 de noviembre de 2020 El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito se pronuncia sobre la solicitud de “terminación anormal del proceso por transacción”.

Extrapolando el referido precedente jurisprudencial al caso en particular, se observa la entidad ejecutada municipio de Calima El Darién (V.) no propuso excepciones de fondo, comoquiera que una vez notificado del presente proceso ejecutivo, procedió a contestar la demanda sin proponer excepciones de fondo y así lo hizo constar la Secretaría del Despacho a folio 150 del cuaderno principal, tanto es así, que ante la falta de excepciones de fondo el Despacho emitió el Auto Interlocutorio No. 678 del 31 de agosto 2015 (fls. 151 a 154 del C. Ppal.) ordenando seguir adelante la ejecución, por tanto, no procede la transacción toda vez que no existe duda sobre el derecho reclamado

PRIMERO. - Negar la solicitud de terminación del proceso por transacción, de conformidad con lo analizado ampliamente en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. - Ejecutoriada esta providencia, por la Secretaría procédase de conformidad según la etapa procesal en que se encuentre el presente asunto.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

AUTO DE SUSTANCIACIÓN No. 243 conceder en el efecto suspensivo y ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte ejecutante, en contra del Auto Interlocutorio No. 565 del 19 de noviembre de 2020, mediante el cual se negó la solicitud de terminación del proceso de la referencia por transacción.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

No se adjuntaron archivos para ser revisados, la carpeta está vacía



Al evaluar las premisas de la defensa del municipio, nos encontramos que, resulta inconexo el sentido de la redacción inicial: *“TEMA DE COMFANDI DEL CONTRATO Se encuentra en el expediente el oficio ATG-1010-10-1-25 del 4 de febrero de 2022 remitiendo el contrato de transacción por \$8.382.38.418.00 para que se emita concepto jurídico sobre el contrato de transacción del que se conoce que fue”??*, ante la falta de un sentido claro, nos abstendremos de pronunciarnos frente a esta parte.

Posteriormente se evidencia una redacción de dos Autos Interlocutorios, que pudieron traerse en medio electrónico, pues los escritos *per se* no implican unidad de contenido con el que pueda existir en una instancia judicial, contando la primera parte, presuntamente de la negativa del despacho de conocimiento a la Transacción y en el segundo concediendo en efecto suspensivo ante el Tribunal Contencioso Administrativo el recurso.

Lo anterior, no es óbice para desconocer las obligaciones adquiridas, pues la transacción constituye un nuevo título, que puede y se está haciendo exigible en contra del municipio. En consonancia con lo anterior, tampoco se está respondiendo por otras condenas en firme en contra del municipio, como no está operativo el Comité de Conciliación se siguen evidenciando, los errores en la defensa judicial del ente territorial.

Así las cosas, es pertinente señalar que frente a la responsabilidad de los funcionarios públicos se pronunció la Corte Constitucional en sentencia SU259 de 2021, en donde señala: **“Los servidores y ex-servidores públicos, de los particulares que cumplen funciones públicas y de los contratistas de la administración, que con su actuar doloso o gravemente culposo, hayan causado un daño antijurídico imputable, en principio, al Estado”**^[53].

51. La Corte ha definido la acción de repetición como el medio judicial idóneo que la Constitución y la ley le otorgan a la Administración Pública para obtener de sus funcionarios o exfuncionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer como resultado de una condena de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por los daños antijurídicos que haya causado^[54]. En la sentencia C-832 de 2001 determinó que la acción

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

de repetición, además de proteger el patrimonio y la moralidad administrativa, estimula el correcto ejercicio de la función pública:

“Por último, es importante resaltar que la acción de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, como lo señala el artículo 2 de la Constitución Política. “Si el legislador no hubiese creado mecanismos procesales para poder vincular a los funcionarios con el objeto de determinar si su conducta dolosa o gravemente culposa es la causa de la condena impuesta por el juez a la entidad, el Estado se encontraría sin herramientas para la defensa de la integridad de su patrimonio y para preservar la moralidad pública.”

52. **Asimismo, el Consejo de Estado ha identificado que “un efecto indirecto de esta acción se dirige a la reducción del manejo indebido de los dineros y bienes públicos, pues este mecanismo procesal se establece como la herramienta propicia para que las entidades públicas actúen contra los agentes que por conductas arbitrarias han generado una condena en contra del Estado, más aún, cuando se cuenta con la posibilidad de perseguir, directamente, su patrimonio, a través de medidas cautelares o de la ejecución de la sentencia”.** Bajo esa perspectiva “cuando una entidad pública interpone una acción de repetición, ejerce el derecho constitucional de acudir a la jurisdicción, para efectos de subsanar el desmedro patrimonial acaecido en razón del pago indemnizatorio realizado”^[55].

53. Tanto esta corporación como el Consejo de Estado^[56] coinciden en sostener que la acción de repetición no tiene por objeto medular imponer una sanción, sino que ella tiene “un carácter reparatorio o resarcitorio”^[57]. Su objeto consiste en “obtener el reembolso para el erario público de sumas de dinero pagadas como consecuencia del daño antijurídico ocasionado por un servidor estatal”^[58]. No obstante, si bien la acción de repetición es de carácter resarcitorio civil, también tiene funciones retributiva y preventiva^[59]. Tales características, sostiene la Corte, resultan relevantes a efectos de atender las tensiones que se derivan en su aplicación^[60]. Igualmente han precisado que la acción de repetición se caracteriza por ser subsidiaria^[61], subjetiva^[62] y sujetarse a criterios de proporcionalidad^[63].

54. De esta manera debe la Corte en esta ocasión enfatizar en que, si bien se trata de una acción con la finalidad específica de reintegrar al patrimonio del Estado lo pagado, ello no conspira con la necesidad de analizar toda la temática que gira a su alrededor con la lupa de tratarse del análisis de una **conducta humana reprochable. En esa medida todos los principios que se despliegan en un análisis de conducta son necesaria e imprescindiblemente aplicables. De no ser así, no se hubiera tomado el trabajo el constituyente originario de exigir dolo o culpa grave en el artículo 90 superior. De suerte que impera observar, caso a caso, si la persona de quien se predica la posible responsabilidad, conocía los hechos que realizaba y quería su realización, o dicho de otro modo, actuó con conciencia y voluntad de realizar una conducta, la cual a su vez trasgrede el catálogo funcional que juró cumplir (art 122.2 C.Pol.) al asumir el cargo. Igualmente es posible que esa responsabilidad se predique, no ya por la comparecencia de dolo, sino porque se ha actuado de manera contraria a las normas objetivas de cuidado en el ejercicio de la función concernida en cada caso.**

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

55. En síntesis, la acción de repetición tiene por objeto (i) proteger el patrimonio público frente a las conductas dolosas o gravemente culposas de los agentes del Estado y (ii) preservar la moralidad administrativa, por medio de la reacción frente a las acciones desviadas, negligentes o sumamente imprudentes de los funcionarios-. Ha precisado, en todo caso, que dicha acción no tiene como propósito (iii) imponer cargas desproporcionadas a quien asume el ejercicio del servicio público^[64].

56. Conforme a lo anterior, la acción de repetición debe aplicarse a la luz de los diversos mandatos constitucionales que puedan encontrarse en colisión^[65]. En ese sentido, la aplicación de la figura exige una labor de ponderación a efectos de valorar la atribución de responsabilidad a título de dolo o culpa grave^[66] y establecer el remedio procedente^[67].

c) Características de la consagración constitucional de la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado

57. Como se indicó antes, la comprensión constitucional de la acción de repetición ha permitido su caracterización a efectos de entender que se trata de una acción (i) subsidiaria, dado que “su procedencia está restringida a los eventos en los que la administración sea efectivamente condenada a pagar una indemnización por el daño antijurídico causado con dolo o culpa grave por parte de uno de sus agentes”; (ii) subjetiva, pues “depende de la demostración de que el daño que debió indemnizar el Estado fue causado con dolo o culpa grave por parte de uno de sus funcionarios, por lo que no cualquier equivocación o descuido permite que se ejecute la acción de regreso, pues se requiere que ante la autoridad competente se acredite plenamente que la conducta que derivó en el menoscabo obedeció a un supuesto de imprudencia calificada o de arbitrariedad”; y (iii) se sujeta a criterios de proporcionalidad de modo que la repetición al agente del Estado - por el valor de la indemnización que debió ser asumida por la administración- debe efectuarse sin incurrir en excesos^[68]. La mencionada ponderación entre principios constitucionales debe llevarse a cabo en el ejercicio de la acción de repetición, tanto en “(i) la valoración de la atribución de responsabilidad a título de dolo o culpa grave (elemento subjetivo), como en la formulación (ii) del remedio previsto, cual es el regreso de lo pagado por el Estado”^[69].

...

Jurisprudencia del Consejo de Estado

59. La Ley 678 de 2001 reglamenta actualmente la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o del llamamiento en garantía con fines de repetición. Sin embargo, sus disposiciones no son aplicables a hechos ocurridos antes de su vigencia^[73]. En estos casos, ha dicho el Consejo de Estado, es necesario acudir a lo previsto en los artículos 77 y 78 del Decreto Ley 01 de 1984^[74]. Debido a esta circunstancia, esa Corporación ha previsto reglas distintas para cada uno de los regímenes normativos en lo que respecta a la determinación del dolo y la culpa grave de los agentes del Estado^[75].

60. En lo concerniente a los hechos ocurridos antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001, el Consejo de Estado ha tenido en cuenta lo previsto en el artículo 63 del Código Civil frente a la culpa grave y el dolo^[76]. Además, ha reconocido que esas previsiones deben armonizarse con los artículos 6 y 91 de la Constitución, así como

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

con los conceptos de buena y mala fe que en esta se mencionan^[77], y que en su aplicación es necesario dimensionar las “características particulares del caso”^[78]. En este sentido, ha establecido que los jueces al examinar la culpa grave y el dolo no deben “limitarse a tener en cuenta únicamente la definición que de estos conceptos trae el Código Civil referidos al modelo del buen padre de familia para establecerla por comparación con la conducta que en abstracto habría de esperarse del ‘buen servidor público’^[79], sino que deben conciliarla con esos artículos de la Constitución...” (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

Acorde con lo anterior, ha señalado el Consejo de Estado en su Sección Segunda, Subsección B, consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, 14 de agosto de 2020; radicación No. 25000-23-42-000-2017-00876-01(4811-19):

“Conforme al artículo 209²⁰ de la Constitución Política, establece que la función administrativa tiene como fin el interés general y esta debe llevarse a cabo con sujeción a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, de manera que las autoridades administrativas deben realizar y coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Sumado a esto, la mencionada norma fundamental fijó un control sobre las actuaciones de la administración que debe encuadrar en los preceptos de responsabilidad fijados en sentido amplio, es decir, la infracción de la constitución y las leyes, tal como lo establece el artículo 6. C.N.²¹; además del incumplimiento de las funciones fijadas en la Ley o reglamentos específicos, tal como lo dispuso el artículo 122 de la norma Ibídem²².

En este orden de ideas, los mencionados funcionarios adquieren responsabilidad disciplinaria en el desempeño de sus deberes funcionales, dependiendo la asunción de competencias asignadas. En consecuencia, conforme a lo dispuesto por la Ley ⁷³⁴ de 2002²³, aquellos son sujetos disciplinables con la obligación de garantizar la función pública, tal como disponen lo artículos ²² y ²³ de la citada norma:

«[...] ARTÍCULO 22. GARANTÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. El sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

ARTÍCULO 23. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento. [...]»

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

En este orden de ideas, es necesario precisar que la finalidad de la Ley 734 de 2002 es la de garantizar el cumplimiento de los fines y funciones del Estado respecto a las conductas de los servidores públicos que los afecten o pongan en peligro, a través de la acción disciplinaria. Al respecto, a través de la Sentencia C-948 de 2002, la Corte Constitucional, sostuvo: «[...] las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública. [...]».

El derecho disciplinario como expresión de la facultad sancionatoria del Estado observa los postulados propios del debido proceso, de manera que en atención a su naturaleza y bienes jurídicos protegidos deben observarse principios como el de legalidad y tipicidad que la conducta que constituye falta disciplinaria y, en consecuencia, sanción, previamente, haya sido consagradas por el legislador. Sin embargo, no puede desconocerse que en el ámbito del derecho disciplinario la descripción de la conducta sancionable requiere una interpretación flexible, ya que, generalmente, la norma disciplinaria no es autónoma y exige recurrir a cuestiones reglamentadas en normas específicas relativas a la materia.

De esta manera, toda vez que en el derecho disciplinario la conducta sancionable tiene que ver con el desconocimiento del servidor público ya sea de sus deberes, prohibiciones o el régimen de incompatibilidades e inhabilidades, la precisión de la conducta típica no es igual a la del derecho penal, en tanto que la misma se estructura a través del complemento normativo que rige la actividad, por lo que las faltas se consagran en tipos abiertos, lo que se justifica en «[...] la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos donde se subsuman todas aquellas conductas que están prohibidas a las autoridades o de los actos antijurídicos de los servidores públicos²⁴ [...]».

Así pues, en el presente asunto se evidencia que la falta atribuida al demandante se estructuró de la siguiente manera. La conducta imputada al señor Juan Bautista Hernández Rodríguez constituyó una vulneración de las siguientes disposiciones de la Ley 734 de 2002:

«[...] ARTÍCULO 23. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento.

ARTÍCULO 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.

Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.

[...]

21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.

22. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.

[...]” (Negrilla y subrayado fuera del texto original). Es con fundamento en estas decisiones en donde se evidencia que por acción u omisión hay lugar a una presunta responsabilidad disciplinaria de los funcionarios de las dependencias en cita.

Por las razones expuestas, se confirma la observación y pasa a ser un hallazgo de idéntico contenido literal.

34. Observación Administrativa - Debilidades en la implementación de los ODS

Condición (situación detectada de incumplimiento)

Se evidenció que en el plan de desarrollo territorial del municipio de Calima El Darién “Somos Alianza por un Calima El Darién Sostenible y Emprendedor”, solo incorporó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la etapa del diagnóstico, no lo incorporó en su Componente Estratégico (objetivos, programas, subprogramas, metas e indicadores del plan), ni en el Plan de inversiones

Fuente de criterio y criterio

Constitución Política de Colombia en sus artículos 13, 43, 311, 339, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo artículo 2 y 32, Ley 1753 de 2015, CONPES 3918 del 15 de marzo de 2018

Causa

La situación planteada revela limitaciones en la formulación de los PDT

Efecto

La falta de alineación a nivel territorial representa un obstáculo para avanzar en la consecución de las metas de los ODS a nivel nacional.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

OBSERVACIÓN 34: Observación Administrativa - Debilidades en la implementación de los ODS.

El Plan de Desarrollo Territorial del municipio de Calima El Darién 2020-2023 se formula con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación DNP y su estrategia Gobierno Al Plan “es la estrategia para acompañar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación durante el periodo 2020 -2023... Acompañando y facilitando la gestión de las alcaldías y gobernaciones en su gobierno” (DNP<https://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmForo/HojaRuta>.)

De allí que el plan de desarrollo del municipio Calima El Darién 2020-2024 se encuentra articulado en sectores, programas, productos e indicadores de producto según la clasificación programática del gasto público del departamento Nacional de Planeación, acoplado con el Planeación del Plan de desarrollo nacional 2018-2022 Ley 1955 del 25 de mayo del 2019 periodo de gobierno de Iván Duque; mas no en la ley 1753 de 2015 que es “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” – periodo de gobierno de Juan Manuel Santos Calderón mencionada en las fuentes de criterio de la observación.

El Departamento Nacional de Planeación define la clasificación programática como una manera de agrupar, componer y presentar el gasto con el fin de establecer una relación entre este y los bienes y servicios entregados al Estado, a través del análisis de los resultados esperados en cada programa. Esto genera mayor transparencia frente a su orientación y se espera sea un instrumento de gran utilidad para la toma de decisiones en la asignación de los recursos públicos.

La ley 1955 de 2019 (Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2020 – 2023), en su artículo 38 define precisamente que el gasto público debe orientarse a resultados y establece:

La programación presupuestal debe orientarse a resultados, promover el uso eficiente y transparente de los recursos públicos y establecer una relación directa entre el ingreso, el gasto y los bienes y servicios entregados a la ciudadanía. Para el efecto, el presupuesto debe clasificarse mediante programas definidos que serán insumo para la elaboración de los planes de desarrollo y los planes plurianuales de inversión.

La información sobre programación y ejecución presupuestal de los recursos de inversión de las entidades públicas del orden nacional y territorial debe reportarse a través del sistema de información unificada establecido para tal fin, de acuerdo con los lineamientos definidos para el efecto por el Departamento Nacional de Planeación.



El presupuesto orientado a resultados y la clasificación por programas aplicará a la Nación, a las entidades territoriales y, a todas las fuentes de financiación del gasto público, de acuerdo con cada uno de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) vigentes (DNP. (v 6.8 - 2023) Dirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública, manual de clasificación programático del gasto público)

Lo anterior es relevante ya que desde la clasificación programática presupuestal los sectores, programas, producto e indicadores de producto se encuentran vinculados a los



RESPUESTA DE LA ENTIDAD

ODS desde el gobierno nacional según el Plan de desarrollo nacional 2018 y 2022 como se observa a continuación:

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Indicadores de resultado					
Sector	Indicador	Línea base	Meta del cuatrienio	ODS asociado (primario)	ODS asociado (secundario)
Agricultura y Desarrollo Rural	Área con sistemas productivos agropecuarios priorizados que implementan iniciativas para la adaptación al cambio climático*	260.626 ha	398.175 ha		

*Se priorizarán seis sistemas productivos: arroz, maíz, banano, caña de azúcar, papa y ganadería bovina.
Fuente: DNP, sectores.

Indicadores de producto						
Sector	Programa	Indicador	Línea base	Meta del cuatrienio	ODS asociado (primario)	ODS asociado (secundario)
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Gestión de la información y el conocimiento ambiental	Porcentaje de implementación del Sistema Nacional de Información de Cambio Climático	0,0 %	100,0 %		

Fuente: DNP, sectores.

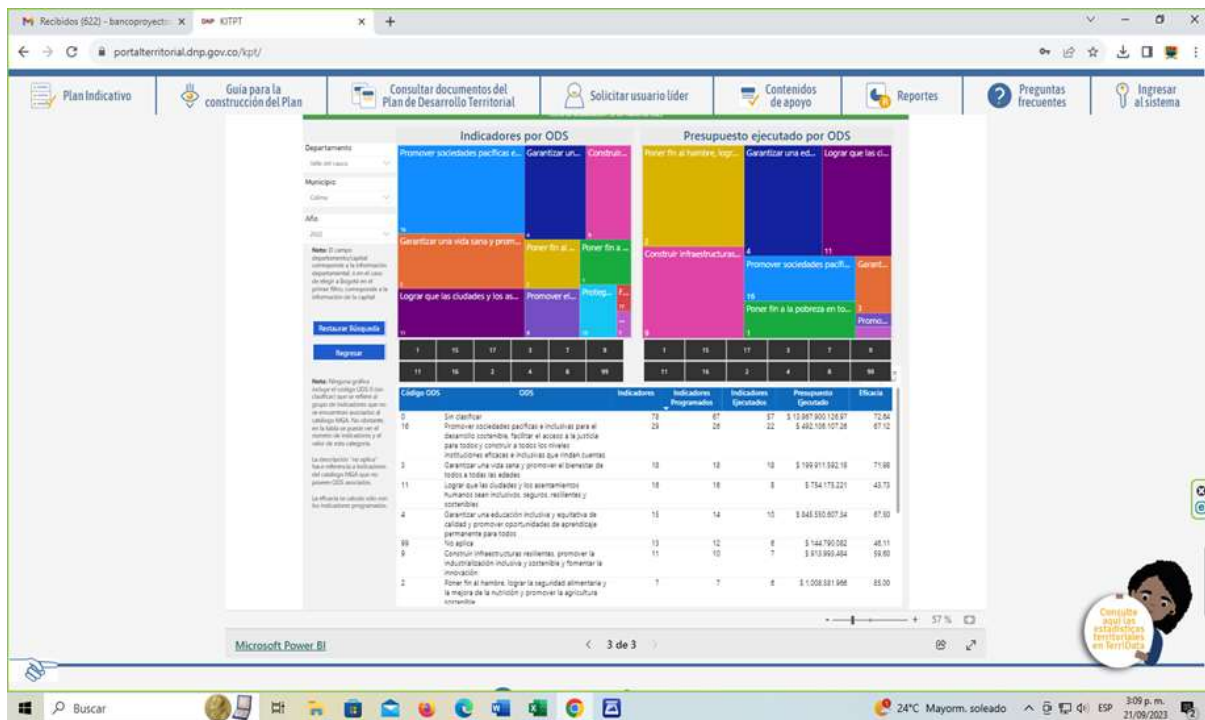
Fuente: Plan de desarrollo Nacional 2018-2022
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/portalDNP/PND-2023/PND_2018-2022/pdf/bases-pnd-2018-2022.pdf

Por lo anterior, afirmar en el efecto de la observación que “La falta de alineación a nivel territorial representa un obstáculo para avanzar en la consecución de las metas de los ODS a nivel nacional”. Yerro de la misma porque el Departamento Nacional de planeación si toma el cumplimiento de los indicadores y del gasto público del Plan de Desarrollo del municipio de Calima El Darién 2020-2023 como sumatoria en el avance de los objetivos de desarrollo sostenible de Colombia como se informa en la plataforma del DNP Kit KTP

<https://portalterritorial.dnp.gov.co/ktp/> - Reporte ODS -2020-2021-2022

Visor de Reporte Plataforma KPT del DNP

RESPUESTA DE LA ENTIDAD



Fuente: <https://portalterritorial.dnp.gov.co/kpt/> - Reporte ODS -2020-2021-2022



Fuente: <https://portalterritorial.dnp.gov.co/kpt/> - Reporte ODS -2020-2021-2022

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Código ODS	ODS	Indicadores	Indicadores Programados	Indicadores Ejecutados	Presupuesto Ejecutado	Eficacia
0	Sin clasificar	78	67	57	\$ 13.967.900.126,97	72,64
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas	29	26	22	\$ 492.106.107,26	67,12
3	Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades	10	10	10	\$ 199.911.592,10	71,90
11	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	10	10	8	\$ 754.175.221	43,73
4	Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos	15	14	10	\$ 845.550.607,34	67,50
99	No aplica	13	12	6	\$ 144.790.082	46,11
9	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación	11	10	7	\$ 913.993.434	59,60
2	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible	7	7	6	\$ 1.008.581.966	85,00

Fuente: <https://portalterritorial.dnp.gov.co/kpt/> - Reporte ODS -2020-2021-2022

Como se visualiza el gasto municipal en inversión por la vigencia 2022 en diferentes sectores es tomado por el DNP como aporte al cumplimiento de los ODS en el país como ejemplo menciona el ODS 16 que cuenta con 29 indicadores de los cuáles 26 programados y 22 ejecutados con un presupuesto de 492.106.107 y una eficacia del 67%.

Y así sucesivamente relaciona los 196 indicadores de producto del Plan de Desarrollo Territorial con los ODS.

Por lo anteriormente expuesto, solicito de la manera más comedida dejar sin efecto la observación No. 34.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

En respuesta al compromiso adquirido con la firma por parte de Colombia de la Agenda 2030, y en cumplimiento del mandato del artículo primero de la Ley 1753 de 2015, el Consejo Nacional de Política Económica y Social crea el documento CONPES 3918 del 15 de marzo de 2018, por medio del cual se establece estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia, y genera una hoja de ruta para cada una de las metas establecidas, incluyendo indicadores, entidades responsables y los recursos requeridos para llevarlas a buen término.

Se trata de 16 grandes apuestas contempladas en el documento CONPES 3918, que estimularán el cumplimiento de las 169 metas de los ODS, además de la designación de 30 entidades nacionales que serán las encargadas de liderar las acciones que hasta el año 2030 marcarán la ruta del desarrollo social y económico de los colombianos en armonía con el medio ambiente.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR



En ese contexto, y específicamente para evaluar el avance del cumplimiento del municipio de Calima El Darién, se revisó y analizó el plan de desarrollo, donde se observó que no se contemplaron las metas trazadoras con el fin de avanzar en la consecución de las metas de los ODS a nivel nacional.

Por lo tanto, lo argumentado por la entidad no desvirtuar la observación y se confirma el hallazgo para hacerle seguimiento en el plan de mejoramiento.

35. Observación Administrativa y sancionatoria - Incumplimiento de la efectividad en la evaluación del plan de mejoramiento de las vigencias 2021 y anteriores

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Una vez evaluado el Plan de Mejoramiento de la vigencia 2021 y de vigencias anteriores, se obtuvo como resultado una calificación definitiva del 21.8%, dado que las evaluaciones de las acciones correctivas se realizarán teniendo en cuenta dos variables, la primera corresponde a "Cumplimiento" y la segunda a "Efectividad", a la cual se le asigna una ponderación así: 20% "Cumplimiento" y 80% "Efectividad", respectivamente como se evidencia en el siguiente cuadro:

PLAN DE MEJORAMIENTO			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	24,4	0,20	4,9
Efectividad de las acciones	21,1	0,80	16,9
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		1,00	21,8

Calificación	
Cumple	2
Cumple Parcialmente	1
No Cumple	0

No Cumple

Fuente: Evaluación Plan de Mejoramiento
Elaborado: Equipo auditor

35. Observación Administrativa y sancionatoria - Incumplimiento de la efectividad en la evaluación del plan de mejoramiento de las vigencias 2021 y anteriores

Criterio y fuente de criterio

Artículo 15 Resolución No.009 de 2021

Causa

Lo anterior por causa de la ausencia de control, seguimiento y monitoreo al seguimiento de las acciones correctivas suscritas en el plan de mejoramiento por los procesos responsables.

Efecto

Reincidencia de los errores al interior del municipio, que impiden el avance de la gestión de la administración de manera organizada y reglada en procedimientos.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Referente a la observación del cumplimiento del plan de mejoramiento cuya evaluación generó un resultado de 21,8, en razón a que se encuentran pendientes acciones correctivas desde la vigencia 2019 y corresponden al proceso de contratación el cual no ha sido objeto de caracterización, documentación e implementación en la entidad, a pesar de los esfuerzos desarrollados por la Entidad sin que se haya podido soportar ante el ente de control lo determinado como acciones de mejora. Situación que genera que se acepte la observación.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Con fundamento en lo expresado por parte del sujeto de control, se procede a dejar en firme la observación que pasa a ser un Hallazgo de idéntica connotación, en el informe final.

36.Observación Administrativa y sancionatoria - No entrega de información dentro de los terminos establecidos en los requerimientos, durante el proceso de la auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2022.

Condición (situación detectada de incumplimiento)

Durante el proceso de ejecución de la auditoria al Municipio Calima El Darién - Valle del Cauca, la administración municipal hizo entrega parcial y extemporánea de la información requerida dentro del proceso auditor. Lo que entorpeció la labor a desarrollar.

Criterio y fuente de criterio

Articulo 101 y 102 Ley 42 de1993

Causa

Falta de control y seguimiento en los procesos. Actuaciones que disipan las actuaciones del ente de control.

Efecto

Reproceso para el ente de control, terminando dicha situación en una limitación al alcance por información incompleta.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Durante el proceso de ejecución de la Auditoría Financiera y Presupuestal Vigencia 2022 al Municipio Calima El Darién – Valle del Cauca, la administración municipal hizo entrega parcial y extemporánea de la información requerida dentro del proceso auditor. Lo que entorpeció la labor a desarrollar.

Sea lo primero ofrecer disculpas al no darse la entrega en los términos establecidos, situación que se dio a una situación involuntaria frente al acercamiento de la información de las diferentes dependencias, para ser entregada al Equipo Auditor; los funcionarios de la Administración debieron recopilar toda la información buscando ser lo más diligentes posibles, Bajo ninguna condición existió la voluntad de obstaculizar la labor del equipo auditor

En razón a ello se solicita reconsiderar la Hallazgo administrativo y sancionatoria toda vez que no existió una negativa en entregar la información requerida, sino que se debió a la necesidad de entregar la documentación lo más rápido posible y completa de acuerdo al requerimiento del equipo auditor

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

En la respuesta emitida por el Ente territorial, se encuentra implícita la confirmación de la situación endiligada, sea esta la oportunidad para reafirmar, que no se le enrostró al sujeto la no entrega de información, sino que la misma no fue entregada en oportunidad, lo que conllevó a retrasos para el proceso auditor, incluso fue necesario dejar una limitación al alcance por ésta circunstancia, para futuras referencias frente a un eventual riesgo de detección, como quiera que no contó la Contraloría Departamental, con los suministros requeridos para poder evaluar los riesgos evidenciados.

Como consecuencia de lo anterior, se procede a dejar en firme la observación que pasa a ser un Hallazgo de idéntica connotación en el informe final.

37. Observación Administrativa con presuntas incidencias Disciplinaria y Penal- Uso de bienes del municipio – Regulación y seguimiento

Observaciones Denuncias Ciudadanas

✓ **Denuncia Ciudadana No. 60 de 2023**

Condición (situación detectada de incumplimiento)

Se observó que se ha venido permitiendo el uso del espacio público, la realización de construcciones sin los licenciamientos respectivos y especialmente el cobro por parte de personas jurídicas y naturales, para el acceso a la zona del lago artificial; con la omisión del deber de cuidado por parte de la administración municipal, en tanto no se han emitido actos administrativos tendientes a la supresión y restricción de tales prácticas.

Requeridos los lineamientos adelantados por el municipio, se encontró que solamente se realizó el inicio de un procedimiento policivo sin que, hasta la fecha por parte de la secretaria de planeación, secretaría de gobierno o la alta dirección se hayan realizado las sanciones o actuaciones administrativas pertinentes para evitar futuros detrimentos al municipio; o cobros de lo no debido por parte de estos terceros.

Fuente de Criterio y criterio

Constitución Nacional, artículos 6, 102 y 362; Ley 489 de 1998, artículos 3 y 4; Ley 1801 de 2016, artículos 223 y s.s. Estatuto Tributario Municipal, artículos 354 y 355. Decreto 1504 de 1998, artículos 1 – 5.

Causa

Falta de procedimiento para el uso y manejo de los bienes del municipio o públicos.
Permisibilidad de las actuaciones de los particulares.
Omisión del deber de cuidado.

37. Observación Administrativa con presuntas incidencias Disciplinaria y Penal- Uso de bienes del municipio – Regulación y seguimiento

Efecto

Pérdida de recursos, posibles detrimentos patrimoniales por el uso de los bienes del municipio, y posibles prescripciones sobre inmuebles del municipio.

Las conductas descritas generan una Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria y penal; al tenor de lo dispuesto en la Ley 734 de 2004, numeral 1 de los artículos 34 y 35; Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39; Ley 599 de 2000, artículos 397 y 398.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Observación Administrativa con presuntas incidencias Disciplinaria y Penal- Uso de bienes del municipio – Regulación y seguimiento Condición (situación detectada de incumplimiento).

En el seguimiento, control y vigilancia que ejerce la administración municipal a los predios de su titularidad, con referencia a la entrada Nro. 4 y 5 del embalse Lago Calima, me permito ilustrar las actuaciones en cabeza de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial.

En este informe se presenta un resumen de las actividades de vigilancia, control y seguimiento de construcciones y obras. El objetivo de este informe es proporcionar una visión general de las acciones llevadas a cabo para garantizar el cumplimiento de las normativas y regulaciones en el ámbito de la construcción y obras en nuestro municipio.

I. Actividades Realizadas:

En esta sección, se detallan las actividades llevadas a cabo por la Secretaría de Planeación Municipal y Desarrollo Territorial en relación con la vigilancia, control y seguimiento de construcciones y obras.

a. Con fecha del 16 de enero de los corrientes, desde la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, se elevó oficio a Inspección de Policía, de acuerdo a un material fotográfico allegado a esta dependencia, donde se advertía el inicio de unas obras de construcción en una zona adyacente a la entrada Nro. 4, para que se suspenda todo tipo de obras iniciadas.

b. Con fecha del 17 de enero de los corrientes, se envía correo electrónico desde esta dependencia con destino a inspección de policía, solicitando con carácter urgente su intervención.

c. Con fecha del 18 de enero de los corrientes, se envía correo electrónico desde esta dependencia con destino a inspección de policía, solicitando con carácter urgente su intervención.

d. La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, con fecha del 23 de enero de los corrientes, atendió el requerimiento de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buga, dentro de la preventiva con radicado Nro. E-2023-022179 / P-2023-2765585, de igual

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

manera dentro de dichas actuaciones, se reitera nuevamente la solicitud de intervención por parte de Inspección de Policía.

II. Inspecciones y Visitas de Campo:

Me permito anexar material fotográfico de las visitas realizadas a las Entradas Nro. 4 y 5, en aras de ejercer el control, vigilancia y seguimiento a las construcciones que se estén llevando a cabo en esta zona.

III. Revisión de Documentación:

Me permito anexar la respuesta a la solicitud, con radicado Nro. 6367 del 04 de julio del 2023, en la cual se deniega el otorgamiento de licencia de construcción contigua al lago.

Dicha solicitud no se niega, dado que el diseño objeto de estudio se encuentra sobre un predio que no es propiedad del solicitante. Se trata de una propiedad del municipio sobre el cual no existe comodato vigente para su uso y/o edificación a nombre suyo o de la razón social que refiere.

De otra parte, no se encontró en los archivos de la Secretaría de Planeación, constancia de reconocimiento o permiso alguno sobre la construcción sobre la que desarrolla su actividad económica la empresa turística y comercial *El Arriero Paisa*. Con ocasión de la construcción del Parque Lineal por parte de la Gobernación del Valle del Cauca, se realizaron encuestas a los empresarios y emprendedores que ocupaban el sitio, y en ese momento, los propietarios del Restaurante “El Arriero Paisa” precisaron, que ellos habían llegado a mediados de la década de los 80’s, mucho antes, de que surgiera en el ordenamiento legal, regulación urbanística y de ordenamiento territorial.

La zona de estudio corresponde a un área Suburbana de interés turístico, donde se pretende reglamentar las intervenciones urbanísticas para el desarrollo sostenible de la infraestructura turística.

IV. Cumplimiento de Normativas:

Se verifica el cumplimiento de las normativas municipales y nacionales en las construcciones y obras.

El acuerdo 050 de 1999, PBOT en su TÍTULO IV NORMAS GENERALES. CAPÍTULO 1. AREA NO OCUPABLES ARTÍCULO 369, reza: "Son áreas no ocupables: aquellas zonas de fallas geológicas; de deslizamientos, las áreas potencialmente inestables, los buzamientos y afines de alto riesgo, en una faja que para el caso determinara los estudios de microsismicidad adelante el Municipio con el concurso de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC y el Instituto Nacional de Investigaciones Geológicas Mineras INGEOMINAS.

Para efectos del presente plan se delimita sobre una franja de trescientos metros (300 m) a cada lado de las fallas, sujetos a confirmación de las autoridades en la materia.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

PARÁGRAFO 1: Así mismo, se considera área no ocupables las áreas localizadas entre la cota 1408.5 y la cota 1410 del embalse”.

Adicionalmente, los predios propiedad del municipio alrededor del embalse no están urbanizados y no deben ser desarrollados según lo estipulado en la Ley 2 de 1959 en donde se clasifican como áreas de reserva forestal nacionales o regionales y el Artículo 2 de la Resolución 1274 de 2014 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente que señala las actividades que se pueden desarrollar en las áreas de reserva forestal nacionales o regionales, sin necesidad de efectuar la sustracción del área. (...).

V. Sanciones y Medidas Correctivas:

Se anexa material fotográfico, en la cual se evidencia la suspensión de una obra que se iniciaba contigua al embalse, en la Zona de la Entrada 5 y visitas realizadas con el fin de ejercer control, vigilancia y seguimiento.

El Control Físico y el Control Urbano, temas propios del Derecho Urbanístico, y que tienen como propósito, entre otros, velar por la integridad urbanística, necesita apalancarse en el Derecho Político o Ley 1801 de 2016, para controlar los comportamientos contrarios a la convivencia, bajo el rigor del Debido Proceso y con apego a las debidas formas legales.

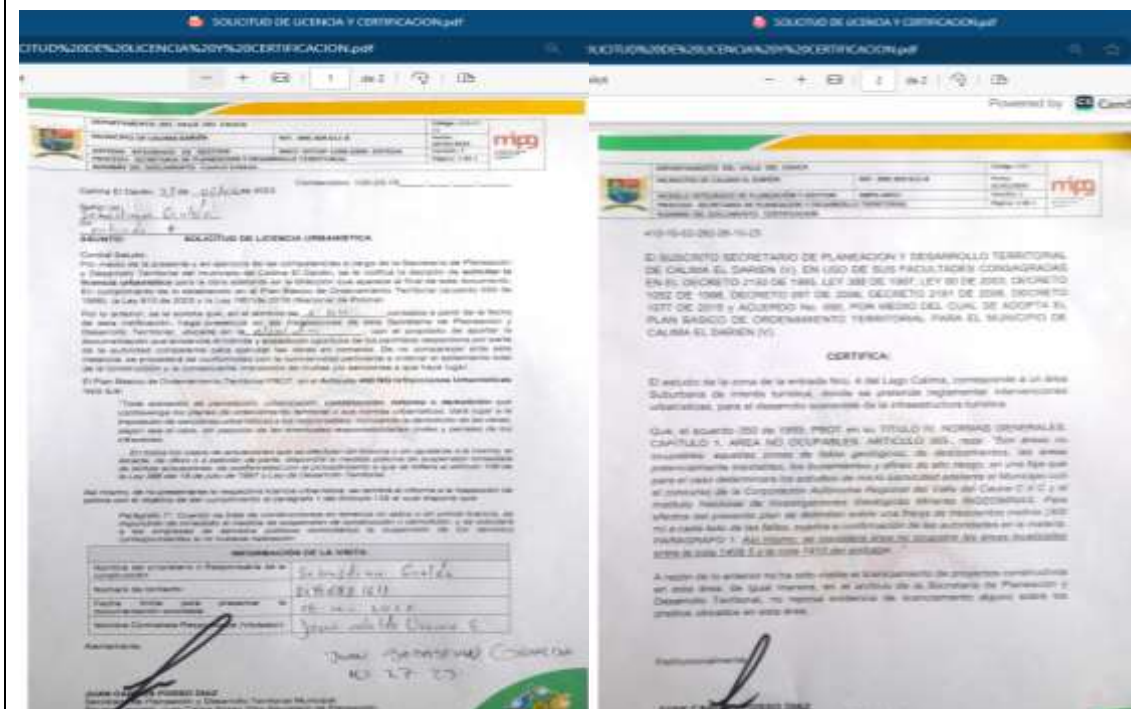
Se evidencia que la Secretaría de Planeación ha utilizado adecuadamente los instrumentos de planificación territorial, principalmente el POT, y en este período constitucional, la expedición de licencias urbanísticas y de construcción se ha realizado con el total cumplimiento de los requisitos establecidos en el ordenamiento legal. Este rigor, generó fricciones y tensiones con la Comunidad y otros actores sociales, que venían acostumbrados a la aplicación laxa de las normas, como se evidencia en las denuncias colocadas, respecto del archivo encontrado.

Por todo lo anterior, respetuosamente solicitamos se sirva levantar el hallazgo, con base en lo aportado, por no existir en la conducta una incidencia disciplinaria o penal del servidor público; en el proceder cuestionado no concurren elementos que configuren una conducta punible, y mucho menos existe un daño al patrimonio público, al igual que no existe ilicitud en la conducta del servidor público, como se pretende configurar en el informe preliminar, para que pueda pregonarse la configuración de esta categoría jurídica resulta necesario que la identidad entre el proceder del servidor público y la genérica consagración el tipo sea integral, es decir, que todos los aspectos considerados en la norma concurren en la acción u omisión investigada, pues si falta cualquier elemento de los contemplados en la norma no se concreta el delito y la actuación deviene atípica, por demás con la concurrencia de culpa, culpa grave o dolo, las cuales no existieron en el actuar de las funciones, razones suficientes para retirar el hallazgo con las incidencias disciplinaria, fiscal y penal.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR



Los documentos que a continuación se evidencian y que se trajeron a la contradicción, también habían sido objeto de revisión. Nótese que la última solicitud para la licencia de construcción está calendada, 27 de octubre de 2023 y la respuesta el 26 de octubre



CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Ahora bien, ateniéndonos al contenido del último documento no se considera área ocupable las áreas localizadas entre la Cota 1408,5 y la 1410 del embalse, no obstante, en las visitas realizadas por el auditor a las entradas 4, 5 y 6, vimos muchos establecimientos, que según manifestaron las personas que allí laboran llevan más de diez años, es decir la problemática no es exclusiva de esta administración.

Adentrándonos en las premisas de la defensa, tenemos que, el registro de las actuaciones surtidas, resulta pobre y poco eficaz, si se tiene en cuenta que la “obra suspendida”, fue terminada y se encuentra en pleno uso por cuenta del particular que la realizó en compañía de otras personas naturales y jurídicas que se están beneficiando a expensas de la falta de gestión.

Adicionalmente, cuando acota la administración: “... *no se encontró en los archivos de la Secretaría de Planeación, constancia de reconocimiento o permiso alguno sobre la construcción sobre la que desarrolla su actividad económica la empresa turística y comercial El Arriero Paisa...*” El problema adicional, es que toda la gente que llega y “compra” los espacios, crea sus negocios, etc, se están lucrando de un bien del municipio, que pertenece a todos los Darienitas, no a 10 o 20 que acaparan incluso el ingreso a las entradas del embalse, a pesar del riesgo que implica el mismo, y la responsabilidad que sobre todas estas circunstancias le compete al municipio.

Cuando la administración recalca, que: “*los propietarios del Restaurante “El Arriero Paisa” precisaron, que ellos habían llegado a mediados de la década de los 80’s, mucho antes, de que surgiera en el ordenamiento legal, regulación urbanística y de ordenamiento territorial*”. No es que no estén contando su verdad, es que el interés público prima sobre el particular y todas estas personas se han beneficiado de la propiedad del municipio sin que existan de por medio actos administrativos, contratos o cualquier otro documento jurídico que permita al municipio, restablecer el control sobre tales áreas y organizar a estos emprendedores para que paguen un aporte al municipio en retribución de su lugar de trabajo.

Aunado a lo cual que se determine que se pretenden realizar actuaciones que no se han surtido, “*La zona de estudio corresponde a un área Suburbana de interés turístico, donde se pretende reglamentar las intervenciones urbanísticas para el desarrollo sostenible de la infraestructura turística.*” y que permiten el paso de los años con total impunidad a favor de particulares, es el resultado de la falta de gestión del municipio y sus líderes.

En su respuesta el mismo municipio, observa que los predios alrededor del embalse no deben ser desarrollados, pero cada día se permite más construcciones por la vía de hecho, lo que contraría lo dispuesto en el parágrafo 1 inciso 2 del artículo 369 del Acuerdo 050 de 1999, Título IV, vigente a la fecha, cuando manifiesta: “**PARÁGRAFO 1:** ...

Adicionalmente, los predios propiedad del municipio alrededor del embalse no están urbanizados y no deben ser desarrollados según lo estipulado en la Ley 2 de 1959 en donde se clasifican como áreas de reserva forestal nacionales o regionales y el Artículo 2 de la Resolución 1274 de 2014 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente que señala las actividades que se pueden desarrollar en las áreas de reserva forestal nacionales o regionales, sin necesidad de efectuar la sustracción del área.” (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

El haber iniciado un procedimiento policivo no implica que este haya culminado satisfactoriamente, pues la obra sigue en pie y se siguen construyendo edificaciones en la zona donde “no debe haber desarrollos”, por atentar contra las áreas de reserva. La actuación desplegada es insuficiente, y permisiva, como lo fueron igualmente las administraciones pasadas, que aceptaron en asentamiento de personas que si bien no pueden prescribir los predios si los pueden usufructuar, y degradar el medio ambiente.

En este orden de ideas, no le asiste la razón al ente territorial, pues el proceder del municipio no tuvo ni tiene el resultado esperado, y sobre las demás personas que se lucran y cobran entradas, parqueo y demás no se ha hecho actuación alguna. A continuación, un extracto del papel de trabajo en donde constan los alcances de empresa que hacen convenio entre ellas para explotar la propiedad del municipio, con su silencio y anuencia:

“Hechas las indagaciones, con distintos actores, que incluyen a los concejales del municipio, el Inspector de Policía y algunos particulares, se pudo establecer que, durante más de 10 años, se ha venido presentando el uso del espacio público por parte de privados, quienes no le generan ningún tipo de ingresos al municipio por cuenta de tales manejos en relación con la zona aledaña al Embalse realizado por Epsa hoy Celsia.

Mediante solicitudes realizadas al municipio en diferentes oportunidades, se solicitaron los registros actualizados de los predios objeto de ocupación, de la misma manera, se solicitaron los contratos, actos administrativos, convenios o cualquier otro tipo de documento que sustentara la legalidad con la cual la administración municipal, de los últimos 10 años, ha venido manejando las ocupaciones al espacio público, sin que a la terminación de la ejecución de la auditoría, fueran entregados tales evidencias idóneas de gestión.

Por otra parte, se solicitó al Concejo municipal, la documentación pertinente en torno a los acuerdos o gestiones que desde este cuerpo colegiado se han realizado frente al tema de la invasión del espacio público, el continuo y notorio uso del mismo, así como las nuevas construcciones y edificaciones que se están levantando. Como resultado se recaudaron evidencias de negocios suscritos entre particulares para la explotación económica del acceso a las entradas 4 y 5, en donde personas jurídicas, toman la vocería para hacer distribución de acciones entre ellas y hacer los cobros pertinentes al sitio Público, como lo son las zonas de acceso al embalse de la hidroeléctrica, bajo el parámetro de ser parqueaderos.

En los documentos que más adelante se recaudaron, se hace evidente que se cobraron unas tarifas ciertas de las cuales dispusieron dos o tres personas jurídicas, quienes validan sus actuaciones y la explotación económica del espacio público ante la inoperancia de la gestión administrativa.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

CONVENIO DE MUTUO BENEFICIO Y COLABORACION ENTRE LA CORPORACION DE SERVICIOS TURISTICOS ENTRADAS PUBLICAS RURALES 4,5,6 (SERTUR) Y LA EMPRESA PROMOTORA LOGISTICA S.A.S

Calima el Darién, Valle del Cauca, 10 de noviembre del año 2022

REUNIDOS

De una parte, el Sr. JULIO CESAR RONDON BRAVO identificado como aparece al pie de su respectiva firma y actuando en calidad de PRESIDENTE de la corporación de servicios turísticos entradas públicas rurales 4,5,6 SERTUR identificada con el número de NIT 900388677-7 con domicilio en las inmediaciones de las playas y entradas 4,5,6 del lago calima en la vereda el vergel del municipio de Calima el Darién Valle del Cauca Colombia y en virtud de lo establecido en los estatutos de conformación de la corporación, en especial en su artículo 45 del capítulo XIII que habla de los convenios.

Y, de otra, parte el Sr. JOSE MAURICIO ACEVEDO identificado como aparece al pie de su respectiva firma, en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la empresa PROMOTORA LOGISTICA S.A.S identificada con número de NIT 901276548-9 con domicilio en el municipio de Calima el Darién Valle del Cauca Colombia en virtud de las facultades consagradas en el certificado de existencia y representación de la sociedad.

En tal sentido las partes reconocen mutuamente la capacidad legal, real y suficiente para obligar y comprometer a sus respectivas organizaciones, por lo tanto:

CONSIDERAN

I.-Que ambas organizaciones tienen objetivos comunes y/o complementarios en áreas de servicios y atención al cliente y en el desarrollo y manejo de infraestructura turística y de recursos humanos, y que por tanto la colaboración permitirá aprovechar al máximo sus potenciales, experiencias y recursos propuestos.

II.-Que tiene interés positivo la unión y la coordinación de las dos organizaciones a fin de sumar esfuerzos para establecer caminos de actuación que favorezcan e incrementen el beneficio mutuo y de los visitantes del parque lineal calima.

II.-Que ambas organizaciones han realizado un diagnóstico actual de las condiciones del

Certificado de Cámara de comercio, de una de las personas jurídicas:

CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 08/11/2022 - 15:36:05
Monto No. 6000220229, Valor 6000
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B7Q7444444

Verifique el contenido y validez de este certificado, ingresando a <https://sistema.comerciovalle.org.co> y digite el respectivo código, para que aparezca la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 2371123 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB www.cbbuga.org.co

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : PROMOTORA LOGISTICA S.A.S.
Nit : 901276548-7
Domicilio: Calima, Valle del Cauca

MATRÍCULA

Matrícula No: 70981
Fecha de matrícula: 23 de abril de 2019
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 08 de noviembre de 2022
Grupo NITF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CRA 6 NRO. 12 - 25 P 2
Municipio : Calima, Valle del Cauca
Correo electrónico : centroempresarialcalima@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3137542579
Teléfono comercial 2 : 3172459381
Teléfono comercial 3 : No reportó.
Dirección para notificación judicial : CRA 6 NRO. 12 - 25 P 2

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Como consta en el siguiente documento se realizaron solicitudes para tener audiencia en el Concejo, ya no solo para hablar de la explotación de las entradas 4 y 5, sino también la entrada 6:

Corporación de Servicios Turísticos Entradas Públicas Rurales 4 - 5 - 6
Sertur Calima
NIT.: 900386677-7

Calima el Darién, 29 de abril del 2023
Oficio No. 013-SERTUR-2023

ALCALDÍA DE CALIMA DARIÉN
CORRESPONDENCIA
RECIBO
03 MAYO 2023
HORA 9:29 AM
4323

Señor Sabas Gildardo Salazar
Presidente
Honorable Consejo Municipal
Calima el Darién
Presente.

Ref.: SOLICITUD DE AUDIENCIA DENTRO DE LA SESIÓN DEL CONSEJO.

ASUNTO: COMUNICAR TEMA DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS COMERCIANTES DARIENTAS DEL LAGO CALIMA Y TURISTAS.

Cordial Saludo

YOMAIRA LISSETH CORDERO CASTILLO, identificada como aparece al pie de mi firma, presidente de la Corporación de Servicios Turísticos Entradas Públicas Rurales 4,5,6, Sertur con NIT Nro. 900386677-7 de la Cámara de Comercio de Buga, elegida para esta dignidad en asamblea general ordinaria del 27 de marzo del año en curso, de manera respetuosa me dirijo a usted señor Presidente, para solicitar un espacio en la sesión del Honorable Concejo Municipal en el mes de Mayo, acogiéndonos a lo establecido en el Reglamento Interno, Artículo 122 y 123.

A continuación, la publicidad de los cobros que realizaron durante la vigencia 2022, las personas jurídicas Corporación de Servicios Turísticos Entradas Públicas Rurales 4, 5 y 6; Empresa Promotora Logística S.A.S.

CORPORACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS ENTRADAS PÚBLICAS RURALES 4,5,6
NIT 900386677-7
EN CONVENIO CON LA EMPRESA PROMOTORA LOGÍSTICA S.A.S
NIT 901270540-9

Sertur
Promotora Logística S.A.S

BIENVENIDO AL PARQUE INTERNACIONAL LAGO CALIMA

SEÑOR TURISTA, GRACIAS POR SU APOORTE, EL CUAL ES UTILIZADO EN LA CONSERVACIÓN Y CUIDADO DEL PARQUE, ADECUACIÓN DE ZONAS DE PARQUEO, ZONAS DE CAMPING, ZONAS DE BARRIO, ZONAS DE PISCINA, SENDEROS PEATONALES, MANTENIMIENTO DE PLAYAS, REGIÓN PISCINA DE BASURAS Y RECICLAJE, ILUMINACIÓN NOCTURNA CON LAMPARAS SOLARES, INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, RECUPERACIÓN DE MODULOS Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN CON PERSONAL DE LOGÍSTICA, ORGANIZACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA Y SEGURIDAD.

RECOMENDACIONES GENERALES

EL INGRESO AL LAGO ES BAJO TU RESPONSABILIDAD DE HACERLO SIN USAR CHALECO SALVAVIDAS (ALTO RIESGO DE HOGARMENTO) EL AGUA ES VIDA NO DEBEMOS DE CONTAMINARLA, LAVANDO VEHICULOS EN LOS AFLUENTES HÍDRICO ESTE PARAÍSO DEBEMOS MANTENERLO MÁS LIMPIO SI DEPOSITAMOS LA BASURA EN SU LUGAR, CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

RECOMENDACIONES GENERALES

RESPECTEMOS LA DEMARCAÇÃO VEHICULAR, USEMOS LOS SENDEROS PEATONALES, ACATAMOS LAS INSTRUCCIONES LOGÍSTICAS EN LOS PARQUEADEROS OFRECIDOS EN LAS ENTRADAS AL PARQUE, NO DEJE OBJETOS DE VALOR DENTRO DEL VEHICULO SON SU RESPONSABILIDAD EL PARQUE NO RESPONDE NI SE HACE RESPONSABLE POR HURTOS Y PERDIDAS DE ELEMENTOS.

CONTRATO DE APARCAMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

Para los efectos del contrato de depósito que aquí se celebra, el depositante declara: 1) Que tiene asegurado el vehículo contra todos los riesgos hasta por su valor su valor comercial, comprometiéndose a dirigir toda la declaración a la respectiva compañía de seguros. 2) Que conoce y acepta el contenido de las cláusulas de este contrato, las cuales son suficientes y adecuadas. 3) Que en caso de cualquier siniestro del vehículo depositante debe responder hasta el límite del valor del vehículo como indemnización de perdidas. 4) Que el depositante entrega el vehículo a la persona que actúa esta boleto de depósito en una indemnización de su responsabilidad por el depósito. 5) Que el depositante acepta la responsabilidad de la conservación de la cosa y los perjuicios que por culpa del depositante la haya ocasionado al depósito. 6) Que el depositante se obliga a las indemnizaciones ofrecidas aplicables a la operación de parqueaderos. Las cláusulas anteriores fueron discutidas libremente y las acepta el depositante por el solo hecho de haberse firmado y no requiere de su firma para su validez.

CARRO \$10.000
MOTO \$5.000

PLACA: No 1614

Se hicieron entrevistas con el Presidente del Concejo, quien manifestó la negativa de esta colegiatura en aprobar el acuerdo propuesto por la administración municipal, en tanto todas

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

estas gestiones políticas se realizan, se siguen usufructuando las casetas dentro de la obra denominada PARQUE LINEAL, misma que nunca se finiquitó, y de la cual quedaron una serie de construcciones que son utilizadas por particulares con la anuencia de la administración.

Se observan una serie de empresas de personas naturales, restaurantes, una escuela náutica, entre otros, que no pagan Ningún tipo de arrendamiento al municipio y están alegando ser poseedores del bien inmueble público de uso fiscal. De otro lado, se aprecia nueva construcción que se evidencia avanzada, en donde también otro nuevo particular se encuentra realizando gestiones en el sitio del municipio, sin que a la fecha se hayan expedido los actos administrativos sancionatorios de la invasión del espacio público.” (Hasta aquí lo traído del papel de Trabajo).

En este orden de ideas, se hace necesario acotar, que se está vulnerando el interés general, al permitir que unos pocos se benefician de los ingresos que no les pertenecen a ellos sino a la comunidad por cuenta de la acción u omisión de la alta administración del municipio, lo que conlleva responsabilidad por omisión de la labor que compete a sus funciones.

Frente a la **responsabilidad de los funcionarios públicos** se pronunció la Corte Constitucional en sentencia SU259 de 2021, en donde señala: **“Los servidores y ex-servidores públicos, de los particulares que cumplen funciones públicas y de los contratistas de la administración, que con su actuar doloso o gravemente culposo, hayan causado un daño antijurídico imputable, en principio, al Estado”**^[53].

51. La Corte ha definido la acción de repetición como el medio judicial idóneo que la Constitución y la ley le otorgan a la Administración Pública para obtener de sus funcionarios o exfuncionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer como resultado de una condena de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por los daños antijurídicos que haya causado^[54]. En la sentencia C-832 de 2001 determinó que la acción de repetición, además de proteger el patrimonio y la moralidad administrativa, estimula el correcto ejercicio de la función pública:

“Por último, es importante resaltar que la acción de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, como lo señala el artículo 2 de la Constitución Política. “Si el legislador no hubiese creado mecanismos procesales para poder vincular a los funcionarios con el objeto de determinar si su conducta dolosa o gravemente culposa es la causa de la condena impuesta por el juez a la entidad, el Estado se encontraría sin herramientas para la defensa de la integridad de su patrimonio y para preservar la moralidad pública.”

52. Asimismo, el Consejo de Estado ha identificado que **“un efecto indirecto de esta acción se dirige a la reducción del manejo indebido de los dineros y bienes públicos, pues este mecanismo procesal se establece como la herramienta propicia para que las entidades públicas actúen contra los agentes que por conductas arbitrarias han generado una condena en contra del Estado, más aún, cuando se cuenta con la posibilidad de perseguir, directamente, su patrimonio, a través de medidas cautelares o de la ejecución de la sentencia”**. Bajo esa perspectiva “cuando

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

una entidad pública interpone una acción de repetición, ejerce el derecho constitucional de acudir a la jurisdicción, para efectos de subsanar el desmedro patrimonial acaecido en razón del pago indemnizatorio realizado”^[55].

53. Tanto esta corporación como el Consejo de Estado^[56] coinciden en sostener que la acción de repetición no tiene por objeto medular imponer una sanción, sino que ella tiene “un carácter reparatorio o resarcitorio”^[57]. Su objeto consiste en “obtener el reembolso para el erario público de sumas de dinero pagadas como consecuencia del daño antijurídico ocasionado por un servidor estatal”^[58]. No obstante, si bien la acción de repetición es de carácter resarcitorio civil, también tiene funciones retributiva y preventiva^[59]. Tales características, sostiene la Corte, resultan relevantes a efectos de atender las tensiones que se derivan en su aplicación^[60]. Igualmente han precisado que la acción de repetición se caracteriza por ser subsidiaria^[61], subjetiva^[62] y sujetarse a criterios de proporcionalidad^[63].

54. De esta manera debe la Corte en esta ocasión enfatizar en que, si bien se trata de una acción con la finalidad específica de reintegrar al patrimonio del Estado lo pagado, ello no conspira con la necesidad de analizar toda la temática que gira a su alrededor con la lupa de tratarse del análisis de una **conducta humana reproachable**. **En esa medida todos los principios que se despliegan en un análisis de conducta son necesaria e imprescindiblemente aplicables. De no ser así, no se hubiera tomado el trabajo el constituyente originario de exigir dolo o culpa grave en el artículo 90 superior. De suerte que impera observar, caso a caso, si la persona de quien se predica la posible responsabilidad, conocía los hechos que realizaba y quería su realización, o dicho de otro modo, actuó con conciencia y voluntad de realizar una conducta, la cual a su vez trasgrede el catálogo funcional que juró cumplir (art 122.2 C.Pol.) al asumir el cargo. Igualmente es posible que esa responsabilidad se predique, no ya por la comparecencia de dolo, sino porque se ha actuado de manera contraria a las normas objetivas de cuidado en el ejercicio de la función concernida en cada caso.**

55. **En síntesis, la acción de repetición tiene por objeto (i) proteger el patrimonio público frente a las conductas dolosas o gravemente culposas de los agentes del Estado y (ii) preservar la moralidad administrativa, por medio de la reacción frente a las acciones desviadas, negligentes o sumamente imprudentes de los funcionarios.** Ha precisado, en todo caso, que dicha acción no tiene como propósito (iii) imponer cargas desproporcionadas a quien asume el ejercicio del servicio público^[64].

56. Conforme a lo anterior, la acción de repetición debe aplicarse a la luz de los diversos mandatos constitucionales que puedan encontrarse en colisión^[65]. En ese sentido, la aplicación de la figura exige una labor de ponderación a efectos de valorar la atribución de responsabilidad a título de dolo o culpa grave^[66] y establecer el remedio procedente^[67].

c) Características de la consagración constitucional de la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado

57. Como se indicó antes, la comprensión constitucional de la acción de repetición ha permitido su caracterización a efectos de entender que se trata de una acción (i) subsidiaria, dado que “su procedencia está restringida a los eventos en los que la administración sea efectivamente condenada a pagar una indemnización por el daño antijurídico causado con dolo o culpa grave por parte de uno de sus agentes”; (ii) subjetiva,

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

pues “depende de la demostración de que el daño que debió indemnizar el Estado fue causado con dolo o culpa grave por parte de uno de sus funcionarios, por lo que no cualquier equivocación o descuido permite que se ejecute la acción de regreso, pues se requiere que ante la autoridad competente se acredite plenamente que la conducta que derivó en el menoscabo obedeció a un supuesto de imprudencia calificada o de arbitrariedad”; y (iii) se sujeta a criterios de proporcionalidad de modo que la repetición al agente del Estado - por el valor de la indemnización que debió ser asumida por la administración- debe efectuarse sin incurrir en excesos^[68]. La mencionada ponderación entre principios constitucionales debe llevarse a cabo en el ejercicio de la acción de repetición, tanto en “(i) la valoración de la atribución de responsabilidad a título de dolo o culpa grave (elemento subjetivo), como en la formulación (ii) del remedio previsto, cual es el regreso de lo pagado por el Estado”^[69].

...

Jurisprudencia del Consejo de Estado

59. La Ley 678 de 2001 reglamenta actualmente la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o del llamamiento en garantía con fines de repetición. Sin embargo, sus disposiciones no son aplicables a hechos ocurridos antes de su vigencia^[73]. En estos casos, ha dicho el Consejo de Estado, es necesario acudir a lo previsto en los artículos 77 y 78 del Decreto Ley 01 de 1984^[74]. Debido a esta circunstancia, esa Corporación ha previsto reglas distintas para cada uno de los regímenes normativos en lo que respecta a la determinación del dolo y la culpa grave de los agentes del Estado^[75].

60. En lo concerniente a los hechos ocurridos antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001, el Consejo de Estado ha tenido en cuenta lo previsto en el artículo 63 del Código Civil frente a la culpa grave y el dolo^[76]. Además, ha reconocido que esas previsiones deben armonizarse con los artículos 6 y 91 de la Constitución, así como con los conceptos de buena y mala fe que en esta se mencionan^[77], y que en su aplicación es necesario dimensionar las “características particulares del caso”^[78]. En este sentido, ha establecido que los jueces al examinar la culpa grave y el dolo no deben “limitarse a tener en cuenta únicamente la definición que de estos conceptos trae el Código Civil referidos al modelo del buen padre de familia para establecerla por comparación con la conducta que en abstracto habría de esperarse del ‘buen servidor público’”^[79], sino que deben conciliarla con esos artículos de la Constitución... (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

Acorde con lo anterior, ha señalado el Consejo de Estado en su Sección Segunda, Subsección B, Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, 14 de agosto de 2020; radicación No. 25000-23-42-000-2017-00876-01(4811-19):

“Conforme al artículo 209²⁰ de la Constitución Política, establece que la función administrativa tiene como fin el interés general y esta debe llevarse a cabo con sujeción a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, de manera que las autoridades administrativas deben realizar y coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Sumado a esto, la mencionada norma fundamental fijó un control sobre las actuaciones de la administración que debe encuadrar en los preceptos de responsabilidad fijados en sentido amplio, es decir, la infracción de la constitución y las leyes, tal como lo establece el artículo 6. C.N.²¹; además del incumplimiento de las funciones fijadas en la Ley o reglamentos específicos, tal como lo dispuso el artículo 122 de la norma Ibídem²².

En este orden de ideas, los mencionados funcionarios adquieren responsabilidad disciplinaria en el desempeño de sus deberes funcionales, dependiendo la asunción de competencias asignadas. En consecuencia, conforme a lo dispuesto por la Ley **734** de 2002²³, aquellos son sujetos disciplinables con la obligación de garantizar la función pública, tal como disponen lo artículos **22** y **23** de la citada norma:

«[...] ARTÍCULO 22. GARANTÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. El sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

ARTÍCULO 23. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento. [...]»

En este orden de ideas, es necesario precisar que la finalidad de la Ley 734 de 2002 es la de garantizar el cumplimiento de los fines y funciones del Estado respecto a las conductas de los servidores públicos que los afecten o pongan en peligro, a través de la acción disciplinaria. Al respecto, a través de la Sentencia C-948 de 2002, la Corte Constitucional, sostuvo: «[...] las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública. [...]».

El derecho disciplinario como expresión de la facultad sancionatoria del Estado observa los postulados propios del debido proceso, de manera que en atención a su naturaleza y bienes jurídicos protegidos deben observarse principios como el de legalidad y tipicidad que la conducta que constituye falta disciplinaria y, en consecuencia, sanción, previamente, haya sido consagradas por el legislador. Sin embargo, no puede desconocerse que en el ámbito del derecho disciplinario la descripción de la conducta sancionable requiere una interpretación flexible, ya que, generalmente, la norma disciplinaria no es autónoma y exige recurrir a cuestiones reglamentadas en normas específicas relativas a la materia.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

De esta manera, toda vez que en el derecho disciplinario la conducta sancionable tiene que ver con el desconocimiento del servidor público ya sea de sus deberes, prohibiciones o el régimen de incompatibilidades e inhabilidades, la precisión de la conducta típica no es igual a la del derecho penal, en tanto que la misma se estructura a través del complemento normativo que rige la actividad, por lo que las faltas se consagran en tipos abiertos, lo que se justifica en «[...] la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos donde se subsuman todas aquellas conductas que están prohibidas a las autoridades o de los actos antijurídicos de los servidores públicos²⁴ [...]».

Así pues, en el presente asunto se evidencia que la falta atribuida al demandante se estructuró de la siguiente manera. La conducta imputada al señor Juan Bautista Hernández Rodríguez constituyó una vulneración de las siguientes disposiciones de la Ley 734 de 2002:

«[...] ARTÍCULO 23. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento.

ARTÍCULO 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.

Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.
[...]

21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.

22. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.

[...]” (Negrilla y subrayado fuera del texto original). Es con fundamento en estas decisiones en donde se evidencia que por acción u omisión hay lugar a una presunta responsabilidad disciplinaria de los funcionarios y ex funcionarios de la alta administración municipal.

Por las razones expuestas, se confirma la observación y pasa a ser un hallazgo de idéntico contenido literal.

38. Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria - Presentación de proyecto de vivienda - Documentos de ley

Condición (situación detectada de incumplimiento)

En la vigencia 2023, la administración municipal presenta ante el Concejo Municipal de Calima El Darién, proyecto de Acuerdo, con el fin de promover solución de vivienda de interés social, aludiendo que el mismo cumplía con la normatividad que rige la materia. Este proyecto no estuvo acompañado de los documentos correspondientes para tal afirmación, como quiera que no contaba con la viabilidad de los servicios públicos, ni se ha realizado cambio de los determinantes ambientales por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en tal sentido, que permita la implementación de soluciones de vivienda en lo que hoy por hoy sigue siendo zona rural del municipio.

Hecha visita a la planta de tratamiento se constata que la misma no tiene la capacidad necesaria para atender a mayor cantidad de usuarios, debido a fallas estructurales por falta de Tanque de almacenamiento.

Así mismo, el Concejo municipal omitió su deber de cuidado, al estudiar y aprobar Acuerdos municipales, sin la revisión técnica de los aspectos legales pertinentes, pues su función es de la de ser no un cuerpo consultivo sino un filtro que haga control de legalidad y político de las actuaciones del alcalde del municipio.

Fuente de Criterio y criterio

Constitución Nacional, artículos 6, 102 y 362; Ley 2 de 1959; Ley 388 de 1997, artículos 2 – 5 y 10; Ley 489 de 1998, artículos 3 y 4; Ley 1801 de 2016, artículos 224 – 225; Decreto 1504 de 1998, artículos 1 – 5; Resolución 0100 No.500 0574 de septiembre de 2015.

Causa.

Incumplimiento de los requisitos de ley para el desarrollo de vivienda y urbanismo; omisión del deber de cuidado frente a la promoción de intereses en la comunidad sin que se satisfagan los lineamientos mínimos en materia de agua potable, alcantarillado y permisos de autoridades ambientales.

Efecto

Pérdida de la credibilidad del ciudadano. Promoción de invasión de espacios no compatibles con el sostenimiento ambiental.

Las conductas descritas generan una Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria; por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, numeral 1º de los artículos 38 y 39.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

OBSERVACIÓN 38: Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria - Presentación de proyecto de vivienda - Documentos de ley.

El proyecto de acuerdo aprobado por el Concejo Municipal obedece a la autorización al ejecutivo municipal para que, a través de la estructuración legal, previo proceso de concurrencia, se constituya un patrimonio autónomo y transferir los predios denominados la SELVA y CIUADELA GERMAN MEJIA 2 a un fideicomiso para el desarrollo de proyectos de vivienda, significando con esto que se autorizó a que el municipio hiciera parte del desarrollo de un proyecto de vivienda.

A continuación, queremos mostrar el por qué las disposiciones de la Contraloría Departamental de Valle Del Cauca, no contemplan las normas que obligan al estado a proveer soluciones de vivienda a la población, por lo que sus afirmaciones no están basadas en las normas vigentes.

Las normas para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y de interés social prioritaria, obedecen a una serie de normas y tratados internacionales que se plasman como un derecho constitucional en el artículo 51 de la constitución de 1991.

En este escrito le mostraremos cómo el **supuesto pre requisito de cumplimiento de normas urbanísticas**, para que el concejo municipal de Calima el Darién, pueda autorizar al ejecutivo municipal, para aportar suelo a un proyecto de vivienda de interés social, carece de fundamento legal.

El contexto en el que el derecho a la vivienda digna, se vuelve un derecho constitucional, inicia en el reconocimiento de los tratados internacionales de los cuales el estado colombiano hace parte, lo que llevó a la Asamblea Nacional Constituyente a reconocer el derecho a una vivienda digna, en el artículo 51 de nuestra actual constitución.

Ya el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, se estableció la obligación de los estados miembros a incluir en la normativa este derecho, que fue solo elevado a derecho constitucional en el año 1.991.

ARTÍCULO 51. Todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.

En el mismo año se proclamó la ley 3 de 1.991, conocida como la Ley de Vivienda, luego vino la ley 388 de 1.997 conocida como la ley de Ordenamiento Territorial, la cual en el artículo 36 tiene por objeto normatizar las acciones urbanísticas y las actuaciones urbanísticas.

En los artículos 5 y 6 de la Ley 3 de 1.991, se establece la definición de **“solución de vivienda”** y del **“subsidio familiar de vivienda”**. Modificados por la Ley 1469 de 2011.

“ Artículo 27.

El artículo 5 de la Ley 3ª de 1991 quedará así:

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

"Artículo 5 . Se entiende por solución de vivienda, el conjunto de operaciones que permite a un hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso para obtenerlas en el futuro.

Son acciones conducentes a la obtención de soluciones de vivienda, entre otras, las siguientes:

- Construcción, o adquisición de vivienda;
- Construcción o adquisición de unidades básicas de vivienda para el desarrollo progresivo;
- **Adquisición de lotes destinados a programas de autoconstrucción de vivienda de interés social y VIP;**
- Celebración de contratos de leasing habitacional para adquisición de vivienda familiar de interés social;
- Celebración de contratos de arrendamiento con opción de compra de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario a favor del arrendatario;
- **Adquisición o urbanización de terrenos para desarrollo progresivo;**
- **Adquisición de terrenos destinados a vivienda;**
- Adquisición de materiales de construcción;
- Mejoramiento, habilitación y subdivisión de vivienda;
- Habilitación legal de los títulos de inmuebles destinados a la vivienda.

Artículo 28.

El artículo 6 de la Ley 3ª de 1991 quedará así:

Artículo 6 .**Establézcase el Subsidio Familiar de Vivienda como un aporte estatal en dinero o en especie, que podrá aplicarse en lotes con servicios para programas de desarrollo de autoconstrucción, entre otros, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitar el acceso a una solución de vivienda de interés social o interés prioritario** de las señaladas en el artículo 5 de la presente ley, sin cargo de restitución, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que establece esta ley.

La cuantía del subsidio será determinada por el Gobierno Nacional de acuerdo con los recursos disponibles, el valor final de la solución de vivienda y las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios, en cuya postulación se dará un tratamiento preferente a las mujeres cabeza de familia de los estratos más pobres de la población, a las trabajadoras del sector informal y a las madres comunitarias.

Los recursos de los subsidios familiares de vivienda, una vez adjudicados y transferidos a los beneficiarios o a las personas que estos indiquen, independientemente del mecanismo financiero de recepción, pertenecen a estos, y se sujetarán a las normas propias que regulan la actividad de los particulares.

...

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

El honorable concejo municipal de Calima El Darién, en uso de sus facultades y debidamente autorizado por la Ley 388 de 1997 y la ley 2079 de 2021, si puede autorizar al ejecutivo municipal para que aporte el suelo y se asocie con particulares.

Veamos.

ARTÍCULO 28. ACTUACIÓN URBANÍSTICA. *Modifíquese el artículo 36 de la Ley 388 de 1997, el cual quedará así:*

"ARTÍCULO 36. Actuación urbanística. Son actuaciones urbanísticas la parcelación, urbanización y construcción de inmuebles. Cada una de estas actuaciones comprenden procedimientos de gestión y formas de ejecución con base en las decisiones administrativas contenidas en la acción urbanística, de acuerdo con los contenidos y criterios de prevalencia establecidos en los artículos 13, 15, 16 y 17 y demás disposiciones de la presente ley.

Los actos administrativos de contenido particular y concreto en firme que autorizan las actuaciones urbanísticas consolidan situaciones jurídicas en cabeza de sus titulares y, los derechos y las obligaciones contenidos en ellas. La autoridad municipal o distrital competente deberá respetar los derechos y obligaciones que se derivan de tales actos.

Son actos administrativos de contenido particular y concreto las licencias de parcelación, urbanización, construcción y demás establecidas por la normatividad nacional.

Cuando por efectos de la regulación de las diferentes actuaciones urbanísticas los municipios, distritos y las áreas metropolitanas deban realizar acciones urbanísticas que generen mayor valor para los inmuebles, quedan autorizados a establecer la participación en plusvalía en los términos que se establecen en la presente ley. Igualmente, las normas urbanísticas establecerán específicamente los casos en que las actuaciones urbanísticas deberán ejecutarse mediante la utilización del reparto de cargas y beneficios tal como se determina en el artículo 38 de esta ley.

En los programas, proyectos y obras que deban ejecutar las entidades públicas, como consecuencia de las actuaciones urbanísticas previstas en los planes de ordenamiento o en los instrumentos que los desarrollen, las entidades municipales y distritales competentes, sin perjuicio de su realización material por particulares, podrán crear entidades especiales de carácter público o mixto para la ejecución de tales actuaciones, de conformidad con las normas legales generales y con las especiales contenidas en la presente Ley y en la Ley 142 de 1994. .

Igualmente, las entidades municipales, distritales y las áreas metropolitanas podrán participar en la ejecución de proyectos de urbanización y programas de vivienda de interés social, mediante la celebración, entre otros, de contratos de fiducia con sujeción a las reglas generales y del derecho comercial.

Como puede verse ningún aparte normativo del artículo 36 de la Ley 388 de 1997, del artículo 28 de la Ley 2079 de 2021, que autorizan a los mandatarios a aportar suelo para el desarrollo de los proyectos de vivienda de interés social, se establece que los predios a

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

entregar para el desarrollo de un proyecto de vivienda, previamente deban contar con los requisitos para ejecución del proyecto, es así como el Municipio puede realizar las actuaciones urbanísticas públicas que posteriormente llevaría al cumplimiento de requisitos para adhesión al casco urbano, con los instrumentos que la ley prevé para dicho fin, bien podría ser a través de un plan parcial, un Proyecto de Desarrollo Urbano (PIDU), o incluirse en las modificaciones del EOT, o asociándose con la nación en Macroproyecto de vivienda de interés social nacional.

Es importante comprender que APOORTE y SUBSIDIOS tienen significados similares, pero tienen diferencias, según lo expresa la normativa. El Municipio puede realizar **aportes** en dinero o en especie, para el desarrollo de los proyectos, sin que alguna parte se le pida que previamente otorgue también las licencias, las cuales perfectamente pueden estar a cargo de los particulares.

El Municipio **otorga el subsidio familiar de vivienda** en el momento que se legalizan los demás subsidios concurrentes, **es decir cuando la familia recibe la solución de vivienda** y el **APOORTE** se individualiza, entre tanto la denominación de la actuación Urbanística del Municipio se denomina **APOORTE**.

APOORTE: Cuando el municipio entrega el suelo mediante los mecanismos que autoriza el artículo 28 de la ley 2079 de 2021.

SUBSIDIO: Cuando ese aporte se individualiza en cabeza de las personas que cumplen los requisitos.

Cuando la contraloría argumenta que previo al aporte del suelo, se deben obtener servicios públicos y expedir licencias urbanísticas, no expone la norma que exige dichos prerrequisitos, a pesar de determinar una fuente normativa, de la revisión de lo argüido no se desprende la presunta falta endilgada.

Es importante también diferenciar entre la Factibilidad de servicios públicos y la disponibilidad inmediata de servicios públicos.

Para que un suelo pueda ser anexado al perímetro urbano no es necesario que cuente con la disponibilidad inmediata de los servicios públicos, pero si con la Factibilidad de Servicios públicos. Esta última condición si la cumple el predio la selva y por supuesto el predio donde se localiza la ciudadela German Mejía, que dicho sea de paso, este segundo proyecto, si cuenta con disponibilidad inmediata de los servicios públicos.

El municipio de Calima El Darién, cuenta con la construcción de la Planta de Tratamiento el SINAI, la cuál tiene la finalidad de ampliar la cobertura del servicio de acueducto, a los sectores de la parte alta del Municipio, que es la zona que espontáneamente se fue creciendo, incluso con asentamientos subnormales, como lo fue el barrio La Esperanza en sus inicios. La Planta de Tratamiento, la inicial y la alterna que incrementó la capacidad de la inicial en un 25% (veinticinco por ciento), beneficiando a más de cinco mil (5.000) suscriptores, equivalente a casi el 75% (setenta y cinco por ciento) del total de la población residente en el Municipio y casi el 95% de la población ubicada en la cabecera municipal, estando dentro del área de prestación de suministro de dicha planta el predio LA SELVA, sobre el cual se pretende que un inversionista realice el proceso y desarrollo de proyectos de vivienda en favor de los Darienitas. Es por ello, que la Empresa EMCALIMA expidió la

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Viabilidad Técnica para el proyecto, para que fuera la base del inicio de los posibles inversionistas, cuyos diseños y planos deberán ser presentados a la Secretaría de Planeación del Municipio y a EMCALIMA, para emitir los Actos Administrativos respectivos. Las actuaciones desprendidas del municipio hasta la fecha tienen su amparo normativo específico en el artículo 51 de la constitución política de Colombia, en el artículo 36 de la Ley 388 de 1997, el artículo 28 de la ley 2079 de 2021, artículo 5° de la ley 3 de 1991, Ley 1469 de 2011, ley 1537 de 2012, decreto 0428 de 2015,

Especial énfasis en diferenciar el término **solución de vivienda** de que habla el artículo 5 de la Ley 3ª de 1991 ya que es un término amplio que incluye el conjunto de operaciones que le permitirá a los hogares de Calima El Darién, **INICIAR EL PROCESO PARA OBTENER SU VIVIENDA EN UN FUTURO.**

*Ley 1469 de 2011 "Artículo 5. Se entiende por **solución de vivienda**, el conjunto de operaciones que permite a un hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura, o **iniciar el proceso para obtenerlas en el futuro.***

En conclusión, El Honorable Concejo Municipal amparado en el artículo 28 de la ley 2079 y el artículo 36 de la ley 388 de 1997, si puede autorizar al ejecutivo municipal para que **aporte** un suelo, para que se den inicio a las actuaciones urbanísticas, que permitan que en el futuro se desarrolle un proyecto de vivienda de interés social, y así la familia puede recibir un SUBSIDIO, y de esa manera el Ente Municipal mitigue su déficit habitacional en cumplimiento del artículo 51 de la Constitución Política de Colombia.

Sin embargo lo anterior, es importante referirnos a los trámites adelantados desde esta administración, precisamente en cumplimiento de lo normado y aplicable a la situación que nos ocupa.

Conforme al uso de suelo predial No. 010 fechado 19 de abril de 2.023, el predio denominado "La Selva", se encuentra incluido en zona rural con afectación de Ley 2 de 1959 y reza: *"se permitirá actividad económica a razón de utilidad pública e interés social en el entendido que no implica remoción de bosques ni desaprovechamiento racional de los mismos previo al trámite de sustracción de ley segunda".*

La sustracción de área de reserva forestal del predio que nos ocupa, se encuentra en trámite ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 4800089030961123001 y 3500089030961123001 y no es requisito para la expedición de Licencia Urbanística expedida por lo cual me sirvo citar concepto del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible:

(...) "Si bien los predios que se encuentran inmersos en la Reserva Forestal del Pacífico están sometidos a las restricciones de uso establecidas por la Ley 2 de 1959, el Decreto Ley 2811 de 1974, la Resolución No. 1926 del 2013 que estableció lineamientos sobre su zonificación y ordenamiento y demás actos administrativos que lleguen a adoptarse a futuro respecto al uso y manejo del área, esta afectación ambiental no restringe los atributos de disposición del derecho de dominio, pues en virtud del artículo 206 del Decreto 2811 de 1974 las reservas forestales pueden recaer sobre predios baldíos, fiscales o predios privados. Que de conformidad con el Decreto 2372 del 2010, las Reservas Forestales establecidas por la Ley 2 de 1959 no fueron integradas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sino que se catalogan como estrategias de conservación in situ, que aportan a

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

los objetivos generales de conservación del país, por lo que no están sometidas a las limitaciones propias de las áreas protegidas, ya que estas reservas no hacen parte del SINAP. En consecuencia, en el ordenamiento jurídico colombiano no existe ninguna disposición que faculte a los Notarios o a los registradores de instrumentos públicos, respectivamente, para no otorgar o registrar los títulos traslativos del dominio de los predios en razón a su traslape con estas figuras de protección ambiental. La licencia de subdivisión es requisito para acceder a los títulos traslativos del dominio de los predios, donde, con independencia de los actos de libre disposición que facultan al propietario para transmitir el derecho de dominio.” (...)

Por otro lado, el municipio de Calima El Darién, ha informado a la autoridad ambiental C.V.C. del déficit cuantitativo de vivienda mundial y de los contenidos del plan de ordenamiento territorial en construcción, donde el predio dada su disponibilidad inmediata de servicios públicos, según certificación de Viabilidad de servicios públicos de agua y alcantarillado, emitido por la EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIMA EL DARIEN – EMCALIMA E.I.C.E, con fecha del 15 de febrero de los corrientes, su condición de interés público y social, hace parte del suelo urbano municipal; Así las cosas, el proyecto que se pretende desarrollar en él, no requiere de permisos adicionales de la autoridad ambiental, distinto al Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) el cual está en proceso de actualización.

De igual manera, el Ministerio del Interior mediante el radicado externo 2023-1-004044-046607 Id: 155868 del 28 de junio de 2023, por medio de la cual el Dr. MARTIN ALFONSO MEJIA LONDOÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.265.970, en su condición de Alcalde Municipal de Calima el Darién, solicitó a esta Dirección, que se pronuncie sobre la procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL BARRIO LA SELVA EN EL CALIMA EL DARIÉN” localizado en esta jurisdicción. Mediante la RESOLUCIÓN NÚMERO ST-1005 del 14 julio 2023, de la DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA, luego del análisis espacial, cartográfico y geográfico, estableció que no procede la consulta previa con Comunidades Indígenas, Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, para el proyecto que nos ocupa.

ANEXOS:

Como soporte de lo aquí expuesto nos permitimos allegar:

- Certificación de Disponibilidad de Servicios
- Topografía
- Certificado de Tradición
- Resolución “Sobre la procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas para proyectos, obras o actividades”
- Uso de Suelo predial

Con lo anterior se permite concluir que la Entidad no ha incumplido su deber legal frente a la presentación del proyecto de Acuerdo cuestionado, por lo cual se solicita al Ente de Control eliminar todo hallazgo al respecto, por no existir en la conducta una incidencia disciplinaria o penal del servidor público; en el proceder cuestionado no concurren elementos que configuren una conducta punible, y mucho menos existe un daño al patrimonio público, al igual que no existe ilicitud en la conducta del servidor público, como se pretende configurar en el informe preliminar, para que pueda pregonarse la configuración

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

de esta categoría jurídica resulta necesario que la identidad entre el proceder del servidor público y la genérica consagración el tipo sea integral, es decir, que todos los aspectos considerados en la norma concurren en la acción u omisión investigada, pues si falta cualquier elemento de los contemplados en la norma no se concreta el delito y la actuación deviene atípica, por demás con la concurrencia de culpa, culpa grave o dolo, las cuales no existieron en el actuar de las funciones, razones suficientes para retirar el hallazgo con las incidencias disciplinaria, fiscal y penal.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Previamente a determinar si se sostiene o no la observación se hará revisión de los 5 elementos traídos a la contradicción para su estudio:

Auditoría Contraloría Vigencia 2022-2023 11/11/2023 11:02:001.jpg

Archivo Ordenes Herramientas Fuentes Opciones Ayuda

Inicio Estado en Comparar No Eliminar Borrar Asistente Información Buscar virus Comentarios Auto actualiz

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRCSZ
Carpeta de archivos					
1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA LA SELVA Y CIUDADELA.pdf	1.361.285	779.102	Microsoft Edge PDF...	28/10/2023 9:55	80CA09B
2.2. TOPOGRAFIA LA SELVA.pdf	1.807.369	1.419.331	Microsoft Edge PDF...	28/10/2023 10:03	822014BC
Certificado de tradición la selva.pdf	3.818.378	3.896.364	Microsoft Edge PDF...	05/11/2023 13:58	5D805E34
Resolución Procede de Consulta Previa SF - 1009 de 2023 (2).pdf	1.512.862	1.444.608	Microsoft Edge PDF...	12/09/2023 9:01	1331691E
uso de suelo - la selva (1).pdf	1.682.915	1.673.270	Microsoft Edge PDF...	05/11/2023 13:36	64FA864

Un certificado de Emcalima en donde manifiesta que hay disponibilidad inmediata de conexión domiciliar de servicios de Acueducto y Alcantarillado, para el predio a urbanizar



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES DE CALIMA EL DARIEN
EMCALIMA E.I.C.E. - E.S.P. NIT. 805.011.107-7
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CÓDIGO UNISPC 8310130H
ÁREA OPERATIVA

COP-005-15022023

**EL SUSCRITO GERENTE (E) DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN - VALLE DEL CAUCA.
EMCALIMA E.I.C.E. - E.S.P.**

CERTIFICA QUE:

El barrio Ciudadela German Mejía, cuenta con **DISPONIBILIDAD INMEDIATA** de conexión domiciliar de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado Sanitario.

Dado en el municipio de Calima El Darién - Valle del Cauca, a los Quince (15) días del mes de Febrero del año Dos mil Veintitrés (2023).

Cordialmente,



Ever Andrés Álvarez Arcos
Gerente (E) Emcalima E.I.C.E. E.S.P.

Propio y Electrónico: EAAA

Revisó: EAAA

Calificado

Contratante

Plano topográfico del predio La Selva

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR



Certificado de Tradición del inmueble

BIOEN RURAL

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (¿Titular de derecho real de dominio? ¿Titular de dominio incompleto?)
DE: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES DE BOGOTÁ

ANOTACIÓN: Nro 622 Fecha: 26-04-2022 Radicación: 2022-3794
Doc: RESOLUCION 408 del 24-03-2022 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES DE BOGOTÁ D. C.

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACIÓN: MODO DE ADQUISICIÓN: 0104 TRANSFERENCIA DE DOMINIO PARA ENAJENACIÓN TEMPORAL

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (¿Titular de derecho real de dominio? ¿Titular de dominio incompleto?)
DE: SAE

A: FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO -FRISCO-

ANOTACIÓN: Nro 623 Fecha: 03-05-2022 Radicación: 2022-4125
Doc: RESOLUCION 528 del 16-04-2022 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES DE BOGOTÁ D. C.

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACIÓN: ACLARACIÓN: 0901 ACLARACIÓN A LA RESOLUCION 408 DEL 24-03-2022, EN CUANTO A OTORGAR CORRECTAMENTE LA OPCION DE PRECISO DE BUGA Y NO DE BOGOTÁ COMO SE HABIA MENCIONADO EN LA RESOLUCION

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (¿Titular de derecho real de dominio? ¿Titular de dominio incompleto?)
DE: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES DE BOGOTÁ

ANOTACIÓN: Nro 624 Fecha: 03-05-2022 Radicación: 2022-5348
Doc: ESCRITURA 125 del 27-04-2022 MOTIVADA UNICA de CALIMA (EL DARIEN)

VALOR ACTO: \$1.318.199.707

ESPECIFICACIÓN: COMPROMENTA: 0105 COMPROMENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (¿Titular de derecho real de dominio? ¿Titular de dominio incompleto?)
DE: FONDO PARA LA REHABILITACIÓN INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO -FRISCO- HOY SOCIEDAD DE

La validez de este documento podrá verificarse en la página web: www.registropublico.gov.co

OPCINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BUGA

CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin Nro: 230914388582508516 Nro Matricula: 373-17069
Página TTUR002-2023-46114

Impreso el 14 de Septiembre de 2023 a las 03:12:20 PM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la última página

ACTIVOS ESP. SAE

A: MUNICIPIO CALIMA-EL DARIEN

INTERFONDO 1193

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: 24

Consulta que se hizo por el municipio sobre convocatoria a comunidades raizales, para adelantar el proyecto:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

COLOMBIA
VIDA

DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

RESOLUCIÓN NÚMERO ST-1006 DE 14 JUL 2023

"Sobre la procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas para proyectos, obras o actividades"

EL SUBDIRECTOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA (E)

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en especial, las conferidas en el artículo 16.6 del numeral 1 del Decreto 2353 de 2019 y la Resolución 662 de 26 de abril de 2023 y Acta de Presidencia del 3 de mayo de 2023 y,

CONSIDERANDO

Que mediante el Decreto Ley 2863 de 2011, modificado por los Decretos 1140 de 2019 y 2353 de 2019, se modificaron los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior;

Que mediante el Decreto 2353 de 2019, se creó la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, y las Subdirecciones Técnica de Consulta Previa, de Gestión de Consulta Previa y Corporativa;

Que el numeral 1º del artículo 16.6 del aludido decreto, le asigna a la Subdirección Técnica de Consulta Previa de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, la función de "Determinar la procedencia o oportunidad de la consulta previa para la adopción de medidas administrativas y regulatorias y la ejecución de los proyectos, obras o actividades, de acuerdo con el orden de afectación directa, y con fundamento en los estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o equivalentes que se requieran";

Que, en consideración con los antecedentes normativos descritos, por medio del presente acto administrativo, se procede a desarrollar el análisis de procedencia de la consulta previa para el caso en comento;

Que se recibió en el Ministerio del Interior, el radicado externo 2023-1-004044-046607 del 19065 del 26 de junio de 2023, por medio del cual el señor **ABRIL ALFONSO MEJÍA LONDOÑO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.380.570 en su calidad de Alcalde Municipal de Calima el Darién, solicita a esta Dirección se pronuncie sobre la procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas para el proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL BARRIO LA SELVA EN EL CALIMA EL DARÉN"** localizado en jurisdicción del municipio de Calima el Darién, departamento de Valle del Cauca, identificado con las siguientes coordenadas:

NO	X	Y
1	1040000.00	870000.00
2	1040000.00	870000.00
3	1040000.00	870000.00
4	1040000.00	870000.00
5	1040000.00	870000.00
6	1040000.00	870000.00
7	1040000.00	870000.00
8	1040000.00	870000.00
9	1040000.00	870000.00
10	1040000.00	870000.00
11	1040000.00	870000.00
12	1040000.00	870000.00
13	1040000.00	870000.00
14	1040000.00	870000.00
15	1040000.00	870000.00
16	1040000.00	870000.00
17	1040000.00	870000.00
18	1040000.00	870000.00
19	1040000.00	870000.00
20	1040000.00	870000.00
21	1040000.00	870000.00
22	1040000.00	870000.00
23	1040000.00	870000.00
24	1040000.00	870000.00
25	1040000.00	870000.00
26	1040000.00	870000.00
27	1040000.00	870000.00
28	1040000.00	870000.00
29	1040000.00	870000.00
30	1040000.00	870000.00
31	1040000.00	870000.00
32	1040000.00	870000.00
33	1040000.00	870000.00
34	1040000.00	870000.00
35	1040000.00	870000.00
36	1040000.00	870000.00
37	1040000.00	870000.00
38	1040000.00	870000.00
39	1040000.00	870000.00
40	1040000.00	870000.00
41	1040000.00	870000.00
42	1040000.00	870000.00
43	1040000.00	870000.00
44	1040000.00	870000.00
45	1040000.00	870000.00
46	1040000.00	870000.00
47	1040000.00	870000.00
48	1040000.00	870000.00
49	1040000.00	870000.00
50	1040000.00	870000.00
51	1040000.00	870000.00
52	1040000.00	870000.00
53	1040000.00	870000.00
54	1040000.00	870000.00
55	1040000.00	870000.00
56	1040000.00	870000.00
57	1040000.00	870000.00
58	1040000.00	870000.00
59	1040000.00	870000.00
60	1040000.00	870000.00
61	1040000.00	870000.00
62	1040000.00	870000.00
63	1040000.00	870000.00
64	1040000.00	870000.00
65	1040000.00	870000.00
66	1040000.00	870000.00
67	1040000.00	870000.00
68	1040000.00	870000.00
69	1040000.00	870000.00
70	1040000.00	870000.00
71	1040000.00	870000.00
72	1040000.00	870000.00
73	1040000.00	870000.00
74	1040000.00	870000.00
75	1040000.00	870000.00
76	1040000.00	870000.00
77	1040000.00	870000.00
78	1040000.00	870000.00
79	1040000.00	870000.00
80	1040000.00	870000.00
81	1040000.00	870000.00
82	1040000.00	870000.00
83	1040000.00	870000.00
84	1040000.00	870000.00
85	1040000.00	870000.00
86	1040000.00	870000.00
87	1040000.00	870000.00
88	1040000.00	870000.00
89	1040000.00	870000.00
90	1040000.00	870000.00
91	1040000.00	870000.00
92	1040000.00	870000.00
93	1040000.00	870000.00
94	1040000.00	870000.00
95	1040000.00	870000.00
96	1040000.00	870000.00
97	1040000.00	870000.00
98	1040000.00	870000.00
99	1040000.00	870000.00
100	1040000.00	870000.00

RESUELVE:

PRIMERO: Que no procede la Consulta Previa con comunidades indígenas para el proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL BARRIO LA SELVA EN EL CALIMA EL DARÉN"** localizado en jurisdicción del municipio de Calima el Darién, departamento de Valle del Cauca, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

SEGUNDO: Que no procede la consulta previa con Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, para el proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL BARRIO LA SELVA EN EL CALIMA EL DARÉN"** localizado en jurisdicción del municipio de Calima el Darién, departamento de Valle del Cauca, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

TERCERO: Que no procede la consulta previa con Comunidades Rom, para el proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL BARRIO LA SELVA EN EL CALIMA EL DARÉN"** localizado en jurisdicción del municipio de Calima el Darién, departamento de Valle del Cauca, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Página 9 de 30

COLOMBIA
VIDA

RESOLUCIÓN NÚMERO ST-1006 DE 14 JUL 2023

"Sobre la procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas para proyectos, obras o actividades"

PÁGINA 10

CUARTO: Que la información sobre la cual se expide la presente resolución aplica específicamente para las considerativas técnicas y con el número de radicado externo: **2023-1-004044-046607** M: 19065 del 26 de junio de 2023 para el proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL BARRIO LA SELVA EN EL CALIMA EL DARÉN"** localizado en jurisdicción del municipio de Calima el Darién, departamento de Valle del Cauca, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

QUINTO: Si el ejecutor advierte o estima posibles afectaciones directas, con ocasión del desarrollo de sus actividades, sobre comunidades étnicas, en el marco del estándar de la debida diligencia, deberá manifestarlo a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, con el fin de evaluar lo expresado, en el marco de sus competencias.

SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición y en su defecto el de apelación, los cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, ante la Subdirección Técnica de Consulta Previa de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALFONSO ENRIQUE GONZÁLEZ ECHEVERRÍA
Subdirector Técnico de Consulta Previa (E)

Licencia de Uso de Suelo expedido por la Secretaría de Planeación Municipal sobre el predio La Selva:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Interés general que se encuentra involucrado con que la zona rural de Calima EL Darién sea parte de la zona de reserva de pacífico, que la misma sea zona especial de protección, aunque en el documento de uso de suelo se manifestó, este hecho y no otro cualquiera es que le dá la trascendencia al asunto, porque la viabilidad ambiental del municipio no es positiva. Ello se evidencia en las observaciones del componente ambiental, en donde quedó claro que el agua que están recibiendo los Darienitas en su zona rural NO es apta para el consumo humano; recordemos que La Selva se encuentra en zona rural del municipio.

Esto, si se deja de lado los problemas propios de EMCALIMA y del municipio; cuya planta de tratamiento se construyó en predio de particular.

De la lectura de los argumentos del municipio se entiende que, primero se harían actuaciones urbanísticas y posteriormente se “cumplen los requisitos para adhesión al casco urbano”

Ahora bien, señala más adelante lo siguiente: *“El Municipio puede realizar **aportes** en dinero o en especie, para el desarrollo de los proyectos, sin que alguna parte se le pida que previamente otorgue también las licencias, las cuales perfectamente pueden estar a cargo de los particulares.*

*El Municipio **otorga el subsidio familiar de vivienda** en el momento que se legalizan los demás subsidios concurrentes, **es decir cuando la familia recibe la solución de vivienda** y el **APORTE** se individualiza, entre tanto la denominación de la actuación Urbanística del Municipio se denomina **APORTE**.*

APORTE: *Cuando el municipio entrega el suelo mediante los mecanismos que autoriza el artículo 28 de la ley 2079 de 2021...*

Este argumento nos indica más que ninguna otra cosa, como la administración municipal hace oídos sordos a las observaciones juiciosas y puntuales que realizara un Juez de la república en sentencia que fue debidamente apelada y confirmada por la Magistrada Ponente Patricia del Pilar Feuillet Palomares en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sentencia de Segunda Instancia Rad.76111-33-33-002-2022-00022-01, proferida el 28-09-2023, en donde se le imponen al municipio una serie de obligaciones que dan cuenta de que No puede seguir la administración expidiendo licencias, de espaldas a que se encuentra en una zona de interés ambiental, no porque le parezca a este alcalde o al próximo, sino porque hay estudios que señalan que es vital la protección de la zona rural del municipio. Señaló la Magistrada ponente:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Resolución 76111-33-33-002-2022-0002-02

Defensoría Promotora de Justicia y Defensoría Agraria del Valle del Cauca
Defensoría Municipal de Calima El Darién y zona

Sección de segunda instancia

decidir sobre la sustracción de áreas que estén en zona de reserva forestal del Pacífico, sustracción que, a su juicio, es necesaria, para: i) ordenar o ajustar a la legalidad el uso del suelo y la reserva forestal en el municipio de Calima El Darién, debido a que hubo desarrollo habitacional en el sector rural sin la debida sustracción del área, y ii) «recrear otros asentamientos en suelo rural o la minimización en los casos que se deben garantizar los derechos adquiridos por los propietarios de inmuebles ubicados en zona rural del ente territorial».

173. Sin embargo, conviene precisar que, en la demanda, la vulneración de los derechos colectivos no se asoció a un desarrollo habitacional o construcciones realizadas en la zona de reserva forestal del Pacífico, sin la previa sustracción del área respectiva.

174. En la demanda, el tema de la zona de reserva forestal del Pacífico se invocó únicamente para sustentar que la realización del proyecto «Senten Tencoseta Místico» vulneraba uno de los derechos colectivos⁴² (ver párrafo 24 de esta providencia). Y ese aspecto se dio por superado con la Resolución 0827 del 03 de agosto de 2022, que sustrajo el área del proyecto de la zona de reserva forestal del Pacífico.

175. De hecho, la sentencia de primera instancia no impartió órdenes tendientes a determinar qué construcciones se realizaron dentro de la zona de reserva forestal del Pacífico (definida en la Ley 2 de 1959). Lo que ordenó fue determinar qué construcciones se hicieron dentro de la franja forestal protectora de fuentes hídricas, por cuanto las franjas protectoras de las quebradas San José, La Italia y La Virgen del municipio de Calima El Darién presentaban ocupación del 19,80 %, 39,92 % y 28,84 %, respectivamente.

176. Téngase en cuenta que en el expediente no quedó debidamente probado que existiera un desarrollo habitacional en la zona de reserva forestal del Pacífico, sin la previa sustracción del área respectiva. El debate probatorio no giró respecto de ese punto, pues no fue algo que la demanda haya planteado.

177. Sendo así, no hay razón para salvaguardar derechos adquiridos de quienes, sin la previa sustracción del área respectiva, hayan construido en la zona de reserva forestal del Pacífico, porque, se insiste, ese tema no fue objeto de estudio en el proceso y, además, el fallo de primera instancia no impartió órdenes que comprendieran ese tipo de situaciones.

178. La sustracción de áreas de la zona de reserva forestal del Pacífico debe estar precedida del pronunciamiento establecido para ello (Resolución 110 del 28 de enero de 2022) y habrá de ser concedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cuando se cumplan los correspondientes requisitos. Por ende, cuando haya necesidad de sustraer un área de la zona de reserva forestal

reserva forestal del Pacífico.

168. En ese sentido, conviene precisar que muchas veces la sustracción del área la zona de reserva forestal no surge como un acto previo que habilite el desarrollo de actividades económicas declaradas por la ley como de utilidad pública e interés social (que es el deber ser), sino que resulta ser una consecuencia derivada cambios irreversibles en las condiciones del suelo (necesidad de formalizar las construcciones que se hicieron sin la sustracción previa).

169. En ese contexto, la protección preventiva de la zona de reserva forestal del Pacífico se verá reforzada con la inscripción de esa afectación en los respectivos folios de matrícula de los predios, en tanto que, a partir de ese momento, no podrá alegarse el desconocimiento de la reserva como fórmula para que un posterior desarrollo habitacional provoque la sustracción del área de la zona de reserva forestal. Una orden de esta naturaleza fue dispuesta por la Sección Primera del Consejo de Estado en un caso similar al aquí debatido⁴³.

4.9. Solución al noveno problema jurídico

170. La CVC sí debe ser destinataria de la orden de determinar las construcciones sin licencia y las construcciones dentro de la franja protectora de fuentes hídricas, así como de la orden de realizar acciones administrativas, de policía y/o judiciales necesarias para la recuperación de la franja protectora de las fuentes hídricas del municipio de Calima El Darién y para que cese la infracción urbanística de haberse construido sin licencia.

171. Como se dijo, en el párrafo 159 de esta providencia, esa orden pretende corregir infracciones provenientes de dos supuestos: i) aquellas derivadas de construcciones sin licencia urbanística y ii) aquellas derivadas de construcciones dentro de la franja forestal protectora de las diferentes fuentes hídricas (30 metros).

172. Esos supuestos se dieron por acreditados, principalmente, en virtud del oficio del 16 de junio de 2021⁴⁴, suscrito por la CVC, en el que se dijo:

Teniendo en cuenta los recorridos realizados por nuestros funcionarios en la zona rural y casco urbano del municipio de Calima El Darién, vemos con gran preocupación que algunas viviendas o construcciones se han cimentado dentro de la zona de franja forestal protectora de las quebradas y dichas viviendas o construcciones (zona rural) no cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales o vertimientos, lo cual es necesario obtenerlo antes de su construcción

⁴² Sentencia del 16 de diciembre de 2021, expediente 76001-25-33-000-2017-01795-01.

⁴³ Folios 128-129 del archivo denominado «001AcciónPopularCalimaElDarién.pdf» contenido en la carpeta de primera instancia, visible en la actuación registrada en el índice no. 3 del expediente colgado en Samai con el radicado 76111-33-33-002-2022-0002-02.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

174. De acuerdo con lo anterior, es evidente que la CVC sí debe ser destinataria de las órdenes, por cuanto: i) la problemática involucra, por una parte, construcciones en zona rural que se realizan sin el concepto de viabilidad técnica de la CVC para tratamiento de aguas residuales o vertimientos (pozo séptico) y, por el otro, construcciones dentro de la franja forestal protectora de las diferentes fuentes hídricas; ii) de conformidad con los numerales 2º y 12º del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CVC ejerce las funciones de máxima autoridad ambiental en el departamento del Valle del Cauca y de control al vertimiento de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas, al aire o a los suelos; iii) de acuerdo con el artículo 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015⁴⁴, la CVC es la competente para conceder los permisos de vertimientos y, por ende, es quien puede sancionar las infracciones relacionadas con vertimientos por ausencia de pozo séptico, y iv) la realización de construcciones en la franja forestal protectora de las diferentes fuentes hídricas supone una violación de las normas contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974 (Código de Recursos Naturales Renovables) y, por ende, una infracción en materia ambiental (artículo 5 Ley 1333 de 2009⁴⁵).

175. El hecho de que la problemática impacte negativamente el medio ambiente hace necesario que la CVC participe en el diagnóstico (determinar las construcciones sin licencia y las construcciones dentro de la franja protectora de fuentes hídricas) y, desde luego, en la solución (acciones administrativas, de policía y/o judiciales necesarias para la recuperación de la franja protectora de las fuentes hídricas del municipio de Calima El Darién y para que cese la infracción urbanística de haberse construido sin licencia), que involucran, en algunos casos, el ejercicio de la potestad sancionatoria.

176. Por otra parte, la CVC alega que sí ha cumplido las funciones en materia ambiental, pues ha adelantado procesos sancionatorios y remitido las medidas preventivas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en lo que atañe a las infracciones sobre la zona de reserva forestal del Pacífico.

⁴⁴ ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las siguientes funciones:

2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con los términos de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.

⁴⁵ Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprende el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir o obstaculizar su empleo para otros usos, entre funciones comprendidas expedición de los respectivos licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y subvenciones.

⁴⁶ ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.

⁴⁷ ARTÍCULO 10. INFRACCIONES. Se consideran infracciones en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 361 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las establece o modifique y en los actos administrativos emanados de la

184. La sentencia de primera instancia deberá ser modificada para disponer:

⁴⁸ La Unidad de Gestión de Calima Calima de la Dirección Ambiental Regional del Pacífico Este (que es quien emite la certificación) también comprende los municipios de Yotoco y Restrepo (Resolución 0.100 No. 300-000 del 8 de enero de 2015).

⁴⁹ ARTÍCULO 2.2.5.2.5.3. Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.

44

Procedimiento de selección y selección entre licitantes

Resolución 76111-05-00002-2023-00023-02

Procedimiento: Procedimiento 23 Judicial 11 Ambiental y Agraria del Valle del Cauca

Tramitantes: Municipio de Calima El Darién y otros

Destinatarios de segunda instancia:

- Que, al momento de realizar las acciones administrativas, de policía y/o judiciales necesarias para la recuperación de la franja protectora de las distintas fuentes hídricas, el municipio de Calima El Darién y la CVC deben salvaguardar los derechos adquiridos de las personas que construyeron con licencia urbanística y procurar la reubicación de la población vulnerable, siempre y cuando se trata de personas con deficiencia económica que se hayan asentado ilegalmente en el lugar como única alternativa para obtener una solución de vivienda, deberá procurarse su reubicación.
- Que la expedición de nuevas licencias en la zona rural del municipio de Calima también queda supeditada a que previamente se haya logrado la sustracción del área como zona de reserva forestal del Pacífico, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Que el municipio de Calima El Darién debe realizar las gestiones necesarias para que en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios ubicados en zona rural del municipio de Calima quede inscrita la afectación como zona de reserva forestal del Pacífico.

185. En lo demás, la providencia apelada será confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

RESUELVE

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

PRIMERO: MODIFICAR los numerales tercero y cuarto de la sentencia del 6 de febrero de 2023, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Boga, que quedarán así:

TERCERO. - Ordenar al municipio de Calima El Dorado que, dentro del término de un (01) año contado a partir de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso, actualice, o de ser necesario, reconstruya la base de datos de licencias urbanísticas expedidas en dicho ente territorial, y las remita a CVC para lo de su cargo.

Así mismo, que, en lo sucesivo, la expedición de las licencias urbanísticas se supedita al cumplimiento de la totalidad de requisitos establecidos en la normativa correspondiente, en especial lo relativo a la disponibilidad de servicios públicos, incluido el de alcantarillado o similar, así como a la presentación de los respectivos permisos expedidos por la autoridad ambiental que corresponda, en los casos en que así se requiera.

Adicionalmente, la expedición de nuevas licencias en la zona rural del municipio de Calima quedará supeditada a que previamente se haya logrado la sustracción del área como zona de reserva forestal del Pacífico, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para el efecto, el municipio de Calima El

Proyecto de sentencia o resolución administrativa
Auditorías: 2023-00000000-00000000-00
Expediente: 2023-00000000-00000000-00
Expediente: 2023-00000000-00000000-00
Expediente: 2023-00000000-00000000-00

Durante debe realizar las gestiones necesarias para que en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios ubicados en zona rural del municipio de Calima quede inscrita la afectación como zona de reserva forestal del Pacífico.

CUARTO. - Ordenar al municipio de Calima y a la CVC que, dentro del término de dos (02) años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso, determinen qué construcciones se realizaron en el municipio de Calima sin la correspondiente licencia urbanística, así como cuáles se realizaron dentro de la franja forestal protectora de las diferentes fuentes hídricas, y en el marco de sus competencias, realicen las acciones administrativas, de policía y/o judiciales necesarias para la recuperación de la franja protectora de las distintas fuentes hídricas del municipio de Calima El Dorado, así como para que cese la vulneración evidenciada en lo que respecta a las construcciones sin licencia.

En todo caso, al momento de realizar las acciones administrativas, de policía y/o judiciales necesarias para la recuperación de la franja protectora de las distintas fuentes hídricas, el municipio de Calima El Dorado y la CVC deben salvaguardar los derechos adquiridos de las personas que construyeron con licencia urbanística y procurar la reubicación de la población vulnerable; siempre y cuando se trate de personas con deficiencia económica que se hayan asentado legalmente en el lugar como única alternativa para obtener una solución de vivienda, deberá procurarse su reubicación.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO: NOTIFICAR esta sentencia, según lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley 1437 de 2011.

CUARTO: REMITIR copia de esta providencia a la Defensoría del Pueblo, en los términos del artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

QUINTO: Ejecutoriada la presente decisión, devuélvase al despacho de origen, previa las anotaciones de rigor.

Los magistrados

(firmado electrónicamente por Samuel)
PATRICIA DEL PILAR TUILLET PALOMARES

Sentencia de obligatorio cumplimiento, que hace alusión precisamente a las zonas rurales, su licenciamiento y el impacto medioambiental.

La defensa que trajo el municipio, no hace alusión alguna a los Determinantes Ambientales, que no dependen del leal saber y entender de la administración, sino de los análisis ambientales realizados por la CVC, que para efectos de medio ambiente, son norma superior para las autoridades municipales:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

RESOLUCIÓN 0100 No. 0500 0574 DE 2015

(02 SEP 2015 :)

**"POR LA CUAL SE EXPIDEN DETERMINANTES AMBIENTALES A ESCALA
DEPARTAMENTAL EN ESTRUCTURA ECOLÓGICA Y AMENAZAS Y
RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN EL
ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CVC**

Página 1 de 44

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC-, en uso de sus facultades constitucionales y legales contenidas en la Constitución Política, el Decreto Ley 2811 de 1974, el Decreto 1076 de 2015, la Ley 99 de 1993, la ley 388 de 1997, el Decreto 1077 de 2015 879 de 1998, la Ley 1454 de 2011, entre otros, y

CONSIDERANDO:

Que el Título XI de la Constitución Política regula lo relacionado con la Organización Territorial, y en especial el Artículo 288 parágrafo 2º, establece que las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley.

Que la Constitución Política establece como función del Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que el artículo 209 de la norma constitucional señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que en desarrollo de este mandato constitucional, el artículo primero, numeral 1º de la Ley 388 de 1997, establece dentro de sus principios el de armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9ª de 1989 con las nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental.

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

RESOLUCIÓN 0100 No. 0500 572 DE 2015

(02 SEP 2015)

"POR LA CUAL SE EXPIDEN DETERMINANTES AMBIENTALES A ESCALA DEPARTAMENTAL EN ESTRUCTURA ECOLÓGICA Y AMENAZAS Y RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CVC

Página 5 de 44

desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y con la efectiva participación de la población.

Que la Ley 1523 de 2012 en el artículo tercero impone la protección del medio ambiente y la explotación racional de los recursos naturales como acciones de Sostenibilidad Ambiental orientadoras en principio de la adecuada gestión del riesgo de desastres.

Que las Corporaciones Autónomas Regionales tienen competencias en relación con el ordenamiento y planificación del territorio y participan en la construcción, seguimiento y aplicación de diferentes instrumentos de planificación.

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 31 en concordancia con las normas especiales de ordenamiento territorial incorpora precisas competencias a las Corporaciones Autónomas Regionales en lo relacionado a la planificación y ordenamiento territorial.

Que en virtud de todo lo anterior el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, en uso de sus competencias Constitucionales y Legales;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Expedir las determinantes ambientales en materia de Estructura Ecológica Principal y Gestión del riesgo, para el ordenamiento ambiental del territorio en jurisdicción del Valle del Cauca, las cuales constituyen un conjunto de directrices, orientaciones, conceptos y normas que permiten el adecuado reconocimiento del Componente Ambiental en los Planes, Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial, y su articulación con otros instrumentos de planificación y uso del territorio.

ARTICULO SEGUNDO: Las determinantes ambientales se constituyen como normas de superior jerarquía dentro del ámbito de competencias, y por lo tanto son de obligatorio cumplimiento en la construcción, seguimiento y articulación de los Planes, Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial, y demás instrumentos de planificación y ordenamiento del territorio.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Comprometidos con la vida

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

RESOLUCIÓN 0100 No. 0500 0574 DE 2015
(02 SEP 2015)

**"POR LA CUAL SE EXPIDEN DETERMINANTES AMBIENTALES A ESCALA
DEPARTAMENTAL EN ESTRUCTURA ECOLÓGICA Y AMENAZAS Y
RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN EL
ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CVC"**

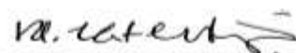
Página 6 de 44

PARAGRAFO: Forma parte integral de la presente Resolución el documento
ANEXO "DETERMINANTES AMBIENTALES EN ESTRUCTURA ECOLÓGICA Y
AMENAZAS Y RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CVC".

ARTICULO TERCERO: La Dirección de Planeación, se encargará de coordinar la
actualización de las determinantes ambientales que aquí se adoptan de acuerdo a
las nuevas normas que se expidan, los estudios o lineamientos de nivel superior, y
de acuerdo a información dada por la Dirección Técnica Ambiental, la Dirección de
Gestión Ambiental y las Direcciones Ambientales Regionales o dependencias que
hagan sus veces.

ARTICULO CUARTO: Publicar la presente resolución en el Diario Oficial, en el
Boletín de actos administrativos de la CVC y enviar a través de las Direcciones
Ambientales copia a las Alcaldías Municipales y Gobernación del Valle del Cauca.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 02 SEP 2015


RUBEN DARIO MATERÓN MUÑOZ
Director General


Remite: Ciudad Vieja, Calle Real, Edificio de la Gobernación, Oficina Asesora de Jurídica

El sujeto de control pretende mediante un especial discurso señalar que no estaba promoviendo soluciones de vivienda, sino iniciar el proceso para obtener la misma en el futuro. Una vez más yerra, por cuanto los Determinantes Ambientales (a los que debe someter su actuación, él ahora, cualquiera otra administración en lo sucesivo), no han cambiado y los lotes en referencia tienen una importante zona de reserva que debe ser protegida.

Se trajo como sustento que se está solicitando la sustracción del área de reserva (En Trámite), hecho que debió iniciarse antes de presentar el documento a su aprobación para no verse inmersos en un desgaste administrativo y judicial.

Por su parte el Concejo Municipal, manifestó lo siguiente:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL - CALIMA EL DARIEN.

Pág. 1 de 1

Calima El Darién, noviembre 08 de 2023

Doctor:
LUIS ENRIQUE CANCEMANSE CALDERÓN
Subdirector Técnico del Cercofis Cali
E. S. D.

**ALCALDÍA DE
CALIMA DARIEN**
CORRESPONDENCIA
RECIBIDO


08 NOV. 2023

HORA 3:22 Pm
10043 *g. Salazar*

Referencia: Respuesta
Asunto: 38. Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria -
Cordial saludo

De acuerdo al asunto de la referencia el Honorable Concejo Municipal, se permite enviar las solicitudes realizadas por las comisiones sobre el proyecto de vivienda de las cuales se obtuvo respuesta de CVC y Juzgado Promiscuo Municipal esto con el fin de dar respuesta al punto 38 Presentación de proyecto de vivienda - Documentos de ley del informe preliminar auditoria financiera y de gestión vigencia 2022.

Institucionalmente



SABAS GILDARDO SALAZAR
Presidente Concejo 2023

HCM-TRD-100-10-03-018_20231108
Elaboro: Numan Augusto Muñoz C. secretario general.
Reviso y Aprobó: Sabas Salazar - presidente concejo

Se trajeron con el escrito, 3 anexos a saber: Un escrito de tutela, la sentencia proferida, el memorial con que se solicitó y esta respuesta, que no ofrece argumentos que deban ser desatados.

En cuanto a la Sentencia de Tutela No. 15 del 21 de febrero de 2023, proferida por la Juez Promiscuo Municipal de Calima, en el radicado 76- 126-40 -89-001- 2023- 00036-00, en la que se resuelve tutelar el derecho del propietario del predio, en donde se construyó el tanque para la planta de agua potable “Sinaí”, por que le estaba haciendo cobro de impuesto predial y le habían embargado el predio. Aquí lo importante, no es el resultado de esta tutela, sino los precedentes que ratifican las inconsistencias que presenta la misma EMCALIMA, frente a la Planta de Tratamiento y el abastecimiento de los Darienitas:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

de la misma, pretendiendo que no se emita el fallo que correspondiera, pues no solo guarda silencio con respecto a los hechos y pretensiones de la acción de tutela, sino que con argumentos precarios pretendió empujar la imposibilidad de esta juzgadora, para cubrir la presunta vía de hecho que se está ejecutando.

Acordado esta situación procesal, y en encontrarse esta servidora inmersa en causal de impedimento o recusación alguna, procede a desarrollar el caso concreto.

Así, atendiendo la situación fáctica y el acervo probatorio que obra dentro de la presente acción de tutela, puede establecer la judicatura que la situación problemática objeto de estudio que nace como consecuencia de las acciones desplegadas: primero, por la Tesorería Municipal, al momento de expedir los actos administrativos de los cobros coactivos de los impuestos adeudados por los accionantes y segundo por las acciones Ejecutivas E.S.P., en cuanto a las pretensiones de usufructuar un predio privado con la iniciación de una obra pública como lo es la construcción de la planta para el suministro de agua potable; sin adelantar los trámites administrativos o judiciales pertinentes para poder intervenir el mismo.

Allega el representante legal del ente territorial que el acueducto municipal se encuentra plantado en el predio "El Rodeo" hace más de sesenta (60) años, y que esto es un hecho notorio, pero lo que no tiene en cuenta el juzgador es que a pesar de que exista una posible "posesión" como él lo indica, esto debería estar declarado, no obstante ello, dentro del periodo podríamos concebir que únicamente se encuentra configurada una servidumbre de agua, pues de lo contrario el predio que hoy está intervenido y que se encuentra incurso en las acciones arbitrales exigidas por entidades prestadoras de servicio público, no sería objeto del cobro de impuestos predial si un particular y mucho menos con un proceso coactivo en curso y con medidas cautelares practicadas y materializadas.

Así lo cosas y ante la falta de prueba de la figura defendida por la entidad contratante, no podía iniciar obras que modifiquen sustancialmente el predio "El Rodeo" y mucho menos causar deterioro a este, tal y como se evidencia en el material fotográfico aportado, pues no solo se deja ver el impacto ambiental desbordado por las obras, sino también la contaminación de quienes allí laboran.

Hablamos de falta de prueba de la legitimación para adelantar esta obra, ya que como se reseñó, el señor Alcalde Municipal manifiesta vagamente

Desarrollamos ahora el conflicto derivado del cobro del impuesto predial, indicando que este es un gravamen real que recae sobre los bienes raíces situados dentro de la jurisdicción de un municipio o distrito, la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones tributarias, se presenta cuando transcurrido cierto tiempo, la administración no ha ejercido la acción para lograr el cobro de dichas obligaciones, esto es, luego de los 5 años contados desde la fecha en que el impuesto se causa y se hace exigible, lo que ocurre en el primer día del periodo gravable.

"La acción de cobro de las acciones fiscales prescribe un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha en que se hicieron exigibles, los mayores valores u obligación determinadas en actos administrativos, en el mismo término contado a partir de la fecha de su ejecución" (artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional).

El impuesto predial es de causación anticipada, es decir, que no se causa una vez termina el periodo gravable sino cuando este inicia. Al respecto recuerda la sección cuarta del Consejo de estado en sentencia 20863 del 13 de diciembre de 2017:

"Por eso, a partir del 1° de enero de cada año, la Administración puede exigir el pago del impuesto predial en su totalidad, porque este ya se causó (no es vigencia vencida), tanto es así, que si se engaña el inmueble, a pesar de haberse fraccionado su pago por trimestres, para poder elevar la escritura pública, entre otros requisitos, se exige que el bien inmueble esté a paz y salvo por concepto de dicho tributo, incluido el año de la venta, preclamanente, en consideración a la fecha de causación del impuesto predial"

A los impuestos territoriales como en el caso del impuesto predial, se le aplican los mismos procedimentales contenidas en el estatuto tributario nacional, por cuenta de la remisión que el artículo 59 de la ley 788 de 2002 hace, y respecto a la prescripción de los impuestos el artículo 817 del estatuto tributario dispone que así de 5 años, como se mencionó anteriormente.

Existe una problemática en cuanto a la fecha a partir de la cual se deben contar los 5 años de prescripción, pues no se pueden aplicar las reglas del artículo 817 en la medida en que no existe una declaración tributaria de por medio, pero el Consejo de estado en la sentencia 20863 expone que el cobro debe surtir en un plazo no mayor a cinco años.

Refuerza lo anterior, el hecho que, como lo ha sostenido esta Sala, para efectos del término de prescripción de la acción de cobro, "cuando se adopta el sistema de facturación por la propia autoridad tributaria, tanto la factura o cuenta de cobro, así como el acto de determinación y el proceso de cobro deben surtir en un plazo no mayor a cinco (5) años

que es un hecho notorio que la planta del acueducto se encuentra allí instalada por hace más de sesenta (60) años, pero esto no es suficiente siquiera para pretender invertir dineros pertenecientes al erario público, pero para complicar un poco más la decisión a adoptar, la directamente responsable de contratar la obra, como lo es, Eneclima ESP, sin argumento y sustento alguno, más bien de manera ligera, se limita a manifestar que no le constan los hechos, y que la acción de tutela se torna improcedente por la inmediatez, ya que la obra estuvo del mes de julio del año inmediatamente anterior, concurriendo de esta manera que adelantaron las obras puestas en conocimiento de la judicatura en los requisitos de ley, pues nada manifestaron de ello y aquí tenemos que referimos necesariamente a la prueba y su pertinencia, pues tratándose de bienes inmuebles, la fluidez de los derechos se prueba con el flujo y el certificado de tradición, además el cumplimiento de los requisitos legales contenidos en la ley 80 de 1993, que reglamenta el contrato celebrado en el presente asunto por parte de la empresa industrial y comercial del estado como lo es la contratante, y repito falta por su ausencia el acervo probatorio con respecto a probar la legitimación de la intervención del predio "El Rodeo".

Si bien es cierto que, el interés general prima sobre el particular, también lo es que en virtud del beneficio de la comunidad se debe propender por actuar legítimamente, para que no se presenten situaciones como las puestas en conocimiento, pues estas solamente causan deterioro a los administrados, pues vemos que, al defenderse la obra, no solo se ocasionan pérdidas económicas, sino que se paraliza el desarrollo del municipio.

Pues las acciones desplegadas por Eneclima ESP y la empresa CEHO CONSULTORIA S.A.S., afectan el ámbito inderogable de protección del derecho a la propiedad privada.

Además de lo mencionado anteriormente, se tiene que no cuenta con la concesión de agua para dicha obra, pues a pesar de que la CVC menciona que se realizó la solicitud de renovación de concesión de aguas superficiales del acueducto de Calima El Darién, el proceso en la actualidad está detenido ya que el solicitante no ha aportado información suficiente, lo que es, el caso de usuarios para prestadores del servicio de agua, acueductos veredales, municipales, distritos de riego, entre otros, conforme lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.4, del Decreto 1076 de 2015.

Siendo necesaria la concesión de aguas, ya que es el permiso que otorga la autoridad ambiental competente para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico, ya sea que se copie de fuentes superficiales como ríos y quebrados, o subterráneas como pozos profundos y ojales; para uso doméstico, agropecuario, recreativo, industrial, generación de energía, entre otros, tal como lo dispone el artículo 2.2.3.2.7.1 del decreto 1076 de 2015; el no tener este permiso podría ocasionar grandes afectaciones.

contados a partir de la fecha en que el impuesto se hizo exigible", lo que ocurre a partir del 1° de enero de cada año.

Con todo lo expuesto anteriormente, tenemos que en el caso en concreto ya se inició el proceso coactivo para el cobro de los impuestos prediales, mismo que es sujeto al decreto y practica de medidas cautelares, que están concebidas únicamente con el objetivo de preservar el contribuyente para que se done al pago de esta obligación y de no lograrse este objetivo principal, pagar este gravamen con el producto, teniendo en cuenta los límites legales para este, medidas estas que gozan de reserva, no obstante, existe una resolución que niega la prescripción (resolución 082 del 2 de septiembre de 2022), o dicha resolución se le presente el recurso de reconsideración, mismo que la parte accionante considera se encuentra vencido el término para ser contestado.

Sin embargo, es necesario recordarle a los accionantes que el término para resolver el recurso de reconsideración es de un año, contado a partir de su interposición en debida forma, la Sección Cuarta del Consejo de Estado indicó que no basta que en ese plazo sea proferido el acto, sino que es necesario que en ese mismo lapso se dé a conocer al interesado mediante la notificación, para que produzca efectos jurídicos; por lo tanto, la Tesorería General de esta Municipalidad se encuentra dentro del término para resolver dicho recurso.

Es importante mencionarle a los fidentes, que de no encontrarse en acuerdo con el proceso coactivo deberán dirigirse al derecho administrativo, pues existen otros medios judiciales para la protección de estos derechos.

Considero de todo lo expuesto y analizado en este breve desarrollo considerativo, resulta para esta judicatura necesario tutelar el derecho fundamental a la propiedad privada, pues del acervo probatorio se demuestra palmariamente que la fluidez del derecho real de dominio se encuentra en cobros del señor José Hector Montoya Moncada, no así con el derecho al debido proceso, pues el proceso de cobro coactivo se encuentra en curso y evolucionando las etapas procesales, dentro de los términos y plazos legales, por tal razón no encuentro conculcados.

En mérito de lo anterior, el Juzgado Promiscuo Municipal de Calima El Darién (Valle del Cauca), Administrando Justicia en nombre de la República y por mandato Constitucional.

RESUELVE:

PRIMERO. Conceder la tutela del derecho fundamental a la propiedad privada, al señor José Hector Montoya Moncada identificado con la cédula de ciudadanía N.º 8.181.173, como titular de los derechos reales de dominio del predio "El Rodeo", en consecuencia:

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

Las circunstancias que dieron lugar a la incidencia disciplinaria no son otras que esta liberalidad del procedimiento, que no deben ser propias de la gestión de la administración. Señala la Ley 489 de 1998, lo siguiente:

“ARTICULO 3o. PRINCIPIOS DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA. *La función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen.*

PARAGRAFO. *Los principios de la función administrativa deberán ser tenidos en cuenta por los órganos de control y el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343 de la Constitución Política, al evaluar el desempeño de las entidades y organismos administrativos y al juzgar la legalidad de la conducta de los servidores públicos en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales o reglamentarios, garantizando en todo momento que prime el interés colectivo sobre el particular.”...*

“ARTICULO 6o. PRINCIPIO DE COORDINACION. *En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales.*

En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares.” (Negrilla y subrayas fuera del texto original)

Como podemos ver, hay una presunta vulneración de los principios de la función administrativa, por tanto, una eventual responsabilidad disciplinaria no solo de la alta dirección del municipio, sino, de los miembros del Concejo municipal, quienes no se documentaron del alcance de sus actuaciones, previo a aprobar el proyecto de acuerdo, que posteriormente fue declarado inexecutable.

Es necesario acotar, que frente a la responsabilidad de los funcionarios públicos se pronunció la Corte Constitucional en sentencia SU259 de 2021, en donde señala: **“Los servidores y ex-servidores públicos, de los particulares que cumplen funciones públicas y de los contratistas de la administración, que con su actuar doloso o gravemente culposo, hayan causado un daño antijurídico imputable, en principio, al Estado”**^[53].

51. La Corte ha definido la acción de repetición como el medio judicial idóneo que la Constitución y la ley le otorgan a la Administración Pública para obtener de sus funcionarios o exfuncionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer como resultado de una condena de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por los daños antijurídicos que haya causado^[54]. En la sentencia C-832 de 2001 determinó que la acción

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

de repetición, además de proteger el patrimonio y la moralidad administrativa, estimula el correcto ejercicio de la función pública:

“Por último, es importante resaltar que la acción de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, como lo señala el artículo 2 de la Constitución Política. “Si el legislador no hubiese creado mecanismos procesales para poder vincular a los funcionarios con el objeto de determinar si su conducta dolosa o gravemente culposa es la causa de la condena impuesta por el juez a la entidad, el Estado se encontraría sin herramientas para la defensa de la integridad de su patrimonio y para preservar la moralidad pública.”

52. **Asimismo, el Consejo de Estado ha identificado que “un efecto indirecto de esta acción se dirige a la reducción del manejo indebido de los dineros y bienes públicos, pues este mecanismo procesal se establece como la herramienta propicia para que las entidades públicas actúen contra los agentes que por conductas arbitrarias han generado una condena en contra del Estado, más aún, cuando se cuenta con la posibilidad de perseguir, directamente, su patrimonio, a través de medidas cautelares o de la ejecución de la sentencia”.** Bajo esa perspectiva “cuando una entidad pública interpone una acción de repetición, ejerce el derecho constitucional de acudir a la jurisdicción, para efectos de subsanar el desmedro patrimonial acaecido en razón del pago indemnizatorio realizado”^[55].

53. Tanto esta corporación como el Consejo de Estado^[56] coinciden en sostener que la acción de repetición no tiene por objeto medular imponer una sanción, sino que ella tiene “un carácter reparatorio o resarcitorio”^[57]. Su objeto consiste en “obtener el reembolso para el erario público de sumas de dinero pagadas como consecuencia del daño antijurídico ocasionado por un servidor estatal”^[58]. No obstante, si bien la acción de repetición es de carácter resarcitorio civil, también tiene funciones retributiva y preventiva^[59]. Tales características, sostiene la Corte, resultan relevantes a efectos de atender las tensiones que se derivan en su aplicación^[60]. Igualmente han precisado que la acción de repetición se caracteriza por ser subsidiaria^[61], subjetiva^[62] y sujetarse a criterios de proporcionalidad^[63].

54. De esta manera debe la Corte en esta ocasión enfatizar en que, si bien se trata de una acción con la finalidad específica de reintegrar al patrimonio del Estado lo pagado, ello no conspira con la necesidad de analizar toda la temática que gira a su alrededor con la lupa de tratarse del análisis de una **conducta humana reprochable**. **En esa medida todos los principios que se despliegan en un análisis de conducta son necesaria e imprescindiblemente aplicables. De no ser así, no se hubiera tomado el trabajo el constituyente originario de exigir dolo o culpa grave en el artículo 90 superior. De suerte que impera observar, caso a caso, si la persona de quien se predica la posible responsabilidad, conocía los hechos que realizaba y quería su realización, o dicho de otro modo, actuó con conciencia y voluntad de realizar una conducta, la cual a su vez trasgrede el catálogo funcional que juró cumplir (art 122.2 C.Pol.) al asumir el cargo. Igualmente es posible que esa responsabilidad se predique, no ya por la comparecencia de dolo, sino porque se ha actuado de manera contraria a las normas objetivas de cuidado en el ejercicio de la función concernida en cada caso.**

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

55. En síntesis, la acción de repetición tiene por objeto (i) proteger el patrimonio público frente a las conductas dolosas o gravemente culposas de los agentes del Estado y (ii) preservar la moralidad administrativa, por medio de la reacción frente a las acciones desviadas, negligentes o sumamente imprudentes de los funcionarios-. Ha precisado, en todo caso, que dicha acción no tiene como propósito (iii) imponer cargas desproporcionadas a quien asume el ejercicio del servicio público^[64].

56. Conforme a lo anterior, la acción de repetición debe aplicarse a la luz de los diversos mandatos constitucionales que puedan encontrarse en colisión^[65]. En ese sentido, la aplicación de la figura exige una labor de ponderación a efectos de valorar la atribución de responsabilidad a título de dolo o culpa grave^[66] y establecer el remedio procedente^[67].

c) Características de la consagración constitucional de la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado

57. Como se indicó antes, la comprensión constitucional de la acción de repetición ha permitido su caracterización a efectos de entender que se trata de una acción (i) subsidiaria, dado que “su procedencia está restringida a los eventos en los que la administración sea efectivamente condenada a pagar una indemnización por el daño antijurídico causado con dolo o culpa grave por parte de uno de sus agentes”; (ii) subjetiva, pues “depende de la demostración de que el daño que debió indemnizar el Estado fue causado con dolo o culpa grave por parte de uno de sus funcionarios, por lo que no cualquier equivocación o descuido permite que se ejecute la acción de regreso, pues se requiere que ante la autoridad competente se acredite plenamente que la conducta que derivó en el menoscabo obedeció a un supuesto de imprudencia calificada o de arbitrariedad”; y (iii) se sujeta a criterios de proporcionalidad de modo que la repetición al agente del Estado - por el valor de la indemnización que debió ser asumida por la administración- debe efectuarse sin incurrir en excesos^[68]. La mencionada ponderación entre principios constitucionales debe llevarse a cabo en el ejercicio de la acción de repetición, tanto en “(i) la valoración de la atribución de responsabilidad a título de dolo o culpa grave (elemento subjetivo), como en la formulación (ii) del remedio previsto, cual es el regreso de lo pagado por el Estado”^[69].

...

Jurisprudencia del Consejo de Estado

59. La Ley 678 de 2001 reglamenta actualmente la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o del llamamiento en garantía con fines de repetición. Sin embargo, sus disposiciones no son aplicables a hechos ocurridos antes de su vigencia^[73]. En estos casos, ha dicho el Consejo de Estado, es necesario acudir a lo previsto en los artículos 77 y 78 del Decreto Ley 01 de 1984^[74]. Debido a esta circunstancia, esa Corporación ha previsto reglas distintas para cada uno de los regímenes normativos en lo que respecta a la determinación del dolo y la culpa grave de los agentes del Estado^[75].

60. En lo concerniente a los hechos ocurridos antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001, el Consejo de Estado ha tenido en cuenta lo previsto en el artículo 63 del Código Civil frente a la culpa grave y el dolo^[76]. Además, ha reconocido que esas previsiones deben armonizarse con los artículos 6 y 91 de la Constitución, así como

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

con los conceptos de buena y mala fe que en esta se mencionan^[77], y que en su aplicación es necesario dimensionar las “características particulares del caso”^[78]. En este sentido, ha establecido que los jueces al examinar la culpa grave y el dolo no deben “limitarse a tener en cuenta únicamente la definición que de estos conceptos trae el Código Civil referidos al modelo del buen padre de familia para establecerla por comparación con la conducta que en abstracto habría de esperarse del ‘buen servidor público’^[79], sino que deben conciliarla con esos artículos de la Constitución...” (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

Acorde con lo anterior, ha señalado el Consejo de Estado en su Sección Segunda, Subsección B, Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, 14 de agosto de 2020; radicación No. 25000-23-42-000-2017-00876-01(4811-19):

“Conforme al artículo 209²⁰ de la Constitución Política, establece que la función administrativa tiene como fin el interés general y esta debe llevarse a cabo con sujeción a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, de manera que las autoridades administrativas deben realizar y coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Sumado a esto, la mencionada norma fundamental fijó un control sobre las actuaciones de la administración que debe encuadrar en los preceptos de responsabilidad fijados en sentido amplio, es decir, la infracción de la constitución y las leyes, tal como lo establece el artículo 6. C.N.²¹; además del incumplimiento de las funciones fijadas en la Ley o reglamentos específicos, tal como lo dispuso el artículo 122 de la norma Ibídem²².

En este orden de ideas, los mencionados funcionarios adquieren responsabilidad disciplinaria en el desempeño de sus deberes funcionales, dependiendo la asunción de competencias asignadas. En consecuencia, conforme a lo dispuesto por la Ley ⁷³⁴ de 2002²³, aquellos son sujetos disciplinables con la obligación de garantizar la función pública, tal como disponen lo artículos ²² y ²³ de la citada norma:

«[...] ARTÍCULO 22. GARANTÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. El sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

ARTÍCULO 23. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento. [...]»

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

En este orden de ideas, es necesario precisar que la finalidad de la Ley 734 de 2002 es la de garantizar el cumplimiento de los fines y funciones del Estado respecto a las conductas de los servidores públicos que los afecten o pongan en peligro, a través de la acción disciplinaria. Al respecto, a través de la Sentencia C-948 de 2002, la Corte Constitucional, sostuvo: «[...] las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública. [...]».

El derecho disciplinario como expresión de la facultad sancionatoria del Estado observa los postulados propios del debido proceso, de manera que en atención a su naturaleza y bienes jurídicos protegidos deben observarse principios como el de legalidad y tipicidad que la conducta que constituye falta disciplinaria y, en consecuencia, sanción, previamente, haya sido consagradas por el legislador. Sin embargo, no puede desconocerse que en el ámbito del derecho disciplinario la descripción de la conducta sancionable requiere una interpretación flexible, ya que, generalmente, la norma disciplinaria no es autónoma y exige recurrir a cuestiones reglamentadas en normas específicas relativas a la materia.

De esta manera, toda vez que en el derecho disciplinario la conducta sancionable tiene que ver con el desconocimiento del servidor público ya sea de sus deberes, prohibiciones o el régimen de incompatibilidades e inhabilidades, la precisión de la conducta típica no es igual a la del derecho penal, en tanto que la misma se estructura a través del complemento normativo que rige la actividad, por lo que las faltas se consagran en tipos abiertos, lo que se justifica en «[...] la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos donde se subsuman todas aquellas conductas que están prohibidas a las autoridades o de los actos antijurídicos de los servidores públicos²⁴ [...]».

Así pues, en el presente asunto se evidencia que la falta atribuida al demandante se estructuró de la siguiente manera. La conducta imputada al señor Juan Bautista Hernández Rodríguez constituyó una vulneración de las siguientes disposiciones de la Ley 734 de 2002:

«[...] ARTÍCULO 23. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento.

ARTÍCULO 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR

convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.

Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.

[...]

21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.

22. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.

[...]” (Negrilla y subrayado fuera del texto original). Es con fundamento en estas decisiones en donde se evidencia que por acción u omisión hay lugar a una presunta responsabilidad disciplinaria de los funcionarios de la alta gerencia y concejales del municipio.

Por las razones expuestas, se confirma la observación y pasa a ser un hallazgo de idéntico contenido literal.

Elaboró: Equipo **TOTAL** auditor